LÍNEAS Y CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

2021

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Gerente General de Asuntos Jurídicos
Lcda. Quiriam Geraldina Pinto Quintanilla

Director de Servicios Técnicos Judiciales
Lic. Carlos Rafael Pineda Melara

Jefa de la Unidad Gestora de Procesos de Documentación Jurídica y Judicial
Lcda. Evelin Carolina Del Cid Flores

Jefe del Departamento de Documentación Judicial
Lic. Carlos René Castillo Hernández

Jefe del Departamento de Publicaciones
Lic. José Alejandro Cubías Bonilla

Jefa de la Sección de Diseño Gráfico
Lcda. Roxana Maricela López Segovia

Diagramación
Fabiola Vanessa Segura Cortez

Diseño de portada
Mgtr. Andrea Nathalia García Peña

© Corte Suprema de Justicia
Centro de Gobierno
San Salvador
El Salvador.

Corte Suprema de Justicia
2024

Lic. Óscar Alberto López Jerez
PRESIDENTE

Sala de lo Constitucional

Lic. Óscar Alberto López Jerez
PRESIDENTE

MSc. Elsy Dueñas Lovos
VOCAL

Lic. José Ángel Pérez Chacón
VOC AL

MSc. Luis Javier Suárez Magaña
VOCAL

MSc. Héctor Nahún Martínez García
VOCAL

Sala de lo Civil

Lic. Alex David Marroquín Martínez
PRESIDENTE

Dra. Dafne Yanira Sánchez de Muñoz
VOCAL

MSc. Leonardo Ramírez Murcia
VOCAL

Sala de lo Penal

MSc. Alejandro Antonio Quinteros Espinoza
PRESIDENTE

MSc. Sandra Luz Chicas Bautista
VOCAL

Lic. Roberto Carlos Calderón Escobar
VOCAL

Sala de lo Contencioso Administrativo

Lic. José Ernesto Clímaco Valiente
PRESIDENTE

MSc. Sergio Luis Rivera Márquez
VOCAL

Lcda. Paula Patricia Velásquez Centeno
VOCAL

Dr. Henry Alexander Mejía
VOCAL

SALA DE LO CONSTITUCIONAL
2021

Enero - abril

Presidente:	Dr. José Óscar Armando Pineda Navas
Vocal:	MSc. Aldo Enrique Cáder Camilot
Vocal:	Lic. Carlos Sergio Avilés Velásquez
Vocal:	MSc. Carlos Ernesto Sánchez Escobar
Vocal:	Lcda. Marina de Jesús Marenco de Torrento

Mayo - diciembre

Presidente:	Lic. Óscar Alberto López Jerez
Vocal:	MSc. Elsy Dueñas Lovos
Vocal:	Lic. José Ángel Pérez Chacón
Vocal:	MSc. Luis Javier Suárez Magaña
Vocal:	MSc. Héctor Nahúm Martínez García

SECCIÓN DE DERECHO CONSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

Coordinador: Lic. Mauricio Haim Luna

Colaboradores: Lic. Luis Ernesto Campos Anaya
Lic. German Ernesto del Valle

CONTENIDO

PRÓLOGO i

MATERIA: AMPAROS 1

MATERIA: HÁBEAS CORPUS..... 108

MATERIA: INCONSTITUCIONALIDADES..... 175

MATERIA: PÉRDIDA DE DERECHOS DE CIUDADANÍA..... 315

PRÓLOGO

La presente edición pretende ser, más que un documento informativo, un texto útil para los interesados en conocer y aplicar la jurisprudencia como fuente de derecho.

La recopilación y tratamiento jurídico de la información se lleva a cabo en el Departamento de Documentación Judicial, oficina cuyo objetivo fundamental es divulgar este material, tanto a través de las revistas, como mediante el uso de medios automatizados para cuyos efectos cuenta con una base de datos que puede ser consultada por toda la comunidad jurídica nacional e internacional y otras personas interesadas en el quehacer judicial. Con este esfuerzo la Corte Suprema de Justicia, pretende dar a conocer las Líneas y Criterios Jurisprudenciales, que están constituidas por la extracción literal, entrecomillada del punto jurídico relevante, obtenido de la sentencia, después de una lectura integral y profunda, en el que se refleja el aporte del juzgador al análisis del caso sometido a su consideración, sin cortar la idea principal.

En algunos casos, la sentencia puede contener análisis de distintos temas que, aunque relacionados con el principal, se separa en subtemas para que el lector pueda visualizarlos de mejor forma, sin afectar la comprensión general de lo resuelto.

Desde el punto de vista del lector, las Líneas y Criterios Jurisprudenciales representan una información valiosa para conocer, desarrollar o investigar determinados temas jurídicos.

Esperamos con esta edición y las siguientes satisfacer una de las demandas principales de la sociedad, como es la transparencia en el ámbito de la justicia salvadoreña.

El contenido de esta publicación es un extracto literal
de las sentencias pronunciadas por la Sala de lo Constitucional.
Los temas y subtemas son responsabilidad de la Sección de Derecho
Constitucional del Departamento de Documentación Judicial.

MATERIA: AMPAROS

ACTOS DE COMUNICACIÓN

PRINCIPIO FINALISTA DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN

"B. En la improcedencia de 1 de marzo de 2010, amparo 149-2009, se afirmó que la notificación de las decisiones judiciales o administrativas constituye un acto por medio del cual se pretende hacer saber a las partes lo ocurrido en un proceso o procedimiento que les vincula, debiendo concretarse dicha comunicación, normalmente, de manera personal, de forma tal que haya un conocimiento real y oportuno de las decisiones adoptadas por los funcionarios emisores.

Además, es pertinente agregar que de acuerdo con el principio finalista de los actos de comunicación la situación a evaluar en sede constitucional es si la comunicación se practicó a efecto de generar las posibilidades reales y concretas de defensa, y no si se hizo de una u otra forma, entre ellas si se realizó personalmente o mediante otro sujeto, u omitiendo algún dato puramente formal sin incidencia negativa en la posición del interesado, pues tales circunstancias no son de carácter constitucional y, en consecuencia, su determinación corresponde a los jueces ordinarios o a la autoridad administrativa —en un procedimiento administrativo sancionador—."

CONSTITUYEN MANIFESTACIONES DEL DERECHO DE AUDIENCIA

"c. En la Sentencia de 10 de febrero de 2016, amparo 745-2014, se dijo que los actos de comunicación o notificación constituyen manifestaciones del derecho de audiencia, que posibilitan a las partes procesales intervenir en su defensa dentro de las causas judiciales o administrativas en las que se dirime determinada controversia; razón por la cual se exige que se encuentren revestidos de una serie de formalidades, con las que se pretende garantizar que estos cumplan con su finalidad, esto es, hacer saber a las partes los acontecimientos primordiales del proceso o procedimiento para que puedan intervenir de la manera que mejor les parezca."

Así, los actos de comunicación deben efectuarse por regla general de manera personal y en el domicilio o lugar de trabajo, pues lo que se persigne es que los intervinientes tengan un conocimiento real y oportuno de las resoluciones. Sin embargo, existen situaciones que impiden la realización de dichos actos en la forma antes apuntada, en las cuales el notificador debe cerciorarse de que está practicando la notificación en uno de los lugares antes señalados y puede hacerlo por medio de esquela, que ha de entregar a familiares, empleados, socios, apoderados o vecinos, o colocándola en la puerta del lugar señalado para recibir notificaciones."

NOTIFICACIONES POR MEDIO DE EDICTO

"Ahora bien, cuando se desconoce el lugar en el que pueden realizarse los actos de comunicación al interesado —por ejemplo, porque no lo ha señalado, pese a tener obligación de hacerlo, o porque la contraparte desconoce tal información—, la autoridad puede ordenar que la práctica de la notificación se realice por medio de edicto fijado en el tablero del tribunal o de la institución respectiva y/o publicación en un periódico de circulación nacional, siempre que no conste en ningún registro algún sitio en el que pueda efectuarse."

[...]

En este caso, no existe constancia de que la autoridad demandada haya intentado la ubicación de la sociedad demandante o sus representantes mediante la consulta a instituciones —públicas o privadas— que razonablemente pudiesen aportar información sobre su domicilio o lugar de trabajo; esto, a pesar de que la propia apoderada de la SIGET expresó en el informe justificativo que el art. 186 del CPCM "—normativa de aplicación supletoria—" señala que si se ignora el domicilio de la persona que deba ser emplazada o no se hubiera localizado después de realizar las diligencias pertinentes para tal fin, se ordenará el emplazamiento por edicto."

AUTORIDAD DEMANDADA IMPIDIÓ AL DEMANDANTE ENTERARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES QUE LE CAUSABAN PERJUICIO Y, CON ELLO, ANULÓ SUS POSIBILIDADES REALES Y CONCRETAS DE DEFENSA

"De este modo, dado que la notificación por edicto solo puede realizarse de manera excepcional, a efecto de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de audiencia y defensa, las autoridades administrativas o judiciales están en la obligación de realizar las diligencias necesarias para corroborar la información que conste en sus registros o expedientes; entre otras, solicitar informe a aquellas entidades que legalmente tienen la obligación de recopilar y almacenar datos relacionados con el domicilio de las personas (v. gr., el Registro Nacional de Personas Naturales y el Registro de Comercio).

De ahí que, al haberse comprobado que la SIGET ordenó realizar la notificación de las resoluciones impugnadas en este amparo por medio de edictos, en virtud de la aplicación exclusiva del art. 4 del INARSIGET, y sin haber agotado todos los medios para hacerle saber a la sociedad actora el contenido de esas decisiones, tal como lo dispone el art. 181 del CPCM, se concluye que la autoridad demandada impidió a dicha sociedad enterarse de la existencia de las resoluciones que le causaban perjuicio y, con ello, anuló sus posibilidades reales y concretas de defensa, tanto en los requerimientos de pago como en los procedimientos sancionatorios con imposición de multa.

Además, en relación con el INARSIGET, es necesario aclarar que ese cuerpo normativo no es el instrumento idóneo para establecer la forma y los procedimientos que la SIGET debe utilizar para llevar a cabo los actos de comunicación correspondientes a las personas que se ven afectadas por sus decisiones, pues

esa entidad carece de la competencia para emitir normas de esta naturaleza —el art. 5 letra c) de la Ley de Creación de la SIGET la habilita únicamente para "dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y telecomunicaciones"—. En ese sentido, para garantizar el respeto a los derechos procesales de las personas, la aludida entidad debe aplicar el régimen procesal común vigente, es decir, el CPCM.

Y es que, en todo caso, el art. 4 del INARSIGET debió interpretarse sistemáticamente con el art. 181 del CPCM, con lo cual el primero se adaptaría a una disposición de rango superior y evitaría un conflicto normativo estableciendo una relación de complementariedad que garantiza de mejor manera los derechos de los interesados. En consecuencia, se colige que la SIGET vulneró los derechos a la propiedad y a la protección no jurisdiccional —en sus manifestaciones de audiencia y defensa— de la sociedad Constructora Universal, S.A. de C. V., por lo que debe estimarse este punto de la pretensión respecto a las resoluciones T-0423-2011, T-1427-2011, T-1460-2011, T-1461-2011 y T-T-0810-2012."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 218-2018, fecha de la resolución: 28/05/2021

IMPORTANCIA DEL EMPLAZAMIENTO

"B. a. Las notificaciones de las decisiones judiciales a las partes son actos de comunicación mediante los cuales se hacen saber a los intervinientes los actos contenidos en el respectivo proceso, por lo que, dada su importancia, la concreción de aquellos se debe efectuar de manera personal, de forma tal que haya un conocimiento real y oportuno de la decisión que se emite.

Específicamente en relación con el emplazamiento, en reiterada jurisprudencia de esta Sala –v. gr. en las sentencias de 21 de octubre de 2011 y de 13 de marzo de 2013, amparos 408-2009 y 648-2010, respectivamente– se ha establecido que aquel no es una mera comunicación, sino que constituye el llamamiento primero y fundamental que perfecciona la relación jurídico-procesal, ya que con este se garantiza el respeto del derecho de audiencia de la persona demandada en un proceso. De ahí que, a efecto de que el emplazamiento cumpla con su finalidad, debe realizarse en forma directa y personal al demandado, es decir, sin intermediarios, tal como lo prevén los arts. 177 y 181 del CPCM."

REGULACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL

"b. El art. 183 del CPCM permite realizar este tipo de actos en la casa de habitación o lugar de trabajo de las personas. En caso de no encontrarse a la persona interesada, se procederá a entregar la esquela de emplazamiento a cualquier persona mayor de edad y que tenga un vínculo o relación con aquella. Así, se establecen distintos mecanismos con la finalidad de dar a conocer de forma efectiva a los interesados las providencias judiciales. Además, el art. 189 del CPCM permite realizar este tipo de actos, cuando deba hacerse a una perso-

na jurídica, por medio del representante, gerente o director, o cualquier persona autorizada por ley o por convenio para recibir emplazamientos. En todo caso, el notificador debe dejar constancia de su actuación por medio del acta respectiva, manifestando en ella las circunstancias en las que fue llevado a cabo el acto.

c. En cuanto a los alegatos de la parte actora, relativos a que el emplazamiento no se llevó a cabo en la residencia del demandado ni en el domicilio de la sociedad demandada y que fueron realizados por medio de una persona desconocida, se deduce que aquella pretende que esta Sala determine la veracidad o falsedad de la información contenida en las actas de notificación suscritas por el notificador del Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, lo que implicaría efectuar un examen de estricta legalidad del caso, cuestión que se encuentra fuera de las competencias que la Constitución confiere a esta Sala."

LAS COMUNICACIONES REALIZADAS POR LOS NOTIFICADORES GOZAN DE UNA PRESUNCIÓN DE VERACIDAD CUANDO SE EFECTÚAN CONFORME A LAS REGLAS, SEGÚN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

"En este orden, es necesario señalar que la jurisprudencia de esta Sala –v. gr. la sentencia de 7 de julio de 2005, amparo 724-2004, y el auto de improcedencia de 11 de noviembre de 2011, amparo 353-2011– ha sostenido que las comunicaciones realizadas por los notificadores gozan de una presunción de veracidad cuando se efectúan conforme a las reglas que para tal efecto prevé la normativa secundaria, lo que permite que exista certeza de la actividad jurisdiccional; caso contrario, surgirían dudas sobre la legitimidad y veracidad de cada acto de comunicación procesal que se efectuara. Además, mientras no exista una declaratoria judicial de falsedad de un documento público, como lo es el acta de notificación de un tribunal de la República, su contenido debe tenerse por auténtico.

"C. a. En el presente caso, con la prueba documental presentada se ha comprobado que el emplazamiento del señor […] y de la sociedad […], fue llevado a cabo el 29 de junio de 2016, en el lugar señalado por la sociedad demandante, por medio de la señora […], quien manifestó ser la sobrina del referido señor y también "estar autorizada para recibir documentos de la Sociedad de su tío y su tía que es la Administradora suplente".

En relación con lo expuesto, cabe señalar que, según las actas de notificación relacionadas, la señora […] recibió las respectivas notificaciones sin manifestar que el señor […] se encontraba fuera del país. En ese sentido, no resulta exigible que el juez (3) del Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador conociera sobre tal situación y, por ello, se concluye que dicha autoridad adecuó sus actuaciones a la normativa procesal que resultaba aplicable a las circunstancias advertidas en la tramitación del proceso ejecutivo en cuestión.

b. Asimismo, es preciso señalar que, siendo la sociedad […], una persona jurídica, la dirección y concreción de actos procesales de comunicación que le afectaran debían necesariamente respetar los parámetros y reglas de validez legalmente establecidos en el art. 189 del CPCM. Al respecto, ha quedado esta-

blecido que el señor […] –quien fungía como administrador único de la sociedad pretensora en el momento en el cual se dio inicio al juicio ejecutivo mercantil en cuestión– fue emplazado en legal forma, por lo que es posible deducir que dicha sociedad tuvo conocimiento de la existencia del proceso ejecutivo mercantil que la sociedad […], inició en su contra.

En ese orden, debe enfatizarse lo expresado en reiterada jurisprudencia de esta Sala, en cuanto a que el proceso de amparo no es un juicio de perfectibilidad de las formas, ya que no toda infracción a las formalidades de un proceso implica una lesión o afectación a los derechos constitucionales. Tal es así que, para los efectos del amparo, lo relevante a fin de constatar una vulneración a los derechos de audiencia y defensa es que la persona agraviada quede en un estado de indefensión por desconocer la existencia de un proceso, procedimiento o diligencias incoadas y/o seguidas en su contra.

c. En virtud de lo expuesto, se concluye que el juez (3) del Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, al realizar el emplazamiento de los demandados en el proceso ejecutivo mercantil en cuestión no vulneró los derechos de audiencia, defensa y a la propiedad de aquellos."

VULNERACIÓN A LOS DERECHOS DE AUDIENCIA, DEFENSA Y A LA PROPIEDAD AL REALIZAR LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA POR MEDIO DE UN VIGILANTE, SIN ESTABLECER UN VÍNCULO LABORAL DIRECTO QUE PERMITA COLEGIR QUE LAS NOTIFICACIONES SERÁN ENTREGADAS

"D. a. Ahora bien, respecto de la omisión de notificación de la sentencia mediante la cual se condenó al señor […] y a la sociedad […], al pago de cierta cantidad de dinero a favor de la sociedad […], consta en el expediente de este amparo que dicha resolución le fue notificada a los demandados en el mismo lugar en el que se realizó el emplazamiento y por medio del señor […], quien manifestó ser vigilante de ese lugar, según actas de notificación de 10 de agosto de 2016.

En relación con este punto se advierte que, no obstante la normativa aplicable al caso establece una serie de mecanismos que pueden implementarse cuando no es posible efectuar el acto de comunicación de manera personal, estos deben ser utilizados de forma tal que su consecución cumpla con el principio finalista de dichos actos, el cual consiste en que la notificación genere posibilidades reales de audiencia y defensa. En consecuencia, a pesar de que el art. 177 inc. 2º del CPCM habilita la notificación por medio de cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la dirección señalada, este mecanismo debe utilizarse cuando entre la persona a quien va dirigido el acto de comunicación y la que lo recibe exista algún vínculo que posibilite que la notificación se hará del conocimiento de la primera, como puede ser, por ejemplo, la existencia de algún grado de parentesco, la cohabitación de ambos en dicho lugar o el establecimiento de una relación de trabajo directa y exclusiva entre ellos.

b. En ese sentido, si bien el notificador del Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de esta ciudad hizo constar en las citadas actas que el señor […] se identificó como "vigilante en ese lugar", se advierte que dicha calidad no es suficiente para establecer que entre este y el señor […] –quien debió ser notificado como demandado y como representante de la sociedad […]– había un vínculo laboral directo que permitiera colegir que las notificaciones le serían entregadas, sobre todo porque no existe certeza de si dicho vigilante cuidaba exclusivamente de la vivienda en que se llevó a cabo el acto de comunicación en cuestión o si custodiaba la residencial en que aquella se encuentra ubicada.

c. Por consiguiente, se concluye que el juez (3) del Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador omitió notificar debidamente la sentencia en cuestión y, con ello, vulneró los derechos de audiencia, defensa y a la propiedad del señor […] y de la sociedad […], pues no les brindó la oportunidad real de conocer el contenido de la decisión emitida en su contra; por lo que resulta procedente declarar que ha lugar el amparo solicitado sobre este punto de la pretensión planteada.

VII. Determinada la transgresión constitucional derivada de la actuación de la autoridad demandada, corresponde establecer en este apartado el efecto de la presente sentencia.

1. El art. 35 inc. 1º de la LPC establece que el efecto material de la sentencia de amparo consiste en ordenarle a la autoridad demandada que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la vulneración constitucional. Pero, cuando dicho efecto ya no es posible, la sentencia de amparo será meramente declarativa, quedándole expedita al amparado la posibilidad de reclamar indemnización por los daños causados en contra del funcionario personalmente responsable.

2. A. En el caso particular se determinó la existencia de una vulneración a los derechos de audiencia, defensa y a la propiedad de los actores como consecuencia de la omisión de notificación de la sentencia emitida por la autoridad demandada en el proceso ejecutivo mercantil con ref. 2140-16-MRPE-4CM3.

Además, se advierte que en el auto de 3 de julio de 2017 se ordenó la suspensión inmediata y provisional de los efectos del acto impugnado, en el sentido que la autoridad demandada debía abstenerse de continuar con los trámites de ejecución forzosa dentro del citado proceso ejecutivo mercantil, y que en este amparo se encuentra agregada certificación de las diligencias con ref. 5787-16-MREF-4CM3 que contiene el acta de la audiencia celebrada el 28 de junio de 2017 (folios 151 al 152), en la cual se adjudicaron en pago los bienes inmuebles embargados a favor de la sociedad acreedora, sin que conste que la aludida autoridad haya librado los oficios respectivos para materializar los efectos de esa decisión. Por ello, es posible concluir que en este caso aún existe la posibilidad que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes del acto reclamado.

Por consiguiente, el efecto material de esta sentencia de amparo se concretará en retrotraer el proceso en cuestión al momento en que se pronunció la aludida sentencia, quedando inválidos todos los actos posteriores a esa decisión, a efecto de que esta se notifique debidamente al señor JRHV y a la sociedad [...]., y cuenten con la oportunidad de ejercer la defensa de sus derechos.

B. Además, en atención a los arts. 245 de la Cn. y 35 inc. 1º de la LPC, la parte actora, en caso de que lo estime pertinente, puede utilizar los mecanismos que el ordenamiento jurídico regula para intentar reclamar indemnización por los daños materiales y/o morales que le pudo ocasionar la vulneración de derechos constitucionales declarada en esta sentencia directamente en contra de la persona responsable de la aludida vulneración.

Sobre este último punto, se aclara que la sentencia pronunciada en un proceso de amparo se limita a la declaratoria de si existe o no una vulneración de derechos constitucionales por parte de una autoridad y, en consecuencia, no tiene como objeto el establecimiento de responsabilidad personal alguna. El art. 81 de la LPC es categórico al respecto cuando prescribe que "[l]a sentencia definitiva [...] produce los efectos de cosa juzgada contra toda persona o funcionario, haya o no intervenido en el proceso, sólo en cuanto a que el acto reclamado es o no inconstitucional, o violatorio de preceptos constitucionales. Con todo, el contenido de la sentencia no constituye en sí declaración, reconocimiento o constitución de derechos privados subjetivos de los particulares o del Estado". Por ello, el presente fallo estimatorio no constituye un pronunciamiento respecto a la responsabilidad personal del o los funcionarios demandados, pues sobre ello se deben pronunciar las autoridades ordinarias competentes.

De ahí que, al exigir el resarcimiento de los daños directamente a la o las personas responsables –lo que es posible aun cuando ya no se encuentren en el ejercicio de sus cargos– tendrá que comprobarse en sede ordinaria que incurrieron en responsabilidad, por lo que se deberá demostrar: (i) que la vulneración constitucional ocasionada con su actuación dio lugar a la existencia de tales daños –morales o materiales–; y (ii) que dicha circunstancia se produjo con un determinado grado de responsabilidad –dolo o culpa–. Asimismo, deberá establecerse en dicho proceso, con base en las pruebas aportadas, el monto estimado de la liquidación que corresponda, dependiendo de la vulneración acontecida y del grado de responsabilidad en que se incurrió e n el caso particular."
Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 230-2017, fecha de la resolución: 17/05/2021

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONJUNTO DE ENTIDADES ESTATALES ENCARGADAS DE LAS FUNCIONES DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LA COSA PÚBLICA, CON LA FINALIDAD DE SATISFACER INTERESES GENERALES O COLECTIVOS

"4. A. Por otra parte, en la sentencia de 29 de abril de 2013, inconstitucionalidad 182008, se sostuvo que la Administración Pública es el conjunto de entidades estatales encargadas de las funciones de ejecución y gestión de la cosa pública, con la finalidad de satisfacer intereses generales o colectivos.

De ahí que aquella constituye uno de los instrumentos más importantes con los que cuenta el gobierno en su tarea de dirección política, económica y social

del país. A fin de realizar la satisfacción de tales intereses, la Administración cuenta con el poder no solo de crear normas —generales, impersonales y abstractas— de rango inferior al legislativo, sino también de dictar decisiones y hacerlas ejecutar forzosamente."

PODER SANCIONATORIO

"Dentro de ellas interesa resaltar aquellas que se relacionan con el poder sancionatorio de la Administración, cuyo ejercicio puede incidir en la esfera de los derechos fundamentales de los administrados. La importancia de esta potestad se manifiesta en el hecho de que, si fuera vedada a la Administración, se le dejaría sin una herramienta muy eficaz para hacer cumplir el ordenamiento jurídico.

Tal poder ha sido reconocido por el art. 14 de la Cn., el cual, si bien establece que únicamente le corresponde al Órgano Judicial la facultad de imponer penas —el principio de exclusividad de la jurisdicción—, habilita constitucionalmente a la Administración para sancionar las contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas. Así lo ha reconocido esta Sala en la sentencia de 13 de diciembre de 1988, controversia 1-88, en la que afirmó que tal precepto constitucional permite el establecimiento de sanciones administrativas.

B. Dicha potestad sancionadora es una de las facetas que el genérico poder punitivo del Estado muestra al administrado y su diferencia con respecto a los ilícitos de naturaleza penal es nada más en razón de la intensidad de la sanción a imponer; por tal razón, los principios y garantías que rigen en el ámbito de la legislación criminal son igualmente exigibles en el Derecho administrativo sancionador. Así, en la sentencia de 17 de diciembre de 1992, inconstitucionalidad 3-92, se afirmó que, con ciertos matices, los principios inspiradores del orden penal son de aplicación al Derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, hasta el punto de que un mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas y penales.

C. a. Uno de los principios que imbuyen a las ramas del Derecho anteriormente mencionadas es el principio de proporcionalidad. Respecto de él, en la sentencia de 13 de octubre de 2010, inconstitucionalidad 17-2006, se estableció que constituye una herramienta argumental que determina si un contenido constitucional ha sido alterado y, en ese sentido, se define esencialmente como un criterio estructural que sirve para articular las tensiones entre las disposiciones constitucionales —de poca densidad normativa— y sus concreciones. Dicho principio irradia una vinculación de tipo normativo que se proyecta sobre los poderes públicos —el Legislativo, principalmente— que exige que la limitación de derechos no sea desproporcionada.

b. En efecto, a este principio se alude, sobre todo, en las sentencias de control de constitucionalidad que versan sobre actos de los poderes públicos que intervienen en el ámbito de los derechos fundamentales, apareciendo como un conjunto articulado de tres subprincipios: (i) idoneidad; (ii) necesidad; y (iii) proporcionalidad en sentido estricto. Cada uno expresa una exigencia que toda intervención en los derechos fundamentales debe cumplir.

Según el subprincipio de idoneidad, toda intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada a contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo; en otras palabras, la aplicación del subprincipio en comento consiste en un análisis acerca de la capacidad que tiene el medio escogido —es decir, la limitación— para comentar esa finalidad. En tal sentido, no se pretende determinar si la medida es la más idónea en comparación con otras que pudiera considerar la jurisdicción constitucional, sino que, por el contrario, se busca verificar si la medida examinada logra, en algún modo, alcanzar el fin perseguido.

De acuerdo con el subprincipio de necesidad, toda medida legislativa debe ser —entre las igualmente eficaces—la menos gravosa, por lo que el examen de necesidad presupone la existencia de, por lo menos, un medio alternativo con el cual comparar la medida adoptada. En esta comparación se examina si alguno de los medios alternativos logra cumplir dos exigencias: en primer lugar, si reviste por lo menos el mismo grado de idoneidad que la medida legislativa para la obtención del fin inmediato; y, en segundo lugar, si afecta al derecho en un grado menor.

Mediante el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto se determina si la importancia de la intervención en el derecho fundamental está justificada por la importancia de la realización del fin perseguido por la intervención legislativa. Esto implica que las ventajas que se obtienen con la intervención legislativa en el derecho deben compensar los sacrificios que esta implica para sus titulares y para la sociedad en general. Se trata de una comparación entre la importancia de la intervención en el derecho y -la importancia de la realización del fin legislativo, con el objeto de fundamentar una relación de precedencia entre ellos.

c. Ahora bien, el principio de proporcionalidad no tiene la capacidad de operar sin una disposición constitucional que le sirva de base; en consecuencia, no parece plausible sostener que este principio impone al legislador un límite adicional a aquel que dimana de las propias cláusulas constitucionales. Más bien, el principio en comento debe ser considerado como un instrumento metodológico para concretar los límites que las propias disposiciones imponen a la acción legislativa, cuando dichos límites aparecen de modo abstracto e indeterminado.” *Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 218-2018, fecha de la resolución: 28/05/2021*

AGUAS DE FUENTES FREÁTICAS UBICADAS EN INMUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA

ESTAS FUENTES NO PUEDEN SER OBJETO DE APROPIACIÓN PRIVADA Y SE ENTIENDEN FUERA DEL COMERCIO, PUESTO QUE SIGUEN SIENDO UN BIEN DEL ESTADO, ESENCIAL PARA LA COLECTIVIDAD

“B. a. En el presente caso, el hecho generador de los tributos impugnados está constituido por la emisión de permisos para explotar el recurso hídrico del

Municipio de Quezaltepeque, por lo que debe determinarse si la potestad de otorgar permisos para la explotación del recurso hídrico es una facultad de los municipios.

En virtud de la potestad tributaria municipal, la contraprestación de una tasa debe consistir en una acción que el municipio realiza a favor del sujeto obligado al pago, pero la comuna debe encontrarse habilitada para realizar dicha acción como consecuencia de competencias previamente establecidas por la ley. Entonces, la contraprestación proporcionada por los municipios, que implica el hecho generador de una tasa, debe estar comprendida en las competencias municipales.

Así, en la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los municipios no pueden contemplar como contraprestación de una tasa actividades que estén fuera de su competencia –sentencia del 21 de agosto de 2013, amparo 428-2011–. Por tanto, pese a la autonomía y potestad tributaria municipal en materia de tasas, tienen vedado el ofrecimiento, otorgamiento o cobro en relación con una tasa cuyo hecho generador está fuera de las competencias municipales.

b. De esta manera, corresponde determinar si la explotación de aguas freáticas ubicadas, para este caso, en inmuebles de propiedad privada es una contraprestación que puede brindar la municipalidad. Para dirimir tal circunstancia es preciso tener en cuenta lo establecido en la sentencia del 30 de julio de 2014, inconstitucionalidad 21-2009.

i. Según el art. 103 de la Cn., el subsuelo y todos los elementos en él alojados pertenecen al Estado; por tanto, las fuentes freáticas pertenecen al Estado y constituyen un bien de propiedad estatal.

ii. Las aguas provenientes de fuentes freáticas localizadas en inmuebles de propiedad privada materialmente no están sujetas al uso público. Su acceso está restringido a la colectividad en virtud de otros derechos como la propiedad privada. Sin embargo, pese a que el disfrute público de las aguas freáticas está condicionado, ello no debe entenderse como un reconocimiento de dominio sobre las fuentes freáticas al titular del inmueble. Por el contrario, las aguas de fuentes freáticas ubicadas en inmuebles de propiedad privada siguen siendo de dominio estatal, ya que forman parte del subsuelo. Así, dichas fuentes no pueden ser objeto de apropiación privada y se entienden fuera del comercio, puesto que siguen siendo un bien del Estado, esencial para la colectividad."

EXPLOTACIÓN

"iii. Cuando se habla de explotación, no se alude al uso común del bien de uso público, puesto que este se caracteriza por ser de disfrute colectivo, libre, gratuito e igualitario, sino que al uso particular o privativo del bien, que puede incidir en el goce que de este tenga habitualmente la colectividad, regulándolo o limitándolo en beneficio del sujeto al que se otorgó la posibilidad de explotación privativa.

iv. En lo que al régimen constitucional de explotación atañe, del art. 103 de la Cn. se colige que el Estado, en su calidad de propietario, es el llamado a explotar el subsuelo, pero el texto constitucional también habilita su explotación mediante la intervención privada. Con todo, los recursos naturales ahí contenidos son riqueza nacional y le pertenecen al Estado; por tanto, la explotación efectuada por un particular deberá estar exhaustivamente regulada y realizarse en virtud de una concesión."

CONCESIÓN

"v. Por "concesión" se entiende el acto jurídico mediante el cual se transmite a un particular, en caso de interés general y por tiempo determinado, una habilitación para, por su cuenta y riesgo y en sustitución del Estado, prestar un servicio público o usar, aprovechar y explotar bienes de dominio público, a cambio de una remuneración que puede consistir en las tarifas que pagan los usuarios del servicio o en los frutos y beneficios que percibe por la utilización del bien.

vi. En virtud de que las aguas freáticas ubicadas en inmuebles de propiedad privada no son de uso público, su explotación o utilización privativa no restringe directamente el disfrute colectivo, pues no se gozaba de este. Así, se trata de la explotación de un recurso natural esencial para múltiples procesos industriales, respecto del cual existen potestades conferidas a la Administración. En este caso, a diferencia del supuesto de los bienes de uso público, no hay una exigencia constitucional expresa de que la autorización sea emitida directa y singularmente por la Asamblea Legislativa. Entonces, la concesión para la explotación de fuentes freáticas ubicadas en inmuebles privados podrá otorgarla la autoridad administrativa, previamente habilitada por la Asamblea Legislativa, en los términos establecidos por esta en una ley marco que establezca los requisitos, plazos, condiciones y finalidades de la concesión.

Cuando se trata de aguas freáticas alojadas en un bien de uso público, la concesión correspondiente debe ser acordada por la propia Asamblea Legislativa, de manera singular y con un determinado contenido material.

En ese sentido, independientemente de que las aguas –superficiales o freáticas– se encuentren ubicadas en un bien de uso público o en un inmueble de propiedad privada, siempre es preciso que medie una concesión, la cual propicia el cumplimiento de los mandatos de protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración y sustitución de los recursos naturales contemplados en el art. 117 de la Cn."

AUTORIZACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN NO SE ENCUENTRA ENTRE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES, POR LO QUE NO PUEDE ESTAR SUJETA AL COBRO DE UNA TASA MUNICIPAL

"c. En este caso se analiza la explotación de aguas freáticas ubicadas en inmuebles de propiedad privada, entendiendo por tal todas las formas de aprovechamiento y disposición particular, económicas o no, que tolere dicho recurso

y que excedan el uso común. De manera que se trata de una utilización para el beneficio particular del sujeto al que se otorgó la posibilidad de explotación privativa, que incluye la extracción y consumo del agua para fines que excedan las necesidades de sobrevivencia y tareas domésticas del titular del inmueble y su grupo familiar. Por ejemplo, constituye explotación la extracción de agua para fines industriales u otros relacionados con la comercialización.

En ese sentido, con base en lo expuesto en este apartado, se concluye que la autorización para la explotación de aguas freáticas ubicadas en inmuebles de propiedad privada no se encuentra entre las competencias municipales, por lo que no puede estar sujeta al cobro de una tasa municipal. Por el contrario, dicha explotación debe ser autorizada a través de una concesión, la cual, a su vez, ha de ser otorgada por la autoridad designada y en los términos establecidos por una ley en sentido formal.

En virtud de lo expuesto, se concluye que el Concejo Municipal de Quezaltepeque, al haber promulgado el art. 3 nº 14 de la ORTSMQ, específicamente los permisos "para la extracción de agua con fines comerciales o industriales" y "para la extracción y comercialización del recurso hídrico del municipio", creó tributos cuyo hecho generador lo constituye un servicio que no compete a los municipios brindar –explotación de aguas freáticas–, lo cual implicó una infracción al principio de reserva de ley en materia tributaria. Por consiguiente, corresponde estimar este punto de la pretensión planteada por la parte actora."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 203-2017, fecha de la resolución: 07/06/2021

ALCALDES MUNICIPALES

FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA CUANDO LA AUTORIDAD QUE DESPLEGÓ LA POTESTAD DECISORIA, EN LA CONCRECIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, HA SIDO EL CONCEJO MUNICIPAL

"2. A. En cuanto a la falta de legitimación pasiva del alcalde municipal de Conchagua, se advierte que consta en el expediente de este proceso de amparo certificación del acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de esa localidad en la sesión llevada a cabo el 26 de diciembre de 2018 (folio 20), en el que este acordó, entre otros puntos, suprimir plazas que se encontraban adscritas a la Unidad de Asesoría Jurídica Institucional Externa de esa municipalidad, pues esa unidad pasaría a depender de la Sindicatura, y girar instrucciones para que se comunicara a las personas afectadas esa decisión e indemnizarlas de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.

B. La legitimación pasiva se entiende como el vínculo existente entre el sujeto o sujetos pasivos de la pretensión y su objeto, es decir, el nexo que se configura entre una autoridad y el supuesto agravio generado por la acción u omisión que, aparentemente, lesiona los derechos fundamentales del peticionario. Ello implica que el presunto perjuicio ocasionado por el acto sometido a control cons-

titucional debe emanar de las actuaciones de las autoridades que han decidido el asunto controvertido, razón por la cual se exige para el válido desarrollo de los procesos de amparo que la parte actora, al momento de plantear su demanda, la dirija contra todos los órganos que hayan desplegado efectivamente potestades decisorias sobre el acto o actos impugnados en sede constitucional.

C. Del contenido del mencionado acuerdo es posible concluir que, tal como lo alega el apoderado de las autoridades demandadas, el alcalde municipal de Conchagua no fue la autoridad que desplegó la potestad decisoria en la concreción del acto impugnado en este proceso de amparo, sino que fue el Concejo Municipal demandado el que, en el ejercicio de las competencias que la ley le atribuye, decidió suprimir la plaza de la actora y ordenar que esta fuera indemnizada conforme a lo establecido en los arts. 53 y 59 n° 8 de la LCAM.

En consecuencia, se concluye que el alcalde municipal de Conchagua carece de legitimación pasiva en el presente proceso, situación que se traduce en un defecto de la pretensión que impide, por su relevancia, el conocimiento del fondo del reclamo planteado en su contra, siendo pertinente sobreseer la pretensión de amparo presentada por la demandante únicamente en lo referido a dicha autoridad."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 200-2019, fecha de la resolución: 25/08/2021

AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS

INSTRUMENTO PROCESAL POR MEDIO DEL CUAL SE ATACAN AQUELLAS DISPOSICIONES QUE VULNERAN DERECHOS FUNDAMENTALES Y PRODUCEN EFECTOS JURÍDICOS DESDE SU ENTRADA EN VIGENCIA

"III. 1. De acuerdo con la demanda y su auto de admisión, el presente proceso constitucional reviste la modalidad de un amparo contra ley autoaplicativa, es decir, el instrumento procesal por medio del cual se atacan aquellas disposiciones que vulneran derechos fundamentales y producen efectos jurídicos desde su entrada en vigencia.

En la sentencia de 3 de diciembre de 2010, amparo 584-2008, se afirmó que en este tipo de procesos se efectúa, en cierta medida, un examen en abstracto de los preceptos normativos impugnados que directamente y sin la necesidad de un acto posterior de aplicación transgreden derechos constitucionales –a semejanza de lo que ocurre en el proceso de inconstitucionalidad–. Por ello, resulta congruente trasladar y aplicar a esta modalidad de amparo, en lo pertinente, algunas de las reglas utilizadas en el proceso de inconstitucionalidad a fin de depurar y delimitar con precisión y claridad los términos en los que se efectuará la confrontación entre la disposición impugnada y la Constitución.

No obstante, tal como se acotó en la sentencia de 6 de abril de 2011, amparo 890-2008, si se opta por la vía del amparo para cuestionar constitucionalmente una actuación normativa imputada al legislador, dicho proceso no solo debe-

rá cumplir con los requisitos de procedencia establecidos para los procesos de inconstitucionalidad, sino que, además, para su adecuada tramitación, el sujeto activo deberá atribuirse la existencia de un agravio personal, directo y de trascendencia constitucional dentro de su esfera jurídica, es decir, lo argüido por aquel debe evidenciar la afectación de alguno de sus derechos fundamentales. [...]

1. A. El amparo contra ley no es un mecanismo procesal cuya finalidad sea la de impugnar la constitucionalidad de una disposición secundaria en abstracto, sino la de proteger los derechos fundamentales cuando por la emisión de una determinada disposición su titular estima que estos le han sido lesionados. En virtud de ello, durante la tramitación de este tipo de proceso constitucional, la parte actora deberá comprobar que efectivamente se encuentra en el ámbito de aplicación de la disposición considerada inconstitucional y, además, que esta es lesiva de sus derechos.

Entonces, la sociedad demandante tiene la carga de la prueba, es decir, la obligación de comprobar la existencia del hecho que fundamenta su pretensión, el cual consiste, en el presente caso, en la aplicación de tasas en la circunscripción territorial del municipio de San Luis Talpa, cuyos hechos imponibles supuestamente infringen el derecho a la propiedad por la inobservancia de los principios de reserva de ley y de capacidad económica."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 506-2017, fecha de la resolución: 07/06/2021

AMPARO CONTRA PARTICULARES

ACTOS U OMISIONES CONTROLABLES MEDIANTE UN PROCESO DE AMPARO

"En las improcedencias de 16 de marzo 2005 y 3 de mayo de 2005, amparos 147-2005 y 255-2005, se ha señalado que el acto de autoridad no es única y exclusivamente aquel emitido por personas físicas o jurídicas que forman parte de los Órganos del Estado o que realizan actos por delegación de estos, pues también se incluyen a aquellas acciones y omisiones producidas por particulares que, bajo ciertas condiciones especiales, limitan derechos constitucionales.

Al respecto, se advierte –tal como se indicó en la sentencia de 4 de marzo de 2011, amparo 934-2007– que esta Sala ha superado aquella postura según la cual el proceso de amparo únicamente procede contra actos de autoridades formalmente consideradas. La interpretación actual de la Ley de Procedimientos Constitucionales ha dotado de una connotación material al "acto de autoridad", en el entendido que el acto o la omisión contra el que se reclama es capaz de causar un agravio constitucional independientemente de la entidad o la persona que lo realiza.

En dicho sentido, se estableció que –siempre que se verifiquen los requerimientos que condicionan la admisión de un amparo contra particulares– los actos u omisiones, controlables mediante un proceso de amparo, podrían provenir de: i) actos derivados del ejercicio de derechos constitucionales, los cuales

son actos que se convierten en inconstitucionales a pesar de que, en principio, se efectúan como resultado del ejercicio legítimo de un derecho fundamental; ii) actos normativos o normas privadas, es decir, las normas emitidas con fundamento en potestad normativa privada; iii) actos sancionatorios, que son aquellas actuaciones emitidas con fundamento en la potestad privada para sancionar; y iv) actos "administrativos" de autoridades privadas o particulares, los cuales son actos que se sustentan en la potestad administrativa privada, es decir, actos orientados al cumplimiento de las finalidades propias de personas jurídicas de derecho privado y efectuados por los órganos de estas.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

"Por otra parte, en las improcedencias de 26 de agosto de 2011 y 19 de septiembre de 2012, amparos 236-2011 y 506-2011 –respectivamente–, se puntualizó que en ese tipo de procesos deben concurrir los siguientes requisitos: i) que el particular responsable del acto se encuentre en una situación de supra a subordinación respecto del peticionario; ii) que no se trate de una simple inconformidad con el contenido del acto que se impugna; iii) que se haya hecho uso de los recursos o procedimientos que el ordenamiento jurídico prevé frente a actos de esa naturaleza y que estos se hayan agotado plenamente, o bien, que dichos mecanismos de protección no existan o sean insuficientes para garantizar los derechos constitucionales del afectado; y iv) que el derecho fundamental cuya vulneración se invoca por el demandante sea, por su naturaleza, exigible u oponible frente al particular demandado en el proceso."
Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 518-2020, fecha de la resolución: 14/06/2021

JURISPRUDENCIA RELACIONADA

"III. 1. De acuerdo a la demanda incoada y el auto de admisión de esta, el presente proceso adoptó la modalidad de un amparo contra particulares, el cual procede contra los actos de autoridad material realizados por aquellos que no están investidos de un cargo público o no ejercen ninguna autoridad o poder de carácter formal, pero están en una relación de supra-subordinación y, por ello, poseen la capacidad de vulnerar derechos fundamentales.

A. a. Tal como se expresó en las resoluciones de 16 de marzo de 2005 y 1 de junio de 1998, amparos 147-2005 y 143-98, respectivamente, desde un punto de vista material, los particulares también pueden producir actos limitativos sobre los derechos constitucionales de las personas como si se tratase de autoridades en sentido formal. En efecto, si bien existen casos en que la decisión de un particular escapa del concepto tradicional de acto de autoridad, esto es, el emitido por personas físicas o jurídicas que forman parte de los órganos del Estado o que realizan actos por delegación de alguno de estos y frente a las cuales el sujeto se encuentra en una relación de subordinación, en aquellos puede ocurrir una limitación definitiva y unilateral de derechos fundamentales.

Por ello, el concepto de autoridad y, por consiguiente, de los actos que derivan del ejercicio de ese imperium, no deben ser entendidos en un sentido exclusivamente formal —referidos únicamente a un órgano del Estado—, sino también material, de manera que comprendan aquellas situaciones en las que personas o instituciones que formalmente no son autoridades en la realidad o práctica se consideren como tales cuando sus acciones y omisiones, producidas bajo ciertas condiciones, limiten derechos constitucionales.

b. Así, se requiere que el acto impugnado haya sido emitido dentro de una relación de supra-subordinación en sentido material, la cual puede advertirse en los casos en que el sujeto afectado no tiene más alternativa que aceptar el acto emitido por el particular, en virtud de la naturaleza de la vinculación que guarda con aquel, que lo coloca en una posición de predominio capaz de restringir o, incluso, anular el efectivo ejercicio de algunos de sus derechos. En otras palabras, la posición en la que se ubica un particular dentro de determinada relación jurídica frente a otro puede otorgar a aquel la facultad de imponer materialmente sus propias decisiones, pudiendo provocar, en los derechos del sujeto que se encuentra obligado a someterse a tal potestad, efectos que trascienden al ámbito constitucional.

En esos casos, y en función de los derechos constitucionales oponibles a esta clase de sujetos pasivos, puede afirmarse que las situaciones de poder en que se encuentran algunos particulares son análogas a las establecidas en la relación Estado-ciudadano. Por tanto, el reclamo incoado tendrá transcendencia constitucional cuando el particular demandado sea la única instancia ante la cual la persona pueda ejercer los derechos que se alegan vulnerados en el proceso de amparo. Solo así se evita que queden fuera de control constitucional situaciones que, pese a tratarse de acciones u omisiones voluntarias emitidas por un particular, determinan el ejercicio efectivo de derechos constitucionales.

Y es que, si la obligación de cumplir con lo establecido en la Constitución corresponde tanto a funcionarios públicos como a ciudadanos —arts. 235 y 73 ord. 2° de la Cn.—, los actos emanados de particulares en estas condiciones de supra-subordinación material no deben atentar o impedir el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales que les son oponibles. De ahí que negar la posibilidad de examinar un acto de esta naturaleza y características sería desconocer el carácter normativo de la Ley Suprema.”

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA QUE UN ACTO REALIZADO POR UN PARTICULAR SEA REVISABLE POR MEDIO DEL PROCESO DE AMPARO

“B. En ese sentido, para que un acto emitido por un particular sea revisable mediante el proceso de amparo se debe cumplir con los requisitos siguientes: (i) que el particular responsable del acto se encuentre en una situación de supra-subordinación respecto de la persona titular del derecho fundamental vulnerado; (ii) que no se trate de una simple inconformidad con el contenido del acto; (iii) que no existan en el ordenamiento jurídico mecanismos ordinarios de protección frente a actos de esa naturaleza con los que se garanticen los derechos constitu-

cionales del afectado, pues de existir tales mecanismos la tutela de los derechos vulnerados resultará exigible, en primer término, a las autoridades judiciales o administrativas correspondientes; y (iv) que el derecho de carácter constitucional cuya vulneración se invoca sea, por su naturaleza, exigible u oponible frente al particular demandado en el proceso."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 162-2018, fecha de la resolución: 23/04/2021

ARBITRAJE

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL ARBITRAJE

"2. A. a. En la sentencia de 25 de junio de 2009, inconstitucionalidad 26-2008, se afirmó que, de acuerdo con el principio de la autonomía de la voluntad, los particulares tienen la posibilidad de celebrar convenciones de cualquier tipo, incluso las no reglamentadas expresamente por la ley, y de determinar su contenido, es decir, sus cláusulas. Como consecuencia de ello, también tienen la libertad de optar por cualquiera de los medios lícitos existentes para resolver un conflicto, particularmente por la heterocomposición y dentro de esta por el arbitraje o la jurisdicción.

De ahí que la autonomía de la voluntad es un elemento fundamental en el arbitraje, pues confiere a las partes la facultad de someter sus controversias de carácter disponible a la decisión de un árbitro o tribunal arbitral distinto a los jueces y magistrados del orden jurisdiccional y, además, les permite adoptar reglas que habrán de observarse tanto para someter el conflicto a árbitros y la designación de estos como para la gestión de un trámite de arbitraje (sentencia de 30 de noviembre de 2011, inconstitucionalidad 11-2010).

En consecuencia, las personas que tengan la libre administración de sus bienes pueden suscribir convenios arbitrales con el objeto de prever la solución de los conflictos que surjan por la inobservancia de los deberes o cargas derivadas de sus relaciones contractuales o extracontractuales. Precisamente, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes se encuentran facultadas para definir el ámbito territorial e institucional en el que tendría lugar el arbitraje, incluso si este se encuentra en un Estado distinto."

COMPETENCIA PARA EJECUTAR LAUDOS ARBITRALES

"b. El convenio arbitral desplaza hacia los árbitros la actividad cognoscitiva que correspondería a las autoridades que ejercen jurisdicción; sin embargo, estos carecen de competencia para ejecutar sus propias decisiones. De ahí que las autoridades jurisdiccionales ejercen funciones de cooperación con los sistemas de arbitraje, entre otros ámbitos, en la ejecución de los laudos arbitrales, para realizar de manera coactiva los derechos que han sido declarados en aquellos.

Lo anterior se justifica en que los árbitros carecen del imperium que sí detentan los funcionarios integrantes del Órgano Judicial, de conformidad con los arts. 83, 86 y 172 de la Cn.

La competencia para ejecutar laudos arbitrales corresponde al juez que debió haber conocido de la controversia en ausencia del arbitraje, con arreglo a lo prescrito en los arts. 72 de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje y 561 inc. 3º del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM); es decir, se trata de un criterio determinante de la competencia definido en razón de la función.

c. Cuando una decisión arbitral pronunciada en el extranjero deba surtir efectos en El Salvador esta requerirá de su homologación por la CSJ, como si se tratara de una sentencia. Si bien el art. 182 ord. 4º de la Cn. confiere a dicho órgano la competencia de autorizar la ejecución de "sentencias" emitidas en el extranjero, ello se extiende también a los laudos arbitrales emitidos en otros Estados, cuando las partes interesadas, en ejercicio de su autonomía, han optado por someterse a ese medio de solución alterna de conflictos, siempre y cuando se dé cumplimiento a los requisitos que prevén la Constitución, la legislación aplicable y el Derecho Internacional."

EXEQUÁTUR

"B. Como se afirmó en la sentencia de 9 de mayo de 2016, inconstitucionalidad 112-2012, el exequátur es el procedimiento en virtud del cual se pretende que la autoridad competente (el Pleno de la CSJ en el caso de El Salvador) declare que una sentencia u otro pronunciamiento emitido por autoridades extranjeras cumple con los presupuestos necesarios para ser validada (y, de ser necesario, ejecutada) en un país distinto a aquel en el cual se profirió. Es decir, con ello se busca, por regla general, la homologación jurídica de un pronunciamiento, en el sentido que se realice una revisión sobre el apego o compatibilidad de ciertas pautas mínimas de respeto al ordenamiento jurídico del Estado en donde se pretende hacer valer una sentencia extranjera. Según el criterio de la CSJ, dicha homologación le permite autorizar la eficacia de las decisiones jurisdiccionales o laudos extranjeros "con fuerza de cosa juzgada" (resolución de 22 de noviembre de 2011, pareatis 55-P-2010).

El examen que realiza la CSJ permite que se depuren las peticiones de homologación de sentencias y laudos extranjeros, de manera que puedan ejecutarse solo los que, tras su análisis y evaluación, resulten compatibles con la Constitución y las leyes salvadoreñas. A este filtro se refiere el art. 182 ord. 4º de la Cn., que condiciona la autorización de la ejecución de sentencias extranjeras al cumplimiento de 3 requisitos: la decisión a ejecutar debe estar firme, su contenido debe ser conforme a la ley y su ejecución en El Salvador debe ser necesaria."

REQUISITOS PARA LOGRAR LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO ARBITRAL EXTRANJERO EN EL TERRITORIO DE EL SALVADOR

"C. La homologación de un laudo extranjero es un requisito para lograr su ejecución en el territorio del Estado. El art. 555 del CPCM prevé que los laudos

arbitrales extranjeros reconocidos en El Salvador constituyen títulos de ejecución, de conformidad con los tratados internacionales multilaterales, las normas de cooperación jurídica internacional o los tratados celebrados con el país del que provengan los títulos de ejecución. De ahí que, luego de haber obtenido el reconocimiento de un título de ejecución extranjero, la parte que ha sido beneficiada con este puede requerir ante la autoridad judicial competente su cumplimiento conforme a las reglas de la ejecución forzosa, si la parte vencida no ha procedido a cumplir de manera voluntaria la decisión.

La parte ejecutante debe cumplir los requisitos formales y materiales previstos en la legislación procesal para la solicitud de ejecución y el juez debe analizar si estos se han cumplido, en cuyo caso ordenará que se notifique al ejecutado para que pueda comparecer a mostrar su oposición, por ejemplo, por la falta de requisitos del título de ejecución u otros motivos de fondo. Es en esta etapa que la persona contra la que se promueve la ejecución podría alegar las razones por las que considere que el plazo conferido legalmente para solicitarla ha finalizado (art. 553 del CPCM). De ello se desprende que, como se trata de una cuestión propia de los requisitos de la ejecución forzosa, el asunto debe ser analizado: (i) en el marco de su competencia, por el juez que conozca de la solicitud y del trámite de la ejecución –es decir, una autoridad distinta a la CSJ–; (ii) en el ámbito de temporalidad, esto es, con posterioridad a la homologación de la sentencia o laudo por la CSJ; y (iii) a la luz de las reglas procesales que prevén, entre otros, la etapa procesal oportuna de la ejecución en la que se pueden alegar los vicios formales y materiales de la solicitud."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 744-2016, fecha de la resolución: 19/07/2021

ASISTENCIA CONSULAR

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULAN A TODOS LOS PODERES PÚBLICOS Y SON FUENTE DE OBLIGACIONES PARA EL ESTADO

"2. A. En la sentencia de 5 de febrero de 2014, amparo 665-2010, se afirmó que de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales se configura el deber genérico de protección de estos. Así, del significado y funciones de estos derechos dentro del orden constitucional se desprende que la garantía de su vigencia no puede limitarse a la posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de los individuos, sino que ha de ser asumida por el Estado. Por consiguiente, este tiene tanto la prohibición de lesionar la esfera individual protegida por los derechos fundamentales como la obligación de contribuir a la efectividad de tales derechos. En ese sentido, los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos y son fuente de obligaciones para el Estado, principalmente en las tareas de prevención, promoción, protección y reparación de los daños ocasionados.

En la sentencia de fecha 12 de noviembre de 2010, inconstitucionalidad 40-2009, se afirmó que el art. 2 de la Cn. consagra el derecho de toda persona a la protección en la conservación y defensa de sus derechos. La conservación de los derechos es una forma de protección que implica el establecimiento de mecanismos para evitar que los derechos constitucionales sean vulnerados. Esta primera modalidad de protección consiste en un derecho a que el Estado impida razonablemente posibles vulneraciones a los derechos materiales. Esta conservación no solo se logra mediante la vía jurisdiccional, sino también mediante vías administrativas o "no jurisdiccionales", como las acciones estatales "previsionales" encaminadas a prevenir posibles infracciones a derechos.

B. a. Por regla general, estos mecanismos estatales se desarrollan al interior del territorio del Estado. Sin embargo, el Derecho Internacional también confiere a los Estados un cierto margen para que, a través de los funcionarios que destina al servicio exterior, pueda llevar a cabo algunas acciones de asistencia y defensa de los derechos e intereses de sus nacionales. Por consiguiente, para delimitar los alcances del derecho a la protección en la conservación y defensa de los derechos de las personas salvadoreñas en el exterior, es preciso interpretar el contenido de este derecho en conexión con las disposiciones de los instrumentos internacionales que reconocen derechos a las personas extranjeras (en este caso salvadoreños que en otros Estados asumen la calidad de extranjeros) y un margen de acción a los Estados de origen para su asistencia y protección.

b. La Constitución sienta las bases para ello al indicar que corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones exteriores (art. 168 ord. 5º Cn.) y que, como parte de la estructura del Órgano Ejecutivo, existirán representantes diplomáticos y consulares de carrera acreditados (art. 170 Cn.). Estas acciones se concretan a partir de una serie de competencias previstas en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en tratados internacionales y en leyes que definen las atribuciones de los funcionarios diplomáticos y consulares."

FUNCIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

"De conformidad con el art. 32 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, corresponde al MRE, entre otras, las siguientes funciones: (i) conducir las relaciones con los Gobiernos de otros países, organismos y personas jurídicas internacionales, así como formular y dirigir la política exterior de El Salvador; (ii) gestionar, negociar, firmar y denunciar acuerdos internacionales, oyendo la opinión de la secretaría interesada cuando fuere necesario; (iii) organizar y dirigir el servicio exterior salvadoreño; (iv) recomendar al Presidente de la República el establecimiento, suspensión o ruptura y restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares con otros Estados; (v) expedir pasaportes conforme a las leyes sobre la materia y ejecutar las acciones que le competan por ley en materia diplomática, consular y migratoria; (vi) proteger los intereses de los salvadoreños en el exterior y promover su desarrollo; y (vii) defender y promover los derechos de los migrantes en el exterior, tanto en los países de destino como en los de tránsito.

Estas funciones son ejercidas a través de toda una estructura que, bajo la dirección de la titular del MRE, debe llevar a cabo las acciones necesarias para procurar a las personas nacionales en el extranjero, independientemente de su situación migratoria en los Estados receptores, asistencia para el ejercicio de ciertos derechos, por ejemplo, para su efectiva defensa en procesos judiciales y procedimientos administrativos en los que su libertad u otros derechos podrían ser limitados y procurar, en el marco de las relaciones diplomáticas y consulares con esos Estados, el bienestar de los salvadoreños en el exterior."

LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES CONFIERE AL ESTADO UN MARGEN DE ACCIÓN PARA PROCURAR A FAVOR DE SUS NACIONALES EN EL EXTERIOR

"c. Precisamente, uno de los principales instrumentos que confiere al Estado un margen de acción para procurar a favor de sus nacionales en el exterior es la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Según el art. 5 de dicha convención, las funciones consulares consisten en: (i) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el Derecho Internacional; (ii) extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado que envía; (iii) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas; (iv) velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses de los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas, en los casos de sucesión por causa de muerte que se produzcan en el territorio del Estado receptor; (v) velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses de los menores y de otras personas que carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado que envía, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o una curatela; (vi) representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos oportunamente; y (vii) ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina consular que no estén prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado receptor o a las que éste no se oponga, o las que le sean atribuidas por los acuerdos internacionales en vigor entre el Estado que envía y el receptor.

Actualmente existe consenso en torno a la naturaleza y alcance del referido tratado que lo aleja de la visión con la que fue concebido, esto es, como un instrumento que únicamente concede a los Estados una serie de prerrogativas. Ahora se entiende que la referida convención no se limita a establecer las bases de las relaciones consulares entre los Estados y los privilegios e inmunidades de los representantes consulares y sus familiares, sino que la Convención de Viena

sobre Relaciones Consulares también reconoce a los nacionales del "Estado que envía" (el Estado del que son originarios) ciertos derechos, entre ellos: (i) el derecho a la información, esto es, el derecho a conocer sobre la posibilidad de ser asistidos y, de ser necesario, representados por los agentes consulares o, en su defecto, que estos tomen las medidas necesarias para garantizar su representación; (ii) el derecho a la notificación y comunicación, en virtud del cual se debe garantizar al nacional del Estado que envía el acceso sin dilación al funcionario consular para posibilitarle su asistencia, máxime si se trata de una persona detenida, y a comunicarse libremente con los agentes consulares destacados en el Estado receptor, salvo si se trata de personas solicitantes de asilo o refugio que aleguen situaciones de persecución atribuibles al Estado del que son nacionales; y (iii) el derecho a la asistencia, que permite al Estado que envía proveer acompañamiento y auxilio a sus nacionales y a estos recibirla, sin interferencias, incluso como instrumento para posibilitarles su defensa cuando se les atribuye una infracción o delito.

Precisamente, como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal, "la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce, como una función primordial del funcionario consular, el otorgamiento de asistencia al nacional del Estado que envía en la defensa de sus derechos ante las autoridades del Estado receptor" (párr. 80).

Ahora bien, este derecho a la asistencia consular no se reduce a los supuestos de detención o encierro de un nacional en un Estado extranjero. Para delimitar su extensión es preciso acudir al art. 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en su contexto, pero también es pertinente analizar las obligaciones de los funcionarios consulares conforme a la legislación nacional. Así, la Ley Orgánica del Servicio Consular prevé que: (i) "[l]os funcionarios consulares prestarán a los salvadoreños que residan o se hallen en el país en que funcionan y a las propiedades e intereses salvadoreños que en él existen [...] la protección compatible con el Derecho de Gentes" (art. 103); (ii) "[e]n virtud de la protección que les incumbe dispensar, cuidarán que los salvadoreños y sus propiedades gocen de los derechos que les estuvieren asegurados por Tratados, o a falta de éstos, los que por la práctica del país en que funcionan o por las leyes de dicho país [...] se otorguen a los extranjeros, sean con referencia a la libertad de morar, de trasladarse de un punto a otro, de disponer de sus bienes o de ejercer el comercio o cualquier otra profesión" (art. 104); (iii) "[s]i individualmente fueren violados esos derechos por actos arbitrarios o injustos de las autoridades locales, deberán prestar su apoyo a [...] los salvadoreños perjudicados o cuyos derechos han sido violados" (art. 106); (iv) "[n]o sólo deberán prestar su apoyo a las gestiones legales que los salvadoreños hicieren ante las autoridades locales, sino que también los prestarán siempre que su interposición o el auxilio de sus conocimientos del país y las leyes y prácticas locales condujere al más expedito ejercicio de los derechos, sobre cuyo goce efectivo están encargados de velar" (art. 108); (v) "[l]os funcionarios consulares prestarán su asistencia a los salvado-

reños desvalidos o enfermos sin medios de ganar la subsistencia para que sean admitidos en los establecimientos públicos de beneficencia y excitarán, entre las naciones de su distrito[,] la caridad privada a favor de los mismos. En casos extremos y conforme a las instrucciones que les diere el Ministerio de Relaciones Exteriores, deberán conceder los socorros indispensables con cargo al Estado" (art. 109); y (vi) "[e]s deber de los funcionarios consulares facilitar[,] en cuanto dependa de su intervención o apoyo, la repatriación de los salvadoreños que existan en su Distrito y concederles moderados auxilios cuando tuvieren fondos para ese fin y estuvieren autorizados para gravar con ellos al Estado. En caso de no disponer de fondos, pueden solicitar la repatriación al Ministerio de Relaciones Exteriores. También podrán interesarse ante los Capitanes de Buques o Empresas de transporte nacionales para obtener su traslado al país" (art. 110)."

SENTIDO Y ALCANCE DE LAS FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES CONSULARES

"d. Para comprender de mejor forma el sentido y alcance de las funciones de los representantes consulares es preciso acudir al Derecho Internacional, pues una vasta terminología que se utiliza en el marco de las relaciones diplomáticas y de las relaciones consulares ha sido desarrollada por la costumbre internacional codificada en tratados. Así, por ejemplo, el término "socorro" es utilizado principalmente en el marco del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de las Personas Refugiadas, principalmente en contextos de conflicto armado, graves perturbaciones al orden público, violencia generalizada y desastres naturales o provocados por el ser humano. De hecho, es utilizado como sinónimo o como una modalidad de "acción humanitaria" o de "ayuda humanitaria". De conformidad con la Organización Internacional para las Migraciones, la "acción humanitaria" es una "[l]abor de asistencia, protección y promoción realizada para atender las necesidades humanitarias que se plantean en caso de peligros naturales, conflictos armados internos u otras causas o de preparación y respuesta para situaciones de emergencia".

Precisamente, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución nº 46/182 de 19 diciembre de 1991, utiliza la palabra socorro en ese sentido: "Hay una clara relación entre emergencia, rehabilitación y desarrollo. A fin de lograr una transición sin tropiezos del socorro a la rehabilitación y el desarrollo, la asistencia de emergencia debería prestarse de manera tal que apoyara la recuperación y el desarrollo a largo plazo. De esta manera, las medidas de emergencia deberían considerarse un paso hacia el desarrollo a largo plazo" (párr. 9)."
Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 167-2020, fecha de la resolución: 05/07/2021

CARGA DE LA PRUEBA

QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL

"En casos como este es preciso aplicar las reglas sobre la carga de la prueba a fin de obtener el grado de certeza que se necesita para pronunciar una

resolución sobre el fondo. En efecto, de conformidad con el principio de la carga de la prueba, una parte procesal debe demostrar, si quiere evitar el perjuicio de una sentencia desfavorable, la existencia o inexistencia del hecho controvertido. Conforme la regla general, la doctrina tradicional ha razonado que el demandante es quien debe asumir la carga de probar el hecho cuya existencia afirma o niega. No obstante, la realidad jurídica ha puesto en evidencia que una aplicación automática de esta regla quebranta el principio de igualdad procesal, porque supone concentrar en el demandante la carga de probar los hechos controvertidos sin importar la situación fáctica en que se encuentre o la naturaleza de los hechos que constituyan el objeto de prueba. En efecto, se precisa en cada caso valorar la naturaleza de los hechos controvertidos y las posiciones en que se encuentran las partes procesales a fin de determinar cuál está en una situación más ventajosa para producir la prueba. En igual medida se precisa determinar si el pretensor enfrenta un escollo que le impide acceder a las fuentes de prueba."

OMISIONES DE RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS

"En el presente caso los hechos litigiosos son omisiones de respuesta de las autoridades demandadas a los escritos presentados por el actor. Dada la naturaleza de las omisiones, se observa que asignar la carga de probarlas al demandante lo colocaría en franca desventaja con respecto a su contraparte, ya que a esta solo le bastaría negar sus afirmaciones y omitir la aportación de medios de prueba para obtener una sentencia favorable. En efecto, probar un "hecho negativo" como una omisión de respuesta es un escollo casi insuperable para la parte actora, porque es una conducta, consistente en un no hacer, que se caracteriza por no dejar indicios en el "mundo exterior" y, en consecuencia, por imposibilitar su comprobación. En cambio, la inexistencia de la omisión sí es posible comprobarla por medio del documento en el que se hubiese consignado la respuesta. Por esta razón puede afirmarse que es la autoridad requerida y no el peticionario la que se encuentra en una posición más ventajosa para probar la inexistencia de la omisión de respuesta, ya que en definitiva es quien produce el documento en el que se consigna la contestación. En consecuencia, en el presente caso es razonable trasladar a las autoridades demandadas la carga de probar la inexistencia de las omisiones de respuesta y, por consiguiente, el perjuicio que se deriva de no aportar material probatorio al proceso.

Por tanto, en vista de que la Comisión Electoral Nacional y el Tribunal de Primera Instancia de ARENA no aportaron en legal forma ningún medio de prueba que demostrase la existencia de respuestas oportunas, razonadas, congruentes y debidamente notificadas a las peticiones que les presentó el actor el 25 de julio de 2017 y el 9 de agosto de 2017, se debe estimar la pretensión.

IX. Comprobadas las vulneraciones constitucionales ocasionadas por las omisiones de respuesta de la Comisión Electoral Nacional y del Tribunal de Primera Instancia de ARENA, se debe establecer el efecto de esta sentencia.

1. El art. 35 inc. 1º de la LPC establece que el efecto material de la sentencia de amparo consiste en ordenarle a la autoridad demandada que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la vulneración constitucional.

2. En el caso particular se determinó la existencia de una vulneración al derecho de petición del actor, ya que la Comisión Electoral Nacional y el Tribunal de Primera Instancia de ARENA no probaron que le hayan brindado una respuesta a sus peticiones, con lo que conculcaron su derecho. En ese sentido, las omisiones impugnadas consumaron sus efectos en la esfera jurídica del pretensor; circunstancia que impide una reparación material, por lo que procede únicamente declarar mediante esta sentencia las infracciones constitucionales al derecho de petición. Ello sin perjuicio de que el demandante pueda ejercer, de conformidad con el art. 2 de la Cn., las acciones que el ordenamiento jurídico contempla para obtener, a través de la jurisdicción ordinaria, la reparación de los daños materiales y morales que haya sufrido."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 613-2017, fecha de la resolución: 23/06/2021

COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

ÁMBITO CONSTITUCIONAL CARECE DE COMPETENCIA MATERIAL PARA EVALUAR, INVESTIGAR Y DEDUCIR RESPONSABILIDAD PENAL

"2. La parte actora le atribuye a la Fuerza Armada la desaparición de los señores PRL, JCR y JR, así como el genocidio efectuado en la denominada masacre de 1932. Al respecto, es importante aclarar que no le corresponde a esta Sala determinar la responsabilidad por los delitos cometidos en el contexto de la referida masacre.

Y es que, la investigación y eventual deducción de la responsabilidad penal por esos crímenes es una facultad de la Fiscalía General de la República y de la jurisdicción de la materia, por lo que esta Sala se encuentra imposibilitada de dar trámite al presente proceso respecto de la actuación imputada a la Fuerza Armada de El Salvador, pues no tiene potestad para dilucidar sobre la posible culpabilidad por actos delictivos.

Así, se debe tener en cuenta que el ámbito constitucional carece de competencia material para evaluar dichas situaciones, debido a que tal actividad implicaría la realización de una labor de investigación y enjuiciamiento de ciertos delitos que fueron cometidos en el contexto de la masacre contra los pueblos indígenas de 1932.

De esa forma, tal como se ha sostenido en la jurisprudencia –verbigracia en la improcedencia de 27 de octubre de 2017, amparo 684-2016– esta Sala carece de competencia material para efectuar el análisis relativo a la interpretación y aplicación que las autoridades judiciales o administrativas desarrollen con relación a las leyes que rigen los trámites cuyo conocimiento les corresponde, pues esto implicaría la irrupción de competencias que, en exclusiva, han sido atribuidas y deben realizarse por tales funcionarios.

En razón de lo manifestado, se evidencia que los argumentos expuestos por peticionarios con relación a la actuación atribuida a la Fuerza Armada no contienen un fundamento de relevancia constitucional, pues no se observa que se refieran a situaciones relacionadas con la competencia de este Tribunal, más bien, la queja se refiere a cuestiones de mera legalidad.

3. De esta forma, el reclamo formulado no corresponde al conocimiento del ámbito constitucional, por no ser materia propia del proceso de amparo, ya que este mecanismo procesal no opera como una instancia para conocer, desde una perspectiva eminentemente legal, sobre las actuaciones realizadas por las autoridades, sino que pretende brindar una protección reforzada de los derechos fundamentales reconocidos a favor de las personas.

En tal sentido, ya que el asunto en comento carece de trascendencia constitucional, es pertinente declarar la improcedencia de la demanda de amparo con relación a este punto, por concurrir un defecto en un aspecto de la pretensión que habilita la terminación anormal del proceso."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 97-2019, fecha de la resolución: 08/11/2021

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL

ALCANCE

"B. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la cosa juzgada constitucional es una institución jurídica procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia constitucional el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Esto es acorde con lo establecido en el art. 81 de la LPC, en el que se prescribe que la sentencia produce los efectos de cosa juzgada.

Esta Sala sostuvo en el auto de 20 de octubre de 2010, inconstitucionalidad 54-2010, que el efecto más importante del proceso jurisdiccional es la cosa juzgada e, incluso, la existencia de la misma es elemento determinante de la función jurisdiccional (art. 172 de la Cn.). Por medio de ella, el ordenamiento jurídico pretende que se alcance una declaración judicial, en relación con la pretensión planteada, que no podrá ser atacada ni contradicha por medio de providencias de otros órganos judiciales. En ese sentido, la cosa juzgada adquiere su completo sentido cuando se la relaciona con un proceso posterior, ya que hasta entonces la vinculación de carácter público en que consiste adquiere virtualidad. Tal vinculación se manifiesta en dos efectos, uno negativo y otro positivo. El efecto negativo implica la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales firmes fuera de los cauces legalmente establecidos. Por otra parte, el efecto positivo o prejudicial obliga a los jueces y tribunales a ajustarse a lo juzgado en un proceso anterior, cuando hayan de decidir sobre una relación o situación respecto de la cual la resolución recaída se encuentre en estrecha conexión; la cosa juzgada no opera aquí como excluyente de la resolución de fondo posterior, sino que la condiciona y por eso se habla también de función prejudicial, es decir, que lo re-

suelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme vinculará al tribunal que conozca en un proceso posterior cuando en este aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto.

Según lo dicho, la cosa juzgada es atribuible a las decisiones que resuelven el fondo de la cuestión sometida a conocimiento del tribunal, es decir, de las sentencias. Sin embargo, el abogado […] considera que las decisiones para la ejecución de aquellas también gozan del mismo efecto.

Ahora bien, debe señalarse que aquellas resoluciones pronunciadas durante la ejecución de una sentencia constitucional no resuelven aspectos de fondo, no constituyen formalmente sentencias y tampoco son consideradas extensiones materiales de los pronunciamientos definitivos. Son simplemente autos que tienen como finalidad controlar y garantizar el cumplimiento de las sentencias."

INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN, DADO QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ÚNICAMENTE CONTROLÓ UN AUTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA

"Aclarado lo anterior, se considera que, en el presente caso, no se desconoce la cosa juzgada constitucional ni se vulnera la seguridad jurídica, pues esta Sala únicamente controló un auto de ejecución de sentencia lo cual implica que no se ha vuelto a conocer y a decidir sobre lo resuelto en la sentencia, pues es una restricción negativa producida por la cosa juzgada.

Además, esta Sala cumplió con su función constitucional de interpretar con autoridad las normas que sobre cada materia expide el constituyente y el legislador, es decir, como órgano de cierre de jurisdicción, ya que con su pronunciamiento definitivo fijó el sentido y alcance de la Constitución en el control concreto realizado, el cual no se vio modificado por la resolución del 23 de octubre de 2020.

En razón de todo lo anterior, esta Sala no encuentra argumentos que muestren el yerro de sus pronunciamientos, siendo procedente confirmarlos y descartar la supuesta vulneración alegada por el abogado […]."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 181-2005, fecha de la resolución: 16/06/2021

DERECHO A CONOCER LA VERDAD

DEFINICIÓN

"1. A. El derecho a conocer la verdad –sentencia de 5 de febrero de 2014, amparo 6652010– es el que le asiste a las víctimas –en sentido amplio, es decir, tanto a las víctimas directas como a sus familiares– de vulneraciones de los derechos fundamentales, como también a la sociedad en su conjunto, de conocer lo realmente ocurrido en tales situaciones. En ese sentido, el Estado se encuentra obligado a realizar todas las tareas necesarias para contribuir a esclarecer lo sucedido a través de las herramientas que permitan llegar a la verdad de los hechos, sean judiciales o extrajudiciales.

Además, en la medida en que se considera que la sociedad también es titular del derecho a conocer la verdad de lo sucedido, se posibilita la memoria colectiva, la cual permitirá construir un futuro basado en el conocimiento de la verdad, piedra fundamental para evitar nuevas conculcaciones de los derechos fundamentales.

B. En los mismos términos se ha pronunciado tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (caso Lucio Parada Cea y otros contra El Salvador, párr. 147 y 152, y caso Monseñor Oscar Arnulfo Romero, párr. 148); como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su doctrina y jurisprudencia (caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños contra El Salvador, párrafo 298).

2. El artículo 63 inciso 2º de la Constitución dispone que el Estado debe adoptar políticas públicas a fin de mantener y desarrollar la identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad de los pueblos indígenas, es decir, reconoce su derecho a la identidad cultural."

LA CONSTITUCIÓN TAMBIÉN CONSAGRA EL DERECHO A LA PROTECCIÓN EN LA CONSERVACIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ESTABLECIDOS EN FAVOR DE TODA PERSONA

"3. En la sentencia de 13 de julio de 2016, inconstitucionalidad 44-2013, esta Sala afirmó que la Constitución, desde su artículo 2 positiva una serie de derechos de la persona que considera fundamentales para la existencia humana digna, en libertad e igualdad y que integran su esfera jurídica. Ahora bien, para que tales derechos no se reduzcan a un reconocimiento abstracto y tengan posibilidades de eficacia, es también imperioso el reconocimiento de un derecho que posibilite su realización efectiva y pronta. En virtud de ello, la Constitución también consagró el derecho a la protección en la conservación y defensa de los derechos fundamentales establecidos en favor de toda persona. La conservación de los derechos que reconoce la Constitución es, en efecto, una forma de tutela que implica el establecimiento de acciones o mecanismos para evitar que los derechos constitucionales sean vulnerados, violados, limitados o, en última instancia, extraídos inconstitucionalmente de la esfera jurídica de cada persona."

INDISPENSABLE LA REPARACIÓN Y RESARCIMIENTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CUANDO EXISTE UNA TRANSGRESIÓN

"Expuesto lo anterior, puede advertirse que ante la transgresión de derechos fundamentales es necesario el resarcimiento o reparación de los daños o menoscabos que provocaron a las víctimas las actuaciones y omisiones tanto de aquellos sujetos que tenían la calidad de funcionarios públicos como de los particulares armados que, en una situación de predominio respecto de la población civil, restringieron, afectaron o, incluso, anularon el efectivo ejercicio de los derechos a terceros.

La reparación, como un derecho de las víctimas y componente esencial de la justicia transicional, también debe cumplir una función preventiva y de com-

bate a la impunidad, lo que va más allá del resarcimiento de las consecuencias que tuvo el hecho ilícito generado por los agresores y la imposición de penas y sanciones."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 97-2019, fecha de la resolución: 08/11/2021

DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA

FACETAS, ANÁLISIS DE LA MISMA Y TITULARES DEL DERECHO

"B. Continuando con dicho tema, en la sentencia de 20 de octubre de 2014, amparo 142-2012, se expresó que la autodeterminación informativa tiene dos facetas: i) material –preventiva–, relacionada con la libertad del individuo con relación a sus datos personales, y ii) instrumental –protectora y reparadora–, referida al control sobre el resguardo de la información y a su restablecimiento en caso de restricciones arbitrarias.

Así, en cuanto a su dimensión material, el mencionado derecho pretende satisfacer la necesidad de las personas de preservar su identidad, en caso de posible revelación y uso de los datos que les conciernen, y de protegerlas de la ilimitada capacidad de archivarlos, relacionarlos y transmitirlos.

Sobre la dimensión instrumental, se ha sostenido en la citada jurisprudencia, que constituye el derecho al control de la información personal sistematizada o contenida en bancos de datos informáticos o ficheros.

C. Aunado a ello, la jurisprudencia de esta Sala ha señalado –sentencia de 15 de febrero de 2017, inconstitucionalidad 136-2014/141-2014– que la titularidad del derecho a la autodeterminación informativa corresponde tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, ya que, si el objetivo y función de los derechos fundamentales es la protección integral de la persona humana –ya sea a título individual o como parte de la colectividad–, es posible que las organizaciones que las personas naturales crean para la protección de sus intereses, sean titulares de ciertos derechos fundamentales, en tanto y en cuanto estos protejan su propia existencia e identidad, a fin de asegurar el libre desarrollo de su personalidad y autonomía.

De ahí que las personas jurídicas también pueden actuar como titulares del derecho a la autodeterminación informativa respecto de aquellos datos que por su naturaleza le sean aplicables y que sean propios de la naturaleza de la entidad jurídica.

3. En el caso en estudio, los licenciados [...] y [...] han sostenido que la exigencia de revelar o exhibir la documentación e información identificada en los requerimientos administrativos –puntualmente los libros de actas de la Junta Directiva de la sociedad, los informes o reportes finales que se entregan a los gobiernos extranjeros y fundaciones cooperantes, así como los detalles sobre los suscriptores o colaboradores que realizan pequeñas aportaciones al medio– afectaría el "derecho a la libertad de expresión e información".

Ahora bien, de los alegatos expuestos, se deduce que el planteamiento argumental de la demanda se refiere a que –en opinión de los citados abogados– de revelarse aspectos concernientes a la metodología periodística, fuentes y líneas de investigación, junto aquellos relacionados a la información personal de los suscriptores, se estarían vulnerando los derechos a la libertad de expresión, libertad de información y a la autodeterminación informativa, por lo que en esos términos se entenderá el reclamo formulado."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 393-2020, fecha de la resolución: 05/03/2021

DERECHO A LA PROPIEDAD

ALCANCE

"2. El derecho a la propiedad (art. 2 inc. 1º de la Cn.) faculta a una persona a: (i) usar libremente los bienes, que implica la potestad del propietario de servirse de la cosa y aprovechar los servicios que rinda; (ii) gozar libremente de los bienes, que se manifiesta en la posibilidad del dueño de recoger todos los productos que accedan o se deriven de su explotación, y (iii) disponer libremente de los bienes, que se traduce en actos de enajenación respecto a la titularidad del bien.

En suma, las modalidades de este derecho, es decir, el libre uso, goce y disposición de los bienes, se ejercen sin otras limitaciones más que aquellas establecidas en la Constitución o la ley, siendo una de ellas el objeto natural al cual se debe: la función social. Cabe aclarar que, en virtud del derecho a la propiedad, no solo se tutela el dominio, sino también las reclamaciones que se basen en algún otro derecho real como la herencia, el usufructo, la habitación, la servidumbre, la prenda o la hipoteca, entre otros."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 230-2017, fecha de la resolución: 17/05/2021

DERECHO A LA PROTECCIÓN FAMILIAR

ACEPCIÓN

"2. A. En la sobreseimiento de 20 de septiembre de 2017, amparo 623-2015, se indicó que el derecho a la protección familiar es aquel en virtud del cual el Estado debe asegurar a todas las personas el disfrute de una convivencia digna con su núcleo familiar, independientemente de la forma que este adopte, y eliminar toda forma de obstrucción arbitraria a este derecho por parte de cualquier entidad pública o privada. Dicho derecho se encuentra reconocido en el art. 32 inc. 1º de la Cn., el cual establece que la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, imponiendo a este último la obligación de dictar la legislación necesaria y crear los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico.

B. Es por las funciones sociales y jurídicas que cumple la familia dentro de la sociedad que requiere de una protección reforzada del Estado, mediante instrumentos jurídicos, políticas públicas y, en general, de su propio actuar. Lo anterior implica para el Estado, primero, un deber de abstención o de no injerencia y, segundo, obligaciones positivas o prestacionales para fomentar la protección familiar y la conservación de la familia como base fundamental de la sociedad."
Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 285-2017, fecha de la resolución: 16/07/2021

RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL

"2. A. En la sentencia de 20 de septiembre de 2017, amparo 623-2015, se indicó que el derecho a la protección familiar es aquel en virtud del cual el Estado debe asegurar a todas las personas el disfrute de una convivencia digna con su núcleo familiar, independientemente de la forma que este adopte, y eliminar toda forma de obstrucción arbitraria a este derecho por parte de cualquier entidad pública o privada. Dicho derecho se encuentra reconocido en el art. 32 inc. 1º de la Cn., el cual establece que la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, imponiendo a este último la obligación de dictar la legislación necesaria y crear los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico.

La obligación del Estado de proteger a la familia proviene de la fundamentalidad que la Constitución le reconoce a dicha institución. Ese carácter fundamental tiene su origen en la composición de la familia, en el sentido de que, si la persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado (art. 1 inc. 1º Cn.), entonces una agrupación de personas unidas por rasgos biológicos y afectivos que se establecen de forma permanente en una sociedad merece una especial protección."

FUNCIONES DE LA FAMILIA

"B. Además de la función natural de la familia –la procreación–, se identifica en esta otras dos funciones: (i) una moral o afectiva, que implica el establecimiento de lazos sentimentales entre sus miembros de modo que se crea una identidad de pertenencia, conservación y apoyo recíproco; y (ii) una económica o de subsistencia, consistente en el aseguramiento por parte del grupo familiar de los elementos básicos –vivienda y alimento– para asegurar su permanencia y estabilidad.

Es por las funciones sociales y jurídicas que cumple la familia dentro de la sociedad que requiere de una protección reforzada del Estado, mediante instrumentos jurídicos, políticas públicas y, en general, de su propio actuar. Lo anterior implica, primero, un deber de abstención o de no injerencia del Estado y, segundo, la existencia de obligaciones positivas o prestacionales de realizar todo lo que se encuentre al alcance de este para fomentar la protección familiar y la conservación de la familia como base fundamental de la sociedad."
Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 483-2017, fecha de la resolución: 20/08/2021

DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA

ALCANCE

"1. A. En las sentencias del 26 de agosto de 2011, amparos 253-2009 y 548-2009, se reconsideró lo que se entendía por el derecho a la seguridad jurídica (art. 2 inc. 1º de la Cn.), estableciéndose con mayor exactitud las facultades de sus titulares que pueden ser tuteladas por la vía del proceso de amparo según el art. 247 de la Cn.

Así, se precisó que la certeza del Derecho, a la cual la jurisprudencia constitucional venía haciendo alusión para determinar el contenido del citado derecho, deriva principalmente de que los órganos estatales y entes públicos realicen sus atribuciones con plena observancia de los principios constitucionales, v. gr., de legalidad, de cosa juzgada, de irretroactividad de las leyes o de supremacía constitucional (arts. 15, 17, 21 y 246 de la Cn.).

Por lo anterior, cuando se requiera la tutela de la seguridad jurídica por la vía del proceso de amparo no debe invocarse esta como valor o principio, sino que debe alegarse una vulneración relacionada con una actuación de una autoridad emitida con la inobservancia de un principio constitucional y que resulte determinante para establecer la existencia de un agravio de naturaleza jurídica a un individuo. Ello siempre que dicha transgresión no tenga asidero en la afectación al contenido de un derecho fundamental más específico."

TUTELA ES PROCEDENTE SIEMPRE Y CUANDO LA TRANSGRESIÓN ALEGADA NO ENCUENTRE ASIDERO EN LA AFECTACIÓN DEL CONTENIDO DE UN DERECHO FUNDAMENTAL MÁS ESPECÍFICO

"2. A. En el presente caso los actores alegaron que su derecho a la seguridad jurídica fue afectado por la autoridad demandada en virtud de la sentencia emitida en el proceso ejecutivo mercantil con ref. 2140-16-MRPE-4CM3, en la que fueron condenados al pago de cierta cantidad de dinero a favor de la sociedad […], pues, aparentemente, en el citado proceso no se siguieron las formas esenciales para realizar el emplazamiento y la notificación de la sentencia, situación que los dejó en estado de indefensión.

Al respecto, si partimos de que la tutela del derecho a la seguridad jurídica en un proceso de amparo precisa que la transgresión alegada no tenga asidero en la afectación a un derecho fundamental más específico, se puede concluir que la pretensión de los actores en este punto adolece de una inadecuada configuración, porque los argumentos expuestos en su demanda evidencian una presunta afectación a sus derechos de audiencia, defensa –como manifestaciones del debido proceso– y a la propiedad, que también fueron invocados en su demanda.

B. Por consiguiente, procede sobreseer a la autoridad demandada en relación con la supuesta vulneración del derecho a la seguridad jurídica del señor […] y de la sociedad […]"

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 230-2017, fecha de la resolución: 17/05/2021

DERECHO A LA SEGURIDAD MATERIAL

POSEE DOS FACETAS, COLECTIVA E INDIVIDUAL

"IV. 1. En la sentencia de 28 de abril de 2015, amparo 787-2012, se sostuvo que el derecho a la seguridad material posee dos facetas: una colectiva y otra individual. La primera se refiere al derecho de los miembros de la sociedad en su conjunto a ser protegidos frente a aquellas circunstancias que ponen en riesgo bienes jurídicos colectivos importantes, como por ejemplo el patrimonio público, el espacio público, la salud y el medio ambiente. La segunda, en cambio, está referida al derecho de las personas de recibir protección adecuada de las autoridades cuando estén expuestas a riesgos excepcionales que no tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar estos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad.

Para que las prestaciones necesarias en cada situación concreta sean exigibles al Estado, es preciso probar los hechos que apuntan a la existencia de un riesgo extraordinario o extremo. Así, será necesario demostrar: (i) que el riesgo respecto del cual se pide protección ante las autoridades administrativas o judiciales competentes reúne todas o la mayoría de las características antes apuntadas; y (ii) la situación de vulnerabilidad o especial exposición al riesgo en que se encuentran la persona o el colectivo afectados."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 483-2017, fecha de la resolución: 20/08/2021

DERECHO A REMUNERACIÓN ECONÓMICA

OBLIGACIONES PRINCIPALES QUE SURGEN DE TODA LABOR, TRABAJO O SERVICIO REMUNERADO

"2. A. Según se ha establecido –v. gr., en las sentencias de 4 de febrero de 2011 y 24 de noviembre de 2010, amparos 204-2009 y 1113-2008, respectivamente–, de toda labor, trabajo o servicio remunerado surgen dos obligaciones principales: la prestación de un servicio y su retribución.

Esta última está constituida principalmente por: (i) el salario, siendo este el pago que efectúa el empleador por los servicios que recibe o que hubiera recibido de un trabajador desde el instante en que se encuentra a su disposición; (ii) las prestaciones sociales, las cuales son beneficios legales que el patrono debe pagar a sus trabajadores adicionalmente al salario ordinario, para atender necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral, y (iii) las prestaciones laborales, las cuales son los beneficios complementarios al salario que se otorgan a los trabajadores, siendo principalmente de carácter económico y derivadas de la relación laboral. En tal sentido, todo empleado tiene

derecho a una retribución (art. 38 de la Cn.) –al salario y a las prestaciones a que hubiera lugar– por la realización de un determinado trabajo o servicio."

OBLIGACIÓN DEL PATRONO O EMPLEADOR DE RETRIBUIR AL TRABAJADOR POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICE EN SU BENEFICIO

"B. Desde esa perspectiva, el patrono o empleador tiene la obligación fundamental, al entablar una relación laboral, de retribuir al trabajador por la prestación de servicios que realice en su beneficio; por consiguiente, la causa de la retribución está en la contraprestación efectiva o potencial de los aludidos servicios. Contrario sensu, no existirá obligación del patrono de dar al trabajador dicha retribución cuando esa contraprestación no exista, es decir, cuando aquel no haya desempeñado las funciones para las cuales fue nombrado o contratado."
Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 438-2017, fecha de la resolución: 17/12/2021

DERECHO A UNA RESOLUCIÓN CONGRUENTE

ALCANCE

"El derecho a una resolución congruente (art. 2 inc. 1° Cn.) implica que tanto los jueces y magistrados, al ejercer la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que les encomienda el art. 172 de la Cn., como las autoridades no jurisdiccionales, al resolver los casos concretos que son sometidos a su conocimiento mediante la aplicación del Derecho, tienen el deber de resolver de manera congruente con lo pedido por las partes en un determinado proceso o procedimiento.

B. En la sentencia de 25 de noviembre de 2011, amparo 150-2009, se sostuvo que una resolución es congruente cuando la decisión de fondo que contiene se sustenta en los hechos alegados y acreditados por las partes, así como en las peticiones que formularon.

Existe congruencia cuando las resoluciones otorgan respuesta a las pretensiones litigiosas que las partes sometieron en tiempo y forma a la cognición de las autoridades correspondientes. Lo anterior implica que, para determinar la congruencia de una resolución, debe compararse lo solicitado por las partes en sus respectivos escritos con lo decidido por las autoridades en sus resoluciones."

FORMAS DE VULNERAR EL DERECHO A UNA RESOLUCIÓN CONGRUENTE

"Consecuentemente, se vulnera el derecho a una resolución congruente cuando las autoridades: (0 otorgan más de lo pedido por las partes (supra petita); (ii) conceden menos de lo pedido (infra petita) o (iii) confieren una cosa distinta a lo solicitado por aquellas (extra petita).

b. “Sobre lo expuesto, se advierte que, contrario a lo manifestado por la sociedad demandante, la resolución emitida por la Sala de lo Civil es congruente con los elementos proporcionados por el FOSAFFI en su reclamo, lo cual llevó a la verificación de una circunstancia que volvía improponible la pretensión incoada en el proceso sumario 38-SM-07 respecto de una de las obligaciones. En ese sentido, se infiere que la autoridad demandada no se extralimitó en sus facultades al emitir la decisión ahora cuestionada, pues el análisis que esta contiene no se fundamentó en situaciones ajenas al proceso sometido a su conocimiento. De esto se colige que no se provocó vulneración de los derechos a una resolución de fondo, motivada y congruente y a la propiedad de la sociedad demandante. Por ello resulta procedente desestimar la pretensión planteada.”

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 61-2018, fecha de la resolución: 06/10/2021

DERECHO AL AGUA

RECONOCIMIENTO IMPLÍCITO EN LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES

“2. A. El derecho al agua se encuentra reconocido de forma implícita en las disposiciones constitucionales que contienen los derechos fundamentales a la vida, a la salud y al medio ambiente (arts. 2 inc. 1º, 65 inc. 1º y 117 de la Cn.). Al respecto, en la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2014, emitida en el amparo 513-2012, se afirmó que el acceso a ese recurso potencia un nivel de vida idóneo para el desarrollo de la persona humana y el respeto de su dignidad, por lo que constituye un elemento indispensable para la vida.

El ámbito de protección del citado derecho comprende, por un lado, el goce del líquido vital y, por otro, la preservación de los recursos naturales que lo contienen y/o coadyuvan con el perfecto equilibro de su ciclo, con el objeto de garantizar su suficiencia, salubridad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad para el uso personal y doméstico (Resolución nº 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptada en la 108ª sesión plenaria de fecha 28 de julio de 2010).”

TUTELA PUEDE SER REQUERIDA POR UNO O VARIOS INDIVIDUOS, O POR UNA COMUNIDAD CONTRA ACTUACIONES ATRIBUIDAS AL ESTADO O A LOS PARTICULARES

“B. En la citada sentencia, se estableció que la tutela del derecho al agua ante autoridad judicial –v.gr., cuando se trata de agua para el consumo humano– puede ser requerida por uno o varios individuos o por una comunidad, contra actuaciones atribuidas al Estado o a los particulares. Además, se afirmó que del referido derecho se deriva la obligación del Estado de implementar medidas, tareas y actuaciones orientadas a garantizar su plena efectividad.

De ahí que, como consecuencia del reconocimiento del citado derecho fundamental dentro de la Constitución, el Estado tiene el deber de: (i) respeto, asegurando que las actividades de sus instituciones, agencias y representantes no interfieran con el acceso de las personas al agua; (ii) protección frente a terceros, implementando medidas que impidan la contaminación y aseguren a la población el abastecimiento y la accesibilidad permanente al agua; y (iii) satisfacción, creando y desarrollando políticas que faciliten, promuevan y garanticen progresivamente el acceso de la población a agua potable segura y a instalaciones de saneamiento."

CRITERIOS MÍNIMOS QUE DEBE GARANTIZAR EL ESTADO PARA SU GOCE

"En ese sentido, corresponde al Estado garantizar que el goce del agua cumpla como mínimo con los siguientes criterios: (i) disponibilidad, referido a que el abastecimiento del vital líquido sea continúo y suficiente para el uso personal y doméstico, lo cual exige que la cantidad sea racional a efecto de satisfacer las necesidades básicas en general y responda a las propias de ciertas personas, en atención a su condición de salud, el clima en el que viven, la forma de trabajo, etc.; (ii) aceptabilidad, referido a las exigencias de salubridad, esto es, que el agua esté libre de microorganismos y sustancias químicas o de otra naturaleza que amenacen la salud de las personas y posea un olor, color y sabor aceptables para el uso personal y doméstico; y (iii) accesibilidad, que implica, por un lado, contar con la infraestructura e instalaciones adecuadas que permitan el servicio óptimo de agua potable y de saneamiento de aguas residuales y, por otro, eliminar las barreras físicas, económicas o de cualquier índole que impidan el acceso al agua –especialmente a personas de escasos recursos y a grupos históricamente marginados–, pues el goce del recurso debe ser factible y asequible material y económicamente para todos, sin discriminación alguna."

LIMITACIONES ECONÓMICAS NO DEBEN REPRESENTAR UN ÓBICE PARA ACCEDER AL GOCE DEL VITAL LÍQUIDO

"Con relación a la accesibilidad al referido recurso natural, este presupuesto o criterio hace alusión a la necesidad de brindar a las personas la posibilidad de obtener la prestación de los servicios de acueductos y alcantarillados sin discriminación de ninguna índole, por lo que sus limitaciones económicas no deben representar un óbice para acceder al goce del vital líquido considerado como esencial para su sobrevivencia. Desde esa perspectiva un costo excesivo del servicio de agua potable versus la capacidad económica de los habitantes puede generar una afectación al derecho al agua, por impedirse y obstaculizarse a las personas a acceder de manera asequible al vital líquido.

C. De lo expuesto se concluye que la Constitución reconoce el derecho fundamental al goce y a la preservación del agua e impone al Estado la obligación ineludible de adoptar todas las medidas necesarias para su conservación y protección. El derecho en cuestión encuentra su sentido más explícito en la exi-

gencia a los poderes públicos de que “toda persona” pueda disfrutar del recurso en cuestión de manera suficiente, asequible y aceptable para su uso personal y doméstico, pues este representa una de las condiciones esenciales que posibilita su existencia física digna y, con ello, el desarrollo pleno de su personalidad y sus potencialidades.”

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 298-2016, fecha de la resolución: 31/05/2021

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE

POSEE RANGO CONSTITUCIONAL

“1. A. De manera inicial, conviene mencionar que, respecto al derecho al medio ambiente se ha sostenido en la sentencia de 26 de enero de 2011, inconstitucionalidad 37-2004 y en sentencia de 15 de diciembre de 2014, amparo 513-2012, que desde el punto de vista subjetivo, este derecho se desglosa en las siguientes facultades: (i) el derecho al goce del medio ambiente, (ii) el derecho a que tal medio se preserve y (iii) el derecho a ser protegido frente a amenazas o lesiones a los dos derechos anteriores. El primero se refiere al contenido material del derecho en mención, mientras que los otros dos muestran la faceta preventiva y reaccional.

Siguiendo con la jurisprudencia de esta Sala, se ha sostenido –sentencias de 9 de diciembre de 2009 y 22 de junio de 2012, amparos 163-2007 y 188-2009– que el derecho a gozar de un medio ambiente sano efectivamente tiene rango constitucional y, en consecuencia, es obligación del Estado proteger a las personas en su conservación y defensa.

De esta manera, tal derecho se refiere a la obligación de preservar el medio ambiente, por, lo que sus titulares pueden exigir del Estado medidas suficientes de protección. Ello indica que el derecho en análisis presenta una vertiente prestacional que lo engloba en la estructura típica de los derechos sociales. Asimismo, presupone la actividad de los poderes públicos, mediante las instituciones creadas para alcanzar tal finalidad.

B. Ahora bien, en el caso presentado por el señor […] se plantea que las dificultades que ha tenido la administración municipal para prestar de forma normal los servicios de recolección de basura y disposición de desechos sólidos podrían afectar el derecho a la salud de la sociedad local.

Al respecto, es oportuno establecer que, de los argumentos expuestos por el referido alcalde, también se deduce la potencial conculcación del derecho al medio ambiente –tanto en cuanto a gozar de un medio ambiente sano, como a la preservación y protección del mismo– de las personas que habitan el referido municipio, por lo que así deberá entenderse dentro del presente proceso de amparo.”

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 569-2020, fecha de la resolución: 03/02/2021

DERECHO DE AUDIENCIA

CONCEPCIÓN

"V. 1. A. El derecho de audiencia, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala –v. gr., las sentencias de 11 de marzo de 2011 y 4 de febrero de 2011, amparos 10-2009 y 228-2007, respectivamente–, es un concepto amplio en virtud del cual se exige que toda persona, antes de limitársele o privársele de uno de sus derechos, debe ser oída y vencida dentro de un proceso o procedimiento tramitado de conformidad con las leyes.

En virtud de ello, existe vulneración al derecho de audiencia cuando el afectado no ha tenido la oportunidad real de pronunciarse en un caso concreto limitándosele o privándosele de un derecho sin la tramitación del correspondiente proceso o procedimiento o, igualmente, cuando habiéndose sustanciado este no se cumplen las formalidades esenciales, como por ejemplo la posibilidad de ejercer la defensa u oposición, así como la oportunidad de realizar actividad probatoria."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 230-2017, fecha de la resolución: 17/05/2021

EXIGENCIA

"IV. 1. En virtud del derecho de audiencia (art. 11 Cn.), de acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala –v. gr., las sentencias del 11 de marzo de 2011 y 4 de febrero de 2011, amparos 10-2009 y 228-2007, respectivamente–, se exige que toda persona, antes de limitársele o privársele de uno de sus derechos, sea oída y vencida dentro de un proceso o procedimiento tramitado de conformidad con las leyes. En virtud de ello, existe vulneración al derecho de audiencia cuando el afectado no tuvo la oportunidad real de pronunciarse en un caso concreto, limitándosele o privándosele de un derecho sin la tramitación del correspondiente juicio o cuando, habiéndose sustanciado un proceso, no se cumplieron dentro de él las formalidades procesales esenciales."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 273-2018, fecha de la resolución: 24/02/2021

POSIBILITA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS DE LOS QUE ES TITULAR LA PERSONA

"En la sentencia de 11 de febrero de 2011, amparo 415-2009, se sostuvo que el derecho de audiencia (art. 11 inc. 1° de la Cn.) posibilita la protección de los derechos subjetivos de los que es titular la persona, en el sentido de que las autoridades están obligadas a seguir, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia o, en su ausencia, en aplicación directa de la disposición constitucio-

nal citada, un proceso o procedimiento en el que se brinde a las partes la oportunidad de conocer las respectivas posturas y de contradecirlas, previo a que se provea un acto que cause un perjuicio en los derechos de alguna de ellas. Así, el derecho de defensa (art. 2 inc. 1° de la Cn.) está íntimamente vinculado con el derecho de audiencia, pues es dentro del proceso o procedimiento donde los intervinientes tienen la posibilidad de exponer sus razonamientos y de oponerse a su contraparte en forma plena y amplia.

Para que ello sea posible, es necesario hacer saber al sujeto contra quien se inicia dicho proceso la infracción que se le reprocha y facilitarle los medios necesarios para que ejerza su defensa. De ahí que existe conculcación de estos derechos por: (z) la inexistencia de un proceso en el que se tenga la oportunidad de conocer y de oponerse a lo que se reclama; o (ii) el incumplimiento de las formalidades esenciales estipuladas en las leyes que los desarrollan."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 218-2018, fecha de la resolución: 28/05/2021

DERECHO DE ENTRAR AL PAÍS O DERECHO AL RETORNO

ESTE DERECHO CUMPLE UNA FUNCIÓN ESPECIAL PARA GARANTIZAR LA UNIDAD Y PROTECCIÓN DE LA FAMILIA

"El derecho de entrar al país o derecho al retorno, como también se le denomina, puede ser ejercido por todas las personas de nacionalidad salvadoreña (art. 5 inc. 3º de la Cn. en relación con el art. 22.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), independientemente de las razones por las cuales se hayan trasladado a otro Estado, incluso si han permanecido fuera del país por períodos prolongados de tiempo. Por ejemplo, tanta relevancia reviste el ingreso de una persona salvadoreña que se ausentó por motivos de turismo o de negocios como el de quienes lo hicieron por motivos de reunificación familiar, laborales o incluso de persecución. Este último es el supuesto, por ejemplo, de los salvadoreños a quienes otros Estados han reconocido el estatuto de personas refugiadas, pues conservan el derecho de retornar a su país si así lo desean.

Este derecho cumple, además, una función especial para garantizar la unidad y protección de la familia. Conforme al interés superior del niño y la niña, al que alude el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, "[e]n todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". Su objetivo "es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño". Este interés superior debe ser entendido como un derecho, un principio y una norma de procedimiento que debe guiar la toma de decisiones de padres, tutores y autoridades públicas (administrativas, legislativas y judiciales) relativas a niñas, niños y adolescentes.

Para asegurar este interés superior, especialmente en contextos de movilidad, los Estados deben promover la unidad y protección de la familia. Precisamente, el art. 10.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño indica que "toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expedita. Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares". En consecuencia, aun en contextos de anormalidad, los Estados tienen un deber de atender con diligencia las solicitudes de ingreso de personas a sus territorios cuando estas tengan por finalidad la reunificación de la familia, máxime cuando en ella hay niñas, niños o adolescentes.

De igual manera, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que ha sido ratificada por El Salvador, prevé en su art. 8.2 que "[l]os trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a regresar en cualquier momento a su Estado de origen y permanecer en él". También, conforme al Derecho Internacional, las personas salvadoreñas que han abandonado el país y adquirido una situación migratoria irregular en otros Estados tienen derecho a un retorno seguro y digno a su país de origen, máxime cuando han sido deportadas."

DERECHO A PERMANECER EN EL TERRITORIO

"c. El derecho a permanecer en el territorio otorga a los nacionales la facultad de residir y establecer su domicilio al interior de las fronteras del Estado y, correlativamente, la prohibición de ser expulsados de este. Este derecho es una consecuencia propia del vínculo jurídico-político que un nacional tiene con el Estado. Y es que el arraigo en un espacio geográfico determinado obedece a una necesidad de índole antropológica, que obliga a las personas a establecer un punto fijo en sus vidas cotidianas que les ofrezca seguridad frente a la intemperie y que consideren su hogar. Ese punto fijo en las vidas de las personas es la residencia y, por la importancia que reviste para el desarrollo de los proyectos de vida de estas, el ordenamiento jurídico le otorga una protección especial mediante el reconocimiento del referido derecho fundamental.

Por ello, no tiene cabida la expulsión o deportación de nacionales hacia otros Estados. A ello se refiere el art. 5 inc. 3º de la Cn. cuando prescribe que "[n]o se podrá expatriar a ningún salvadoreño"; es decir, existe una prohibición de desarraigar arbitrariamente a una persona salvadoreña del territorio del Estado."

LA LIBERTAD DE SALIR DEL PAÍS ES UN DERECHO QUE ASISTE A TODA PERSONA, INDEPENDIENTEMENTE DE SI SE TRATA DE UN NACIONAL O DE UN EXTRANJERO

"d. Finalmente, la libertad de salir del país es un derecho que asiste a toda persona, independientemente de si se trata de un nacional o de un extranjero. No obstante, es preciso señalar que el ejercicio de este derecho también está

sujeto a excepciones. Además de las previstas en los arts. 29 y 30 de la Cn., puede ser limitado, por ejemplo, en virtud de una decisión judicial, cuando la permanencia de una persona en el territorio nacional sea necesaria para garantizar las resultas de un proceso o cuando ello sea necesario para el cumplimiento de ciertas obligaciones (art. 5 inc. 1º y 3º Cn.).”

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 167-2020, fecha de la resolución: 05/07/2021

DERECHO DE PETICIÓN

ALCANCE

“V. 1. En las sentencias de 5 de enero de 2009 y 14 de diciembre de 2007, amparos 668-2006 y 705-2006, respectivamente, se sostuvo que el derecho de petición (art. 18 Cn.) faculta a toda persona —natural o jurídica, nacional o extranjera— a dirigirse a las autoridades para formular una solicitud por escrito y de manera decorosa.

Correlativamente al ejercicio de ese derecho, se exige a los funcionarios que respondan a las solicitudes que se les planteen y que dicha contestación no se limite a dejar constancia de haberse recibido la petición. En ese sentido, la autoridad ante la cual se formule una petición debe responderla conforme a sus facultades legales y en forma motivada y congruente, haciéndole saber al interesado su contenido. Ello, vale aclarar, no significa que tal resolución deba ser favorable a lo pedido, sino solamente que se dé la correspondiente respuesta.

Además, las autoridades legalmente instituidas, que en algún momento sean requeridas para dar respuesta a determinado asunto, tienen la obligación de resolver lo solicitado en el plazo legal o, si este no existe, en uno que sea razonable.

2. Ahora bien, en la sentencia de 11 de marzo de 2011, amparo 780-2008, se aclaró que el mero incumplimiento de los plazos establecidos para proporcionar una respuesta al solicitante no es constitutivo de vulneración del derecho de petición; pero sí se vulnera cuando aquella se emite en un período mayor de lo previsible o tolerable, lo que lo vuelve irrazonable.”

CIRCUNSTANCIAS A TENER EN CUENTA PARA DETERMINAR LA RAZONABILIDAD DEL PLAZO PARA PROPORCIONAR LA RESPUESTA

“3. En virtud de lo anterior, para determinar la razonabilidad o no de la duración del plazo para proporcionar respuesta a lo solicitado por los interesados se requiere de una apreciación objetiva de las circunstancias del caso concreto, como pueden serlo: (i) la actitud de la autoridad requerida, debiendo determinarse si la dilación es producto de su inactividad por haber dejado transcurrir, sin justificación alguna, el tiempo sin emitir una respuesta o haber omitido adoptar medidas adecuadas para responder a lo solicitado; (ii) la complejidad fáctica y jurídica del asunto; y (iii) la actitud de las partes en el proceso o procedimiento respectivo.

4. Finalmente, en la sentencia de 15 de julio de 2011, amparo 78-2011, se afirmó que las peticiones pueden realizarse, desde una perspectiva material, sobre dos puntos: (i) un derecho subjetivo o interés legítimo del cual el peticionario es titular y pretende ejercer ante la autoridad; y (ii) un derecho subjetivo, interés legítimo o situación jurídica de la cual el solicitante no es titular, pero pretende su reconocimiento mediante la petición realizada."

VULNERACIÓN PORQUE LA AUTORIDAD DEMANDADA DEJÓ TRANSCURRIR IRRAZONABLEMENTE EL TIEMPO SIN RESPONDER EL REQUERIMIENTO PRESENTADO

"En definitiva, para garantizar el derecho de petición bastaba con que el titular de la DEPRT respondiera la solicitud que le planteó ASAP, EGC, en un término prudencial y que, con base en las reglas sobre espectáculos públicos, otorgara o denegara lo solicitado por dicha asociación.

Por consiguiente, se concluye que la falta de respuesta a la solicitud presentada por ASAP, EGC, se debió a la inactividad del titular de la DEPRT, quien sin causa justificada, dejó transcurrir irrazonablemente el tiempo sin responder al requerimiento de dicha asociación, vulnerando con ello su derecho de petición, por lo que es procedente ampararla en su pretensión.

VII. Determinada la transgresión constitucional derivada de la omisión de la autoridad demandada, corresponde establecer el efecto restitutorio de esta sentencia.

1. El art. 35 inc. 1° de la LPC establece que el efecto material de la sentencia de amparo consiste en ordenarle a las autoridades demandadas que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la vulneración constitucional. Pero, cuando dicho efecto ya no es posible, la sentencia de amparo será meramente declarativa, quedándole expedita al amparado la posibilidad de reclamar indemnización por los daños causados en contra de los funcionarios personalmente responsables. En todo caso, en la sentencia de 15 de febrero de 2013, amparo 51-2011, se aclaró que, aun cuando en una sentencia estimatoria el efecto material sea posible, el amparado siempre tendrá expedita la posibilidad de reclamar indemnización por los daños que le fueron causados, en aplicación directa del art. 245 de la Cn.

2. A. En el caso particular, la parte actora alegó en su demanda que el titular de la DEPRT no respondió la petición que le presentó el 9 de septiembre de 2015. Por su parte, la aludida autoridad aceptó en sus informes que no había dado respuesta a dicha solicitud. Por ello se determinó la existencia de una vulneración al derecho de petición de la asociación demandante. En consecuencia, el efecto restitutorio de la presente sentencia deberá entenderse en un sentido material y consistirá en ordenar al titular de la DEPRT que, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, responda la petición que le presentó la ASAP, EGC, el 9 de septiembre de 2015. Si dicha autoridad considera que esa nota carece de la claridad necesaria para responderla, podrá previamente solicitar a la aludida asociación las aclaraciones que considere necesarias.

B. Además, de acuerdo con lo preceptuado en los arts. 245 de la Cn. y 35 inc. de la LPC, la parte actora puede utilizar los mecanismos que el ordenamiento jurídico regula para reclamar indemnización por los daños materiales y/o morales que le pudo ocasionar la vulneración de derechos constitucionales declarada en esta sentencia directamente en contra de la o las personas responsables de la aludida vulneración. Sobre este punto, se aclara que la sentencia pronunciada en un proceso de amparo se limita a la declaratoria de si existe o no una vulneración de derechos constitucionales por parte de una autoridad y, en consecuencia, no tiene como objeto el establecimiento de responsabilidad personal alguna.

El art. 81 de la LPC es categórico al respecto cuando prescribe que sentencia definitiva [...] produce los efectos de cosa juzgada contra toda persona o funcionario, haya o no intervenido en el proceso, sólo en cuanto a que el acto reclamado es o no inconstitucional, o violatorio de preceptos constitucionales. Con todo, el contenido de la sentencia no constituye en sí declaración, reconocimiento o constitución de derechos privados subjetivos de los particulares o del Estado". Por ello, el presente fallo estimatorio no constituye un pronunciamiento respecto a la responsabilidad personal del o los funcionarios demandados, pues sobre ello se deben pronunciar las autoridades ordinarias competentes.

De ahí que, al exigir el resarcimiento de los daños directamente a la o las personas responsables —lo que es posible aun cuando ya no se encuentren en el ejercicio de sus cargos— tendrá que comprobarse en sede ordinaria que incurrieron en responsabilidad, por lo que se deberá demostrar: (i) que la vulneración constitucional ocasionada con su actuación dio lugar a la existencia de tales daños —morales o materiales—; y (ii) que dicha circunstancia se produjo con un determinado grado de responsabilidad —dolo o culpa—. Asimismo, deberá establecerse en dicho proceso, con base en las pruebas aportadas, el monto estimado de la liquidación que corresponda, dependiendo de la vulneración acontecida y del grado de responsabilidad en que se incurrió en el caso particular."

*Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 169-2016, fecha de la resolución:*07/06/2021

FACULTA A TODA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, NACIONAL O EXTRANJERA A DIRIGIRSE A LAS AUTORIDADES PARA FORMULAR UNA SOLICITUD POR ESCRITO, Y QUE ESTA SEA RESPONDIDA EN PLAZO RAZONABLE

"3. A. En las sentencias de 5 de enero de 2009 y 14 de diciembre de 2007, amparos 668-2006 y 705-2006, respectivamente, se sostuvo que el derecho de petición, consagrado en el art. 18 de la Cn., faculta a toda persona —natural o jurídica, nacional o extranjera— a dirigirse a las autoridades para formular una solicitud por escrito y de manera decorosa. Correlativamente al ejercicio de este derecho, se exige a los funcionarios que respondan a las solicitudes que se les planteen y que dicha contestación no se limite a dejar constancia de haberse

recibido la petición. En ese sentido, la autoridad ante la cual se formule una petición debe responderla conforme a sus facultades legales, en forma motivada y congruente, haciéndole saber a los interesados su contenido. Ello no significa que tal resolución deba ser favorable a lo pedido, sino solamente que se dé la correspondiente respuesta.

B. Además, las autoridades legalmente instituidas que en algún momento sean requeridas para dar respuesta a determinado asunto tienen la obligación de responder a lo solicitado en el plazo legal o, si este no existe, en uno que sea razonable. Ahora bien, en la sentencia de 11 de marzo de 2011, amparo 780-2008, se aclaró que el mero incumplimiento de los plazos establecidos para proporcionar una respuesta al solicitante no es constitutivo de vulneración del derecho de petición, pero sí se vulnera cuando la respuesta se emite en un periodo mayor de lo previsible o tolerable, lo que lo vuelve irrazonable."

PLAZO RAZONABLE PARA DAR RESPUESTA A LO SOLICITADO

"En virtud de lo anterior, para determinar la razonabilidad o no de la duración del plazo para proporcionar respuesta a lo solicitado por los interesados, se requiere de una apreciación objetiva de las circunstancias del caso concreto, como pueden serlo: (i) la actitud de la autoridad requerida, debiendo determinarse si la dilación es producto de su inactividad por haber dejado transcurrir, sin justificación alguna, el tiempo sin emitir una respuesta o haber omitido adoptar medidas adecuadas para responder a lo solicitado; (ii) la complejidad fáctica o jurídica del asunto; y (iii) la actitud del peticionario en el procedimiento respectivo."

FORMA DE REALIZAR LAS PETICIONES

"C. Finalmente, en la sentencia de 15 de julio de 2011, amparo 78-2011, se afirmó que las peticiones pueden realizarse, desde una perspectiva material, sobre dos puntos: (i) un derecho subjetivo o interés legítimo del cual el peticionario es titular y que pretende ejercer ante la autoridad; o (ii) un derecho subjetivo, interés legítimo o situación jurídica de la cual el solicitante no es titular, pero pretende su reconocimiento mediante la petición realizada. Entonces, para la plena configuración del agravio, en el caso del referido derecho fundamental, es indispensable que dentro del proceso el actor detalle cuál es el derecho, interés legítimo o situación jurídica material que ejerce o cuyo reconocimiento pretende."
Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 190-2016, fecha de la resolución: 23/06/2021

Relaciones:
Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 655-2017, fecha de la resolución: 23/06/2021

DERECHO DE PROPIEDAD

FACULTADES Y MODALIDADES

"V. 1. A. El derecho a la propiedad (art. 2 inc. 1º Cn.) faculta a una persona a: (i) usar libremente los bienes, que implica la potestad del propietario de servirse de la cosa y aprovechar los servicios que rinda; (ii) gozar libremente de los bienes, que se manifiesta en la posibilidad del dueño de recoger todos los productos que deriven de su explotación, y (iii) disponer libremente de los bienes, que se traduce en actos de enajenación respecto a la titularidad del bien.

B. En suma, las modalidades del derecho de propiedad, esto es, el libre uso, goce y disposición de los bienes, se ejercen sin otras limitaciones más que aquellas establecidas en la Constitución o la ley, como la función social.

C. Finalmente, cabe aclarar que, en virtud del derecho a la propiedad, no solo se tutela el dominio, sino también las reclamaciones que se basen en algún otro derecho real como la herencia, el usufructo, la habitación, la servidumbre, la prenda o la hipoteca.

2. A. Por otro lado, tal derecho se encuentra estrechamente relacionado con los tributos y, en razón de tal conexión, tanto los principios formales (reserva de ley y legalidad tributaria) como los principios materiales (capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscación) del Derecho Constitucional Tributario funcionan como garantías en sentido amplio de ese derecho. Por ello, la inobservancia o el irrespeto a alguno de esos principios puede ocasionar una intervención ilegítima en el citado derecho fundamental; consecuentemente, su vulneración puede perfectamente controlarse por la vía del proceso de amparo, tal como dispone el art. 247 inc. 1º de la Cn."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 203-2017, fecha de la resolución: 07/06/2021

Relaciones:

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 142-2017, fecha de la resolución: 29/01/2021

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

POR SU ESTRECHA VINCULACIÓN A UN SERVICIO PÚBLICO NO SE ENCUENTRA EXENTA DEL CONTROL DEL ESTADO

b. En la sentencia de 4 de junio de 2014, amparo 14-2011, se estableció que la distribución de energía eléctrica es una actividad que no precisa de una concesión, en el entendido de que para su ejercicio no se explotan directamente recursos naturales y que no es una actividad que se encuentra sujeta a titularidad estatal. Pese a ello, dicha actividad –por su estrecha vinculación a un servicio público– no se encuentra exenta del control del Estado.

En esta función de control surge la LGE, que en su art. 1 se erige como el cuerpo normativo encargado de regular las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, por lo que sus dis-

posiciones se aplican a todas las entidades que desarrollen las mencionadas actividades, independientemente de su naturaleza, grado de autonomía y régimen de constitución. Asimismo, el art. 3 de la LGE prescribe que es la SIGET la autoridad responsable del cumplimiento de dicho cuerpo normativo.

En ese mismo sentido, el art. 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que dicha entidad es la competente para aplicar las normas contenidas en los tratados internacionales sobre electricidad y telecomunicaciones vigentes en El Salvador, en las leyes que rigen los sectores de electricidad y de telecomunicaciones y en sus reglamentos, así como para conocer sobre el incumplimiento de tales normas. Además, el art. 5 de la citada ley regula las atribuciones de la SIGET, entre las cuales se encuentra la regulación, la vigilancia y el control del servicio de energía eléctrica, procurando una armonía entre los intereses estatales y de los operadores y usuarios finales.

B. a. En el presente caso, las autoridades demandadas consideran que los actos administrativos que emitieron se basaron en las potestades de control y regulación que el ordenamiento jurídico le ha conferido a la SIGET, las cuales, a su juicio, tienen fundamento en la LGE y su reglamento, en la Ley de Creación de la SIGET y su reglamento, en las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, en los Estándares para la Construcción de Líneas Aéreas de Distribución de Energía Eléctrica y el Manual de Especificaciones Técnicas de los Materiales y Equipos Utilizados para la Construcción de Líneas Aéreas de Distribución de Energía Eléctrica. En consecuencia, concluyen que la reubicación de la estructura exigida a la sociedad DELSUR, S.A. de C.V., implica el ejercicio de potestades que, en el campo de la regulación y control del suministro de energía eléctrica, le competen a la SIGET."

COMPETENCIA DE LA SIGET PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN ENTRE OPERADORES, ENTRE ESTOS Y LOS USUARIOS FINALES, Y ENTRE LOS OPERADORES Y LA UNIDAD DE TRANSACCIONES

"b. En toda actividad en la que concurren distintos intereses pueden surgir desacuerdos que requieren ser solventados por un ente ajeno al conflicto de manera imparcial y conforme a la Constitución y a la normativa aplicable. En el sector relacionado con el servicio de distribución de energía eléctrica pueden acontecer conflictos que requieren de una solución con el fin de lograr la continuidad de dicho servicio y la satisfacción de los intereses de los intervinientes. En razón de ello, tal como se deduce del contenido de los arts. 3 letra e) de la LGE y 5 letra d) de la Ley de Creación de la SIGET, el legislador atribuyó a la SIGET –entre otras– la competencia para resolver los conflictos que se susciten dentro de su ámbito de actuación.

En este caso, se ha comprobado que la SIGET concedió audiencia a los señores […] para que manifestaran si deseaban que su reclamo se tramitara de conformidad con: (i) el procedimiento de resolución de conflicto regulado en

el art. 84 y siguientes de LGE; o (ii) el PARRUFSEE. Los mencionados señores optaron por la segunda de las opciones, de lo cual tomó nota la SIGET en el acuerdo nº E-063-2017-CAU de 4 de abril de 2017.

Al respecto, es procedente señalar que el art. 84 de la LGE prescribe que la SIGET podrá, a solicitud de parte, resolver administrativamente los conflictos que se produzcan entre operadores, entre estos y los usuarios finales, y entre los operadores y la Unidad de Transacciones. El art. 4 letras l) y p) de la LGE definen como "operador" a cualquier entidad generadora, transmisora, distribuidora o comercializadora de energía eléctrica, y como "usuario final" a quien compra la energía eléctrica para uso propio. El art. 33 de la LGE establece que la Unidad de Transacciones tiene como finalidad operar el sistema de transmisión, mantener la seguridad del sistema y asegurar la calidad mínima de los servicios y suministros, y operar el mercado mayorista de energía eléctrica.

Por otro lado, el PARRUFSEE establece en su art. 13 que, a solicitud de los usuarios finales, la SIGET resolverá los reclamos, para lo que requerirá la información relacionada con el reclamo a la distribuidora y la analizará, en función de los antecedentes con que cuenta; si considera que posee los elementos de juicio necesarios, resolverá previo al procedimiento correspondiente, debiendo la distribuidora acatar lo resuelto en el plazo que la SIGET disponga. En relación con esto, el art. 1 del PARRUFSEE prescribe que por "reclamo" se entiende la queja que plantea el usuario final o grupo de usuarios finales ante (i) la distribuidora, (ii) la Dirección General de Protección al Consumidor o (iii) la SIGET, en la que se formule alguna discrepancia con cualquier aspecto en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica o inconformidad en la falta de respuesta, en tiempo y forma a los reclamos; asimismo, el art. 3 regula que el referido procedimiento se emite con el objeto de establecer el método que deben emplear las distribuidoras y la SIGET para atender los reclamos de los usuarios finales, así como para proveer información relativa a la prestación del servicio de energía eléctrica que prestan aquellas. Si bien el PARRUFSEE no define que se entiende por "usuario final" y por "distribuidora", para el primero es aplicable lo establecido en el art. 4 letra p) de la LGE ya mencionado y, para el segundo, lo prescrito en la letra f) de la misma disposición, que define como "distribuidor" a la entidad poseedora y operadora de instalaciones cuya finalidad es la entrega de energía eléctrica en redes de bajo voltaje, el cual también es un "operador" según el art. 4 letra l) de la LGE.

Ahora bien, ni la LGE ni el PARRUFSEE establecen de forma taxativa cuáles son los conflictos que la SIGET puede conocer y resolver; sin embargo, las disposiciones de la LGE dan parámetros para entender las materias que se encuentran comprendidas dentro de esa competencia. Así, por ejemplo, los arts. 95 y 96 de la LGE establecen que la SIGET puede resolver asuntos relacionados con la interconexión o conexión del servicio de energía eléctrica, y el art. 97 de la LGE hace alusión a asuntos relacionados con los cargos por el uso de los sistemas de transmisión y distribución o por los servicios de la Unidad de Transacciones.

De lo anterior es posible entender que el ordenamiento jurídico le ha conferido a la SIGET, como ente regulador estatal, la competencia para resolver los conflictos de carácter técnico relacionados con la prestación, el consumo o la

recepción del servicio de energía eléctrica que se susciten entre los operadores, los usuarios finales y la Unidad de Transacciones, pues son dichos sujetos los que se encuentran directamente involucrados en las actividades llevadas a cabo en relación con el aludido servicio.

Dicha afirmación es acorde a lo prescrito en el art. 2 de las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, el cual establece que esas normas están dirigidas a todas las personas, naturales o jurídicas, que tengan relación con el diseño, construcción, supervisión, operación y mantenimiento de las instalaciones de distribución de energía eléctrica, incluyendo sus mejoras, ampliaciones e instalaciones provisionales o temporales.

c. En el caso objeto de estudio, se advierte que la SIGET considera que tiene la competencia para solventar conflictos suscitados entre personas particulares y operadores del servicio de distribución de energía eléctrica por la instalación de infraestructuras ubicadas en bienes inmuebles propiedad de los primeros, pese a que el legislador únicamente le ha conferido la facultad para resolver los conflictos que: en primer lugar, acontezcan entre los operadores, entre estos y los usuarios finales, y entre los operadores y la Unidad de Transacciones; y, en segundo lugar, se encuentren directamente relacionados a aspectos técnicos de la prestación del servicio en cuestión. Esto, independientemente de que los reclamos se tramiten de conformidad con el procedimiento de resolución de conflicto regulado en el art. 84 y siguientes de LGE o con el establecido en el PARRUFSEE."

ANÁLISIS DEL DERECHO DE SERVIDUMBRE

"En ese sentido, contrario a lo sostenido por las autoridades demandadas en los actos administrativos impugnados en este proceso de amparo, no forma parte del catálogo de competencias atribuidas a la SIGET analizar si existe o no un derecho de servidumbre constituido e inscrito a favor de un operador del aludido servicio conforme a lo establecido en la Ley de Constitución de Servidumbres para las Obras de Electrificación Nacional, ya que, al tratarse de un gravamen que recae sobre un bien inmueble propiedad de un particular, la facultad de dirimir conflictos de esa naturaleza corresponde a los jueces con competencia en materia civil.

Y es que, si bien la junta de directores de la SIGET señaló en el acto controvertido que el caso sometido a su estudio vía apelación se refería a la operación y mantenimiento de líneas de distribución eléctrica, es decir, que no se trataba de la determinación de la existencia de un derecho de servidumbre, se observa que en el acuerdo emitido por la entonces titular de la SIGET se establece expresamente que, al no haberse comprobado la existencia del derecho de servidumbre –lo cual es una condición esencial para el desarrollo del servicio de energía eléctrica–, la remoción de la infraestructura eléctrica debía ejecutarse a partir del resultado de su instalación injustificada y sin amparo legal alguno. En otras palabras, la razón esgrimida para ordenar la remoción o reubicación de las líneas de distribución eléctrica sí se fundamentó en la determinación de un derecho real de servidumbre, lo que, como ya se mencionó, no le competía realizar.

Además, debe tenerse en cuenta que en las quejas referidas al derecho de servidumbre –como la realizada explícitamente por los señores […] ante el CAU de la SIGET– los reclamantes no intervienen como usuarios finales, que son aquellos que compran la energía eléctrica para uso propio y que, en razón de ello, entablan un conflicto contra un operador por alguna inconformidad en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. Por ende, ni el procedimiento de resolución de conflictos regulado en el art. 84 y siguientes de LGE ni el establecido en el PARRUFSEE son idóneos y válidos para resolver los reclamos basados en la supuesta instalación irregular de infraestructura eléctrica anta la ausencia de una servidumbre.

Si bien la SIGET es la entidad controladora del sector de energía eléctrica y la potestad normativa otorgada a esta comprende el establecer parámetros a los cuales se deben someter los sujetos que intervengan en ese sector, la potestad de vigilancia que el ordenamiento jurídico le confiere únicamente la faculta para controlar la aplicación de tales parámetros y, en caso de incumplimiento, para desplegar el régimen sancionatorio previsto en la Ley General de Electricidad –arts. 103 al 112-E– y en su reglamento –arts. 108 al 118– contra los infractores.

No obstante, es preciso aclarar que dentro de las sanciones que la SIGET puede imponer a los operadores por el incumplimiento de las obligaciones que el ordenamiento jurídico les asigna no se encuentra comprendida la de ordenar el retiro de infraestructuras ubicadas por aquellos en bienes inmuebles propiedad de particulares, por lo que una orden emitida en ese sentido excedería las competencias legales atribuidas a la SIGET.

En relación con ello, debe tenerse en cuenta que, si bien la importancia de la potestad sancionatoria se manifiesta en el hecho de que, si fuera vedada a la Administración, significaría dejarla sin una herramienta eficaz para hacer cumplir el ordenamiento jurídico y garantizar su preservación y restauración mediante la imposición de una sanción que no solo repruebe sino que también prevenga la realización de todas aquellas conductas contrarias a este (sentencia de 13 de febrero de 2015, inconstitucionalidad 21-2012), el ejercicio de este poder coercitivo se encuentra sujeto a diversos condicionamientos exigibles a cualquier actuación administrativa, entre los que interesa resaltar el principio de habilitación previa, según el cual, para intervenir negativamente en los derechos fundamentales de las personas, la Administración necesita de un respaldo normativo explícito conforme a la reserva de ley formal.”

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS A LA PROPIEDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA, POR INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, AL ORDENAR LA REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS ELÉCTRICAS UBICADAS EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PARTICULARES

“Así, a pesar de que la SIGET puede fungir como garante del derecho a la protección no jurisdiccional u otros derechos fundamentales –debido a que la labor de vigilancia del sector de electricidad encuentra sustento en los arts. 110 y 235 de la Cn.–, es imperativo resaltar que el art. 86 inc. 3º de la Cn. prescribe

que “[l]os funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, es decir, el principio de legalidad supone para los órganos estatales y entes públicos –al actuar por medio de los funcionarios públicos– una “vinculación positiva”, en el sentido de que solo pueden hacer aquello que la ley les permite, a diferencia de lo que sucede con las personas particulares, para quienes la ley, en virtud del derecho general de libertad –art. 8 de la Cn.–, implica una “vinculación negativa”, pues pueden hacer todo lo que no está prohibido (sentencia de 31 de julio de 2009, inconstitucionalidad 78-2006).

En ese sentido, dado que la orden de reubicación o remoción no se encuentra en el catálogo de acciones a tomar por parte de la SIGET y, además, de que implica una intervención negativa en los derechos fundamentales de las personas –v. gr., en el derecho de propiedad–, tal institución no cuenta con la competencia para adoptarla libre y llanamente en un procedimiento administrativo, ya sea como medida cautelar, como medida de ejecución o como sanción.

C. Finalmente, se advierte que las autoridades demandadas, por medio de sus apoderados, requirieron que se revisara el criterio jurisprudencial sostenido por esta Sala en la sentencia de 14 de febrero de 2018, amparo 74-2016. Y es que aquellas consideran que la orden de remoción no es una sanción adoptada en un procedimiento administrativo sancionador, que la SIGET funge como garante del derecho a la protección no jurisdiccional y que tiene la potestad de vigilar y de velar por el cumplimiento de las leyes de la materia.

En relación con dicha solicitud podría decirse, en principio, que tal precedente constitucional fue revisado y modificado en la resolución de 6 de diciembre de 2019, amparo 255-2017, por lo que no sería procedente realizar la revisión solicitada; sin embargo, en la presente sentencia se consideró que existían circunstancias válidas para modificar el criterio adoptado en el amparo 255-2017, razón por lo cual debía hacerse un examen de fondo de la cuestión planteada.

Así, al haberse adoptado en el presente caso un criterio similar al establecido en el citado amparo 74-2016, se advierte que dentro de los fundamentos jurídicos esgrimidos en esta sentencia se tratan los alegatos formulados por las autoridades demandadas, es decir, encuentran una respuesta a ellos, por lo que no es necesario realizar un pronunciamiento diferente, con miras a evitar la reiteración argumental.”

Vulneración por parte de las autoridades demandadas a los derechos a la propiedad y a la seguridad jurídica por infracción del principio de legalidad de la parte demandante al ordenarle la remoción de estructuras eléctricas ubicadas en bienes inmuebles propiedad de particulares

“3. En consecuencia, se concluye que la superintendenta general y la junta de directores de la SIGET vulneraron los derechos a la propiedad y a la seguridad jurídica –por infracción del principio de legalidad– de la sociedad DELSUR, S.A. de C. V., al ordenarle la remoción de estructuras eléctricas ubicadas en bienes inmuebles propiedad de particulares, pues esta es una competencia que el ordenamiento jurídico no les ha atribuido. Por ello, es procedente estimar la pretensión incoada y declarar que ha lugar el amparo solicitado por la aludida sociedad.”

"VII. Determinada la vulneración constitucional por parte de las autoridades demandadas, corresponde establecer el efecto restitutorio de esta sentencia.

1. El art. 35 inc. 1º de la LPC establece que el efecto material de la sentencia de amparo consiste en ordenarle a la autoridad demandada que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la vulneración constitucional. Pero, cuando dicho efecto ya no sea posible, la sentencia de amparo será meramente declarativa, quedándole expedita al amparado la promoción de un proceso en contra del funcionario personalmente responsable.

En efecto, de acuerdo con el art. 245 de la Cn., los funcionarios públicos que, como consecuencia de una actuación u omisión dolosa o culposa, hayan vulnerado derechos constitucionales deberán responder, con su patrimonio y de manera personal, de los daños materiales y/o morales ocasionados. En todo caso, en la sentencia de 15 de febrero 2013, amparo 51-2011, se aclaró que, aun cuando en una sentencia estimatoria el efecto material sea posible, el amparado siempre tendrá expedita la incoación del respectivo proceso de daños en contra del funcionario personalmente responsable, en aplicación directa del art. 245 de la Cn.

2. A. En el caso que nos ocupa, dado que se ha comprobado que las autoridades demandadas vulneraron los derechos a la propiedad y a la seguridad jurídica –por infracción al principio de legalidad–, como consecuencia de los acuerdos con ref. E-273-2017-CAU de 19 de diciembre de 2017 y 146-E-2018 de 25 de abril de 2018, el efecto restitutorio de esta sentencia de amparo se concretará en dejar sin efecto los aludidos actos administrativos, así como todas las actuaciones que se efectuaron con posterioridad a estos.

B. Además, en atención a los arts. 245 de la Cn. y 35 inc. 1º de la LPC, la sociedad actora tiene expedita la promoción de un proceso por los daños materiales y/o morales resultantes de la vulneración de derechos constitucionales constatada en esta sentencia directamente en contra de las personas que cometieron las referidas transgresiones constitucionales.

Ahora bien, al exigir el resarcimiento del daño directamente a las personas responsables, lo que es posible aun cuando ya no se encuentren en el ejercicio de los cargos, deberá comprobárseles en sede ordinaria que incurrieron en responsabilidad civil, por lo que en el proceso respectivo se tendrá que demostrar: (i) que la vulneración constitucional ocasionada por sus actuaciones dio lugar a la existencia de tales daños –morales o materiales–; y (ii) que dicha circunstancia se produjo con un determinado grado de responsabilidad –dolo o culpa–. Asimismo, deberá establecerse en dicho proceso, con base en las pruebas aportadas, el monto estimado de la liquidación que corresponda, dependiendo de la vulneración acontecida y del grado de responsabilidad en que se incurrió en el caso particular."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 262-2018, fecha de la resolución: 13/10/2021

ESTABILIDAD LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

RECONOCIMIENTO DEL DERECHO

"2. A. El reconocimiento del derecho a la estabilidad laboral (art. 219 inc. 2° de la Cn.) de los servidores públicos responde a dos necesidades: la primera, garantizar la continuidad de las funciones y actividades que ellos realizan en las instituciones públicas, debido a que sus servicios están orientados a satisfacer un interés general; y, la segunda, conceder al servidor un grado de seguridad que le permita realizar sus labores sin temor a que su situación jurídica se modifique fuera del marco constitucional y legal establecido.

El referido derecho, según las sentencias de 15 de julio de 2015, 15 de marzo de 2017 y 12 de mayo de 2017, amparos 642-2013, 200-2015 y 698-2015, respectivamente, entre otras, faculta a conservar un trabajo cuando concurran las condiciones siguientes: (i) que subsista el puesto de trabajo; (ii) que el empleado no pierda su capacidad física o mental para desempeñar el cargo; (iii) que las labores se desarrollen con eficiencia; (iv) que no se cometa falta grave que la ley considere causal de despido; (v) que subsista la institución para la cual se presta el servicio; y (vi) que el puesto no sea de aquellos cuyo desempeño requiere de confianza personal o política."

NO ES UN DERECHO ABSOLUTO NI DEBE ENTENDERSE COMO LA GARANTÍA DE UNA COMPLETA INAMOVILIDAD, PUES ESTE PUEDE CEDER ANTE EL INTERÉS GENERAL DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

"B. Ahora bien, en la sentencia de 8 de julio de 2015, amparo 328-2013, se sostuvo que el derecho a la estabilidad laboral de los empleados públicos no es absoluto ni debe entenderse como el derecho a una completa inamovilidad, pues puede ceder ante el interés general del mejoramiento de los servicios de la Administración Pública. En ese sentido, las instituciones públicas están facultadas constitucional y legalmente para adecuar su funcionamiento y estructura a las necesidades de los servicios que prestan, por lo que pueden crear, modificar, reorganizar y suprimir los cargos de su personal cuando las necesidades públicas o las limitaciones fiscales se lo impongan."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 190-2016, fecha de la resolución: 23/06/2021

ESTRUCTURA ELÉCTRICA UBICADA EN UN INMUEBLE PRIVADO

CIRCUNSTANCIAS VÁLIDAS PARA LA MODIFICACIÓN DE PRECEDENTES

"III. Antes de proceder al examen de fondo del presente caso, debe analizarse el criterio establecido en la resolución de 6 de diciembre de 2019, amparo 255-2017, justamente en cuanto al conocimiento de fondo de un asunto por

vulneración del derecho a la seguridad jurídica, en virtud de haberse reconocido a la SIGET competencia para ordenar la remoción de estructuras eléctricas de inmuebles propiedad de particulares.

1. A. En la citada resolución, se emitió un sobreseimiento por la presunta vulneración del derecho a la seguridad jurídica –en relación con la inobservancia del principio de legalidad–, de conformidad con el art. 31 nº 3 de la LPC, pues se advirtió que uno de los fundamentos del reclamo formulado era que la Sala de lo Contencioso Administrativo (SCA) reconoció a favor de la SIGET competencias que no le han sido atribuidas constitucional ni legalmente a partir de la interpretación de las leyes que regulan el funcionamiento de ese ente autónomo. En ese sentido, se concluyó que la sociedad actora del amparo 255-2017 pretendía que se examinara la interpretación que de la normativa secundaria realizó la SCA para arribar a la conclusión de que la SIGET tenía competencia para dirimir un conflicto entre dicha sociedad y una persona por la instalación de una estructura eléctrica ubicada en un inmueble privado.

Al respecto, se consideró que examinar la sentencia emitida por la SCA desde la perspectiva propuesta implicaría que se utilizara la regulación infraconstitucional como parámetro de control, lo cual desnaturalizaría el ámbito material de conocimiento que corresponde a esta Sala.

En consecuencia, se concluyó que el argumento externado por la sociedad demandante del amp. 255-2017, en lo referente a la vulneración de su derecho a la seguridad jurídica –en relación con el principio de legalidad–, se reducía a una supuesta interpretación errónea de preceptos legales por parte de la SCA, lo cual constituía un asunto de mera legalidad carente de fundamento constitucional.

B. Es pertinente señalar que se llegó a la conclusión mencionada luego de realizar una revisión del criterio establecido en la sentencia de 14 de febrero de 2018, amparo 74-2016, en la cual sí se conoció el fondo de la pretensión planteada. Esto implica que la resolución pronunciada en el amparo 255-2017 constituyó un cambio de criterio a partir del cual ya no se conocería el fondo de las pretensiones análogas a la alegada en tal caso –v. gr., resolución de 6 de marzo de 2020, amparo 228-2017–.

2. A. En la sentencia de 25 de agosto de 2010, inconstitucionalidad 1-2010, se estableció que, aunque el autoprecedente posibilita la precomprensión jurídica de la que parte toda interpretación, la vinculatoriedad de la jurisprudencia puede ceder en determinados supuestos. No obstante, para ello se exige que el apartamiento de los precedentes esté especialmente justificado.

Si bien todo precedente se construye con una pretensión de corrección, nunca puede tener efectos absolutos en el sentido de que sea tanto definitivo como válido para todos los tiempos. No es definitivo porque la amplia variedad y el continuo cambio de la realidad social ponen constantemente a los juzgadores ante nuevas situaciones. Incluso, la renovación de los juzgadores, a su vez representantes de diversas corrientes de pensamiento jurídico, posibilita la relectura de las disposiciones jurídicas y de los precedentes que las han aplicado conforme a las nuevas realidades. El precedente tampoco puede ser válido para todos los tiempos porque la interpretación debe ajustarse a los cambios que la realidad normada va presentando.

Además, se afirmó que se admite como circunstancias válidas para modificar un precedente o apartarse de él, entre otras: (i) que se esté en presencia de un pronunciamiento cuyo fundamento normativo es incompleto o contiene una interpretación errónea; (ii) un cambio en la conformación subjetiva del tribunal; y (iii) que haya variado sustancialmente la realidad normada.

B. En el presente caso concurren dos de los supuestos planteados: (i) un cambio en la conformación subjetiva de esta Sala y (ii) que el precedente contiene una errónea interpretación.

a. Respecto a lo primero, se advierte que el precedente data del 6 de diciembre de 2019, por lo que fue emitido por una conformación subjetiva distinta de esta Sala. Ante ello, debe tenerse en cuenta que un cambio en la conformación subjetiva del tribunal posibilita una relectura de los precedentes que han aplicado las disposiciones constitucionales.

b. En cuanto al segundo supuesto, la actual conformación subjetiva de esta Sala advierte que en el amparo 255-2017 se consideró que la sociedad peticionaria pretendía que se examinara la interpretación de la normativa secundaria que se realizó para arribar a la conclusión de que la SIGET tenía competencia para dirimir un conflicto entre dicha sociedad y un particular por la instalación de una estructura eléctrica en un inmueble de su propiedad. Así, se estableció que la interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en la legislación secundaria es una labor que le compete realizar a las autoridades ordinarias en el ejercicio de sus funciones y no a esta Sala, pues tal actividad implicaría la realización de un análisis infraconstitucional del asunto, que finalizaría señalándole a la autoridad demandada cuál es la normativa secundaria aplicable al caso sometido a su conocimiento o la forma en que debe interpretarla.

De ahí que es necesario determinar si en la citada resolución de 6 de diciembre de 2019, amparo 255-2017, hubo un error interpretativo al resolver la cuestión planteada.

C. a. La Sala de lo Constitucional puede, de manera excepcional, intervenir en conflictos relativos a la aplicación de normas de competencia administrativa y jurisdiccional. Esos casos excepcionales serían aquellos de arbitrariedad patente o irrazonabilidad manifiesta en la aplicación de las reglas de competencia, a tal grado de afectar la seguridad jurídica de las personas por la obstaculización para saber a qué reglas atenerse o por vaciar de sentido la garantía del juez natural.

b. En el mencionado precedente se estimó que, ante un debate razonable entre opciones interpretativas, ambas técnicamente posibles, la competencia decisiva era de la jurisdicción ordinaria, por lo que esta Sala debía abstenerse de intervenir en tales asuntos de mera legalidad.

Sin embargo, se advierte que se omitió tener en cuenta que, ante la supuesta afectación al principio de legalidad, se lesionaba la seguridad jurídica de la sociedad demandante, pues el debate oscilaba justamente en la posible irrazonabilidad en la aplicación de las reglas de competencia al determinarse que la SIGET tenía facultad para ordenarle a aquella la remoción o reubicación a su costo de las infraestructuras eléctricas instaladas en propiedad privada. Esto, en

definitiva, no se trata de un simple asunto de mera legalidad, ya que no se refiere a aspectos puramente judiciales o administrativos que no revelan una posible vulneración de derechos fundamentales; por el contrario, tal situación tiene un auténtico fundamento y trascendencia constitucional, por lo que no representa un óbice para examinar el fondo de la queja planteada."

CAMBIO DE CRITERIO JURISPRUDENCIAL

"D. Tomando en cuenta las razones esbozadas, se concluye que es preciso modificar el criterio que se sostuvo en la resolución de 6 de diciembre de 2019, amparo 255-2017, por haberse adoptado con base en una interpretación errónea de los motivos que posibilitan la terminación anormal del proceso, específicamente el relativo a los asuntos de mera legalidad. Por ello, a partir de esta decisión, los pronunciamientos que en el futuro se emitan sobre este tópico en casos análogos al presente deberán atender los parámetros desarrollados en esta resolución.

En razón de lo anterior, al no existir un impedimento para examinar el fondo de la queja planteada en este proceso de amparo, debe continuarse con su tramitación y pronunciarse la decisión definitiva que corresponda.

IV. Aclarado lo anterior, el objeto de la controversia puesta en conocimiento de esta Sala estriba en determinar si la entonces superintendenta general y la junta de directores de la SIGET, al emitir el acuerdo nº E-273-2017-CAU de 19 de diciembre de 2017, por medio del cual se ordenó a la sociedad demandante que reubicara a su costo las líneas de distribución eléctrica localizadas en un inmueble de propiedad privada, debido a que fueron instaladas sin el consentimiento y permiso legal correspondiente, y el acuerdo nº 146-E-2018 de 25 de abril de 2018, mediante el cual se confirmó el acuerdo con ref. E-273-2017-CAU, conculcaron los derechos a la propiedad y a la seguridad jurídica –por infracción al principio de legalidad– de la sociedad actora, en virtud de la supuesta falta de competencia de la SIGET para dirimir el conflicto suscitado entre los propietarios del inmueble y la referida sociedad.

2. A. a. En la sentencia de 20 de marzo de 2013, amparo 227-2010, se sostuvo que el art. 1 de la Cn. señala que el Estado se encuentra organizado para la consecución de determinados fines: la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Para cumplir con dicho cometido, la Administración Pública, en algunos supuestos, asume la responsabilidad de prestar por sí misma ciertas actividades de interés general. En otros casos, por el contrario, se reserva únicamente la potestad de regulación, control y vigilancia, con el fin de asegurar la adecuada prestación de un servicio cuya gestión es, en principio, libre para los particulares.

Por tal motivo, en el ámbito del Estado coexistan actividades o servicios de diversa índole con miras a obtener un sistema social, económico y jurídico estable, a saber: (i) funciones que le corresponde ejecutar al Estado de manera exclusiva –v. gr., la administración de justicia, la defensa nacional y la seguridad pública–; (ii) actividades que le corresponde realizar al Estado por haberse reservado su titularidad, pero que la normativa correspondiente habilita delegar su

gestión en los particulares –v. gr., la administración de puertos y explotación de las líneas y rutas de transporte público–, y (iii) actividades que no se encuentran sujetas a la titularidad estatal y que, por su misma condición, pueden ser realizadas por los particulares sin que medie delegación alguna, siempre que se cumpla con las condiciones legales preestablecidas –generalmente en estos casos la autoridad respectiva conserva la potestad de supervisión o fiscalización del servicio que realiza una persona natural o jurídica con el fin de facilitar y mejorar su gestión, v. gr., establecimiento de farmacias–.

Con el objeto de asegurar la continua y eficiente prestación de los servicios fundamentales para la colectividad, la Administración está facultada para delegar la gestión de las actividades que se ha reservado para sí en entes privados, por ejemplo, cuando no cuenta con la capacidad técnica y financiera para darle adecuada cobertura, salvo aquellos servicios cuya competencia le ha sido designada con exclusividad y los que son de libre gestión de los particulares."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 262-2018, fecha de la resolución: 13/10/2021

GARANTE HIPOTECARIO

ACTUACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA PROCESAL

"A. La sentencia en comentó retomó el criterio jurisprudencial establecido en la sentencia de 20 de enero de 2012, amparo 223-2009, en la cual, entre otros aspectos, se explicó que el garante hipotecario interviene en el proceso adhiriéndose a la posición del demandado. En ese sentido, su actuación, desde el punto de vista procesal, es equiparable a la de un tercero coadyuvante. Al respecto, los arts. 2177 y 2178 del Código Civil prevén la reconvención de pago a un sujeto, para que responda de la obligación ajena cuyo cumplimiento garantiza el inmueble del cual es propietario.

En el precedente constitucional aludido se hizo notar que existía la posibilidad real de que, en la práctica, al garante hipotecario se le vulnere su derecho a la propiedad. Por ese motivo, se dijo que era necesario precisar su intervención en el proceso ejecutivo. Esto se hizo interpretando las disposiciones del Código Civil citadas de una manera que se optimizara el derecho a la protección jurisdiccional (art. 2 Cn.) –del cual los derechos de audiencia y de defensa son manifestaciones–. En síntesis, se dijo que la actuación procesal del garante hipotecario no podía restringirse a la reconvención de pago. Por el contrario, debía reconocérsele la facultad de comparecer al proceso a ejercer la defensa de sus intereses; ello en razón de que es titular de un derecho conexo con la pretensión objeto del proceso.

En el amparo 223-2009 –precedente del amparo 314-2014 y del que ahora se está sentenciando– se precisó que las eventuales actuaciones del garante hipotecario en el proceso solo tendrán eficacia en la medida en que sean compatibles con el interés del demandado principal. Pues bien, se tiene que, cuando

el Juez Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador repuso el proceso hasta el momento previo a la admisión de la demanda y emplazó nuevamente a la sociedad Constructora Inmobiliaria, S.A., y al señor VMBT como demandados y reconvino de pago al señor JFBT como garante hipotecario –tal como se le había ordenado en el fallo del amparo 314-2014–, los demandados alegaron la excepción de prescripción. En ese sentido, la conducta procesal del señor JFBT de alegar la misma excepción era compatible con la actuación de los demandados.

Por lo anterior, a efecto de determinar qué conductas podía adoptar el garante hipotecario al ser reconvenido de pago, es totalmente irrelevante –contrario a lo sostenido por la cámara en su informe justificativo– que en primera instancia el curador ad litem no se haya opuesto a la ejecución, pues, en virtud de la sentencia de amparo, el proceso se había retrotraído a un momento previo.

En conclusión, entender –como hizo el tribunal de alzada– que, al reponerse el proceso mercantil, los demandados principales no debían ser emplazados nuevamente tornó totalmente ineficaz la sentencia dictada en el amparo 314-2014."

AUTORIDAD DEMANDADA, AL RESTRINGIR EN EXCESO LA INTERVENCIÓN DEL GARANTE HIPOTECARIO EN EL PROCESO, VULNERÓ LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA, COMO MANIFESTACIONES DEL DEBIDO PROCESO

"c. Por otro lado, en el apartado 3.14 de su decisión, el tribunal ad quem afirmó que "el garante hipotecario "no [era] parte demandada" y que, por ende, "no [podía] intervenir dentro del [proceso] alegando excepciones como la prescripción". También afirmó que, dado que el garante hipotecario no se había obligado personalmente, "no [podía] pretenderse que se le [resolviera] su contradicción ni la excepción planteada" (apartado 3.15).

Al igual que el argumento previo, este tampoco es coherente con la caracterización que del garante hipotecario se hizo en el amparo 223-2009 y que se retomó en el propio amparo 314-2014, en cuanto a que su intervención no puede restringirse al pago de la deuda ajena, sino que se le debe permitir comparecer al proceso a ejercer la defensa de sus intereses, estando pues facultado para efectuar todo tipo de actos procesales, siempre que sean compatibles con los del demandado. Y es que si el garante hipotecario es equiparable al tercero, aunque no sea demandado se le debe considerar legitimado, de acuerdo con los arts. 58 inc. 1º y 66 inc. 1º del Código Procesal Civil y Mercantil. Así, una de las conductas que válidamente podría adoptar el garante hipotecario es la de alegar excepciones. Y, en el presente caso, que los demandados habían alegado una excepción –de hecho, la misma: la de prescripción–, es indudable que la conducta del garante hipotecario era compatible con la de aquellos.

Además, llama la atención que la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, para respaldar su argumento, invocó la sentencia de 26 de enero de 2011, amparo 627-2008, en la cual efectivamente se sostuvo que la única intervención permisible del garante hipotecario era la del pago de la obligación ajena. Sin embargo, este criterio jurisprudencial fue superado precisamente en la sentencia de 20 de enero de 2012, amparo 223-2009. Pero, a pesar de que

este era el criterio vigente al momento en que la Cámara adoptó su decisión –el 22 de febrero de 2018–, esta no lo tuvo en cuenta (ni siquiera lo mencionó a pesar de que era el derecho aplicable) y, en su lugar, invocó el criterio anterior.

Puede concluirse, entonces, que la cámara demandada, al interpretar que el garante hipotecario solo podía comparecer a pagar la obligación ajena, mas no a alegar excepciones, también privó de eficacia al fallo del amparo 314-2014.

d. Habiéndose establecido que la decisión de la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro del 22 de febrero de 2018, al revocar la sentencia del Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador de 20 de julio de 2017, tornó ineficaz el efecto reparador de la sentencia que esta Sala emitió el 5 de octubre de 2016 en el amparo 314-2014, también es válido inferir que la resolución de la cámara demandada, al restringir en exceso la intervención del señor JFBT como garante hipotecario en el proceso, vulneró sus derechos de audiencia y de defensa –como manifestaciones del debido proceso–, en relación con el de propiedad. Por esta razón, deberá estimarse la pretensión planteada.

VI. Determinada la transgresión constitucional derivada de la actuación de la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, corresponde establecer el efecto de la presente sentencia.

1. El art. 35 inc. 1º de la LPC establece que el efecto material de la sentencia de amparo consiste en ordenarle a las autoridades demandadas que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la vulneración constitucional. Pero, cuando dicho efecto ya no es posible, la sentencia de amparo será meramente declarativa, quedándole expedita al amparado la posibilidad de reclamar indemnización por los daños causados en contra de los funcionarios personalmente responsables. En todo caso, en la sentencia de 15 de febrero de 2013, amparo 51-2011, se aclaró que, aun cuando en una sentencia estimatoria el efecto material sea posible, el amparado siempre tendrá expedita la posibilidad de reclamar indemnización por los daños que le fueron causados, en aplicación directa del art. 245 de la Cn.

2. A. En el presente caso, al haberse comprobado la vulneración a los derechos de audiencia y defensa, en relación con la propiedad, como consecuencia de la sentencia emitida por la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro el 22 de febrero de 2018, el efecto restitutorio de esta sentencia de amparo se concretará en dejar sin efecto la aludida resolución, así como todos los actos que se efectuaron con posterioridad a esa actuación. En consecuencia, la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro deberá emitir el pronunciamiento que corresponda de conformidad con los parámetros establecidos en esta sentencia.

B. Además, de acuerdo con lo preceptuado en los arts. 245 de la Cn. y 35 inc. 1º de la LPC, la parte actora puede utilizar los mecanismos que el ordenamiento jurídico regula para reclamar indemnización por los daños materiales y/o morales que le pudo ocasionar la vulneración de derechos constitucionales declarada en esta sentencia directamente en contra de la o las personas responsables de la aludida vulneración. Sobre este punto, se aclara que la sentencia pronunciada en un proceso de amparo se limita a la declaratoria de si existe o

no una vulneración de derechos constitucionales por parte de una autoridad y, en consecuencia, no tiene como objeto el establecimiento de responsabilidad personal alguna.

El art. 81 de la LPC es categórico al respecto cuando prescribe que "[l]a sentencia definitiva [...] produce los efectos de cosa juzgada contra toda persona o funcionario, haya o no intervenido en el proceso, sólo en cuanto a que el acto reclamado es o no inconstitucional, o violatorio de preceptos constitucionales. Con todo, el contenido de la sentencia no constituye en sí declaración, reconocimiento o constitución de derechos privados subjetivos de los particulares o del Estado". Por ello, el presente fallo estimatorio no constituye un pronunciamiento respecto a la responsabilidad personal del o los funcionarios demandados, pues sobre ello se deben pronunciar las autoridades ordinarias competentes.

De ahí que, al exigir el resarcimiento de los daños directamente a la o las personas responsables –lo que es posible aun cuando ya no se encuentren en el ejercicio de sus cargos– tendrá que comprobarse en sede ordinaria que incurrieron en responsabilidad, por lo que se deberá demostrar: (i) que la vulneración constitucional ocasionada con su actuación dio lugar a la existencia de tales daños –morales o materiales–; y (ii) que dicha circunstancia se produjo con un determinado grado de responsabilidad –dolo o culpa–. Asimismo, deberá establecerse en dicho proceso, con base en las pruebas aportadas, el monto estimado de la liquidación que corresponda, dependiendo de la vulneración acontecida y del grado de responsabilidad en que se incurrió en el caso particular."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 273-2018, fecha de la resolución: 24/02/2021

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA

NATURALEZA JURÍDICA DE LA SANCIÓN

"Ahora bien, el ejercicio de este poder coercitivo se encuentra sujeto a diversos condicionamientos exigibles a cualquier actuación administrativa, entre los que interesa resaltar el principio de habilitación previa, según el cual, para intervenir negativamente en los derechos fundamentales de los ciudadanos, la Administración necesita de un respaldo normativo explícito conforme a la reserva de ley formal; se excluye, entonces, toda posibilidad de que pueda imponer limitaciones a las libertades públicas sin norma legal que la ampare.

Teniendo en cuenta la normativa vigente al momento de los hechos y aplicada en este caso en las resoluciones controvertidas, se advierte que el art. 33 de la LT establecía el catálogo de infracciones graves, entre las que se encontraba la regulada en su letra e) consistente en: "Negarse a pagar a la SIGET los derechos correspondientes a la administración, gestión y vigilancia del espectro". Tal disposición se complementaba con lo prescrito en el art. 37 de la LT, el cual establecía las sanciones de la siguiente manera: "Las infracciones graves serán sancionadas con una multa de cien mil a doscientos mil colones por cada infracción, además de una multa de dos mil colones por cada día que la infracción continúe".

Dicho lo anterior, es pertinente hacer unas breves acotaciones sobré la infracción administrativa y la sanción administrativa. Al respecto, la SCA ha señalado, en cuanto a la primera, que por esta "... se ha entendido aquel comportamiento contraventor de lo dispuesto en una norma jurídica al que se apareja una sanción consistente en la privación de un bien o un derecho, y que no aparece calificado en el ordenamiento jurídico como delito o falta" (auto de 27 de febrero de 2013, proceso contencioso administrativo con ref. 240-2009). En relación con la segunda, la SCA ha establecido que: "... la naturaleza jurídica de la sanción nos indica que la misma es un acto de gravamen, un acto, por tanto, que disminuye o debilita la esfera jurídica de los particulares, bien sea mediante la privación de un derecho (prohibición de una determinada actividad, a la que la doctrina denomina sanción interdictiva), bien mediante la imposición de un deber antes inexistente (sanción pecunaria). Es decir, la sanción administrativa es un acto que implica punición por una actuación u omisión que la Administración determina como contraría a la ley" (auto de 27 de junio de 2013, proceso contencioso administrativo con ref. 366-2010).

Por su parte, esta Sala ha señalado que "la sanción administrativa se puede definir como un castigo impuesto por la administración pública. Lo interesante de este concepto es que permite deducir los elementos esenciales de las sanciones administrativas, a saber: (i) su imposición proviene de una autoridad administrativa; (ii) consisten en un perjuicio que se impone al sujeto que sufre la sanción; y (iii) imponen el perjuicio referido como castigo. Es así que, la sanción administrativa sólo puede imponerse si se comete una infracción administrativa" (sentencia del 20 de enero de 2009, inconstitucionalidad 84-2006).

En razón de lo expuesto, se observa que el legislador, en atención al principio de legalidad, cumplió con la obligación de definir previa, taxativa e inequívocamente las infracciones y las sanciones en las que incurriría quien cometiera alguna de las conductas prohibidas. El monto de tales sanciones, convertidas a dólares de los Estados Unidos de América, oscilaba entre US$11,428.57 y US$22,857.14."

LA FACULTAD DE LA SIGET SE LIMITA A ANUNCIAR SEMESTRALMENTE EL VALOR ACTUALIZADO DE LAS SANCIONES

"d. A pesar de lo anterior, debe tenerse en consideración que el art. 37 de la LT se veía afectado por lo regulado en el art. 40 de la misma ley, el cual establecía que: "El valor de las multas a las que se refieren los artículos 36, 37 y 38 de esta Ley, serán ajustadas con base al Índice de Precios al Consumidor publicado por el Ministerio de Economía. El ajuste se realizará semestralmente, a partir del primer día hábil de los meses de enero y julio. La SIGET anunciará semestralmente el valor actualizado de las sanciones".

Vale la pena señalar que el art. 40 de la LT en ningún momento prescribe que el ajuste de las multas deberá ser, por un lado, realizado por la SIGET y, por otro, efectuado en el RLT o en un acuerdo emitido por esa entidad. Y es que, según lo regulado por el legislador, la facultad de la SIGET se limita a anunciar semestralmente el valor actualizado de las sanciones.

No obstante, el art. 139 del RLT vigente al momento de los hechos prescribía que la SIGET aplicaría para la infracción grave establecida en el art. 33 letra e) de la LT una multa de US$33,139.60 dólares, la cual se encontraba ajustada conforme al Índice de Precios al Consumidor; además, señalaba que por cada día calendario en que la infracción continuara se aplicará una multa adicional de US$331.40 dólares. Esto de conformidad con los arts. 37 y 40 de la LT.

De lo anterior se observa que el art. 139 del RLT imponía como sanción una multa fija de US$33,139.60 dólares y una multa adicional de US$331.40 dólares por cada día en que continuara la infracción. La jurisprudencia de esta Sala ha admitido, a propósito de este punto, la posibilidad de crear multas fijas en determinados supuestos (auto de 30 de marzo de 2016, inconstitucionalidad 110-2015), pero en este caso interesa centrarse en lo siguiente: el monto de las multas reguladas en la citada disposición reglamentaria era superior al margen señalado en el art. 37 de la LT. Y es que, como ya se dijo, la LT determinaba que las infracciones graves serían sancionadas con multa entre ¢100,000.00 —US$11428.57— y ¢200,000.00 —US$22857.14— colones, más ¢2,000.00 colones — US$228.57—; pero el reglamento prescribía las multas fijas, convertidas a colones, correspondientes a ¢289,971.50 y ¢2,899.75, respectivamente.

Lo anterior lleva a concluir que, en el presente caso, las multas fijas establecidas por el art. 139 del RLT no buscaban facilitar y asegurar la aplicación de la ley, sino la creación de contenidos sin cobertura legal y que, además, entran en contradicción con los preceptos de la ley, específicamente el art. 37 de la LT."

CUANDO SE DECIDE SANCIONAR UNA CONDUCTA U OMISIÓN DETERMINADA SE ENTIENDE QUE SUBYACE LA IDEA DE PRIVACIÓN O LIMITACIÓN A UN DERECHO FUNDAMENTAL

"Asimismo, cuando se decide sancionar una conducta u omisión determinada se entiende que subyace la idea de privación o limitación a un derecho fundamental. En consecuencia, la ley en sentido formal tendrá lugar cuando sean objeto de las correspondientes normas sancionadoras los derechos fundamentales, de manera que una sanción entendida como medida privativa del ejercicio de un derecho procederá en los casos previstos y tipificados en normas preestablecidas emanadas por la Asamblea Legislativa y únicamente en la cuantía y extensión previstas por esta.

En este caso, la LT ha definido esencialmente las conductas objeto de infracciones administrativas y las sanciones a imponer, pero el RLT, por medio de su art. 139, establece sanciones que superan los márgenes legales establecidos y que involucran una medida restrictiva para los derechos fundamentales —en particular, el de propiedad—, lo que implica que se encuentra en contradicción directa con la ley.

En ese sentido, dado que una materia vedada a los reglamentos es la limitación o restricción de los derechos fundamentales —lo cual es producto de la interpretación del art. 246 de la Cn., en el que existe, por un lado, una habilitación para que la "regulación de elementos que no impliquen necesariamente restric-

ción o limitación de derechos sea efectuada por cualquier disposición infraconstitucional y, por otro, una reserva para que la limitación o restricción al ejercicio de los derechos sea normada únicamente por la ley en sentido formal—, se concluye que el art. 139 del RLT ha vulnerado la reserva de ley y, con ello, el derecho a la propiedad de la sociedad Constructora Universal, S.A. de C. V., al haber sido aplicado por la SIGET en las resoluciones T-1427-2011, T-1460-2001 y T-1461-2011, emitidas en los procedimientos sancionatorios, así como en la resolución T-T-0810-2012, en la que se requirió el pago de las multas impuestas; por lo tanto, deberá estimarse este punto de la pretensión en contra de los mencionados actos administrativos."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 218-2018, fecha de la resolución: 28/05/2021

INTERÉS COLECTIVO

SE IDENTIFICAN CON LOS MIEMBROS DE UN GRUPO DETERMINADO

"En el caso del interés colectivo, el sujeto al que aparecen imputados los bienes a los que el interés se refiere es individualizado o individualizable, en la medida en que aparece relacionado con colectividades de carácter permanente y vinculadas a la consecución de los fines que las caracterizan. Es decir, los intereses colectivos se identifican con los miembros de un grupo determinado, unidos por un vínculo jurídico, es decir, atañen al individuo en tanto que forma parte del grupo."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 97-2019, fecha de la resolución: 08/11/2021

INTERÉS DIFUSO

ELEMENTO OBJETIVO Y ELEMENTO SUBJETIVO

"En cambio, la conformación de un interés difuso se puede describir de la forma siguiente: ante el elemento objetivo de la presencia de una necesidad y la falta de medios para satisfacerla, surge el elemento subjetivo de la desprotección o afectación común que impulsa a los sujetos a utilizar los instrumentos para ser protegidos en la conservación y defensa del referido interés. Es posible que tal necesidad sea de naturaleza categorial, territorial o, incluso, estatutaria –v. gr., medio ambiente, derechos de los consumidores, patrimonio cultural o aquellas situaciones que interesan o pueden interesar a los sujetos que compartan esta difusión del vínculo legitimante al integrarse en una asociación de personas–."

CARACTERÍSTICAS

"El interés difuso, por tanto, se caracteriza por los matices del título que lo concede, es decir, el modo en que se manifiesta subjetivamente. Y es que, respecto de los intereses difusos no es posible predicar una titularidad exclusiva y excluyente, como adjudicación de derechos ajenos. Obviamente, los intereses difusos no tienen titular, sino que se participa en ellos. La titularidad, como la preexistencia de una situación o acto jurídico que otorga un título sobre el objeto de interés, no es importante en el caso de los intereses difusos. Lo importante es la relación o vínculo flexible con el bien o valor objeto de interés, relación que viene determinada por la pertenencia a la colectividad o comunidad en general. Los intereses difusos, por el contrario, no se refieren a colectividades delimitables, sino a grupos o colectividades que se encuentran en un estado fluido de contornos poco nítidos."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 97-2019, fecha de la resolución: 08/11/2021

INTERESES DIFUSOS Y COLECTIVOS

DIFERENCIA

"2. Al respecto, es menester recordar que en lo atinente a la legitimación activa para presentar un reclamo en nombre de una colectividad, esta Sala ha determinado –en sentencia de 4 de marzo de 2011, amparo 934-2007– que permitir exclusivamente una pretensión procesal basada en un interés directo y una afectación personal a los derechos subjetivos, podría constituir una limitación demasiado estricta a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional, en tanto que existen vínculos entre los sujetos y el objeto de decisión que son igualmente merecedores de protección, aunque no formen parte de la esfera particular de los individuos a título de derecho –intereses colectivos y difusos–.

Ahora bien, la distinción entre intereses difusos y colectivos –sentencia de 11 de marzo de 2015, amparo 400-2011– atiende al grado de individualización de los sujetos a los que el interés se refiere.

Cuando se refiera a grupos o colectividades de contornos indeterminados o no identificados, estaremos ante un interés difuso. En cambio, en lo concerniente a los intereses colectivos, el sujeto al que aparecen atribuidos los bienes a los que el interés se refiere es individualizado o individualizable, ya que está relacionado con colectividades de carácter permanente y con la consecución de los fines que las caracterizan; es decir, los intereses colectivos se identifican con aquellos de un grupo determinado, por lo que atañen al individuo en tanto parte de un grupo.

3. De esta forma, resulta procedente autorizar la intervención de los licenciados [...] y [...] tanto en carácter de apoderados de la sociedad Trípode, S.A.

de C.V., como en defensa de los intereses colectivos de los profesionales de la comunicación que desempeñan sus labores en el periódico digital y de las personas que aportan al mismo."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 393-2020, fecha de la resolución: 05/03/2021

LIBERTAD DE CIRCULACIÓN

ALCANCE

"IV. 1. A. En la sentencia de 25 de septiembre de 2013, amparo 545-2010, se caracterizó el derecho a la libertad de circulación (art. 5 Cn.) como la facultad de toda persona de moverse libremente en el espacio, sin más limitaciones que aquellas impuestas por las condiciones del medio en el que pretende actuar. Por ello, las notas características de este derecho son la acción de movilizarse, el ámbito físico en el que pretende desplazarse y la inexistencia de obstáculos que dificulten su tránsito de un sitio a otro.

Así, se estará en presencia de una vulneración del derecho a la libertad de circulación cuando se dificulte o impida de manera injustificada a una persona el libre desplazamiento de un sitio a otro. En estos supuestos, a diferencia de los que se deben tipificar como vulneraciones del derecho a la libertad personal, no ocurre una reclusión, encierro o apartamiento físico del individuo.

En la sentencia de 8 de junio de 2020, inconstitucionalidad 21-2020, se indicó que la libertad de circulación es un presupuesto para el ejercicio de otros derechos fundamentales, cuyo desarrollo supone el reconocimiento de un derecho de movimiento que garantiza la independencia física del individuo. En el mismo sentido se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos, al señalar que el aludido derecho es "una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona"

CONTENIDO

"B. a. El contenido de la libertad de circulación es complejo, pues comprende distintas manifestaciones. Para su pleno goce se requiere del Estado mucho más que una mera abstención, pues debe asumir acciones positivas y garantías contra restricciones o privaciones arbitrarias por parte de autoridades públicas y de particulares. Además, está sujeta a diversos condicionantes según el ámbito espacial o el contexto en el que la persona pretenda desplazarse. De acuerdo al ámbito espacial es preciso distinguir la libertad de circular en el territorio de un Estado concreto de la que tiene lugar en el ámbito internacional y que implica el cruce de fronteras. Es preciso señalar que este derecho puede tener alcances muy diversos conforme a la calidad de nacional o no de la persona que pretenda ejercerlo. Según el contexto en el que la persona pretenda ejercer este derecho es necesario distinguir la regla que tiene lugar en contextos de normalidad –de

estabilidad política, orden público y ausencia de desastres naturales o de situaciones que pongan en peligro la salud de los habitantes, por ejemplo– de la excepción que puede tener lugar, conforme a la Constitución, en contextos que justifican la suspensión de este derecho (arts. 29 y 30 Cn.).”

ES PRECISO DISTINGUIR EL ALCANCE DE LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN AL INTERIOR DE LAS FRONTERAS DEL ESTADO, DEL QUE TIENE LUGAR EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

“b. Como se indicó, es preciso distinguir el alcance de la libertad de circulación al interior de las fronteras del Estado del que tiene lugar en el ámbito internacional. En este último supuesto el ejercicio de la libertad de circulación está sujeto a ciertas condiciones derivadas del ejercicio de soberanía por los Estados, que les permite, en primer lugar, ejercer control sobre sus fronteras marítimas, aéreas y terrestres y someter la admisión de personas extranjeras al cumplimiento de ciertos requisitos conforme a los acuerdos existentes con los Estados de los que estas son originarias –por ejemplo, visas o exenciones de estas– y a otras situaciones que pueden justificar restricciones temporales para el ingreso de personas extranjeras sin vínculos con el Estado receptor, y, en segundo lugar, ejercer control con fines de prevención, por ejemplo, por razones sanitarias.

Precisamente, las constituciones y los tratados de derechos humanos reconocen un margen a los Estados para establecer ciertas restricciones a la circulación de personas no nacionales en sus territorios. Como señalan Rodrigo Uprimny Yepes y Luz María Sánchez Duque, “por razones de soberanía, ciertos derechos humanos admiten restricciones vinculadas a la nacionalidad de las personas, lo cual demuestra que los derechos humanos, a pesar de reconocerse teóricamente como universales, siguen parcialmente enmarcados en el paradigma westfaliano de un sistema internacional en donde coexisten Estados soberanos, con lo cual el goce efectivo de los derechos humanos sigue siendo desigual y asimétrico, pues depende en gran parte de la nacionalidad de la persona”. Esta cuestión no deja de ser paradójica si se toma en cuenta que, en un mundo cada vez más globalizado, en el que las mercancías circulan con mayor libertad gracias a acuerdos de libre comercio y de procesos de integración regional, los Estados continúan estableciendo restricciones –algunos en mayor medida que otros– a la circulación de personas.”

MANIFESTACIONES DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN

“C. Según el ámbito espacial podemos distinguir: (i) la libertad de circular libremente en el territorio del Estado, (ii) la libertad de entrar al territorio del Estado, (iii) la libertad de permanecer en el territorio y, correlativamente, la prohibición de expulsión de personas salvadoreñas, y (iv) la libertad de salir del país.

Estas manifestaciones del derecho también son reconocidas en diversos tratados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ratificados por El Salvador, los cuales, además, establecen correlativas obligaciones para el Esta-

do, cuyo incumplimiento incluso podría generarle responsabilidad internacional. Así, por ejemplo, el art. 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte tiene derecho a circular por el mismo y residir en él con sujeción a la ley; a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio; a no ser expulsado del Estado del que es nacional y a no ser privado arbitrariamente del derecho a ingresar a él.

De igual manera, el referido derecho está reconocido en algunas declaraciones suscritas por el Estado que, si bien tienen una naturaleza distinta a la de los tratados, han alcanzado un alto nivel de consenso en la comunidad internacional en torno a sus efectos morales y políticos e incluso en la construcción de derecho consuetudinario, una de las principales fuentes del Derecho Internacional (art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia). Ello ocurre, por ejemplo, con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que reconoce en su art. 8 que "[t]oda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad"; y con la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuyo art. 13 se reconoce el derecho de toda persona de circular libremente y de elegir su residencia en el territorio de un Estado, de salir de cualquier país, incluso del propio, y de regresar a este; también reconoce el derecho de toda persona a no ser "desterrada" (art. 9)."

LIMITACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES

"a. Como regla general, toda persona tiene libertad de circular libremente en el territorio del Estado, salvo las limitaciones que la Constitución y la ley establezcan. Como se indicó en la citada inconstitucionalidad 21-2020, la principal manifestación de la libertad de circulación es la libre elección que tiene el individuo de transitar en los lugares que desee y cuyo uso se encuentre a su disposición. Las restricciones constitucionales y legales a este derecho pueden ser de diversa índole. Así, por ejemplo: (i) solo se protege la libre circulación en espacios físicos de dominio y uso público, lo que excluye del ámbito de protección de esta libertad la circulación en propiedades privadas de terceros o en determinadas zonas que sean de responsabilidad y uso exclusivo del Estado; (ii) la protección de la seguridad y la salud; (iii) por orden de autoridad judicial emitida de acuerdo con la ley, para tutelar derechos o bienes jurídicamente relevantes. Las anteriores restricciones pueden abarcar la de aquellos medios de transporte terrestre, marítimo o acuático que sirvan para tal fin y la de las vías que estos medios de transporte utilizan (por ejemplo, el cierre de una carretera, un puerto o un aeropuerto).

b. El art. 5 de la Cn. se refiere en dos ocasiones a la libertad de entrar al territorio. Lo hace en su inciso 1º: "[t]oda persona tiene libertad de entrar [...] en el territorio de la República [...], salvo las limitaciones que la ley establezca"; y en el 3º: [n]o se podrá [...] prohib[ir] [a ningún salvadoreño] la entrada [a]l territorio de la República". Esta precisión es importante por diversas razones. En un pri-

mer momento la Constitución reconoce a toda persona el derecho de entrar al territorio del Estado, sujeto a las limitaciones que la ley establezca. Esto debe ser interpretado en conexión con el art. 97 inc. 1º de la Cn., que dispone: "[l]as leyes establecerán los casos y la forma en que podrá negarse al extranjero la entrada o la permanencia en el territorio nacional". En un segundo momento prohíbe que se impida a las personas salvadoreñas –sin hacer distinción entre quienes hayan adquirido la nacionalidad por nacimiento y quienes lo hayan hecho por naturalización– entrar al territorio; y también prohíbe que se niegue a estas la emisión de pasaportes u otros documentos de identificación para garantizar su regreso.

Entonces, existe un tratamiento distinto a las personas extranjeras y las nacionales, pues respecto de estas últimas se reconoce una suerte de protección reforzada para garantizarles el ingreso a su país. Ahora bien, como se indicará más adelante, las personas extranjeras también gozan, conforme a la Constitución y al Derecho Internacional, de cierta protección que debe serles garantizada.

El Comité de Derechos Humanos, en la observación general citada, señaló que "[e]l derecho de toda persona a entrar en su propio país reconoce los especiales vínculos de una persona con ese país. Este derecho tiene varias facetas. Supone el derecho a permanecer en el propio país. No faculta solamente a regresar después de haber salido del país, sino que también puede permitir a la persona entrar por primera vez en el país si ha nacido fuera de él (por ejemplo si ese país es el Estado de la nacionalidad de la persona)". Esta interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos realizada por el Comité de Derechos Humanos es especialmente relevante porque conlleva de manera correlativa una obligación para el Estado de admitir en su territorio a personas que, si bien no nacieron en él, cuentan con la nacionalidad salvadoreña por derecho de sangre (ius sanguinis). Ello incluso se encuentra previsto en el art. 24 de la Ley Especial de Migración y de Extranjería, según el cual "[l]a hija o hijo de madre o padre salvadoreño nacido en el extranjero cuyo nacimiento no ha sido inscrito en el país, podrá ingresar en calidad de salvadoreño, al territorio nacional presentando documento auténtico o público que acredite la nacionalidad salvadoreña de los padres y la filiación"."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 167-2020, fecha de la resolución: 05/07/2021

LIBERTAD DE INFORMACIÓN

CONEXIÓN CON LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA

"III. Ahora bien, es pertinente, en atención al principio iura novit curia –el Derecho es conocido para el Tribunal– y al art. 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), realizar ciertas consideraciones referidas a los términos en que ha sido planteada la queja en relación con la presunta afectación constitucional.

1. De forma inicial, es menester referirse a que la libertad de información se ha adscrito por vía de interpretación constitucional a la disposición que estatuye la libertad de expresión –art. 6 inc. 1º Cn.–.

Ahora bien, esta Sala ha puntualizado –sentencia de 24 de septiembre de 2010, inconstitucionalidad 91-2007– que dichas libertades, a pesar de su estrecha conexión, deben ser entendidas como derechos autónomos, ya que protegen mensajes de distinta naturaleza: mientras que la libertad de expresión tutela mensajes en buena medida subjetivos, la libertad de información tutela mensajes principalmente factuales.

2. A. Por otra parte, este Tribunal ha sostenido –por ejemplo, en sentencia de 11 de marzo de 2015, amparo 749-2014– que el derecho a la autodeterminación informativa –que se colige del art. 2 inc. 1º de la Cn.– tiene por objeto preservar la información de las personas que se encuentra en registros públicos o privados frente a su utilización arbitraria. Desde esa perspectiva, el ámbito de protección del aludido derecho no puede entenderse limitado a determinado tipo de datos –v. gr., los sensibles o íntimos–, pues lo decisivo para fijar su objeto es la utilidad y el tipo de procesamiento que de la información personal se quiere hacer.

En tal orden, a efecto de establecer si existe una vulneración del derecho a la autodeterminación informativa, se deberá analizar, por una parte, la finalidad que se persigue con la recepción, el procesamiento, el almacenamiento, la transmisión y/o la presentación de la información personal de que se trate –con independencia de sus características y de su naturaleza– y, por otra parte, los mecanismos de control que con relación a dichas actividades de tratamiento de datos se prevén."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 393-2020, fecha de la resolución: 05/03/2021

MEDIDAS CAUTELARES

ADOPCIÓN ES PARA EVITAR QUE SE PRODUZCA UNA LESIÓN A LOS DERECHOS INVOCADOS, DERIVADA DE LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PUNTUALES QUE SE HAN IMPUGNADO

"V. Establecidos los términos de la admisión de la demanda, corresponde examinar la posibilidad de decretar una medida cautelar.

Con relación a ello, es necesario destacar que, para la adopción de una medida cautelar, deben concurrir al menos dos presupuestos básicos, a saber: la probable existencia de un derecho amenazado -fumus boni iuris- y el daño que ocasionaría el desarrollo temporal del proceso -periculum in mora-.

En el presente caso, se ha alegado la existencia de un riesgo a los derechos fundamentales de la sociedad actora, de los periodistas que ejercen –o han ejercido dentro de los periodos relevantes– sus labores en el medio de comunicación y de las personas particulares que aportan al mismo.

Al respecto, se ha planteado que la documentación e información identificada –libros de actas de la Junta Directiva de la sociedad, informes entregados a cooperantes internacionales y datos personales sobre los suscriptores del medio– carecería de relevancia tributaria y su obtención no se encontraría dirigida a conocer la situación económica de la sociedad –como contribuyente– sino a identificar aspectos propios de la labor periodística del medio, así como los datos personales sus suscriptores.

En tal sentido, se advierte que existe apariencia de buen derecho en virtud, por una parte, de la invocación de una presunta afectación de los derechos constitucionales de los actores y, por otra, del planteamiento de circunstancias fácticas y jurídicas –en los términos ya expuestos- en las que se hace descansar aquella.

Por otro lado, se puede observar un efectivo peligro en la demora, tomando en especial consideración que el presente caso se ha presentado bajo la modalidad del "amparo preventivo" -pues la finalidad o pretensión es evitar que se produzca una lesión a los derechos invocados, derivada de los requerimientos administrativos puntuales que se han impugnado-.

Ahora bien, es necesario considerar que la posición de la DGII –particularmente reflejada en las resoluciones de requerimientos identificadas por los apoderados de la sociedad actora– consiste en que la información cuestionada sí tiene relevancia tributaria, por lo que, de acuerdo con su postura, dicha documentación debe obtenerse a fin de continuar con los procedimientos administrativos de fiscalización.

De esta manera, es notable que la contraposición de perspectivas entre la sociedad peticionaria y la administración demandada –en relación con las diligencias específicas y la relevancia tributaria de la información– hace necesario, en atención a la seguridad jurídica que debe observarse en toda actuación pública, que los referidos requerimientos de documentación e información se suspendan temporalmente mientras dure la tramitación de este proceso de amparo –ello para evitar daños irreparables en la esfera jurídica de los interesados y que, ante un eventual sentencia, independientemente sea favorable o desfavorable a la pretensión de la parte actora, la fiscalización de tales aspectos continúe sin que exista certeza jurídica sobre la validez constitucional y la finalidad de la exhibición o revelación de la información cuestionada–.

En razón de lo anterior, resulta procedente adoptar una medida cautelar en este proceso y, en consecuencia, suspéndense inmediata y provisionalmente los efectos de las actuaciones reclamadas en el sentido de que las autoridades demandadas deberán abstenerse de continuar con los requerimientos de la documentación e información que ha sido sometida a controversia por la sociedad Trípode, S.A. de C.V. –los libros de actas de la Junta Directiva de la sociedad, los informes o reportes finales que se entregan a los cooperantes internacionales y los detalles sobre los suscriptores que realizan aportaciones periódicas– y que fue solicitada mediante el punto número 18 de cada una de las resoluciones con referencias 10025-NEX-0671-2020, 10025-NEX-0672-2020, 10025-NEX-0673-2020 y 10025-NEX-0674-2020; la letra "h" del punto número 1 y el punto número

5 de la resolución 10025-NEX-1221-2020; así como, la letra "i" del punto número 1 y el punto número 4 de la resolución 10025-NEX-1222-2020. Lo anterior mientras se mantenga la verosimilitud de las circunstancias fácticas y jurídicas apreciadas para la adopción de tal medida.

Dicha suspensión cautelar no es óbice para que la administración pública tributaria continúe con los procedimientos de fiscalización iniciados respecto de la sociedad actora y que pueda realizar requerimientos de documentación e información diferentes a las cuestionadas en este proceso constitucional."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 393-2020, fecha de la resolución: 05/03/2021

MOTIVACIÓN DE RESOLUCIONES

FINALIDAD DE LA FUNDAMENTACIÓN

"IV. 1. A. Se ha sostenido en abundante jurisprudencia —v. gr. en la sentencia de 30 de abril de 2010, amparo 308-2008— que el derecho a una resolución motivada no persigue el cumplimiento de un mero formalismo, sino potenciar el derecho a la protección jurisdiccional, pues permite a las personas conocer las razones que llevaron a las autoridades a decidir de determinada manera una situación jurídica concreta.

Precisamente, por la finalidad de la fundamentación —la exteriorización de las razones que llevan a la autoridad a resolver en un determinado sentido—, su cumplimiento reviste especial importancia. En virtud de ello, en todo tipo de resolución se exige una argumentación fáctica y normativamente aceptable, pero no es necesario que sea extensa o exageradamente detallada; lo que se exige es que sea concreta y clara, pues, si no es así, las partes no podrían controlar el sometimiento de las autoridades al Derecho a través de los medios de impugnación correspondientes."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 61-2018, fecha de la resolución: 06/10/2021

Relaciones:

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 170-2017, fecha de la resolución: 29/01/2021

MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL Y NO JURISDICCIONAL

"IV. 1. En reiteradas ocasiones se ha sostenido —v, gr., en las sentencias de 31 de julio de 2017 y 12 de agosto de 2002, amparos 780-2014 y 604-2001, respectivamente— que una de las manifestaciones del derecho a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional es el derecho a una resolución motivada. Este derecho obliga al tribunal o a la entidad administrativa de que se trate, indepen-

dientemente del grado de conocimiento o instancia en la que se encuentre el asunto controvertido, a exponer y explicar de manera clara y suficiente los motivos en los que fundamenta su decisión, pues ello permite a las personas conocer las razones que llevaron a las autoridades a decidir de determinada manera una situación jurídica concreta."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 142-2017, fecha de la resolución: 29/01/2021

NULIDADES

LOS RECURSOS DE REVOCATORIA QUE SEAN INTERPUESTOS EN CONTRA DE LOS AUTOS MEDIANTE LOS CUALES SE HAYA RESUELTO ALGÚN INCIDENTE DE NULIDAD, SERÁN TRAMITADOS POR ESTA SALA

"B. En efecto, este tribunal ha constado que la petición del abogado […] cumple los requisitos de impugnabilidad subjetiva, pues este representa a la parte que podría haberse visto favorecida por las decisiones cuya nulidad se declaró en la resolución impugnada. Asimismo, se advierte que su solicitud ha sido presentada dentro del término legal correspondiente. De igual manera, como lo expone el recurrente, este tribunal advierte que de lo regulado en el art. 212 en relación con el art. 503 del CPCM, se colige que la decisión por él impugnada está dentro de aquellas contra las cuales procede el recurso de revocatoria, en tanto que se trata de una decisión que resolvió un incidente de nulidad y no implicó la decisión del fondo de lo controvertido en el presente amparo.

Por otra parte, la jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que el fundamento de los recursos se cifra en el reconocimiento de la falibilidad humana y en la conveniencia de que el propio juez o tribunal pueda reconsiderar y rectificar una decisión antes de que se convierta en firme –sentencia de 12 de diciembre de 2010, inconstitucionalidad 40-2009–. En consecuencia, los recursos de revocatoria que sean interpuestos en contra de los autos mediante los cuales se haya resuelto algún incidente de nulidad serán tramitados por esta Sala, siempre y cuando estos cumplan las condiciones formales establecidas para su interposición, tales como la presentación en el plazo establecido para ello. Esto implica que, al haberse verificado el cumplimiento de las condiciones formales establecidas para su interposición, deberá admitirse y tramitarse el recurso interpuesto por abogado […].

2. Sostiene que no existe nulidad sobre nulidad, por lo que se vulnera la legalidad procesal y el derecho a la protección jurisdiccional.

A. Al respecto, alegó que no existe la posibilidad de conocer de una nulidad sobre lo resuelto en otro incidente de nulidad, pues, a su criterio, lo que correspondía interponer era el recurso de revocatoria y no una nulidad, porque el art. 237 inc. 4º del CPCM establece que cuando se desestima una nulidad "se podrá introducir nuevamente por medio de los recursos que existieren contra la resolución definitiva", por lo que las vías recursivas absorben la alegación de nulidad

que ha sido desestimada y era esa la vía que debía intentarse. Pero como la Sala no conoció el incidente mediante dicho recurso, sino que conoció la nulidad de una decisión emitida en un incidente previo de nulidad, ha infringido el principio de protección jurisdiccional en la manifestación de proceso constitucionalmente configurado, por infringir el principio de legalidad procesal, por lo que se ha vencido al banco en un proceso que no desarrolló de acuerdo a las leyes.

B. a. Ahora bien, advierte este tribunal que el supuesto alegado por el actor se relaciona con un incidente de nulidad que se ha sustanciado durante la tramitación del proceso, pero antes de que se emita la resolución definitiva de este. Ello no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, pues la actuación impugnada tuvo lugar en la fase de ejecución de la sentencia, de manera que la resolución definitiva del asunto ya se había emitido. Además, el art. 237 del CPCM alude a las nulidades subsanables, pues estas tienen un momento procesal específico para plantearse, no así las nulidades insubsanables, que, según el art. 235 del CPCM, pueden ser declaradas de oficio en cualquier estado del proceso, lo que incluye un proceso en el que se haya dictado una nulidad previa.

Por otra parte, es preciso recordarle al recurrente la reiterada jurisprudencia de esta sala en la que se menciona la particularidad que reviste el Derecho Procesal Constitucional, debido a que "las reglas vigentes que estructuran a los procesos cuyo conocimiento le corresponde a los tribunales ordinarios no pueden ser lisa y llanamente transferidas a los procesos constitucionales". Así, aunque "el Derecho Procesal Constitucional es un caso especial del género Derecho Procesal, aquella disciplina se resiste a recibir los principios y los desarrollos procedimentales concretos de los procesos no constitucionales, sin examinarlos a partir de los criterios materiales del Derecho Constitucional y sin valorar adecuadamente aquella posición constitucional del Tribunal y las funciones que este desarrolla a propósito de los trámites constitucionales". Consecuentemente, no cualquier disposición jurídica establecida en el CPCM es aplicable a los procesos constitucionales, sino solo aquellas que, por una parte, se adecuen a las especialidades que definen a estos y, por otra, sean indispensables para una eficaz gestión de ellos. Por ende, no es viable "soslayar la capacidad de innovación y autonomía procesal que a esta Sala le confieren tanto la posición que la Constitución de la República le atribuye como las funciones que desarrolla a propósito de los procesos constitucionales, situación que le permite crear reglas procesales para dotar de eficacia a la gestión llevada a cabo en tales procedimientos –protección de los derechos fundamentales–" (verbigracia, autos de 14 de abril de 2013, 2 de mayo de 2016 y 24 de marzo de 2017, amparos 94-2011, 436-2017 y 404-2016, respectivamente).

b. En cuanto a la alegación de que el proceso no se desarrolló de acuerdo con las leyes, por lo que su representado no fue vencido de conformidad a un proceso legal, es preciso señalar que durante la tramitación del presente amparo, la parte actora ha tenido todas las oportunidades de audiencia y defensa contempladas en la legislación aplicable, es decir, las distintas etapas del presente amparo se desarrollaron con estricto apego al marco normativo correspondiente. La irregularidad advertida por esta sala ocurrió en la fase de ejecución de la

sentencia, en la que ya habían concluido las oportunidades regulares de intervención. E incluso en dicha fase, las partes tuvieron la oportunidad de intervenir para defender su posición procesal, y este tribunal tomó en consideración sus argumentos.

Entonces, se insiste, visto que las circunstancias que han originado las nulidades declaradas en la resolución impugnada ocurrieron durante la fase de ejecución de la sentencia del presente amparo, puede sostenerse que el proceso sí se desarrolló de conformidad con las reglas respectivas, derivadas de la normativa procesal y de los criterios jurisprudenciales aplicables, pero como se expuso claramente en la resolución recurrida, durante la fase de ejecución de la sentencia se verificaron actuaciones sin precedentes, que, por ocurrir en un proceso de amparo, precisamente durante su fase de ejecución, no podían sanearse haciendo una aplicación automática de las reglas generales del proceso común.

En ese sentido, aun si se admitiera que la regla invocada por el recurrente es aplicable a las nulidades insubsanables –supuesto que ya se descartó–, también deberá considerarse que el "diseño y lógica del sistema procesal general" alegado por el recurrente no es aplicable automáticamente al proceso de amparo, y mucho menos cuando median circunstancias extraordinarias como las ocurridas en la fase de ejecución del presente proceso."

EXCEPCIONALES CONDICIONES QUE DEBEN CONCURRIR PARA QUE PUEDA EXAMINARSE UNA NULIDAD ORIGINADA EN UNA NULIDAD PREVIA

"c. Respecto al argumento de que esta sala pretende iniciar "una condenable línea jurisprudencial" que niega el principio y el derecho a la seguridad jurídica, ya que al crear la figura de la nulidad sobre la nulidad, impide que el asunto debatido se cierre, y autoriza que se presenten y decidan alegaciones acumuladas de nulidad, sin límite, advierte este tribunal que el impetrante soslaya lo expuesto en la decisión impugnada, en la que la sala estableció las excepcionales condiciones que deben concurrir para que pueda examinarse una nulidad originada en una nulidad previa, a saber: (i) que se trate de una resolución emitida en la fase de ejecución de un proceso de amparo; (ii) que lo alegado implique vulneraciones constitucionales manifiestas, perpetradas mediante una actividad irregular de la misma Sala de lo Constitucional, con palmario e injustificado apartamiento del modo de proceder en ese caso, y que sean esas decisiones que las incidan en los derechos fundamentales de alguna de las partes; (iii) que se trate de una actuación de naturaleza procesal, y no una disconformidad con las valoraciones de derecho efectuadas por este mismo tribunal; (iv) que oportunamente se hayan utilizado las vías jurídicas disponibles para hacer cesar la vulneración constitucional.

Las anteriores condiciones no han ocurrido en ningún otro proceso de amparo, por lo que empíricamente no es viable afirmar que se esté autorizando la posibilidad de alegaciones de nulidad sin límite, haciendo imposible cerrar los debates dirimidos en estos procesos.

Por otra parte, como también se indicó en la resolución recurrida, no toda certeza puede denominarse "seguridad jurídica", porque, como ahí se señaló, tal precepto constitucional no implica certeza y permanencia de cualquier situación, sino que "supone asegurar posiciones con un cariz de juridicidad, y para ello, es imprescindible que se trate de actuaciones surgidas de conformidad con las normas vigentes al momento en que se realizaron. El derecho garantiza aquello producido de conformidad con los mandatos imperantes en el momento concreto. Entonces, en observancia de la seguridad jurídica no han de preservarse intangibles actuaciones irregulares, únicamente porque han tenido algún grado de permanencia en el tiempo".

C. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala no encuentra argumentos que muestren el yerro de los postulados anteriores, siendo procedente confirmarlos y descartar la supuesta vulneración alegada por el abogado […].

3. En otro orden, el recurrente argumenta que se han vulnerado el principio de legalidad procesal y el derecho a la protección jurisdiccional, porque se incumplió el requisito de impugnabilidad temporal, por haberse admitido una impugnación fuera de plazo.

A. a. Primeramente, alega que el plazo para interponer el recurso de revocatoria, que es el medio impugnativo que considera procedente, "venció para QUIMAGRO el miércoles 25 de julio de 2020", pero trascurrió dicho término sin que se interpusiera el recurso, por lo que precluyó el plazo para impugnar y adquirió firmeza la resolución de 13 de julio de 2018.

b. Al respecto, este tribunal ya expresó las razones por las que considera que sí era procedente plantear una nulidad respecto de la citada resolución, por lo que resulta inoficioso pronunciarse sobre este asunto, debiendo limitarse a declarar sin lugar lo alegado en este apartado.

B. a. Asimismo, sostiene que, aun si se admitiera que la precitada resolución era impugnable mediante una nueva nulidad, de conformidad con los arts. 236 y 237 del CPCM, el plazo para denunciarla vencía el 27 de julio de 2018, pero venció dicho plazo sin que se alegara la nulidad, por lo que precluyó el plazo para hacerlo y la resolución de 13 de julio de 2018 adquirió firmeza. Consecuentemente, opera el principio de preclusión.

Añade que en el presente caso no puede alegarse la existencia de una nulidad insubsanable, porque no existe alguna norma que lo califique así expresamente, siendo este el requisito previsto en el art. 235 del CPCM. Pero en este caso se trata de una infracción al derecho de defensa, que solo afectaría al interesado, por lo que se trataría de una nulidad subsanable que fue saneada por QUIMAGRO, al convalidar el acto procesal.

b. Como puede advertirse, la objeción del recurrente parte del supuesto de que las nulidades declaradas por este tribunal eran subsanables, por lo que podían ser convalidadas por el afectado. Tal convalidación podía ser expresa o tácita. Hay convalidación tácita si se deja pasar el término legal para denunciar dicha nulidad. Entonces operará el principio de preclusión y todo lo actuado en el proceso adquiriría firmeza, siendo imposible su posterior análisis.

Sin embargo, es preciso advertir que nada de ello opera respecto de las nulidades insubsanables, pues estas pueden plantearse en cualquier momento, e incluso pueden declararse de oficio. Entonces, lo medular para zanjar la inconformidad alegada en este punto radica en determinar explícitamente el tipo de nulidad involucrada.

Así, advierte este tribunal que, en efecto, como lo señala el recurrente, en la resolución recurrida no se estableció expresamente qué tipo de nulidad estaba involucrada, y tampoco se expusieron las razones que se consideraron para arribar a una u otra conclusión. Por tanto, resulta necesario efectuar a continuación algunas consideraciones normativas y doctrinarias acerca de las nulidades, con las cuales se explicitará el tipo de nulidad declarada en la resolución impugnada."

INEXISTENCIA DE NULIDADES TÁCITAS O IMPLÍCITAS

"C. a. Es preciso indicar que la nulidad se caracteriza por ser una sanción que implica privar de efectos propios al acto que resulta invalidado. Además, una cualidad esencial de la nulidad es que solo puede ser establecida por la ley, y no por el juzgador. Es decir, la única fuente de nulidad es la ley, que es también la fuente que determina la competencia de toda autoridad, incluidas las judiciales. Entonces, se descarta la existencia de nulidades tácitas o implícitas.

De lo anterior se derivan dos consecuencias: la primera, que solo puede declararse la nulidad por los motivos señalados por el legislador. La segunda, que no puede evadirse la declaratoria de nulidad cuando concurran las circunstancias que se sancionan con dicho efecto. Es decir, el juzgador no puede crear un motivo de nulidad, pero tampoco puede ignorarle cuando acaece el supuesto legal de ella. Y es que la razón de la nulidad es que un acto carezca de algún requisito o cualidad que, conforme a la ley, debía estar presente para que tal acto reuniera las condiciones jurídicamente exigibles. Por tanto, se trata de un vicio originario, consustancial al acto de que se trata. No implica causas externas al acto ni un efecto sobrevenido, sino que se presenta en el nacimiento mismo de este, por lo que no ha de desplegar efectos jurídicos. Entonces, con el nacimiento del acto nulo o anulable, además de infringir una norma jurídica particular, se vulnera el interés que la norma pretende tutelar. Y de ahí que sea necesario enmendar las infracciones sufridas por los titulares de los derechos conculcados, privando de sus efectos a la actuación concernida."

LA NULIDAD DEBE DECLARARSE, PUES LA INDEFENSIÓN ES EL MAYOR VICIO QUE PUEDE OCURRIR EN UN PROCESO

"b. Ahora bien, para determinar si se está ante una nulidad, y de estarlo, de qué tipo de nulidad se trata, es preciso considerar que un excesivo formalismo no conduce a nada en concreto ni se favorece ninguna garantía, y los efectos pueden ser contrarios a los fines que se pretende obtener. Sin embargo, ello no es así cuando se viola el derecho de defensa. En este supuesto, la nulidad debe declararse, pues la indefensión es el mayor vicio que puede ocurrir en un proce-

so. Ahora bien, para que ese estado de indefensión provoque una nulidad, debe estar acompañado por una irregularidad dentro del proceso, es decir, debe darse junto con el apartamiento de alguna de las formas establecidas en el proceso legalmente configurado."

PRINCIPIO DE ESPECIFICIDAD O DE LEGALIDAD EN MATERIA DE NULIDADES

"c. Por otra parte, se reitera que para entrar a conocer sobre la posibilidad de que exista una nulidad, ha de satisfacerse previamente el principio primordial dentro del régimen de las nulidades: el principio de especificidad o de legalidad. Así, podrá apreciarse la existencia de una nulidad únicamente cuando la ley le dé esa sanción a la irregularidad cometida en el proceso. Como derivación de tal principio, también es necesario que sea la ley la que defina el tipo nulidad que se produce, es decir, la intensidad de los efectos que provoca el acaecimiento de la actuación irregular.

En ese sentido, el principio de especificidad en materia de nulidades exige que se proceda con sumo cuidado, y que se aplique una nulidad exclusivamente en los casos en que resulte estrictamente necesario. Por tanto, el juez debe actuar en calidad de árbitro, a fin de impedir que los litigantes utilicen maliciosamente este remedio procesal, pues una declaratoria de nulidad es una medida grave, que ha de tomarse únicamente cuando sea el único mecanismo viable para restablecer el derecho de defensa que se ha conculcado.

Ahora bien, la crucial trascendencia del principio de especificidad no debe conducir a una interpretación que burle la propia finalidad de la ley al instaurar el régimen de las nulidades. En ese orden, el principio de especificidad no puede aplicarse a rajatabla, puesto que al tener el inconveniente de no poderse prever, por su magnitud, todas las situaciones que pueden presentarse, es menester dejar un cierto margen a las autoridades judiciales para cubrir los vacíos del sistema.

Por tanto, la taxatividad con que debe interpretarse el principio de especificidad no puede dejar fuera el reconocimiento de nulidades que, sin haber sido calificadas expresamente como tales, en esencia lo son, porque así lo determina el propio legislador. Es decir, en algunos casos concretos es posible equiparar a las nulidades expresas, aquellas derivadas de disposiciones imperativas. Por ejemplo, cuando el juzgador se encuentra con expresiones como "deberá declararse nulo", "no será permitido" o "no se podrá", está autorizado para declarar la nulidad, a pesar de que la actuación contraria a la ley no se encuentre expresamente consagrada como una nulidad insubsanable.

En razón de ello, si el legislador establece que la nulidad deberá declararse respecto de ciertos casos, el juzgador debe interpretar que está obligado a declarar esa nulidad. Entonces, aunque esa nulidad no se califique como insubsanable, la imperatividad para declararla le da esa característica, pese a que el precepto no haya calificado expresamente como nulidad al específico acto irregular y violatorio. Y tal proceder no implica el soslayo del principio de especificidad sino que tiene a la base el sometimiento a lo regulado por la ley y

el cumplimiento del fin mismo de las nulidades procesales, que, se reitera, es la preservación de los derechos y principios fundamentales, y prioritariamente el derecho de defensa. De ahí que existan ciertas pautas interpretativas que unidas con el texto legal y con las circunstancias acaecidas en el caso concreto, revelan la existencia de una nulidad."

PRINCIPIO DE CONVALIDACIÓN

"d. En cuanto a los alcances del principio de convalidación mencionado por el recurrente, en efecto, se puede afirmar que, en términos generales, las nulidades se convalidan por el consentimiento. Es decir que, si en un caso determinado concurren los presupuestos de una nulidad, no procedería su declaración si la parte procesal interesada consintió expresa o tácitamente el acto violatorio de sus derechos. Entonces aun si dicha conclusión parece excesiva a primera vista, resulta necesaria debido a que el derecho procesal está determinado por ciertas exigencias de firmeza y efectividad en los actos, de manera que, frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se encuentra la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho. De ahí que los actos viciados o supuestamente viciados se consolidan si no se atacan en tiempo hábil, precluyendo el derecho a solicitar la nulidad del acto referido.

Sin embargo, aunque la anterior afirmación constituye la regla general aplicable a las nulidades, esta no es absoluta. Se admite que el legislador establezca casos en los que no es posible aplicar el principio de convalidación y pueda atacarse un acto por la vía de la nulidad sin que precluya tal posibilidad por el paso del tiempo señalado como regla para atacar las nulidades. Es decir, el mismo legislador que establece las nulidades y determina el periodo en que puede solicitarse su declaratoria, también regula algunas nulidades cuya gravedad hace necesario que puedan ser declaradas en cualquier momento, incluso de oficio, por lo que respecto de estas no opera la convalidación tácita por dejar que transcurra el término para su alegación."

NULIDADES SUBSANABLES E INSUBSANABLES

"e. La anterior característica excepcional la encontramos en nuestro ordenamiento jurídico. El legislador ha tipificadas las nulidades como subsanables e insubsanables (arts. 232 y 235 del CPCM). Las nulidades subsanables son aquellas que admiten convalidación por parte del afectado, y por esa razón tienen un término para su denuncia. En cambio, las nulidades insubsanables no pueden ser convalidadas, y por ello pueden ser alegadas en cualquier momento y declaradas incluso de oficio. El tribunal respectivo está normativamente obligado a declarar las nulidades insubsanables.

De tal forma, las nulidades insubsanables son una excepción al principio de convalidación, lo que, se reitera, significa que no pueden ser confirmadas o subsanadas a través del consentimiento expreso o tácito del afectado con el

acto irregular, pudiendo ser declaradas, como lo establece la ley, en cualquier momento del proceso, es decir, habiendo transcurrido el término en el que pueden denunciarse las nulidades subsanables. Ello, dado que en este caso, se reitera, el principio de consentimiento o de convalidación no opera, pues así lo ha determinado el propio legislador y de ahí que la autoridad que esté dirimiendo el proceso, al verificar la posible existencia de tal nulidad, no solo está obligada a examinarla en cualquier momento que le sea planteada, sino que también está habilitada para declararla incluso de oficio.

Entre las nulidades insubsanables reguladas por el CPCM se encuentra la infracción al principio de inmediación (arts. 10, 200) y la incapacidad para ser parte (art. 65). Asimismo, en el art. 232 del CPCM aparece un listado de nulidades insubsanables. Como ya se indicó, la característica esencial de las nulidades insubsanables es que no pueden ser convalidadas por la parte agraviada, sino que el juzgador está obligado a declararlas, incluso de oficio. Esa imposibilidad de convalidación y la obligatoriedad de su declaración por parte del juzgador son claras en el tenor del art. 232 del CPCM, que establece: "Los actos procesales serán nulos sólo cuando así lo establezca expresamente la ley. No obstante, deberán declararse nulos en los siguientes casos: a) Si se producen ante o por un tribunal que carece de jurisdicción o competencia que no pueda prorrogarse. b) Si se realizan bajo violencia o intimidación o mediante la comisión de un acto delictivo. c) Si se han infringido los derechos constitucionales de audiencia o de defensa" (cursiva añadida).

Como puede advertirse, en el art. 232 del CPCM, el legislador, por un lado, establece el principio de especificidad de las nulidades, ello, mediante el mandato de que los actos procesales sean nulos únicamente cuando así lo establezca expresamente la ley. Pero en el mismo apartado establece expresamente otro mandato que también debe cumplirse "No obstante" el mandato previo, y es la obligación de declarar nulos los actos procesales en los que concurra alguna de las circunstancias taxativamente enumeradas en los literales a, b y c del aludido artículo. Nótese que no se ha regulado la posibilidad de declarar o no tales nulidades, como si se tratara de una potestad, sino que el precepto establece la obligación de hacerlo, por lo que declarar tales nulidades es un imperativo para el juzgador.

En ese sentido, el principio de especificidad de las nulidades de ninguna manera niega la existencia del cúmulo de nulidades enumeradas en el precepto reseñado, por el contrario, la alusión hecha en ese artículo –que precisamente se titula "PRINCIPIO DE ESPECIFICIDAD"–, satisface tal requisito. Asimismo, visto que en ese mismo precepto referido al principio de especificidad también se establece la obligación de declarar nulos los actos ahí referidos, queda claro que tales nulidades no son disponibles para las partes, ni aun para quien haya resultado agraviado por el acto lesivo, sino que su declaratoria es un imperativo legal para el juez. Entonces, implican una excepción al principio de convalidación de las nulidades, que no puede ser ignorada por el juzgador. De tal forma, como antes se indicó, una de las características esenciales de las nulidades es que solo

pueden ser establecidas por la ley, y no por el juzgador. De ahí que solo puede declararse la nulidad por los motivos señalados por el legislador, pero también implica que no puede evadirse la declaratoria de nulidad cuando concurran las circunstancias que se sancionan con dicho efecto. Por tanto, los motivos de nulidad que aparecen en el art. 232 del CPCM no pueden ser convalidados por los afectados, sino que la autoridad judicial está obligada a declararlos, de manera que se trata de nulidades insubsanables, cuya naturaleza ha sido directamente atribuida por el legislador, aunque no las denomine de esta manera.

D. Determinado lo anterior, corresponde establecer si las nulidades declaradas en la resolución recurrida se ubican dentro de alguno de los supuestos de nulidades insubsanables.

En efecto, uno de los tópicos planteados por QUIMAGRO fue la vulneración del derecho de defensa, en relación con el cual planteó otras infracciones constitucionales. Respecto de lo cual el tribunal concluyó que se había "infringido el derecho de defensa de la mencionada sociedad –entendido como el derecho de contradicción respecto de la pretensión planteada, como componente esencial del derecho de audiencia o derecho a ser oído efectivamente [...]–, pues modificó su fallo cuando ya no había oportunidad para pronunciarse sobre el fondo del asunto resuelto, mucho menos para ofrecer elementos probatorios que respaldasen la respectiva posición procesal, o que sirviesen para rebatir la posición contraria, dado que toda esa actividad es válida durante la tramitación del proceso, pero no en la fase de ejecución".

Es decir, la resolución recurrida se pronunció en un incidente de nulidad en el que se examinó y estableció la vulneración del derecho de defensa en relación con el derecho de audiencia. Por su parte, en el art. 232 letra c del CPCM –precepto que, como ya se indicó, enumera nulidades insubsanables– se establece que deberán declararse nulos los actos procesales cuando "se han infringido los derechos constitucionales de audiencia o de defensa"."

LA NULIDAD INSUBSANABLE RESPECTO DE LA CUAL NO OPERA EL PRINCIPIO DE CONVALIDACIÓN PUEDE SER ALEGADA EN CUALQUIER MOMENTO, INCLUSO SER DECLARADA DE OFICIO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

"Entonces, se advierte que lo dirimido por esta Sala encaja en el supuesto regulado en el art. 232 letra c del CPCM, por lo que, contrario a lo alegado por el recurrente, sí se estaba ante una nulidad insubsanable, respecto de la que no opera el principio de convalidación, de forma que podía ser alegada en cualquier momento, e incluso ser declarada de oficio por este tribunal, quien, dadas las condiciones acaecidas en el caso concreto, no podía sustraerse de analizar tal asunto. Consecuentemente, esta Sala no encuentra argumentos que muestren el yerro de los postulados anteriores, siendo procedente confirmarlos y descartar la supuesta vulneración alegada por el abogado [...]."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 181-2005, fecha de la resolución: 16/06/2021

OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN FORZOSA

AL HABER SIDO DESESTIMADA LA OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN, LA DEMANDANTE CONTABA CON LA OPORTUNIDAD DE IMPUGNAR ESA DECISIÓN ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE UTILIZANDO EL RECURSO DE APELACIÓN

"B. En el presente caso, la demandante sometió a control constitucional, entre otras, las siguientes actuaciones: (i) el auto pronunciado por la Jueza de lo Civil de Soyapango el 28 de octubre de 2016, por medio del cual declaró sin lugar la oposición a la ejecución forzosa; y (ii) la resolución emitida por la referida autoridad judicial el 15 de febrero de 2017, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto.

Al respecto, es preciso acotar que el art. 584 inc. 1° del CPCM prescribe que "contra el auto que desestime los motivos de oposición alegados podrá interponerse recurso de apelación, que no suspenderá el curso de la ejecución". En ese sentido, se advierte que, al haber sido desestimada su oposición a la ejecución, la demandante contaba con la oportunidad de impugnar esa decisión ante la autoridad judicial competente utilizando el recurso de apelación; sin embargo, no hizo uso de dicho recurso.

De ahí que, al no haber interpuesto el recurso de apelación en el plazo legalmente establecido, la actora no cumple con uno de los presupuestos –el agotamiento de los recursos– para que esta Sala pueda conocer de la presunta vulneración constitucional derivada de las actuaciones previamente citadas. Y es que el recurso de apelación era la vía adecuada y eficaz para reparar la supuesta vulneración a los derechos alegados en la demanda, por lo que, en este caso concreto, su uso se erige como un presupuesto procesal especial incorporado en el ámbito de lo prescrito en el art. 12 inc 3° de la LPC.

Por consiguiente, tal situación acredita la existencia de un defecto en este extremo de la pretensión que vuelve necesaria la terminación del presente proceso mediante la figura del sobreseimiento, de conformidad con lo establecido en el art. 31 n° 3 de la LPC."

INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN A LOS DERECHOS DE AUDIENCIA, DEFENSA Y A LA PROPIEDAD

"2. A. La actora alegó en su demanda la vulneración de sus derechos de audiencia, de defensa y a la propiedad, debido a que la Jueza (2) del Juzgado de lo Civil de Soyapango adjudicó en pago los inmuebles de su propiedad sin que le hubiese notificado la resolución que señaló día y hora para llevar a cabo el valúo de los inmuebles embargados, lo que impidió que pudiera participar en esa diligencia, recusar a los peritos nombrados o controvertir el informe pericial, dando como resultado que sus bienes fueron subastados y posteriormente adjudicados en pago utilizando como base dicho valúo.

B. Las notificaciones de las decisiones judiciales a las partes son actos de comunicación mediante los cuales se hacen saber a los intervinientes los actos

contenidos en el respectivo proceso, por lo que, dada su importancia, la concreción de aquellos se debe efectuar de forma tal que haya un conocimiento real y oportuno de la decisión que se emite.

C. En el presente caso, con la prueba documental aportada se ha comprobado que las resoluciones emitidas por la Jueza (2) del Juzgado de lo Civil de Soyapango en la fase de ejecución de la sentencia pronunciada en el proceso ejecutivo mercantil promovido por la Caja de Crédito de Soyapango en contra de la señora MRCS le fueron comunicadas a esta de manera oportuna.

En efecto, se ha acreditado que la resolución mediante la cual la autoridad demandada dio inicio a la fase de ejecución forzosa, requirió a las partes que presentaran la liquidación respectiva y nombró a los peritos valuadores de los inmuebles embargados, le fue notificada a la señora CS por medio de la señora EAGS el 21 de septiembre de 2016. Además, se ha comprobado que el defensor público Edwin Antonio [...] se apersonó al proceso en representación de la señora CS, manifestó su oposición a la ejecución dentro del plazo establecido en el art. 579 del CPCM y solicitó que se declarara la nulidad del embargo, pero no recusó a ninguno de los dos peritos nombrados para llevar a cabo el valúo de los bienes embargados, tal como lo prescribe el art. 647 inc. 3° del CPCM

Asimismo, se ha acreditado que la resolución de 28 de octubre de 2016, en virtud de la cual la autoridad demandada declaró sin lugar la oposición a la ejecución alegada por el abogado [...] y le otorgó el plazo de cinco días para que se pronunciara sobre la liquidación presentada por la ejecutante, le fue notificada al referido profesional el 21 de diciembre de 2016 por medio de la licenciada Roxana Paniagua.

De igual forma, se ha comprobado que el auto de 12 de enero de 2017, en el cual la autoridad demandada tuvo por agregado al proceso el informe presentado por los peritos y señaló la fecha en que se efectuaría la audiencia para la realización de los bienes embargados que prevé el art. 649 del CPCM, le fue comunicado al abogado [...] de forma personal el 18 de enero de 2017. Si bien cuando se efectuó esa notificación no se le entregó al referido abogado una copia del informe pericial, se advierte que en ese mismo auto la autoridad demandada tuvo por agregado dicho informe al expediente, por lo que es factible colegir que el procurador de la actora conocía su existencia y contó con la posibilidad de acudir al tribunal para que se le informara sobre su contenido previo a la realización de la audiencia del 31 de enero de 2017.

Por otra parte, en el acta correspondiente a la citada audiencia se hizo constar que el abogado [...] solicitó “la recusación del perito y del valuo (sic) realizado ya que existe una diferencia significativa entre el valuo (sic) presentado por su parte y el presentado por el perito propuesto por la parte actora”. Dicha petición fue desestimada por la autoridad demandada porque la aludida recusación se presentó de forma extemporánea. En cuanto a este punto, se advierte que el procurador de la actora manifestó su oposición a la ejecución y, pese a que contó con la posibilidad de plantear la recusación de los peritos que se habían nombrado para efectuar el valúo de los bienes embargados, aquel no presentó ninguna solicitud orientada a ello y fue hasta que conoció el resultado del mencionado valúo que expresó su voluntad de recusar a dichos peritos.

Finalmente, se ha comprobado que la resolución de 13 de junio de 2017, en virtud de la cual la autoridad demandada accedió a la adjudicación en pago de los bienes embargados a favor de la Caja de Crédito de Soyapango, le fue notificada al abogado [...] de forma personal el 26 de junio de 2017.

D. De lo expuesto se colige que la Jueza (2) del Juzgado de lo Civil de Soyapango posibilitó la participación de la actora en las distintas etapas de la ejecución forzosa en cuestión y que, contrario a lo expuesto en su demanda, aquella contó con la posibilidad de ejercer la defensa de sus intereses dentro de dicho trámite, ya que, por una parte, presentó su oposición a la ejecución por considerar que existían vicios procesales en el embargo llevado a cabo sobre dos inmuebles de su propiedad –oposición que fue desestimada– y, por otra, se le notificó el nombramiento de los peritos que llevaron a cabo el valúo de esos bienes y pudo de recusarlos conforme a lo dispuesto en el art. 647 inc. 3° del CPCM, pero no lo hizo de manera oportuna, sino que esperó hasta conocer el resultado del valúo para intentar recusar a dichos peritos –solicitud que fue desestimada por extemporánea–.

En consecuencia, se concluye que la autoridad demandada, al ordenar la venta en pública subasta de los inmuebles embargados y la posterior adjudicación en pago de estos a favor de la acreedora tomando como base el valúo presentado por los peritos nombrados para ello, no vulneró los derechos de audiencia, de defensa y a la propiedad de la señora MRCS, razón por la cual resulta procedente desestimar la pretensión de amparo planteada."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 220-2017, fecha de la resolución: 26/11/2021

PERSONALIDAD JURÍDICA

CONDICIÓN DE SUJETO CON DERECHO PARA PROMOVER UN PROCESO DE AMPARO

"1. A. En la resolución de 11 de septiembre de 2017, amparo 293-215, esta Sala indicó que el art. 247 de la Cn. confiere capacidad y legitimación para interponer amparo a "toda persona" que haya sufrido una vulneración a sus derechos fundamentales producto de un acto o de una omisión de una autoridad. Por ello, quien promueve un amparo debe tener "personalidad jurídica".

En la sentencia de 15 de febrero de 2017, inconstitucionalidad 22-2011, se afirmó que el instrumento para operativizar o hacer funcionar la condición de sujeto de derecho es la personalidad –o capacidad– jurídica, es decir, la titularidad de derechos y obligaciones. Tener derechos es una manifestación de tener personalidad jurídica, que a su vez depende de la condición de ser persona.

La personalidad jurídica es una condición graduable, como lo indican las nociones civiles de "capacidad de goce" –tener derechos– y "capacidad de ejer-

cicio" –poder ejercer en primera persona o directamente los derechos y obligaciones de que se es titular–, o las nociones de Derecho Procesal "capacidad para ser parte" –aptitud para ser parte en un proceso– y "capacidad procesal" –aptitud para intervenir por sí mismo y para realizar actos procesales válidos–."
Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 62-2018AC, fecha de la resolución: 01/09/2021

PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO

CAPACIDAD JURÍDICA RECONOCIDA POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

"B. a. El ordenamiento jurídico reconoce la capacidad jurídica de las personas jurídicas de Derecho Público. Esta capacidad viene dada por su creación mediante ley, que les confiere la calidad de sujetos de derechos y de obligaciones, define sus competencias, así como las bases de su organización y de su patrimonio. Dado que se trata de personas jurídicas, es necesario que su voluntad se materialice a través de decisiones y acciones de personas naturales, en particular de quienes ejercen su representación legal.

b. Precisamente, en la sentencia de 24 de octubre de 2014, amparo 206-2012, se afirmó que en virtud de la intervención de las personas jurídicas de Derecho Público en procesos o procedimientos en los que se controla la legalidad o constitucionalidad de sus actos estas asumen la calidad de sujetos procesales y, por consiguiente, un conjunto de derechos, obligaciones y cargas procesales, algunos de ellos de trascendencia constitucional. De ahí que, si al Estado, a un Municipio o a una institución autónoma le es vulnerado algún derecho de naturaleza constitucional en la tramitación de algún proceso o procedimiento, aquellos poseerán capacidad para ser parte en el proceso de amparo.

c. Esta Sala ha estimado pretensiones de amparo de algunas entidades de Derecho Público, como la Superintendencia de Competencia (amparo 206-2012) y el Tribunal de Ética Gubernamental (amparo 147-2015), por mencionar algunos ejemplos, en virtud de haberse comprobado vulneraciones a derechos constitucionales ocurridas en el marco de procesos en los que se han controlado sus actuaciones y en los cuales aquellos intervinieron en calidad de parte procesal.

Incluso, en el proceso de amparo con ref. 293-2015 se admitió la intervención como demandante de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), aun cuando dicho ente carece de personalidad jurídica propia, debido a que el art. 223 nº 4 de la Cn. confiere al Estado "derechos derivados de la aplicación de las leyes relativas a impuestos" y los arts. 2 y 3 de la Ley Orgánica de la DGII conceden a esa dirección independencia respecto de otros órganos, facultándola para "aplicar y hacer cumplir las leyes referentes a impuestos". Es decir, la DGII tiene la facultad de aplicar leyes tributarias y de defender los actos de aplicación de estas, en aras de proteger un interés supraindividual de naturaleza pública: el erario público."

PARA QUE UNA PERSONA SE ENCUENTRE LEGITIMADA PARA ACTUAR EN UN PROCESO ES NECESARIO QUE SE DETERMINE PREVIAMENTE QUE POSEE PERSONALIDAD O CAPACIDAD JURÍDICA.

"Sin embargo, esta regla no puede generalizarse en favor de otros entes de la Administración Pública que carecen de personalidad jurídica, pues, como se ha indicado, es una excepción a las reglas sobre capacidad que ha sido prevista por la propia Constitución.

2. A. En la resolución de 24 de marzo de 2010, amparo 301-2007, se señaló que la legitimación procesal alude a una especial condición o vinculación de uno o varios sujetos con un objeto litigioso determinado que les habilita para comparecer, individualmente o junto con otros, en un proceso concreto con el fin de obtener una sentencia de fondo.

De este modo, para el caso particular del proceso de amparo, resulta imprescindible que se legitimen activa y pasivamente las personas que han intervenido en la relación fáctica o jurídica controvertida, lo que conlleva que resulte necesaria y exigible la intervención de quienes hayan participado en la configuración del acto reclamado.

B. La capacidad es un presupuesto procesal que se complementa con la legitimación e incluso condiciona a esta última, es decir, para que una persona se encuentre legitimada para actuar en un proceso es necesario que se determine previamente que posee personalidad o capacidad jurídica.

3. En ese sentido, para que se tramite válidamente un proceso de amparo es imprescindible que quien plantee el reclamo tenga capacidad y, además, que se encuentre legitimado para ello. La ausencia de dichos presupuestos implica la existencia de vicios en la pretensión que generan la imposibilidad de juzgar el caso concreto y tornan inviable la tramitación completa del proceso, por lo que la demanda debe ser rechazada al inicio o durante el transcurso de aquel, en este último caso mediante la figura del sobreseimiento de conformidad con lo dispuesto en el art. 31 nº 3 de la LPC."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 62-2018AC, fecha de la resolución: 01/09/2021

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

PRINCIPIO STARE DECISIS

"2. De conformidad con el principio stare decisis, derivado de la seguridad jurídica y de la igualdad en la aplicación de la ley —arts. 1 y 3 de la Cn.—, los supuestos de hecho iguales deben ser decididos en el mismo sentido; sin embargo, ello no implica que los precedentes no puedan modificarse, pues la jurisprudencia no tiene que ser necesariamente inamovible, ello en aras de garantizar el estricto cumplimiento de los preceptos constitucionales y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.

En efecto, tal como se sostuvo en la sentencia de 25 de agosto de 2010, inconstitucionalidad 1-2010, aunque el precedente —y, de manera más precisa, el autoprecedente— posibilita la precomprensión jurídica de la que parte toda interpretación, la continuidad de la jurisprudencia puede flexibilizarse o ceder bajo determinados supuestos. No obstante, para ello se exige que el apartamiento de los precedentes esté especialmente justificado —argumentado— con un análisis crítico de la antigua jurisprudencia, que también es susceptible de ser reinterpretada."

CIRCUNSTANCIAS VÁLIDAS PARA MODIFICAR UN PRECEDENTE O ALEJARSE DE ÉL

"Entre las circunstancias válidas para modificar un precedente o alejarse de él —entre otros— pueden mencionarse los siguientes supuestos: (i) estar en presencia de un pronunciamiento cuyos fundamentos normativos son incompletos o erróneamente interpretados; (ii) el cambio en la conformación subjetiva del tribunal; y (iii) que los fundamentos fácticos que le motivaron hayan variado sustancialmente al grado de volver incoherente el pronunciamiento originario con la realidad normada."[…]

[…] "V. Desarrollados los puntos previos se debe analizar si la actuación de la autoridad demandada se sujetó a la normativa constitucional.

1. Con base en los elementos de prueba incorporados al proceso, valorados conjuntamente y conforme con las reglas de la sana crítica, según lo dispuesto en el art. 33 de la LPC en relación con la apreciación jurídica de la prueba y teniendo en consideración los términos del debate, se tiene por establecido que mediante la sentencia pronunciada por la SCA el 20 de mayo de 2016, se declaró que las resoluciones emitidas por la DGII y por el TAITA, el 11 de febrero de 2008 y el 28 de abril de 2009, respectivamente, no adolecían las ilegalidades que la sociedad actora alegó en su demanda, pues las ventas realizadas por dicha sociedad en el puerto marítimo de Acajutla debían considerarse como internas y, por tanto, gravadas con el 13% del IVA.

2. A. a. La sociedad actora arguye que en las sentencias pronunciadas en los procesos contenciosos administrativos con ref. 104-2010, 105-2010 y 106-2010 la SCA interpretó el art. 19 de la Ley del IVA y estableció que, cuando se trate de prestación de servicios consistente en la transferencia de bienes y se pretenda gravar dicha actividad con el referido impuesto, los criterios a tener en cuenta para determinar su imposición son los siguientes: (i) si los bienes transferidos son usados o consumidos de forma total en territorio nacional, el impuesto se genera de forma completa (13%); (ii) si dichos bienes se usan o se consumen en su totalidad fuera del territorio nacional (exportación), la actividad se encuentra exenta de impuesto (0%); y (iii) si los bienes transferidos son usados o consumidos parcialmente en territorio nacional, solo se causa el impuesto que corresponda a la parte usada o consumida en el país, por lo que, en este caso, corresponde a la administración tributaria, a partir de las pruebas presentadas por los interesados, establecer el porcentaje del bien consumido en el país a efecto de gravar el impuesto correspondiente y efectuar la liquidación correcta.

En este último supuesto, la SCA sostuvo que la solicitud de reintegro o devolución del IVA procede únicamente respecto de los bienes que son usados o consumidos fuera del territorio nacional, por lo que es parcial o proporcional, no total como sucede con una exportación.

b. Al respecto, de la lectura de los citados precedentes se advierte que la SCA efectuó el examen de legalidad de tres resoluciones emitidas por la DGII en procedimientos tributarios distintos, pero iniciados todos por la sociedad Distribuidora Shell de El Salvador, S.A., ahora Unopetrol El Salvador, S.A., que versaban sobre solicitudes para el reintegro de IVA a exportadores. En síntesis, la aludida sociedad declaró como exportaciones gravadas con tasa del 0% del IVA las ventas de combustible realizadas en el aeropuerto internacional de El Salvador, por considerar que dichas ventas constituían exportaciones debido a que el producto sería consumido fuera del territorio nacional. Por su parte, la DGII consideró que las ventas de combustible realizadas a las aerolíneas en el citado aeropuerto no podían ser consideradas como exportaciones, por lo que se encontraban gravadas con la tasa del 13% del IVA.

En los tres precedentes analizados, luego de hacer un análisis del art. 19 inc. 3° de la Ley del IVA, la SCA concluyó que "al realizar una conexión ontológica de dicho precepto en relación a la prestación parcial de servicios con la figura de la trasferencia de dominio de bienes, resulta la lógica migración de la distinción efectuada por el legislador en el art. 19, es decir, en lo referente a los servicios prestados parcialmente en el país, con la transferencia de bienes, cuando éstos son usados o consumidos parcialmente en el territorio nacional, en cuyo caso, solo se causa el impuesto que corresponda a la parte usada o consumida en el país, consecuentemente corresponde a la Administración Tributaria, a partir de las pruebas presentadas por los interesados, establecer el porcentaje del bien consumido en el país a efecto de gravar el impuesto correspondiente y efectuar la liquidación correcta".

Además aclaró que, con base en la facultad regulada en el art. 214 del Código Tributario, la DGII puede verificar, por una parte, la exactitud del monto del reintegro solicitado y, por otra, si las transferencias realizadas constituían o no hechos generadores del impuesto —débitos fiscales— o si estas gozaban de alguna exención. Asimismo, señaló que la DGII debió analizar la liquidación correspondiente a la cantidad de combustible de aviación adquirido en las instalaciones del aeropuerto internacional de El Salvador que fue servido a las aeronaves en el territorio salvadoreño, efectuando la distinción entre el porcentaje consumido internamente y el consumo en el exterior del territorio nacional.

En conclusión, la SCA consideró que las resoluciones de la DGII era ilegales por no haberse realizado la operación que estableciera el porcentaje de combustible consumido en territorio nacional y, consecuentemente, liquidar la cantidad que correspondía devolver.

B. a. En el presente caso, se advierte que en la sentencia de 20 de mayo de 2016, emitida en el proceso contencioso administrativo con ref. 202-2009, la SCA analizó el contenido de los arts. 4 y 8 de la Ley del IVA y concluyó que en la

transferencia de bienes muebles, por regla general, el impuesto del IVA se causa al momento de la emisión del respectivo documento —factura o comprobante de crédito fiscal—.

Posteriormente, expuso que al "verificar cada una de las facturas de exportación presentadas por la sociedad actora se refleja que las ventas de combustible cuestionadas fueron realizadas en el Puerto Marítimo de Acajutla, es decir que, la transferencia del bien —combustible— se efectuó dentro del territorio nacional y la entrega se realizó en el territorio nacional. Así, conforme con las facturas presentadas que reflejaban cada una de las transferencias, las ventas de combustible realizadas por CHEVRON CARIBBEAN INC. SUCURSAL EL SALVADOR, en el puerto de Acajutla a los barcos fueron ventas internas gravadas con el trece por ciento (13%) de IVA".

En razón de ello, la SCA declaró la legalidad de las resoluciones de 11 de febrero de 2008 y 28 de abril de 2009, emitidas por la DGII y por el TAIIA, respectivamente.

b. Para verificar si efectivamente la SCA realizó un cambio de precedente y si este fue debidamente justificado, es necesario determinar que los casos comparados, es decir, los precedentes alegados por la sociedad actora y la sentencia impugnada por esta, versan sobre el mismo tema central y que las semejanzas entre ellos son más significativas que sus diferencias.

Así, confrontando las sentencias emitidas en los procesos contenciosos administrativos con ref. 104-2010, 105-2010 y 106-2010, con la emitida en el proceso con ref. 202-2009, se colige que: (i) la transferencia de bienes tuvo como objeto el combustible; (ii) dicho combustible fue vendido a empresas no domiciliadas en El Salvador; (iii) las sociedades contribuyentes declararon las respectivas ventas como exportaciones; (iv) la DGII consideró que las ventas en cuestión eran internas y no exportaciones, por lo que estaban gravadas con el 13% del IVA; (v) en los precedentes la venta de combustible se hizo a aeronaves, mientras que en la sentencia impugnada se hizo a embarcaciones; y (vi) en el caso de las aeronaves la venta se efectuó en el aeropuerto internacional de El Salvador y en el caso de las embarcaciones se realizó en el puerto marítimo de Acajutla.

A partir de lo expuesto, se colige que las diferencias que presentan los precedentes en cuestión con la sentencia impugnada en este amparo son: (i) que en los precedentes se trató de venta de combustible a aeronaves, mientras que en el presente caso a embarcaciones; y (ii) en el primer caso la venta se llevó a cabo en el aeropuerto internacional de El Salvador, mientras que en el segundo en el puerto marítimo de Acajutla. Las diferencias citadas, relativas al medio de transporte que utilizó el producto y al lugar en que se realizó la venta de este, resultan irrelevantes para justificar que se haya otorgado un tratamiento diferenciado, pues tanto aviones como barcos usan el combustible para movilizarse, por lo que la nota esencial que resulta común en ambos casos es el objeto de la transacción.

De esa misma forma lo reconoció la SCA al rendir su informe justificativo, en el cual afirmó que "tanto en las sentencias citadas como precedentes como en la que es objeto del presente amparo, el punto central se refiere a si la venta

de combustible realizadas (sic) en recintos fiscales son operaciones gravadas con el trece por ciento (13%) de IVA, pues eso incide en la procedencia de los reclamos de reintegro de crédito fiscal IVA exportadores — como sucedió en los procesos 104-2010, 105-2010 y 106-2010— o en el ajuste de remanente de crédito fiscal como resultado de un incremento del debito (sic) fiscal —como sucedió en el proceso objeto de amparo 202-2009— al pasar de exportaciones gravadas con el cero por ciento (0%) a operación gravada con el trece por ciento (13%)".

Sin embargo, justificó el cambio de criterio en el hecho de que hubo un cambio en la conformación subjetiva de esa Sala, lo que constituye "una justificante para la modificación de un precedente", y aseveró que "en la sentencia que es objeto de amparo, se expusieron de forma clara y precisa las razones por las cuales se tomo (sic) la decisión de declarar legal las resoluciones impugnadas".

De lo expuesto se colige que la SCA resolvió en los procesos contenciosos administrativos con ref. 104-2010, 105-2010 y 106-2010 supuestos similares o análogos al controvertido en el proceso con ref. 202-2009, utilizando un criterio jurisprudencial distinto al aplicado en este último proceso, de lo cual se infiere que efectuó en la sentencia impugnada un cambio de su propio precedente."

TÉCNICAS POR MEDIO DE LAS CUALES SE PUEDE VERIFICAR UN CAMBIO DE PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

"c. El cambio de un precedente jurisprudencial puede verificarse por medio de dos técnicas: (i) cuando el tribunal se aparta expresamente del precedente vigente, lo deja sin efecto y adopta uno nuevo que surte efectos de forma inmediata, y (ii) mediante el anuncio en el caso que está conociendo de que ese es el último que resolverá conforme al criterio vigente, pero que a partir del siguiente se aplicará el cambio en los términos que se dejen establecidos. Entonces, en consonancia con la citada sentencia de inconstitucionalidad 1-2010, lo que constitucionalmente esta proscrito no es que los tribunales cambien sus precedentes, sino que lo hagan de forma injustificada o infundada, sin atender a los parámetros antes mencionados."

CAMBIO EN LA CONFORMACIÓN SUBJETIVA DE UN TRIBUNAL NO ES UNA CONDICIÓN SUFICIENTE NI NECESARIA PARA QUE OPERE UN CAMBIO DE PRECEDENTE, NI EXIME AL TRIBUNAL DE PROPORCIONAR LAS RAZONES JURÍDICAS Y FÁCTICAS QUE LO JUSTIFIQUEN

"Debe hacerse ver que el cambio en la conformación subjetiva de un tribunal es un presupuesto meramente formal que habilitaría, como punto de partida, un cambio de precedente jurisprudencial. Sin embargo, no es una condición suficiente ni necesaria para que este opere, por lo que el mero cambio en su conformación subjetiva no exime a un tribunal de proporcionar las razones jurídicas y fácticas que justifiquen el cambio de precedente que realicen.

Y es que, como se sostuvo en las sentencias de 25 de agosto de 2010 y de 16 de mayo de 2018, inconstitucionalidad 1-2010 y amparo 416-2015, respecti-

vamente, el apartamiento de un precedente debe estar especialmente justificado, por lo que debe realizarse un análisis crítico de la antigua jurisprudencia que se encuentra siendo reinterpretada."

VULNERACIÓN AL DERECHO A UNA RESOLUCIÓN MOTIVADA Y A LA IGUALDAD, POR INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE STARE DECISIS DE LA SOCIEDAD ACTORA, AL REALIZAR UN CAMBIO JURISPRUDENCIAL SIN EXPLICITAR EL PORQUÉ DE ELLO

"Al respecto, se advierte que, si bien en la sentencia cuestionada la SCA expuso los argumentos jurídicos con base en los cuales declaró la legalidad de las actuaciones de la DGII y del TAIIA, dicha Sala no advirtió que efectuaría la revisión de su autoprecedente y, en consecuencia, omitió realizar un análisis crítico de los fundamentos jurídicos contenidos en las sentencias emitidas con anterioridad, previo a modificar su criterio jurisprudencial en relación con el tema en cuestión. De ahí que no sea posible establecer con la precisión que el respeto a los derechos de las partes requiere los motivos jurídicos y fácticos que llevaron a la SCA a resolver en un sentido diferente al de sus precedentes el objeto del proceso con ref 202-2009, pese a que se trataba de supuestos análogos.

En el caso de las sentencias judiciales, su justificación o fundamentación no puede entenderse como un silogismo simple, que parte del establecimiento de premisas para arribar a una conclusión de forma "lógica" o "formal" —justificación interna—, sino que deben exteriorizarse por parte del juzgador las razones que le llevaron al establecimiento de esas premisas y, por tanto, de la conclusión —justificación externa—.

En ese sentido, la modificación del auto precedente en cuestión exigía de la SCA un mayor esfuerzo en la motivación de la resolución impugnada en este amparo, enunciando su antigua jurisprudencia y efectuando un análisis comparativo que permitiera establecer y contrastar los fundamentos jurídicos empleados en su precedente y los utilizados para justificar la modificación de su línea resolutiva. Ello a fin de que la sociedad actora en este amparo y cualquier operador jurídico pudiera identificar los errores interpretativos o bien las circunstancias que buscaba corregir y, de esa forma, comprender los motivos jurídicos con base en los cuales la SCA justificó que supuestos como el controvertido debían resolverse de manera diferente.

Desde esa perspectiva, se advierte que la inconsistencia en la que incurrió la SCA al fundamentar la sentencia impugnada en este amparo vulneró el derecho a una resolución motivada y a la igualdad —por inobservancia del principio de stare decisis— de la sociedad actora, pues con esa decisión se cambió, sin explicitar el porqué de ello, el criterio aplicable para la imposición del IVA a la venta de combustible realizada en recintos fiscales y, en consecuencia, se confirió a la sociedad actora un trato desigual al que la SCA le dio a las sociedades que promovieron los procesos contenciosos administrativos con ref 104-2010, 105-2010 y 106-2010, sin manifestar expresamente las razones que justificaran ese tratamiento diferenciado, es decir, aquellas que explicaran el cambio del precedente adoptado en las sentencias emitidas en dichos procesos.

Y es que, tal como se señaló en la sentencia de 27 de febrero de 2013, amparo 6562010, las resoluciones que se adopten respecto al goce y ejercicio de los derechos de las personas deben ser las mismas una vez efectuado el análisis de iguales presupuestos de hecho, evitando así cualquier transgresión consistente en que un mismo precepto legal se aplique arbitrariamente a casos idénticos. Esto no obsta para que el aplicador de las disposiciones, pese a tratarse de casos sustancialmente iguales, modifique el sentido de sus decisiones, siempre que su apartamiento de los precedentes posea una fundamentación suficiente y motivada.

Además, en el caso concreto de la sociedad demandante, al verse obligada a pagar cierta cantidad de dinero en concepto de IVA —por considerar la SCA que se trataba de transacciones internas—, la aludida inconsistencia le genera una afectación en su patrimonio que se objetiva jurídicamente en la afectación de su derecho a la propiedad, razón por la cual resulta procedente declarar que ha lugar al amparo solicitado por la sociedad actora.

B. En relación con la afirmación de que la sentencia emitida en el proceso contencioso administrativo con ref. 202-2009 no se encuentra debidamente motivada, debe aclararse que el presente pronunciamiento únicamente alude a que la falta de justificación respecto del cambio de precedente no se ajusta a los requerimientos constitucionalmente exigidos para garantizar al justiciable el conocimiento de las razones con base en las cuales la SCA modificó el criterio jurisprudencial empleado en sus precedentes, por lo que esta resolución no tiene por objeto validar o invalidar la conformidad legal del contenido de la aludida sentencia, pues esa clase de enjuiciamiento solo le corresponde realizarlo a la SCA en el ejercicio de las potestades que el ordenamiento jurídico le ha atribuido.

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 142-2017, fecha de la resolución: 29/01/2021

PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA

DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN

"2. El derecho a una prestación económica por renuncia es un derecho fundamental previsto en el art. 38 ord. 12° de la Cn. que otorga a los trabajadores permanentes la facultad de requerir a sus empleadores una cantidad de dinero, calculada con base en el salario devengado y en el tiempo de servicio, producto de la renuncia de su cargo y supone para los empleadores la correlativa obligación de satisfacerla de acuerdo con las condiciones determinadas en la ley. La disposición constitucional citada distingue entre la renuencia del patrono a aceptar la renuncia y la negativa de este a pagar la prestación. Del mismo modo que la renuncia de un trabajador produce efectos sin necesidad de aceptación previa del patrono, dado que se trata de un acto unilateral, el otorgamiento de la mencionada prestación tampoco precisa del consentimiento del empleador.

Por esa razón la resistencia del patrono a otorgarla, a pesar de que se cumplan los requisitos legales, o su anuencia a concederla, pero con obstáculos, son actos que vulneran el derecho de los trabajadores a una prestación económica por su renuncia."
Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 424-2017, fecha de la resolución: 14/06/2021

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

CONSTITUYE UNA GARANTÍA DEL CIUDADANO FRENTE AL PODER DEL ESTADO

"3. A. En su expresión más genérica, el principio de legalidad constituye una garantía del ciudadano frente al poder del Estado, ya que las actuaciones de las autoridades públicas que inciden en la esfera jurídica de las personas –limitando o ampliando el margen de ejercicio de sus derechos– deben basarse en una ley previa, dotada de ciertas características.

Así, en la sentencia del 20 de enero de 2012, amparo 47-2009, se expuso el contenido de este principio: (i) la intervención en el goce de un derecho debe realizarse con base en una ley previa al hecho enjuiciado –lex praevia–; (ii) dicha ley debe haber sido emitida exclusivamente por el parlamento y bajo el carácter de ley formal –lex scripta–; (iii) los términos utilizados en la disposición normativa han de ser claros, precisos e inequívocos para el conocimiento de la generalidad –lex certa–; y (iv) la aplicación de la ley ha de guardar estricta concordancia con lo que en ella se ha plasmado –lex stricta–.

B. De lo anterior se desprende que el principio de legalidad irradia en todo el ordenamiento jurídico, de tal manera que las autoridades estatales se encuentran llamadas a actuar dentro del marco legal que define sus atribuciones, lo cual representa para los sujetos la certeza de que sus derechos solo podrán ser limitados de acuerdo a la forma y términos previamente establecidos."
Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 203-2017, fecha de la resolución: 07/06/2021

PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY EN MATERIA TRIBUTARIA

ESENCIA

"B. Con relación al principio de reserva de ley en materia tributaria, en la sentencia del 23 de noviembre de 2011, amparo 311-2009, se sostuvo que este tiene como finalidad garantizar, por un lado, el derecho a la propiedad frente a injerencias arbitrarias del poder público –dimensión individual– y, por otro lado, el principio de autoimposición, esto es, que los ciudadanos no paguen más contribuciones que aquellas a las que sus legítimos representantes han prestado su consentimiento –dimensión colectiva–.

Dicho principio tiene por objeto que un tema de especial interés para los ciudadanos –el reparto de la carga tributaria– dependa exclusivamente del órgano estatal que por los principios que rigen su actividad asegura de mejor manera la conciliación de intereses contrapuestos en ese reparto. Así, en nuestro ordenamiento jurídico la reserva de ley tributaria tiene reconocimiento expreso en el art. 131 ord. 6º de la Cn.; sin embargo, este debe integrase de manera sistemática con lo dispuesto en el art. 204 ord. 1º de la Cn., que habilita a los municipios a establecer tasas y contribuciones especiales, por lo que la reserva solo afecta a esta clase de tributos cuando son de alcance nacional."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 203-2017, fecha de la resolución: 07/06/2021

PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY

LA RESERVA DE LEY NO SIGNIFICA QUE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA ES EL ÚNICO ÓRGANO DEL ESTADO CON COMPETENCIA PARA DICTAR NORMAS

"Así, esta Sala sostuvo que a veces se habla de "principio de reserva de ley", con lo que se quiere aludir a la norma constitucional —explícita o implícita— que ordena que ciertos aspectos sean regulados vía ley parlamentaria. Pero en nuestro Derecho Constitucional resulta más propio hablar de "reservas de ley", puesto que, por una parte, no existe una disposición constitucional que expresamente prescriba que determinadas materias sean normadas con exclusividad por el legislador y, por otra, tras un estudio detenido se descubre que en la Constitución están implícitas, no una, sino que varias materias reservadas al Órgano Legislativo (sentencia de 31 de julio de 2009, inconstitucionalidad 78-2006).

En suma, la zona de reserva de ley no significa que la Asamblea Legislativa es el único órgano del Estado con competencia para dictar normas. Significa, más bien, que hay un conjunto de materias que, por así establecerlo la Constitución, le corresponden exclusivamente a la Asamblea Legislativa —reserva de ley—. La Constitución no enumera ni explicita cuáles son las materias sometidas a reserva de ley. Por eso, cada vez que el constituyente utiliza el vocablo "ley" no implica una orden para regular la materia respectiva mediante decreto de contenido general emanado del Órgano Legislativo. Eso representaría desconocer las potestades normativas que la misma Constitución reconoce a otros órganos estatales y entes públicos. Cuando en la Constitución se utiliza el término "ley", le corresponde a este tribunal determinar si se está ante un caso implícito de reserva de ley, o si la materia respectiva puede ser regulada por cualquier órgano o ente público con potestad normativa. Una vez que se identifica que una materia está reservada a la ley, se debe analizar si esta es absoluta o relativa. Según la primera, la ley en sentido formal tiene que regular por sí misma toda la materia reservada y está exenta de la acción del Órgano Ejecutivo y los entes autónomos y, en consecuencia, de sus productos normativos. En cambio, la segunda considera que la ley en sentido formal no prohíbe totalmente el acceso a la misma de otras potestades normativas, admitiendo su colaboración."

ÁMBITOS EN LOS QUE SE MUEVE LA RESERVA DE LEY

"En general, la reserva de ley se mueve en diferentes ámbitos formando un conjunto heterogéneo y alcanzando aspectos relacionados, básicamente, con el patrimonio, la libertad, la seguridad y la defensa. Ejemplos de materias reservadas son: los impuestos y la expropiación; la tipificación de las conductas delictivas y las penas; el Derecho Administrativo Sancionador; la configuración esencial del proceso jurisdiccional; el mantenimiento de la paz y la seguridad; y, en general, toda "limitación" a los derechos fundamentales (sentencia de 15 de marzo de 2002, inconstitucionalidad 30-96). Es decir, aunque el Constituyente en muchas ocasiones no mencione expresa e inequívocamente que un determinado ámbito de la realidad entra en la zona de reserva del órgano legislativo, no puede ignorarse que ciertos ámbitos, por su naturaleza e importancia, deben quedar en manos del órgano que mejor garantiza los principios antes referidos." *Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 218-2018, fecha de la resolución: 28/05/2021*

PROCESO DE AMPARO

PRESUPUESTOS PROCESALES

"1. A. La jurisprudencia constitucional ha establecido –v. gr., en la improcedencia de 26 de enero de 2010, amparo 3-2010– que uno de los presupuestos procesales del amparo es el agotamiento de los recursos que la ley que rige el acto franquea para atacarlo, pues el amparo posee características propias que lo configuran como un proceso especial y extraordinario, establecido para dar una protección reforzada a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución a favor de las personas. Por ello, es imprescindible que el demandante haya agotado previamente, en tiempo y forma, todos los recursos ordinarios destinados a reparar o subsanar el acto o actos de autoridad contra los cuales reclama, pues caso contrario la pretensión de amparo devendría improcedente.

Además, en la sentencia de 9 de diciembre de 2009, amparo 18-2004, se estableció que la exigencia del agotamiento de recursos debe hacerse de manera razonable, atendiendo a su finalidad: permitir que las instancias judiciales ordinarias o administrativas reparen la lesión al derecho fundamental en cuestión, según sus potestades legales y atendiendo a la regulación normativa de los respectivos procedimientos.

A partir de tal afirmación, se dota de un contenido específico al presupuesto procesal regulado en el art. 12 inc. 3° de la LPC y, en razón de ello, se colige que para exigir el agotamiento de un recurso no basta solo con determinar si este es de naturaleza ordinaria o extraordinaria, según las reglas establecidas en la legislación secundaria, sino que debe tomarse en consideración si aquel es –de conformidad con su regulación específica y contexto de aplicación– una

herramienta idónea para reparar la vulneración constitucional aducida por la parte agraviada, es decir, si la misma posibilita que la afectación alegada pueda ser subsanada por esa vía de impugnación.

En ese sentido, para configurar plenamente la pretensión de amparo y se pueda dirimir la cuestión fundamental planteada en ella, es imprescindible que se hayan agotado los recursos idóneos franqueados por el ordenamiento jurídico atendiendo a la finalidad que persiguen."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 220-2017, fecha de la resolución: 26/11/2021

PROCESO DE FORMACIÓN DE LEY

CONSTITUCIÓN ESTABLECE LOS CÁNONES DE PRODUCCIÓN NORMATIVA QUE REGULAN LA COMPETENCIA DE DIVERSOS ÓRGANOS PARA CREAR LA LEY

"3. La Constitución establece los cánones de producción normativa que regulan la competencia de diversos órganos para crear la ley, el procedimiento que debe seguirse para la creación de las distintas fuentes y la potencialidad material de cada fuente del Derecho (sentencia de 18 de abril de 2008, inconstitucionalidad 10-2007). Esto demuestra que, en los Estados de Derecho contemporáneos, el Órgano Legislativo ha dejado de tener el monopolio de la producción jurídica y la comparte con otros órganos y entidades, particularmente con la administración. Sin embargo, en la estructuración escalonada de las fuentes de derecho la ley sigue ocupando un lugar privilegiado a partir de los principios de publicidad, pluralismo y libre debate que rigen su procedimiento de formación (sentencia de 6 de septiembre de 2001, inconstitucionalidad 27-99)."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 218-2018, fecha de la resolución: 28/05/2021

PROTECCIÓN JURISDICCIONAL

FINALIDAD

"4. La jurisprudencia constitucional ha sostenido –sentencia de 12 de noviembre de 2010, inconstitucionalidad 40-2009– que el derecho a la protección jurisdiccional fue instaurado con la finalidad de asegurar la eficacia de los derechos fundamentales, al permitirle a su titular reclamar válidamente ante los entes jurisdiccionales, frente a actos de particulares o estatales que atenten contra tales derechos.

Asimismo, se sostuvo que la protección jurisdiccional se manifiesta mediante cuatro grandes rubros: i) el acceso a la jurisdicción; ii) el proceso constitucionalmente configurado o debido proceso; iii) el derecho a una resolución de fondo, justificada y congruente; y iv) el derecho a la ejecución de las resoluciones.

A su vez, con el concepto de debido proceso o proceso constitucionalmente configurado se quiere hacer alusión a un proceso equitativo, respetuoso a los derechos fundamentales de los sujetos partícipes, que se agrupa y se desdobla en un haz de garantías que cobran vigencia en todos los órdenes jurisdiccionales y en las diferentes etapas de un proceso, estas son: los derechos de audiencia, defensa, a recurrir y la presunción de inocencia.

Todas esas manifestaciones de la protección jurisdiccional, tal como se sostuvo en la sentencia de 16 de marzo de 2011, amparo 1052-2008, también son predicables –con todas sus implicaciones– al derecho a la protección no jurisdiccional –protección en la defensa por entes no jurisdiccionales–."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 97-2019, fecha de la resolución: 08/11/2021

PRUEBA TESTIMONIAL

NEGAR AL PETICIONARIO LA INCORPORACIÓN DE PRUEBA TESTIMONIAL AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEGUIDO EN SU CONTRA, VULNERA EL DERECHO DE DEFENSA

"B. a. En el momento en el que ocurrieron los hechos que se examinan aún no se encontraba vigente la Ley de Procedimientos Administrativos, que contiene importantes regulaciones en torno a dichos procedimientos. De ahí que, a falta de regulaciones específicas en la LCD, la JCD acudía supletoriamente al "derecho común", esto es, al CPCM, por tratarse del instrumento normativo que contenía las reglas generales de tipo procesal y de procedimiento aplicables en el ordenamiento jurídico nacional de manera supletoria.

Así, en los supuestos no regulados por la LCD, la JCD aplicaba lo estipulado en el art. 105 de la citada ley, que remitía al derecho común las cuestiones no previstas en esa ley especial, y lo estipulado en el art. 20 del CPCM, que fija una regla de supletoriedad respecto de las cuestiones procesales, cuando no exista una regulación específica en las leyes especiales que las rijan. De ahí que es preciso definir los alcances de la supletoriedad del CPCM en el marco del procedimiento administrativo que se llevó contra el señor HE.

b. De conformidad con los arts. 105 de la LCD y 20 del CPCM, en defecto de disposición específica en la LCD, las normas adscritas a las disposiciones del CPCM se debían aplicar supletoriamente en el marco del procedimiento administrativo seguido contra el señor HE. Entonces, existía la posibilidad de que en el CPCM se previera una pluralidad de instituciones procesales que podían ser aplicables en dicho procedimiento, de tal suerte que ese régimen se erigía en el caso concreto como la normativa supletoria que debía ser empleada para colmar los vacíos normativos de la LCD.

Precisamente, el art. 20 del CPCM se traduce en una regla básica del ordenamiento procesal con proyección para completar el ordenamiento jurídico, ante la falta de previsión legislativa de determinados supuestos que acontecen en la

realidad procedimental. Por ello, tal influencia sobre el espectro jurídico permite al CPCM adquirir el papel de "norma general" en aquellos ámbitos que por su naturaleza sean comunes a todo proceso –al margen de los aspectos materiales de conocimiento típicos de cada disciplina jurídica–.

En otros términos, con arreglo a su conexión con la estructura básica y esencial de cualquier tipo de procesos, las disposiciones contenidas en el CPCM pueden ser utilizadas para suplir los vacíos legales observados en un orden distinto al patrimonial, sin que ello implique interferencia alguna en los principios y características que rigen este, en lo que resulte aplicable.

Así, ante la falta de previsión de instituciones procesales en la LCD, en el caso concreto eran aplicables supletoriamente los enunciados legales tipificados en el CPCM, siempre y cuando su naturaleza así lo permitiera.

D. a. En el caso específico de la prueba en el procedimiento administrativo seguido contra el señor HE, si bien podrían resultar aplicables ciertas disposiciones contenidas en el CPCM –por ejemplo: las referidas a los principios que rigen la prueba y las condiciones materiales que esta debe cumplir para que sea admitida, como la licitud, pertinencia y utilidad–, lo cierto es que aquellos enunciados legales comprendidos en el mencionado código que se refieren al momento en el que la prueba debe ser ofrecida no se acomodan a lo previsto en la LCD, pues esta prevé una regulación específica para los procedimientos administrativos sancionadores que se siguen de conformidad con ella.

Concretamente, la referida ley establece en su art. 80 que la persona denunciada "tendrá facultad para presentar las pruebas pertinentes al hecho que se investiga dentro del término fijado para la recepción de las mismas, para cuyo efecto deberá notificársele la resolución que ordene la apertura del término para la recepción de pruebas". Además, el art. 83 de la LCD prevé que, al transcurrir la etapa conciliatoria del procedimiento, la JCD debe ordenar una audiencia de recepción de pruebas y notificar a las partes. Esta última disposición también establece que en esa audiencia se recibirán las pruebas que aporten el denunciante, el denunciado, su defensor y aquellas que la JCD estime producir de oficio.

b. En definitiva, la LCD no establece una regla de preclusión para el ofrecimiento de pruebas como la construida por la JCD a partir de una interpretación extensiva in malam partem (en lo perjudicial) de los arts. 276 nº 8 y 284 del CPCM. Por el contrario, dicha ley indica que el denunciante puede presentar las pruebas que considere útiles y pertinentes dentro del término fijado para la recepción de estas, es decir, en la audiencia prevista en su art. 83.

En otras palabras, la citada ley no establece presupuestos –como sí lo hace el CPCM– para que la persona denunciada ofrezca y proponga la prueba antes de la referida audiencia, pues únicamente establece que las pruebas "se presentarán" en la audiencia probatoria. Lo que implica la interpretación más favorable de dicha regla para el ejercicio del derecho de defensa de la persona denunciada (a partir de las diversas acepciones del verbo "presentar") es que las pruebas pueden ser ofrecidas y propuestas hasta la audiencia prevista para ello. Es en dicha audiencia cuando precluye a los intervinientes la oportunidad de señalar a la JCD la prueba cuya incorporación requieren y en esa misma audiencia deben ser formalmente incorporadas al procedimiento.

Ello no significa que cualquier medio de prueba ofrecido por las partes deba ser admitido por la JCD, pues deberá cumplir con los presupuestos procesales para ello: licitud, necesidad, pertinencia y utilidad; de modo tal que dicho órgano podrá rechazar aquellas pruebas que no cumplan con los presupuestos legales de admisibilidad. Tampoco es un óbice para que el denunciante ofrezca pruebas al contestar la denuncia.

c. Además de la prevalencia de la LCD frente al CPCM debido a la especialidad de la materia, no se debe perder de vista que la configuración del proceso civil o mercantil y del procedimiento administrativo sancionador responden a distinta naturaleza y finalidad: (i) el primero ha sido diseñado para tutelar derechos e intereses de índole patrimonial, mientras que el segundo es un instrumento de ejercicio del ius puniendi del Estado, que en el ámbito de la carrera docente se puede traducir en sanciones, entre ellas la separación del cargo; (ii) el primero responde a los principios dispositivo y de aportación, lo que confiere a las partes la disposición del objeto del proceso y la incorporación al proceso de las afirmaciones de hecho en torno a este y la carga de la prueba sobre esas afirmaciones, mientras que con el segundo se pretende garantizar a una persona que, previo a determinarse si corresponde o no aplicarle una sanción, esta será precedida de un procedimiento en el que se observarán los derechos, principios y garantías previstos en la Constitución; y (iii) en los procesos civiles y mercantiles es preceptiva la comparecencia por medio de apoderado, mientras que en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos de conformidad con la LCD esta regla no es indispensable. Precisamente, una persona lega en Derecho –por ejemplo, una persona denunciada que intervenga directamente en el procedimiento sin la asistencia de un abogado– puede desconocer la naturaleza y los alcance del ofrecimiento y de la proposición de la prueba, por lo que podría ubicarse en una situación de desventaja si se aplica en su perjuicio una interpretación formalista como la adoptada por la JCD.

Por último, no se debe perder de vista que, por su naturaleza, en el procedimiento administrativo sancionador se aplican –con los matices que exige la materia– los principios del Derecho penal, entre ellos el de legalidad –respecto de la infracción que se le atribuye y del procedimiento mismo– y la presunción de inocencia. De ahí que, exigirle a una persona a la que se le está siguiendo un procedimiento administrativo sancionador que ofrezca y proponga la prueba únicamente al contestar la demanda, cuando la ley no establece una limitante de esa naturaleza, reduce considerablemente sus oportunidades de defensa en el procedimiento.

d. En conclusión, en el procedimiento administrativo sancionador seguido contra el peticionario las pruebas podían ser ofrecidas y aportadas por este en la audiencia establecida para ello, sin que fuera posible exigir, como lo hace el CPCM, que la prueba fuese ofrecida únicamente con la contestación de la denuncia.

Por consiguiente, la decisión de la JCD de negar al peticionario la incorporación de prueba testimonial al procedimiento administrativo sancionador seguido en su contra, en desconocimiento de la regla expresa contenida en la LCD que lo facultaba para presentar prueba en la audiencia prevista para ello, vulneró sus derechos de defensa y a recibir una retribución, por lo que es procedente ampararlo en su pretensión."

TRIBUNAL DE LA CARRERA DOCENTE OMITIÓ REALIZAR UN EXAMEN INTEGRAL DEL CASO, QUE PERMITIERA INVALIDAR LOS ACTOS DE LA JUNTA DE LA CARRERA DOCENTE QUE VULNERARON AL PETICIONARIO SU DERECHO DE DEFENSA Y, REPARAR CON ELLO LA INFRACCIÓN RECLAMA

"3. En cuanto a la actuación del TCD es preciso señalar que de conformidad con el art. 85 de la LCD dicho tribunal es competente para confirmar, modificar o revocar –en cuyo caso puede emitir la decisión que corresponda– las decisiones de la JCD. No obstante, el art. 86 de la LCD también le confiere la facultad de declarar la nulidad de aquellos actos que vulneren derechos fundamentales.

Si bien la citada disposición indica que "el perjudicado tendrá derecho a pedir la declaratoria de nulidad ante la [j]unta o el [t]ribunal", ello no debe ser entendido en el sentido que únicamente procederá la declaratoria de nulidad de actuaciones a petición del interesado. Por el contrario, lo previsto en la citada disposición no es un óbice para que, con la finalidad de maximizar el ejercicio de tales derechos y con base en lo dispuesto en el art. 105 de la LCD, el tribunal aplique supletoriamente la regla prevista en el art. 235 del CPCM, que le permite declarar de oficio las nulidades insubsanables, por tratarse de la regla que más favorece el derecho de defensa de los intervinientes en el procedimiento administrativo sancionador.

En definitiva, dicha regla pudo ser aplicada en el caso bajo análisis, pues, a partir del examen integral del expediente del procedimiento administrativo, el TCD tuvo la oportunidad de advertir que la JCD había vulnerado al actor su derecho de defensa al impedirle aportar prueba que ofreció oportunamente y de declarar la nulidad de las actuaciones de la JCD (art. 232 letra c del CPCM), para que el vicio que había ocurrido en el transcurso del procedimiento fuese subsanado.

De ahí que la omisión del TCD de realizar un examen integral del caso, que permitiera invalidar los actos de la JCD que vulneraron al peticionario su derecho de defensa y reparar con ello dicha infracción, coadyuvó a que esta se mantuviera hasta la actualidad y que, además, se concretara la sanción que le fue impuesta, a pesar del vicio ocurrido en el transcurso del procedimiento administrativo en cuestión. En consecuencia, también es procedente declarar ha lugar el amparo con relación al TCD."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 438-2017, fecha de la resolución: 17/12/2021

RECURSO DE REVOCATORIA

INEXISTENCIA DE REGULACIÓN EN LA LEY DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES

"1. La LPC carece de una regulación relativa al recurso de revocatoria contra las resoluciones que, como la improcedencia, le ponen fin al proceso sin conocer el fondo del asunto planteado en la demanda. Pese a ello, el Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM) establece que las decisiones que pueden ser controvertidas por medio de la revocatoria son los decretos y los autos no definitivos, de conformidad con el artículo 503 de ese cuerpo normativo, salvo ciertos casos excepcionales de autos definitivos que sí admiten tal recurso –por ejemplo, los prescritos en los artículos 139, 278 inciso 2º, 513 inciso 2º y 530 inciso 2º del CPCM–."

AUTOS DEFINITIVOS NO SON CUESTIONABLES POR MEDIO DEL RECURSO DE REVOCATORIA

"Como regla general, los autos definitivos no son cuestionables mediante una solicitud de revocatoria, por lo que, de intentar aplicar supletoriamente el régimen que el referido código establece sobre ese tipo de recursos tendría que inferirse que los autos que declaran la improcedencia de la demanda no podrían ser recurridos mediante la revocatoria, ya que dichas decisiones forman parte de los autos de carácter definitivo.

2. Por otro lado, en la sentencia de 4 de marzo de 2011, amparo 934-2007, se estableció que algunos principios y mecanismos de los procesos cuyo conocimiento le corresponde a los tribunales ordinarios no pueden ser trasladados automáticamente a los procesos constitucionales, por lo que no cualquier disposición del CPCM es aplicable a estos últimos, sino solo aquellas que se adecúen a su especialidad y sean indispensables para su eficaz gestión."

LA IMPUGNABILIDAD OBJETIVA REGULADA EN EL CPCM NO ES APLICABLE A LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

"En ese sentido, el régimen del recurso de revocatoria previsto en el citado cuerpo normativo, específicamente el referido a la impugnabilidad objetiva, no es aplicable a los procesos constitucionales, por lo que sí es posible solicitar la revocatoria de las resoluciones que declaran la improcedencia de una demanda de amparo.

Ello es así por las siguientes razones: i) la jurisprudencia consolidada en lo relativo a tramitar las revocatorias planteadas contra las improcedencias de demandas de amparos; ii) las decisiones adoptadas en el ámbito constitucional no pueden ser controladas por ninguna autoridad, a diferencia de las sentencias y autos definitivos pronunciados por la jurisdicción ordinaria que pueden ser recurridos mediante apelación, la que es resuelta por una autoridad judicial

distinta a la que pronuncia la resolución cuestionada; iii) la LPC indica que las sentencias emitidas en los amparos e inconstitucionalidades no admiten recurso alguno –artículos 10, 83 y 86 de la LPC–, pero no prohíbe medios impugnativos respecto de los autos definitivos emitidos en los procesos constitucionales; y iv) el fundamento de los recursos radica en el reconocimiento de la falibilidad humana y, en el caso de la revocatoria, en la posibilidad de que el propio juez o tribunal pueda reconsiderar y rectificar una decisión en la que no se conoció del asunto de fondo antes de que se convierta en firme.

Por consiguiente, los recursos de revocatoria que sean formulados en contra de las resoluciones que, por ejemplo, declaran la improcedencia de la demanda serán tramitados siempre que se cumplan las condiciones formales establecidas en el CPCM –de aplicación supletoria en tales aspectos– para su interposición.

En ese orden de ideas, es preciso señalar que mediante los recursos –la revocatoria, en particular– se persigue un nuevo examen de lo que fue resuelto por el mismo tribunal en la resolución que se cuestiona, para que esta sea modificada o anulada, con base en las razones que el recurrente arguya para ello.

En ese sentido, para que tal recurso prospere, el impugnante debe cumplir las condiciones formales requeridas para su incoación, tales como la presentación en el plazo determinado y, además, debe realizar un esfuerzo argumentativo que ponga de manifiesto, desde su punto de vista, la incorrección de la decisión que se busca controvertir, por medio del planteamiento de argumentos tendientes a desvirtuar los fundamentos de la resolución recurrida –artículo 504 inciso 1º del CPCM–. De lo contrario, la justificación de la providencia que se impugna se mantendría incólume y, por tanto, esta tendría que conservarse."
Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 366-2019, fecha de la resolución: 12/02/2021

SERVICIOS PÚBLICOS

DEFINICIÓN

"En ese contexto, los denominados "servicios públicos" son las actividades esenciales para la comunidad organizada, cuya titularidad se ha reservado para sí el Estado y tienen como objetivo fundamental satisfacer necesidades o intereses generales del conglomerado social o de una parte de él. Su gestión es realizada por una institución pública de manera directa o por personas naturales o jurídicas delegadas según el régimen jurídico que se adopte con relación a dicho servicio, de manera que se garantice su continuidad, regularidad y generalidad.

En relación con ello, en la sentencia de 26 de agosto de 1998, inconstitucionalidad 4-97, se afirmó que el servicio público gira en tomo a tres elementos básicos: (i) la necesidad o interés que debe satisfacerse, que no es la necesidad o interés de quien presta el servicio, sino la suma de las necesidades o intereses individuales de los usuarios –la población entera o la parte de ella para cuya satisfacción se crea el servicio–; (ii) la titularidad del sujeto que presta el

servicio, que adopta las modalidades de directa, indirecta o mixta, dependiendo de la participación más o menos directa de la Administración; y (iii) el régimen jurídico al que se encuentra sujeto, que es el del Derecho Público, lo cual implica que el Estado se encuentra obligado a intervenir en su regulación para evitar los abusos de cualquier orden en que incurran quienes prestan o realizan el servicio.

Dado que es admisible que determinados servicios públicos sean prestados por distintos sujetos –el Estado, personas naturales o jurídicas–, independientemente de quien sea el que preste el servicio no puede quedar al arbitrio de los particulares ni de la propia Administración el calificar cuándo una actividad tiene el carácter de necesidad colectiva o de interés general y, por ende, si se trata o no de un servicio de carácter público.

Lo contrario podría causar que determinadas actividades que son de carácter público sean ejercidas por los particulares sin mayores restricciones o, por el contrario, que el Estado, mediante los órganos e instituciones que lo componen, erija en servicio público cualquier actividad de carácter privado y, consecuentemente, se limite el derecho de los particulares a ejercer una actividad que, en principio, es libre, aunque sujeta a determinada regulación, control o restricción.

Por ello, para determinar la existencia de un servicio público, se debe tomar en cuenta, por un lado, la asunción por los poderes públicos de la titularidad de dicha actividad como un servicio público mediante una ley formal –con la consecuente responsabilidad de satisfacer tal necesidad por sí o por medio de un ente delegado– y, por otro lado, la concurrencia de un interés público que requiera de una intensa regulación y control estatal.

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 262-2018, fecha de la resolución: 13/10/2021

SUPRESIÓN DE PLAZAS

FACULTAD QUE POSEEN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA MODIFICAR SU ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, PERO ESTA ATRIBUCIÓN NO PUEDE EJERCITARSE DE FORMA ARBITRARIA NI FRAUDULENTA

"Sin embargo, ello no debe implicar el menoscabo del derecho a la estabilidad laboral del que gozan los servidores públicos y convertir la supresión de plazas en un sistema anómalo o encubierto de remoción y sustitución de personas. Por ello, previo a ordenar la supresión de un puesto de trabajo, se requiere que la autoridad competente cumpla con las formalidades siguientes: (i) elaborar un estudio técnico de justificación, basado exclusivamente en aspectos de presupuesto, necesidad del servicio y técnicas de análisis ocupacional; (ii) adoptar las medidas compensatorias de incorporación a un empleo similar o de mayor jerarquía o, cuando se demuestre que esto no es posible, conceder una indemnización; (iii) reservar los recursos económicos necesarios para efectuar el pago de las indemnizaciones respectivas; y (iv) levantar el fuero sindical en el supuesto de empleados aforados conforme al art. 47 inc. 6° de la Cn.

En consecuencia, si bien la figura de supresión de plaza es una facultad de las instituciones públicas para modificar su estructura organizativa conforme a la ley, dicha atribución no debe ejercitarse de forma arbitraria. Por ello, previo a ordenar la supresión de una plaza de trabajo, debe comprobarse que esta es innecesaria para el desarrollo normal de las actividades de la institución y que efectivamente desaparecerá del presupuesto institucional. Ello resulta indispensable en virtud de que se suprimirá la plaza de un servidor público que goza de estabilidad laboral por ser parte integrante de la carrera administrativa."
Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 190-2016, fecha de la resolución: 23/06/2021

SUSTITUCIÓN PROCESAL O SUCESIÓN PROCESAL

REPRESENTA UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA DE LA LEGITIMACIÓN

"c. Por regla general, los sujetos de la relación jurídico-procesal no se modifican durante el desarrollo del proceso; sin embargo, debido a circunstancias excepcionales puede configurarse una sustitución o una sucesión procesal.

La figura de la sustitución procesal representa una excepción a la regla de la legitimación, puesto que se habilita a una persona para ejercer una pretensión o para resistirla, sin que sea titular de la categoría o la relación sustancial que constituye el objeto de la litis; en cambio la sucesión procesal conlleva la transmisión de las obligaciones y derechos litigiosos de los sujetos originariamente integrantes de la relación procesal.

Debe recordarse que, tal como ha sostenido esta Sala en su jurisprudencia, verbigracia la resolución de 3 de noviembre de 2005, amparo 785-2003, la extinción de la personalidad jurídica de una de las autoridades demandadas no implica per se la finalización anormal del proceso iniciado, ya que debe ponderarse que la finalidad última de los procesos constitucionales es salvaguardar las categorías jurídicas subjetivas de trascendencia constitucional consagradas a favor de los gobernados y en tal sentido la mera desaparición del ente demandado no supone que deje de analizarse la reparación o subsanación de las posibles violaciones alegadas, máxime cuando el acto reclamado continúa desplegando sus efectos negativos sobre la esfera jurídica del particular."
Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 219-2020, fecha de la resolución: 20/05/2021

TASAS MUNICIPALES A VALLAS PUBLICITARIAS

CONCEJO MUNICIPAL ES COMPETENTE PARA CREAR ORDENANZAS QUE REGULEN LA PUBLICIDAD COMERCIAL QUE SE REALIZA DENTRO DE SU TERRITORIO

"a. El art. 204 ord. 1º y 3º de la Cn. dispone que la autonomía del municipio comprende crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones públicas, así como

gestionar libremente las materias de su competencia. Con ello, la Constitución fortalece un aspecto esencial de la autonomía municipal: el relativo a los ingresos tributarios.

b. En relación con las tasas impugnadas, se advierte que el art. 4 nº 6 del Código Municipal prescribe que es competencia de los municipios "[l]a regulación y supervisión de los espectáculos públicos y la publicidad comercial, en cuanto conciernen a los intereses y fines específicos municipales". Ello implica que los municipios se encuentran habilitados para controlar la publicidad que esté instalada dentro de su correspondiente circunscripción territorial y, además, para ejercer su poder tributario mediante el establecimiento de ciertas clases de tributos.

De ahí que el Concejo Municipal de San Luis Talpa es competente para crear ordenanzas que regulen la publicidad comercial que se realiza dentro de la circunscripción territorial de dicho municipio y, por ello, se encuentra facultado para proporcionar las contraprestaciones que la disposición impugnada contempla.

c. Además, específicamente respecto de la tasa establecida en el art. 13 nº 7 y nº 8 de la ORTSEMUSALT, se advierte que el art. 4 nº 23 del Código Municipal prescribe que es competencia de las municipalidades regular el "... uso de parques, calles, aceras y otros sitios municipales". El art. 61 del mismo cuerpo legal establece que son bienes del municipio "[l]os de uso público, tales como plazas, áreas verdes y otros análogos; [así como] [l]os bienes muebles o inmuebles, derechos o acciones que por cualquier título ingresen al patrimonio municipal o haya adquirido o adquiera el municipio o se hayan destinado o se destinen a algún establecimiento público municipal". Por su parte, el art. 130 de la LGTM, señala que están afectos al pago de tasas los servicios públicos que representan uso de bienes municipales.

De lo anterior se colige que el Concejo Municipal de San Luis Talpa es competente para regular a través de ordenanzas el uso de espacios públicos propios o encomendados a su administración, a lo que se suma el poder tributario que les confiere el mencionado art. 204 de la Cn., por lo que puede crear tasas por el uso de dicho espacio público.

C. En razón de lo expuesto, se concluye que los arts. 13 nº 7 y nº 8 y 14 letras d) y e) de la ORTSEMUSALT no vulneran el derecho a la propiedad de la sociedad actora, por la inobservancia del principio de reserva de ley en materia tributaria, pues la regulación de las tasas establecidas en dichos artículos está comprendida dentro de las competencias que tanto la Constitución como la legislación secundaria confieren a los municipios. Por lo anterior, resulta procedente declarar que no ha lugar la pretensión planteada por la sociedad demandante en relación con los citados derecho y principio.

3. Determinado lo anterior, corresponde examinar la pretensión planteada por la sociedad actora referida a que las tasas impugnadas vulneran su derecho a la propiedad por la inobservancia del principio de capacidad económica, ya que, aparentemente, el quantum de estas fue estipulado sin haber realizado previamente un análisis de la capacidad económica de los sujetos pasivos, lo cual produce que no exista equiparación entre los montos que el contribuyente paga por esas tasas y las contraprestaciones que recibe."

LA CAPACIDAD ECONÓMICA NO ES EXIGIBLE EN LAS TASAS

"Al respecto, es preciso acotar que en la sentencia de 10 de octubre de 2012, inconstitucionalidad 15-2012, se sostuvo que las tasas se rigen por el principio de beneficio. En tal sentido, su configuración requiere la existencia de una actividad estatal que favorece de manera particular al sujeto pasivo de la tasa, es decir, existe un provecho específico para el obligado al pago, el cual puede ser de naturaleza jurídica o mixta, según sea la actividad estatal respectiva. Así, la capacidad económica no es exigible en las tasas, aunque en algunos supuestos concretos se puede tomar en consideración para la emisión de ese tipo de tributos.

Del análisis de los tributos en cuestión se advierte que el Concejo Municipal de San Luis Talpa no tomó en consideración para su emisión la capacidad económica de los sujetos pasivos de esos tributos, pues estructuró las tasas impugnadas con base en el principio de beneficio. Dicho provecho deriva, por un lado, de una autorización mensual para el uso del suelo y del subsuelo en espacio público y, por otro, de la extensión de una licencia o un permiso anual para que los sujetos pasivos de la obligación tributaria puedan colocar vallas publicitarias dentro de la circunscripción territorial de ese municipio.

Además, en la sentencia de 20 de febrero de 2013, amparo 617-2010, se afirmó que la sola verificación de la proporcionalidad en el sentido estrictamente tributario de correlación matemática entre, por un lado, el quantum de una tasa y, por otro, el costo del servicio, el beneficio para el contribuyente o la capacidad económica de este, es una cuestión que carece de relevancia constitucional y por ello no puede ser sometida a conocimiento de esta Sala en esos términos.

Por consiguiente, se concluye que el Concejo Municipal de San Luis Talpa no vulneró el derecho a la propiedad de la sociedad actora al emitir los arts. 13 nº 7 y nº 8 y 14 letras d) y e) de la ORTSEMUSALT, pues no tomó en consideración para la emisión de las tasas contenidas en estos la capacidad económica de los sujetos pasivos de esos tributos, sino que los estructuró con base en el principio de beneficio, por lo que resulta procedente declarar que no ha lugar la pretensión planteada por la sociedad demandante en relación con el aludido derecho por la inobservancia del principio de capacidad económica."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 506-2017, fecha de la resolución: 07/06/2021

TASAS

DEFINICIÓN

"VI. En cuanto a las tasas, en la sentencia del 30 de abril de 2010, amparo 142-2007, se les caracterizó con los siguientes elementos: (i) es un gravamen pecuniario, que puede regularse en una ley u ordenanza municipal y frente al cual el Estado o el Municipio se comprometen a realizar una actividad, la cual

debe plasmarse expresamente en su texto; (ii) se trata de un servicio o actividad divisible, a fin de posibilitar su particularización, y (iii) se trata de actividades que el Estado o el Municipio no pueden dejar de prestar porque nadie más está facultado para desarrollarlas."

CONTRAPRESTACIÓN, ES LA CARACTERÍSTICA QUE DIFERENCIA LAS TASAS DE LOS RESTANTES TRIBUTOS

"A. a. Tal como se sostuvo en las sentencias del 15 de febrero de 2012 y 21 de agosto 2013, inconstitucionalidad 66-2005 y amparo 428-2011 respectivamente, el hecho generador de las tasas es una actividad material o un servicio jurídico o administrativo que el Estado presta y que está vinculado con el obligado al pago, pues obtiene un beneficio de su realización. En ese sentido, la contraprestación es la característica que diferencia las tasas de los restantes tributos. Así, dicha contraprestación puede consistir en una actividad material o tangible que implica un servicio por parte del municipio a favor de quien efectúa el pago de cierta cantidad de dinero (aseo, alumbrado público, ornato, etc.) o en un servicio jurídico o administrativo encaminado a hacer constar que, por el pago de cierta cantidad de dinero, el contribuyente está autorizado para realizar determinada actividad dentro del municipio (la emisión de una licencia, permiso, autorización, etc.).

Ahora bien, en la ordenanza correspondiente tiene que consignarse expresamente la contraprestación que se otorga por el pago de una determinada tasa. Al respecto, los arts. 5 y 129 de la LGTM prescriben que las tasas municipales se generan en virtud de aquellos servicios públicos de naturaleza jurídica o administrativa prestados por los municipios. De ello se desprende que, para justificar constitucionalmente el cobro de una tasa, la normativa respectiva deberá establecer con precisión cuál es esa actividad que se generará como contraprestación por el cobro del canon, como podrían ser la extensión de un permiso, una licencia o una autorización (servicios jurídicos o administrativos) o una actividad material que sea consecuencia directa del pago de ese tributo.

b. En ese sentido, del contenido de la disposición impugnada se advierte que, en virtud de los tributos relativos a los permisos "para la extracción de agua con fines comerciales o industriales" y "para la extracción y comercialización del recurso hídrico del municipio", la sociedad contribuyente recibe como contraprestación la expedición de permisos que la facultan para extraer y comercializar agua dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Quezaltepeque, es decir, para la explotación de aguas freáticas. Así, debido al pago de determinadas cantidades de dinero, el Municipio de Quezaltepeque se encuentra en la obligación de extender permisos que facultan a la sociedad contribuyente a realizar tal actividad. Consecuentemente, si bien es cierto que la disposición impugnada no prescribe la realización de una actividad material o tangible por parte del municipio mencionado, sí regula un servicio público de carácter jurídico –permiso– que los sujetos obligados al pago reciben como contraprestación."
Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 203-2017, fecha de la resolución: 07/06/2021

TRANSFUGUISMO POLÍTICO

FRAUDE AL ELECTOR

"La jurisprudencia de esta Sala ha señalado que el fraude al elector –dentro de este el transfuguismo– es un concepto amplio que incorpora diversos supuestos que pueden ser constitutivos de aquel –improcedencia de 5 de febrero de 2021, amparo 410-2020–, por lo que las situaciones que esta Sala ha señalado expresamente en sus decisiones como transfuguismo son únicamente ejemplos y no una lista taxativa.

En ese orden, el fraude electoral refiere a una situación que ocurre posterior a que el elector ya ejerció el sufragio y el candidato que ha obtenido el cargo respectivo defrauda la voluntad y decisión de las personas que lo eligieron junto a su programa y oferta política –resolución de aclaración de 20 de noviembre de 2020, inconstitucionalidad 10-2011–."

PROHIBICIÓN APLICABLE AL ÁMBITO MUNICIPAL

"Es decir, la prohibición del transfuguismo –como fraude al elector– no solo es aplicable al ámbito legislativo, sino también al municipal, en tanto que los gobiernos locales son de elección directa, y con las peculiaridades para su configuración a que se refiere el art. 219 CE –sentencia de 1 de marzo de 2017, inconstitucionalidad 39-2016–.

En tal sentido, el argumento que expone la abogada de la señora […] para justificar la conducta de su representada referente a que esta no ha incurrido en transfuguismo por haberse mantenido en el cargo como Concejal por San Salvador, como lo exige la ley "... pero hoy su [c]andidatura era diferente ya no [m]unicipal sino [l]egislativa no en San Salvador sino en Santa Ana...", no reflejaría una excepción a la prohibición en cuestión.

Y es que, el hecho que se mantenga en el cargo de Concejal y que su candidatura por un nuevo partido no sea de la misma naturaleza a la del cargo por el que pretendía postularse no significa que no haya "abandonado" al partido político que le permitió llegar al cargo que actualmente ocupa para afiliarse a otro con la finalidad de postularse en los próximos comicios.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha indicado que el cambio de ideología partidaria que implica la renuncia de un partido político para ingresar a otro, no solo podría incidir en la correlación entre el número de votos obtenidos y el de representantes de esa fuerza política para la toma de decisiones en un determinado ente público –v. gr. el Concejo Municipal–, sino que implica una afectación a los principios de la democracia representativa y el pluralismo político –inconstitucionalidad 39-2016 previamente relacionada–.

En virtud de lo expuesto, de los alegatos de la apoderada de la actora no se logra inferir la concurrencia de una excepción a la prohibición de transfuguismo,

por lo que no se evidencian las posibles afectaciones de trascendencia constitucional que alega la parte actora como consecuencia del acto que impugna, debiendo rechazar tales planteamientos a través de la improcedencia."

Sala de lo Constitucional, amparo, número de referencia: 20-2021, fecha de la resolución: 24/02/2021

MATERIA: HÁBEAS CORPUS

ACTOS DE COMUNICACIÓN

GARANTIZAN EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LAS PARTES PROCESALES

"III. 1. La jurisprudencia constitucional ha establecido que los actos de comunicación dentro de un proceso judicial, revisten de suma importancia a efecto de garantizar los derechos de las partes procesales.

Así, la notificación como acto de comunicación condiciona la eficacia del proceso, pues asegura un conocimiento real y exacto del acto o resolución que la motiva, permitiendo que el notificado pueda disponer lo conveniente para la defensa de sus derechos o intereses. Por tanto, la falta de un acto de comunicación o su realización deficiente, impidiendo su finalidad orientada a trasladar al conocimiento del destinatario lo decidido por la autoridad judicial, incide negativamente en los derechos de aquel; cuando la decisión puede ser recurrida, también puede afectar el derecho a los medios de impugnación que regula la ley, que se deriva del derecho de defensa—art. 12 inc. 1° Constitución (Cn.)—"

NORMATIVA APLICABLE

"El Código Procesal Penal (CPP) desarrolla en el capítulo V del título IV del libro primero, lo relativo a los actos de comunicación. Dentro de dichas disposiciones, el artículo 156 dispone, entre otras cuestiones, que las resoluciones deberán notificarse a quienes corresponda, en un plazo de veinticuatro horas después de haber sido dictadas.

Por su parte, el artículo 159 establece que "Sí las partes tienen defensor, representante o apoderado, las notificaciones serán hechas solamente a estos, salvo que la ley o la naturaleza del acto exijan que también ellas sean notificadas personalmente.".

Según la regla general y con relación al imputado, las resoluciones serán notificadas únicamente a su defensor, con el objeto de asegurar que quien desarrolla un rol de asesoramiento técnico y de defensa de los derechos del procesado tenga conocimiento de las decisiones judiciales y pueda ejercer el control de estas mediante cualquiera de los medios de impugnación que señala la normativa procesal penal. La regla apuntada tiene dos excepciones reguladas en el art. 159 CPP pues el imputado deberá ser notificado personalmente cuando: esté establecido así en la ley (a) o, sea una exigencia de la naturaleza del acto realizado o que se va a realizar (b).

Respecto al segundo de los casos de excepción planteados, se ha sostenido la necesidad de notificar directamente al imputado cuando la decisión del juez o tribunal constituya una privación directa y gravosa a un derecho fundamental, con el objeto de posibilitar el conocimiento de la misma y la impugnación de tal decisión —sentencia de 4 de junio de 2018, hábeas corpus 478-2017-."

PRESUPUESTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 163 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA NOTIFICAR POR EDICTO

"Además, se ha determinado que el presupuesto contenido en el art. 163 CPP para notificar por la vía de edictos en él señalada es que "se ignore el lugar donde se encuentre la persona a notificar", es decir, es necesario que exista una incertidumbre sobre este aspecto, la cual implica la existencia de actividades previas por parte de la autoridad demandada tendientes a superar ese desconocimiento del lugar para contactar al imputado, porque solo de esa manera es que se habilitaría el uso de dicho mecanismo de comunicación, para ser compatible con los derechos fundamentales del afectado —sentencia de 7 de octubre de 2020, hábeas corpus 437-2018—."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 311-2019, fecha de la resolución: 26/11/2021

ARRESTO DOMICILIARIO

DEFINICIÓN

"III. 1. La medida cautelar de arresto domiciliar es un mecanismo de coerción personal cuyo propósito es asegurar la presencia del incoado durante el proceso y evitar la obstaculización de este último, que consiste, según lo determina el art. 332 núm. 1 CPP, en la permanencia del imputado en su residencia, con vigilancia o sin ella, o con el uso de medios tecnológicos apropiados.

Dicha medida cautelar, en tanto obliga a quien se le impone a mantenerse confinado en el lugar que la autoridad judicial haya establecido, implica una restricción al derecho de libertad física, entendido el término "restricción" de forma amplia, comprensivo de todas las medidas que pueden ir en detrimento de la libertad, poseyendo todas ellas un núcleo común consistente en la injerencia por la limitación, disminución, racionamiento o reducción del derecho referido aunque no exista de por medio precisamente una detención –sentencia de 30 de marzo de 2011, hábeas corpus 143-2009–.

En ese sentido, constituyendo el arresto domiciliario una restricción al derecho de libertad física, objeto de tutela del proceso constitucional de hábeas corpus, esta sala se encuentra habilitada para analizar reclamos sustentados en la inconstitucionalidad de la referida medida de coerción."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 370-2019, fecha de la resolución: 18/08/2021

BARTOLINAS

USO DEBE DE SER MOMENTÁNEO, YA QUE NO ESTÁN DISEÑADAS PARA ALOJAR PERSONAS POR PERÍODOS PROLONGADOS

"En ese sentido este Tribunal, cuando ha estimado reclamos de esta naturaleza, ha concluido que las bartolinas policiales deben utilizarse solo momentáneamente para resguardar privados de libertad, como lo refiere la legislación, señalando que las delegaciones policiales y sus bartolinas no están diseñados para el alojamiento de personas por periodos prolongados que superen los plazos de detención administrativa y detención por inquirir porque carecen de la estructura y servicios básicos para asegurar mínimamente los derechos de las personas privadas de libertad y, además, el personal policial no está capacitado para la custodia directa de reclusos, ni es parte de sus funciones naturales.

Sobre este asunto, esta Sala también ha citado en su jurisprudencia lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado respecto del tema, en cuanto a que deben adoptarse las medidas legislativas y las reformas estructurales necesarias para que la detención en sede policial sea utilizada en la menor medida posible, sólo hasta que una autoridad judicial determine la situación de la persona arrestada (sentencia de 27 de mayo de 2016, hábeas corpus 119-2014Ac).

Debe señalarse, además, que el mantenimiento de imputados en las bartolinas policiales solo resultaría justificado en principio cuando se acredite fácticamente que la persona puede ser objeto de una situación concreta de grave peligro para su vida o integridad y que el sistema penitenciario no puede garantizar su seguridad, en cuyo caso la opción de guardar detención en tales lugares sería atendible –para el solo efecto de resguardar de mejor forma su integridad personal de manera muy excepcional–. En todo caso, la infraestructura del lugar debe reunir las condiciones mínimas exigidas por los estándares internacionales en materia de privación de libertad y ello deberá en todo caso ser por el tiempo estrictamente necesario. Además, esta situación debe disponerse de manera expresa y fundamentada, informándolo oportunamente a la autoridad judicial a cuya orden se encuentra la persona detenida, y teniéndose en cuenta estrictamente la temporalidad de la privación de libertad en ese lugar (sentencia de 8 de febrero de 2019, hábeas corpus 53-2018)."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 442-2019, fecha de la resolución: 24/02/2021

CITACIÓN

CONDICIONA LA EFICACIA DEL PROCESO

"La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la citación, como acto de comunicación, condiciona la eficacia del proceso pues habilita un conocimiento real de la resolución que la motiva y permite al convocado poder disponer lo conveniente para la defensa de sus derechos o intereses.

En ese sentido, la autoridad jurisdiccional debe agotar los actos procesales de comunicación para dar a conocer la citación y posibilitar así el ejercicio real de los derechos de defensa y audiencia de la persona citada, artículos 11 y 12 de la Constitución –sentencia de 9 de septiembre de 2016, hábeas corpus 128-2016–.

El Código Procesal Penal (CPP) establece que la citación tiene una dimensión de orden coactiva escrita que debe ser comunicada al imputado de manera efectiva, para asegurarle el derecho de ser escuchado ante los cargos penales que se le formulan, y solo ante la reticencia del mismo a comparecer procede decretar su detención.

Así, el artículo 165 CPP prescribe: "Cuando sea necesaria la presencia de una persona para algún acto procesal, se ordenará su citación mediante carta certificada, telegrama con aviso de entrega o por cualquier otro medio de comunicación que garantice la autenticidad del mensaje". Por su parte, el art. 321 CPP señala: "Cuando sea necesaria la presencia del imputado el juez dispondrá su citación, presentación o detención mediante orden escrita, que contenga los datos personales del imputado u otros que sirvan para identificarlo y la indicación del hecho que se le atribuye".

De lo expuesto, resulta que el acto de citación debe ser correctamente verificado para generar eficacia a su finalidad y ello implica que el justiciable debe estar en posición de conocer la citación, lo cual no siempre se garantiza con la expedición de edictos –sentencia de 25 de febrero de 2019, hábeas corpus 403-2018R–

CITA POR EDICTOS DEBE DARSE SÓLO CUANDO SE IGNORE EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA PERSONA A NOTIFICAR

"En cuanto a la cita por edictos esta sede ha afirmado que el presupuesto contenido en el art. 163 CPP para notificar por esa vía es que "se ignore el lugar donde se encuentre la persona a notificar", es decir, es necesario que exista una incertidumbre sobre este aspecto, la cual implica la existencia de actividades previas por parte de las autoridades judiciales tendientes a superar ese desconocimiento del lugar para contactar al justiciable, porque solo de esa manera es que se habilitaría el uso de este mecanismo de comunicación.

Se ha reiterado que no basta con señalar que en la dirección proporcionada no se encontró a la persona a notificar, sino que la falta de conocimiento sobre este aspecto implica una actividad previa de gestiones suficientes de búsqueda por parte de la autoridad judicial competente, por ejemplo, a través de la información que pueda obtenerse de las oficinas públicas que manejan datos relativos a la dirección de residencia de las personas o a la autoridades migratorias cuando se alegue que la persona no se encuentra en el país, las cuales dependerán de cada caso específico y no se limitan a los ejemplos citados. Solo habiendo llevado a cabo este tipo de actividades se podrá entender cumplido el requisito relacionado y, consecuentemente, habilitaría la comunicación de la manera indicada, siendo respetuoso así de los derechos fundamentales de audiencia y defensa.

Debe recordarse que, no obstante está regulado legalmente la realización de actos de comunicación a través de los referidos edictos, dada la forma en que estos se llevan a cabo –un llamado al imputado por medio de publicaciones en periódicos y no a través de una convocatoria personal en su lugar de residencia o trabajo, por ejemplo–debe acudirse a estos como última opción cuando, después de efectuar las diligencias correspondientes, según se indicó, se ignore dónde se encuentra la persona requerida. Es decir, no es un simple desconocimiento de tal lugar lo que permite utilizar el mencionado mecanismo, sino su ignorancia pese a todas las gestiones pertinentes llevadas a cabo previamente; lo anterior a efecto de garantizar el conocimiento del imputado sobre el proceso penal que se instruye en su contra y su participación en él, a través de la estrategia de defensa que decida, todo lo cual es exigencia de sus derechos de audiencia y defensa –sentencia del 22 de septiembre de 2021, hábeas corpus 105-2019–"
Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 358-2019, fecha de la resolución: 08/11/2021

FINALIDAD

"III. La jurisprudencia de esta Sala ha señalado que la citación, como acto de comunicación, condiciona la eficacia del proceso pues habilita un conocimiento real del acto o resolución que la motiva, y permite al notificado o citado poder disponer lo conveniente para la defensa de sus derechos o intereses.

Así, el acto de la citación lo que persigue es que aquel al que se dirige tenga conocimiento de la decisión del tribunal, es decir, que una persona comparezca, cumpla con una determinada obligación, por lo que es preciso que tenga conocimiento real de que debe comparecer y con qué finalidad.

En ese sentido, la autoridad jurisdiccional debe realizar el agotamiento de los actos procesales de comunicación para dar a conocer la citación y posibilitar así el ejercicio real de los derechos de defensa y audiencia de la persona citada, artículos 11 y 12 de la Constitución —sentencia de 9 de septiembre de 2016, hábeas corpus 128-2016—."
Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 110-2020R, fecha de la resolución: 13/01/2021

CÓMPUTO DE LA PENA

NO SE ENCUENTRA EXENTA DEL CONTROL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

"2. Las sanciones penales son límites al poder punitivo estatal y una representación de la garantía de reserva de ley. Cada acción delictiva se encuentra sancionada bajo criterios previamente establecidos por el legislador, los que permiten que su monto se fije con mínimos y máximos de limitación de la libertad personal u otros derechos, de quien es declarado responsable penalmente en juicio público y a través de una sentencia.

La determinación de la pena se logra insoslayablemente con fundamento en las reglas comprendidas en todo el ordenamiento jurídico, como concreción del principio de legalidad, especialmente aquellas contempladas en el Código Penal y la Ley Penitenciaria. La constitucionalidad de su determinación radica en el respeto a tales reglas y que su aplicación garantice los derechos fundamentales de la persona condenada; teniendo en cuenta además el principio de igualdad y de proporcionalidad de las penas. Caso contrario, la decisión judicial podría ser rebatida por inconstitucional.

En el último supuesto tiene cabida la competencia de este tribunal en materia de hábeas corpus, pues se trataría de una restricción a la libertad física derivada de una decisión judicial contraria al ordenamiento jurídico y en transgresión de derechos fundamentales. Este proceso constitucional ejerce una protección reforzada sobre tal derecho cuando ha sido vulnerado; por tanto, si bien el cómputo de la pena de prisión es una potestad de los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, no se encuentra exenta del control de esta sala, toda vez que el propósito sea determinar si la decisión judicial ha transgredido o no preceptos constitucionales, particularmente si ha vulnerado el derecho de libertad física."

CÓMPUTO DE LAS JORNADAS DE TRABAJO DE UTILIDAD PÚBLICA

"3. El art. 45 del Código Penal (CP) establece como pena principal el trabajo de utilidad pública, con una duración de cuatro a ciento cincuenta jornadas semanales, las cuales se podrán llevar a cabo en períodos entre ocho y dieciséis horas semanales en los lugares y horarios que determine el juez de vigilancia penitenciaria (art. 55 CP). Cada jornada deberá ser computada como si la persona hubiese estado detenida todos los días de la semana (art. 57 CP).

El trabajo de utilidad pública también podrá imponerse en reemplazo de penas de prisión que sean superiores a un año pero no excedan de tres (art. 74 inc. 2º CP).

Con fundamento en el artículo 44 de la Ley Penitenciaria (LP), los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, al recibir la certificación de la sentencia, están obligados a realizar el cómputo del tiempo que la persona condenada ha estado privada de libertad y fijar la fecha en que cumplirá la media, las dos terceras partes y la totalidad de la condena. El mismo podrá rectificarse en cualquier momento."

JUECES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Y DE EJECUCIÓN DE LA PENA ESTÁN OBLIGADOS A DESCONTAR EL TÉRMINO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL CÓMPUTO DE LA PENA, AÚN Y CUANDO EL TRIBUNAL DE SENTENCIA NO LO HAYA REALIZADO, Y SE TRATE DE REMPLAZO DE LA PRISIÓN POR JORNADAS DE TRABAJO DE UTILIDAD PÚBLICA

"A partir de dicha disposición las autoridades competentes para establecer el cómputo, están obligadas a tomar en cuenta el tiempo en que la persona se encontró en detención provisional, dado que se trata de un término en el que estuvo privada de libertad, debiéndose descontar de la pena principal.

Dicho descuento supone garantizar que la medida cautelar ha sido adoptada únicamente para procurar la comparecencia de la persona al proceso penal en garantía de su presunción de inocencia. En tal sentido, no es posible restarle valor al tiempo que sufre en restricción su libertad física, como si se tratara de una pena anticipada a la que se encontraría obligada a cumplir, adicionalmente a la que le sea impuesta en una sentencia condenatoria.

IV. 1. En este caso se reclama que la cámara demandada revocó la rectificación del cómputo de la pena realizada por la juez de ejecución de pena, en la que esta descontó de la pena principal siete meses con dieciocho días que el señor […] estuvo en detención provisional y se fijaron dos jornadas de trabajo por semana.

En la resolución del 9 de octubre de 2018, la cámara aseguró que de acuerdo con el art. 55 LP los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena tienen potestad para modificar la forma de cumplimiento de la pena, mas no para modificar la naturaleza, lo cual implicaría el reducirla al tomar en cuenta el tiempo de la detención provisional. Además, adujo que, según el art. 56 No. 5 LP, para el cómputo del trabajo de utilidad pública dichos jueces se encuentran facultados únicamente para hacerlo al inicio de la ejecución y por tanto no puede llevarse a cabo el cómputo del art. 44 LP, por no tratarse de una pena privativa de libertad.

La autoridad demandada aseveró que no es posible hacer tal descuento porque implica una reducción de la pena impuesta, la cual es una facultad exclusiva del juez o tribunal sentenciador, a pesar de que en este caso fue este último el que advirtió a la jueza de vigilancia penitenciaria tener en cuenta el tiempo de detención provisional del condenado, propiciando el error de esta. Argumentó que si bien no se puede dejar de lado que el tiempo de la detención provisional cumplido podrá abonarse a la pena principal, solamente deberá hacerse cuando se trate de penas privativas de libertad, "en todo caso debió ser la señora Juez Cuarto de Sentencia quien debió realizar esa operación aritmética". Finalmente, determinó que las jornadas de trabajo de utilidad pública no pueden cumplirse dos por semana, porque no lo permite la ley, ello contravendría lo dispuesto en el art. 57 CP, "por cuanto que aun cumpliendo ?dos jornadas a la semana' siempre se deberá computar como si el beneficiado hubiera estado detenido por una semana".

Con fundamento en lo anterior, esta sala advierte que, de acuerdo con el art. 44 LP, todos los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena tienen la potestad de ordenar el cumplimento de la pena y para ello practicar el cómputo del tiempo en el que la persona ha estado privada de libertad, independientemente de la pena principal de que se trate, no es excluyente y el legislador no hace ninguna distinción. Dichos jueces están obligados a descontar el término de la prisión preventiva en el cómputo de la pena aún y cuando el tribunal de sentencia no lo haya realizado y se trate de remplazo de la prisión por jornadas de trabajo de utilidad pública.

Como antes se indicó, esta obligación deriva de la presunción de inocencia en tanto es acorde con el propósito de la medida cautelar de la detención provisional y por ello no cabe considerar que el tiempo de restricción en libertad deba

ser comprendido como una especie de pena anticipada sin control ulterior. La deducción del tiempo sobre la pena que sea impuesta, en este caso de trabajo de utilidad pública, es respetuosa de tales parámetros constitucionales.

Ello no es incompatible con lo dispuesto en el art. 55 LP, dado que este lo que pretende regular es una modificación de la forma de cumplimiento de la pena y no el cómputo para la consecuente ejecución. El descuento referido no es una forma de modificar el cumplimiento de la pena ni alterar su naturaleza, es una garantía al derecho de libertad física que está en juego en una sanción penal.

De lo contrario, es decir, entender que la potestad conferida en la primera disposición es únicamente en cuanto a la pena de prisión, tal como lo ha hecho la cámara, implicaría una interpretación restringida e ilegal en transgresión a su contenido y al derecho de libertad física de la persona condenada, pues no distingue que la potestad esté referida únicamente a la pena de prisión y no a otras penas principales de las reguladas en el art. 45 CP. La interpretación realizada por la cámara limita ilegítimamente dicha potestad legal.

Suponer, como la autoridad demandada, que el término de la detención provisional no debe descontarse de las jornadas de trabajo de utilidad pública de conformidad al art. 44 LP, arts. 55, 57, 74 y 75 CP, por no ser privativa de libertad, es desconocer el propósito garantista que contiene esta regla. Ya en el auto de exhibición personal se refería este tribunal a que con ello se trata de proteger la libertad de la persona para garantizar que su privación cautelar tenga una incidencia efectiva en la cuantificación de la pena impuesta. Sobre todo, debe recordarse que la detención provisional es una grave limitación de derechos aplicada a una persona protegida por el estado de inocencia, de modo que es indispensable que el tiempo de cumplimiento de esa medida sea, por lo menos, efectivamente descontado de la pena aplicada, en la forma que corresponda según la naturaleza de dicha sanción."

LAS JORNADAS DE TRABAJO DE UTILIDAD PÚBLICA IMPONEN INNEGABLEMENTE LIMITACIONES AL EJERCICIO PLENO DE LA LIBERTAD FÍSICA

"Y es que además es preciso considerar que si bien las jornadas de trabajo de utilidad pública no tienen la misma magnitud ni intensidad que la pena de prisión en la libertad física de la persona condenada, también implican una restricción a los alcances que tiene ese derecho fundamental. El sometimiento obligatorio a dichas jornadas en calidad de pena, impone innegablemente limitaciones al ejercicio pleno de la libertad física, en tanto requiere la sumisión a una actividad específica, jornada de tiempo de ejecución, localidad y lapso total en el que se desarrollará el servicio público de que se trate. Así la obligación de cumplir con estas imposiciones conforma un control y dominio sobre las acciones de la persona de manera involuntaria, por tanto constituye una verdadera restricción a su estadía y desplazamiento, libres y espontáneos."

LA INTERPRETACIÓN REALIZADA POR LA AUTORIDAD DEMANDADA ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN, POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, RESPECTO A LAS REGLAS LEGALES PREESTABLECIDAS PARA EL CÓMPUTO DE TRABAJO DE UTILIDAD PÚBLICA, EN REMPLAZO DE LA PENA MÁS GRAVOSA

"De modo que al asegurar la cámara que no es posible restar el tiempo de prisión preventiva a la pena de trabajo de utilidad pública por no ser de prisión, excluyó la importancia del tiempo de privación de libertad que cumplió el favorecido y lo anuló totalmente, en menoscabo de sus derechos de libertad física y seguridad jurídica, y de los principios de legalidad y presunción de inocencia.

Por otro lado, en cuanto a la interpretación de las jornadas semanales de trabajo de utilidad pública que pueda realizar el condenado por haberse remplazado su pena de prisión, la autoridad demandada aseguró que el legislador no permite que se cumplan dos jornadas en una semana porque contraviene el art. 57 CP y, aunque así fuera, siempre se deberá computar como si la persona hubiera estado detenida por una semana.

El legislador establece con claridad que esta pena "obliga al condenado a prestar jornadas semanales de trabajo, que comprenden períodos entre ocho y dieciséis horas semanales" (art. 55 CP). Cuando se trata del remplazo de la pena de prisión la regla de conversión establecida en el art. 75 CP, indica que "cuatro fines de semana o cuatro jornadas semanales de trabajo, equivalen a un mes de prisión." En ninguna disposición el ordenamiento jurídico relativo a esta materia prohíbe que una persona realice más de una jornada de trabajo por semana, al contrario, tal como se destaca del último precepto legal citado, aplicable al caso del beneficiado por tratarse de remplazo de pena de prisión por trabajo de utilidad pública, podrán contabilizarse hasta cuatro jornadas semanales de trabajo que equivalen a un mes de prisión.

Entonces, tal interpretación realizada por la autoridad demandada es contraria a la Constitución, por vulnerar el principio de legalidad respecto a las reglas legales preestablecidas para el cómputo de trabajo de utilidad pública en remplazo de la pena más gravosa y, en consecuencia, con ello transgredir además los derechos de libertad personal y seguridad jurídica.

Cabe añadir que dicha postura no desnaturaliza la pena ordenada, siempre que los juzgadores consideren las condiciones personales del condenado y las características del establecimiento, empresa o programa comunitario al que se le haya asignado (art. 55 LP) y que no se perturbe la actividad laboral normal de aquel (art. 56 LP).

Con fundamento en lo anterior, este tribunal concluye que la revocatoria pronunciada por la Cámara Mixta de Tránsito y de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de la Primera Sección del Centro, en los términos que fue motivada, vulnera los principios de legalidad y de presunción de inocencia, así como los derechos de libertad física y seguridad jurídica del señor EM, por lo tanto, deberá declararse ha lugar la pretensión de hábeas corpus planteada.

2. En cuanto a los efectos de la presente decisión, este tribunal, teniendo en consideración que la resolución pronunciada por la cámara vulnera los derechos

fundamentales y principios referidos, determina que para reparar tal afectación constitucional las cosas deben de volver al estado en que se encontraban hasta antes de la emisión de la aludida decisión, debiendo quedar esta sin efecto. Así, en vista que la resolución pronunciada por la Jueza Cuarta de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador se ajusta a los parámetros constitucionales dados en esta resolución, deberá surtir plenos efectos en la situación jurídica del favorecido."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 30-2019, fecha de la resolución: 22/09/2021

COSA JUZGADA

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE Y QUE HABILITAN DE FORMA EXTRAORDINARIA EL CONOCIMIENTO DE UN CASO DONDE EXISTA COSA JUZGADA

"III 1. La jurisprudencia de esta sala exige el cumplimiento de una de las dos condiciones que habilitan conocer excepcionalmente de un caso en el que exista cosa juzgada, referidas a: 1) cuando durante la tramitación del proceso se invocó el derecho constitucional pero la autoridad correspondiente no se pronunció u omitió reconocer o reparar dicha vulneración; y 2) cuando en el transcurso del proceso no era posible la invocación del derecho constitucional violado, puesto que el diseño del proceso en el que se alega ha ocurrido la violación constitucional, impidió la utilización de cualquier mecanismo procesal orientado a reclamar sobre la vulneración que en esta sede se argumenta.

También se ha afirmado que para tener por utilizados los mecanismos idóneos de reclamación de la violación constitucional que provee el proceso penal vigente, no es necesaria la interposición del recurso de casación —sentencia del 26 de octubre de 2020, hábeas corpus 350-2018—.

Por tanto, es procedente efectuar el análisis de lo propuesto, no obstante exista sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada, pues se reclama de la sentencia emitida en segunda instancia respecto de la cual, según la jurisprudencia citada, no se exigiría reclamo en casación.

2. La jurisprudencia constitucional también ha referido que el inciso 2° del artículo 475 CPP establece que los tribunales de segunda instancia —en el conocimiento de la apelación—pueden "confirmar, reformar, revocar o anular, total o parcialmente, la sentencia recurrida. En caso que proceda a revocarla resolverá directamente y pronunciará la sentencia que corresponda, enmendando la inobservancia o errónea aplicación de la ley".

Según la citada disposición, en el supuesto de presentarse una apelación por alegarse inobservancia o errónea aplicación de la ley, la cámara —tras verificar lo planteado y las actuaciones que consten en el proceso— se encuentra facultada para reformar la decisión en el sentido que estime procedente dentro de los límites de la pretensión.

Sin embargo, la potestad resolutoria contenida en el artículo referido debe ser interpretada conforme a la Constitución, particularmente con el derecho de defensa, sobre la base de la igualdad de armas, y el derecho a un recurso amplio y efectivo, el cual la jurisprudencia constitucional colige del derecho a la protección jurisdiccional dispuesto en el artículo 2 Cn.

Y es que, si bien es posible restringir derechos fundamentales por medio de la ley, la Constitución proporciona previsiones específicas que vinculan la privación —limitación, intervención o restricción— individual de derechos a la existencia de un presupuesto legislativo que no altere los principios, derechos y obligaciones en ella dispuestos —artículo 246 Cn—; de tal manera que las potestades resolutivas consignadas en el art. 475 CPP deben ser interpretadas en el sentido que no generen una mayor afectación al derecho de defensa consagrado al imputado en el art. 12 Cn. —sentencia del 5 de octubre de 2020, hábeas corpus 48-2019—."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 62-2019, fecha de la resolución: 04/06/2021

DECLARATORIA DE REBELDÍA

AL NO GARANTIZARSE LAS CONVOCATORIAS DEL IMPUTADO A LAS AUDIENCIAS, SU AUSENCIA NO PUEDE TENER COMO RESULTADO LA DECLARATORIA DE REBELDÍA

"2. Respecto a la declaratoria de rebeldía debido a la inasistencia del imputado a la audiencia preliminar, consta en el proceso penal que, luego de presentada la acusación fiscal el 8 de junio de 2018, se solicitó la publicación de la convocatoria a la referida diligencia a través de edictos judiciales, según se consigna en informe de fecha 12 de enero de 2021. La mencionada audiencia, señalada para el 23 de agosto de 2018, se aplazó y en ese mismo acto se declaró rebelde al imputado ausente TBA.

A partir de ello, es posible constatar que la cita para la realización de la audiencia preliminar se realizó por medio de edictos judiciales y no en la dirección proporcionada por la Fiscalía General de la República, sin que conste en la certificación del expediente judicial remitido, el motivo por el cual el juez dispuso que dicha actuación fuera realizada de esa forma.

En ese sentido, se advierten varios aspectos que deben destacarse en las actuaciones realizadas por el instructor al realizar la convocatoria del imputado a la audiencia preliminar, cuya inasistencia generó la declaratoria de rebeldía. Y es que el juez, luego de la audiencia de imposición de medidas, continuó convocando al imputado a través de edictos judiciales, sin haber constatado la dirección proporcionada por la fiscalía en su acusación; de igual manera, no se ha agregado documentación alguna donde pueda corroborarse que se agotaron otras formas para la comunicación de las diligencias, ni existen otras actuaciones realizadas por el juez especializado de instrucción que fueran dirigidas a solventar la posibilidad de convocar —o no— al imputado en esa dirección —o en otra— antes de ordenar la notificación por edicto.

Todo lo anterior refleja una actuación poco diligente por parte del juez al momento de realizar la comunicación procesal al imputado; en ese sentido, al no garantizarse las convocatorias del mismo a las audiencias, su ausencia no puede tener como resultado la declaratoria de rebeldía, sanción que llevó a girar la orden de captura contra el señor BA, aun cuando no fueron precedidas por un acto de comunicación que fuera efectivo.

Conforme a lo anterior, tanto la detención provisional decretada —impuesta al procesado ausente sin defensor y sin motivación adecuada— como la declaratoria de rebeldía ordenada por el Juez Especializado de Instrucción de San Miguel carecen de un acto comunicación válido que les preceda, efectuado en observancia a los requisitos que exige respecto a los derechos fundamentales del imputado, por tanto al transgredirse los derechos fundamentales de audiencia, defensa y libertad física del señor BA —arts. 2 y 12 Cn—, deberá estimarse la petición planteada.

4. En consecuencia, de conformidad con el artículo 72 LPC, deberá dejarse sin efecto la medida cautelar de detención provisional, así como la declaratoria de rebeldía y las órdenes de captura derivadas de tales resoluciones, debiendo mantenerse en libertad siempre que no se encuentre sometido a otra restricción de libertad o a la orden de una autoridad distinta por otro delito."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 419-2019, fecha de la resolución: 17/12/2021

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL

LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD TIENE UNA VINCULACIÓN DIRECTA CON EL DERECHO A LA INTEGRIDAD

"3. Este tribunal ha enfatizado que el hábeas corpus es el mecanismo idóneo para proteger a las personas detenidas de actuaciones u omisiones que atenten contra su derecho fundamental de integridad personal. Además, ha señalado que la protección de la salud de los privados de libertad tiene una vinculación directa con el derecho a la integridad, en tanto su desatención puede agravar de manera ilegítima las condiciones de cumplimiento de la restricción en que se encuentran –sentencia de 9 de marzo de 2011, hábeas corpus 164-2005/79-2006 Ac.–.

Esta sala también ha sostenido que este tipo de hábeas corpus puede requerirse no solo respecto a personas que cumplen detención provisional o pena de prisión en el marco de un proceso penal, sino también otras que se encuentran en alguna especie de encierro en el que además hay algún control estatal en su ejecución –sentencia de 26 de octubre de 2011, hábeas corpus 21-2010–."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 370-2019, fecha de la resolución: 18/08/2021

DERECHO A LA PROTECCIÓN DEL VÍNCULO FAMILIAR

ALCANCE Y MANIFESTACIONES

"3. Ahora bien, el derecho a la resocialización no puede comprenderse plenamente si se desconecta de otros derechos, por ejemplo, del derecho fundamental a la protección familiar y su manifestación específica de conservación del vínculo familiar. Este Tribunal ha indicado que el derecho a la protección familiar encuentra cimiento constitucional en el art. 32 inc. 1º de la Cn. al establecer que la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, imponiendo a este último la obligación de dictar la legislación necesaria y crear los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. La obligación del Estado de proteger a la familia proviene de la fundamentalidad que la misma norma suprema le reconoce a dicha institución. Ese carácter fundamental tiene su origen en la composición de la familia, en el sentido de que, si la persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado (art. 1 inc.1º Cn.), entonces una agrupación de personas unidas por rasgos biológicos y afectivos que se establecen de forma permanente en una sociedad merece una especial protección (Sobreseimiento de Amparo 623-2015, de 20 de septiembre de 2017)

La Sala ha efectuado una interpretación amplia del art. 32 Cn. No solo ha determinado el derecho a la protección familiar, sino que también ha derivado el derecho implícito de toda persona a constituir y a formar parte de una familia, el cual posee manifestaciones más específicas como, por ejemplo, el derecho a la conservación del vínculo familiar, sin que concurran injerencias arbitrarias por parte del Estado o de los particulares (Sentencia de Amparo 264-2010, de 20 de diciembre de 2013). Este último derecho implica que la protección constitucional a la familia se refiere no solo a mantener los vínculos de consanguinidad, jurídicos o situaciones de facto entre los miembros de un grupo familiar, sino también a preservar las relaciones de afecto, mantener la convivencia continua, solidaridad, respeto, comprensión, protección y asistencia mutua que consolidan el núcleo familiar, en el que rigen los principios de igualdad de derechos y deberes para una pareja y el respeto recíproco de los derechos y libertades de todos los integrantes (Sobreseimiento de amparo 623-2015, antes citado).

En el ámbito penitenciario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que "las visitas a las personas privadas de libertad por parte de sus familiares constituyen un elemento fundamental del derecho a la protección de la familia tanto de la persona privada de libertad como de sus familiares, no solo por representar una oportunidad de contacto con el mundo exterior, sino porque el apoyo de los familiares hacia las personas privadas de libertad durante la ejecución de su condena es fundamental en muchos aspectos, que van desde lo afectivo y emocional hasta el apoyo económico. Por lo tanto, sobre la base de lo dispuesto en los artículos 17.1 y 1.1 de la Convención Americana, los Estados, como garantes de los derechos de las personas sujetas a su custodia, tienen la

obligación de adoptar las medidas más convenientes para facilitar y hacer efectivo el contacto entre las personas privadas de libertad y sus familiares." (Caso Norín Catrimán y otros vs. Chile, Sentencia del 29 de mayo de 2014).

En ese sentido, este Tribunal ha enfatizado el rol que desempeña un régimen de visitas familiares en la vida de las personas privadas de libertad, pues es una forma concreta por medio de la cual el encarcelado mantiene contacto con el mundo exterior y contribuye en su rehabilitación, ya que –de una forma u otra– dicho acercamiento le ayudará a su reintegración a la sociedad, que es uno de los propósitos que tiene la pena según lo establecido en el art. 27 Cn. (Sentencia de hábeas corpus 383-2016, de 20 de marzo de 2017)."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 94-2020, fecha de la resolución: 12/02/2021

DERECHO A LA RESOCIALIZACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

OTORGAMIENTO O DENEGATORIA DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS ES UNA ATRIBUCIÓN QUE LE CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE POR LEY A LOS JUECES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Y DE EJECUCIÓN DE LA PENA

"III. 1. Esta sala debe aclarar que la decisión de otorgar o denegar beneficios penitenciarios es una atribución que le corresponde exclusivamente por ley a los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, quienes son los encargados de verificar el cumplimiento de requisitos para el avance de los privados de libertad en el sistema progresivo penitenciario, goce de beneficios, entre otros (improcedencia del 6 de noviembre de 2017, hábeas corpus 344-2017). Asimismo, se ha determinado que dichos jueces, para negar u otorgar la libertad condicional, deben observar los presupuestos exigidos por el legislador, atendiendo a la garantía constitucional de reserva de ley, pues de lo contrario sus decisiones se enmarcarían en la arbitrariedad y tornarían ilegítimo el mantenimiento de la privación de libertad.

De este modo, no se trata de revisar el criterio judicial sobre la procedencia de la libertad condicional, sino una supuesta actuación judicial que impide, sin la motivación debida, la realización de una audiencia en la que se examine si se han cumplido o no los requisitos para acceder a dicho beneficio. En estos términos, la sala entrará analizar sobre una posible vulneración del derecho a la libertad y a la resocialización de la pena, en relación con el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (arts. 2 y 27 Cn.)."

BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICIONAL

"2. El beneficio de libertad condicional ordinaria consiste en conceder al interno la posibilidad de que goce de su libertad física supeditado a la realización de ciertas reglas de conducta, de acuerdo con los arts. 85 CP y 51 Ley Peniten-

ciaria (LP). La primera disposición legal señala que el juez penitenciario podrá conceder dicho beneficio en los delitos sancionados con prisión, siempre que el condenado: 1) haya cumplido las dos terceras partes de la condena impuesta; 2) que lo merezca por buena conducta, previo informe favorable del Consejo Criminológico Regional y 3) "haya satisfecho las obligaciones civiles derivadas del hecho y determinadas por resolución judicial, garantice satisfactoriamente su cumplimiento o demuestre su imposibilidad de pagar"; todo lo anterior se decide en audiencia según lo determina la Ley Penitenciaria –arts. 37 No. 6, 46, 46 bis, 51 LP–

En coherencia con lo anterior, el art. 266 literal e) del Reglamento General de la Ley Penitenciaria (RLP) establece que será el Equipo Técnico Criminológico el encargado de proponer al Consejo Criminológico Regional a los internos que califiquen para gozar de libertad condicional –o de libertad condicional anticipada– entre los que se podría incluir a aquellos que estén aptos o en fase de confianza y semilibertad, aunque ello no siempre sería necesario, pues los requisitos de la libertad condicional son distintos a las fases del régimen penitenciario –arts. 95 y siguientes LP–. De manera que, para que la autoridad judicial acceda a una petición del beneficio aludido, deberá requerir los informes previstos en los números 2 y 3 del art. 85 CP y verificar que el condenado cumpla con las exigencias legales, de conformidad con las disposiciones citadas; la información sobre la conducta del interno es necesaria –aunque no vinculante– para que el juez, valorando toda la información, se pronuncie sobre la procedencia o no de la libertad condicional (sentencia del 1 de julio de 2019, hábeas corpus 305-2018)."

"3. Es importante acotar que esta sala ha sostenido que la rehabilitación del delincuente es un elemento esencial de la política criminal, uno de los mandatos constitucionales rectores del Derecho Penal, una meta del sistema penitenciario indisolublemente unida a otros principios limitadores del poder punitivo, un ideal constitucional que prohíbe las penas que imposibiliten o retarden irrazonablemente la reincorporación social de la persona condenada y es una directriz constitucional que exige configurar la ejecución de la pena como un proceso de transición escalonada hacia la libertad."

DEBER ESTATAL DE PROCURAR LA READAPTACIÓN SOCIAL DEL DELINCUENTE SE HA VINCULADO CON EL CARÁCTER PERSONALISTA DEL ESTADO SALVADOREÑO, CUYO FUNDAMENTO Y SENTIDO FINAL ES LA DIGNIDAD HUMANA

"El deber estatal de procurar la readaptación social del delincuente se ha vinculado con el carácter personalista del Estado salvadoreño, cuyo fundamento y sentido final es la dignidad humana (preámbulo y art. 1 Cn.). La obligación constitucional de garantizar la readaptación de la persona condenada es una exigencia de la dignidad humana, en el sentido de que impide instrumentalizar a la persona para comunicar a otros, mensajes de rigor punitivo o advertencias de disuasión del delito centradas en la aflicción del penado. De acuerdo con su visión humanista, la Constitución impone al Estado salvadoreño un optimismo antropológico o una confianza en la capacidad del ser humano para reintegrarse

al medio social, a pesar de la gravedad del delito cometido. La dignidad humana sobrevive a la pena. La persona condenada sigue teniendo dignidad humana y por eso el Estado debe garantizarle la oportunidad de volver adonde esa condición pueda manifestarse mejor, como parte de la sociedad.

La dignidad humana es también la base de la igualdad entre las personas (art. 3 Cn.) y por esa igual humanidad radical la persona condenada sigue siendo un fin y no un medio del Estado, de modo que ella conserva, como ser autónomo y responsable, una expectativa de retorno a la comunidad, cuando supere la medida de la pena fijada por consideraciones de merecimiento o retribución."

LA READAPTACIÓN SOCIAL, REINSERCIÓN O RESOCIALIZACIÓN DE LA PERSONA CONDENADA ES UN DERECHO FUNDAMENTAL

"La jurisprudencia constitucional ha venido aplicando el derecho a la readaptación social de la persona condenada como un límite frente al poder penal del Estado, lo cual es parte de la función propia de los derechos fundamentales. Varios de los principales diques de contención del poder punitivo (legalidad, debido proceso, igualdad, culpabilidad) lo son precisamente en virtud de su condición de derechos fundamentales o como derivaciones de estos. El reconocimiento de un derecho a la resocialización se corresponde además con la concepción liberal que inspira nuestra Constitución (preámbulo y arts. 1, 2, 5, 10, 13, entre otros), pues cuando más limitada está la libertad –como ocurre durante la ejecución de la pena– más importancia tienen las garantías necesarias para evitar que se agote incluso su reserva mínima, intangible o irreductible, que es lo que hace que cada persona pueda seguir considerándose como tal. Dicha reserva, para la persona condenada y como una de las manifestaciones del derecho reconocido en el art. 27 inc. 3º Cn., consiste en la razonable esperanza de volver a la sociedad.

Por todo lo anterior este Tribunal considera que, en efecto, la readaptación social, reinserción o resocialización de la persona condenada es un derecho fundamental, art. 27 inc. 3º Cn. y arts. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (sentencia de 12 de febrero de 2021, hábeas corpus 94-2020)."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 255-2018, fecha de la resolución: 18/06/2021

ELEMENTO ESENCIAL DE LA POLÍTICA CRIMINAL

"2. Es importante acotar que esta Sala ha sostenido que la rehabilitación del delincuente es un elemento esencial de la política criminal (Sentencia de Inconstitucionalidad 15-96, de 14 de febrero de 1997); es uno de los mandatos constitucionales rectores del Derecho Penal (Sentencia de Inconstitucionalidad 52-2003, de 1 de abril de 2004); es una meta del sistema penitenciario indisolublemente unida a otros principios limitadores del poder punitivo (Sentencia de Inconstitu-

cionalidad 32-2006, de 25 de marzo de 2008); es un ideal constitucional que prohíbe las penas que imposibiliten o retarden irrazonablemente la reincorporación social de la persona condenada (Sentencia de Inconstitucionalidad 5-2001, de 23 de diciembre de 2010); y es una directriz constitucional que exige configurar la ejecución de la pena como un proceso de transición escalonada hacia la libertad (Sentencia de Inconstitucionalidad 63-2010, de 29 de abril de 2013).

En varias de estas decisiones (por ejemplo, en las Inconstitucionalidades 15-96, 52-2003 y 5-2001, citadas), el deber estatal de procurar la readaptación social del delincuente se ha vinculado con el carácter personalista del Estado salvadoreño, cuyo fundamento y sentido final es la dignidad humana (preámbulo y art. 1 Cn.). La obligación constitucional de garantizar la readaptación de la persona condenada es una exigencia de la dignidad humana en el sentido de que impide instrumentalizar a la persona para comunicar a otros mensajes de rigor punitivo o advertencias de disuasión del delito centradas en la aflicción del penado. De acuerdo con su visión humanista, la Constitución impone al Estado salvadoreño un optimismo antropológico o una confianza en la capacidad del ser humano para reintegrarse al medio social, a pesar de la gravedad del delito cometido. La dignidad humana sobrevive a la pena. La persona condenada sigue teniendo dignidad humana y por eso el Estado debe garantizarle la oportunidad de volver adonde esa condición pueda manifestarse mejor, como parte de la sociedad.

La dignidad humana es también la base de la igualdad entre las personas (art. 3 Cn.) y por esa igual humanidad radical la persona condenada sigue siendo un fin y no un medio del Estado, de modo que ella conserva, como ser autónomo y responsable, una expectativa de retorno a la comunidad, cuando supere la medida de la pena fijada por consideraciones de merecimiento o retribución. Como ha dicho este Tribunal, la dignidad humana se manifiesta en la autonomía, capacidad “de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida” (Sentencia de Inconstitucionalidad 18-98, de 20 de noviembre de 2007), o en la libre búsqueda de la concepción personal de una vida buena. Es cierto que, por su naturaleza, la imposición de una pena afecta precisamente esa libertad de la persona, pero dicha limitación nunca debe transformarse en una privación absoluta, porque la dignidad humana implica la reserva inalienable de un ámbito de libertad del que no puede disponer el Estado. Suprimir toda la libertad de una persona equivale a eliminar su humanidad, opción prohibida por el art. 1 Cn. y, por eso, el art. 27 inc. 3º Cn. obliga a garantizar a la persona condenada un horizonte de libertad, una proyección de futuro o, como ha dicho esta sala, “la esperanza de una eventual liberación” (Sentencia de Inconstitucionalidad 15-96, de 14 de febrero de 1997).

Poner de relieve los derechos fundamentales implícitos en la Constitución es competencia de esta sala. Así se ha hecho con los derechos a recurrir, a un medio ambiente sano, al agua, a la autodeterminación informativa y al acceso a la información pública (Inconstitucionalidad 32-2015, Improcedencia de 29 de mayo de 2015). En este caso, la ubicación sistemática del art. 27 inc. 3º Cn. dentro del Título II Los derechos y garantías fundamentales de las personas es

relevante, mas no concluyente. Puede funcionar como un argumento de respaldo de la afirmación constitucional del carácter de derecho fundamental de la readaptación del recluso, pero las razones para interpretarlo así se basan en la relación estrecha de la reinserción social de la persona condenada con los principios también fundamentales de la Constitución (dignidad humana, libertad e igualdad), así como en el potencial interpretativo para limitar el poder penal del Estado y contribuir a una convivencia social pacífica, en armonía con las elevadas aspiraciones del proyecto constitucional salvadoreño.

La interpretación del mandato constitucional del art. 27 inc. 3º Cn. como obligación exigible, con un correlativo derecho subjetivo de las personas sometidas al cumplimiento de las penas, es la alternativa más optimizadora de la fuerza normativa de la Constitución, conforme a su art. 246. Hacer que prevalezca la Constitución en la ejecución de las penas o en los centros penitenciarios puede garantizarse mejor por imperativo del derecho fundamental a la readaptación, que si solo se identifica el art. 27 inc. 3º Cn. como una directriz político criminal. La Constitución obliga a recordar que la ejecución de la pena es parte esencial del sistema penal, pues de ella depende la utilidad social de todas las acciones estatales que le anteceden, en el ejercicio del poder punitivo. El estatus de la reinserción social como derecho fundamental implica sin duda una vinculación más fuerte para el legislador, la Administración penitenciaria y los jueces, así como supone una serie de garantías con mayor eficacia para hacer realidad, en el tiempo, lo ordenado por la Ley Suprema.

La jurisprudencia constitucional ha venido aplicando el derecho a la readaptación social de la persona condenada como un límite frente al poder penal del Estado, lo cual es parte de la función propia de los derechos fundamentales. Varios de los principales diques de contención del poder punitivo (legalidad, debido proceso, igualdad, culpabilidad) lo son precisamente en virtud de su condición de derechos fundamentales o como derivaciones de estos. El reconocimiento de un derecho a la resocialización se corresponde además con la concepción liberal que inspira nuestra Constitución (preámbulo y arts. 1, 2, 5, 10, 13, entre otros), pues cuando más limitada está la libertad –como ocurre durante la ejecución de la pena– más importancia tienen las garantías necesarias para evitar que se agote incluso su reserva mínima, intangible o irreductible, que es lo que hace que cada persona pueda seguir considerándose como tal. Dicha reserva, para la persona condenada y como una de las manifestaciones del derecho reconocido en el art. 27 inc. 3º Cn., consiste en la razonable esperanza de volver a la sociedad.

Por todo lo anterior este Tribunal considera que, en efecto, la readaptación social, reinserción o resocialización de la persona condenada es un derecho fundamental, art. 27 inc. 3º Cn. y arts. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 94-2020, fecha de la resolución: 12/02/2021

DERECHO A LA SALUD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

TIENE UNA VINCULACIÓN DIRECTA CON EL DERECHO A LA INTEGRIDAD, EN TANTO SU DESATENCIÓN PUEDE AGRAVAR DE MANERA ILEGÍTIMA LAS CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DE LA DETENCIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN

"III. Este Tribunal ha enfatizado que el hábeas corpus es el mecanismo idóneo para proteger a las personas detenidas de actuaciones u omisiones que atenten contra su dignidad en relación con su integridad personal. Además, ha señalado que la protección de la salud de los internos tiene una vinculación directa con el derecho a la integridad, en tanto su desatención puede agravar de manera ilegítima las condiciones de cumplimiento de la detención en que se encuentran.

Y es que, en el caso de las personas respecto de las que no se reclama la inconstitucionalidad de su privación de libertad sino de las condiciones de su cumplimiento, su estado de recluido en un centro penal no puede justificar la ausencia de tutela de los derechos que le son inherentes en su calidad de ser humano. De lo contrario, podrían generarse afectaciones a diversos derechos –entre ellos la salud– que a su vez menoscaben la integridad, lo que deberá determinarse según las particularidades de cada caso.

Es de enfatizar que la condición de privación de libertad no significa –para las personas que la afrontan– la anulación de la salvaguarda de su integridad personal en su dimensión más completa, siendo un deber de la administración penitenciaria –o de la autoridad que lo tenga recluido– tutelar los derechos del privado de libertad, como garantes directos de su protección personal, con especial énfasis en su salud."

NORMATIVA INTERNACIONAL RESPECTO AL DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS

"En relación con la temática abordada cabe citar lo dispuesto en tratados internacionales suscritos por El Salvador, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual, en su art. 10, establece que las personas privadas de libertad serán tratadas humanamente; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho al respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas que se encuentran detenidas (art. 5).

Así también es importante referirse a los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 13 de marzo de 2008, Principio X, que indica que las personas privadas de libertad tienen derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, así como el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos.

Dicho principio también señala que el Estado debe garantizar que los servicios de salud proporcionados en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación con el sistema de salud pública. De manera que la protección a la integridad y a la salud de las personas –incluidos los detenidos– no solo está reconocida de forma expresa en una disposición constitucional (art. 65) sino también a través de normas de derecho internacional que El Salvador debe cumplir de buena fe (Sentencia de hábeas corpus 427-2018, de 19 de agosto de 2019)."

LA AUTORIDAD JUDICIAL LLEVÓ A CABO ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR LA SALUD E INTEGRIDAD PERSONAL DEL FAVORECIDO

"IV. Con fundamento en lo expuesto, corresponde ahora analizar si existieron omisiones con incidencia en el derecho de integridad personal de la señora […], por parte del Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Sonsonate y de la Directora del CDPM Izalco.

1. De acuerdo a los pasajes remitidos, se constata que según acta judicial del día 9 de octubre de 2019, la hija de la favorecida se apersonó ante el juez penitenciario mencionado a exponer el estado de salud de su madre y a solicitar actuaciones para que sus necesidades médicas fueran atendidas.

En razón de lo anterior, consta que mediante oficio número 12425 del 14 de octubre de 2019, el juez penitenciario aludido solicitó al Instituto de Medicina Legal "Dr. Alberto Masferrer" que a la brevedad posible realizara reconocimiento de evaluación médica a la señora […], detallando los puntos periciales de interés que no debían omitirse.

El peritaje médico aludido le fue practicado a la condenada el 17 de octubre de 2019, en el cual se señala: "[...] Examen físico: [...] consiente y orientada en espacio [...] se pudo constatar en el expediente clínico que es diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia renal crónica más hipertensión arterial, las cuales al momento están compensadas. Refiere que está tomando el tratamiento que el nefrólogo particular le dio en San Miguel [...] el cual era pagado por el esposo, así como los exámenes, los cuales se los ha tomado en el laboratorio de AGAPE [...] Al examen físico TA 110/70 mm/hg, Fc 80 por minuto, Fr 18 por minuto, cabeza normal, pulmones limpios, abdomen globoso peristaltismo presente [...] Refiere que [...] deja de comer ciertas comidas por lo salado, ya que no recibe dieta para pacientes renales. CONCLUSIONES: 1- [...] a pesar de los diagnósticos [...] presenta signos vitales estables al momento, ya que se toma los medicamentos que la familia le lleva. 2- La paciente no está siendo evaluada por especialista. 3- Dicho cuadro clínico no constituye al momento una urgencia o emergencia médica, pero se sugiere que sea [...] evaluada periódicamente por un nefrólogo cada dos meses, para que no se descompense y evitar que sea ingresada de emergencia, debido a que la cita con especialista en el rosales no se la han dado y tiene seis meses de no ser evaluada por especialista se sugiere sea llevada a medico particular [...] la familia está en la disposición de pagar los gastos médicos, exámenes y medicamento. 4- Se sugiere que la dieta se le cambie a dieta especial para pacientes renales lo más luego posible [...]" (sic).

Ante dicho resultado, el juez libró oficio el 23 de octubre de 2019, a la Directora del CDPM de Izalco, informado sobre el peritaje referido y ordenando realizar las gestiones pertinentes a fin de brindar la asistencia médica y el tratamiento oportuno a todos los diagnósticos de la interna, recalcando la atención que de un especialista en nefrología requiere, coordinando con los familiares quienes están dispuestos a costear las consultas y exámenes médicos necesarios, solicitándole que informe sobre lo actuado.

En respuesta a lo anterior, mediante oficio número 42-CLÍNICA-2019, del 5 de noviembre de 2019, la médico coordinadora doctora LXTC y la Directora inspectora AAH, ambas del CDPM de Izalco, suscribieron informe, dirigido a la autoridad judicial aludida, detallando que la interna […] tiene diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y enfermedad renal estadio 3B, aclarando que aún no está diagnosticada con insuficiencia renal y que sus medicamentos son suministrados por la familia. Señalaron que se ha solicitado cita con el nefrólogo en el Hospital Rosales para el 13 de noviembre de ese mismo año, cuya fecha no es comunicada a la interna por razones de seguridad y que ya le fue solicitada la dieta especial; aclarando que en esos momentos la interna se encuentra estable, con buen peso y signos vitales normales.

La referida directora y médico coordinadora del centro penitenciario informaron a esta Sede que efectivamente la interna fue llevada a realizarse exámenes de laboratorio para la especialidad de nefrología el 5 de diciembre de 2019 y que el 12 del mismo mes y año tuvo consulta en el área de medicina interna, en la que le programaron nueva cita para el mes de febrero de 2020; asimismo, aclararon que las recetas externas son entregadas a la familia de la condenada para que estas le lleven los medicamentos.

Aunado a lo expuesto y de acuerdo a la certificación de los pasajes del expediente clínico penitenciario de la favorecida y a lo verificado por el juez ejecutor en su visita al CDPM de Izalco, consta hoja de referencia para consulta externa a nombre de la señora […] para especialidad de nefrología en el Hospital Nacional Rosales, firmada el 17 de septiembre de 2019 por el doctor RFO, del Departamento de Servicios Médicos y Odontológicos de la Dirección General de Centros Penales.

Ahora bien, según expediente número ********** que a nombre de la favorecida se registra en el Hospital Nacional Rosales, se determina que fue atendida en consulta médica el 12 de noviembre de 2019, en el área de medicina interna, siendo diagnosticada con diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones renales, hipertensión esencial (primaria) e hiperlipidemia mixta, señalándose los medicamentos para cada padecimiento y las dosis respectivas y programándosele cita para el 12 de diciembre del mismo año, para lo cual las autoridades del CDPM de Izalco solicitaron al Comandante de Guardia de dicho centro penal que enviara a la privada de libertad hacia el centro hospitalario referido en la fecha dispuesta.

Se puede constatar además la programación de citas para realización de una serie de exámenes médicos de la justiciable en el laboratorio del Hospital Rosales, para el 5 de diciembre de 2019; asimismo, según acta de intimación e

informe del juez ejecutor, la autoridad penitenciaria expuso que desde el ingreso de la favorecida, se le continuó suministrando el tratamiento médico recetado previamente, el cual ha sido proporcionado por los familiares y que, en relación con la dieta alimenticia especial recomendada a la interna, tienen dificultad para proporcionársela ya que el proveedor de alimentos no alcanza a cubrir la demanda debido a la saturación de pedidos.

2. A partir de lo expuesto, se ha corroborado que, en cuanto a la autoridad judicial y contrario a lo afirmado por la peticionaria, esta solamente se avocó 1 vez ante dicha sede judicial –el 9 de octubre de 2019– a exponer de forma verbal el estado de salud de la señora […], frente a lo cual el juez demandado documentó mediante acta su planteamiento y realizó de forma inmediata todas las actuaciones necesarias para resguardar el derecho a la salud de aquella. En ese sentido, esta Sala determina que con la actuación de la referida autoridad judicial no se ha vulnerado el derecho a la salud e integridad personal de la favorecida, consecuentemente deberá desestimarse la pretensión planteada.

No obstante, se ha determinado que la beneficiada no fue atendida y tratada medicamente de manera adecuada, para cada una de sus enfermedades desde su ingreso en el CDPM de Izalco, lo cual quedó reflejado en el dictamen forense, en el que se determinó que aunque las patologías, al momento de la evaluación, estaban compensadas y su cuadro clínico no constituía una urgencia médica, se señalan aspectos deficitarios como no ser asistida por un especialista, la carencia de una dieta especial y se sugirieron las medidas para resguardar su salud y evitar que se pueda generar una mayor afectación, haciéndose constar que sus exámenes se los ha realizado en el laboratorio de AGAPE; debe aquí relacionarse que la asistencia de exámenes y medicamentos han sido asumidos por la familia de la interna y no por el Estado, aunque a este correspondería disponer los cuidados de salud en virtud de la relación de sujeción derivada de la privación de libertad.

En ese orden, el informe de diligencias realizadas por el Departamento de Verificación Penitenciaria de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos en el CDPM Izalco, sobre monitoreo y seguimiento del caso de salud registrado a nombre de la señora […], de fecha 4 de junio de 2019, consta que dicha interna expresó padecer de: "[...] insuficiencia renal, diabetes e hipertensión arterial, cuyos controles médicos los tenía con un médico particular cuando se encontraba recluida en el Centro Penal de San Miguel, pero debido a su traslado inicialmente se descompensó con su tratamiento [...]; que durante su estadía en ese lugar le están brindado asistencia médica y su esposo ya le canceló los exámenes renales para continuar con sus controles médicos [...]" (sic).

En razón de lo anterior, esta Sala determina que la autoridad penitenciaria del Centro de Detención Menor para Mujeres de Izalco incurrió en las omisiones reclamadas, en tanto que no se hicieron todas las gestiones necesarias oportunas, de acuerdo a sus atribuciones, para garantizar los derechos de salud e integridad personal de la señora […], al no haber tramitado las evaluaciones médicas necesarias de acuerdo a sus padecimientos y procurado la programación oportuna de exámenes y controles, hasta que fue requerido por el juez

de vigilancia penitenciaria e inclusive, la solicitud de dieta especial, todavía no se encuentra debidamente cumplida, según toda la información recabada. En consecuencia, dicha actuación efectivamente incidió en el derecho a la salud e integridad personal de la favorecida, por tanto, deberá estimarse la pretensión de hábeas corpus.

"3. Efectos de este pronunciamiento.

Este Tribunal advierte que, según el peritaje médico practicado a la favorecida, se puntualizó la necesidad de no descontinuar sus controles de salud, particularmente que debía ser tratada por un nefrólogo y proporcionársele una dieta especial para pacientes renales, lo cual, según lo constatado, aún estaba pendiente de concretizarse. Por lo que, a partir del informe sobre el traslado del CDPM de Izalco hacia el Centro de Detención Menor Para Mujeres de Zacatecoluca y que el cumplimiento de la condena de la favorecida pasó a ser supervisada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Vicente, es pertinente hacer del conocimiento de dichas autoridades esta decisión, para que continúen garantizando los derechos de salud e integridad personal de la favorecida, ejecutando cualquier acción tendiente a satisfacer las necesidades médicas aludidas."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 364-2019, fecha de la resolución: 24/03/2021

VULNERACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS AL IMPEDIRLE AL INTERNO RECIBIR LOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS

"2. A. A partir de lo expuesto, se ha corroborado que, desde la captura del favorecido se registró, en los chequeos clínicos realizados los días 21 y 26 de septiembre de 2019, sus antecedentes por convulsiones e hipertensión arterial, especificándose la medicación prescrita para el primer padecimiento y advirtiendo la necesidad de contactar a la familia para solicitarles el tratamiento que debía continuar para ambas enfermedades, entre ellas la de hipertensión arterial, debido a que el imputado no lo recordaba.

No obstante que esa información forma parte del expediente único que a nombre del favorecido registra el Centro Penal de San Miguel, no es posible advertir que se garantizara el suministro del tratamiento médico de forma oportuna, pues si bien existe un protocolo para ello, en el examen médico inicial del señor MF, que fue realizado tres días después de su ingreso, únicamente se prescribió lo relativo para su padecimiento neurológico, quedando el tratamiento para la hipertensión arterial sujeto al resultado de monitoreo, cuyo seguimiento terminó el 5 de diciembre de 2019, sin especificarse si ameritaba medicación para ello.

Es hasta en el informe remitido por la autoridad penitenciaria el 11 de febrero de 2020 que, sin anexar documentación que lo acredite, se informa que, durante la permanencia del interno en el recinto carcelario, se confirmó su diagnóstico de hipertensión arterial, para el cual "[...] en su momento se le ha brindado el tratamiento farmacológico respectivo [...]" (sic), el cual tampoco se especifica.

En ese sentido, la negativa de la autoridad penitenciaria de permitir el ingreso del medicamento que, según indicó su familia le había sido prescrito para uno de sus padecimientos, en razón de no cumplir con el protocolo respectivo, solo podría justificarse si dicha autoridad hubiera actuado diligente y oportunamente, en cuanto a evaluar médicamente al señor MF desde su ingreso al centro penal y asegurar el suministro de los medicamentos necesarios para el resguardo de su salud, considerando el aviso que los familiares del interno hicieron al respecto; lo cual no ocurrió en este caso.

Lo anterior quedó reflejado en el dictamen forense practicado el 29 de noviembre de 2019, por orden de esta sala, en el que se determinó que para su padecimiento de hipertensión arterial estaba cumpliendo tratamiento desde dos meses atrás, es decir, que el mismo fue descontinuado desde su captura e ingreso al centro penal, tampoco se le indicaron exámenes para precisar el diagnóstico de las enfermedades que registra su historial, sugiriendo el peritaje, entre otros aspectos, el traslado urgente del favorecido a un centro hospitalario para ser evaluado por medicina interna y así confirmar sus patologías y el tratamiento adecuado, lo cual no se ha informado que se ejecutara.

En razón de lo indicado, se determina que la autoridad penitenciaria incurrió en las omisiones reclamadas, en tanto que no se hicieron todas las gestiones necesarias y oportunas, de acuerdo a sus atribuciones, para garantizar los derechos de salud e integridad personal del señor MSMF, al no haber brindado, desde el inicio, la atención y tratamiento médico inmediato a su antecedente de hipertensión arterial, cuya enfermedad persistió hasta que fue confirmada por la misma autoridad. En consecuencia, dicha actuación efectivamente incidió negativamente en los derechos a la salud e integridad personal del favorecido."

COMPORTAMIENTO OMISIVO DE LA AUTORIDAD JUDICIAL GENERÓ VULNERACIÓN EN LOS DERECHOS DE SALUD E INTEGRIDAD PERSONAL DEL FAVORECIDO

"B. En cuanto a la autoridad judicial, se advierte que la normativa que cita sobre el régimen especial que obliga a la administración penitenciaria a tutelar la salud e integridad personal de los privados de libertad, no la inhibe de su obligación de realizar cualquier acción pertinente y necesaria para garantizar ese mismo fin, en tanto que el favorecido se encuentra recluido a su orden y disposición.

En ese sentido y de conformidad a la jurisprudencia citada, la omisión de la Jueza de Instrucción de Mejicanos frente a la información expuesta por la defensora del justiciable, sobre la negativa de las autoridades penitenciarias de permitir el ingreso de los fármacos para sus padecimientos y la aseveración de que "no está tomando medicamentos" –según escrito presentado el 15 de octubre de 2019–, los cuales además fueron documentados, impidió que se tomaran, oportunamente, las medidas que posibilitaran atender sus necesidades de salud de aquel y ofrecer el tratamiento que su condición requería, resultando inadmisible lo sostenido por dicha autoridad para justificar su postura. Este tribunal no indica que la jueza debió autorizar el ingreso del medicamento de la forma solicitada, sino que una posición pasiva de una autoridad judicial a cuyo cargo está el pri-

vado de libertad, cuando se está haciendo de su conocimiento que necesita un seguimiento en cuanto a su condición salud, no es conforme a la protección de los derechos fundamentales de aquel.

Así, el comportamiento omisivo de la autoridad judicial generó vulneración en los derechos de salud e integridad personal del favorecido, consecuentemente deberá estimarse la pretensión planteada."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 400-2019, fecha de la resolución: 14/07/2021

DERECHO DE DEFENSA

GARANTÍA ESENCIAL

"II. 1. La comprensión constitucional del proceso penal, entre otros aspectos, implica el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las partes en el desarrollo de este y en toda actuación judicial. Cuando se trata de la persona acusada, una de las máximas expresiones de lo anterior es el ejercicio de su defensa material y técnica.

Esta sala ha sostenido que el derecho de defensa es una garantía esencial, una exigencia objetiva y una condición de validez que forma parte del núcleo de la idea del proceso, que no puede concebirse sin la posibilidad de defensa (sentencia de 23 de diciembre de 2010, inconstitucionalidad 5-2001). El estricto respeto a la defensa sirve para restablecer la plena igualdad entre las partes y asegurar la vigencia efectiva del principio de contradicción, aspectos que condicionan la validez del juicio penal y con ello tal derecho cumple una función de legitimidad en cuanto al uso del poder penal del Estado, en cuanto a que el defensor garantiza una aplicación correcta y justa de la ley penal, lo que constituye una ineludible exigencia del Estado de Derecho (improcedencia del 4 de octubre de 2013, inconstitucionalidad 140-2013)."

FACULTAD QUE TIENE LA PERSONA PROCESADA DE OFRECER PRUEBA DE DESCARGO

"Una manifestación del ejercicio pleno de tal derecho es la facultad que tiene la persona procesada de ofrecer prueba de descargo, con la finalidad de sustentar su estrategia de defensa o desacreditar potestativamente la acusación fiscal.

Esta facultad, a su vez, representa la obligación de jueces y tribunales, de evaluar si corresponde la admisión o el rechazo de la prueba ofertada y eventual incorporación al juicio, de acuerdo con los criterios de pertinencia, utilidad, necesidad y licitud, así como su valoración para adoptar cualquier decisión, según corresponda. De manera que, las autoridades judiciales, ante el ofrecimiento probatorio de descargo, deben pronunciarse en el sentido legalmente exigido.

En caso que la prueba sea admitida, lo que corresponde es que dichas autoridades la analicen y valoren de manera conjunta con él resto, con la finalidad de justificar la decisión a la que les permite arribar, ya sea determinando la responsabilidad penal del procesado o absolviéndolo de esta."

SALA DE LO CONSTITUCIONAL NO TIENE COMPETENCIA PARA VALORAR LOS ELEMENTOS DE PRUEBA QUE VERSAN EN UN PROCESO PENAL

"2. Esta sala ha insistido en su jurisprudencia que no tiene competencia para valorar los elementos de prueba que versan en un proceso penal y que llevan a jueces y tribunales a adoptar una decisión que tenga implicaciones sobre la libertad física de la persona imputada (improcedencia del 20 de junio de 2014, hábeas corpus 269-2014).

Sin embargo, cuando la actividad de recolección probatoria –entiéndase por esta la realizada en la investigación inicial o durante la instrucción– y su incorporación al proceso ha sido producto de vulneraciones a derechos fundamentales como el de defensa, presunción de inocencia, debido proceso, entre otros, este tribunal se encuentra facultado para determinar la existencia o no de tal transgresión y si ha afectado ilegítimamente la libertad física del imputado.

Ha sostenido esta sala que la afirmación del delito y la culpabilidad de una persona sobre él, en toda su dimensión, debe ser objetivamente probada, pero respetando el derecho de defensa de la persona inculpada. Ello significa que la persona debió poder ejercer su derecho de defensa, lo cual se ciñe al menos a: conocer la imputación y la prueba que sostiene la misma –en ambos casos con efectividad–; poder controvertir la imputación; poder ofrecer sus respectivas pruebas siguiendo la fórmula legal –conforme a la ley–; obtener una valoración motivada sobre el conjunto de las pruebas incorporadas y poder controlar recursivamente dicha valoración cuando se tiene previsto un mecanismo de impugnación (sentencia del 3 de abril de 2020, hábeas corpus 98-2019).

En consecuencia, cuando una condena de prisión se ha dictado en transgresión de alguno de los parámetros indicados en la jurisprudencia referida, se estaría ante una decisión que afecta ilegítimamente la libertad física de la persona.

1. De acuerdo con la certificación de algunos pasajes de la causa penal, en audiencia preliminar celebrada el 23 de mayo de 2012, el Juez Especializado de Instrucción A de esta ciudad, admitió la prueba ofertada por la representación fiscal y por la defensa, e indicó que la detallaría en el respectivo auto de apertura a juicio. En este último consta que se admitió como prueba ofrecida por la defensa técnica de los procesados: "Copia certificada del expediente clínico emitida por el Hospital Nacional Rafael, respecto al ingreso del señor JRMG, que se encuentra en proceso penal en el Juzgado Especializado de Instrucción "B" de San Salvador, con referencia B-366-11".

Según acta de vista pública del 8 de agosto de 2012, la representación fiscal propuso como cuestión incidental que, en su oportunidad, el defensor particular de los acusados ofreció como medio de prueba el referido expediente clínico, sin embargo, la certificación no fue remitida oportunamente por el Juzgado Es-

pecializado de Instrucción B de esta ciudad, por lo que fue gestionada por dicha entidad y ya se contaba con ella. La defensa técnica solicitó que se le proporcionara tal documento, lo cual fue avalado por el juez de sentencia, señalando que posteriormente lo valoraría; finalmente, emitió un fallo condenatorio contra el señor FJCM, por la comisión del delito de secuestro, imponiéndole una pena de veinticinco arios de prisión, y uno absolutorio por los delitos de robo agravado y agrupaciones ilícitas.

La sentencia se emitió con fecha 9 de septiembre de 2013. En el apartado "estimación de la prueba", el juez refirió que procedería a hacer una apreciación lógica y razonada, de conformidad a las reglas de la sana crítica, sobre la prueba y su contenido, en la que no aparece detallada ni valorada la certificación del expediente clínico, que fue ofertada y admitida como prueba de descargo del favorecido.

Contra la sentencia condenatoria los defensores particulares presentaron recursos de apelación. En particular, el presentado por la defensa del señor CM se basó, entre otros motivos, en que el juez omitió valorar la certificación del expediente clínico señalado. Al respecto la cámara especializada, en el apartado sobre el análisis del fondo de los recursos de la sentencia respectiva, estableció que pese a que el juez "incorporó" en la vista pública el documento, luego de describir toda la prueba relacionó que "Los actos de investigación documentados, solo se valorarán aquellos que reúnen los requisitos del art. 372 CPP"; sin embargo, no mencionó nada sobre el expediente aludido.

La cámara reconoció que si el juez aceptó incorporar dicho documento en vista pública, debió valorarlo y decir las razones de por qué lo retomaba o descartaba. No obstante, dicha cámara determinó en la sentencia, aplicando la teoría de la inclusión mental hipotética, que del análisis realizado sobre la información que aporta el expediente clínico "en nada cambia o altera la decisión o conclusión de responsabilidad penal" a la que el juez llegó. Esto es así porque, no obstante la defensa trató de desvirtuar un encuentro entre el señor JRMG, otro sujeto y el favorecido, el documento en cuestión indicaba que el primero tuvo un accidente en motocicleta, pero que resultó con lesiones leves y fue dado de alta el mismo día, con lo cual los acontecimientos narrados pudieron suceder. También agregó que se contaba con prueba "corroboratoria" sobre la participación delictiva del acusado en el hecho.

En consecuencia, la cámara concluyó que no existió una inobservancia a la garantía de inviolabilidad de la defensa del favorecido, declaró no ha lugar el recurso de apelación presentado y confirmó en todas sus partes la sentencia condenatoria.

La Sala de lo Penal, en la sentencia del 11 de junio de 2015, resolvió el recurso de casación interpuesto por el defensor particular del beneficiado. Respecto a la omisión de valorar el expediente clínico por parte de la cámara, la sala estableció que el tribunal de alzada sí hizo una ponderación sobre el elemento de prueba del cual concluyó que no tenía incidencia en la sentencia condenatoria, por lo que no advirtió vicio y declaró no ha lugar la casación.

2. A partir de lo anterior, este tribunal ha constatado que la certificación del expediente clínico en comento ofrecido como prueba de descargo por la defensa del señor CM, fue admitido en el auto de apertura a juicio, aunque no se disponía de ella en ese momento.

Si bien dicha certificación fue incorporada en la vista pública por el juez de sentencia, esta no fue valorada ni se brindaron razones para no hacerlo.

Sin embargo, la cámara demandada, al resolver el recurso de apelación presentado contra la sentencia, hizo un análisis sobre la información contenida en dicho expediente clínico, de ella determinó, con base en la teoría de inclusión mental hipotética, que si bien ese elemento no fue examinado por el juez, en nada modificaba la conclusión arribada sobre la responsabilidad penal del favorecido en el hecho delictivo atribuido.

La Sala de lo Penal analizó si el citado documento fue valorado por la cámara demandada, estableciendo que sí lo hizo y descartando con ello la existencia del vicio alegado por el recurrente.

En tal sentido, se ha verificado que en el transcurso del proceso penal, al ofrecer el documento mencionado como prueba de descargo este fue admitido oportunamente e incorporado a juicio, garantizándose con ello el derecho de defensa del imputado. Si bien su valoración no se llevó a cabo para emitir el fallo condenatorio de primera instancia, sí se hizo a través de la decisión del recurso de apelación, con el que se determinó su irrelevancia en cuanto al establecimiento de la responsabilidad penal del acusado en el hecho delictivo, garantizando de esta forma la cámara demandada los derechos de defensa y libertad personal del procesado, quien conoció las razones por las cuales se ordenó su privación de libertad, con base en la valoración de la prueba incorporada. Por ello, deberá desestimarse el hábeas corpus"

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 347-2019, fecha de la resolución: 08/12/2021

Relaciones:

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 351-2019, fecha de la resolución: 24/03/2021

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

JURISPRUDENCIA RELACIONADA

"II. Esta sala se ha pronunciado de manera reiterada sobre las violaciones a la libertad e integridad personal cometidas mediante desapariciones forzadas durante el conflicto armado salvadoreño (por ejemplo, la inicial sentencia de 20/3/2002, Hábeas corpus 379-2000; la sentencia de 10/7/2015, Hábeas corpus 323-2012 acumulados; y la sentencia de 5/3/2018, Hábeas corpus 19-2017, entre otras). De acuerdo con esta jurisprudencia, las desapariciones forzadas se caracterizan por: a) una privación arbitraria de la libertad, por regla general llevada a cabo sin ninguna justificación u orden judicial o administrativa, así como

violando los procedimientos legales para detener; b) realizada por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado; c) sin dejar huellas o evidencias de la privación de libertad realizada y sin que los señalados como responsables, o quienes deban hacerlo, reconozcan dicha detención, sino que, por el contrario, se niegan a informar sobre el paradero de la persona, con el fin o con el resultado de mantener oculta su ubicación y su situación, así como de impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales aplicables para proteger los derechos violados y sancionar a los responsables."

CARÁCTER PLURIOFENSIVO; ES DECIR, QUE SE MANTIENE O PERMANECE HASTA QUE LA PERSONA DESPARECIDA ES LOCALIZADA

"La desaparición forzada es una grave violación a distintos derechos fundamentales (por ello se dice que tiene carácter pluriofensivo), que se mantiene o permanece hasta que la persona desparecida es localizada o, en su caso, hasta que se ubiquen e identifiquen sus restos (carácter continuado o permanente de la violación constitucional). Por la forma en que se realizan, estos actos colocan a las víctimas y sus familiares en una grave situación de vulnerabilidad, con un riesgo inmediato de sufrir daños irreparables, intimidación y supresión de otros derechos. Los parientes de las personas desaparecidas soportan un estado permanente de incertidumbre angustiosa y dolor recurrente por el desconocimiento de lo ocurrido. Por ello se ha reconocido que en este tipo de hechos, las peticiones de las víctimas deben ser contestadas por el Estado, sin que el silencio, el olvido o la denegación de justicia valgan como respuestas aceptables. Los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a saber qué pasó con ellas, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde la fecha en que se cometió la privación de libertad (auto de improcedencia de 6/3/2019, Hábeas corpus 33-2019).

La forma en que se cometen las desapariciones forzadas, con intervención estatal dirigida a suprimir las huellas o evidencias de la privación de libertad y procurando mantener oculto el paradero y la situación de la persona desaparecida, influye en la manera de demostrar o valorar la prueba sobre estos hechos. Al respecto, la jurisprudencia constitucional, siguiendo los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988; caso Escher y otros vs. Brasil, sentencia de 6 de julio de 2009; caso Radilla Pacheco vs. México, sentencia de 23 de noviembre de 2009; y caso Gelman vs Uruguay, sentencia de Sentencia de 24 de febrero de 2011, entre otras) ha reconocido que la vulneración reclamada puede comprobarse mediante indicios, presunciones judiciales o inferencias basadas en datos o elementos de juicio que establezcan hechos relevantes de manera consistente o fiable, conforme a una valoración libre o sana crítica de la prueba. La prueba indiciaria puede ser el único instrumento para proteger derechos "cuando las violaciones a los derechos humanos implican la utilización del poder del Estado para la destrucción de los medios de prueba directos de los

hechos, en procura de una total impunidad o de la cristalización de una suerte de crimen perfecto" (CorteIDH, Caso Godínez Cruz Vs. Honduras, Sentencia de 20/1/1989, párrafo 155).

La ausencia de prueba tradicionalmente calificada como directa o presencial no impide la determinación fáctica de lo reclamado. Además, esta determinación no necesita realizarse con certeza relativa o más allá de toda duda razonable, sino solo con probabilidad suficiente, a partir de las pruebas disponibles. Asimismo, entre las razones para aceptar la verdad de los hechos denunciados debe tomarse en cuenta, como marco general del análisis probatorio, el contexto histórico de las actuaciones reclamadas, caracterizado por una práctica sistemática y generalizada de graves violaciones a derechos humanos, realizadas durante la guerra por el Estado o con su aprobación, que ha sido objeto de reconocimiento oficial por diversos medios, incluso por el propio Estado salvadoreño en casos juzgados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (por ejemplo, en la Sentencia de 14/10/2014, Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador, párrafos 18 y 28). El contexto confirmatorio de un patrón de violencia estatal que incluyó desapariciones forzadas de personas durante la guerra ha sido establecido también en el "Informe Especial de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos humanos sobre la práctica de Desapariciones Forzadas de personas en el contexto del conflicto armado interno ocurrido en El Salvador entre 1980 y 1992", emitido el 7/3/2005, p. 4.

PRÁCTICAS SISTEMÁTICAS DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS

"En el informe de la PDDH antes citado se estableció claramente que: "La desaparición forzada de personas constituyó una práctica sistemática de violación a los derechos humanos en El Salvador, ejecutada y tolerada por el Estado, antes y durante el conflicto armado. La mayoría de estos hechos han sido suficientemente documentados tanto por la Comisión de la Verdad como por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Así, no hay duda alguna de su existencia, así como tampoco hay duda de que agentes del Estado salvadoreño fueron responsables de cometer el mayor porcentaje de estos crímenes" (los informes de la PDDH han sido reconocidos como elemento de prueba relevante en diversas sentencias, como la de 23/1/2017, Hábeas corpus 145-2015, considerando IV. 4).

Similares conclusiones expresa el informe: "La desaparición forzada en el contexto del conflicto armado de El Salvador. Una primera aproximación al fenómeno" (agosto 2020) de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador (CONBÚSQUEDA). Con base en fuentes diversas como las citadas, esta sala también ha declarado la existencia del contexto histórico mencionado, en casos similares anteriores (por ejemplo, en la referida sentencia de 5/3/2018, Hábeas corpus 19-2017, considerando V.4). De este modo, la verosimilitud del relato de los familiares de las víctimas no solo incrementa su fuerza probatoria por la

ausencia de impugnación de su credibilidad de parte de los órganos estatales que intervienen en el proceso, sino también por la coherencia de sus narraciones con los patrones de violencia oficialmente establecidos como el modo de obrar (modus operandi) utilizado por el Estado durante el conflicto armado interno, en relación con las privaciones de libertad denunciadas."

VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA COMETIDA POR AGENTES POLICIALES Y MILITARES DEL ESTADO SALVADOREÑO

"III. Con base en los criterios jurisprudenciales reseñados se analizará la prueba obtenida en este proceso constitucional.

I. Con relación a la desaparición de los señores JAGM (padre de la peticionaria) y OOL conocida por MOOL (madre de la peticionaria) son relevantes las declaraciones que rindieron como testigos la propia solicitante de este hábeas corpus, señora GEGO, el señor SDMG (sobrino de la solicitante), LGO (prima de la solicitante) y MAGQ (hermana de la solicitante). Esta última testigo confirma que tuvo conocimiento de esos hechos por referencia de otros familiares y que ella misma realizó diversas denuncias sobre lo ocurrido en los días inmediatamente posteriores, ante diversos órganos oficiales y organismos de derechos humanos, para tratar de encontrar a sus familiares.

Los tres primeros presenciaron y confirmaron los elementos esenciales del relato de hechos de la solicitud de hábeas corpus (expuestos al principio de esta resolución), en el sentido de que el 17 de mayo de 1982 se efectuó un operativo policial y militar en la vivienda de los señores GM y OL, en el cual fueron privados de su libertad ambas personas. Aunque ninguno de los testigos afirma haber visto al señor GM en su vivienda el día del operativo policial y militar, sí han establecido que ese mismo día fue cuando dicho señor desapareció; que observaron su vehículo en la entrada de la casa durante la intervención y luego cuando era trasladado en dirección a una sede policial; y que una de las testigos oyó cuando algunos de los miembros de los cuerpos de seguridad o militares que registraban la casa se referían a dicho señor. Todos estos elementos fundan la presunción de que ambos padres de la peticionaria fueron privados de su libertad el 17 mayo de 1982.

Todos los testigos demostraron que, al momento de presenciar o conocer los hechos sobre los cuales declararon, tenían capacidad para percibir y comprender la realidad observada. Tanto la señora GEGO como su prima, la señora LGO eran jóvenes de aproximadamente 17 años al momento de los sucesos referidos, por lo que podían interpretar lo que estaba ocurriendo. El señor SDMG tenía solo seis años cuando presenció lo que declara, pero confirmó que ya estaba escolarizado y que ya reconocía las letras que vio en las botas y vestimenta de las personas que detuvieron a su abuela, confirmando de manera muy relevante, dentro de los límites de lo que él pudo percibir, aspectos vinculados con la forma en que agentes de autoridad intervinieron la casa de los señores GM y OL. La señora MAGQ expuso que era mayor de edad cuando su padre desapareció y que por esa condición fue ella quien interpuso algunas de las denuncias para buscarlo a él y a su pareja.

En su declaración como testigo, la peticionara relató que su familia había recibido amenazas y se habían cambiado algunas veces de domicilio, probablemente por la actividad sindical en la que participaba su hermano FEGQ (quien tenía 26 años cuando desapareció), misma en la que había participado su padre el señor GM (de 48 años al tiempo de los hechos), quien también formaba parte de las comunidades eclesiales de base de la época. Esto resulta suficientemente confirmado por el resto de declarantes e indica que sus familiares tenían el perfil de ciudadanos críticos, activos o participantes en procesos sociales, quienes en la época del conflicto armado eran estigmatizados como enemigos o subversivos y eran con frecuencia el tipo de víctimas de las desapariciones forzadas (Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, Naciones Unidas 1992, p. 42; e Informe de CONABÚSQUEDA DE 2020, p. 65). Las respuestas de las instituciones estatales que han intervenido en este proceso, negando la existencia de información sobre dichas capturas, es consistente con uno de los elementos característicos de tales desapariciones: la supresión de evidencias de lo ocurrido o la falta de registro de lo actuado.

Por otra parte, tal como se ha relacionado en la enumeración de la prueba documental, existe constancia de las diversas denuncias interpuestas por los familiares, a raíz de la desaparición de los señores GM y OL; denuncias que se repitieron en 1992, después de la firma de los Acuerdos de Paz. Los hechos narrados en esas denuncias respecto a la forma de las privaciones de libertad y a quienes las cometieron, son esencialmente coherentes con las declaraciones de los testigos y con el contenido fáctico de la petición de hábeas corpus. Es decir que el relato histórico de la forma en que se produjeron las desapariciones forzadas y sobre sus responsables ha permanecido constante a pesar de los años que han trascurrido desde los hechos. Varios de los testigos fueron sometidos a contrainterrogatorios y mantuvieron su dicho, sin contradicciones, retractaciones o inconsistencias que afecten su credibilidad. Asimismo, respondieron ampliamente a preguntas aclaratorias de esta sala y se manifestaron en todo momento con seguridad y espontaneidad, aunque evidenciando la profunda carga emocional de dolor que sigue causándoles la ausencia de sus familiares.

2. Los criterios de valoración antes expuestos son aplicables también, en buena medida, a los datos probatorios sobre la desaparición del señor FEGQ (hermano de la solicitante). Únicamente debe aclararse que respecto al hecho de su privación de libertad, una parte de la prueba testimonial es de referencia, es decir que, en cuanto a cómo se produjo la desaparición y a quiénes la efectuaron, los testigos declaran sobre lo que les fue comunicado por otras personas. Las testigos GEGO (solicitante), LGO (prima de la solicitante) y MAGQ (hermana de la solicitante) conocieron directamente que el señor GQ había desaparecido el 15 de mayo de 1982, dos días antes del operativo militar y policial en la casa de sus padres. Sin embargo, solo la señora GEGO escuchó cuando un amigo de su hermano (a quien identifica como RP) le contó a su padre que el señor GQ fue capturado por miembros de la Policía Nacional, así como la forma y lugar de la captura. La persona que presenció los hechos fue también sujeto de desaparición, pocos días después, el 18 de mayo de 1982.

Esta sala considera que la información de referencia aportada por las testigos en este proceso y especialmente lo declarado por la solicitante es creíble, por varias razones. Primero, las declaraciones de referencia se deben a la imposibilidad material o falta de disponibilidad del testigo presencial. Segundo, la información sobre la forma y los autores de la privación de libertad del señor GQ fue aportada por el señor RP a la señora GEGO y a su padre de manera inmediata a la ocurrencia de los hechos, precisamente con la finalidad de describir la forma en que eso había sucedido, probablemente para que sus familiares pudieran iniciar la búsqueda con alguna idea útil sobre a dónde acudir. La señora GO expresó además que el señor P llegó "bastante asustado, bastante preocupado" lo que indica que ella presenció una reacción compatible con la veracidad de lo que dicho señor les estaba avisando. En tercer lugar, la información de referencia fue corroborada por el hecho mismo de que no se supo más sobre el paradero del hermano de la solicitante; por la circunstancia de que el mismo testigo presencial fue también desaparecido; y porque solo dos días después de la desaparición del señor GQ se ejecutó el operativo policial y militar en que desaparecieron además los padres de dicho señor y de la peticionaria.

La veracidad de la desaparición forzada del señor GQ también es consistente con los antecedentes de amenazas previas sobre los que declaró la solicitante y testigo GEGO, así como es compatible con las actividades sindicales y sociales que ella afirmó que su hermano realizaba en la época en que fue privado de libertad. La desaparición de los tres miembros de una misma familia en un corto tiempo coincide además con uno de los patrones oficialmente reconocidos como modo de obrar del Estado Salvadoreño durante el conflicto armado, en el sentido de que: "fueron frecuentes los casos de desapariciones colectivas o sucesivas en familias y comunidades. La evidencia testimonial encontrada muestra que, muchas familias sufrieron la desaparición simultánea o continuada de varios miembros de su núcleo familiar. Ello ofrece una idea de la condición de desamparo e indefensión en que quedaron los que sobrevivieron, así como de los diversos impactos psicosociales, familiares y económicos que debieron enfrentar." (Informe de CONABÚSQUEDA DE 2020, p. 129).

3. Por todas estas razones, con base en la prueba practicada, se concluye que efectivamente los señores JAGM, OOL conocida por MOOL y FEGQ fueron víctimas de desaparición forzada cometida por agentes policiales y militares del Estado salvadoreño, en mayo de 1982, en la forma que ha sido descrita en este proceso."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 311-2017, fecha de la resolución: 16/06/2021

DETENCIÓN ADMINISTRATIVA

LÍMITE MÁXIMO ESTABLECIDO POR LA CONSTITUCIÓN

"III. Esta Sala ha indicado que el artículo 13 inciso 2º de la Constitución establece: "La detención administrativa no excederá de setenta y dos horas, dentro

de las cuales deberá consignarse al detenido a la orden del juez competente, con las diligencias que hubiere practicado". De ello se colige que la detención administrativa es una restricción al derecho de libertad, llevada a cabo por agentes policiales –ya sea en flagrancia o en cumplimiento de una orden emanada de la Fiscalía General de la República–, con el objeto de hacer comparecer ante la autoridad judicial a quien se señala como autor o participe de un hecho delictivo.

Dicho artículo establece a su vez el límite temporal máximo de la referida detención, por lo que cumplidas las setenta y dos horas a las que alude la disposición en comento la persona deberá ser puesta a la orden del juez respectivo, y corresponderá a este la decisión en torno al mantenimiento o no de la restricción al derecho de libertad física –sentencia del 30 de abril de 2012, hábeas corpus 499-2011–.

Asimismo, el artículo 13 inciso 3º Cn. indica: "La detención para inquirir no pasará de setenta y dos horas y el tribunal correspondiente estará obligado a notificar al detenido en persona el motivo de su detención, a recibir su indagatoria y a decretar su libertad o detención provisional, dentro de dicho término". "

PLAZO PERENTORIO SEÑALADO EN LA CONSTITUCIÓN IMPIDE QUE, LUEGO DE TRANSCURRIDO, UNA PERSONA PERMANEZCA PRIVADA DE SU LIBERTAD SIN QUE HAYA UN PRONUNCIAMIENTO JURISDICCIONAL SOBRE SU SITUACIÓN JURÍDICA

"Al respecto, la jurisprudencia de esta Sala ha sido categórica al calificar dicha restricción como una detención judicial confirmatoria, de naturaleza cautelar, que se encuentra revestida –al igual que cualquier otra medida cautelar– de características propias como la provisionalidad o temporalidad.

En ese sentido, el límite máximo dispuesto por el propio constituyente permite ofrecer seguridad jurídica al justiciable de que no será objeto de una restricción al derecho de libertad personal de forma indefinida, incierta e ilimitada sino concurren en su contra los elementos suficientes para sustentarla, pues dentro del plazo de setenta y dos horas debe decidirse sobre la libertad de la persona, la continuación de su detención o la imposición de medidas cautelares de diferente naturaleza.

El término de inquirir comprende entonces el tiempo que el detenido, ya a disposición del juez, se mantiene privado de libertad en tanto aquel decide sobre su situación personal respecto a la referida libertad; es decir, este plazo perentorio señalado en la Constitución impide que luego de transcurrido, una persona permanezca privada de su libertad sin que haya un pronunciamiento jurisdiccional sobre su situación jurídica, ya sea restableciendo el goce del citado derecho o bien confirmando la restricción al derecho de libertad personal, pues no hacerlo sería una arbitrariedad –sentencia de 20 de enero de 2021, hábeas corpus 359-2018–, y dicha detención no debe sobrepasar las 72 horas fijadas por la disposición constitucional.

IV. De la certificación del proceso penal remitida se tiene que la señora IZRR fue capturada a las dos horas con diez minutos del día 8 de abril de 2019; además, costa que la solicitud de audiencia de imposición de medida cautelas fue

recibida por el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador, en resolución de las dieciséis horas con cincuenta minutos del día 10 de abril de 2019, en la cual se ordenó el término de detención para inquirir y se señaló para la celebración de la audiencia preliminar las catorce horas del día 11 de abril de ese año.

En ese orden, consta que dicha audiencia se efectuó en la hora y fecha fijadas en la que se resolvió decretar instrucción formal y la imposición de detención provisional en contra de la señora RR y otros. Posteriormente, en audiencia especial de revisión de medidas del 21 de mayo de 2019, se sustituyó la detención a la favorecida por otras medidas y, una vez cumplida la caución económica impuesta, se ordenó su inmediata libertad el día 29 de mayo de 2019.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que, de acuerdo a lo establecido por el Constituyente en los incisos 2º y 3º del artículo 13, la detención por inquirir inicia desde que el capturado es consignado a la orden del juez competente, con las diligencias practicadas –sentencia de 20 de enero de 2021, hábeas corpus 359-2018–.

En el presente caso, si bien en los documentos recibidos no consta la fecha exacta en que la procesada fue puesta a la orden del juez demandado, es posible determinar que aquella fue capturada a las dos horas con diez minutos del día 8 de abril de 2019 y, mediante oficio número 75-19-2G, la policía remitió las diligencias de la detención a la fiscal Carolina de La Paz Cabrera Molina, las cuales fueron recibidas a las once horas con treinta y siete minutos del día 9 de abril del mismo año.

Posteriormente, en resolución de las dieciséis horas con cincuenta minutos del día 10 de abril de 2019, el Juez Especializado de Instrucción de San Salvador recibió la solicitud de audiencia de imposición de medidas cautelares y ordenó la detención por termino de inquirir de la imputada y otros, señalando como fecha para realizar audiencia inicial las catorce horas del 11 de abril de dicho año, misma que, según acta respectiva, se celebró en la hora y fecha indicadas y se decretó la detención provisional a la señora RR, medida que fue revisada en audiencia del 21 de mayo de 2019, en la que se decidió sustituir la detención siendo puesta en libertad el 29 de los mismos mes y año.

De las fechas antes mencionadas, es posible determinar que la procesada fue consignada a la orden de dicho juzgador a partir del 9 de abril de 2019 y a las catorce horas del 11 de abril de dicho año, se celebró la audiencia inicial donde se decretó la detención provisional; por tanto, está acreditado que la imputada fue llevada ante la autoridad judicial y esta se pronunció respecto a su libertad dentro de los límites temporales establecidos en la Constitución. En consecuencia, se descarta la existencia de trasgresión al derecho de libertad física de la favorecida al no haberse excedido los plazos de las detenciones administrativa y para inquirir regulados en el artículo 13 inc. 2º y 3º Cn.”

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 190-2019, fecha de la resolución: 12/03/2021

DETENCIÓN POR EL TÉRMINO DE INQUIRIR

PLAZO PERENTORIO SEÑALADO EN LA CONSTITUCIÓN

"III. 1. El artículo 13 inciso 3° Cn. indica: "La detención para inquirir no pasará de setenta y dos horas y el tribunal correspondiente estará obligado a notificar al detenido en persona el motivo de su detención, a recibir su indagatoria y a decretar su libertad o detención provisional, dentro de dicho término".

Al respecto, la jurisprudencia de esta Sala ha sido categórica al calificar dicha restricción como una detención judicial confirmatoria, de naturaleza cautelar, que se encuentra revestida —al igual que cualquier otra medida cautelar— de características propias como la provisionalidad o temporalidad —sentencia de 4 de mayo de 2012, hábeas corpus 78-2012—."

En ese sentido, el límite máximo dispuesto por el propio constituyente permite ofrecer seguridad jurídica al justiciable de que no será objeto de una restricción al derecho de libertad personal de forma indefinida, incierta e ilimitada sino concurren en su contra los elementos suficientes para sustentarla, pues dentro del plazo de setenta y dos horas debe decidirse sobre la libertad de la persona, la continuación de su detención o la imposición de medidas cautelares de diferente naturaleza.

"El término de inquirir comprende entonces el tiempo que el detenido, ya a disposición del juez, se mantiene privado de libertad en tanto aquel decide sobre su situación personal respecto a la referida libertad; es decir, este plazo perentorio señalado en la Constitución impide que luego de transcurrido, una persona permanezca privada de su libertad sin que haya un pronunciamiento jurisdiccional sobre su situación jurídica, ya sea restableciendo el goce del citado derecho o bien confirmando la restricción al derecho de libertad personal, pues no hacerlo sería una arbitrariedad."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 359-2018, fecha de la resolución: 20/01/2021

DETENCIÓN PROVISIONAL

RELACIONADO CON EL DERECHO DE LIBERTAD Y ESTADO DE INOCENCIA

"III. La superación del límite legal de duración máxima de la aludida medida cautelar tiene relevancia constitucional desde la perspectiva de los derechos fundamentales de libertad y estado de inocencia, artículos 2 y 12 de la Constitución (Cn.). El derecho de libertad implica que sus restricciones tolerables por las personas deben sujetarse al principio de legalidad (art. 15 Cn.), lo que incluye el límite legal de duración máxima de la detención provisional, art. 8 del Código Procesal Penal (CPP). El derecho a la presunción de inocencia exige cine la persona imputada sea tratada en general como inocente, es decir, libre, de manera que las restricciones excepcionales de ese estado de libertad únicamente son admisibles dentro de los estrictos márgenes de tiempo que permite el legislador."

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL PARA DETERMINAR LA DURACIÓN

"En dicho sentido, esta Sala ha reiterado que la duración de la detención provisional no debe exceder según el caso: i) el tiempo necesario para alcanzar sus fines procesales; ii) el período de duración del proceso penal respectivo; iii) el lapso de la pena de prisión imponible para el delito atribuido; y iv) el tiempo máximo fijado en el art. 8 CPP (sentencia de 6 de noviembre de 2013, hábeas corpus 206-2013). Este criterio es también una exigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 7.5), desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que "cuando la ley establece un límite máximo legal de detención provisional, luego de él no puede continuar privándose de libertad al imputado –ver al respecto sentencias de fechas 12 de noviembre de 1997, 2 de septiembre de 2004 y 30 de octubre de 2008, en los casos Suárez Rosero contra Ecuador, Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay y Bayarri contra Argentina, respectivamente–."

LÍMITES TEMPORALES MÁXIMOS DE LA DETENCIÓN PROVISIONAL

"Finalmente, interesa recordar que en concreto, el articulo 8 CPP establece como límites temporales máximos de la detención provisional: 12 meses para delitos menos graves y 24 meses para delitos graves, aunque en estos últimos es posible ampliar el plazo por 12 meses más, durante o como efecto del trámite de los recursos de la sentencia condenatoria y mediante resolución debidamente fundada. Estos tiempos máximos no significan que los procesos penales deban extenderse de manera injustificada durante el total de esos rangos temporales, sino únicamente que la detención provisional, bajo ninguna circunstancia, podrá mantenerse más allá de ellos, puesto que excedido el plazo, la ley prevé expresamente la cesación de la privación de libertad, art. 335 N° 3 CPP –sentencia de 12 de diciembre de 2018, hábeas corpus 469-2017–."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 266-2019, fecha de la resolución: 19/02/2021

SE DEBE MOTIVAR LAS RAZONES DE LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA QUE RESTRINGE LA LIBERTAD DE UNA PERSONA

"Dicho artículo obliga a las autoridades a dictar por escrito las órdenes restrictivas al derecho de libertad de una persona, que prescriban en el ejercicio de sus competencias, dejando con ello constancia material dentro del proceso o procedimiento de las razones que motivaron la imposición de la medida.

La obligación de motivar las resoluciones por parte de las autoridades jurisdiccionales implica el deber de plasmar en ellas las explicaciones que evidencien el razonamiento que las llevó a determinada conclusión, para luego permitir el ejercicio de otros derechos conexos, entre ellos el de recurrir por parte de quienes resultan perjudicados por los pronunciamientos judiciales."

Dicha exigencia deriva del derecho fundamental de defensa e implica que la autoridad judicial debe respetar los derechos fundamentales de los enjuiciados, garantizando que estos conozcan los motivos que la inducen a resolver en determinado sentido y por consiguiente sea factible conocer y, si es el caso, impugnar su contenido mediante los mecanismos que la ley prevé. Esta obligación de motivación requiere el cumplimiento de las exigencias constitucionales y legales, por lo que deben exteriorizarse los razonamientos que cimenten las decisiones estatales de manera suficientemente clara, para que sea comprendida no solo por el técnico jurídico sino también por los ciudadanos."

PRESUPUESTOS PROCESALES NECESARIOS PARA SU ADOPCIÓN

"Así, la imposición de la detención provisional implica en principio la comprobación de ciertos presupuestos: apariencia de buen derecho y peligro en la demora, su concurrencia debe ser analizada por la autoridad judicial a la que competente la adopción de la medida cautelar, en cada caso concreto.

El primero consiste en un juicio de imputación o fundada sospecha de participación del imputado en un hecho punible. Además, la existencia de apariencia de buen derecho debe conjugarse con el segundo elemento —el peligro en la demora— que, en el proceso penal, consiste en un fundado riesgo de fuga u obstaculización de la investigación por parte del imputado. Dicho peligro no solo se incrementa o disminuye en razón de la gravedad del delito, sino también en razón de la naturaleza del hecho punible y de las condiciones de arraigo del imputado, visto todo de manera integral y no aisladamente, fundado además en elementos objetivos que permitan razonablemente sostener la inminencia de dichos peligros, teniendo en cuenta que la gravedad del delito no puede suponer por sí sola la concurrencia del periculum in mora, pues ello atentaría contra la presunción de inocencia, tornando a la prisión preventiva en una medida materialmente punitiva, la cual no puede operar de esa manera.

Sin embargo, este deber de motivar no exige una exposición detallada y extensa de las razones que llevaron al juzgador a resolver en determinado sentido, mucho menos se requiere la expresión completa del proceso lógico que el juez utilizó para llegar a su decisión, basta con exponer, en forma clara y concisa, los motivos de la decisión jurisdiccional, permitiendo mediante los mismos que la persona a quien se dirige la resolución logre comprender las razones que la informan —sentencia del 17 de marzo de 2017, hábeas corpus 385-2016—."
Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 363-2019, fecha de la resolución: 08/12/2021

DILACIONES INDEBIDAS

DEBE EXISTIR UN PLAZO RAZONABLE PARA DEFINIR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE UN IMPUTADO

"III. De acuerdo a lo sostenido por esta sala, el acceso a la jurisdicción, como una vertiente del derecho a la protección jurisdiccional, reconocido en el

art. 2 Cn., garantiza el cumplimiento de la obligación constitucional para las autoridades judiciales de dar respuesta a las pretensiones de las partes o de dictar la sentencia correspondiente y realizar su ejecución dentro de un proceso constitucionalmente configurado, el cual contempla, entre otros, el derecho de defensa.

Desde esa perspectiva, se ha considerado que este último derecho, dispuesto en el art. 12 Cn., incluye que todo imputado obtenga dentro de un plazo razonable la definición de su situación jurídica; así, las dilaciones indebidas dentro del proceso penal no solo coartan desproporcionalmente el derecho de libertad física, cuando existe alguna limitación sobre el mismo, sino que también inciden en el de defensa pues impiden al procesado conseguir –con la celeridad que el caso específico amerite– un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga fin del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad, que puede comprender el enjuiciamiento penal."

ELEMENTOS QUE DEBEN TENERSE EN CONSIDERACIÓN PARA CALIFICAR UN RETRASO EN LA TRAMITACIÓN DE UN PROCESO

"En ese sentido, no todo retraso en la tramitación de un proceso genera afectaciones con trascendencia constitucional; por lo cual para calificar el concepto de plazo razonable o dilación indebida, según la jurisprudencia de esta Sala, se deben tener en consideración los siguientes elementos: i) la complejidad del asunto: ya sea la complejidad fáctica o jurídica del litigio, tomando en consideración también las propias deficiencias técnicas del ordenamiento; ii) el comportamiento del interesado: es decir, aquel que pudo incidir en la actuación de la actividad judicial, pues no merece el carácter de indebida una dilación que haya sido provocada por el propio litigante; y iii) la actitud del juez o tribunal, referida a si las demoras en el proceso obedecen a la inactividad del órgano judicial, que sin causa de justificación, dejó transcurrir el tiempo sin impulsar de oficio el procedimiento, sin emitir una resolución de fondo u omitió adoptar medidas adecuadas para conceder la satisfacción real y práctica de las pretensiones de las partes.

También habrá de considerarse como un parámetro objetivo respecto de las dilaciones, la carga laboral del tribunal, ello podrá ponderarse según las circunstancias del caso en particular, puesto que el flujo de casos que un tribunal debe conocer, limita –más allá de todos los esfuerzos que haga– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su conocimiento, en todo caso, deberá tenerse en cuenta el tipo de restricción que padece el justiciable para ponderar la naturaleza de las dilaciones procesales.

Visto así, la autoridad judicial debe procurar no exceder los procesos penales a través de los denominados "plazos muertos", ya que su existencia vulnera el derecho de defensa, al no permitir al imputado –ante el estado de suspensión del proceso– hacer uso de los mecanismos que se encuentran a su alcance para resistir la pretensión acusadora y definir su situación jurídica.

Es de mencionar, además, que los artículos 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen la exigencia de que toda persona en la sustanciación de un enjuiciamiento penal debe ser juzgada en un plazo razonable y dicho plazo en la medida de lo posible debe ser observado, salvo que concurran circunstancias que permitan concluir que no se está ante una dilación indebida de la duración del proceso penal (sentencia de 3 de diciembre de 2018, hábeas corpus 103-2018)."

AUTORIDAD JUDICIAL HA INCIDIDO NEGATIVAMENTE EN LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DEL ACUSADO Y EN EL EFECTIVO EJERCICIO DE SU DERECHO DE DEFENSA, AL RETRASARSE DE MANERA IRRAZONABLE LA AUDIENCIA

"2. Con el detalle de las suspensiones y reprogramaciones de vista pública, e incidentes de recusaciones y excusas, esta sala ha comprobado que en el trámite del proceso penal seguido contra el favorecido PC, se ha dilatado la celebración del juicio reiteradamente aconteciendo incidentes de recusaciones y excusas. Sin embargo, luego de dilucidados tales incidentes, es posible notar que en ningún momento se procuró la realización de la vista pública, pues existen lapsos considerables injustificados para agendarla nuevamente y llevarla a cabo, sin solución de continuidad por la autoridad judicial, en tanto esta situación se siguió prolongado indefinidamente hasta la última programación de la que esta sala tiene constancia en el expediente que data del 25 de octubre de 2019.

Incluso se advierten lapsos prolongados sin señalamientos para celebrar el juicio, así se evidencia que entre uno y otro hay hasta más de ocho meses para llevarlo a cabo, durante los cuales no se verifica la existencia de actividad judicial alguna en ese proceso.

En cuanto a la complejidad del proceso penal, es de indicar que ciertamente según se ha expuesto se trata de un caso con multiplicidad de imputados y de una gran cantidad de piezas que conforman el expediente judicial. No obstante, la reproducción del expediente –dentro de la concepción de diligenciamiento judicial debido– no es justificación suficiente para constituir otro de los motivos que han dilatado frecuentemente la realización del juicio. Las autoridades judiciales que han conocido del caso, han debido proponer vías a tal problemática que no fueran en detrimento de los derechos fundamentales de protección jurisdiccional, defensa y libertad personal del favorecido, como sí lo fue la prolongación irrazonable de la vista pública.

Para este tribunal no es posible negar la carga laboral que ha sido alegada por la autoridad demandada como causa que mantiene saturado el calendario judicial; pero la postergación del juicio por más de dos años aproximadamente resulta injustificable con base en tal argumento, estando la persona mientras tanto soportando restricciones a su derecho de libertad física; de ser aceptado por esta sala, implicaría admitir como razonable mantener en incertidumbre sobre la definición de su situación jurídica de manera excesivamente prolongada a una

persona que afronta un juicio sin posibilidad de defenderse. Para evitar ello, la autoridad judicial debió tomar en cuenta especialmente la reiterada suspensión de señalamientos, la dilación suscitada, entre otros aspectos, para priorizar este caso.

Por otro lado, se ha verificado que la demora acontecida no ha sido producto de acciones de las partes intervinientes tendientes a dilatar el proceso penal, pues las recusaciones planteadas han sido resueltas favorablemente por la cámara que conoció de estas.

En ese sentido, se ha determinado que el comportamiento de la autoridad judicial ha incidido negativamente en la protección jurisdiccional del acusado y en el efectivo ejercicio de su derecho de defensa, al retrasarse de manera irrazonable la audiencia en la que se expresa a plenitud este derecho frente a la acusación que obra en su contra, ya sea a través de llevar a cabo en ella su estrategia defensiva o, una vez pronunciada la sentencia correspondiente, impugnarla. Dicha retardación, a su vez, ha afectado el derecho de libertad física del favorecido, dado que durante la dilación cuestionada ha permanecido cumpliendo medidas cautelares que limitan el ejercicio pleno de este derecho, como son presentarse cada quince días al juzgado y prohibición de salir del país.

Por tanto, este tribunal determina que el Juez Especializado de Sentencia de San Miguel ha incurrido en dilaciones indebidas en la celebración de la vista pública, lo cual ha vulnerado el derecho de defensa del señor PC, por no procesársele en un plazo razonable, pues la paralización del proceso penal le ha impedido obtener un pronunciamiento que defina su situación jurídica con celeridad y, a su vez, le ha obstaculizado hacer uso oportuno de los mecanismos de defensa para desvirtuar la pretensión fiscal, en tanto se ha postergado reiteradamente el momento procesal correspondiente para ello, lo cual ha incidido en su derecho de libertad física, habiéndose transgrediendo los artículos 2 y 12 Cn., por lo cual deberá estimarse la petición planteada."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 78-2019, fecha de la resolución: 16/08/2021

DENTRO DEL PROCESO PENAL NO SOLO COARTAN DESPROPORCIONALMENTE EL DERECHO DE LIBERTAD FÍSICA, SINO QUE TAMBIÉN INCIDEN EN EL DE DEFENSA

"2. De acuerdo a lo sostenido por esta sala, el acceso a la jurisdicción, como una vertiente del derecho a la protección jurisdiccional, garantiza el cumplimiento de la obligación constitucional para las autoridades judiciales, de dar respuesta a las pretensiones de las partes o de dictar la sentencia correspondiente y realizar su ejecución dentro de un proceso constitucionalmente configurado, el cual contempla, entre otros, el derecho de defensa.

Desde esa perspectiva, se ha considerado que este último derecho indicado incluye que todo imputado obtenga dentro de un plazo razonable la definición de

su situación jurídica; así, las dilaciones indebidas dentro del proceso penal no solo coartan desproporcionalmente el derecho de libertad física, cuando existe alguna limitación sobre el mismo, sino que también inciden en el de defensa pues impiden al procesado conseguir –con la celeridad que el caso específico amerite– un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga fin del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad, que puede comprender el enjuiciamiento penal."
Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 370-2019, fecha de la resolución: 18/08/2021

DOBLE JUZGAMIENTO

PROCEDENCIA

"III. 1. A. El principio de non bis in ídem o prohibición de doble juzgamiento goza de reconocimiento en el sistema jurídico salvadoreño a partir del artículo 11 inciso 1º de la Constitución, el cual prescribe que "Ninguna persona puede ser (...) enjuiciada dos veces por la misma causa"; asimismo, su desarrollo legal se encuentra en el artículo 9 del Código Procesal Penal (CPP), que dispone "Nadie podrá ser perseguido más de una vez por el mismo hecho". Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha establecido que dicho principio consiste en la imposibilidad de que el Estado pueda procesar, dos veces o más, a una persona por el mismo hecho, ya sea en forma simultánea o sucesiva, la garantía también incluye la prohibición de doble condena por el mismo hecho.

El análisis sobre el doble enjuiciamiento al que alude la Constitución debe ser realizado en relación con la persecución penal, de manera que lo esencial es la existencia de un acto de autoridad mediante el cual se señale a una misma persona como autora o partícipe de un hecho delictivo conocido previo o simultáneamente. Por tanto, la doble persecución ocurre cuando se inicia un nuevo procesamiento habiendo otro ya concluido o en trámite; es decir, cuando se desenvuelve una persecución penal idéntica a la que se quiere intentar.

En esos términos, el principio de non bis in ídem tiene aplicación con independencia del estado del primer procesamiento, sien do suficiente la existencia de dos imputaciones fundamentadas en los mismos elementos. Y es que el principio en comento se traduce en un derecho a no ser juzgado o condenado dos veces por una misma causa; a la prohibición de pronunciar más de una decisión definitiva respecto de una pretensión; decisión que, por lógica, ataca el contenido esencial de la mencionada categoría constitucional. De tal forma, puede sostenerse que la finalidad de esta figura es resguardar a las personas de las consecuencias que provoca una nueva persecución penal, cuando otro sobre el mismo objeto está en trámite o ha sido agotado –sentencia del 9 de junio de 2012, hábeas corpus 178-2011–."

REQUISITOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA TENER POR ESTABLECIDA SU EXISTENCIA

"B. Los requisitos que deben concurrir para tener por establecida la existencia o no de una doble o múltiple persecución, y ellos son: i) identidad en la persona (eadem personas); ii) identidad del objeto de la persecución (eadem res); y iii) identidad de la causa de persecución (eadem causa petendi).

Para que exista doble juzgamiento por identidad en la persona es necesario que se trate del mismo sujeto perseguido penalmente en uno y otro caso. Este requisito es operativo individualmente pues conlleva una referencia estrictamente personal y no posee efecto extensivo. Por su parte, la identidad del objeto de la persecución implica que los hechos imputados deben ser los mismos atribuidos a esa persona en un juzgamiento antiguo o simultáneo, por lo tanto este cuadro fáctico ya no puede ni debe ser objeto de un nuevo enjuiciamiento, resultando irrelevante que el acontecimiento histórico soporte ser subsumido en distintos conceptos jurídicos, pues de no entenderlo así, se posibilitaría nuevas persecuciones penales con el pretexto de encuadrarse en valoraciones o calificaciones jurídicas distintas a la anterior. La identidad de causa de persecución indica que debe tratarse del mismo motivo por el cual se juzga, y con ello se hace referencia al mismo objetivo final del proceso, si concurre la misma causa de infracción, corresponde declarar la identidad, por cuanto se trata del mismo motivo de juzgamiento –sentencia del 13 de febrero de 2015, inconstitucionalidad 21-2012–.

Es preciso enfatizar en este punto que el principio non bis in ídem no imposibilita perseguir a la misma persona por una misma calificación jurídica cuando se trata de comportamientos históricos diferentes; sino, volver a perseguir a esa persona por un mismo hecho histórico, cualquiera que fuere la denominación jurídica utilizada. Finalmente, para que exista identidad de la causa de persecución debe constatarse la compatibilidad del sustrato fáctico y del fundamento jurídico de dos o más procesos seguidos contra una misma persona.

Consecuentemente, cuando se promueve la acción penal por un mismo hecho delictivo simultánea o sucesivamente, ante uno o más tribunales, contra una misma persona y ello genera el surgimiento de dos procesamientos con un mismo objeto, se transgrede el principio de non bis in ídem –sentencia del 9 de junio de 2011, hábeas corpus 178-2011, ya citada–."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 265-2018, fecha de la resolución: 29/01/2021

HÁBEAS CORPUS CONTRA PARTICULARES

REQUIERE QUE LA ACTUACIÓN RECLAMADA HAYA SIDO EMITIDA DENTRO DE UNA RELACIÓN SUPRA-SUBORDINACIÓN EN SENTIDO MATERIAL

"Asimismo, se ha señalado que los particulares también pueden producir actos limitativos sobre los derechos constitucionales protegidos mediante el há-

beas corpus, pero para ello se requiere que la actuación reclamada haya sido emitida dentro de una relación de supra-subordinación en sentido material, la cual puede advertirse en los casos en que el sujeto afectado no tiene más alternativa que aceptar el acto emitido por el particular, en virtud de la naturaleza de la vinculación que guarda con aquel, que lo coloca en una posición de predominio capaz de restringir o, incluso, anular el efectivo ejercicio de algunos de sus derechos –improcedencia de 27 de enero de 2017, hábeas corpus 467-2016–."
Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 67-2020, fecha de la resolución: 26/02/202

HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO

MECANISMO IDÓNEO PARA PROTEGER A LAS PERSONAS DETENIDAS DE ACTUACIONES U OMISIONES QUE ATENTEN CONTRA SU DIGNIDAD, EN RELACIÓN CON SU INTEGRIDAD PERSONAL

"III. 1. Este Tribunal ha enfatizado que el hábeas corpus es el mecanismo idóneo para proteger a las personas detenidas de actuaciones u omisiones que atenten contra su dignidad en relación con su integridad personal. Además, ha señalado que la protección de la salud de los internos tiene una vinculación directa con el derecho a la integridad, en tanto su desatención puede agravar de manera ilegítima las condiciones de cumplimiento de la detención en que se encuentran. Y es que, en el caso de las personas respecto de las que no se reclama la inconstitucionalidad de su privación de libertad sino de las condiciones de su cumplimiento, su estado de recluido en un centro penal no puede justificar la ausencia de tutela de los derechos que le son inherentes en su calidad de ser humano.

De lo contrario, podrían generarse afectaciones a diversos derechos –entre ellos la salud– que a su vez menoscaben la integridad, lo que deberá determinarse según las particularidades de cada caso. En relación con la temática abordada cabe citar lo dispuesto en tratados internacionales suscritos por El Salvador, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual, en su art. 10, establece que las personas privadas de libertad serán tratadas humanamente; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho al respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas que se encuentran detenidas (art. 5).

Así también es importante referirse a los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 13 de marzo de 2008, Principio X, que indica que las personas privadas de libertad tienen derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, así como el acceso a tratamiento y medicamentos

apropiados y gratuitos. Dicho principio también señala que el Estado debe garantizar que los servicios de salud proporcionados en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación con el sistema de salud pública. De manera que la protección a la integridad y a la salud de las personas –incluidos los detenidos– no solo está reconocida de forma expresa en una disposición constitucional (art. 65 Cn.) sino también a través de normas de derecho internacional que El Salvador debe cumplir de buena fe (Sentencia de hábeas corpus 427-2018, de 19 de agosto de 2019)."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 94-2020, fecha de la resolución: 12/02/2021

HÁBEAS CORPUS DE PRONTO DESPACHO

MECANISMO UTILIZADO A FAVOR DE UNA PERSONA QUE MANTIENE UNA RESTRICCIÓN A SU LIBERTAD PERSONAL, ANTE EL RETRASO DE UNA RESOLUCIÓN, INFORME U OTRA PROVIDENCIA QUE SE ESPERA LE GENERE BENEFICIOS EN LA ESFERA DE SUS DERECHOS

"III. El hábeas corpus de pronto despacho es el mecanismo utilizado a favor de la persona que mantiene una restricción a su libertad personal, ante el retraso de una resolución, informe u otra providencia que se espera le genere beneficios en la esfera de sus derechos, para que los mismos efectivamente se produzcan, con lo cual si bien no hay certeza de conseguirse el restablecimiento de la libertad personal, se logra una respuesta sobre lo requerido, que pueda llegar a producir incidencia en el ejercicio de sus derechos. En ese contexto la omisión de respuesta por parte de las autoridades tiene relevancia constitucional desde la perspectiva de los derechos fundamentales de petición y libertad física, entre otros, –arts. 2 y 18 Cn., respectivamente–.

Por ello, con el referido tipo de hábeas corpus se pretende la obtención de una contestación a la brevedad posible, ya sea que se estime o deniegue lo pedido, de tal forma que no solamente se verifica si hay omisión en el otorgamiento de la respuesta, sino también la dilación generada –sentencia del 16 de abril de 2018, hábeas corpus 488-2017–."

AUTORIDAD DEMANDADA VULNERO EL DERECHO DE PETICIÓN DE LA CONDENADA, POR LA FALTA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD PARA OPTAR A LA FASE DE CONFIANZA

"IV. Consta en estas actuaciones una petición de la abogada [...] a favor de la señora MRHR –del 14 de mayo de 2019–a la Directora del Centro de Detención Menor de Izalco, para que aquella fuera evaluada por el equipo técnico criminológico para optar a la fase de confianza, sin embargo, desde esa fecha al momento en que se promovió este hábeas corpus –13 de septiembre de 2019–y su posterior traslado a otro centro penal –15 de diciembre de 2019–la autoridad demandada no respondió la petición planteada.

Y es que la autoridad penitenciaria no aportó argumentos ni prueba alguna para justificar la falta de respuesta, por lo que este tribunal advierte que la inactividad por parte de las autoridades correspondientes del Centro de Detención Menor de Izalco ha vulnerado el derecho de petición que garantiza la Constitución, con incidencia en el derecho de libertad física de la condenada HR, dado que la fase de confianza permite adquirir ciertas cuotas de libertad, tanto dentro como fuera del centro penitenciario, por lo que deberá estimarse esta pretensión."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 332-2019, fecha de la resolución: 26/11/2021

Relaciones:

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 324-2019, fecha de la resolución: 12/03/2021

HÁBEAS CORPUS RESTRINGIDO

NATURALEZA Y OBJETO PRINCIPAL

"III. Esta Sede ha señalado que el hábeas corpus llamado restringido debe ser un medio de protección efectiva contra injerencias o perturbaciones menores de la libertad física, como cacheos sistemáticos, hechos de vigilancia abusiva u otras actitudes injustificadas que, aunque estas no alcancen el nivel de privaciones de libertad o detenciones, constituyan actuaciones del poder público excesivas, arbitrarias o irrazonables, ordenadas o consentidas por alguna autoridad. Un funcionamiento efectivo de la protección constitucional en tales casos, mediante el Hábeas Corpus, está exigido en los arts. 40 y 63 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, los cuales encuentran su fundamento principal en el art. 11 Cn.

En ese sentido se ha establecido que debe existir una sujeción rigurosa de las actuaciones públicas, entre ellas las policiales, a los principios de legalidad y razonabilidad o prohibición de alteración de derechos (arts. 86 y 246 Cn.), que dan a dichas actuaciones un carácter institucional o formalizado, sujeto a requisitos de validez jurídica, y que únicamente se justifican en el caso de la PNC por la finalidad de defensa de los derechos de la persona y con estricto apego a, o respeto de, tales derechos (arts. 1, 159 inc. 3º y 168 ord. 17º Cn.).

Por ello ante un señalamiento verosímil de arbitrariedad o exceso, se ha establecido que corresponde a las autoridades respectivas la demostración probatoria suficiente que descarte la vulneración de derechos alegada pues de lo contrario la eficacia del hábeas corpus sería ilusoria, al imponer al favorecido una carga probatoria prácticamente imposible, en caso de una mera negación de la autoridad pública.

Finalmente se ha estipulado que el objeto principal del hábeas corpus es proteger contra la continuación de las injerencias arbitrarias, ordenando el cese de las molestias o restricciones injustificadas contra el favorecido; y no nece-

sariamente debe establecer una responsabilidad individualizada de personas concretas ni imponerles algún tipo de sanción, lo cual podría ser indagado en otro procedimiento. Señalándose que las autoridades que toleran, permiten o consienten la arbitrariedad de sus subalternos, pueden vincularse por los efectos de este tipo de proceso constitucional en razón de que las mismas deben tener el cuidado en la vigilancia o fiscalización de la conducta de los agentes policiales cuando se defienden las actuaciones cuestionadas con una simple negación, sin responder en forma precisa a cada elemento de hecho relatado por la persona que se considera afectada (sentencia del 8 de mayo de 2019, hábeas corpus 133-2018)."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 10-2019, fecha de la resolución: 08/03/2021

Relaciones:

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 367-2018, fecha de la resolución: 10/11/2021

JUECES DE PAZ

POTESTAD DE CELEBRAR AUDIENCIA INICIAL SIN QUE ESTÉ PRESENTE EL PROCESADO

"Sobre la presencia del imputado en la audiencia inicial se ha sostenido que los jueces de paz tienen la potestad de celebrar dicha audiencia sin que esté presente el procesado, cuando se encuentre ausente o exista un obstáculo insuperable para su comparecencia, según sea el caso; sin embargo, esta circunstancia opera siempre y cuando el imputado haya nombrado defensor y que este último esté presente en el momento de celebrarse la audiencia –sentencia del 5 de mayo de 2010, habeas corpus 33-2009–."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 448-2020R, fecha de la resolución: 01/02/2021

LA DECISIÓN DE RESOLVER CON SOLO LA VISTA DEL REQUERIMIENTO DEBE SER PRECEDIDA DE UNA SERIE DE ACTOS QUE DEJEN DE MANIFIESTO QUE SE PROCURÓ POR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES DAR A CONOCER AL INCULPADO LA EXISTENCIA DE UNA IMPUTACIÓN EN SU CONTRA

"2. La jurisprudencia constitucional también ha considerado que la finalidad del derecho de defensa es otorgar una igualdad de oportunidades dentro del proceso, por lo que su respeto cobra especial relieve en la audiencia inicial, por ser este el momento en el que se realiza la primera intervención judicial de importancia para la resolución del caso; en ella el juez de paz decide sobre la continuación del proceso o sobre alguna de las peticiones alternativas formuladas por la Fiscalía General de la República en su requerimiento.

La circunstancia de que el imputado se encuentre o no detenido, afecta el procedimiento a seguir para la realización de la audiencia inicial, de tal forma que cuando este no se encuentra presente en la audiencia inicial por cualquier motivo y no ha nombrado defensor, el inciso final del art. 298 CPP, faculta al juzgador a resolver con la sola vista del requerimiento.

Entonces, la decisión del juez de paz de resolver con solo la vista del requerimiento debe ser precedida de una serie de actos que dejen de manifiesto que se procuró por todos los medios posibles dar a conocer al inculpado la existencia de una imputación en su contra, y que este contó en todo momento con la posibilidad de acceder al proceso penal, así como de ser oído por la autoridad judicial, sobre todo antes de la decisión que imponga una medida cautelar que restrinja el derecho de libertad física del imputado, ya que ella solo podrá adoptarse si se ha permitido previamente el ejercicio del derecho de defensa del justiciable —sentencia de 7 de febrero de 2018, hábeas corpus 336-2017—."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 729-2020R, fecha de la resolución: 15/02/2021

LIBERTAD CONDICIONAL ANTICIPADA

DEFINICIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL ANTICIPADA

"III. 1. Este Tribunal se ha referido respecto a la libertad condicional anticipada como un paliativo que puede ser aplicado durante la fase de ejecución de la pena con el cual se pretende propiciar regularmente que las condenas no se cumplan en su totalidad, si concurren ciertos requisitos dispuestos por ley; dichos beneficios deben entenderse integrados al mandato de rehabilitación que impone al artículo 27 Cn.

Este tipo de beneficio penitenciario, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, implica que el interno obtiene su libertad y se le imponen determinadas condiciones reguladas en el artículo 79 del mismo cuerpo legal.

Asimismo, en el Reglamento General de la Ley Penitenciaria se prescribe como parte de las funciones de los Equipos Técnicos Criminológicos de los centros penitenciarios el proponer a los Consejos Criminológicos Regionales los beneficios penitenciarios que las leyes establecen para los internos — artículo 145 letra a) —.

De tal manera que la solicitud dirigida al Equipo Técnico Criminológico, tiene una clara vinculación con la situación jurídica del interno en cuanto a su libertad física, pues una vez efectuada la propuesta de dicho equipo al Consejo Criminológico Regional competente, este, si lo considera procedente, traslada la petición al juzgado de vigilancia penitenciario respectivo, el que finalmente determina si accede al beneficio relacionado y, si es así, el favorecido recupera su libertad — sentencia del 23 de octubre de 2013, hábeas corpus 229-2013—."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 324-2019, fecha de la resolución: 12/03/2021

MEDIDAS CAUTELARES

DERECHO INTERNACIONAL EXIGE QUE LAS MEDIDAS ADOPTADAS DEBEN SER IDÓNEAS, NECESARIAS, ESTRICTAMENTE PROPORCIONALES, NO SÓLO LÍCITAS, SINO QUE TAMBIÉN RAZONABLES

"Se ha referido que para que dicha medida cautelar sea compatible con el derecho de presunción de inocencia del justiciable y atienda a sus características de excepcionalidad y proporcionalidad, la autoridad no puede fijar de manera injustificada el máximo de 12 meses que están dispuestos para su prórroga, sin dar motivos de ello, teniendo en cuenta que la persona ha estado sometida a privación de libertad durante 2 años, sin que su proceso penal haya podido finalizarse y puede volverse desproporcional. En todo caso para apreciar la necesidad de la limitación de aquel derecho es menester exponer las razones de su adopción (sentencia de 19 de julio de 2019, hábeas corpus 55-2019).

Estas razones deben estar orientadas a cumplir fines legítimos (arts. 329 y 330 CPP), entre los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos –Corte IDH– ha reconocido como tales, que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia, exigiendo que las medidas adoptadas deben ser idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales para cumplir ese fin, lo cual debe quedar evidenciado en la decisión que ordena la restricción al derecho de libertad (sentencia de 31 de agosto de 2004, caso Ricardo Canese vs. Paraguay).

La Corte IDH sostiene que no basta que la detención preventiva sea lícita sino además razonable en toda circunstancia, pues al ser la medida más severa que se puede aplicar debe tener carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática, siendo una medida cautelar, no punitiva. Sobre ello la Corte resalta que en los casos de personas detenidas los jueces deben valorar periódicamente si las causas y fines que justificaron la privación de libertad se mantienen, si esta todavía es absolutamente necesaria para la consecución de esos fines y si es proporcional (sentencia de 6 de mayo de 2008, caso Yvon Neptune vs. Haiti).

Sobre ello esta Sala ha indicado que al aplicar la detención provisional debe establecerse la razonabilidad o ponderación de la misma en la resolución jurisdiccional, respecto de los presupuestos habilitantes de la medida (sentencia de 28 de octubre de 2009, recurso de revisión de hábeas corpus 145-2008R)."
Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 320-2018AC, fecha de la resolución: 20/01/2021

MOTIVACIÓN DE RESOLUCIONES

DEBER Y OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES

"2. La obligación de motivar las resoluciones por parte de las autoridades jurisdiccionales implica el deber de plasmar en ellas las explicaciones que evi-

dencien el razonamiento que las llevó a determinada conclusión, para luego permitir el ejercicio de otros derechos conexos, entre ellos el de recurrir por parte de quienes resultan perjudicados por los pronunciamientos judiciales.

Dicha exigencia deriva del derecho fundamental de defensa e implica que la autoridad judicial debe respetar los derechos fundamentales de los enjuiciados, garantizando que estos conozcan los motivos que la inducen a resolver en determinado sentido y por consiguiente sea factible conocer y, si es el caso, impugnar su contenido mediante los mecanismos que la ley prevé. Esta obligación de motivación requiere el cumplimiento de las exigencias constitucionales y legales, por lo que deben exteriorizarse los razonamientos que cimenten las decisiones estatales de manera suficientemente clara, para que sea comprendida no solo por el técnico jurídico sino también por los ciudadanos.

Así, la imposición de la detención provisional implica la comprobación de ciertos presupuestos: apariencia de buen derecho y peligro en la demora, su concurrencia debe ser analizada por la autoridad judicial a la que competente la adopción de la medida cautelar, en cada caso concreto.

El primero consiste en un juicio de imputación o fundada sospecha de participación del imputado en un hecho punible. Además, la existencia de apariencia de buen derecho, debe conjugarse con el segundo elemento –el peligro en la demora– que, en el proceso penal, consiste en un fundado riesgo de fuga u obstaculización de la investigación por parte del imputado. Dicho peligro no solo se incrementa o disminuye en razón de la gravedad del delito, sino también en razón de la naturaleza del hecho punible y de las condiciones de arraigo del imputado (sentencia del 20 de marzo de 2017, hábeas corpus 370-2016); todo ello relacionado con la proporcionalidad de la medida y los límites de la presunción de inocencia.

3. Este deber de motivar no exige una exposición detallada y extensa de las razones que llevaron al juzgador a resolver en determinado sentido, mucho menos se requiere la expresión completa del proceso lógico que el juez utilizó para llegar a su decisión; basta con exponer, en forma clara y concisa, los motivos de la decisión jurisdiccional, permitiendo mediante los mismos que la persona a quien se dirige la resolución logre comprender las razones que la informan (sentencia del 19 de febrero de 2018, hábeas corpus 249-2017)."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 121-2020R, fecha de la resolución: 19/02/2021

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

HABILITACIÓN PARA CONOCER DE LA PRESCRIPCIÓN

"III. Esta sala ha sostenido, en cuanto a la prescripción de la acción penal, que su determinación corresponde a los jueces competentes en materia penal; sin embargo, cuando la restricción al derecho de libertad ha sido dictada en el contexto de un proceso que tiene como base una acción prescrita, es decir, en el que no se han respetado las condiciones procesales legales para el ejercicio

de la acción penal, la jurisdicción constitucional está habilitada para examinar el asunto a efecto de determinar si dicha decisión efectivamente provoca alguna vulneración al mencionado derecho –resolución de 11 de febrero de 2011, hábeas corpus 161-2010–.

La prescripción de la acción penal es entendida como la imposibilidad de realizar el juzgamiento penal de un hecho delictivo por el transcurso de determinados plazos señalados en la ley a partir de su comisión, durante los cuales el procedimiento no se ha seguido contra el culpable o, cuando dirigido contra una persona determinada, se ha paralizado por el tiempo igualmente señalado en la ley.

Según el criterio sostenido por esta sala, las disposiciones reguladoras de la prescripción de la acción penal se encuentran incluidas en "la materia penal" a que hace referencia la Constitución en el inciso 1º del artículo 21. Por lo tanto, si respecto a dicho asunto se plantea un conflicto de leyes en el tiempo, debe aplicarse la más favorable al imputado –sentencia de 13 de noviembre de 2015, hábeas corpus 275-2015–."

CÓDIGO PROCESAL PENAL NO EXIGE LA COMPARECENCIA DEL REBELDE PARA DECRETAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA PERSECUCIÓN PENAL

"En primer lugar debe aclararse que el Código Procesal Penal (CPP) no exige la comparecencia del rebelde para decretar la prescripción de la persecución penal; el art. 34 CPP, por su parte, regula que esta puede ser declarada de oficio o a petición de parte, sin exigir que ello se haga en audiencia ni condicionar de otra forma tal actuación. Finalmente, el art. 312 CPP, referido a las excepciones, señala que estas pueden ser opuestas de forma oral o por escrito.

Con posterioridad, el día 1 de enero de 2011 entró en vigencia el Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo No. 733, de fecha 22 de octubre de 2008, el cual derogó a esa legislación de 1996, aludida en líneas precedentes.

Para el caso en concreto, debe señalarse que el Código Procesal Penal derogado establecía en su artículo 38: "La prescripción se interrumpirá: 1) Por la declaratoria de rebeldía del imputado..."

En la normativa actual se establecen reglas diferentes en cuanto a la interrupción de la prescripción en virtud de la declaratoria de rebeldía, específicamente el art. 36 CPP, que dispone: "La prescripción se interrumpirá: 1) Por la declaratoria de rebeldía del imputado (...) En el caso de rebeldía, el período de interrupción no excederá de tres años y después de éste comenzará a correr íntegramente el plazo respectivo de la prescripción de la acción penal, aumentado en un tercio. En los demás casos, desaparecida la causa de interrupción, el plazo de prescripción durante el procedimiento comenzará a correr íntegramente".

Por su parte, el art. 34 CPP establece que: "La inactividad en el proceso tendrá como consecuencia la declaratoria de la prescripción de la persecución, la que será declarada de oficio o a petición de parte y el cómputo deberá realizarse a partir de la última actuación relevante en los términos siguientes: (...)

1) Después de transcurrido un plazo igual a la mitad del máximo previsto en los delitos sancionados con pena privativa de libertad; pero, en ningún caso el plazo excederá de diez años, ni será inferior a tres años...”

CÓDIGO PROCESAL PENAL VIGENTE REGULAN ASPECTOS REFERIDOS AL CÓMPUTO PARA EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, RESULTANDO MENOS GRAVOSA PARA EL PROCESADO

“Respecto de las dos normativas mencionadas es de señalar que, efectivamente, en la vigente se regulan aspectos procedimentales referidos al cómputo para el plazo de la prescripción de la acción penal que antes no estaban fijados, resultando ser dicha regulación menos gravosa para el procesado, pues mientras en la normativa derogada se interrumpía indefinidamente el plazo de la prescripción con la rebeldía, en la actual legislación se estipula un período de interrupción de la prescripción y superado este comienza a contar el plazo de aquella; lo anterior se manifiesta como una favorabilidad al imputado en cuanto a que, según las regulaciones del nuevo código, le permite tener la certeza de que la persecución penal ejercida en su contra por parte del Estado no se mantendrá vigente de forma indefinida, sino que, transcurrido el tiempo señalado en la ley con las reglas que le determinan, esta deberá prescribir.”

APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL VIGENTE, POR SER MÁS FAVORABLE AL IMPUTADO

“Por tanto, al amparo del art. 21 Cn. para determinar el plazo de la prescripción de la acción penal –en el caso en estudio– deberá aplicarse retroactivamente el CPP vigente, por constituir la ley favorable al imputado, al potenciar los principios de seguridad jurídica y de legalidad que en la regulación del código anterior se desconocían respecto al tema en análisis.

Según el escenario fáctico planteado y las reglas aplicables al caso concreto, se tiene que el delito atribuido al señor MAGS es el de homicidio simple, cuya pena es de prisión; de manera que, para que opere la prescripción debería transcurrir el período de interrupción de prescripción más el plazo de la prescripción de la acción penal, a lo cual debe adicionarse un tercio de este último tiempo, lo que contabiliza un plazo de dieciséis años con cuatro meses.

En ese sentido, se tiene que desde la declaratoria de rebeldía que aconteció el 1 de octubre de 2002, hasta la promoción de este proceso –20 de septiembre de 2019– habían transcurrido más de dieciséis años con once meses, tiempo que cumple con las reglas antes relacionadas. En consecuencia, tomando en consideración la legislación apuntada y lo regulado en el art. 21 Cn., la acción penal en el caso en particular ha prescrito según los términos de la ley para el delito de homicidio simple, por lo que resulta improcedente que sea en razón de ese proceso penal que continúe vigente una restricción al derecho fundamental de libertad del señor MAGS.

Con base en lo anterior esta sala concluye que, efectivamente, la Juez de Primera Instancia de Chalatenango ha transgredido el derecho de libertad física del favorecido, al mantener vigente las órdenes de captura en contra del incoado en un proceso penal cuya acción penal se encuentra prescrita según los términos de la ley, por lo que es procedente estimar la pretensión incoada.

2. Enseguida, es necesario aclarar los efectos de la presente decisión.

Como se estableció, la acción penal se encuentra prescrita según los términos de la ley para el delito atribuido, por tanto, no existe fundamento en este momento para restringir el derecho de libertad del favorecido a través de las órdenes de captura libradas en el proceso penal con referencia C-42-2002-3; por lo que es procedente cesar toda restricción al derecho de libertad física del señor MAGS, debiendo ello ser ejecutado por la Juez de Primera Instancia de Chalatenango, al recibo de esta resolución.

En consecuencia debe ordenarse al Juez de Primera Instancia de Chalatenango que señale audiencia especial, en el plazo de cinco días, a efecto de que declare la prescripción que ha sido constatada por este tribunal, en el entendido que la eficacia de la presente sentencia no se encuentra supeditada a la realización de dicha audiencia en cuanto a los efectos materiales sobre la libertad del favorecido."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 344-2019, fecha de la resolución: 06/09/2021

PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

"III. 1. El artículo 13 de la Constitución reconoce que "Ningún órgano gubernamental, autoridad o funcionario podrá dictar órdenes de detención o de prisión si no es de conformidad con la ley". Este precepto conforma la garantía de reserva de ley en materia de restricción del derecho fundamental de libertad personal."

OBJETO

"Dicha garantía tiene por objeto asegurar que sea únicamente el legislador el habilitado para determinar los casos, las formas y el tiempo durante el cual se posibilita restringir el derecho en comento y que ello ha de llevarse a cabo mediante un acto normativo que tenga el carácter de ley en sentido formal, al cual el juez debe ceñirse de manera irrestricta (sentencia de 26 de febrero de 2016, hábeas corpus 211-2015). Así, el derecho a la libertad física constituye un límite al poder punitivo del Estado, pues ninguna autoridad puede quebrantarlo o transgredirlo inhibiendo su pleno ejercicio, solo son admisibles para su limitación las formas dispuestas en el ordenamiento jurídico (resolución del 28 de octubre de 2009, hábeas corpus 130-2009)."

ESTRECHA RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

"En estrecha relación con la reserva de ley se encuentra el principio de legalidad, el cual implica el apego de los tribunales jurisdiccionales, en el ejercicio de sus potestades, a la Constitución y a todo el ordenamiento jurídico. Este principio se ve transgredido cuando aquellos no realizan sus actos con fundamento legal o lo hacen en contravención de lo que la ley de la materia establece, en este último caso, el alcance llega hasta formas de interpretación en detrimento de los derechos fundamentales (resolución de 10 de agosto de 2009, hábeas corpus 130-2007)."

DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA

"Al principio de legalidad está relacionado el derecho de seguridad jurídica, el cual implica una obligación por parte de los funcionarios de respetar los límites que la ley prevé al momento de realizar una actividad en el ejercicio de sus funciones; de manera que si la normativa establece el procedimiento que cualquier funcionario debe seguir o la consecuencia jurídica que debe aplicar en un caso concreto y este no cumple con lo previamente dispuesto, produce una afectación a la seguridad jurídica de las personas (resolución del 19 de agosto de 2009, hábeas corpus 231-2006).

Esa afectación surge justamente de la incerteza de si los juzgadores aplicarán o no lo estatuido en la ley o, de cualquier forma, si irán en contra de lo que se mandata en ella; en todo caso, se confirma ese estado de incertidumbre en la persona afectada y se transgrede la seguridad jurídica que otorga el ordenamiento jurídico.

La mera existencia de la ley concede a la sociedad un estado de seguridad en cuanto a: la titularidad de derechos, las obligaciones derivadas de ellos, las formas y exigencias para la limitación de esos derechos. De modo que las autoridades administrativas o judiciales deben respetar el cumplimiento de tal contenido legal como una garantía de los derechos fundamentales y del estado democrático de derecho, toda vez que esta no se oponga a postulados constitucionales. Realizar interpretaciones contrarias a esos preceptos a fin de justificar decisiones que pueden impactar negativamente la esfera jurídica de las personas, particularmente su libertad física, representaría una transgresión a esta y a la seguridad jurídica."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 30-2019, fecha de la resolución: 22/09/2021

PROCESO PENAL

EL DISEÑO DEL PROCESO PENAL VIGENTE NO REGULA MECANISMOS IDÓNEOS PARA EL CUESTIONAMIENTO PROPIAMENTE DE LAS VULNERACIONES CONSTITUCIONALES ACONTECIDAS DURANTE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

"IV. 1. De conformidad con los argumentos del peticionario, el análisis a efectuar en la presente decisión se circunscribirá a verificar si la autoridad judicial notificó la sentencia condenatoria dictada y si esta se emitió dentro de los lí-

mites constitucionales de las potestades resolutivas de un tribunal de apelación, respecto a la compatibilidad con los derechos fundamentales de defensa y a un recurso efectivo de la condena originada en segunda instancia.

En el presente caso se ha constatado que en la vista pública del 26 de agosto de 2016 realizada por el Tribunal de Sentencia de Sonsonate, el señor AV fue absuelto por no haber certeza sobre su participación en el delito atribuido; posteriormente, al recibir el recurso de apelación proveniente de dicha sede de sentencia, la Cámara de la Segunda Sección de Occidente, en resolución del 21 de noviembre de 2016, revocó tal decisión y condenó al favorecido —y otros—a la pena de veinte años de prisión por el ilícito de homicidio agravado por considerar que se había comprobado su intervención en los hechos acusados, lo cual fue impugnado en casación y declarado no ha lugar por la Sala de lo Penal el 18 de agosto de 2017.

2. Antes de analizar lo anterior, se advierte que la sentencia condenatoria dictada en contra del favorecido ha adquirido firmeza en razón de la resolución que declaró no ha lugar la casación; sin embargo, tal como se indicó en el considerando anterior, para tener por utilizados los mecanismos idóneos de reclamación del derecho que se alega como vulnerado, en supuestos como el planteado —emisión de sentencia en segunda instancia—, no es necesario que se expusiera ello en casación e incluso no puede exigirse su empleo por no ser un medio de impugnación integral contra la condena, más aun cuando es el único recurso puede interponerse respecto de una sentencia de segunda instancia que revoca la decisión de absolución de primera instancia y dicta condena, es decir se trata de una primera condenatoria que ya no puede ser recurrida vía un recurso de igual o de mayor amplitud. Así, habiéndose determinado que el diseño del proceso penal vigente no regula mecanismos idóneos para el cuestionamiento propiamente de las vulneraciones constitucionales acontecidas durante la emisión de la sentencia en segunda instancia, y tampoco permite una revisión amplia y completa del tema juzgado, es procedente efectuar el análisis de lo propuesto, no obstante exista sentencia firme, teniéndose en cuenta primordialmente la vulneración del derecho de defensa, en su esfera particular de acceso al recurso como medio defensivo."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 401-2018, fecha de la resolución: 09/04/2021

READAPTACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS SOMETIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS

READAPTACIÓN SOCIAL, REINSERCIÓN O RESOCIALIZACIÓN ES UN DERECHO FUNDAMENTAL ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN Y EL DERECHO INTERNACIONAL

"III. 1. Es importante referir que la Jurisprudencia de esta Sala, en la resolución de 28 de septiembre de 2020, hábeas corpus 423-2018, determinó que la readaptación social, reinserción o resocialización de la persona condenada es

un derecho fundamental, que tiene base en el art. 27 inc. 3° Cn. y los arts. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En dicha decisión, esta Sala señaló que el mandato constitucional del art. 27 inc. 3° Cn. debía interpretarse como obligación exigible, con un correlativo derecho subjetivo de las personas sometidas al cumplimiento de las penas, por ser la alternativa más optimizadora de la fuerza normativa de la Constitución, conforme al art. 246 Cn., pues hacer que prevalezca la Constitución en la ejecución de las penas puede garantizarse mejor por imperativo del derecho fundamental a la readaptación, que si solo se identifica el art. 27 inc. 3° Cn. como una directriz político criminal. La Constitución obliga a recordar que la ejecución de la pena es parte esencial del sistema penal, pues de ella depende la utilidad social de todas las acciones estatales que le anteceden, en el ejercicio del poder punitivo. El estatus de la reinserción social como derecho fundamental implica sin duda una vinculación más fuerte para el legislador, la Administración penitenciaria y los jueces, así como supone una serie de garantías con mayor eficacia para hacer realidad, en el tiempo, lo ordenado por la Ley Suprema. La jurisprudencia constitucional ha venido aplicando el derecho a la readaptación social de la persona condenada como un límite frente al poder penal del Estado, lo cual es parte de la función propia de los derechos fundamentales. Varios de los principales diques de contención del poder punitivo (legalidad, debido proceso, igualdad, culpabilidad) lo son precisamente en virtud de su condición de derechos fundamentales o como derivaciones de estos. El reconocimiento de un derecho a la resocialización se corresponde además con la concepción liberal que inspira nuestra Constitución (preámbulo y arts. 1, 2, 5, 10, 13, entre otros), pues cuando más limitada está la libertad —como ocurre durante la ejecución de la pena— más importancia tienen las garantías necesarias para evitar que se agote incluso su reserva mínima, intangible o irreductible, que es lo que hace que cada persona pueda seguir considerándose como tal. Dicha reserva, para la persona condenada y como una de las manifestaciones del derecho reconocido en el art. 27 inc. 3° Cn., consiste en la razonable esperanza de volver a la sociedad. 2. Asimismo, en la sentencia pronunciada el 12 de febrero de 2021, hábeas corpus 94- 2020, este Tribunal indicó que el derecho a la reinserción social no puede comprenderse plenamente si se desconecta de otros derechos, por ejemplo, del derecho fundamental a la protección familiar y su manifestación específica de conservación del vínculo familiar. Esta Sala ha efectuado una interpretación amplia del art. 32 Cn., en el sentido que de él no solo ha determinado el derecho a la protección familiar, sino que también ha derivado el derecho implícito de toda persona a constituir y a formar parte de una familia, el cual posee manifestaciones más específicas como, por ejemplo, el derecho a la conservación del vínculo familiar, sin que concurran injerencias arbitrarias por parte del Estado o de los particulares (Sentencia de Amparo 264-2010, de 20 de diciembre de 2013). Este último derecho implica que la protección constitucional a la familia se refiere no solo a mantener los vínculos de consanguinidad, jurídicos o situaciones de facto entre los miembros de un grupo familiar, sino también a preservar las relaciones de afecto, mantener la convivencia continua,

solidaridad, respeto, comprensión, protección y asistencia mutua que consolidan el núcleo familiar, en el que rigen los principios de igualdad de derechos y deberes para una pareja y el respeto recíproco de los derechos y libertades de todos los integrantes (Sobreseimiento de Amparo 623-2015, de 20 de septiembre de 2017). En el ámbito penitenciario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que "las visitas a las personas privadas de libertad por parte de sus familiares constituyen un elemento fundamental del derecho a la protección de la familia tanto de la persona privada de libertad como de sus familiares, no solo por representar una oportunidad de contacto con el mundo exterior, sino porque el apoyo de los familiares hacia las personas privadas de libertad durante la ejecución de su condena es fundamental en muchos aspectos, que van desde lo afectivo y emocional hasta el apoyo económico. Por lo tanto, sobre la base de lo dispuesto en los artículos 17.1 y 1.1 de la Convención Americana, los Estados, como garantes de los derechos de las personas sujetas a su custodia, tienen la obligación de adoptar las medidas más convenientes para facilitar y hacer efectivo el contacto entre las personas privadas de libertad y sus familiares." (Caso Norín Catrimán y otros vs. Chile, Sentencia del 29 de mayo de 2014). En ese sentido, esta Sala ha enfatizado el rol que desempeña un régimen de visitas familiares en la vida de las personas privadas de libertad, pues es una forma concreta por medio de la cual el encarcelado mantiene contacto con el mundo exterior y contribuye en su rehabilitación, ya que —de una forma u otra— dicho acercamiento le ayudará a su reintegración a la sociedad, que es uno de los propósitos que tiene la pena según lo establecido en el art. 27 Cn. (Sentencia de hábeas corpus 383-2016, de 20 de marzo de 2017)."

RÉGIMEN PENITENCIARIO

"3. A. El régimen penitenciario es, en términos generales, la ordenación de la vida normal de convivencia al interior de un establecimiento penitenciario. El art. 247 del Reglamento General de la Ley Penitenciaria (RGLP) lo define como el conjunto de normas reguladoras de la convivencia y el orden dentro de los Centros Penitenciarios, cualquiera que fuera su función. El régimen penitenciario que rige en cada centro penal varía de acuerdo a su clasificación. Conforme al nivel de progresión en el tratamiento penitenciario, los reclusos son internados en determinado tipo de centro de cumplimiento de pena. En el sistema penitenciario salvadoreño estos centros se clasifican en: (a) centros ordinarios, los cuales se encuentran destinados a alojar a los internos que cumplen penas privativas de libertad de acuerdo con el régimen progresivo; (b) centros abiertos, destinados a internos que no presentan problemas significativos de adaptación en los centros ordinarios; (c) centros de seguridad, destinados a los internos que estén siendo procesados o hayan sido condenados por alguno de los delitos a que se refiere el art. 103 inc. 1° LP y que además presenten problemas de inadaptación extrema en los centros ordinarios y abiertos, constituyendo un peligro para la seguridad del mismo interno, de los otros internos y demás personas relacionadas con el centro (d); centros de máxima seguridad, destinados a los internos altamente pe-

ligrosos y que por su comportamiento hostil, violencia e interferencia, inducción, autoría directa en actos de desestabilización al sistema, amenazas o ataques a víctimas, testigos, empleados y funcionarios públicos así como a su cónyuge y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sea necesario alojarlos en un régimen especialmente estricto, o aquellos considerados de mayor peligrosidad por su participación en la dirigencia de estructuras o grupos criminales o delincuenciales o agrupaciones terroristas o proscritas por la ley, o por ser inadaptados a los otros regímenes previstos en esta ley y, por último, los centros de detención menor."

RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO ESPECIAL

"Ahora bien, respecto al régimen de internamiento especial (regulado en el art. 103 LP) aplicado en los centros de seguridad, la jurisprudencia constitucional ha señalado que las notas que lo caracterizan son: (a) excepcionalidad, porque se trata de una opción extrema, que no debe constituir la herramienta principal o predilecta del sistema, sino su última alternativa; (b) necesidad, que implica que puede recurrirse a este tipo de régimen al constatarse el fracaso de los procedimientos contemplados en el tratamiento penitenciario y el régimen disciplinario ordinario; y (c) temporalidad o duración limitada, es decir, que debe usarse hasta que cesen los motivos que originaron el traslado hacia este tipo de régimen (Sentencia de 23 de diciembre de 2010, inconstitucionalidad 5-2001 acum. y sentencia de 18 de mayo de 2012, hábeas corpus 416-2011). Es importante aclarar que si bien esta Sala ha indicado que el régimen de internamiento especial resulta constitucionalmente válido cuando cumple con dichas características, no debe interpretarse que todas las medidas que la administración penitenciaria implementa en este régimen automáticamente cumplen con estos criterios. Precisamente por ello estas pueden ser objeto de control constitucional por los jueces ordinarios y por esta Sala. B. La decisión de someter a una persona privada de libertad a un régimen de internamiento especial incide en el ejercicio de derechos fundamentales al interior de un centro penitenciario, precisamente por ello es constitucionalmente necesario que la administración emita una resolución debidamente motivada. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional (por ejemplo, la Sentencia de fecha 30 de abril de 2010, Amparo 308-2008) ha sostenido que el derecho a la motivación no es un mero formalismo procedimental, sino que se apoya en el derecho a la protección jurisdiccional, pues con él se concede la oportunidad a las personas de conocer el juicio de reflexión razonable y justificable que lleva a las autoridades a decidir sobre una situación jurídica concreta que les concierne, se conoce la normativa que se aplicó y genera la oportunidad de utilizar los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. En cuanto a la motivación que debe contener la decisión de la administración penitenciaria mediante la cual se imponga el régimen de internamiento especial, así como su mantenimiento, el art. 198 RGLP establece que la ubicación de los internos en tales centros se hará por medio de resolución motivada y razonada del Consejo Criminológico Regional en la cual se com-

pruebe la existencia de causas o factores objetivos detallados en ese mismo artículo (Sentencia del 9 de marzo de 2011, hábeas corpus 164-2005/79-2006 Ac). Además, de acuerdo con el art. 31-A números 1 y 2 LP, los Equipos Técnicos Criminológicos deberán realizar evaluaciones periódicas a los internos y proponer a los Consejos Criminológicos Regionales la ubicación de estos en las fases del régimen penitenciario; de ahí que, en el art. 194 RGLP se establece que será el Equipo Técnico Criminológico el que determinará o calificará la peligrosidad extrema o la inadaptación del interno a los centros ordinario y abierto. Lo hará bajo la apreciación de causas objetivas y mediante resolución razonada. El art. 145, letra c del RGLP dispone que una de las funciones de los Equipos Técnicos Criminológicos de cada centro penitenciario es la formulación de propuestas de ubicación de los internos. Respecto a la permanencia de los reclusos en régimen especial, el art. 31 número 3 LP y arts.181 y 197 RGLP establecen que la autoridad que determina la clasificación de los penados en los distintos tipos de centros, según las condiciones personales de aquellos, es el Consejo Criminológico Regional respectivo, por medido de propuestas de los equipos técnicos (Sentencia del 22 de mayo de 2017, hábeas corpus 396-2016)."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 191-2019, fecha de la resolución: 26/03/2021

SENTENCIA CONDENATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA

POTESTAD RESOLUTORIA DE LAS CÁMARAS DEBE SER INTERPRETADO EN CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN, PUES DICHA INSTANCIA NO PUEDE CONTROLAR DE FORMA AMPLIA Y SUFICIENTE LO PLANTEADO EN EL PROCESO PENAL

"4. Respecto a la condena en segunda instancia, partiendo de la documentación agregada al presente proceso, se advierte que la autoridad demandada al momento de emitir su informe de defensa aduce lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 475 CPP, el cual establece que el tribunal de segunda instancia —en el conocimiento de la apelación— puede "confirmar, reformar, revocar o anular, total o parcialmente, la sentencia recurrida. En caso que proceda a revocarla resolverá directamente y pronunciará la sentencia que corresponda, enmendando la inobservancia o errónea aplicación de la ley".

Es decir, según la citada disposición, en el supuesto de presentarse una apelación por alegarse inobservancia o errónea aplicación de la ley, la cámara —tras verificar lo planteado y las actuaciones que consten en el proceso— se encuentra facultada para emitir directamente la decisión que estime procedente pudiendo revocar la decisión de primera instancia y sustituirla por un nuevo fallo en distinto sentido; este es el razonamiento del tribunal superior, indicándose un fundamento legal para sostener la posibilidad de revocar una sentencia absolutoria y dictar directamente en segunda instancia una sentencia condenatoria.

Debe señalarse que, la potestad resolutoria, del artículo referido, debe ser interpretado en conformidad con la Constitución, en este caso, particularmente

con el derecho de defensa, sobre la base de la igualdad de armas, y es que el pronunciamiento de la sentencia condenatoria en segunda instancia precedida de la revocatoria de una absolución, generaría el dictado de una primera sentencia de condena en segunda instancia, no susceptible para el imputado de ser controlada, de una manera más amplia y suficiente, con lo cual, se debe prestar especial relevancia al tipo de sentencia, y las consecuencias que genera; en tal sentido, no implica lo mismo revocar una sentencia de condena de primera instancia y dictar una absolutoria, que revocar una decisión de absolución pronunciado por el juez de grado, y dictar la Cámara una sentencia con carácter condenatorio; los efectos sobre el control de la misma, respecto del derecho de defensa, presenta en este último caso limitaciones que son incompatibles con la garantía establecida en el art. 12 Cn. que dice: "Toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa". (El destacado no es del texto original).

Sobre ello debe tomarse en cuenta que específicamente el derecho a recurrir —el cual la jurisprudencia constitucional colige del derecho a la protección jurisdiccional dispuesto en el artículo 2 Cn.— se encuentra también reconocido, de manera expresa, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, artículo 8 número 2, el cual establece como derecho de toda persona acusada de un delito a "... recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior...". Asimismo el artículo 14, inciso 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estatuye que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena impuesta "sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley".

Dichas disposiciones buscan posibilitar, a su vez, el ejercicio de los derechos de audiencia y defensa que no quedan agotados con una respuesta de única instancia, sino que comprenden la posibilidad de impugnar tal decisión en un grado superior de conocimiento mediante un recurso amplio y efectivo. En este punto, como lo ha sostenido toda la jurisprudencia convencional —tanto de la CIDH como del TEDH— es irrelevante el nombre que se le dé al recurso, lo importante es que el medio de control en su diseño sea lo suficientemente amplio para poder justiciar los diferentes aspectos de fondo y de procedimiento, y ciertamente la configuración de la apelación de la sentencia definitiva, es mayor que el recurso de casación, por lo cual una decisión de primera condena en segunda instancia no tendría como mecanismo de control defensivo el recurso más amplio, sino el más limitado.

Y es que, si bien es posible restringir derechos fundamentales por medio de la ley, la Constitución proporciona previsiones específicas que vinculan la privación —limitación, intervención o restricción— individual de derechos a la existencia de un presupuesto legislativo que no altere los principios, derechos y obligaciones en ella dispuestos —artículo 246 Cn—; de tal manera que la facultad de las potestades resolutivas consignadas en el art. 475 CPP deben ser interpretadas en el sentido que no generen una mayor afectación al derecho de defensa consagrado al imputado en el art. 12 Cn., por ende, no resulta adecuado constitucionalmente.

Así, entender que la disposición procesal penal faculta al Tribunal de segunda instancia a revocar una absolutoria dictada en primera instancia y sustituirla por una primera condena no resulta constitucionalmente adecuado, puesto que esa interpretación de la norma hace inefectivo el ejercicio del derecho de defensa, al limitar el mecanismo del recurso, puesto que el condenado en Cámara ya no podrá hacer uso de un recurso amplio y suficiente para controlar la decisión de los magistrados de segunda instancia, y ello es lo que precisamente vulnera la garantía del derecho de defensa, en la modalidad de acceso a un recurso efectivo1.

Por lo que además, el juez penal, como garante del Derecho, debe mediar entre la Constitución y la ley al aplicar las disposiciones correspondientes —incluyendo convenciones y tratados internacionales —en consonancia con el artículo 144 Cn.—; para ello se requiere una interpretación coherente con la regulación citada y favorable para el ejercicio efectivo de los derechos constitucionales —arts. 2 y 12 Cn.— buscando una interpretación armonizada y aplicada en compatibilidad con estos, atendiendo al principio favor libertatis —art. 15 CPP— que exige, según cada caso, preferir las alternativas favorables a la libertad, potenciando los derechos y facultades conferidas por la ley --sentencia del 28 de octubre de 2019, hábeas corpus 149-2019—."

ANTE UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN PRIMERA INSTANCIA, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO PUEDE REVOCARLA PARA DICTAR DE MANERA DIRECTA UNA CONDENA, PUES VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO AMPLIO Y EFECTIVO DEL FALLO

"4. En ese sentido, la cámara de lo penal demandada, al realizar el control de alzada, debió interpretar las facultades concedidas en el inciso 2° del artículo 475 CPP en armonía con los preceptos constitucionales —y aun convencionales— a efectos de emitir una decisión que respete los derechos fundamentales del involucrado y asegurar su derecho a un recurso amplio y efectivo, que por la propia configuración legal se verá imposibilitado de ejercer al emitirse directamente una sentencia condenatoria en segunda instancia.

La toma de esta decisión por la cámara impediría un control ordinario amplio y efectivo, pues si bien la legislación penal regula la posibilidad de interponer casación, este es un medio de impugnación de carácter extraordinario, admisible solo en los supuestos limitados establecidos en la ley —artículo 478 CPP-, por ello no constituye un mecanismo para el reexamen de los hechos o pruebas que sustentaron la condena, sino más bien, solo posibilita una revisión limitada de la resolución, aspecto crucial en la lógica del derecho a recurrir, como integrante del derecho de defensa, es decir, se requiere en el uso del mecanismo de impugnación, una oportunidad del mayor nivel para controvertir y obtener una decisión motivada, no solo en materia de aplicación de la ley penal, sino también de la acreditación de hechos y de la valoración de la prueba, sobre las normas penales que tipifican las conductas delictivas.

Lo anterior implica que la revocatoria de una sentencia dictada en segunda instancia presenta límites infranqueables respecto a tal habilitación, sin que pueda entenderse el efecto revocatorio con la misma amplitud para las sentencias absolutorias como para las condenatorias.

Así, ante una sentencia absolutoria en primera instancia, el tribunal de alzada no puede revocarla para dictar de manera directa una condena —ni aun habiéndose realizado una audiencia oral para justificar la decisión—, pues vulneraría el derecho fundamental a un recurso amplio y efectivo del fallo impidiendo su ejercicio como mecanismo de control en tanto que el procesado, absuelto en primera instancia y condenado en segunda, no puede acceder a la apelación, que sí es un recurso integral en los términos expuestos, es decir, en su diseño normativo, y como tal —independientemente de su nombre— permite un mejor y más óptimo ejercicio del derecho de defensa en sede de impugnación, ello es compatible con los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos humanos —sentencia de 23 de noviembre de 2012, caso Mohamed vs Argentina, párrafos 92 y 98—."

REVOCAR LA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y CONDENAR EN SEGUNDA INSTANCIA AL FAVORECIDO A VEINTE AÑOS DE PRISIÓN, ES INCONSTITUCIONAL

"De ello se concluye que, ante supuestos como el examinado, donde se apele de la sentencia absolutoria, debe optarse por una resolución de distinta naturaleza a la emisión directa de una condena, dentro de las facultades resolutivas concedidas al tribunal de segunda instancia, por lo cual, lo que procedería sería un anulación de la sentencia de primera instancia y el reenvió para un nuevo juicio, con ello, se posibilita el control de una eventual sanción a través de un recurso amplio y efectivo; de lo contrario existiría una diferenciación insostenible entre los remedios otorgados a los penados en primera instancia y los que se recogen para aquellos sancionados en segunda instancia, quedando estos últimos en una posición más desfavorable para sus derechos, de manera injustificada conforme a la lógica de la tutela de aquellos, y ello genera una sustancial afectación al derecho de defensa, desde la visión constitucional, con las consecuencias que ello genera.

Por tanto, la decisión emitida por los magistrados de la Cámara de la Segunda Sección de Occidente, al haber revocado la sentencia absolutoria y condenado en segunda instancia al favorecido a veinte años de prisión, es inconstitucional pues la interpretación realizada sobre los alcances de las facultades que le otorga el inciso 2° del articulo 475 CPP, para el control apelativo, vulnera los derechos fundamentales defensa, libertad física y acceso a un recurso amplio y efectivo, contraviniendo los artículos 2 y 12 Cn. y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debiendo como consecuencia estimarse la petición de hábeas corpus en relación a la violación del derecho de defensa, según se ha expuesto.

6. En cuanto al efecto de esta decisión, debe mencionarse lo siguiente: La jurisprudencia constitucional ha referido que la invalidación, anulación o revocación de una sentencia condenatoria es una decisión propia de un sistema de recursos, con diversas instancias y de una determinación legislativa expresa sobre los poderes de invalidación de los tribunales superiores; mientras que el habeas corpus es un proceso constitucional centrado en el control sobre violaciones a derechos fundamentales que no constituye un recurso ni una instancia más del proceso penal, pero que si debe incidir en la protección de la libertad de una persona privada de tal derecho, mediante una resolución que se declara violatoria de normas constitucionales —art. 81 LPC—.

Por ello, limitar los efectos de los pronunciamientos realizados sobre la situación de libertad personal constituye una deferencia con los poderes y competencias de la jurisdicción penal, así como de la institución de la cosa juzgada en materia penal por su importancia en el principio de seguridad jurídica.

En anteriores ocasiones, ésta Sede ha dispuesto que las formas de modificación o anulación de sentencias que han adquirido la condición de cosa juzgada deben ser, en principio, las establecidas en la ley, como por ejemplo sucede mediante el recurso de revisión regulado en los arts. 489 y siguientes CPP, pues en ellas se posibilita una adecuada consideración y discusión sobre todos los intereses relevantes, especialmente el de la víctima del delito y sus eventuales perspectivas de satisfacción vía responsabilidad civil —sentencia del 14 de enero de 2019, habeas corpus 81-2018, sentencia del 5 de octubre de 2020, hábeas corpus 48-2019—."

SE ORDENA LIBERTAD AL FAVORECIDO PARA QUE LA JURISDICCIÓN PENAL COMPETENTE REVISE LA VALIDEZ DE LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE SE IMPUSO EN SEGUNDA INSTANCIA

"Por lo anterior; en esta decisión se ordenará la libertad del favorecido, como efecto de la violación constitucional determinada—art. 72 81 LPC— sin embargo, corresponderá a la jurisdicción penal competente -dentro de los parámetros dispuestos en este proveído— la revisión de la validez de la sentencia condenatoria firme que impuso la pena de prisión por el delito antes referido al señor MEAV.

En vista de que no consta en este proceso constitucional a la orden de qué autoridad judicial se encuentra el referido señor, deberá ser la Cámara de la Segunda Sección de Occidente quien realice las diligencias necesarias para dejar sin efecto las órdenes de detención que pudieron haberse librado y hacer cesar las restricciones de libertad."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 401-2018, fecha de la resolución: 09/04/2021

SENTENCIA CONDENATORIA

VULNERACIÓN A LOS DERECHOS DE DEFENSA, LIBERTAD PERSONAL Y ACCESO A LOS RECURSOS DEL FAVORECIDO, AL OMITIR LA NOTIFICACIÓN LA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN SU CONTRA

"IV. 1. El peticionario, en síntesis, reclama la omisión del Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel de haberle notificado la sentencia condenatoria, por lo cual no le fue posible impugnarla.

Según consta en el informe de defensa de la autoridad demandada, en vista pública finalizada el 7 de junio de 2018, se condenó al señor […] a la pena de ocho años de prisión. Tal decisión fue notificada a la defensa técnica de aquel el día 8 de agosto de 2018, sin que interpusiera recurso, por lo que fue declarada firme el día 5 de septiembre de ese año. Además, el mismo juzgador ha reconocido que la sentencia no le fue notificada al justiciable.

2. Partiendo de lo anterior, se observa que el tribunal sentenciador desconoció su obligación de comunicar, de manera directa a la persona sobre la que recayó la decisión, los fundamentos que soportan la misma, a efecto que este pudiera verificar su contenido y propiciar, de estimarlo, el uso de los medios impugnativos susceptibles de interponerse.

Si bien menciona que el pronunciamiento fue comunicado a la defensa del favorecido, ello no constituye un sustento para evadir su deber de notificar directamente al imputado la condena dictada en su contra pues, tal como sostiene la jurisprudencia, esta constituye una decisión que afecta de manera directa y gravosa la libertad física de aquel, al decidir una pena de prisión.

Por ello, debe estimarse la violación constitucional alegada, en cuanto a la afectación a los derechos de defensa, libertad personal y acceso a los recursos, consagrados en los arts. 2 y 12 Cn., al haberse omitido la notificación a este de la sentencia condenatoria dictada en su contra en tanto, como se ha dicho, uno de los efectos que pueden generarse al impugnar una sentencia es, precisamente, la puesta en libertad del procesado.

3. En consecuencia, de conformidad con el artículo 72 LPC, se ordenará al Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel, que proceda a la notificación de la sentencia condenatoria en cuestión al imputado SSAC, a efecto de posibilitarle el uso de los recursos legalmente dispuestos contra ese tipo de decisiones.

En ese sentido, al reconocerse que no se ha agotado la etapa recursiva para el favorecido, a raíz de la falta de notificación de la sentencia emitida, su condición jurídica continúa siendo la de imputado; así, corresponde a la autoridad judicial respectiva determinar la condición jurídica del mismo respecto a su libertad personal, para lo cual deberá atender a los plazos dispuestos por la ley para la detención provisional —particularmente la procedencia del plazo establecido para los casos de impugnación y considerando lo sostenido en la sentencia de 9 de octubre de 2020, hábeas corpus 342-2018 Ac— si fuera el caso, debiendo informar lo decidido al juez de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena respectivo.

Dichas actuaciones se efectuarán en un plazo máximo de siete días hábiles contados a partir del siguiente a la recepción de esta sentencia, dentro del cual también se informará a esta sala sobre su cumplimiento."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 460-2019, fecha de la resolución: 20/12/2021

SENTENCIA DE HÁBEAS CORPUS

EFECTO RESTITUTORIO ES LA PUESTA EN LIBERTAD DEL FAVORECIDO O LA ORDEN DEL CESE DE RESTRICCIONES A SU DERECHO DE LIBERTAD PERSONAL O INTEGRIDAD PERSONAL

"III. 1. El artículo 72 de la LPC establece: "Si la resolución fuese concediendo la libertad del favorecido, librará inmediatamente orden al Juez de la causa, o a la autoridad que hubiese restringido la libertad de aquél, para que cumpla lo ordenado, sin perjuicio de ordenar lo procedente conforme a la ley según el caso."

De ahí que, en términos generales, el efecto restitutorio de la sentencia estimatoria en materia de hábeas corpus es la puesta en libertad del favorecido o la orden del cese de restricciones a su derecho de libertad personal o integridad personal —sentencia de 13 de enero de 2017, hábeas corpus 40-2015—.

Cuando existe vulneración a derechos fundamentales con incidencia en la libertad personal en la imposición o prórroga de la detención provisional, por ejemplo, esta Sala ha aplicado dicho efecto —sentencia de fecha 28 de octubre de 2020, hábeas corpus 201-2019—.

2. Reiteradamente la jurisprudencia de esta sala ha determinado que, respecto a la situación jurídica de la persona condenada cuya sentencia no ha adquirido firmeza, el proceso penal no finaliza al dictar sentencia condenatoria en contra del imputado, pues a partir de tal resolución este puede hacer uso de los mecanismos de impugnación establecidos en la ley y únicamente cuando aquella deviene firme —por haber transcurrido el tiempo señalado para la utilización de los mecanismos referidos sin que se haya hecho uso de ellos, por no haber sido admitidos o por haberse dictado resolución denegándolos— da comienzo la ejecución de la pena impuesta. Mientras el pronunciamiento no tiene firmeza, la privación de libertad decretada en contra de un imputado tendrá naturaleza cautelar y por lo tanto su imposición deberá cumplir con todos los requisitos constitucionales y legales de la detención provisional. En vista de lo anterior, se ha sostenido que no existen razones que justifiquen una interpretación de las normas procesales penales que construya un trato diferenciado de los imputados, en cuanto a su libertad, basado en la etapa en que se encuentra el proceso penal, pues ello sería atentatorio a la presunción de inocencia (artículo 12 de la Constitución). De ahí que, un procesado cuya sentencia no ha adquirido firmeza aún no se encuentra en cumplimiento de la pena impuesta y al no cambiar la situación jurídica en la que se encuentra continúa ostentando la calidad de imputado —sentencia de 13 de abril de 2011, hábeas corpus 59-2009—.

IV. 1. De conformidad con la certificación de los pasajes del proceso penal agregada, en resolución del 5 de diciembre de 2019, los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente declararon ha lugar el hábeas corpus presentado a favor del señor […], sin embargo ordenaron que el mismo continúe en la detención en la que se encontraba en virtud de haberse dictado sentencia condenatoria.

No obstante ello, debe acotarse que en un hábeas corpus clásico se pretende reparar la vulneración al derecho de libertad personal mediante el cese de la restricción que se estima inconstitucional, de ahí que, tal como se ha mencionado en la jurisprudencia citada, el efecto restitutorio de la sentencia estimatoria en un proceso como el presente es conceder la libertad del favorecido, toda vez que la restricción reconocida contraria a la Constitución se mantenga vigente, de conformidad al artículo 72 LPC.

En el presente caso, de la documentación anexada al presente proceso constitucional, se ha constatado que al momento de estimar la petición de hábeas corpus la sentencia condenatoria dictada en contra del favorecido aún no se encontraba firme, pues si bien la misma le fue notificada el proceso se encontraba en la etapa recursiva, por haberse hecho uso de las impugnaciones que faculta la ley. Es decir que el señor […] aun tenia calidad de imputado al momento en el que la autoridad judicial reconoció la vulneración, dependiendo su privación de libertad de la medida cautelar decretada con infracción de derechos constitucionales.

En ese sentido, los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, en su pronunciamiento, debieron aplicar el efecto establecido en la disposición mencionada el cual, para casos como el presente, es la inmediata libertad del justiciable. Por tanto, deberá revocarse la decisión en cuanto a los efectos en ella establecidos.

En ese sentido, se les reitera a los magistrados de dicha Cámara a tener presente en futuros casos los criterios establecidos por esta sala, dada la dimensión objetiva del hábeas corpus.

2. Según la documentación remitida por el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana, consta que el proceso penal fue remitido a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia por haberse interpuesto casación; desconociendo esta sede sí se ha realizado alguna otra actuación o pronunciamiento sobre la restricción de libertad impuesta al procesado, por ello se fijaran los efectos con base en la decisión analizada en este proceso constitucional.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 72 LPC, es procedente solicitar a los magistrados de la Sala de lo Penal —o la autoridad judicial que tenga a cargo el proceso penal objeto de esta decisión—, que procedan a la inmediata libertad del señor […] solo si el imputado no está sometido a otra restricción de libertad o a la orden de una autoridad distinta por otro delito. Así, la autoridad judicial a cargo de la causa deberá imponer, si no existiera sentencia firme, medidas cautelares diferentes.

En caso de ya no contar con el proceso deberá hacer las comunicaciones pertinentes a la autoridad competente para que esta ejecute la orden aludida. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad judicial a cargo del proceso penal imponga medidas cautelares distintas a la detención provisional, para garantizar su vinculación al proceso."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 31-2020R, fecha de la resolución: 15/12/2021

SENTENCIA DEFINITIVA

HABILITACIÓN LEGAL PRESCRITA EN EL INCISO 3º DEL ART. 8 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

"III. Esta Sala ha sostenido que la habilitación legal prescrita en el inciso 3º del art. 8 CPP, se justifica en la imposibilidad de tener una sentencia definitiva firme antes de los 12 o 24 meses –según el tipo de delito–, toda vez que la sentencia emitida aun sea susceptible de impugnación o porque, una vez recurrida, en su trámite se alcance ese límite. Con base en ello, únicamente frente a la ocurrencia de tales supuestos las autoridades judiciales estarán habilitadas para emitir una decisión fundada que incremente los períodos de tal restricción, la cual debe dictarse oportunamente y debe comprender desde el vencimiento del plazo inicial de ley. Sobre ello se ha indicado que es el juez de primera instancia que tramita el proceso el idóneo para determinar la manera en que deben garantizarse los fines del mismo."

Sala de lo Constitucional, hábeas corpus, número de referencia: 320-2018AC, fecha de la resolución: 20/01/2021

MATERIA: INCONSTITUCIONALIDADES

ACUMULACIÓN DE PROCESOS

FINALIDAD Y APLICACIÓN SUPLETORIA DEL TRÁMITE ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL POR FALTA DE REGULACIÓN EN LA LEY DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES

"VII. Acumulación de los procesos constitucionales.

Este tribunal advierte que el objeto de control del presente proceso coincide con el propuesto en el proceso de inconstitucionalidad 100-2018, en el que también se inaplicó la misma disposición legal, es decir, el art. 674 CPCM. Por esta razón, existe una clara similitud entre ambos requerimientos judiciales. Para este tipo de supuestos existe la acumulación de procesos. Acá es preciso recordar que la acumulación busca asegurar la uniformidad o consistencia en los criterios de resolución, evitando el riesgo de decisiones contradictorias, además de concentrar el trámite en un solo expediente y economizar las gestiones procesales, reduciéndolas a las que sean indispensables[1]. La Ley de Procedimientos Constitucionales no regula dicha figura, por lo que debe aplicarse de forma supletoria el trámite establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil.

Ahora bien, en vista del peso objetivo de las razones para acumular, de la menor intensidad con que se aplica el principio dispositivo en los procesos constitucionales y de las exigencias derivadas del principio de economía procesal, es innecesario generar otro trámite para pedir la opinión de los intervinientes en este proceso antes de ordenar la tramitación conjunta de las solicitudes planteadas. En consecuencia, dado que existe similitud entre requerimientos judiciales planteados en el presente proceso y en la inconstitucionalidad 100-2018, en este auto se ordenará su acumulación."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 120-2018, fecha de la resolución: 14/06/2021

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

POTESTADES

"1. En términos generales, la administración pública es la estructura orgánica compuesta por diversas instituciones a la que se le atribuye la función de gestionar los bienes, recursos y servicios estatales, mediante actividades enca-

---

1 Autos de 12 de junio de 2013, inconstitucionalidades 46-2012 y 60-2012.

minadas a la realización del bien común y del interés colectivo [1]. A fin de realizar la satisfacción de los intereses generales, la administración cuenta con un poder, no solo de crear normas –generales y abstractas– de rango inferior al legislativo, sino también para emitir decisiones y hacerlas ejecutar de forma inevitable [2]. Estas potestades se caracterizan como posibilidades y deberes de actuación que el ordenamiento jurídico atribuye a la administración, para que puedan producir efectos jurídicos en la realidad y tengan la capacidad de imponer al administrado el deber de tolerancia al desarrollarse su ejercicio.

Dentro de ellas, para el caso concreto, interesa resaltar aquellas que se relacionan con el poder sancionatorio de la administración, y cuyo ejercicio puede incidir negativamente en la esfera de los derechos fundamentales de los administrados. En la actualidad, es innegable que a través del Derecho Administrativo Sancionador se pretende garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de una sanción que no solo repruebe, sino que también prevenga la realización de todas aquellas conductas contrarias al mismo [3]. Se trata, en esencia, de un poder de sanción ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades y servidores públicos. [4]"

CONDICIONES EXIGIBLES Y PRINCIPIOS PARA EJERCER EL PODER COERCITIVO

"2. Ahora bien, el ejercicio de este poder coercitivo está sujeto a los condicionamientos exigibles a cualquier actuación administrativa, a saber: (i) principio de habilitación previa, según el cual la administración necesita de un respaldo normativo explícito de acuerdo con la reserva de ley formal para intervenir negativamente en los derechos fundamentales de los ciudadanos. De modo que se excluye toda posibilidad de que se pueda imponer limitaciones a los derechos sin norma legal que lo ampare; (ii) principio de proporcionalidad, es decir, debe existir congruencia entre los fines que persigue la actuación administrativa y las medidas de intervención utilizadas; (iii) principio de igualdad, esto es, la actuación administrativa no puede tener como fundamento una discriminación o un tratamiento desigual irrazonable ante los diversos sectores de la población; y (iv) principio favor libertatis, de acuerdo con el cual la administración –dentro de todos aquellos medios posibles o admisibles para realizar una intervención– debe escoger el que resulte más favorable a los derechos de las personas [5].

La conjugación de los principios de proporcionalidad y favor libertatis genera toda una escala o progresión de la actividad administrativa que puede significar una limitación a derechos fundamentales, a saber: (i) un grado menor de intervención, que conlleva la inscripción en un determinado registro o la obligación de soportar inspecciones; (ii) un grado intermedio, como acontece con la autorización, en el que la administración corrobora que se dan las condiciones exigidas para una actividad; (iii) un grado superior, donde la actividad administrativa se concreta en prohibiciones y mandatos; y (iv) un grado o nivel máximo, en el que se encuentran las restricciones de derechos fundamentales a favor del interés público.

---

1 Sentencia de 29 de abril de 2013, inconstitucionalidad 18-2008.

2 Sentencia de 27 de octubre de 2017, inconstitucionalidad 134-2014 AC.

3 Sentencia de 13 de febrero de 2015, inconstitucionalidad 21-2012.

4 Sentencia de 13 de febrero de 2015, inconstitucionalidad 21-2012.

5 Sentencia de 29 de junio de 2015, inconstitucionalidad 107-2012.

En esa línea, para garantizar una intervención justificada en los derechos, el art. 14 Cn. habilita y condiciona constitucionalmente a la administración pública para que pueda sancionar las contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas. Así lo ha reconocido este Tribunal [6], al establecer el enclave constitucional es válido para el establecimiento de sanciones administrativas. Ahora bien, según el modelo constitucional y democrático del ejercicio del poder político, la potestad sancionatoria está jurídicamente limitada por la ley, entendida esta no únicamente como ley formal, sino también por las disposiciones constitucionales. En efecto, sobre ello versa el principio de legalidad, que determina que toda acción administrativa se presente como un ejercicio de poder atribuido previamente por la ley (art. 15 Cn.), así como delimitado y construido por ella, de manera que no se pueda actuar sin una atribución normativa previa. De esta forma, la ley otorga a la administración facultades de actuación que pueden producir efectos jurídicos, como la imposición de una sanción, que puede ser de diversa naturaleza a las indicadas en el art. 14 Cn., según se ha establecido en varios pronunciamientos de este Tribunal [7]."

POTESTAD SANCIONADORA ES UNA DE LAS FACETAS QUE EL GENÉRICO PODER PUNITIVO DEL ESTADO MUESTRA FRENTE AL ADMINISTRADO O SUS SERVIDORES

"3. Por tanto, no debe perderse de vista que dicha potestad sancionadora es una de las facetas que el genérico poder punitivo del Estado muestra frente al administrado o sus servidores. La diferencia que posee con respecto a los ilícitos de naturaleza penal es solo cuantitativa –en razón de la intensidad de la sanción a imponer–. De ahí que la aplicación de los principios y reglas constitucionalizadas que presiden el Derecho Penal sean aplicables al Derecho Administrativo Sancionador, con fundamento en la homogeneización o unidad punitiva, siempre que se atienda a la singularidad en cada uno de sus procedimientos, en respuesta a la naturaleza de los ilícitos y de sus sanciones, así como a la mayor intervención de las sanciones administrativas sobre las penales en el ordenamiento jurídico. Por ello, la aplicación de los principios y garantías que rigen en el ámbito de la legislación penal es igualmente exigible y aplicable en el Derecho Administrativo Sancionador [8].

Los principios inspiradores del orden penal son de aplicación al Derecho Administrativo Sancionador pues ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, hasta el punto de que un mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas o penales [9].

Es decir, esta Sala sostuvo que las potestades excepcionales de imponer arresto o multa conferidas a la administración deben entenderse en concordancia con toda la Constitución y no en forma aislada, de lo cual se concluye que dichas medidas excepcionales se refieren estrictamente al orden del Derecho Penal, por lo que es pertinente recalcar que la potestad sancionatoria concedida a la administración no se limita a lo taxativamente expuesto por el art. 14 Cn. Lo prescrito en este precepto en cuanto al arresto y la multa son potestades punitivas de la administración pero en materia penal, y no administrativo sancionatoria [10].

---

6 Sentencia de 13 de diciembre de 1988, Controversia 1-88.

7 Sentencias de 19 de julio de 2007 y 15 de enero de 2004, amparos 332-2006 y 1005-2002, por su orden

8 Sentencia de 29 de junio de 2015, inconstitucionalidad 107-2012.

9 Sentencia de 17 de diciembre de 1992, inconstitucionalidad 3-92.

10 Sentencia de 23 de septiembre de 2002, amparo 330-2000.

Partir del supuesto de que la administración no puede sancionar a los administrados que incumplen la ley en el resto de sus campos, sería quitarle la potestad de imperium que le confiere la Constitución, porque la dejaría sin formas eficaces de hacer cumplir el ordenamiento jurídico.

4. Los principios –que sin duda deben adecuarse con la naturaleza del Derecho Administrativo Sancionador, a fin de potenciar su aplicabilidad– disciplinan tanto los ámbitos propios de la heterotutela –relaciones de la administración hacia el exterior de su estructura– y autotutela –relaciones de la administración hacia el interior de su estructura– administrativa, especialmente en los ámbitos de naturaleza sancionatoria.

Mediante la heterotutela, la administración se plantea el resguardo y protección de los bienes jurídicos de naturaleza eminentemente social; o bien, como se ha sostenido en la jurisprudencia constitucional, dicha faceta policial administrativa enfrenta al Estado contra conductas ilegales de los administrados que atentan contra los bienes jurídicos precisados por la comunidad jurídica en que se concreta el interés general [11]. En tal sentido, todos los administrados están sujetos al ámbito general de respeto y protección de aquellos aspectos que la comunidad jurídica considera valiosos y que ha elevado a un rango de protección legal mediante leyes penales o administrativas."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 50-2018AC, fecha de la resolución: 15/11/2021

CANDIDATOS NO PARTIDARIOS

DIFERENCIA ENTRE TIPOS DE CANDIDATURAS A DIPUTADOS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA CONTRADICE ABIERTAMENTE LA INTERPRETACIÓN CONFORME QUE ESTA SALA REALIZÓ

"En tal sentido, a partir de las reformas al CE introducidas por el Decreto Legislativo nº 295, de 10 de abril de 2019, la postulación de candidaturas de partidos políticos o coaliciones se mantiene por planillas según los cargos a elegir en cada circunscripción, pero las candidaturas no partidarias deben postularse y presentarse a los electores de manera individual, es decir, fuera de una lista. Además, en lo correspondiente a la fórmula electoral para convertir votos a escaños, a los candidatos partidarios o de coaliciones de partidos políticos se les aplica el sistema de cociente electoral y de mayor residuo, mientras que a los candidatos no partidarios el sistema mayoritario.

La modificación legal mencionada implica que se ha introducido una diferenciación entre ambos tipos de candidaturas a diputados a la Asamblea Legislativa que contradice abiertamente la interpretación conforme que esta sala realizó en la sentencia emitida en este proceso y que vuelve a colocar a los candidatos no partidarios en una clara desventaja para la obtención de un escaño legislativo, tanto en la forma de la candidatura como en la fórmula electoral aplicable, pues, en tanto que estos deben postularse de manera individual, ellos solos deben alcanzar el cociente electoral respectivo según el número propio de votos válidos recibidos, a diferencia de los candidatos partidarios que participan en planillas, quienes para conseguir el cociente electoral de su distrito sumarán los votos que hayan obtenido a los votos de los demás candidatos de su partido –fórmula de cociente y de mayor residuo–.

---

11 Sentencia de 11 de noviembre de 2003, inconstitucionalidad 16-2001.

En la práctica, los efectos del Decreto Legislativo nº 295, de 10 de abril de 2019, volverían casi imposible para un candidato no partidario la obtención de una diputación en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, según datos del Tribunal Supremo Electoral, en las elecciones legislativas de 2018 en la circunscripción electoral de San Salvador donde se eligen 24 escaños hubo 514,723 votos válidos, por lo que el cociente electoral fue de 21,446.79 –cantidad de votos que debía alcanzarse para obtener un escaño en ese distrito–. A pesar que en esos comicios los votos válidos por candidatos no partidarios que compitieron en planilla ascendieron solo a 14,545, uno de estos obtuvo una diputación en esa circunscripción por residuo, lo cual no hubiera ocurrido si, como ahora se exige, se les hubiera aplicado la fórmula mayoritaria [1].

2. Por lo expuesto, se concluye que la reforma que se ha realizado a los arts. 161 y 217 letras b y c CE mediante el Decreto Legislativo nº 295, de 10 de abril de 2019, no cumple con las exigencias derivadas del derecho de optar a cargos públicos (y, concretamente, el derecho de optar al cargo de diputado a la Asamblea Legislativa) en condiciones de igualdad (arts. 3 inc. 1º y 72 ord. 3º Cn.) y por ello no cumple con la finalidad establecida en la sentencia emitida en este proceso. Por ello, a partir de esta resolución, las reformas mencionadas adolecen de inconstitucionalidad por conexión, en el sentido que ha sido expuesto en la presente resolución."

SENTIDO EN EL QUE DEBEN INTERPRETARSE LOS ARTÍCULOS REFORMADOS

"Ahora bien, para evitar las consecuencias perniciosas de un vacío normativo:

(i) El art. 161 CE aprobado por el Decreto Legislativo nº 413, de 3 de julio de 2013, mantendrá su vigencia y formará parte del ordenamiento jurídico salvadoreño, de modo que deberá entenderse que todos los candidatos inscritos por las diferentes circunscripciones electorales, partidarios y no partidarios, deben postularse por medio de planillas y listas; y

(ii) El art. 217 letra b CE aprobado por el referido Decreto Legislativo nº 413, de 3 de julio de 2013, también mantendrá su vigencia en el ordenamiento jurídico, debiendo interpretarse en el sentido expuesto en dicha sentencia, es decir, que los candidatos partidarios y los no partidarios a diputaciones a la Asamblea Legislativa deben participar en igualdad de condiciones y oportunidades, especialmente en cuanto a su forma de postulación y presentación de sus candidaturas a los electores en la papeleta de votación –por planillas– y en lo referente a la fórmula aplicable para el tonteo de votos y de asignación de escaños coherente con el sistema de representación proporcional –por el sistema de cociente y de mayor residuo–. De manera que la Asamblea Legislativa dentro de sus potestades constitucionales y el Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad en materia electoral (art. 208 inc. 4º Cn.), deberán disponer las medidas que estimen necesarias y pertinentes para garantizar el cumplimiento de la sentencia de 17 de noviembre de 2014, emitida en este proceso, y lo resuelto en esta providencia."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 59-2014, fecha de la resolución: 31/05/2021

[1] https://www.tse.gob.sv/documentos/elecciones/2018/escrutinio-final/reporte/diputaciones-nivel-departamental-elecciones-2018.pdf.

CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR

PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD

"IV. La presunción de constitucionalidad.

La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la presunción de constitucionalidad de las leyes solo puede significar que el cumplimiento de las leyes no puede estar condicionado a un previo pronunciamiento jurisdiccional que determine que las mismas son conformes con la Constitución, sino que deben acatarse desde su entrada en vigencia sin esperar una previa autorización jurisdiccional. Pero, ello no obsta para que los Magistrados y Jueces ejerzan el control de constitucionalidad [1] o que los funcionarios a quienes se refiere el art. 235 Cn. cumplan con su protesta de atenerse al contenido de la Constitución cuales quiera sea el contenido de las disposiciones generales u órdenes concretas que la contraríen, mecanismos de control a los que debe agregarse la derogatoria genérica prevista en el art. 249 Cn. [2]"

ALCANCE DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE NORMAS PRECONSTITUCIONALES

"**VI**. Alcance del control de constitucionalidad sobre normas preconstitucionales.

En ese contexto, el proceso de inconstitucionalidad puede tener por objeto de control una disposición o cuerpo normativo producido después de la entrada en vigencia de la Constitución (postconstitucional) o bien aquella normativa ya existente al momento de tal vigencia (preconstitucional) [3]. Con respecto a este último supuesto, la jurisprudencia de esta Sala ha afirmado que el pronunciamiento que se realiza sobre la compatibilidad de una disposición o cuerpo normativo preconstitucional con la norma suprema tiene como finalidad producir seguridad jurídica, pues la aplicación de la cláusula de derogación genérica del art. 249 Cn. no es privativa de este Tribunal [4]. Por ello, si se constata que el objeto de control preconstitucional contradice la norma fundamental, esta Sala se limitaría en su fallo a constatar, de un modo general y obligatorio, que aquel quedó derogado desde el 20 de diciembre de 1983, fecha de entrada en vigencia de la Constitución actual, pero los efectos serían de observancia general a partir de su publicación en el Diario Oficial."

DERECHO A LA VIDA Y LA PENA DE MUERTE

"VI. El derecho a la vida y la pena de muerte.

---

1 Sentencias de a 26 de julio de 1999 y 15 de febrero de 2002, inconstitucionalidades 2-92 y 9-97, respectivamente.

2 A título de ejemplo, véase la sentencia de 22 de octubre de 2004, inconstitucionalidad 9-2003.

3 Sentencia de 1 de diciembre de 2017, inconstitucionalidad 2-2015.

4 Ej. Sentencia de 9 de julio de 2014, inconstitucionalidad 5-2012 AC.

1. Los arts. 1 y 2 Cn. reconocen el derecho la vida como un derecho inherente a "toda persona". El contenido de tal derecho fundamental comprende dos aspectos fundamentales: el primero se refiere a evitar la muerte, lo cual implica la prohibición dirigida a los órganos estatales y a los particulares de disponer, obstaculizar, vulnerar o interrumpir el proceso vital de las personas [5];y, el segundo está relacionado con el derecho de estas de acceder a los medios, circunstancias o condiciones que les permitan vivir de forma digna, por lo que corresponde al Estado realizar las acciones positivas pertinentes para mejorar la calidad de vida de las personas [6].

2. En ese orden, la muerte es una de las causas por las cuales puede afectarse el derecho al a vida. Por ello, debe recordarse que, en el ámbito de interpretación de la Constitución, existen dos premisas esenciales: los derechos fundamentales se deben interpretar a fin de maximizar su fuerza expansiva y optimizadora [7] y las limitaciones deben interpretarse de manera restrictiva. De ahí que el art. 27 Cn. establezca que la pena de muerte solo podrá imponerse en los casos previstos por las leyes militares durante el estado de guerra internacional. Así, el reconocimiento constitucional de la pena de muerte no debe de interpretarse como una habilitación, sino como una limitación [8] integrada con lo dispuesto en el inciso 3 de esa misma disposición constitucional, en el marco de la función constitucional de la pena. En esa línea, la limitación de la pena de muerte a los casos en que la vida de la comunidad nacional se encuentre en serio riesgo de sufrir perjuicio o desaparición tiene un sentido en la Constitución, que no es más que el de racionalizar la sanción de las infracciones penales, autorizando su utilización respecto de actos antijurídicos que efectivamente lesionen bienes jurídicos esenciales, y limitando sus efectos al logro de la mencionada resocialización, mismo que no puede ser alcanzado cuando el ejercicio del poder penalizador del Estado se desborda en abuso y vulneración de derechos fundamentales y principios esenciales de la estructura constitucional [9]."

INNECESARIO INICIO DEL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN AQUELLOS SUPUESTOS EN QUE LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE LA NORMA PRECONSTITUCIONAL Y LA CONSTITUCIÓN SEAN TOTALMENTE IDENTIFICABLE

"V. Decisión.

1. Al aplicar las anteriores consideraciones al caso concreto, esta Sala advierte que los pretensores han logrado identificar una manifiesta violación a la Constitución, toda vez que el art. 27 Cn., solo permite la imposición la pena de muerte durante el estado de guerra internacional, mientras que el art. 54 inc. 2°

---

5 Ejs. Sentencia y auto de 4 de abril de 2001 y 5 de marzo de 2002, amparos 348-99 y 312-2001, por su orden.

6 A título de ejemplo, véase las sentencias de 6 de enero de 2017, 9 de junio de 2017 y 2 de julio de 2018, amparos 753-2015, 712-2015 y 701-2016, respectivamente.

7 Resolución de 10 de febrero de 2020, inconstitucionalidad 6-2020.

8 Ej. Sentencia de 6 de febrero de 2015, inconstitucionalidad 30-2011.

9 Al respecto, véase la sentencia de 14 de febrero de 1997, inconstitucionalidad 15-96.

CJM habilita la imposición de dicha pena durante tiempo de paz, lo cual indefectiblemente incide negativamente en el derecho a la vida (art. 2 inc. Cn.). Esto, en principio, conllevaría la admisión de la demanda y la sustanciación de todas las fases del proceso de inconstitucionalidad, cuyo objeto, eventualmente, únicamente podría ser constatar la derogatoria del objeto de control desde que la Ley Fundamental entró en vigencia.

2. Sin embargo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, las reglas pueden ser derrotadas —entre otros supuestos— en el nivel de las prescripciones contenidas en su formulación. Aquí, la derrotabilidad puede deberse a que las principales razones que respaldan las reglas no son aplicables al caso; o bien, aunque algunas de esas razones sean aplicables, existen otras razones que no han sido consideradas en el balance de razones que la regla contempla [10]. En el primer caso puede hablarse de situaciones fuera del alcance de la regla y, en el segundo, de excepciones a la regla [11]. Ello se debe a que las reglas no agotan todo el contenido de los principios subyacentes ni saturan todas las manifestaciones que deriven de ellos [12].

3. Con fundamento en lo anterior, este Tribunal advierte que la línea jurisprudencial vigente ordena que en aquellos casos en que la demanda la inconstitucionalidad o la inaplicación ponga de manifiesto una contradicción normativa entre una disposición preconstitucional y la Ley Suprema, y se reúnen los requisitos necesario constitucionales, legales y jurisprudenciales, debe procederse al inicio del proceso de inconstitucionalidad. Sin embargo, en el presente, esto no es necesario, ya que en aquellos supuestos en que la incompatibilidad entre la norma preconstitucional y la Constitución sean totalmente identificable no es necesario el inicio del proceso de inconstitucionalidad, porque la sustanciación del proceso de inconstitucionalidad implicaría un dispendio de la actividad jurisdiccional y, sobre todo, una dilación innecesaria a la protección de los derechos fundamentales [13].”

EL ART. 54 INC. 2° DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR QUEDÓ DEROGADO AL ENTRAR EN VIGENCIA LA CONSTITUCIÓN DE 1983

“Por lo anterior, considerando que los demandantes han evidenciado una clara y directa violación del art. 54 inc. 2° CJM a los arts. 2 inc. 1 y 27 inc. 1° Cn., a lo que hay que agregar la gravedad de la pena de muerte, la obligación de este tribunal de tutelar los derechos fundamentales y ejercer el control de constitucionalidad en cualquier decisión que emita, esta Sala constata que la disposición impugnada quedó derogada al entrar en vigencia la Constitución el 20 de diciembre de 1983, en la medida que su incompatibilidad es patente con respecto al ámbito temporal en que puede imponerse la pena de muerte y su incidencia negativa en el derecho a la vida.”

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 111-2019, fecha de la resolución: 16/07/2021

---

10 Auto de improcedencia de 8 de mayo de 2020, inconstitucionalidad 37-2020.

11 Auto de 10 de febrero de 2021, controversia 15-2020.

12 Sobreseimiento de 10 de abril de 2019, inconstitucionalidad 117-2018.

13 Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal aclara que el presente pronunciamiento no altera, modifica o cambia precedente alguno, en la medida que el proceso de inconstitucionalidad se sustanciara cuando la contradicción entre la Constitución y la disposición preconstitucional cuestionada requiera de una mayor discusión o análisis de los contenidos constitucionales en juego.

CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS IMPUESTOS Y LAS TASAS

"IV. Aspectos generales sobre los impuestos y las tasas.

1. El Estado exige el pago de impuestos a quienes se encuentran en situaciones consideradas en la ley como indicativas de capacidad económica, sin que la obligación tributaria se conecte causalmente con alguna actividad estatal, por lo cual los impuestos son considerados como tributos no vinculados [1]. Dicha conceptualización coincide con lo regulado en el art. 13 del Código Tributario (CT), que define al impuesto como "[...] el tributo exigido sin contraprestación, cuyo hecho generador está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo". Por su parte, la tasa es el tributo cuyo hecho generador sí está integrado con una actividad del Estado, que consiste en la prestación de un servicio o en la realización efectiva de una actividad directamente relacionada con el sujeto gravado. El art. 14 inc. 1º CT expresa que la tasa "[e]s el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado al contribuyente".

2. A partir de tal conceptualización, la jurisprudencia constitucional [2] ha enumerado las siguientes características de las tasas: (i) primeramente, se trata de una prestación que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio [3], ya que su pago se vincula con la soberanía del Estado, de manera que han de ser sufragadas obligatoria e igualitariamente por los sujetos pasivos de dicho tributo. Son, como todos los tributos, coercitivas, porque su pago se exige independientemente de la voluntad del sujeto obligado, pues el vínculo entre el Estado y el contribuyente no deviene de una relación contractual. Además, (ii) debe ser creada por ley, es decir, debe ser establecida mediante el instrumento normativo de carácter general y abstracto habilitado para tal efecto por la Constitución [4]; (iii) la actividad estatal involucrada puede consistir en la utilización especial del dominio público, la prestación de un servicio público o la realización de una actividad que beneficie de manera particular al sujeto pasivo de manera que el hecho generador corresponde a la Administración y no al contribuyente [5]; (iv) la actividad estatal correspondiente debe ser divisible, a fin de propiciar su particularización [6]; y (v) la actuación pública relacionada debe ser inherente a la soberanía estatal, ha de tratarse de actividades que el Estado no puede dejar de prestar porque nadie más que él está facultado para desarrollarlas [7].

---

1 Sentencia de 17 de abril de 2013, inconstitucionalidad 1-2008.
2 Sentencia de 16 de enero de 2013, inconstitucionalidad 81-2007.
3 Sentencia de 31 de julio de 2014, inconstitucionalidad 8-2009.
4 Sentencia de 15 de febrero de 2012, inconstitucionalidad 66-2005/4-2006.
5 Sentencia de 4 de febrero de 2019, inconstitucionalidad 29-2015.
6 Sentencia de 3 de febrero de 2016, inconstitucionalidad 165-2013.
7 Sentencia de 21 de junio de 2013, inconstitucionalidad 43-2010.

3. En ese orden, esta Sala ha explicado que las tasas se rigen por el principio de beneficio [8], en tanto que, aunque son coercitivas, su configuración, desde el punto de vista de su hecho imponible, indefectiblemente incluye una actividad estatal que favorece de manera particular al sujeto pasivo de la tasa, un beneficio específico para el obligado al pago. Al respecto, dicho beneficio puede ser de naturaleza jurídica o mixta –si incluye otros elementos, por ejemplo, de índole económica–, según sea la actividad estatal involucrada. De manera que en las tasas no se exige el principio de capacidad económica, pero ello no supone que, en algunos supuestos concretos que lo permitan, no pueda tomarse en consideración dicho principio, no como parámetro para evaluar el hecho generador, pero sí como un elemento para establecer el monto de la tasa, cuando la actividad estatal que le da origen puede traducirse en un aprovechamiento económico [9]. Además, dicho principio cumple una función negativa respecto de las tasas, porque prohíbe que se configuren como hechos imponibles ciertas manifestaciones que tengan un alcance confiscatorio.

Por lo anterior, este Tribunal ha señalado que "para la determinación del importe de las tasas pueden tomarse en cuenta todos los aspectos relacionados con el servicio o actividad que realiza el Estado y no solo los costos directos e indirectos que ocasiona prestar el servicio o la actuación de la Administración. Pudiendo ponderarse la importancia o necesidad del servicio o actividad; o, el grado de utilidad que el servicio o actividad presta a la colectividad o al individuo en quien se singulariza" [10]. Así, aunque el monto de una tasa no refleje el costo que implica la prestación del servicio en cuestión, ello no altera la naturaleza de dicho tributo al punto de equiparada con un impuesto [11]. De tal forma, los criterios a tomar en cuenta para fijar el importe de la tasa variarán dependiendo de la naturaleza de su hecho generador –utilización especial de dominio público o realización de una actividad administrativa o prestación de un servicio–, siendo posible calcularlo con base en el beneficio que este produzca en la esfera jurídica del sujeto pasivo del tributo o bien en el coste del servicio suministrado. [12]

4. De acuerdo con lo anterior, los impuestos y las tasas se diferencian principalmente por los principios que les rigen y por sus respectivos hechos generadores. Mientras que los impuestos se rigen directamente por el principio de capacidad económica, en las tasas opera el principio de beneficio, porque no obstante ser coercitivas, su configuración necesariamente incluye una contraprestación o beneficio que el Estado cumple en favor del obligado al pago [13]. En ese sentido, el hecho generador en los impuestos es alguna manifestación de capacidad económica, mientras que en las tasas, es una prestación brindada por el Estado, de manera que en este tributo el hecho generador corresponde a la administración y no al contribuyente [14].

---

8 Sentencia de 10 de octubre de 2012, inconstitucionalidad 15-2012.
9 Sentencia de 7 de junio de 2013, inconstitucionalidad 56-2009.
10 Sentencia de 14 de diciembre de 2012, inconstitucionalidad 43-2006.
11 Sentencia de 19 de septiembre de 2014, inconstitucionalidad 58-2010.
12 Sentencia de 3 de febrero de 2016, inconstitucionalidad 164-2013.
13 Sentencia de 30 de julio de 2014, inconstitucionalidad 21-2009.
14 Auto de 25 de junio de 2018, inconstitucionalidad 44-2018.

Otra distinción importante entre los impuestos y las tasas es el destino de los ingresos que generan. En el caso de los ingresos percibidos por los impuestos, en términos generales, se rigen por los principios de no afectación y de unidad de caja (art. 224 Cn.), los cuales establecen que los ingresos públicos deben integrarse en un fondo común o caja única, en el que se sumen a todos los restantes ingresos –perdiendo todo signo indicativo de su procedencia– y que sirvan para financiar todas las erogaciones estatales, sin afectación especial alguna para gastos determinados o particulares [15]. En cambio, las tasas tienen una relación objetiva y directa con la actividad pública que figura como su hecho generador. Por ello, los recursos obtenidos por su cobro pueden ser utilizados para sufragar su costo, e incluso para financiar las actividades del ente estatal que brinda la contraprestación respectiva [16]."

GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

"VII. Gestión del espectro radioeléctrico.

El espectro radioeléctrico es el medio por el que se propagan en el espacio las ondas electromagnéticas sin guía artificial o soporte físico, para la transmisión de información de diversa índole –datos, audio e imágenes–. Abarca frecuencias desde los 9 Khz hasta los 3,000 Ghz y se divide en bandas que comprenden rangos atribuidos a servicios de comunicaciones específicos, como la telefonía, la radiodifusión sonora y la televisión (art. 6 LT). Se caracteriza por ser un bien natural e intangible, de dominio público porque su titularidad recae en el Estado y no en entes privados (art. 9 LT), escaso y finito, ya que del rango infinito de frecuencias existentes no todas son utilizables para la comunicación; y cuya prestación constituye un servicio público, debido a que se destina para la satisfacción de un interés público o para un beneficio colectivo [17]. Ahora bien, el espectro radioeléctrico muestra características especiales que vuelven necesario su uso eficiente y la igualdad de oportunidades en su aprovechamiento, lo que justifica su regulación y ordenación estatal, es decir, su organización y administración racional [18]. Una de las formas de realizarlo es mediante el otorgamiento de títulos habilitantes para su utilización y/o explotación, en los cuales se definen las condiciones de la asignación y los principales derechos y obligaciones del ente regulador, de los proveedores de los servicios y de los consumidores.

Con exclusión de las frecuencias que son de uso oficial y que solo utilizan instituciones estatales mediante autorización (arts. 6 inc. 2º y 12 incs. 1º, 3º y 5º LT), existen dos clases de frecuencias: las que son de uso regulado que requieren de concesión, es decir, las comerciales y comunitarias que suponen una

---

15 Sentencias de 18 de abril de 2006 y 4 de noviembre 2011, inconstitucionalidades 7-2005 y 15-2011 AC., respectivamente.

16 Sentencia de 19 de agosto de 2019, inconstitucionalidad 156-2015.

17 Sentencia de 29 de julio de 2015, inconstitucionalidad 65-2012 AC.

18 Directrices de política y aspectos económicos de asignación y uso del espectro radioeléctrico. Infraestructura, Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2016.

utilización del espectro para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones con o sin fin de lucro, respectivamente, o para utilización privada (arts. 6 inc. 2º y 12 incs. 1º, 4º y 6º LT); y las frecuencias de uso libre que se encuentran a disposición del público en general para operar estaciones radioeléctricas y dispositivos de baja potencia, las cuales requieren de licencia (arts. 6 inc. 2º y 12 inc. 2º LT).

En términos amplios, en lo relativo a la explotación del espectro radioeléctrico por particulares, el legislador tiene libertad de configuración, por lo que puede optar por cualquiera de los títulos habilitantes mencionados, y su exigencia se fundamenta en el derecho soberano del Estado de reglamentar sus recursos naturales y las telecomunicaciones, y en específico, el espacio por el que se propagan las ondas electromagnéticas –que abarcan las de índole radioeléctrica–. Asimismo, su regulación se basas en la necesidad de que tal servicio esencial se suministre en la satisfacción del interés público, para procurar la coexistencia de la totalidad de los servicios sin interferencias, estimular la competencia entre operadores, proteger a los consumidores y procurar que las asignaciones de frecuencias se lleven a cabo con base en criterios de equidad y eficiencia, entre otros aspectos."

FACULTAD DEL LEGISLADOR PARA GRAVAR EL USO O EXPLOTACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

"En consecuencia, dado que el espectro radioeléctrico es un bien demanial que es objeto de un servicio público y cuya utilización y/o explotación requiere de un título habilitante emitido por el ente regulador (SIGET) establecido por la ley (art. 9-B LT), el legislador se encuentra facultado para gravar tal actividad –según la clasificación de la frecuencia de que se trate–, a fin de cubrir el costo efectivo de la gestión, supervisión y control del espectro y para el desarrollo de las telecomunicaciones, tanto en sentido técnico como en beneficio social, entre otras finalidades. Por tanto, los montos que en tal concepto se cobran tienen naturaleza tributaria, en particular la de una tasa, puesto que los sujetos obligados reciben como contraprestación, el aprovechamiento de un recurso natural y el correspondiente título habilitante para ello.

VIII. Resolución de los problemas jurídicos.

1. Corresponde ahora analizar si el art. 116-A inc. 1º LT vulnera la equidad tributaria en su manifestación del principio de capacidad económica (art. 131 ord. 6º Cn.). Para hacerlo, es necesario determinar si el tributo contenido en la disposición impugnada es un impuesto o una tasa. Para lo cual se analizará si, por su pago, los obligados reciben alguna contraprestación de la SIGET, como ente estatal encargado de la gestión y regulación del sector telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico.

A. El actor aduce que los servicios gravados utilizan las frecuencias de uso libre y que cuando las señales de radio y televisión se transmiten por medios físicos, el espectro radioeléctrico ni siquiera se usa, por lo que los sujetos pasivos no reciben contraprestación por su pago. Por ende, concluye que el tributo es un verdadero impuesto, a pesar de que el legislador le haya denominado como tasa. Esta posición es compartida por el Fiscal General de la República.

B. Al respecto, debe señalarse que, según el art. 115 inc. 1º LT, la regla general es que la explotación del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de radiodifusión y de televisión por suscripción requiere de concesión, que otorga la SIGET. Como excepción a esta regla, el inc. 3º de tal disposición indica que cuando los servicios mencionados se transmitan por medios alámbricos, el título habilitante requerido es la licencia. En torno a esto último, debe indicarse que los medios alámbricos son aquellos que se prestan por cable coaxial o fibra óptica, en los que las señales de audio y video siempre utilizan el espectro radioeléctrico, pero viajan encapsuladas por la superficie del cable metálico o como haces de luz en el medio físico. Ello se reitera en los arts. 6 y 107 del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones y, para el caso específico de la televisión por suscripción, en el art. 2 inc. 2º del Reglamento para la Prestación de Servicios de Difusión de Televisión por Suscripción por Medios Alámbricos o Inalámbricos.

En el caso de la televisión satelital, el art. 14 inc. 1º letra d y el inc. 2º LT determinan que los operadores que transmitan desde el territorio nacional requieren de concesión para tener los derechos de uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico pertinentes. Asimismo, el art. 2 inc. 2º parte final del Reglamento para la Prestación de Servicios de Difusión de Televisión por Suscripción por Medios Alámbricos o Inalámbricos establece que "[l]os proveedores de servicios audiovisuales por medio de sistema satelital que directamente entregan la señal a los usuarios requerirán, según el caso, de concesión o licencia". Respecto de ambas disposiciones, el amicus curiae sostuvo que cuando dicho servicio se presta por medios inalámbricos, no se generan emisiones desde las estaciones terrenas hacia el satélite, por lo que "solo [se] requiere el uso de las frecuencias de bajada en el sentido espacio-tierra", y en tal supuesto, su explotación se otorga mediante licencia.

En resumen, se advierte que: (i) en general, los servicios de radiodifusión sonora y de televisión, todos por suscripción, que se propagan por medios inalámbricos, requieren de una concesión como título habilitante, porque utilizan las frecuencias del espectro de uso regulado; (ii) por exclusión, cuando tales servicios se transmiten por medios alámbricos, el título habilitante exigido es la licencia, pues se utilizan las frecuencias de uso libre; y (iii) en el caso específico de la televisión por cable, debido a que se otorga tanto en sentido tierra-espacio como espacio-tierra, cuando se transmiten señales desde el territorio nacional, se necesita de concesión, pues el uso de frecuencias de uso regulado, mientras que si las frecuencias se utilizan solo para recibir las señales satelitales en una estación terrena por medios inalámbricos y mediante la porción de espectro de uso libre, se exige licencia, por razones técnicas y/o de ordenamiento del espectro (art. 12 inc. 7º LT). Entonces, según lo apuntado, todos los servicios de telecomunicaciones citados en el art. 116-A LT utilizan y explotan el espectro radioeléctrico y reciben un título habilitante de la SIGET para ello –concesión o licencia, según el caso–, quien lo otorga como parte de su competencia, pues es el ente rector de las telecomunicaciones y, por ende, de la administración y supervisión de dicho espectro.

C. En ese orden, este Tribunal nota que, tal como lo han afirmado la autoridad demandada y el amicus curiae, el hecho generador del tributo regulado en el art. 116-A LT es el beneficio o contraprestación que por su pago reciben cada uno de los operadores de los servicios gravados, que consiste en el uso de un bien demanial, autorizado mediante el título habilitante respectivo y en la gestión que para ello realiza la SIGET, como lo regula el art. 120 LT. Por tanto, se descarta que el hecho generador sea la capacidad económica de los sujetos pasivos, calculada por el número de suscriptores, usuarios finales o clientes de sus servicios, pues el número de suscriptores únicamente es el criterio utilizado para calcular el monto del tributo. Por ello, deben desestimarse los argumentos del demandante y del Fiscal General de la República, ya que se ha verificado que el tributo contenido en la disposición impugnada es una tasa y no un impuesto. Y debido a ello, el principio de capacidad económica como manifestación de la equidad tributaria no resulta aplicable para la configuración de su hecho generador. En consecuencia, se advierte que no existe vulneración al art. 131 ord. 6º Cn. y así se declarará en esta sentencia."

INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN CONSTITUCIONAL

"2. Al haberse determinado que el tributo en cuestión es una tasa, debe recordarse que esta clase de tributo se caracteriza por que el producto de su recaudación es exclusivamente destinado al financiamiento de la actividad o servicio respectivo y no a fines ajenos a aquellos para cuyo funcionamiento constituye su único presupuesto. Por ello, no existe impedimento constitucional para que el legislador determine que los recursos que se obtengan con su implementación ingresen al patrimonio de la SIGET, a fin de cubrir los costos de los procedimientos administrativos y servicios que esta presta en la gestión del espectro radioeléctrico –lo que incluye la emisión y/o renovación del título habilitante correspondiente–. Por ello, tampoco existe la vulneración del art. 224 inc. 1º Cn., y así se declarará en este pronunciamiento."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 167-2016, fecha de la resolución: 01/10/2021

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

ROL, COMPOSICIÓN E INDEPENDENCIA

"IV. Rol, composición e independencia del Consejo Nacional de la Judicatura.

1. A. El CNJ es un órgano constitucional creado por la Constitución de 1983, cuyo funcionamiento inició en el año 1990, luego de la entrada en vigor de la primera LCNJ. Inicialmente se ideó como una instancia de apoyo a la Corte Suprema de Justicia, pero su rol cambió luego de las reformas constitucionales producidas a consecuencia de los Acuerdos de Paz. En el Capítulo III, sección 1, de los Acuerdos de Chapultepec, se convino en reafirmar que "el Consejo Nacional de la Judicatura estará integrado de manera que se asegure su independencia de los Órganos del Estado y de los partidos políticos, así como la integración al

mismo, hasta donde sea posible, no solo de jueces, sino también de los sectores de la sociedad que no estén directamente conectados con la administración de justicia [1]". Por ello, el art. 187 Cn. fue reformado, y es el sustento constitucional del CNJ [2]. Desde tal reforma, sus atribuciones básicas son las de proponer candidatos para ocupar los cargos de la judicatura y asegurar el mejoramiento de la formación profesional de los funcionarios judiciales [3]. Es así como esta sala ha dicho que su función es relevante en la conformación del Órgano Judicial [4].

Como rasgos esenciales de la normativa constitucional aplicable al CNJ resalta su independencia y la remisión a la regulación por ley formal de sus aspectos orgánicos, funcionales, financieros y administrativos. Respecto de lo primero, el inciso primero del art. 187 Cn. y los postulados contenidos en los Acuerdos de Chapultepec destacan la independencia del CNJ, en especial respecto de los otros órganos de Estado (particularmente el judicial) y de los partidos políticos. Por ello, existe fundamento constitucional para afirmar que dicha institución estatal de rango constitucional y de carácter administrativo goza de una independencia orgánica, funcional, administrativa y financiera con respecto a los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial u otros órganos constitucionales o instituciones públicas, así como de cualquier asociación o grupo privado de carácter empresarial, gremial, sindical y, en general, de cualquier sector de poder [5].

Existe una interacción de interés entre la independencia del CNJ y su función propositiva de los integrantes de las ternas a candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, cámaras de segunda instancia, jueces de primera instancia o de paz, o de los candidatos a las promociones y ascensos a que hubiere lugar, pues las reformas a la LCNJ contenidas en el Decreto Legislativo nº 801 consisten en la inclusión de los magistrados y jueces en la conformación subjetiva del CNJ para garantizar su representación [6]. Ello es relevante, al versar esta función con la proposición en la designación de los candidatos a magistrados y jueces que componen el Órgano Judicial, sector del cual proviene el consejal al que el art. 24 LCNJ prohíbe optar al cargo de presidente.

Así, a partir de una interpretación armónica de los arts. 186 inc. 3 y 187 Cn. en relación con los arts. 5 y 6 LCNJ y el capítulo III, sección 1, de los Acuerdos de Chapultepec, se advierte que el CNJ está relacionado o vinculado con el Órgano Judicial en forma positiva y negativa. La vinculación positiva radica en que es el encargado de proponer a quienes habrán de ocupar los distintos cargos judiciales [7]. Por otro lado, la vinculación negativa es una manifestación de su

---

1 Sobre la reestructuración surgida luego de los Acuerdos de Paz: sentencia de 17 de mayo de 2013, inconstitucionalidad 4-2012.

2 Decreto Legislativo nº 64, de 31 de octubre de 1991, publicado en el Diario Oficial nº 217, tomo 313, de 20 de noviembre de 1991, y cuya fe de erratas fue realizada por medio del Decreto Legislativo nº 583, de 30 de junio de 1993, publicado en el Diario Oficial nº 139, tomo 320, de 23 de julio de 1993.

3 Sentencia de 20 de julio de 1999, inconstitucionalidad 5-99.

4 Sentencia de 8 de abril de 2015, inconstitucionalidad 94-2014.

5 Sentencia de 28 de abril de 2015, inconstitucionalidad 122-2014.

6 Así se infiere de sus considerandos II, IV y V.

7 Es decir que la eficacia y eficiencia del ejercicio de la función jurisdiccional que el art. 172 Cn. atribuye al Órgano Judicial recibe un influjo directo del CNJ, puesto que de él depende que los titulares de los distintos tribunales del país cumplan con los requisitos que exigen los arts. 176, 177, 179 y 180 Cn. Así, que el cuerpo de jueces esté conformado por personas aptas depende en gran medida de su labor depuradora y selectiva.

independencia, e implica que el Órgano Judicial no puede tener injerencias de ninguna clase en el ejercicio de las atribuciones que le competen. El sentido de esta limitación reside en evitar que exista cualquier mecanismo de influjo sobre el contenido de las listas de candidatos judiciales, con el fin de garantizar un proceso de selección transparente, basado en la idoneidad y capacidad.

B. Como garantía de su independencia, la LCNJ prevé una serie de mecanismos destinados a evitar que exista algún criterio decisional que no redunde en la capacidad e idoneidad de los servidores judiciales o en el mejoramiento de la administración de justicia, es decir, que sea producto de parcializaciones, injerencias externas o intereses particulares. El art. 17 establece una serie de incapacidades para ser consejal del CNJ, referidas al parentesco entre los miembros que lo componen, de ellos respecto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia o su calidad de funcionarios públicos. Por su parte, el art. 18 LCNJ establece limitaciones de afiliación política o de vinculación material con los partidos políticos. Además, el art. 19 establece un régimen de excusas que permite que en caso de haber motivos que pongan en duda la imparcialidad de algún consejal este se aparte del caso. Finalmente, el art. 2 de la misma ley prescribe que el CNJ posee independencia en lo financiero, administrativo y presupuestario.

Desde los Acuerdos de Paz se acentuó la necesidad de independencia del CNJ. Pero, aún cuando se fijó la independencia respecto del Órgano Judicial, no se pensó en que tal órgano fundamental no tuviera representación en él. Así se infiere de la frase inicial del Capítulo III, sección 1, de los Acuerdos de Chapultepec, que alude a "la integración al mismo, hasta donde sea posible, no solo de jueces, sino también de los sectores de la sociedad que no estén directamente conectados con la administración de justicia" (itálicas propias). Ello implica que se tenía previsto que los jueces tuvieran representación en el órgano que se encargaría de elegir la composición y formación de los miembros de la judicatura. De esto se sigue que los jueces y magistrados del Órgano Judicial son quienes conocen de primera mano las necesidades formativas, aptitudes necesarias y mejoras urgentes que tal órgano requiere."

LA DETERMINACIÓN DEL MARCO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL QUE CORRESPONDE AL CNJ NO PUEDE HACERSE SOLO A PARTIR DE LO PRESCRITO POR LA CONSTITUCIÓN

"2. Ahora bien, la determinación del marco estructural y funcional que corresponde al CNJ no puede hacerse solo a partir de lo prescrito por la Constitución. Así lo sostuvo esta sala en la sentencia de inconstitucionalidad 122-2014, ya citada, al expresar que "[una] forma que permite, al menos de manera indirecta, conocer el sentido y alcance del contenido normativo de una disposición constitucional, es analizar su desarrollo legislativo, cuando [e]ste sea compatible con [aquella]". En ese sentido, la LCNJ puede ser útil para determinar las funciones que competen al CNJ, su forma de ejercicio y las garantías de independencia de tal órgano constitucional.

En la legislación actual, el CNJ se encuentra compuesto por siete consejales propietarios e igual número de suplentes, los cuales poseen un período de funciones de cinco años (art. 10 LCNJ) y provienen de los sectores que se mencionan a continuación: (i) tres de ellos, propuestos por el gremio de abogados; (ii) uno de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador; (iii) uno de las otras Facultades, Escuelas o Departamentos de

Derecho de las universidades privadas del país, debidamente autorizadas; (iv) uno propuesto por el Ministerio Público; y (v) uno electo por los magistrados de Cámaras de Segunda Instancia, jueces de primera instancia y jueces de paz (art. 9 LCNJ). Los requisitos para ser consejal del CNJ son los que se establecen en el art. 176 Cn., y, en caso de tratarse del miembro propuesto por las Facultades, Departamentos y Escuelas de Derecho, deberá además haber ejercido la docencia universitaria al menos durante los cinco años anteriores a la elección (art. 12 LCNJ).

La composición del CNJ obedece a la representación de los distintos sectores relevantes en el quehacer jurídico. Así, está presente la representación del sector a quien compete primordialmente la formación de los futuros profesionales y la formación continua de los que ya poseen un título académico que permite el ejercicio de la abogacía (Facultades, Escuelas o Departamentos de Derecho), del gremio de abogados, el Ministerio Público y el sector judicial. El fin inmediato de ello es favorecer el pluralismo jurídico al interior del CNJ, que luego habrá de reflejarse en la conformación del Órgano Judicial."

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

"VI. Resolución del problema jurídico.

1. A. Haciendo uso de las consideraciones anteriores para efectuar el examen de constitucionalidad del art. 24 LCNJ –mediante la aplicación del test integrado de igualdad al caso–, se puede inferir que tal disposición contiene una intervención en la igualdad, porque se impide el ejercicio de una acción a un sector específico del grupo comparado: solamente el consejal proveniente del Órgano Judicial está impedido de optar al cargo de Presidente del CNJ, mientras que el resto de los concejales, independientemente de su origen, sí tienen esa posibilidad. En ese sentido, puede concluirse que existe una intervención discriminatoria.

B. El escrutinio de igualdad que corresponde a este caso es el básico. Esto se debe a que el hecho de ser un funcionario judicial no ha sido identificado en la historia como un criterio recurrente para la discriminación de las personas. En ese sentido, no se trata de una categoría sospechosa de discriminación, ni de las que expresamente prevé el art. 3 Cn. ni de las que podrían calificarse así a partir de los datos empíricos, históricos y sociales con que se cuenta hasta este momento.

C. a. Al aplicar el test de proporcionalidad, debe iniciarse por el subprincipio de idoneidad. Así, se tiene que el fin que persigue el art. 24 LCNJ es el de garantizar la independencia del CNJ respecto del Órgano Judicial. Esta finalidad, además, resulta ser constitucionalmente legítima, pues encuentra fundamento en el art. 187 inc. 1 Cn., que establece la independencia del CNJ. En consonancia con esta disposición constitucional, los Acuerdos de Paz también aluden a ella como una idea predicable a él. También es una medida adecuada, puesto que fomenta ese fin [8]–hay una relación causal fin-medio– al favorecer la independencia del CNJ respecto del Órgano Judicial: al no ser presidente de él el miembro seleccionado por los Magistrados, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz, se produce una separación institucional tendiente a ese fin.

---

[8] Sentencia de 29 de julio de 2010, inconstitucionalidad 61-2009.

b. En cuanto al examen de necesidad, debe determinarse si existe alguna o algunas otras medidas igualmente idóneas, pero menos lesivas del derecho fundamental o principio constitucional en juego. En específico, en este caso debe enjuiciarse se existen otras opciones para la consecución de la independencia del CNJ respecto del Órgano Judicial que sean menos lesivas del principio de igualdad. Se trata, en suma, de un análisis de las otras opciones en juego y la indicación de cuáles de ellas –si las hubiere– logran el fin perseguido por el art. 24 LCNJ –independencia (art. 187 inc. 1 Cn.)– sin que requieran de la limitación de la igualdad (art. 3 Cn.) o que lo hagan con menor intensidad.

Al respecto, conviene recordar las medidas de garantía de independencia que ya tiene previstas la LCNJ y el nivel de incidencia que la ostentación de la presidencia del CNJ puede tener en la independencia de este órgano constitucional. La base conceptual de la que se parte es que el CNJ sí debe estar representado por miembros del Órgano Judicial, según se expuso en el considerando IV. Estas son las que se mencionan: (i) independencia en lo financiero, administrativo y presupuestario (art. 2 inc. 1 LCNJ), por lo que tales elementos no pueden ser mecanismos de coacción o manipulación; (ii) la capacidad de organizar y administrar la Escuela de Capacitación Judicial compete exclusivamente al CNJ (art. 7 letra d LCNJ); (iii) prohibición de que los consejales en funciones desempeñen cargos públicos remunerados durante el tiempo para el que han sido electos, excepto los de carácter docente o cultural, que evita que posean vinculación formal con alguna institución a la cual se deban (art. 9 inc. 3 LCNJ); (iv) la circunstancia de que al cesar en sus funciones los consejales se incorporarán a su cargo o empleo anterior, en lo pertinente a los miembros del sector público (art. 9 inc. 3 LCNJ), que procura que las decisiones no se adopten sobre la base de beneficios futuros o del riesgo de que se pierda el cargo.

Además, se encuentra: (v) la ausencia de mandato imperativo hacia los consejales de parte de los sectores o instituciones que los hayan propuesto (art. 9 inc. 4 LCNJ); (vi) el establecimiento de remuneraciones por el ejercicio del cargo (art. 9 inc. final LCNJ), que pretende evitar que el consejal reciba dádivas, sobornos o regalías; (vii) fijación de mecanismos de elección de los candidatos a nivel interno del sector o institución proponente (art. 13 LCNJ), que busca evitar la sujeción por parte del candidato a consejal con dicho sector o institución; (viii) estabilidad en el ejercicio del cargo, debido a su carácter irrevocable, salvo causa justificada (art. 15 y 16 LCNJ); (ix) la circunstancia de que, una vez electo como consejal, este cargo no esté supeditado a la pertenencia posterior al sector o institución proponente (art. 15 inc. 2 LCNJ); (x) la fijación de causales de incapacidad (art. 17 LCNJ); (xi) incompatibilidades referidas al desempeño de cargos directivos o de cualquier otra índole en partidos políticos, realización de actividades de política partidista y prevalecimiento del cargo en el ejercicio de su profesión (art. 18 LCNJ); y (xii) la regulación de un sistema de excusas y suplencias cuando el consejal o sus familiares hasta el grado fijado por el art. 19 LCNJ pudieran tener algún interés en un aspecto decidible por el CNJ.

Ahora bien, el presidente del CNJ posee las funciones que establece el art. 27 LCNJ, que en su mayoría se refieren a aspectos meramente administrativos que no trascienden en forma alguna en el desempeño de las funciones

propositivas y directivas de dicho órgano. Solamente las funciones previstas en las letras d y g de tal disposición implican cierto grado de incidencia decisional, que son: (i) nombrar y remover al personal administrativo y de servicio sujeto a ratificación del pleno, dentro de las limitaciones del presupuesto, Ley de Salarios y demás disposiciones aplicables, y conceder las licencias y permisos que correspondan a su nivel de aprobación; y (ii) autorizar y ejecutar las operaciones financieras relacionadas con la ejecución del presupuesto y las que el pleno haya autorizado en su caso, todo de conformidad con la ley, disposiciones y reglamentos aplicables.

Se puede advertir que estas decisiones, que dependen exclusivamente del presidente del CNJ, no inciden en las funciones esenciales que corresponden a este órgano por el art. 187 Cn. De hecho, la primera está supeditada a una ratificación del pleno del CNJ. Quien ostenta la presidencia del CNJ no posee una posición privilegiada o preferente para la realización de las funciones propositivas o directivas que le corresponden a este órgano constitucional ni puede tomar decisiones de suma trascendencia en forma unilateral. Las decisiones que repercuten en la realización de las funciones esenciales del CNJ son tomadas en forma colegiada y, en consecuencia, el poder decisional y unilateral de su presidente no influye sensiblemente en la ejecución de su rol constitucional. Al contrario, las decisiones que sí se vinculan con el ejercicio de las funciones propositivas y directivas corresponden al pleno (art. 22 LCNJ), por lo que son el resultado de un proceso decisorio deliberado, informado y colegiado.

2. Por tanto, se puede concluir que la medida limitadora establecida en el art. 24 LCNJ no supera el test de necesidad, ya que existen otras medidas que logran el mismo fin propuesto sin ejercer una limitación del principio de igualdad (art. 3 Cn.) en favor de la independencia del CNJ (art. 187 inc. 1 Cn.). Estas medidas son las que se desarrollaron y explicaron en este apartado como garantías de independencia contenidas en la LCNJ. Mediante las disposiciones citadas, y sin necesidad de limitar la igualdad de los consejales entre sí, se logra con igual idoneidad o adecuación el fin legítimo perseguido por el art. 24 LCNJ. En ese sentido, el trato diferenciado que proporciona el objeto de control no es proporcional. Y, en consecuencia, se deberá declarar inconstitucional."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 5-2016, fecha de la resolución: 04/06/2021

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE SU SUPREMACÍA

"1. Sobre el concepto de Constitución y el fundamento de su supremacía, el punto de partida para el establecimiento de una Constitución se encuentra en el poder de la comunidad política para disponer sobre sí misma [1]; esto es, en la voluntad conjunta vinculante de la soberanía que reside en el pueblo, expresada directamente por medio del poder constituyente originario, que se objetiva y racionaliza en dicha norma [2].

---

1 Sentencia de 23 de octubre de 2013, inconstitucionalidad 71-2012.

2 Sentencias de 14 de febrero de 1997, 20 de julio de 1999 y 1 de abril de 2004, inconstitucionalidades 15-96 AC, 5-99 y 52-2003 AC, por su orden; y las resoluciones de 14 de octubre de 2003 y 27 de abril de 2011, inconstitucionalidades 18-2001 y 16-2011, respectivamente.

Se agrega que, no obstante, la Constitución no es la mera codificación de la estructura política superior del Estado salvadoreño, sino que parte de un determinado supuesto y con un determinado contenido [3]. Ese supuesto radica en la soberanía popular o poder constituyente del pueblo (art. 83 Cn.), y su contenido está integrado esencial y básicamente por el reconocimiento de la persona humana como el origen y fin de la actividad del. Estado y los derechos fundamentales derivados de esa condición (art. 1 Cn.) [4].

Desde esa perspectiva, la Constitución es la expresión de los cánones ético jurídicos sobre los cuales la comunidad, a partir del pluralismo, ha logrado encontrar un cierto grado de consenso, hasta el punto de incorporarlos en el documento normativo rector de la organización y funcionamiento del Estado. En la Constitución reside la capacidad para convocar la adhesión de los miembros de la comunidad, como supuesto básico y elemento esencial del Estado y de su existencia, de modo que ella cumple una función integradora de la unidad política de acción estata1 [5]."

EN EL SALVADOR RIGE UN CONCEPTO JURÍDICO NORMATIVO DE CONSTITUCIÓN, ES DECIR, LA NOCIÓN DE CONSTITUCIÓN COMO NORMA JURÍDICA SUPERIOR

"Asimismo, debe apuntarse que en El Salvador rige un concepto jurídico normativo de Constitución, es decir, la noción de Constitución como norma jurídica superior [6]. Ello significa que esta es efectivamente un conjunto de normas jurídicas, con características propias y peculiares, y con una connotación jerárquica que las distingue del resto del ordenamiento: son las normas supremas del ordenamiento jurídico [7]. Esto se debe a que es la expresión jurídica de la soberanía y por eso no puede ser solo un conjunto de normas que forman parte del orden jurídico, sino que tal cuerpo de normas es precisamente el primero y el fundamental de dicho ordenamiento. La supremacía constitucional radica entonces en la legitimidad política cualificada de la Constitución, como emanación directa del poder constituyente y como racionalización del poder soberano del pueblo para controlar —y por tanto, limitar— a los órganos constituidos, con el fin ulterior de garantizar los derechos fundamentales [8].

Lo dicho permite concluir razonablemente que la Constitución es el parámetro de validez del resto del ordenamiento [9]. Ella tiene la aptitud para regular la producción —en su forma y en su contenido— y la interpretación de las disposiciones jurídicas infraconstitucionales."

MANIFESTACIONES DE LA FUERZA NORMATIVA

"Dicha cualidad —también llamada fuerza normativa— tiene dos manifestaciones muy acentuadas en la Constitución: por un lado, su fuerza jurídica activa, que significa la capacidad de las disposiciones constitucionales para intervenir en el ordenamiento jurídico creando derecho o modificando el ya existente; y, por el otro, la fuerza jurídica pasiva, que implica la capacidad de resistirse a las modificaciones pretendidas por normas infraconstitucionales [10]. Ello indica, por

3 Sentencia de Inconstitucionalidad 71-2012, ya citada.
4 Sobre el tema, véase la sentencia de 26 de julio de 2017, inconstitucionalidad 1-2017 AC.
5 Sentencia de 28 de mayo de 2018, inconstitucionalidad 96-2014.
6 Sentencia de 14 de noviemnre de 2016, Inconstitucionalidad 67-2014.
7 Véase la sentencia de 1 de abril de 2004, inconstitucionalidad 52-2003
8 Sentencia de inconstitucionalidad 67-2014, ya citada.
9 Sentencia de inconstitucionalidad 96-2014, ya citada..
10 Sentencia de 17 de noviembre de 2017, inconstitucionalidad 105-2014.

un lado, que cualquier expresión de los órganos constituidos que contradiga el contenido de la Constitución puede ser invalidada cuando se oponga a esta y, por el otro, que la interpretación de los preceptos infraconstitucionales está regida por la fuerza normativa de las normas constitucionales."
Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 91-2016-101-2017-157-2017, fecha de la resolución: 27/10/2021

CONTROL CONSTITUCIONAL

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Y QUE DEBEN SER DEBIDAMENTE DETERMINADOS POR EL ACTOR

"III. Elementos del control de constitucionalidad.

El control constitucional que realiza esta Sala está compuesto, en cuanto a su fundamento jurídico, por el parámetro y objeto de control; y en su fundamento material, por la confrontación entre ellos. El primero es la norma constitucional potencialmente violada por el acto objeto de examen. El segundo es la norma que se considera contraria a la Constitución. El tercero es la argumentación tendente para evidenciar la incompatibilidad percibida entre el objeto y parámetro de control. Estos elementos deben ser adecuadamente determinados por el actor, porque de lo contrario debe prevenírsele para que subsane los defectos formales de su demanda o rechazarse esta por la vía de la improcedencia."
Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 42-2019, fecha de la resolución: 20/12/2021

Relaciones:
Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 108-2020, fecha de la resolución: 09/04/2021

COSA JUZGADA

LAS RESOLUCIONES O SENTENCIAS QUE PONEN FIN A UN PROCESO CONSTITUCIONAL O QUE RESUELVEN LA PRETENSIÓN NO PUEDEN MODIFICARSE

"Según el art. 17 Cn., ningún órgano, funcionario o autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios o procedimientos fenecidos [1]. En el campo constitucional, esto significa que las resoluciones o sentencias que ponen fin a un proceso constitucional o que resuelven la pretensión no pueden modificarse, porque el orden jurídico les atribuye efectos de cosa juzgada [2]."

De esto deriva la inmodificabilidad del precedente y la autovinculación al mismo [3]. En principio, las exigencias derivadas de los principios de igualdad y de

1 Emitido mediante el Decreto Legislativo n° 15, de 23 de junio de 1972, publicado en el Diario Oficial n° 142, tomo 236, de 31 de julio de 1972.

2 Auto de 18 de junio de 2018, inconstitucionalidad 134-2017.

3 Resolución de 10 de agosto de 2015, inconstitucionalidad 62-2015.

seguridad jurídica obligan a este tribunal a Ajustarse a lo juzgado en un proceso anterior, cuando haya d e decidir sobre una pretensión respecto de la cual la sentencia se encuentre en estrecha conexión Naturalmente, los rasgos y los fines de la cosa juzgada constitucional no se identifican con los rasgos y fines específicos de la cosa juzgada del Derecho Procesal en general."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 89-2019, fecha de la resolución: 18/10/2021

DERECHO A RECURRIR

CONSECUENCIAS DE LA CONNOTACIÓN CONSTITUCIONAL QUE ADQUIERE

"V. El derecho a recurrir.

El derecho de acceso a los recursos tiene reconocimiento constitucional. Su importancia radica en que representa la garantía de una protección jurisdiccional efectiva, lo que trasciende a su configuración legal secundaria [1]. La jurisprudencia constitucional ha estatuido que pese a encontrarse ligado al genérico principio constitucional de audiencia, el derecho de acceso a los recursos posee sustantividad propia. Esto permite discernir claramente su inobservancia cuando se restrinja su ejercicio con base en razones inconstitucionales o por la imposición de ciertos requisitos e interpretaciones excesivamente formalistas o que lo obstaculicen arbitrariamente [2]. El derecho de acceso a los recursos tiene como finalidad permitir que las personas afectadas por una decisión judicial que les cause agravio, puedan atacar mediante argumentos, el contenido de una resolución, lo cual puede realizarse ante la misma autoridad que la dictó o ante otra generalmente de rango o nivel superior, para que efectúe un nuevo examen."

FACULTAD DEL LEGISLADOR PARA DETERMINAR, CONFORME A DIVERSOS CRITERIOS DE SELECTIVIDAD, LA INSTAURACIÓN DE LOS DIFERENTES RECURSOS, ASÍ COMO TAMBIÉN SI SERÁN DE ÚNICA INSTANCIA O DE DOBLE INSTANCIA

"El conocimiento del recurso por un tribunal superior o por el mismo tribunal que dictó la decisión impugnada forma parte del marco de configuración legislativa que se le dé al recurso según las circunstancias que lo justifiquen. El legislador es libre para determinar, conforme a diversos criterios de selectividad, la instauración de los recursos de revocatoria, revisión, apelación o casación según la naturaleza del litigio. Además, tiene la potestad de establecer mecanismos de control de única instancia ante hechos que abstractamente pueden considerarse de poca repercusión. Mientras el Órgano Legislativo se mantenga dentro de los márgenes estructurales de acción –los límites definidos por la Constitución– y sin alterar el contenido de los derechos fundamentales reconocidos en la misma,

1 Sentencia de 19 de noviembre de 2001, amparo 714-99.
2 Sentencia de 16 de abril de 2017, amparo 200-2005

puede configurar válidamente el sistema de recursos de única instancia o doble instancia conforme a diferentes criterios selectivos que pueden atender a la complejidad del asunto o a la gravedad de la conducta enjuiciada."

GARANTÍAS QUE POSEE

"Este Tribunal ha reconocido que el derecho a recurrir tiene las siguientes garantías: (i) una vez instituido el recurso o medio impugnativo en la ley procesal adquiere connotación constitucional, por lo que sus presupuestos de admisibilidad deberán ser interpretados de modo favorable a su procedencia [3]; (ii) el legislador no puede regular normativamente un recurso que quede abierto solo para alguna de las partes porque sería contrario al principio de igualdad procesal y no podrá establecer obstáculos a la admisión del recurso que lo haga imposible para cualquiera de las partes [4]; (iii) si la ley configura un proceso como de única instancia, la inexistencia legal de recurrir, en modo alguno vulneraría preceptos constitucionales, siempre y cuando esta limitación sea evidentemente objetiva, esto es, proporcional y razonable en relación con la naturaleza del caso, la urgencia del objeto del proceso, las posibilidades de dispendio jurisdiccional y la menor complejidad del asunto [5].

En conclusión, el derecho de acceso a los recursos es un derecho de configuración legal que adquiere carácter constitucional una vez reconocido en la ley. Este solo puede ejercerse a través de los cauces que el legislador establece, quien tiene un amplio margen de definición y determinación de las condiciones y consecuencias del uso de los recursos. En la regulación de la materia, la Asamblea Legislativa puede establecer límites al ejercicio del mencionado derecho, siempre y cuando se respete su contenido esencial o dicho límite se dirija a preservar otros derechos, bienes y fines constitucionales, y además guarden la debida proporcionalidad con la finalidad perseguida. Por lo tanto, el derecho de acceso a los recursos puede verse conculcado por aquellas disposiciones o por aquellos actos aplicativos que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad [6]."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 7-2016, fecha de la resolución: 01/11/2021

NATURALEZA

"A. a. En las manifestaciones primitivas de justicia se consideraba que cuando el tribunal emitía la decisión que resolvía de manera definitiva un litigio jurídico, dicha decisión debía considerarse firme, de modo que no se permitía ningún tipo de cuestionamiento contra la misma.

---

3 Auto de 16 de marzo de 2018, amparo 237-2017.
4 Auto de 4 de junio de 2018, inconstitucionalidad 47-2015
5 Sentencia de 12 de noviembre de 2010, inconstitucionalidad 40-2009
6 Sentencia de 25 de noviembre de 2002, amparo 740-2001..

La razón era que la comunidad había exteriorizado la última palabra el torno al caso. Sin embargo, el desarrollo de las sociedades y del Derecho ha traído consigo la existencia de mayores litigios legales y con ello la posibilidad de que el juzgador adopte una decisión errónea durante su sustanciación. En efecto, el juez o tribunal que resuelve la controversia legal puede incurrir en un yerro en la aplicación de la norma –sustantiva o procesal– y ello justificaría la necesidad de crear un instrumento procesal que permita reparar la situación provocada [1].

En lo que respecta a la naturaleza del derecho a recurrir, la jurisprudencia constitucional ha expuesto que el art. 2 Cn. prevé una serie de derechos fundamentales –obviamente no taxativa– cuya garantía no basta con la mera enunciación, sino que requiere de mecanismos de protección y defensa. De modo que ese derecho a la protección jurisdiccional de los derechos únicamente es posible mediante un instrumento heterocompositivo diseñado con tal finalidad, cual es el proceso jurisdiccional en todas sus instancias y grados de conocimiento [2]. En tal sentido, el proceso es el instrumento por el cual el Estado satisface las pretensiones de los particulares mediante el desarrollo de la función jurisdiccional, y se constituye en el único medio legítimo que permite privar a una persona de sus derechos fundamentales. En otras palabras, y reiterando una variedad de pronunciamientos judiciales anteriores, el derecho a la protección jurisdiccional conlleva la posibilidad de que un supuesto titular del derecho o interés legítimo pueda acceder a los órganos jurisdiccionales a plantear su pretensión o a oponerse a una ya incoada, así como a la obtención de una respuesta fundada en Derecho a sus pretensiones o su resistencia, a través de un proceso equitativo tramitado de conformidad con la Constitución y las leyes correspondientes."

ESTÁ CONFORMADO POR CUATRO GRANDES MANIFESTACIONES

"El citado derecho está conformado por cuatro grandes manifestaciones que son: (i) el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) el debido proceso o proceso constitucionalmente configurado; (iii) el derecho a una resolución de fondo, motivada y congruente; y (iv) el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales [3]. Este derecho a la protección jurisdiccional no comprende únicamente el acceso a la jurisdicción, sino también la realización de un proceso constitucionalmente configurado donde el derecho de acción y el de defensa sean respetados en condiciones de igualdad. Y es aquí donde la garantía de acceso a los medios impugnativos –comúnmente conocido como el "derecho a recurrir"– adquiere un anclaje constitucional. De modo que, aunque el derecho a recurrir no se encuentre expresamente reconocido por nuestra Constitución, esta Sala ha determinado que tiene asidero constitucional en los arts. 2 inc. 1º, 3 y 11 Cn. Así se ha reconocido en las sentencias de 28 de mayo de 2001, 3 de junio de 2003 y 25 de junio de 2009, inconstitucionalidades 4-99, 53-2003, 102-2007, en su orden."

---

1 En la sentencia de 29 de enero de 2014, inconstitucionalidad 77-2011, este Tribunal expuso que "toda resolución judicial aspira a constituir el punto final de una determinada situación fáctica o jurídica existente en el proceso, [pero] la misma puede adolecer de omisiones, incurrir en equivocaciones o en una aplicación indebida de la ley, pues como producto humano no puede sustraerse de la fa[li] bilidad".

2 Ver sentencia de 18 de diciembre de 2009, inconstitucionalidad 23-2003.

3 Véase sentencia de 12 de noviembre de 2010, inconstitucionalidad 40-2009.

NO DEBE SER ANALIZADO ÚNICAMENTE DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL, SINO TAMBIÉN PROCESAL

"b. Pero, el derecho a recurrir no debe ser analizado únicamente desde la perspectiva constitucional, sino también procesal. Para esta última dimensión, el acceso a los medios impugnativos o "derecho a recurrir" es un derecho que la ley reconoce a las personas que actúan en calidad de partes en un litigio jurídico para impugnar una resolución judicial que lesiona sus intereses con la finalidad de que la decisión sea revisada y, en su caso, modificada, revocada o anulada total o parcialmente, ya sea por el mismo juez que emitió la decisión impugnada o por otro superior en grado jerárquico. Sin embargo, su importancia trasciende más allá de ello, pues un buen sistema de recursos constituye una de las piezas clave de un eficiente sistema de administración de justicia. Por ende, el establecimiento de un óptimo sistema de recursos –más allá de esta idea de corrección de errores judiciales– se relaciona con la idea del control sobre la aplicación del Derecho y en el ámbito de la transparencia del sistema de administración de justicia. Mediante él la sociedad controla cómo sus jueces aplican el Derecho y resuelven los casos; se genera un sistema interno de control dentro de las mismas instancias o grados de conocimiento –juzgados y tribunales en relación con las cámaras o salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia– y se salvaguardan los intereses de los sujetos procesales que intervienen dentro de un determinado procedimiento jurisdiccional.

Lo anterior indica que la actividad recursiva no se relaciona únicamente con la corrección de errores materiales y formales en casos concretos, sino también con una aplicación del Derecho en un sentido uniforme y equitativo. Desde esta perspectiva, los medios de impugnación deben entenderse como instrumentos de corrección tendientes a fomentar derechos y principios constitucionales [4]."

EL PLANTEAMIENTO DE LOS RECURSOS JUDICIALES REQUIERE DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA PARA DELIMITAR SUS TRAZOS MÁS CONCRETOS

"c. Sobre la base de estas consideraciones, se ha determinado que el planteamiento de los recursos judiciales requieren de configuración legislativa para delimitar sus trazos más concretos –plazos para interponer, requisitos del escrito de presentación, plazos para resolverlo, entre otros similares [5] –. Esto quiere decir que las potestades que el "derecho de recurrir" reconoce deben ser ejercidas en la forma que el legislador establece. Por ende, la regulación abstracta que se haga a nivel legislativo puede establecer válidamente límites y condiciones en cuanto a su utilización, pero sin afectar su contenido esencial. En efecto, según la sentencia de inconstitucionalidad 40-2009, ya citada, el derecho a recurrir implica a nivel constitucional al menos cuatro garantías: (i) una vez instituido el recurso o medio impugnativo en la ley procesal adquiere connotación constitucional, por lo que sus presupuestos de admisibilidad deberán ser interpretados de modo favorable a su procedencia; (ii) el legislador no puede regular normativamente un recurso que quede abierto solo para alguna de las partes –pues

4 Véase la sentencia de 29 de enero de 2014, inconstitucionalidad 77-2011.

5 Véase la sentencia de 29 de abril de 2013, inconstitucionalidad 18-2008.

ello iría en contra el principio de igualdad procesal– y no podrá establecer obstáculos a la admisión del recurso que lo haga imposible para cualquiera de las partes; (iii) si la ley configura el proceso como de única instancia, la inexistencia legal de recurrir, en modo alguno vulneraría preceptos constitucionales, siempre y cuando esta limitación sea proporcional en relación con la naturaleza del caso, la urgencia del objeto del proceso, las posibilidades de dispendio jurisdiccional y la menor complejidad del asunto.

d. Este último aspecto es sumamente importante tenerlo presente cuando se analiza el tema del derecho a recurrir. El conocimiento por parte de un tribunal de alzada o jerárquicamente en grado superior sobre un asunto determinado forma parte marco de la configuración normativa que el legislador adscriba al recurso según las circunstancias que así lo justifiquen. De esta manera, conforme a diferentes criterios de selectividad, el legislador puede dictaminar la conveniencia o no de instaurar medios impugnativos como la apelación o casación cuando lo amerite la naturaleza del litigio. De igual forma, puede establecer mecanismos de control en una única instancia ante hechos que abstractamente pueden considerarse de poca repercusión –como acontece con la revocatoria o la revisión–. De ahí que, si el legislador se mantiene dentro de los límites competenciales reconocidos por la Constitución y no altera el contenido esencial de los derechos reconocidos o asegurados por la misma, puede configurar válidamente un sistema de recursos de única o doble instancia conforme a diferentes criterios selectivos que pueden atender a la complejidad del asunto o a la gravedad de la conducta enjuiciada."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 5-2018, fecha de la resolución: 16/07/2021

DERECHO AL SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES

DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR

"VII. El derecho al secreto de las telecomunicaciones, sus alcances y límites en la investigación del delito y la promoción de la acción penal.

1. A. Tomando en consideración lo expuesto, debe señalarse que el derecho a la intimidad personal y familiar (art. 2 inc. 2º Cn.) es una derivación de la dignidad humana y se configura como un poder jurídico que se reconoce a todo sujeto respecto a un ámbito reservado en el que se originan aspectos vinculados con su propia existencia y el libre desarrollo de su personalidad. Dicho espacio privado comprende una serie de aspectos que giran en torno a la persona o su familia, como el domicilio, las comunicaciones, las creencias, la sexualidad y la disposición del propio cuerpo, el cual debe ser resguardado de intromisiones ilegitimas, más aún si esa esfera íntima de la persona constituye el presupuesto para el ejercicio de otros derechos y su participación en la sociedad."

LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL HA PRECISADO QUE EL SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES ES UNA CONCRECIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD

"B. La jurisprudencia constitucional ha precisado que el secreto de las telecomunicaciones (art. 24 Cn.) es una concreción del derecho fundamental a la inti-

midad, en cuya virtud se prohíbe que personas ajenas a la comunicación telefónica, con independencia de los medios tecnológicos utilizados, puedan interrumpir, cortar o conocer su contenido, para asegurar al emisor y al receptor que comuniquen libremente su pensamiento y que lo hagan reservadamente en relación con destinatarios específicos [1]. El referido derecho al secreto de las telecomunicaciones reconoce a cada individuo un ámbito libre de injerencias ilegítimas dentro del cual pueda desarrollar libre y plenamente su personalidad [2], sea que provengan de otros particulares o de personas al servicio del Estado, lo que puede llegar hasta la responsabilidad penal (arts. 184 y siguientes y 302 del Código Penal)."

SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES NO TIENE CARÁCTER ABSOLUTO

"Este secreto no es una garantía que tenga carácter absoluto, pues su ámbito de protección se encuentra sujeto a límites siempre que se respeten las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad.

En ese orden, la Asamblea Legislativa tiene la competencia de limitar derechos fundamentales por medio de la producción de una ley formal (art. 246 inc. 1º Cn.). Lo mismo puede hacer con el derecho reconocido en el art. 24 Cn., según el cual: "de manera excepcional podrá autorizarse judicialmente, de forma escrita y motivada la intervención temporal de cualquier tipo de telecomunicaciones, preservándose en todo caso el secreto de lo privado que no guarde relación con el proceso. La información proveniente de una intervención ilegal carecerá de valor".

Si el legislador se decanta por limitar ese derecho, entonces la limitación debe estar prevista en la ley y ha de constituir una medida que, en una sociedad democrática, sea idónea y necesaria para la seguridad del país, la prevención del delito y la protección de los derechos fundamentales. Lo anterior adquiere particular relevancia en el ámbito del proceso penal, debido a que las intervenciones telefónicas destacan como medios de investigación, justificados por las dificultades inherentes a la recolección de elementos de prueba [3], por lo que participan de la naturaleza y funciones propias de los actos de investigación y medios de prueba [4]. En estos supuestos, entre los que se encuentra el combate del crimen organizado, es admisible que el aludido derecho ceda ante exigencias públicas como la búsqueda de la verdad que no puede ser obtenida de otro modo más que con la afectación de la esfera privada del imputado.

Sobre ello, coinciden instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 11), los cuales admiten la limitación en la vida privada y familiar, el domicilio y la correspondencia del ciudadano conforme a la ley."

---

1 Ver sentencias de 24 de agosto de 2015 y de 23 de diciembre de 2010, inconstitucionalidades 22-2007 AC y 5-2001 AC, respectivamente, así como sentencia de 11 de febrero de 2002, hábeas corpus 145-2001.

2 Esto se reafirmó en la sentencia de inconstitucionalidad 22-2007, ya citada.

3 Sentencia del 19 de diciembre de 2012, inconstitucionalidad 6-2009.

4 Sentencia de inconstitucionalidad 22-2007, antedicha.

PRESUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL PARA AUTORIZAR LA LIMITACIÓN AL SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ÁMBITO DE LA PERSECUCIÓN DEL DELITO

"2. A. En este contexto, la LEIT establece los presupuestos, procedimientos, vigencia, alcance y tipo de control a los que deberá sujetarse la intervención de las telecomunicaciones en el ámbito del proceso penal salvadoreño. Para ello, según el art. 29 LEIT, se crea el CIT como un ente adscrito a la Fiscalía General de la República, encargado de ejecutar las intervenciones de las telecomunicaciones en los términos autorizados por el juez respectivo.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional [5], la autorización de la limitación al secreto de las telecomunicaciones en el ámbito de la persecución del delito que establece la LEIT, se sujeta al menos a cuatro presupuestos: (i) que la posibilidad de limitación de la intimidad personal y familiar se encuentre prevista en una ley formal (considerando IV de la LEIT); (ii) que tal injerencia sea necesaria con base en determinados fines constitucionales y se trate de casos que lo ameritan (art. 2 letra b LEIT); (iii) que sea autorizada por el órgano jurisdiccional mediante resolución motivada (art. 2 letra a LEIT); y (iv) que exista un control fiscal y judicial antes, durante y con posterioridad a la injerencia (arts. 7, 8, 15 y 16 LEIT).

De lo anterior se concluye que la excepción prevista en el art. 24 inc. 2º Cn. no concede una potestad absoluta de intervenir la esfera privada de un sujeto con el fin de descubrir el contenido de las comunicaciones, pues la aplicación del Derecho Penal y Procesal Penal, en sintonía con la Constitución, exige conciliar la necesidad de prevención del delito y seguridad del país con la protección de los derechos fundamentales. Esto implica que las normas jurídicas deben regular los presupuestos que habilitan el uso de la intervención y las garantías de protección de los derechos del sujeto investigado.

En relación con ello, este Tribunal advierte lo siguiente:

a. De acuerdo con el art. 30 LEIT, el CIT deberá funcionar ininterrumpidamente y contar con las plataformas tecnológicas necesarias para la realización de la intervención en los términos autorizados por resolución judicial. Dicha entidad tiene la obligación de resguardar, en debida forma y sin editar, las grabaciones de las telecomunicaciones intervenidas; y, cuando proceda su destrucción de conformidad con la ley, deberá informarlo al juez autorizante. También deberá llevar un registro inalterable de todas las intervenciones que realice, previa autorización judicial (art. 33 LEIT), y se sujetará a las auditorías anuales y a las que se hagan de oficio o por denuncia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

b. Según los arts. 6 al 9 LEIT, la intervención podrá ser solicitada únicamente por el Fiscal General de la República y autorizada por la autoridad judicial competente, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: (i) la existencia de un procedimiento de investigación de un hecho delictivo previsto en el

---

5 Sentencia de inconstitucionalidad 22-2007, ya citada.

art. 5 LEIT; y (ii) la concurrencia de indicios que permitan establecer de manera racional que la conducta delictiva se ha cometido, se está realizando o está por realizarse. Para ello, deberá detallarse las personas a las que se pretende limitar el derecho en cuestión, el servicio de telecomunicación objeto de la medida, su duración –un máximo de 3 meses, prorrogable 3 veces (art. 12 LEIT)– y el fiscal responsable de la investigación que se ha designado para esa intervención.

c. El control jurisdiccional de la intervención de las telecomunicaciones debe realizarse al inicio, durante y después de su ejecución. El art. 13 LEIT prescribe que la intervención será realizada por la Fiscalía General de la República con la colaboración de la Policía Nacional Civil, debiendo el fiscal designado informar al juez autorizante sobre el desarrollo de la investigación en los períodos establecidos en la resolución de autorización (art. 10 LEIT) y rendir un informe final al concluir la medida (art. 14 LEIT). El juez en cuestión tiene la obligación de verificar que el desarrollo de la intervención se realice con apego a la ley y las condiciones establecidas en la referida decisión a efecto de pronunciarse, si lo considera necesario, sobre el cese de la medida (art. 15 LEIT). La intervención de las telecomunicaciones podrá concluir de manera anticipada, a instancia del fiscal o del juez autorizante, cuando se haya logrado el objetivo para el cual había sido autorizada, cuando sea desproporcionada o cuando sea imposible de ejecutar. Dicha decisión será emitida por el aludido juez, para lo cual el fiscal deberá rendir un informe final para formalizar su terminación (art. 16 LEIT). Con la finalidad de garantizar la imparcialidad e independencia judicial, el art. 24 de la citada ley prescribe que el juez autorizante no deberá conocer de la instrucción en los procesos penales donde se incorpore la intervención de las telecomunicaciones de las que conoció.

d. Por otra parte, según los arts. 14 y 30 inc. 4º LEIT, se exige que se graben y conserven íntegramente y sin ediciones las telecomunicaciones de la persona investigada, mediante los mecanismos técnicos señalados en la autorización judicial, donde la copia y transcripción deberán contener, no solo los hechos y circunstancias de cargo, sino también los que sirvan para el descargo del imputado. Es más, la LEIT en su art. 18 es categórica al prohibir la edición del material obtenido durante las intervenciones de las telecomunicaciones, sin perjuicio de las copias autorizadas por la ley. Además, el art. 17 LEIT establece que todo el material obtenido debe ser numerado de forma progresiva y contener los datos necesarios para su identificación, siendo el CIT el responsable directo de su custodia, para lo cual deberá establecerse un registro inalterable de acceso a esos recursos (art. 33 LEIT). Al respecto, el art. 13 inc. 4º LEIT exige que se lleve un registro de la identidad y actuaciones del personal ajeno al CIT que colabore con la ejecución de la medida. Asimismo, se establece que los soportes en cuestión se sujetarán a las reglas generales de la cadena de custodia (art. 17 inc. final LEIT).

e. La citada ley prescribe que el procedimiento en cuestión tendrá reserva completa y que el contenido del material que no sea útil para la investigación se mantendrá en estricto secreto, siendo el juez autorizante, el fiscal, el personal del CIT y los miembros de la Policía Nacional Civil los responsables del cumplimien-

to de tal exigencia (art. 19 LEIT). Por ello, el juez deberá documentar el procedimiento y registrar las actuaciones correspondientes en un expediente codificado sujeto a reserva, que será resguardado en el CIT bajo la responsabilidad del titular de dicha entidad. De ahí que las actuaciones judiciales posteriores deban realizarse en la sede de ese centro (art. 20 LEIT).

f. La publicidad del material obtenido será posible hasta que el expediente de la intervención sea entregado al juez competente, excepto cuando se apliquen las reglas relativas a la reserva en el proceso penal. En todo caso, las partes deben mantener estricto secreto sobre el contenido del material que no interesa a la investigación (art. 25 LEIT). Según los arts. 26 y 27 LEIT, el defensor podrá tener acceso completo e irrestricto al expediente cuando este haya sido incorporado al proceso y podrá solicitar, con el acuerdo de la contraparte, la destrucción del material grabado que no interese a los efectos del proceso, siempre bajo el control del juez de la causa y la asistencia del CIT.

g. Finalmente, la citada ley prevé un régimen de infracciones y sanciones para aquellos que incumplan las disposiciones antes relacionadas (arts. 34 al 42 LEIT), sin olvidar que ciertas conductas podrían ser constitutivas de delitos según la legislación penal.

B. De lo antes expuesto se concluye que la LEIT no solo contiene los supuestos, requisitos y procedimientos que se observarán en la intervención de las telecomunicaciones, sino también un conjunto de normas orientadas a resguardar los derechos del investigado, entre las que pueden mencionarse: (i) el control judicial del aludido procedimiento en todas sus etapas, por la autoridad que ejerce la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado, bajo estándares de imparcialidad e independencia; (ii) el resguardo de la información mediante la tecnología adecuada y por un CIT que garantice su fidelidad y reserva; (iii) el registro de la información de manera codificada, sistematizada y sin ediciones, con el objeto de que a partir de ella pueda establecerse no solo prueba de cargo, sino también la de descargo; (iv) el acceso irrestricto al material obtenido cuando este se judicialice; y (v) la destrucción de la información privada que no esté relacionada con el caso o cuando sea innecesaria, lo cual debe autorizarlo el juez durante la ejecución de la intervención o cuando ya se haya iniciado el proceso penal respectivo, con el acuerdo de la parte contraria en este último caso.

En concordancia con lo expuesto, el TEDH ha precisado [6] que la ley de la materia debe contener garantías mínimas para evitar abusos en la ejecución de las medidas secretas de vigilancia. Entre estas medidas ha indicado las siguientes: la regulación expresa de las infracciones que puedan dar lugar a una orden de interceptación; la exigencia de individualización de las personas susceptibles de ser sometidas a vigilancia telefónica judicial; la fijación de un límite de duración de la ejecución de la medida; el procedimiento a seguir para el examen, uso y conservación de los datos obtenidos; las precauciones que se han de tomar al comunicar los datos a otras partes; y las circunstancias en las que se puede o se debe realizar el borrado o la destrucción de las cintas, siempre bajo control jurisdiccional.” [...]

---

6 Ver los casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Klass y otros, Valenzuela Contreras contra España y Lambert contra Francia, sentencias de 6 de septiembre de 1978, 30 de julio de 1998 y 5 de junio de 2015, en ese orden.

EL TEST DE PROPORCIONALIDAD TIENE CARÁCTER ESCALONADO

"B. a. Por otra parte, una lectura superficial de los motivos de inconstitucionalidad podría hacer incurrir en el yerro de creer que el actor cuestiona la medida legislativa por no ser necesaria y, al mismo tiempo, por no ser proporcional. Con mayor precisión, en la página 71 de la demanda expuso que "la destrucción del material, no es una medida que cumple con el principio de necesidad en un alto margen para el sujeto, ya que existen otras medidas que pueden aplicarse para asegurar la protección de su intimidad y vida privada". A renglón seguido expuso que "la proporcionalidad en sentido estricto del plazo otorgado para proceder a la medida de destrucción, se debe analizar en dos vías [...] tenemos que la persona con la medida de destrucción, transcurrido el plazo de seis meses, tiene asegurado sus derechos de intimidad, vida privada y secreto de las telecomunicaciones [...] pero no es la única medida que le asegura ese cumplimiento, existen otras limitantes al poder punitivo del Estado que protegen esos derechos (principio de reserva durante tod[a] la ejecución y judicialización)".

Como se dijo, la jurisprudencia de este Tribunal ha expuesto que el test de proporcionalidad tiene carácter escalonado. De modo que, si se constata que la medida legislativa no es idónea para alcanzar el fin constitucional, el Tribunal debe declarar su inconstitucionalidad sin tener que realizar el análisis de los siguientes subprincipios (necesidad y proporcionalidad en sentido estricto). De igual manera, si la medida prevé un fin legítimo e idóneo para su obtención, pero se determinare que existe una medida alternativa igual de idónea, pero que limita en menor grado el derecho fundamental o el principio de que se trate, se deberá declarar la inconstitucionalidad por incumplir con el subprincipio de necesidad. De esto se sigue que el test de proporcionalidad se desarrolla en tres etapas sucesivas y cuya prosecución hacia la siguiente depende, por tanto, del agotamiento de la etapa anterior.

Sin embargo, ese aparente yerro debe ser aclarado antes de realizar el análisis, pues debe tenerse precisión sobre cuál es el cuestionamiento que se ha hecho. Sobre este punto, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, si bien un alegato como el de la eventualidad podría dar lugar a una prevención o a la declaratoria de sobreseimiento, lo cierto es que, cuando otra argumentación existente en la demanda sirve para determinar el sentido que sin un margen razonable de dudas quiso dársele al objeto o al parámetro de control [7], es posible hacer un análisis integral del planteamiento. En este sentido, en el presente caso, se observa que los argumentos aducidos por el ciudadano Meléndez Ruíz están encaminados a cuestionar la desproporcionalidad de la destrucción de la información obtenida, por ser innecesaria, y será tal cuestionamiento el que este Tribunal procederá a examinar."

---

7 Véase las resoluciones de 17 de febrero de 2020 y inconstitucionalidades 10-2020 y 5-2021, respectivamente.

DESTRUCCIÓN DE LAS GRABACIONES Y TRANSCRIPCIONES

"b. (i) En lo que concierne al fin constitucional que persigue el legislador con la medida de destrucción de las grabaciones y transcripciones si en el plazo de 6 meses no se presentase el requerimiento fiscal, a partir del texto de la disposición y del considerando I de la LEIT se puede determinar que es la protección de los derechos fundamentales a la intimidad personal y secreto de las telecomunicaciones. Estos derechos están reconocidos y gozan de la protección reforzada que la Constitución prevé (art. 2 inc. 2º y 24 Cn.) De ahí que se trate de un fin legítimo que no está prohibido por la Constitución.

Sobre lo dicho en último término, es preciso recordar que la atribución constitucional de la Asamblea Legislativa de poder restringir o limitar derechos fundamentales y de tomar las decisiones más importantes de la vida política para el país implica necesariamente la atribución del poder de proponerse legítimamente cualquier fin, siempre y cuando no esté prohibido por la Constitución. De ahí que la legitimidad de los fines que fundamentan la intervención de los derechos fundamentales no debe ser entendida en sentido positivo, es decir, como si el legislador solo pudiera perseguir aquellos fines impuestos por la Constitución, sino más bien en sentido negativo: cualquier fin legislativo es legítimo siempre que no esté prohibido por la Constitución. Esta forma de entender los fines legítimos es producto de la idea aceptada por esta Sala sobre los márgenes de acción estructural que posee la Asamblea Legislativa en la configuración de los derechos fundamentales [8].

(ii) Una vez reconocida la existencia de un fin constitucional legítimo en la medida legislativa, corresponde analizar si esta es idónea para su realización. Para tal examen, este Tribunal deberá determinar si la medida de destrucción de las grabaciones y transcripciones obtenidas a través de la intervención de las telecomunicaciones, es adecuada para la protección de los derechos a la intimidad y el secreto de las telecomunicaciones. En este punto es pertinente señalar que el juicio de idoneidad que realizan los Tribunales constitucionales debe ser respetuoso con la libertad de configuración del legislador. Por ello, esta Sala puede llegar a la conclusión de que la medida impugnada no es idónea si ella no contribuye de ningún modo a la obtención de su fin. La medida legislativa contenida en el art. 23 LEIT, considerada en abstracto, puede contribuir a la protección de los derechos fundamentales mencionados, ya que, por una parte, cuando se ordena la destrucción del material intervenido, cualquier información con respecto a la vida privada y personal del investigado y/o su familia sale de la esfera de dominio del Estado; y, por otra parte, garantiza que el emisor y receptor puedan comunicar libremente su pensamiento sin que tal comunicación pueda ser limitada a perpetuidad. Como antes se expuso, solamente se requiere que la medida impugnada fomente de alguna manera el fin que persigue para estimar satisfecho el juicio de idoneidad, por lo que en el presente caso se ha cumplido con este requisito. Y como esto es así, se examinará si la medida es necesaria.

---

[8] Sobre los márgenes de acción reconocidos en favor de la Asamblea Legislativa, véase la sentencia de 7 de octubre de 2011, inconstitucionalidad 20-2006.

(iii) Según se dijo antes, y para el caso en concreto, en el juicio de necesidad se examinará si existe por lo menos una medida distinta a la de destruir las grabaciones y transcripciones obtenidas mediante la intervención de las telecomunicaciones, que sea igualmente idónea para alcanzar el fin constitucional que se persigue, pero menos lesiva de los derechos fundamentales de protección jurisdiccional y seguridad jurídica de las víctimas de delitos (art. 2 y 11 Cn) y al principio de eficacia en la investigación penal y promoción de la acción penal a cargo de la Fiscalía General de la República (art. 193 ords. 3º y 4º Cn.). De igual manera que en el juicio de idoneidad, el reconocimiento de un margen de apreciación a la Asamblea Legislativa supone que los Tribunales constitucionales deben autorrestringirse en esta parte del test. Por ello, el juicio de necesidad no podría concluir en la inconstitucionalidad de la medida si existiera un medio menos lesivo que el impugnado, pero que ostentara una menor idoneidad para lograr el fin propuesto.

En el caso sometido a conocimiento de esta Sala, el demandante propone varias medidas alternas. En primer lugar, sostuvo que existía la posibilidad de establecer un plazo mayor a la destrucción y no limitarlo a 6 meses. No obstante, el incremento del plazo para la destrucción de la información de ninguna manera es igualmente idónea para la protección de los derechos fundamentales a la intimidad y seguridad de las telecomunicaciones, ya que, si bien potencia los derechos a la protección jurisdiccional y seguridad jurídica de las víctimas de los delitos y el principio de eficacia de la investigación, lo cierto es que la información relacionada con la vida privada del investigado y la comunicación del libre pensamiento se mantendría a disposición del CIT."

PROHIBICIÓN DE EDICIÓN DEL MATERIAL

"En segundo lugar, la prohibición de edición del material, aunque promociona la protección jurisdiccional y seguridad jurídica de las víctimas de los delitos y el principio de eficacia de la investigación –debido a que pretende evitar la alteración de la información que fue grabada y transcrita–, los derechos fundamentales a la intimidad y secreto de las telecomunicaciones no se ven favorecidos de ninguna manera, porque la información que una persona trasmite a otra persona se mantiene igualmente a disposición del CIT, a diferencia de la medida prevista en el art. 23 LEIT, que imposibilita tal disposición."

RESERVA DE LA INFORMACIÓN

"En tercer lugar, la reserva de la información no representa una medida alterna que goce de igual idoneidad que la prevista en el art. 23 LEIT, pues la información tiene anticipadamente el carácter de reservada (arts. 2 letra c y 19 LEIT), con independencia de que se ordene o no la destrucción de las grabaciones y transcripciones."

DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL AJENO A LA INVESTIGACIÓN

"Y, en cuarto lugar, la destrucción del material ajeno a la investigación tampoco es una medida alterna que tenga igual idoneidad a la medida enjuiciada, ya que en el contexto de una investigación penal, es ineficaz. Como se dijo antes, la aplicación del subprincipio de necesidad presupone que se haya corroborado la idoneidad de la medida legislativa cuya proporcionalidad se controla y que se haya indentificado su fin constitucional, de modo que la medida alterna debe ser igualmente idónea que la medida enjuiciada. Pero, hay que tener presente (como se apuntó previamente) que la idoneidad de una medida que restringe derechos fundamentales se determina indagando si en un determinado contexto es la adecuada para la obtención del fin constitucional que se persigue. O dicho en sentido negativo: una medida legislativa que interviene un derecho fundamental no es adecuada cuando en un determinado contexto no contribuye de ningún modo a la obtención de su fin constitucional. Y uno de los criterios para saber si una medida es adecuada es el de la eficacia, esto es, un medio puede ser más o menos eficaz para fomentar su fin.

En relación con un proceso penal, la información ajena a la investigación que se obtiene mediante la intervención a las telecomunicaciones es material probatorio impertinente, porque no guarda ninguna relación con la investigación que se está llevando a cabo. Que el demandante proponga como una medida alterna la destrucción de la información es un sinsentido, porque, aunque la destrucción de esta información fomenta la protección de los derechos a la intimidad y al secreto de las telecomunicaciones, en realidad lo hace precisamente en un contexto diferente al que motiva la intervención, que es el de la investigación de conductas delictuales. Por esta razón es que el art. 2 letra c LEIT cataloga como "estrictamente confidencial" la información privada que no guarde ningún tipo de relación con la investigación que se está realizando. La destrucción de este material, que es confidencial, es simplemente ineficaz para la investigación. Y si esta información privada será ineficaz para el posible proceso penal, entonces no puede considerarse como una medida adecuada para la objeción del fin que persigue la destrucción de la información obtenida por la intervención que sí esté relacionada con la investigación.

A partir de lo anterior, puede concluirse que ninguna de las medidas alternas propuestas por el demandante poseen igual idoneidad para alcanzar el fin constitucional que se persigue, que es el de la protección de los derechos fundamentales a la intimidad y seguridad en las telecomunicaciones en el contexto de la investigación penal; y que sean menos lesivas de los derechos fundamentales a la protección jurisdiccional y seguridad jurídica de las víctimas de los delitos (arts. 2 y 11 Cn.) y el principio de eficacia en la investigación penal y promoción de la acción penal a cargo de la Fiscalía General de la República (art. 193 ords. 3º y 4º Cn.). En consecuencia, el art. 23 LEIT no contraviene el principio de proporcionalidad, específicamente al subprincipio de necesidad (art. 246 Cn.), y por esa razón se desestimará este motivo de inconstitucionalidad." [...]

INTERPRETACIÓN JURÍDICA DE UNA DISPOSICIÓN LEGAL O CONSTITUCIONAL

"A. a. La interpretación jurídica de una disposición legal o constitucional consiste en la atribución de un significado elegido entre varios posibles, con base en razones o argumentos que justifican esa forma de entender el texto de la disposición como la alternativa más adecuada para resolver una duda, pregunta o problema interpretativo, que es el que origina la necesidad de interpretación. La idea de atribución de significado implica que el texto –es decir, las palabras utilizadas para formular las disposiciones– carece de un significado normativo propio o determinante. En otras palabras, dicho significado no puede ser descubierto, encontrado o hallado por el intérprete con una simple lectura, sino que este debe construirlo en función del problema a resolver. Entonces, la norma (el sentido o el significado normativo) de una disposición es el resultado (como comprensión o forma de entenderlo) que se le atribuye después de realizar la actividad interpretativa, ya que la disposición por sí sola no basta para determinar un significado normativo [9]Naturalmente, esto no quiere decir que interpretar una ley equivalga a reformarla, es decir, a variar el texto, el enunciado lingüístico o las palabras. El texto es el material o presupuesto sobre el que el legislador (en el caso que sea interpretación auténtica) o el juez (cuando la interpretación sea legal o constitucional) parten en el proceso interpretativo, pero también representa el límite que permite determinar cuándo la interpretación no es más que una manipulación del contenido de las disposiciones y que representa, en el fondo, una reforma encubierta.

b. La interpretación parcial o incompleta de una disposición constitucional puede provocar el irrespeto o incumplimiento de alguna de las normas jurídicas que ella contiene, aunque se obedezca o atienda lo ordenado en otra parte del contenido de la misma disposición o de otra distinta, siempre de rango constitucional, obteniendo de ese modo una cobertura aparente del precepto aplicable. Esto es lo que se denomina fraude a la Constitución. Como se dijo en la resolución de 21 de marzo de 2013, inconstitucionalidad 49-2011, el incumplimiento, la infracción o vulneración de una norma jurídica puede ser directo o indirecto. En el primer caso se realiza una conducta que contradice el contenido imperativo (una obligación o una prohibición) de la norma, sin que la conducta infractora pueda considerarse ordenada o permitida por otra norma distinta."

FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN

"En el segundo caso, el incumplimiento de una norma se genera precisamente por medio del respeto u observancia de otra norma distinta que permite, en apariencia o en sí misma, la conducta cuyo resultado es incompatible con la norma vulnerada. El fraude a la Constitución implica al menos dos normas jurí-

[9] Sentencias de sentencias de 29 de abril de 2011 y de 14 de octubre de 2013, inconstitucionalidades 11-2005 y 77-2013, respectivamente.

dicas –aunque puede tratarse de una sola disposición–: una que al parecer se respeta o se cumple con la conducta realizada (llamada norma de cobertura) y otra (llamada norma defraudada) cuyo contenido normativo es incompatible con el resultado alcanzado mediante dicha conducta.

B. Establecido lo anterior, se procederá a examinar los argumentos suministrados por el ciudadano Meléndez Ruíz, para determinar si la Asamblea Legislativa utilizó la figura de la interpretación auténtica para reformar de manera encubierta el texto de la ley, lo que constituiría un fraude a la Constitución.

a. Antes, se debe tener en cuenta que la Constitución reconoce a la Asamblea Legislativa la competencia para decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes. En el ejercicio de esas competencias la Asamblea Legislativa debe respetar el principio del paralelismo de las formas, según el cual una norma jurídica tiene que ser emitida por un órgano siguiendo un determinado procedimiento y únicamente puede ser modificada, derogada o interpretada auténticamente por ese mismo órgano, mediante el mismo procedimiento [10]. De ahí que, si bien el art. 142 Cn. prevé que la interpretación auténtica y el proceso de reforma de la ley seguirán los mismos trámites para su formación, la interpretación auténtica y reforma de ley tienen finalidades distintas entre sí.

La interpretación auténtica, como atribución reconocida a la Asamblea Legislativa, tiene el mismo carácter obligatorio que le corresponde a la disposición interpretada, pues se entiende incorporada al texto y tiene lugar cuando existen dudas sobre el significado del texto normativo. La reforma de la ley no es más que la modificación del texto de una o varias disposiciones legales con el fin de adaptar el ordenamiento jurídico a los cambios que la sociedad experimenta día con día. La diferencia radica en que "[la] disposición que contiene una interpretación auténtica, en la medida en que s[o]lo esclarece el sentido de otra y no confiere nuevos derechos ni establece nuevas obligaciones, no puede considerarse aisladamente, sino que se integra con la disposición interpretada para esclarecerla, pues, si pudiera extraerse una norma no contenida en la disposición interpretada ya no se podría hablar de ?interpretación auténtica", sino que se estaría ante una reforma encubierta o emisión de una nueva norma" [11]."

EL FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN SE COMETE PORQUE SE RESPETA FORMALMENTE LA COMPETENCIA PARA INTERPRETAR AUTÉNTICAMENTE EL ART. 23 LEIT, PERO CON DICHA "INTERPRETACIÓN" SE INCUMPLE SUSTANCIAL O MATERIALMENTE EL PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN DENOMINADA "INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA", QUE ES LA DE ACLARAR UN VOCABLO O TEXTO DUDOSO, NO EL DE MODIFICARLO

"b. En este caso, la Asamblea Legislativa ha emitido el D. L. nº 861/2017 cuyo art. 1 contiene un supuesto de hecho, según el cual, si transcurren 6 meses sin que la Fiscalía General de la República presente el requerimiento, se deberá destruir inmediatamente todas las grabaciones y transcripciones que se

10 Sentencia de 10 de julio de 2018, inconstitucionalidad 64-2015.

11 Véase la Sentencia de 3 de julio de 2008, inconstitucionalidad 69-2006.

hubieren realizado. Esto genera dos diferencias relevantes con respecto al texto del art. 23 LEIT. La primera es que al introducir la palabra "inmediatamente", el agente fiscal acreditado no tiene que informar al juez del caso sobre el resultado del procedimiento de intervención, sino que deberá limitarse a destruir el material probatorio recolectado mediante la intervención de las telecomunicaciones; y la segunda es que suprime el control, porque no habrá una resolución mediante la cual un juez ordene esa destrucción de la información que consta en las grabaciones y transcripciones. Esto quiere decir que, a partir de la interpretación auténtica, la Asamblea Legislativa no ha aclarado un vocablo dudoso u oscuro, sino más bien ha incorporado una locución o palabra que altera sustancialmente el texto de la disposición interpretada.

Esta conclusión se robustece si se advierte que, según los considerandos V y VI del D. L. nº 861/2017, el propósito de la interpretación auténtica es garantizar la destrucción de la información obtenida mediante el procedimiento de intervención de las telecomunicaciones, debido a que, para la Asamblea Legislativa, "en la práctica los funcionarios que deben practicar este acto de oficio eluden su responsabilidad, violentándose desproporcionalmente los derechos de seguridad jurídica y a la intimidad del afectado, ya que éste al nunca saber que está siendo objeto de una medida de intervención, no puede exigir el cumplimiento de las garantías procesales pertinentes". Ese modo de operar, el de apelar a la interpretación auténtica de una disposición legal, pero en el fondo alterar de manera encubierta su texto, defrauda la norma fundamental que impide que mediante interpretación auténtica se realicen reformas a la ley. El fraude a la Constitución se comete porque se respeta formalmente la competencia para interpretar auténticamente el art. 23 LEIT, pero con dicha "interpretación" se incumple sustancial o materialmente el propósito de la institución denominada "interpretación auténtica", que es la de aclarar un vocablo o texto dudoso, no el de modificarlo.

Por ello, el D. L. nº 861/2017 infringe los arts. 142 y 131 ord. 131 ord. 5 Cn. en relación con el art. 24 inc. final Cn., por existir fraude a la Constitución. De manera que deberá declararse su inconstitucionalidad.

4. No obstante lo anterior, esta Sala ha señalado la importancia del combate a la criminalidad, y en especial a la organizada, a la corrupción y al terrorismo, como fines esenciales que debe perseguir el sistema penal [12]. Por ende, la interpretación de disposiciones legales que permiten una eficacia razonable en la investigación penal, media vez puedan ser compatibilizadas con el respeto de los derechos fundamentales, deben ser potenciadas en orden a la protección y vigencia de las normas elementales de convivencia y de la paz social. Esto implica que puede efectuarse una interpretación conforme del texto original del art. 23 LEIT y que sea respetada por los diferentes componentes del sistema penal.

Según el texto original del art. 23 LEIT la Fiscalía General de la República, una vez finalizada la intervención de las telecomunicaciones, deberá presentar el requerimiento dentro del plazo de 6 meses para que las grabaciones y las

[12] Véanse las Sentencias de 12 de abril de 2007 y 28 de mayo de 2018, inconstitucionalidades 28-2006 y 146-2014.

transcripciones recabadas en dicha intervención puedan ser ofrecidas, admitidas y producidas como prueba lícita en el proceso penal. Una lectura fraccionada y sesgada de su texto daría a entender que dicho término es perentorio e improrrogable, de modo que se deberá proceder a la destrucción de la información recabada si no se iniciare la acción penal en dicho plazo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que existen dos condiciones necesarias para que la destrucción sea la consecuencia de la falta de presentación del requerimiento fiscal: (i) el informe previo del agente fiscal asignado al caso o del Fiscal General de la República, sin el cual no puede ordenarse la destrucción; y (ii) la orden del juez que autorizó la intervención de las telecomunicaciones.

En cuanto al informe fiscal, se debe tener en cuenta que las intervenciones de las telecomunicaciones se vuelve una herramienta de suma utilidad para la investigación de delitos cometidos, como se estableció en líneas anteriores, en el contexto del crimen organizado y de otros delitos de realización compleja o conexa [13], ya que dicha investigación entraña dificultades probatorias mayores en comparación con los delitos convencionales. En este sentido, si de la práctica de este medio de prueba aparecen indicios de otros hechos delictivos, el informe fiscal deberá contener esa información y, además, exponer cuáles son los avances de tal investigación y el daño social concreto o potencial que tal tipo de criminalidad comporta para la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la tranquilidad social.

Por ello, para ordenar la destrucción de las grabaciones y transcripciones obtenidas en la intervención, el juez no solo deberá tomar en cuenta que transcurrió el plazo de seis meses al que hace referencia el art. 23 LEIT. El transcurso del tiempo sin promover la acción penal es una condición necesaria pero no suficiente. Además, del criterio temporal, el juez autorizante deberá incorporar en su análisis otros aspectos, por ejemplo y sin ánimo de exhaustividad: (i) que la intervención de las telecomunicaciones arrojen indicios razonables sobre la existencia de otros hechos delictivos de los enumerados en el art. 5 LEIT; (ii) que dicha intervención sea un medio idóneo para determinar la autoría o participación en tales hechos; (iii) las dificultades probatorias que, en principio, podrían representar los hechos delictivos cuyo descubrimiento derive de la intervención de las comunicaciones; y (iv) que la limitación a los derechos fundamentales a la intimidad personal, a la seguridad jurídica y al secreto de las telecomunicaciones de las personas intervenidas sea temporal y no por tiempo indefinido. Es así, que dentro del obligado análisis judicial, deben relacionarse todos o algunos de estos aspectos conforme al caso en análisis.

En resumen, la orden judicial de destrucción de la información obtenida en la práctica del referido medio de investigación, de no presentarse el requerimien-

---

[13] En la Sentencia de inconstitucionalidad 6-2009, ya citada, se señalan de manera ejemplificativa los delitos contra el medio ambiente, fraudes fiscales, monopolio, oligopolio, competencia desleal, defraudaciones bancarias, fraudes al consumidor y delitos que afectan a la Administración Pública, en particular, la corrupción pública.

to fiscal en el plazo previsto en el art. 23 LEIT, sólo será viable cuando a partir de la intervención de las telecomunicaciones no se determine la comisión de otro u otros hechos delictivos de los previstos en el art. 5 de la mencionada ley; cuando no se hubiese podido individualizar al presunto responsable de su comisión o no existan posibilidades de hacerlo, e incluso, estando individualizado los resultados obtenidos no permitan su incriminación.

Por las razones expuestas, se determina que la Asamblea Legislativa incurrió en fraude a la Constitución en la aprobación del D.L. nº 861/2017, y esto conllevó la infracción de los arts. 142 y 131 ord. 5º Cn., referidos al art. 24 inc. final Cn.

5. En lo que respecta a la contradicción entre el D. L. nº 861/2017 y el principio de proporcionalidad (art. 246 Cn.), se debe tener en cuenta que para el examen de los vicios de contenido es necesario que el objeto de control se encuentre vigente, es decir, que pertenezca al sistema de fuentes del Derecho. Esto se debe a que solo la norma que pertenece al sistema jurídico tiene la potencialidad para ser aplicada y por lo tanto ser invalidada [14]. Pero, en el presente caso, el D. L. nº 861/2017 es inconstitucional por infringir los arts. 142 y 131 ord. 5º (en relación con el art. 24 inc. final), todos de la Constitución, como se dijo líneas arriba. Por esa razón, es inoficioso analizar este motivo de inconstitucionalidad y se procederá a emitir una decisión de sobreseimiento con respecto a este punto de la pretensión.

6. Asimismo, el actor alegó que el D. L. nº 861/2017 contraviene el art. 21 en relación con el art. 2 ambos Cn., debido a que la reforma legal realizada bajo la figura de la interpretación auténtica hace posible la aplicación retroactiva de dicha interpretación, es decir, a procesos sobre los cuales existe una sentencia definitiva dictada con base en elementos probatorios obtenidos en una intervención telefónica o incluso a procesos que se están tramitando. Sobre este punto, el argumento empleado para sobreseer el motivo de inconstitucionalidad por la presunta infracción al art. 246 Cn., también es aplicable a este caso. Dado que el D. L. nº 861/2017 es inconstitucional por la infracción a los arts. 142 y 131 ord. 5º (en relación con el art. 24 inc. final), todos de la Constitución, este Tribunal considera inoficioso emitir un pronunciamiento sobre la posible contradicción entre dicho decreto y el art. 21 Cn., y por eso se emitirá una decisión de sobreseimiento en este punto de la pretensión."

ESTA SALA DETERMINA QUE EXISTE LA POSIBILIDAD DE INTERPONER RECURSO DE REVOCATORIA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE ORDENA LA DESTRUCCIÓN DE LAS GRABACIONES Y SUS TRANSCRIPCIONES

"B. a. Como se dijo antes, el demandante también ha cuestionado la omisión total en que la Asamblea Legislativa ha incurrido por no prever un recurso que permita al tribunal de segunda instancia conocer la decisión del juez de primera instancia de destruir las grabaciones y sus transcripciones. Sobre este punto, se recuerda que, según la jurisprudencia de este Tribunal, cuando se alega la

[14] Véase la sentencia de 18 de octubre de 2017, inconstitucionalidad 66-2017.

omisión total en un proceso de inconstitucionalidad el actor está obligado a identificar los elementos de control indispensables, que son: la disposición constitucional que contiene el mandato dirigido a una autoridad, el mandato expreso o implícito que dicha disposición constitucional establece, la omisión en que supuestamente habría incurrido la autoridad y los motivos de inconstitucionalidad con base en los cuales justifican su petición [15]. El demandante expuso que de la lectura del art. 23 LEIT "se denota que [e]ste no franquea la posibilidad de impugnar aquellas resoluciones que ordenen la destrucción del material obtenido, [la ley especial] debió franquear la posibilidad de que un juez superior, control[e] las resoluciones emitidas [por] un juez de primera instancia; no s[o]lo en lo referente a la solicitud inicial [o] la negativa de prórroga del plazo [...] sino en contra de aquellas que provoquen resultados definitivos, como lo es la orden de destrucción de oficio del material obtenido de una intervención telefónica […] [16]"

Esto sugeriría que el cuestionamiento del actor puede resumirse en dos puntos: (i) la inexistencia de recurso con el que se pueda atacar la decisión del juez de ordenar la destrucción del material grabado y transcrito; y (ii) que ese recurso que el legislador omitió establecer debería ser el de apelación. Sobre el primer punto, es preciso indicar que el Código Procesal Penal es el estatuto jurídico que se erige como instrumento normativo auxiliar supletorio de la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones (art. 50 LEIT). La razón es elemental: la intervención de las comunicaciones implica una limitación a derechos fundamentales que se justifica constitucionalmente en la utilidad que representa para la investigación y recolección de elementos de prueba en supuestos de delincuencia grave, organizada y trasnacional y que luego serán utilizados en el proceso penal para determinar la autoría y/o participación de las personas involucradas en la comisión de los delitos (considerando II de la LEIT).

De modo que será en dicho contexto donde el juez y los operadores del sistema deberán realizar la heterointegración del ordenamiento jurídico e identificar el recurso pertinente y adecuado a los fines que persigue la LEIT. Debe recordarse que esta Sala ha expuesto que la norma debe ser estudiada en su racionalidad y en sus relaciones con las demás disposiciones, conjuntamente con las cuales configuran un sistema orgánico. Asimismo, ha dicho que la interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que la informan, pues la inconsecuencia o la falta de previsión jamás debe suponerse en el legislador [17].

Así, se advierte que el art. 461 CPP prevé la posibilidad de interponer recurso de revocatoria contra las decisiones que resuelven un incidente o cuestión interlocutoria. En cuanto a los primeros, son procedimientos que se plantean dentro de un juicio y que tienen como finalidad resolver cuestiones adjetivas o procesales, aunque relacionadas con el asunto principal. Es decir, se trata de cuestiones relacionadas con las excepciones en general, recusaciones, la decisión judicial que admite o rechaza una prueba, entre otros aspectos. Dado que

---

15 Véase la resolución de admisión de 11 de enero de 2016, inconstitucionalidad 6-2016.

16 Esto se puede observar en las páginas 79 y 80 de la demanda.

17 Véase la sentencia de 13 de noviembre de 2001, inconstitucionalidad 41-2000.

la resolución judicial que ordena la destrucción de las grabaciones y transcripción de la intervención telefónica realizada al investigado implica la imposibilidad de utilizar la prueba en el ulterior proceso penal que se iniciará, dicha decisión debería considerarse como un incidente que acaece durante la fase de investigación. Por ello, en aplicación supletoria de la citada disposición (naturalmente, cambiando lo que deba cambiar), la Fiscalía General de la República tiene la posibilidad de interponer recurso de revocatoria para que el mismo juez que dictó la resolución examine los argumentos propuestos por el recurrente y confirme o revoque su decisión.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la existencia del "derecho a recurrir" no es equivalente al "derecho a una segunda instancia", como erróneamente lo expuso el actor Meléndez Ruíz. Más arriba se recordó que la Asamblea Legislativa, en uso de su libertad de configuración, decidirá si una decisión puede atacarse mediante el recurso de apelación y así habilitar el conocimiento del tribunal superior en grado. En sintonía con esta idea, resulta ilustrativa la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual los Estados suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) –El Salvador es uno de ellos (art. 144 Cn.)– únicamente están obligados a reconocer el derecho a recurrir ante un juez o tribunal superior cuando se trate de una sentencia condenatoria que afecte al procesado, con la finalidad que dicha decisión judicial sea revisada de manera íntegra [18].

En resumen, a través del mecanismo de heterointegración de la norma esta Sala determina que existe la posibilidad de interponer recurso de revocatoria contra la resolución del juez que ordena la destrucción de las grabaciones y sus transcripciones (art. 23 LEIT). En consecuencia, no existe una omisión de prever un recurso en contra de la resolución judicial que ordene la destrucción de la información obtenida por la intervención de las telecomunicaciones.

X. Aclaración.

1. La resolución judicial que ordena la destrucción de las grabaciones y transcripción de la intervención telefónica realizada al investigado debe considerarse como un incidente que se produce durante la fase de investigación, pues implica la imposibilidad de utilizar prueba en el ulterior proceso penal que se iniciará. Por ello, en aplicación supletoria del art. 461 del Código Procesal Penal –aplicación permitida por el art. 50 LEIT–, la Fiscalía General de la República tiene la posibilidad de interponer recurso de revocatoria para que el mismo juez que dictó la resolución examine los argumentos propuestos por el recurrente y

---

[18] Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 158; Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 89; Corte IDH. Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 noviembre de 2012. Serie C No. 255, párrs. 90 y 91; Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013 Serie C No. 260, párr. 246; Corte IDH Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276, párr. 87, por citar algunas.

confirme o revoque su decisión. Es preciso aclarar que este análisis no pretende sustituir las valoraciones legislativas que sobre el asunto pudiera hacer la Asamblea Legislativa. Por ello, debe entenderse que la aplicación supletoria sobre el recurso de revocatoria se mantendrá vigente hasta que el Órgano Legislativo decida, si así lo estima conveniente, modificarla para prever otro tipo de recurso.

2. Se ha constatado que el D. L. nº 861/2017 contraviene los arts. 142 y 131 ord. 5º Cn. (en relación con el art. 24 inc. final Cn.), por lo que deberá entenderse expulsado del ordenamiento jurídico. Por ello, la interpretación auténtica contenida en dicho decreto también tiene la misma consecuencia y por ello no se entenderá como incorporada al art. 23 LEIT, el cual quedará vigente en su versión original."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 5-2018, fecha de la resolución: 16/07/2021

DERECHO AL SUFRAGIO PASIVO

LÍMITES

"2. A. En consecuencia, el caso exigía un análisis acerca de la inelegibilidad que prevé el art. 127 ord. 1º Cn. Una inelegibilidad es un impedimento jurídico para el ejercicio del derecho fundamental al sufragio pasivo, es decir, el derecho a optar a un cargo público[1]. Estos requisitos o condiciones negativas están dirigidas a la conservación de fines, bienes o intereses constitucionalmente relevantes, tales como la libertad del sufragio activo –que los electores decidan sin presiones o coacciones indebidas–, las competencias electorales equitativas –con igualdad de oportunidades o sin ventajas discriminatorias– y la integridad de la función pública –al evitar los conflictos de intereses–.

Estos límites al ejercicio del sufragio pasivo están justificados por la misma Constitución[2], que establece que "[l]os derechos políticos del ciudadano son: [...] Optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determinan esta Constitución y las leyes secundarias" (art. 72 nº 3 Cn. Las itálicas son de este tribunal). En consecuencia, quien pretenda ejercer este derecho debe soportar determinadas cargas y deberes, como por ejemplo, las limitaciones temporales para el desarrollo de su campaña electoral (art. 81 Cn.), las excepciones subjetivas concernientes a la posición o cualidades de quien ejerce el derecho (art. 82 inc. 1º Cn.) y el cumplimiento de los requisitos constitucionalmente fijados para poder ostentar el cargo al que se aspira (arts. 126 y 151 Cn.)."

---

1 Sentencia de 25 de junio de 2014, inconstitucionalidad 163-2013.

2 En la doctrina se reconoce que no existe un enfoque unificado en las constituciones para poder restringir derechos fundamentales. Algunas, por ejemplo, no prevén restricción alguna para determinados derechos ni fijan los mecanismos que se han de utilizar para restringirlos –este es el caso de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos–. Otras, por su parte, establecen "derechos absolutos" y prevén una cláusula restrictiva general aplicable a dichos derechos –ej., el caso de Canadá, Sudáfrica e Israel–. Algunas constituciones optan por cláusulas restrictivas particulares para cada derecho. Finalmente, ciertas constituciones prevén cláusulas restrictivas generales para todos los derechos y, además, particulares para algunos de ellos en especial. Nuestra Constitución encaja en las del último tipo, pues el art. 246 inc. 1º Cn. estatuye una cláusula general de restricción mediante leyes formales –que, en todo caso, deben ser proporcionales–, a la vez que prevé restricciones específicas aplicables a distintos derechos –ej., los arts. 5 inc. 2º, 6 inc. 1º y 7 inc. final Cn.–. El sufragio pasivo posee, entre otros, los que se detallan en el cuerpo principal de esta resolución. Sobre lo dicho, ver: Barak, Aharon, Proporcionalidad. Los derechos fundamentales y sus restricciones, 1ª ed., traducción de Gonzalo Villa, Palestra, 2017, pp. 161-162.

SEPARACIÓN ORGÁNICA DE FUNCIONES

"B. El art. 127 ord. 1º Cn. establece que "[n]o podrán ser candidatos a Diputados: El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, el Presidente y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios de los organismos electorales, los militares de alta, y en general, los funcionarios que ejerzan jurisdicción". La inelegibilidad por haber sido ministro o viceministro de Estado es una incompatibilidad que afecta a quienes pretendan aspirar a una candidatura y que hayan desempeñado los cargos indicados dentro de los tres meses anteriores a la elección cuando se trate de elecciones de diputados (art. 127 inc. 2º Cn.), y dentro del último año del período presidencial inmediato anterior, cuando se trate de elecciones presidenciales (art. 152 ord. 4º Cn.).

Esta disposición tiene el fin de favorecer la separación orgánica de funciones (art. 86 inc. 1º Cn.), que implica que el poder soberano del Estado, siendo uno solo, consiste en varias funciones que deben siempre atribuirse a diferentes órganos, a fin de proscribir todo abuso del poder[3]. Esto se infiere del Informe Único de la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución, que es un documento fidedigno para su interpretación (art. 268 Cn.). En él se afirmó que "[el art. 129 Cn.] es [...] una de las varias disposiciones introducidas en el proyecto que contribuyen a disminuir la desmesurada influencia presidencialista en la actividad gubernamental". Pues bien, la expresión "varias disposiciones" indica que hay otros artículos de la Constitución que pretenden evitar dicha influencia. Uno de ellos es el art. 127 ord. 1º Cn."

INHABILIDADES PARA SER CANDIDATO A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

"Lo mismo se puede predicar de las inhabilidades para ser candidato a Presidente de la República. En el mismo Informe Único se estableció que "es en [la etapa de inscripción de la candidatura a Presidente de la República] en donde corresponderá al organismo correspondiente descalificar a las personas sobre las que se de alguna de las circunstancias de incompatibilidad o inhabilidad". Con estas inelegibilidades –las relativas a haber desempeñado el cargo de ministro o viceministro– se busca garantizar la separación orgánica de funciones –en el caso de quien aspira a ser candidato a diputado– y la competencia electoral equitativa y la integridad de la función pública –en el caso de quien aspira a la presidencia–."

ANÁLISIS DE LA FIGURA DEL PERMISO SIN GOCE DE SUELDO

"C. La cuestión controversial que surge es si un permiso sin goce de sueldo –o cualquier otro nombre que se le asigne a la acción de apartarse del cargo temporalmente sin recibir remuneración alguna– habilita a un funcionario para poder ser candidato a un cargo cuando la función pública por la que pide permiso es una inelegibilidad para ese cargo específico. En términos generales, una permisión es una habilitación jurídica al sujeto destinatario de la norma para hacer o no hacer algo bajo determinados supuestos[4]. Un permiso –licencia– sin goce de sueldo es un acto mediante el cual se autoriza a una persona para que se aparte temporalmente del cargo que ostenta, y cuando este es sin goce de sueldo implica, además, que no recibirá remuneración alguna durante su período de duración.

3 Sentencia de 20 de enero de 2009, inconstitucionalidad 84-2006.

4 Resolución de 22 de noviembre de 2005, inconstitucionalidad 44-2005.

El texto del art. 162 Cn. ofrece los elementos esenciales para solventar la cuestión objeto de análisis. Esta disposición prescribe que "[c]orresponde al Presidente de la República nombrar, remover, aceptar renuncias y conceder licencias a los Ministros y Viceministros de Estado, así como al Jefe de Seguridad Pública y al de Inteligencia de Estado". Hay una cuestión pragmática básica en esta disposición: la distinción entre nombramiento, remoción, renuncias y licencias significa que, para el constituyente, ninguna de estas categorías normativas es igual entre sí[5]. De lo contrario, los términos usados habrían sido menores, en tanto que se habría entendido que uno de ellos comprende al resto. En consecuencia, la licencia –permiso– no es equivalente a la remoción y la renuncia.

La diferencia que hay entre estas tres figuras –para lo que interesa al tema en cuestión– es que la licencia, a diferencia de las demás, no rompe con el vínculo que hay entre el funcionario y el órgano que representa, sino que solamente suspende el ejercicio de la función pública que exige su cargo. Esto implica que la vinculación funcionario-órgano no desaparece, ni se suspende –pues solo se interrumpe el ejercicio de la función, pero no la calidad de funcionario público que se tiene–. Por tanto, el fin perseguido por la disposición constitucional –separación orgánica de funciones o competencia electoral equitativa y ejercicio óptimo de la función pública a la que se aspira– no se consigue. Este argumento es suficiente para afirmar categóricamente que una licencia o permiso, sea con o sin goce de sueldo, no habilita a los sujetos establecidos en el art. 127 ord. 1º Cn. para poder ser candidatos a diputado, pues la inelegibilidad no desaparece por este motivo.

D. Debe entenderse que en todos los supuestos en los que la Constitución prevé una inelegibilidad que tenga como fundamento el ejercicio de un cargo público, la licencia o permiso, con o sin goce de sueldo, no podrá servir nunca como acto o documento habilitante para hacerla desaparecer. Por el contrario, violaría la Constitución quien así pretenda ingresar en una función pública distinta de la que ya desempeña. Además, su candidatura estaría sujeta al control constitucional por parte de esta sala. No debe olvidarse que entre los deberes genéricos de todo funcionario figura el de adecuación al ordenamiento jurídico, en el cual podría decirse que se resumen el resto, y que consiste en la obligación del funcionario de cumplir las leyes y demás disposiciones jurídicas vigentes, que es manifestación directa de la vinculación constitucional de la administración a la ley y al Derecho[6].

Por otro lado, el solicitar licencia o permiso, con o sin goce de sueldo, con un fin como el apuntado –"superar" un impase que deriva de una prohibición constitucional–, supone un fraude a la Constitución. El fraude a la Constitución implica al menos dos normas jurídicas –aunque puede tratarse de una sola disposición–: una que al parecer se respeta o se cumple con la conducta realizada (llamada norma de cobertura, que en este caso es la licencia o permiso) y otra (llamada norma defraudada, que en el caso en comento sería el art. 127 ord. 1º Cn.) cuyo contenido normativo es incompatible con el resultado alcanzado mediante dicha conducta[7]. En resumen, estos fraudes suponen que hay una regla que en principio justifica el acto, pero el resultado alcanzado, consideradas todas las circunstancias, se estiman prohibidos dados los principios que están en juego[8]." *Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 14-2018, fecha de la resolución: 21/04/2021*

---

5 En la sentencia de 23 de enero de 2019, controversia 1-2018, se dijo que según el argumento pragmático "el constituyente y el legislador no hacen previsiones inútiles o destinadas a ser ineficaces".

6 Sentencia de inconstitucionalidad 84-2006, ya citada.

7 Véase la sentencia de inconstitucionalidad 163-2013, ya citada.

8 Atienza, Manuel y Ruiz Manero, Juan, Ilícitos atípicos, 1ª ed., Trotta, 2000, p. 67.

DERECHO AL TRABAJO

CONCEPCIÓN

"VI. Derecho al trabajo y la duración de las jornadas de trabajo.

1. En su dimensión individual o subjetiva, el derecho al trabajo (art. 37 Cn.) se concibe como el derecho por el cual toda persona puede exteriorizar y aplicar conscientemente sus facultades para la producción de medios materiales y condiciones de vida, es decir, para conseguir la satisfacción de necesidades e intereses [1]. En tanto derecho social y actividad humana, el trabajo también envuelve una dimensión objetiva y encarna un valor ético, por lo que el art. 37 Cn. indica que goza de la protección del Estado y que la actividad laboral no puede ser tratada como artículo de comercio [2].

El derecho al trabajo también tiene reconocimiento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos (DITDH) estatuye en el art. 23.1 que "[t]oda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo [...]". De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) señala en el art. 6.1 que el derecho al trabajo "[...] comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado", mientras que el art. 6.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) reconoce que "[t]oda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada". Como se observa, la importancia de tal derecho radica, pues, en reconocer la libertad de las personas para escoger una actividad lícita que les permita la satisfacción de necesidades básicas, su sostenimiento económico individual y familiar, y la obtención de una existencia digna."

CARACTERÍSTICA DEL VÍNCULO JURÍDICO ENTRE UN TRABAJADOR Y UN PATRONO POR LA PRESTACIÓN DE UN TRABAJO O SERVICIO

"2. El trabajo se desarrolla en el marco de una relación laboral en la que se establece un vínculo jurídico entre un trabajador y un patrono por la prestación de un servicio, con la característica de subordinación —que implica que el trabajador debe cumplir los lineamientos, instrucciones u órdenes del patrono para la consecución de los fines de la empresa o institución— a cambio de un salario determinado. Históricamente, la jornada de trabajo ha sido un tema central en el

---

1 Resolución de 17 de febrero de 2021, inconstitucionalidad 20-2021.

2 Ejemplo, auto de 18 de julio de 2014, inconstitucionalidad 32-2014.

Derecho Laboral. Su delimitación es producto de conflictos y conquistas sociales que hasta nuestros días se reflejan en la mayoría de constituciones democráticas. La jornada de trabajo condicionó, condiciona y condicionará la vida de los trabajadores tanto en el entorno laboral como en su vida personal y familiar, pues el tiempo dedicado al trabajo con el fin de obtener un salario le obliga a sujetar temporalmente sus actividades fuera de este."

JORNADA LABORAL ORDINARIA

"En ese contexto, la jornada laboral ordinaria de 8 horas nace como respuesta a las jornadas de trabajo excesivas –de hasta 14 horas– de las que eran víctimas los trabajadores u obreros. De ahí que las primeras protestas obreras tuvieran como objetivo la limitación del tiempo de trabajo.

Estas exigencias históricas se plasmaron en las constituciones modernas —y por tanto, se positivaron con fuerza normativa— en forma de derechos sociales. Habitualmente, los derechos sociales se presentan como expectativas ligadas a la satisfacción de, necesidades básicas de las personas en ámbitos como el trabajo, la vivienda, la salud, la alimentación o la educación. Para los órganos públicos, e incluso para los particulares, el reconocimiento de estas expectativas en constituciones y tratados internacionales comporta obligaciones positivas y negativas —de hacer y de no hacer—, ligadas a su satisfacción. En la medida en que los bienes que protegen tienen que ver con la supervivencia y con el disfrute de las condiciones materiales que posibilitan el ejercicio real de la libertad o de la autonomía, la reivindicación de los derechos sociales interesa potencialmente a todas las personas. Pero, incumbe de manera especial a los miembros más desaventajados de la sociedad, cuyo acceso a los recursos suele ser residual y, pocas veces, inexistente[3].

Ante la importancia del trabajo para la sociedad, el constituyente sustrajo del debate público la protección del trabajo. Por esa razón, en la sección correspondiente al trabajo y seguridad social se encuentra el art. 38 ord. 6° Cn., que en sintonía con lo reseñado, establece que la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no excederá de 8 horas y la semana laboral de 44 horas. Y además, según la parte final de dicha disposición, las horas extraordinarias serán remuneradas con recargo. Esta disposición es aplicable a toda clase de trabajo lícito. Eso incluye, según el art. 45 Cn., al servicio doméstico."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 91-2016-101-2017-157-2017, fecha de la resolución: 27/10/2021

---

[3] Ej., resolución de 12 de octubre de 2011, inconstitucionalidad 40-2010.

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

FINALIDAD DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

"En el Derecho Procesal Constitucional los procesos constitucionales tienden a asegurar un fin público diferente: garantizar la protección de los derechos fundamentales y asegurar la defensa objetiva de la Constitución. Si la Constitución es un orden marco dentro del cual discurre un proceso político democrático duradero, a pesar del carácter cambiante de la realidad normada y de las demandas sociales, es razonable que las sentencias constitucionales no posean la rigidez ni produzcan efectos que vayan contra el dinamismo de la Constitución [1]."

Esta Sala debe aclarar que, por una parte, el art. 183 Cn. establece que "[l]a Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano"; y, por otra parte, el art. 10 inc. 2° LPC indica que "[s]i en la sentencia se declarare que en la ley, decreto o reglamento no existe la inconstitucionalidad alegada, ningún juez o funcionario podrá negarse a acatarla, amparándose en las facultades que conceden los artículos 185 y235 de la Constitución". De ello derivan dos efectos: (i) si la sentencia es estimatoria, el objeto de control es expulsada del ordenamiento jurídico, de manera que ningún juez puede inaplicarlo [2]; y (ii) si la sentencia es desestimatoria, ningún juez puede inaplicar el objeto de control por los mismos motivos [3]."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 89-2019, fecha de la resolución: 18/10/2021

DERECHOS FUNDAMENTALES

REGULACIÓN NORMATIVA Y LIMITACIÓN DE UN DERECHO FUNDAMENTAL

"VI. La legislación penal y procesal penal, y la protección de los derechos fundamentales.

1. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que, pese a que los derechos fundamentales son límites o barreras a la ley –en sentido material–, su plena eficacia requiere de la colaboración legislativa para su desarrollo, particularmente por la relativa indeterminación o textura abierta de los enunciados

---

1 Sentencia de 13 de octubre de 2010, inconstitucionalidad 17-2006.

2 Sentencia de 21 de septiembre de 2012, inconstitucionalidad 60-2005 AC.

3 Para un mejor entendimiento entre la regulación y limitación de derechos fundamentales puede consultarse, por ej., las sentencias de 3 de febrero de 2016 y de 15 de febrero de 2017, inconstitucionalidades 175-2013 y 13-2014 Ac.

constitucionales que estatuyen dichos derechos[1]. Esto conlleva necesariamente distinguir entre regulación normativa de los derechos fundamentales y las limitaciones que implican una afectación negativa de sus elementos esenciales.

La regulación normativa de un derecho fundamental es la dotación de contenido material al mismo, estableciendo sus manifestaciones y alcances, las condiciones para su ejercicio, la organización y procedimientos que sean necesarios para hacerlos efectivos, así como la estructuración de sus garantías. Se trata de la afectación a elementos no necesarios del derecho, que no inciden directamente en su ámbito y límites. Desde esta perspectiva, un derecho fundamental puede ser regulado por disposiciones infraconstitucionales provenientes de aquellos órganos estatales o entes públicos que estén constitucionalmente habilitados para ello, sin que deba entenderse que el cumplimiento de las condiciones establecidas para el ejercicio de un derecho es lo que lo hace surgir en la práctica. El derecho existe con independencia de tales condiciones, ya que estas lo único que hacen es regular las formas de su ejercicio [2].

Por otra parte, la limitación de un derecho fundamental se caracteriza porque se afecta negativamente alguno de sus elementos o aspectos sustanciales –los sujetos del derecho y su ámbito de protección material–, de forma tal que implica una obstaculización o impedimento para su ejercicio, con una finalidad justificada desde el punto de vista constitucional. A diferencia de lo que ocurre con la regulación, la limitación solo es susceptible de ser realizada por la propia Constitución o por la ley en sentido formal [3].

2. A partir de los arts. 1 inc. 1º y 2 Cn. es posible afirmar que la persona humana es titular de una serie de derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra el derecho a la protección para la conservación y defensa de aquellos. De esto se sigue un imperativo jurídico-constitucional de protección de los derechos fundamentales, que exige al Estado organizarse y desplegar su actividad para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común, donde, en la medida que se asegure la protección efectiva de esos derechos, se estará más cerca de la conquista de los referidos valores."

REGULACIÓN PENAL Y PROCESAL PENAL DEBE PROCURAR UNA PROTECCIÓN EN DOBLE SENTIDO

"En ese contexto, la legislación penal y procesal penal debe cumplir con dicho mandato de protección en un doble sentido: (i) garantizando los derechos de los sujetos pasivos de las violaciones como colectividad o generalidad, lo cual permite afirmar que dicha protección se extiende a la población salvadoreña y, por tanto, es materia de interés público; y (ii) resguardando los derechos de los probables infractores para que respondan de sus conductas ilícitas, respetando su dignidad humana [4]. Para ello, el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal resultan determinantes, ya que en estos sectores del orden jurídico pueden plantearse tensiones entre la necesidad de aplicación del poder punitivo en el momento de cumplir con la obligación estatal de proteger bienes jurídicos, y la protección de los derechos fundamentales de la persona. Recuérdese que algunos mecanismos de los que en la actualidad se auxilian los Estados para el combate de la criminalidad organizada y otros delitos de realización compleja o conexa presuponen restricciones más gravosas a los derechos fundamentales del imputado. En consecuencia, el legislador tiene la obligación de crear una regulación penal y procesal penal que concilie ese doble interés. Ello exige la consecución de un equilibrio entre las garantías individuales que racionalizan al proceso penal (principalmente los arts. 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 24 Cn.) y el deber de protección de bienes jurídicos (art. 2 Cn.) [5]."

---

1 Entre otras, sentencias de 14 de diciembre de 1995 y de 12 de marzo de 2007, inconstitucionalidades 17-95 y 26- 2006, respectivamente.

2 Sentencia de inconstitucionalidad 17-95, ya citada

3 Sentencia de 10 de noviembre de 2017, inconstitucionalidad 143-2015.

4 Sentencia de 12 de abril de 2017, inconstitucionalidad 28-2006 AC.

5 Sentencia de inconstitucionalidad 28-2006 AC, antes citada.

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 5-2018, fecha de la resolución: 16/07/2021

SON OBJETO DE REGULACIÓN Y/O LIMITACIÓN

"1. Los derechos fundamentales no son absolutos o ilimitados [1], por lo que son objeto de regulación (configuración) y/o limitación (restricción) legislativa. En efecto, dado el carácter relativo de los derechos y su coexistencia e interrelación, es admisible que el Órgano Legislativo los intervenga a fin de optimizarlos y armonizarlos [2].

Así, entre otros aspectos, la regulación comprende el establecimiento de la titularidad, las manifestaciones y alcances de los derechos, las condiciones para su ejercicio y sus garantías [3]. Es decir, la configuración del derecho representa el establecimiento de normas que fijen las condiciones necesarias para su adquisición, ejercicio y la descripción de las modalidades (o concreciones) que incluye. En cambio, la limitación o intervención implica un acto normativo que modifica alguno de sus elementos configuradores, ya sea en cuanto a los sujetos —titulares o destinatarios—, su ámbito de protección material —el objeto en función del supuesto de hecho, del bien jurídico regulado y el sector físico o ideal que se protege— y la justificación de los límites —si los hay— [4]."

LIMITACIONES DEBEN ESTABLECERSE MEDIANTE UNA LEY FORMAL, ATENDER A UN CRITERIO CONSTITUCIONAL QUE AUTORICE LIMITARLOS, RESPETAR LA PROPORCIONALIDAD Y NO ALTERAR SU CONTENIDO ESENCIAL

"En ese orden, las limitaciones a un derecho fundamental han de establecerse mediante una ley formal y deben: a) atender a un criterio constitucional que autorice limitar derechos fundamentales; b) respetar la proporcionalidad; y c) no alterar su contenido esencial (art. 246 inc. 1° Cn.) [5]. En este punto, debe aclararse que aunque la Constitución no contiene una formulación expresa de los criterios que autorizan al legislador para limitar los derechos fundamentales, esta Sala ha afirmado que las restricciones a los derechos fundamentales formuladas por el legislador solo pueden imponerse para asegurar la convivencia social, en relación con los valores fundamentales del ordenamiento, como la justicia, la seguridad jurídica y el bien común [6]. Pero, reconociendo que no puede exigirse al legislador que cada uno de sus productos normativos esté orientado específicamente a la satisfacción de alguno de esos valores, puede afirmarse que los márgenes estructurales de acción en que se enmarca su actividad le permiten perseguir cualquier fin legítimo que no esté proscrito en la Constitución o que no sea manifiestamente incongruente con su fundamento filosófico [7].

---

1 Sentencia de 25 de junio de 2009, inconstitucionalidad 83-2006.
2 Sentencia de 21 de septiembre de 2011, inconstitucionalidad 16-2005.
3 Sentencia de 8 de octubre de 2004, inconstitucionalidad 31-2002 AC.
4 Sentencia de 23 de diciembre de 2014, inconstitucionalidad 42-2012 AC.
5 Sentencia de 20 de enero de 2009, inconstitucionalidad 84-2006.
6 Sentencia de 14 de febrero de 1995, inconstitucionalidad 17-95.
7 Sentencia de 1 de diciembre de 2017, inconstitucionalidad 2-2015.

Además, las limitaciones a los derechos fundamentales deben respetar el principio de proporcionalidad, lo que implica el alejamiento de la arbitrariedad y el acercamiento a la justicia, prohibiendo todo tipo de intromisión en el ejercicio de los derechos fundamentales que no tenga justificación, basándose en el respeto y la debida ponderación de tales derechos y el carácter vinculante de su contenido axiológico [8]. Así, la proporcionalidad conlleva las exigencias de la idoneidad de las medidas restrictivas, en relación con el logro del fin legítimo propuesto; la necesidad de dicha restricción, en el sentido de que entre varias medidas adecuadas para conseguir la misma finalidad, el legislador haya seleccionado la menos gravosa para el derecho correspondiente; y la proporcionalidad en sentido estricto, entre la interferencia al derecho fundamental limitado y el favorecimiento del bien jurídico o valor que se pretende salvaguardar mediante tal limitación o restricción [9].

Asimismo, las limitaciones al ejercicio de los derechos deben respetar la prohibición de alterar, anular o destruir la esencia o el núcleo de los derechos fundamentales (art. 246 inc. 1° Cn.) [10]. El contenido esencial de un derecho consiste en el "conjunto de facultades que permiten identificarlo en abstracto bajo esa denominación, en un determinado momento histórico" [11]; que "no puede ser desplazado permanentemente por el legislador ordinario" [12]; y que debe ser definido a partir de "las convicciones generalmente admitidas entre los juristas, adecuándolas a las peculiaridades de nuestro sistema jurídico, y respetando el pluralismo ético, ideológico y político" [13]."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 25-2016, fecha de la resolución: 20/12/2021

DERECHOS SOCIALES

RECONOCIMIENTO COMPORTA OBLIGACIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS LIGADAS CON SU SATISFACCIÓN

"1. A. Esta Sala ha sostenido que los derechos sociales son expectativas vinculadas a la satisfacción de necesidades básicas de las personas en ámbitos como el trabajo, la vivienda, la salud, la alimentación o la educación. Para los órganos públicos, e incluso para los particulares, el reconocimiento de estas expectativas en constituciones y tratados internacionales comporta obligaciones positivas y negativas (de hacer o no hacer) ligadas con su satisfacción. En la medida en que los bienes que protegen tienen que ver con la supervivencia y

8 Sentencia de 25 de junio de 2009, inconstitucionalidad 57-2005

9 Inconstitucionalidad 42-2012 AC, precitada.

10 Sentencia de 23 de marzo de 2001, inconstitucionalidad 8-97.

11 Sentencia de 15 de febrero de 2017, inconstitucionalidad 13-2014 AC.

12 Sentencia de 21 de septiembre de 2012, inconstitucionalidad 60-2005 AC.

13 Inconstitucionalidad 57-2005, precitada.

con el disfrute de las condiciones materiales que posibilitan el ejercicio real de la libertad y autonomía, la reivindicación de tales derechos interesa potencialmente a todas las personas. Pero, incumbe de manera especial a los miembros más desaventajados de la sociedad, cuyo acceso a los recursos suele ser residual y, a veces, inexistente[1].

En ese sentido, el esquema tradicional de los derechos sociales merece una reconstrucción en la que aparezcan como derechos que pueden verse desde una perspectiva garantista y democrático-participativa. La primera parte de la constatación de que si bien el Derecho suele expresar el interés de los sujetos más fuertes, también debe operar como un instrumento al servicio de los sujetos más débiles. Así ocurre en el constitucionalismo actual, cuya lógica interna propugna la limitación y vinculación de todo poder, sea público o privado. De acuerdo con la segunda perspectiva, la democracia aparecería como un proceso siempre abierto, no como un régimen acabado al que pueda accederse de una vez y para siempre. De lo que se trataría es de inscribir la garantía de los derechos en un proceso de constante democratización del marco institucional y de la esfera no institucional. Ello supondría examinar la calidad de la información, la publicidad y los argumentos ofrecidos por las instituciones en sus actuaciones y evaluar su capacidad para dar expresión a los reclamos sociales por vías adecuadas, iniciando por los de las clases y grupos vulnerables[2]."

INFLUENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

"B. El derecho internacional de los derechos humanos también ha influido en el desarrollo y reconocimiento de los derechos sociales. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su art. 22 que "[t]oda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a [...] obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". Además, reconoce distintos derechos sociales como el derecho al trabajo (art. 23.1), al descanso, jornada de trabajo limitada y vacaciones (art. 24), a un nivel de vida adecuado (art. 25.1), entre otros. También existe el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Pacto referido está constituido por un total de treinta y un artículos, y en él se reconocen los siguientes derechos socioeconómicos: el derecho al trabajo (art. 6), el derecho a disfrutar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (art. 7), la libertad de fundar sindicatos y afiliarse a ellos y el derecho de huelga (art. 8), el derecho a la seguridad social y a la asistencia social (art. 9), la

---

1 Todo lo dicho en este párrafo se sostuvo en la sentencia de 10 de noviembre de 2017, inconstitucionalidad 8-2015 AC.

2 Sentencia de inconstitucionalidad 8-2015 AC, ya citada.

protección y asistencia a la familia (art. 10), derecho a un nivel de vida adecuado y a medios de subsistencia, incluso alimentación, vestido y vivienda (art. 11), derecho a la salud física y mental (art. 12), derecho a la educación y formación profesional (arts. 13 y 14), y el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico (art. 15). Además, su art. 2.1 prescribe que "[c]ada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos".

GOZAN DE LA PROTECCIÓN REFORZADA QUE LES CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

"2. Asimismo, este Tribunal ha sostenido que la contraposición entre derechos civiles y políticos frente a los derechos económicos, sociales y culturales ha ido perdiendo fuerza, dando paso a la idea de que todos los derechos fundamentales presentan, unos más que otros, dimensiones negativas y positivas. Por ello, dan lugar tanto a obligaciones de hacer como de abstenerse; imponen deberes no solo a los poderes públicos, sino también a aquellos sujetos privados en condiciones de afectarlos; demandan prestaciones onerosas, que pueden adoptar carácter individual o colectivo y que, en todo caso, resultan ser indivisibles e interdependientes. En ese sentido, según este esquema, las disposiciones constitucionales que tipifican derechos "sociales" (que enfatizan la dimensión prestacional de los derechos fundamentales) se deben interpretar a fin de maximizarlas, para no debilitar la eficacia normativa de unos derechos a los que se ha otorgado rango constitucional[3].

Esto cobra sentido en la medida en que se tome en cuenta que, no obstante que la clasificación de los derechos en individuales y sociales es de tipo material[4], todos los derechos fundamentales gozan de supremacía y no pueden ser desconocidos o vulnerados por ninguna autoridad ni por los particulares. Por ello, los derechos sociales no solo contienen principios rectores que actúan como derechos de configuración legislativa, sino que también son derivados directamente de la Constitución, sin que los poderes públicos o privados puedan desconocerlos por acción u omisión[5]. Asimismo, cumplen con una función de fundamentación material de todo el orden jurídico y gozan de la protección reforzada que les confiere la Constitución[6]."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 67-2016, fecha de la resolución: 10/12/2021

---

3 Sentencia de 1 de febrero de 2013, inconstitucionalidad 53-2005 AC.

4 Sentencia de 12 de marzo de 2007, inconstitucionalidad 26-2006.

5 Sentencia de inconstitucionalidad 53-2005 AC, ya citada.

6 Sentencia de 25 de junio de 2009, inconstitucionalidad 26-2008; y sentencia de 6 de junio de 2008, inconstitucionalidad 31-2004 AC.

DISCRECIONALIDAD JUDICIAL

DIFERENCIA CON LA ARBITRARIEDAD

"VII. La discrecionalidad judicial.

1. Discrecionalidad no es lo mismo que arbitrariedad. Tradicionalmente se ha concebido a la discrecionalidad como la existencia de márgenes de libertad para la adopción de una decisión.

Esa idea de discrecionalidad asociada a la de "libertad" para decidir en una u otra forma ha tenido soporte en tres perspectivas: (i) la elección entre varias alternativas, sostiene que la discrecionalidad implica la existencia de dos o más soluciones posibles e igualmente válidas para el derecho entre las cuales se pueden elegir. Esta concepción permite distinguir entre una "discrecionalidad relativa" cuando existen pocas opciones para que el órgano decisor puede elegir; y una "discrecionalidad amplia" cuando la disponibilidad de opciones para elegir son variadas; (ii) la ausencia de estándares jurídicos aplicables, considera la discrecionalidad como la posibilidad de adoptar decisiones sobre la base de criterios extrajurídicos ante la falta de estándares que guíen la toma de decisiones y, (iii) la ausencia del carácter último de la decisión, que permite distinguir entre una "discrecionalidad provisional o débil", esto es, aquella que permite al funcionario aplicar el discernimiento en la interpretación de una norma poco clara o que no admite una aplicación mecánica, pero que no es susceptible de ser revisada por otro órgano distinto al que dictó la decisión; y "discrecionalidad absoluta o fuerte", se da cuando el funcionario que decidirá no se encuentra vinculado por estándares impuestos por una norma y la decisión no es objeto de revisión por ningún órgano independientemente si esta adolece de irrazonabilidad o arbitrariedad."

IMPLICA LA CONCESIÓN DE CIERTOS MÁRGENES DE LIBERTAD PARA LA TOMA DE DECISIONES, TIENE SU GÉNESIS EN LA INDETERMINACIÓN DEL DERECHO O EN LA DELEGACIÓN DE UN PODER

"A partir de este análisis se puede decir que la discrecionalidad jurídica implica la concesión de ciertos márgenes de libertad para la toma de decisiones, que tiene su génesis en la indeterminación del derecho o en la delegación de un poder. Las nociones de libertad en la toma de decisiones, indeterminación del derecho y poder se convierten en las notas características de la discrecionalidad. La libertad es la característica central en el examen de la discrecionalidad, aquella no conlleva la posibilidad de adoptar cualquier tipo de decisión, sino la facultad del órgano decisor de determinar los estándares jurídicos que servirán de soporte para la determinación de las alternativas posibles en la toma de decisión. Así entendida, la discrecionalidad se produce antes de establecer las posibles alternativas acordes con el Derecho en la toma de decisión. Esta noción permite concebir que la actuación discrecional de los órganos públicos no sea absolutamente libre, sino que deberá justificarse de manera instrumental."

ANÁLISIS DE LA INDETERMINACIÓN DEL DERECHO DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTRICTO Y DESDE EL PUNTO DE VISTA AMPLIO

"2. En torno a la indeterminación del derecho, esta se puede analizar desde el punto de vista estricto y desde el punto de vista amplio. El primero sostiene que en la operación de subsunción de hechos particulares a cláusulas generales, se genera un núcleo de certeza y una zona de penumbra donde la aplicabilidad de la norma es indeterminada. En esta última resulta difícil establecer la aplicación de una norma a un caso atendiendo a las circunstancias particulares que presente. El segundo implica que la indeterminación no se produce en la aplicabilidad de la norma al caso concreto, sino en los casos donde la norma no determina la conducta que regula. En este caso, el órgano decisor deberá establecer cuál es la conducta adecuada para conseguir el fin que la norma pretende atendiendo a las circunstancias del caso. En este sentido, la indeterminación opera como una delegación de poder.

En lo que respecta a la noción de poder de la discrecionalidad, esta se analiza en relación con la posibilidad de decidir entre varias alternativas y en torno a la delegación de una competencia para decidir como génesis de la discrecionalidad. El término "poder" antes descrito está utilizado en contextos diferentes. En primer lugar –dimensión regulativa– es utilizado en su sentido normativo y hace referencia al Derecho como guía que obliga, prohíbe o permite ciertas conductas o la obtención de ciertos límites o estados de cosas. En segundo lugar –dimensión constitutiva– es utilizado en su sentido fáctico e implica la facultad concedida al órgano decisor para seleccionar entre las distintas alternativas posibles, aquella que permite alcanzar los fines institucionales que el ordenamiento jurídico persigue e introducir en el sistema jurídico nuevas evaluaciones de intereses. El ámbito de la discrecionalidad jurídica es el de acciones que son descritas a partir del resultado institucional o cambio normativo producido por el ejercicio de un poder. La discrecionalidad forma parte de las normas constitutivas y de manera especial de las reglas que confieren un poder."

DISPOSICIONES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE REFLEJAN LA FACULTAD DISCRECIONAL CONCEDIDA A LOS JUECES COMO DELEGACIÓN DE UN PODER

"En el ordenamiento jurídico existen diversas disposiciones que reflejan la facultad discrecional concedida a los jueces como delegación de un poder. Entre ellas, la evaluación discrecionalmente sobre la existencia o no de la agravante de irrespeto personal (art. 30 nº 9 del Código Penal –CP–); la fijación de la pena que debe imponerse conforme a los parámetros previstos en el art. 63 CP (art. 62 inc. 2º CP); la revocación de la libertad condicional de la pena, cuando considere que el beneficiario ha incumplido las condiciones impuestas para el otorgamiento del beneficio (art. 90 CP); la graduación de la pena de reclusión para los militares que participen en el delito de sedición, pero que no se encuentren com-

prendidos en los supuestos de hecho previstos en el art. 83 nº 1 del Código de Justicia Militar; la determinación de en qué casos la obligación alimenticia puede ser sufragada en especies (art. 257 del Código de Familia); el establecimiento de si la detención del patrono es infundada en los casos de suspensión de contrato de trabajo (art. 36 nº 7 del Código de Trabajo); la determinación del monto de la indemnización por daños o perjuicios con base en las pruebas del proceso (art. 64 de la Ley de Procedimientos Especiales sobre Accidentes de Tránsito); y la prevista en el objeto de control.

VIII. Técnica legislativa en la creación de los comportamientos prohibidos.

1. Todo cuerpo normativo es creado con el propósito de satisfacer una necesidad de regulación que se suscita en un contexto y lugar determinado. En ese proceso racional, el legislador deberá considerar factores sociales, económicos e incluso políticos que confluyen al problema y a la solución, previendo sus posibles consecuencias. En la redacción de las disposiciones legales en materia sancionadora, la Asamblea Legislativa tiene diversos límites constitucionales. Uno de esos límites es el principio de legalidad, el cual exige que los tipos penales, faltas o infracciones administrativas y su respectiva consecuencia jurídica deben estar previstos con anterioridad a la realización del comportamiento prohibido con la suficiente claridad y precisión. Tal exigencia tiene como finalidad que los destinatarios de la ley puedan predecir qué conductas son valoradas de forma negativa por el ordenamiento jurídico y la eventual sanción que corresponde aplicar en caso de ser realizadas. Pero, la exigencia de precisión absoluta al momento de elaborar todas las conductas comprendidas en los supuestos de hecho prohibidos puede resultar perjudicial. Esto se debe a la imposibilidad de comprender en la norma de conducta todas las situaciones que pretende regular.

Esto justifica que, ante casos donde no exista una respuesta jurídicamente determinada, el legislador prefiera otorgar a los jueces facultades discrecionales. Ese "poder discrecional" está orientado por principios para que el juzgador pueda decidir teniendo en cuenta las circunstancias particulares, en lugar de aplicar forzadamente el Derecho a casos no previstos. De esta manera, el legislador prefiere en algunos casos, colocar intencionadamente en algunos enunciados legales principios y estándares muy abiertos, antes que intentar excluir toda incertidumbre por medio de técnicas que supondrían aplicar reglas para casos que no fueron previstos. Si bien la precisión posee algunos beneficios relacionados al Estado de Derecho –entre ellas la previsibilidad de las conductas prohibidas– también desmejora la capacidad del Derecho para regular la vida social. El constituyente y el legislador son conscientes que sobre ellos pesa la responsabilidad de decidir el contenido de las disposiciones del ordenamiento jurídico. Pero, en algunos casos están imposibilitados para hacerlo de forma definitiva, completa y con la información necesaria. Uno de esos casos, es la determinación exhaustiva de todos los comportamientos que puedan ser comprendidos en los supuestos de hecho de la norma de conducta prohibida.

2. Esta Sala ha desarrollado en su jurisprudencia diversas directrices que el legislador debe atender para crear un delito, falta o infracción administrativa. La

primera directriz para el legislador, es que, ante distintas opciones expresivas, debe ser la selección de las palabras cuyos significados sean más accesibles, claros o comprensibles, sin mayor esfuerzo, para la generalidad de las personas y que, en lo posible, hagan referencia directa a aspectos u objetos de la realidad. En segundo lugar, cuando los términos descriptivos o con referentes fácticos –que puedan identificarse con hechos de la experiencia– no basten, el uso de conceptos normativos, valorativos o jurídicamente indeterminados debe justificarse por la naturaleza del objeto de regulación o por el fin de protección de la norma jurídica penal. En tercer lugar, si el significado de dichos elementos valorativos es extraño al bagaje conceptual compartido por sus destinatarios, o carece de experiencias previas de aplicación o es muy discutido, la ley puede incorporar una definición propia de dichos términos, intentando reducir los márgenes de indeterminación generados por su empleo.

En cuarto lugar, cuando el uso de conceptos abiertos o valorativos esté justificado, el mandato de determinación o taxatividad exige que su significado sea al menos determinable mediante criterios, pautas o argumentos intersubjetivos o controlables, de tipo empírico, semántico, finalista, técnico, contextual, sociocultural, dogmático o jurisprudencial, entre otros [1]. Lo relevante de este parámetro es que la formulación legal permita que las herramientas interpretativas y la estructura o modelo de argumentación utilizados puedan considerarse aceptables o razonables desde la perspectiva de la comunidad jurídica y social respectiva. Así, en cuanto a tales conceptos, la determinación del tipo penal requiere la "determinabilidad" de su significado y la certeza de las personas ante la ley incluye la previsibilidad de los criterios judiciales para su aplicación. Y en quinto lugar, la tipificación penal mediante conceptos indeterminados siempre debe contener el núcleo de la prohibición o la identificación esencial de la conducta reprimida, de modo que el tipo de valoración necesaria para su interpretación no signifique entregar por completo a la discrecionalidad o a la opinión personal del juez el poder de definición de los casos que quedarán comprendidos bajo dichos conceptos y, por tanto, en el ámbito de lo punible [2].

A partir de estas directrices, el aplicador del Derecho cuenta con una serie de criterios que le permiten dotar de significado a los conceptos abiertos o que carecen de total precisión. Para realizar esta labor, el operador jurídico deberá realizar un auténtico ejercicio de interpretación de disposiciones, sobre la base de razones o argumentos que justifican esa forma de entender el texto de la disposición como la alternativa más adecuada para resolver una duda, pregunta o problema interpretativo, que es el que origina la necesidad de interpretación."
Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 7-2016, fecha de la resolución: 01/11/2021

---

1 Sentencia de 1 de abril de 2004, inconstitucionalidad 52-2003.

2 Sentencia 8 de julio de 2015, inconstitucionalidad 105-2012.

DISPOSICIONES PRECONSTITUCIONALES

SE REQUIERE DEL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A ESTA SALA POR EL ART. 174 CN., PARA BRINDAR CERTEZA SOBRE LA DEROGACIÓN DE UNA DISPOSICIÓN PRECONSTITUCIONAL

"Esta Sala advierte que la disposición objeto de control es preconstitucional, pues entró en vigor antes que la actual Constitución de la República (20 de diciembre de 1983). De conformidad con lo establecido en el art. 249 Cn., toda disposición preconstitucional que contradiga los preceptos constitucionales quedó derogada desde la entrada en vigor de la Constitución. Esta derogación genérica no necesita de una declaratoria de inconstitucionalidad por parte este Tribunal, sino más bien una constatación de la derogatoria[1]. Ahora bien, con el objetivo de uniformar la jurisprudencia constitucional y para construir una regla de aplicación jurisprudencial para casos de similar estructura, tal derogatoria genérica no puede operar de forma automática, sino que toda disposición preconstitucional que se considere contraria a la Constitución debe ser objeto del contraste normativo propio del proceso de inconstitucionalidad[2], para declarar si existe tal derogación y determinar los efectos jurídicos de una eventual sentencia estimatoria[3].

Es decir, si bien parece un asunto de simple depuración normativa, no debe perderse de vista que en realidad se trata de un asunto constitucional, porque uno de los extremos del contraste es la Constitución[4]. En efecto, incluso en las derogaciones tácitas, se está en presencia de una contradicción normativa y la plena eficacia del art. 249 Cn. En estos casos se requiere del ejercicio de las competencias atribuidas a esta Sala por el art. 174 Cn. para brindar certeza sobre la derogación de una disposición preconstitucional[5]."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 67-2016, fecha de la resolución: 10/12/2021

DOBLE TRIBUTACIÓN

PRESUPUESTOS SEGÚN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

"2. A. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que concurre la múltiple imposición (si son dos, hablamos de "doble imposición") cuando diversos tributos, en un mismo período impositivo o ante un mismo evento, ya sea abierta o encubiertamente, inciden sobre una misma manifestación de riqueza o sobre manifestaciones de riqueza íntimamente vinculadas, en cuanto relativas a una misma actividad o situación económica. Así, la doble imposición puede darse cuando dos autoridades con potestades normativas gravan una misma actividad, e incluso un solo hecho imponible. Es decir que en ambos tributos el elemento objetivo (material, espacial, temporal y cuantitativo) y el elemento subjetivo son plenamente coincidentes. También hay múltiple tributación cuando una misma autoridad crea más de un tributo sobre un solo hecho imponible, lo cual implica que hayan dos o más tributos idénticos.

---

1 Sentencia de 9 de julio de 2014, inconstitucionalidad 5-2012 AC.

2 Por ejemplo, así se hizo en la sentencia de 21 de septiembre de 2011, inconstitucionalidad 16-2005.

3 Sentencia de 9 de octubre de 2017, inconstitucionalidad 44-2015 AC.

4 Sentencia de inconstitucionalidad 5-2012 AC, ya citada.

5 Sentencia de 22 de octubre de 2004, inconstitucionalidad 9-2003.

Por ello, se ha sostenido que el supuesto de múltiple tributación en el que se verifique la identidad del hecho generador representa una exacción arbitraria del patrimonio de los contribuyentes, lo cual es contrario al principio de capacidad económica. Ahora bien, no obstante la anterior posición, la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en afirmar que la doble tributación no importa necesariamente una inconstitucionalidad, sino solo cuando se alteran, desde la perspectiva de la capacidad contributiva, los parámetros objetivos y subjetivos que el legislador debe utilizar al momento de imponer un tributo."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 43-2018, fecha de la resolución: 15/10/2021

EXCLUSIÓN ARBITRARIA DE BENEFICIO

ESTA FIGURA SE CARACTERIZA POR EL ESTABLECIMIENTO DE DISCRIMINACIONES INFUNDADAS ENTRE INDIVIDUOS O GRUPOS

"1. La exclusión arbitraria de beneficio es una de las formas de inconstitucionalidad por omisión relativa. Dicha figura se caracteriza por el establecimiento de discriminaciones infundadas entre individuos o grupos, por lo que abre la posibilidad de acudir ante esta Sala frente a las omisiones legislativas que le den lugar, con base en el art. 3 Cn. Esta puede acontecer cuando, por ejemplo, una disposición legal reconoce ciertos derechos a un determinado grupo de ciudadanos en vez de al conjunto de la ciudadanía, sin que hayan razones para realizar esta diferenciación; o cuando se confiere un beneficio a un grupo determinado, pero se excluye a otro que comparte con él suficientes semejanzas relevantes.

En ese sentido, para determinar que hay una exclusión arbitraria de beneficio se necesita realizar un examen de igualdad. Hasta la fecha, este Tribunal ha sostenido que en estos casos se requiere determinar: (i) la finalidad real de la norma impugnada, en donde la búsqueda de la finalidad de la norma estará en función del fin objetivo y el fin subjetivo; (ii) si esa finalidad perseguida protege un interés constitucionalmente relevante, donde habrá de verificarse si esta se encuentra conectada con la finalidad de la norma; y (iii) si la norma objeto de impugnación es el medio adecuado para la satisfacción del fin perseguido.

No obstante, al haberse aceptado en la jurisprudencia constitucional reciente que el test de igualdad debe ser de carácter integrado, cabe la posibilidad de que este modelo de examen de igualdad irradie en el de la exclusión arbitraria de beneficio. De hecho, debería ser así, dadas dos razones. Primero, serviría para uniformar la manera en que esta Sala aborda las alegaciones que impliquen la argumentación de alguna supuesta violación del principio de igualdad. Segundo, sería una exigencia derivada de la necesidad de coherencia y consistencia, dos conceptos que están ligados con la justificación externa de las resoluciones judiciales, cuanto menos de aquellas que se califican como "decisiones bien argumentadas".

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 39-2018, fecha de la resolución: 15/12/2021

FUERZA ARMADA

FUNCIÓN BÁSICA

"1. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la función básica de la Fuerza Armada es garantizar la soberanía y la integridad del territorio salvadoreño [1]. De ahí que la defensa nacional, se construye mediante una estructura estatal (administrativa y ejecutiva) que permite la defensa ante agresiones externas o eventuales ataques que se pudieran recibir de otros países o derivados de graves conflictos aunados internos. En ese contexto, la dirección, organización y conformación de tal estructura corresponde al Órgano Ejecutivo en el ramo de Defensa, y su instrumento por excelencia es la Fuerza Armada compuesta por militares profesionales que ejercen la denominada carrera militar.

En cuanto a las características de la institución armada, la jurisprudencia de esta Sala ha señalado entre otros aspectos que su papel es custodiar la soberanía del Estado, mantener la seguridad interior y la defensa exterior; es obediente, profesional, apolítica y no deliberante. Lo primero representa uno de los pilares del funcionamiento de la institución castrense y es una vía para alcanzar los fines que la Constitución le atribuye. La obediencia a la que hace referencia el art. 211 Cn. consiste en la actitud del elemento militar de cumplir y hacer cumplir las órdenes impartidas por el superior en el marco de la más estricta legalidad. Este deber de obediencia se logra por la existencia de un régimen disciplinario que regula el comportamiento de sus miembros y que se establece en todas las nomas que la exigen."

RAZONES POR LAS QUE LA DISCIPLINA MILITAR TIENE RELEVANCIA EN EL DISEÑO CONSTITUCIONAL

"La disciplina militar implica la racionalidad de comportamiento y corrección de la conducta humana en el ámbito marcial, la exacta observancia a las leyes y reglamentos establecidos para los miembros de las Fuerzas Armadas y el acatamiento integral de las órdenes y disposiciones emanadas de un superior, por lo que lleva implícita la noción de jerarquía. Es decir, el vínculo jurídico que relaciona entre sí a los órganos con los funcionarios por medio de los poderes de subordinación, encaminados a dotar a la actividad militar de unidad y coherencia.

Así, la disciplina militar tiene relevancia en el diseño constitucional por dos razones. La primera, porque permite garantizar la obediencia dentro de la Fuerza Armada; y, la segunda, porque tiene un valor instrumental en la medida que permite alcanzar la finalidad prevista por la Constitución para la institución castrense. La disciplina militar no es un valor constitucional ni un fin en sí mismo. Es una herramienta o elemento que permite alcanzar una finalidad constitucionalmente legítima. Por ende, el ejercicio y la intensidad de la disciplina militar están supeditados también al principio de proporcionalidad constitucional, para mantener la defensa nacional. En ese sentido, cuando la aplicación del régimen disciplinario militar conlleve la anulación o limitación de derechos fundamentales, tal medida se encuentra supeditada a la observancia de los principios y exigencias constitucionales [2].

---

1 La sentencia de 17 de mayo de 2013, inconstitucionalidad 4-2012.

2 Sentencia de 27 de agosto de 2014, inconstitucionalidad 79-2011.

2. Como se advierte, estamos en presencia de una institución con una forma peculiar de ordenación, en la cual existe un orden rígidamente jerarquizado en donde la subordinación de sus miembros a los mandos superiores constituye un factor crucial para alcanzar sus finalidades constitucionales. Así, las notas distintivas antes apuntadas, en virtud de la necesaria profesionalización la que se encuentran sometidos sus miembros, implican: (i) su incorporación a una carrera militar; y (ii) la creación de un ordenamiento jurídico sancionatorio especial de todos los hechos punibles (delitos o faltas) que acontezcan dentro del ámbito castrense.

Al primero hace referencia el art. 214 inc. 3° Cn. cuando establece: "[l]a carrera militar es profesional y en ella [solo] se reconocen los grados obtenidos por escala rigurosa y conforme a la ley". Y al segundo, el art. 216 Cn. el cual establece que la jurisdicción militar. Para el juzgamiento de delitos y faltas puramente militares habrá procedimientos y tribunales especiales de conformidad con la ley. La jurisdicción militar, como régimen excepcional respecto de la unidad de la justicia, se reducirá al conocimiento de delitos y faltas puramente militares, entendiéndose por tales los que afectan de modo exclusivo un interés jurídico estrictamente militar (...). Gozan de fuero militar los miembros de la fuerza armada en servicio activo por delitos y faltas puramente militares".

En cuanto a esto último, su desarrollo legal principal está comprendido en el Código de Justicia Militar, el que, por una parte, determina un ámbito de aplicación establecido que "[l]as disposiciones de este Código se aplicarán exclusivamente a los miembros de la Fuerza Armada en servicio activo por los delitos y faltas puramente militares" (art. 1 CJM); y, por otra parte, detallando los delitos y las faltas militares. Estas últimas clasificadas en las faltas propiamente dichas (art. 166 CJM) y las simples infracciones disciplinarias (art. 167 CJM)."

PENAS DISCIPLINARIAS

"En esa línea, el art. 168 del CJM prescribe el catálogo de sanciones que denomina penas disciplinarias, entre las cuales se encuentran: (i) la suspensión del empleo hasta por treinta días; (ii) el arresto por treinta días; (iii) la suspensión del mando; (iv) la destitución de clase; (v) suspensión de clases; (vi) aislamiento de la población cuartelaría; (vii) plantón; (viii) fajina; y (ix) pelotón de maniobra. En estos casos, el art. 174 CJM permite que la clase y extensión de las sanciones disciplinarias quedan libradas al prudente arbitrio del superior que la impone, dentro de los límites y facultades que establece la ley. Aunado a lo anterior, el art. 175 CJM impone ciertas reglas de dosimetría sancionatoria tales como la firmeza, moderación, justicia e imparcialidad en cuanto a la selección de la sanción, debiendo ser la misma proporcional a la extensión y gravedad de la falta. De igual forma, deberán ser consideradas variantes tales como el carácter del inculpado, su conducta habitual, su educación e inteligencia, así corno los servicios que haya prestado anteriormente."

LA ADMINISTRACIÓN MILITAR CONSTITUYE UNA INSTITUCIÓN ESPECIAL DEDICADA A LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO ESENCIAL A LA NACIÓN

"3. En resumen, podemos afirmar que la administración militar constituye una institución especial dedicada a la prestación de un servicio esencial a la nación, un servicio público general referido a la defensa de la integridad territorial de El Salvador y el resguardo de su soberanía, aún y cuando su accionar se encuentre, en la actualidad, en un estado de "latencia" o de "espera disuasoria" ante la inminencia de una agresión extranjera. Por ende, sus características fundamentales se constituyen en la existencia de una estructura y organización jerárquica así como el establecimiento de un estricto régimen disciplinario. Este último basado en la máxima castrense de que quien ordena debe sancionar. En síntesis, estamos en presencia de una relación de supremacía especial entre la

administración militar y su justicia y de quien se encuentra inserto en la misma como miembro activo."
Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 176-2016, fecha de la resolución: 01/11/2021

IMPRESCRIPTIBILIDAD EN MATERIA PENAL

PRESCRIPCIÓN DE LA PENA Y DE LA ACCIÓN PENAL

"1. Sin duda alguna, en muchas de las disciplinas jurídicas se le concede relevancia al transcurso del tiempo. Esto también ocurre en el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal. En términos generales, la prescripción consiste en la exclusión de la pena impuesta o de la interposición de la acción penal una vez transcurrido el tiempo determinado por la ley. Conforme a ello, la mayoría de los ordenamientos jurídicos distingue entre la prescripción de la pena y de la acción penal. Por ello, existe cierto consenso en cuanto a que el instituto jurídico en mención supone una autolimitación del ejercicio del poder punitivo frente al factor tiempo, sea ello por la existencia de un desinterés de la imposición de un castigo por el paso del tiempo, la presunción de una posterior enmienda por quien cometió el delito o por la desaparición progresiva de las pruebas del delito (argumentación que se vincula con una circunstancia que afecta la posibilidad de dictar una sentencia justa)."

EXCEPCIÓN A LA APLICABILIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN EN LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD

"Sin embargo, existe una marcada excepción a la aplicabilidad de este instituto en los denominados crímenes de lesa humanidad, tales como el genocidio, tortura y desaparición forzada de personas, entre otros. En tal sentido, si bien el fundamento de la prescripción radica en la inutilidad de la pena por el transcurso del tiempo, existen situaciones que no pierden la denominada vigencia vivencial conflictiva y, por ende, no se pueden constituir en meros hechos históricos-anecdóticos que deban quedar en el olvido. A ello hace referencia el art. IV de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas."

SOBRE LA CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL, ESTA REGLA DE IMPRESCRIPTIBILIDAD PUEDE SER MODIFICADA SEGÚN VALORACIONES POLÍTICO-CRIMINALES EN UN MOMENTO HISTÓRICO DETERMINADO

"2. Ahora bien, en el caso de la corrupción gubernamental, esta regla de imprescriptibilidad puede ser modificada de acuerdo con las valoraciones político-criminales que se consideren prominentes en un momento histórico determinado, y efectuar las modificaciones necesarias a nivel constitucional o legislativo. En efecto, algunos países han decidido reconocer esta regla a nivel primario, como en el caso del art. 233 inc. 2° de la Constitución ecuatoriana de 2008. En cuanto a la regulación legal de asuntos como este, ha de entenderse que, por lo general, es un asunto de política criminal que concierne principalmente al Órgano Legislativo, dado su margen de acción estructural derivado del principio democrático [1]."
Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 139-2020, fecha de la resolución: 01/12/2021

[1] Sentencia de 7 de octubre de 2011, inconstitucionalidad 20-2006.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CONSIDERACIONES JURISPRUDENCIALES

"Por otra parte, sobre el art. 158 inc. 3º letra a CT, la jurisprudencia de este Tribunal [1] ha efectuado las siguientes consideraciones: en primer lugar, el impuesto sobre la renta grava los ingresos de las personas, físicas o jurídicas, y otros entes a los que la ley les da la calidad de sujetos pasivos del impuesto –fideicomisos, sucesiones, entre otros–, domiciliados o no, que obtengan rentas que provienen de diferentes fuentes. Se trata específicamente de un impuesto a las utilidades y ganancias –no al patrimonio ni al capital–, de naturaleza personal, subjetiva, progresiva y directa. Así, dentro de los servicios gravados se encuentra el de transporte nacional o internacional. En segundo lugar, en el transporte internacional de mercancías, el pago que se hace al prestador del servicio utilizado dentro del territorio de El Salvador por una persona domiciliada, constituye renta obtenida dentro del territorio nacional y consecuentemente, renta gravada, según se prevé en el art. 16 incs. 1º y 2º de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En tercer lugar, el impuesto sobre la renta no grava la actividad del transporte internacional, sino la renta obtenida en nuestro país por el sujeto no domiciliado, debido a la prestación del servicio de transporte –que es derivado de una actividad empresarial–, recibido por una persona domiciliada. Entonces, "¨[e]l hecho generador del impuesto sobre la renta ocurre al momento en que aquí en el país se paga o acredita el servicio. Y es en el momento del pago o acreditamiento en el que de conformidad al art. 158 letra a) [CT], que se efectúa la retención correspondiente [2]".

PARA SU CONFIGURACIÓN, SEGÚN LA JURISPRUDENCIA, NO ES IMPORTANTE EL DOMICILIO DEL PRESTADOR DEL SERVICIO, NI DONDE SE SUMINISTRA EL SERVICIO, SINO DÓNDE SE PAGA O ACREDITA DICHO SERVICIO

"Con base en tales consideraciones, en la jurisprudencia reseñada se ha establecido que para la configuración del tributo en comento, no es importante el domicilio del prestador del servicio, ni donde se suministra el servicio, sino dónde se paga o acredita dicho servicio. A esto deben sumarse tres aspectos fundamentales: (i) quién paga por el servicio de transporte internacional y la manera o mecanismo por medio del cual lo hace; (ii) quién es el sujeto normativo destinatario del tributario –es decir, qué sujeto realiza el hecho o situación descrita en la norma como aspecto material–; y, (iii) quién es el sujeto que debe efectuar la retención de la tasa del 5% sobre el valor del servicio de transporte internacional. Esto se debe a que, si bien los citados aspectos están estrechamente vinculados, cada uno de ellos acarrea diferentes consecuencias jurídicas.

---

1 Sentencia de 19 de junio de 2015, inconstitucionalidad 38-2012.

2 Inconstitucionalidad 38-2012, precitada.

En relación con el primer aspecto, la primera parte del art. 158 inc. 3º letra a CT abarca a todos los "sujetos pasivos domiciliados que efectúen el pago o acreditamiento a quien prestó el servicio, independientemente si contrató el servicio directamente o actúa como agente o representante del prestador del servicio". Conforme a este precepto, se colige que la fuente de la obligación tributaria tiene como origen el pago del servicio aludido. Esto implica que el pago –como contraprestación del servicio internacional de transporte– puede ser inmediato o mediato. En el primer caso, el importador contrata directamente con el prestador del servicio, es decir, ambos determinan las condiciones en las que se ejecutarán las prestaciones derivadas del contrato, por lo que el sujeto pasivo domiciliado paga al sujeto normativo que presta el servicio. En el segundo, aunque el sujeto pasivo domiciliado (importador/comprador local) no pacta con el transportista de forma directa, ejecuta el pago del servicio con la persona que se obliga a brindarlo. Por tanto, la norma prevé ambos supuestos y, por consiguiente, lo importante es determinar si el sujeto pasivo domiciliado pagó el precio de dicho servicio a quien se obligó a prestarlo, siendo irrelevante quién lo realizó materialmente.

En torno a la segunda cuestión, el sujeto pasivo de la obligación tributaria es el sujeto no domiciliado que obtuvo una renta por el servicio de transporte internacional que se obligó a prestar. Es decir, quien debe pagar el impuesto sobre la renta es el "prestador del servicio utilizado dentro del territorio de El Salvador por una persona domiciliada [3]". En tal contexto, cuando el sujeto pasivo domiciliado paga a otro que se ha obligado a prestar el servicio internacional de transporte, es este último quien obtiene una renta, independientemente de si es este quien finalmente prestará el mencionado servicio."

AGENTE DE RETENCIÓN EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

"Y, por último, quien debe efectuar la retención del tributo son todas personas naturales o jurídicas, sucesiones o fideicomisos, uniones de personas o sociedades de hecho domiciliadas en el país (art. 158 inc. 1º CT) que efectúen el pago o acreditamiento a quien prestó el servicio de transporte internacional, independientemente de si contrató el servicio directamente o actúa como agente o representante del prestador del servicio. Es decir, el agente de retención no asume ninguna obligación tributaria material en sentido estricto. Esta forma de comprender las diferentes obligaciones que derivan de dicho precepto ha sido adoptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, quien ha explicado que "es relevante aclarar que la figura de los agentes de retención se enmarca dentro de la gestión del impuesto y la doctrina la define entre los deberes de colaboración de las personas hacia la Administración Tributaria; y, en ningún momento conforma uno de los elementos del hecho generador de la obligación tributaria, sino más bien la retención es una deuda tributaria independiente de los agentes de retención, con respecto de la obligación principal, que anticipa el pago del impuesto en orden a la recaudación fiscal y, sobre todo, al equilibrio presupuestario [4].

---

3 Inconstitucionalidad 38-2012, ya mencionada.

4 Sentencia pronunciada el 11 de septiembre de 2007, proceso con referencia 27-2005.

Al aplicar estas consideraciones al caso concreto, se colige que el agente de retención será quien haya pagado o acreditado el pago a quien prestó el servicio de transporte internacional, independientemente de si contrató el servicio directamente. Es decir, el legislador ha configurado la obligación de retención en relación con los sujetos pasivos domiciliados que efectúen el pago o acreditamiento a quien prestó el servicio (pues ello constituye renta), y no en función de los sujetos que hayan otorgado un negocio jurídico relativo al servicio internacional de transporte. En otros términos, la retención procede cuando se ha incurrido en el pago del servicio aludido, independientemente de quién realizará materialmente este servicio."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 4-2018, fecha de la resolución: 13/10/2021

INAPLICABILIDAD DE LA LEY

REQUISITOS PARA SU TRÁMITE

"IV. Requisitos de la inaplicabilidad.

Según la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), la inaplicabilidad debe cumplir ciertos requisitos a fin de tramitar y decidir un proceso de inconstitucionalidad (arts. 77-B, 77-C y 77-F inc. 4º LPC). En concreto, tales requisitos son los siguientes: (i) la relación directa y principal que debe tener la ley, disposición o acto con la resolución del caso[1]; (ii) la inexistencia de pronunciamiento de esta sala sobre la constitucionalidad de la disposición, acto o cuerpo normativo inaplicado[2]; (iii) los elementos indispensables del control de constitucionalidad, esto es, el parámetro y objeto de control[3], y los motivos de inconstitucionalidad[4]; y (iv) el agotamiento de la posibilidad de interpretar el objeto de control conforme a la Constitución[5].

Con respecto a lo anterior, debe mencionarse que cuando un juez realiza el control difuso de constitucionalidad porque considera que una disposición contraviene la Constitución, debe cumplir uno a uno con los requisitos mencionados en el párrafo precedente para que el proceso de inconstitucionalidad sea tramitado. De esto deriva que el análisis de la resolución de inaplicación tiene carácter escalonado. En efecto, si en el examen liminar se determina que la resolución de inaplicación no cumple con el juicio de relevancia, este tribunal debe declarar improcedente el inicio del proceso sin necesidad de examinar el cumplimiento del siguiente paso. Lo mismo ocurre si se constata que la resolución cumple con el juicio de relevancia y que no existe pronunciamiento definitivo por parte de este tribunal, pero la resolución incumple con el contraste internormativo. En este último supuesto no es necesario analizar si el juez inaplicante agotó la posibilidad de una interpretación conforme a la Constitución. En otras palabras, el control difuso de constitucionalidad por parte de quien ejerce potestades jurisdiccionales se debe desarrollar en etapas sucesivas y cuya prosecución hacia la siguiente depende, por tanto, del cumplimiento de la finalización de la etapa anterior.

---

1 Para un mejor compresión, consúltese el auto de 18 de octubre de 2017, inconstitucionalidad 66-2017.

2 Este requisito se fundamenta en la obligatoriedad de las sentencias de este tribunal (arts. 183 Cn, 10 y 77-F inc. 4º LPC).

3 Auto de 4 de diciembre de 2015, inconstitucionalidad 132-2015.

4 Ej. auto de 30 de marzo de 2016, inconstitucionalidad 110-2015.

5 Ejemplo, sentencia de 7 de marzo de 2018, inconstitucionalidad 69-2015.

V. Análisis sobre la procedencia del inicio del proceso de inconstitucionalidad vía inaplicación.

1. A. Sobre el primer requerimiento, esta sala advierte que el art. 674 CPCM era relevante para la resolución del caso concreto, ya que la decisión que debía emitirse dependía de la norma cuestionada. Esto es así porque, tal como lo ha expuesto la jueza requirente, la ocupante no había justificado su calidad de arrendataria del inmueble que había sido adjudicado dentro de la audiencia prevista en el art. 670 inc. 1º CPCM. Por tal razón, la referida funcionaria estaba obligada a proceder a su lanzamiento, según lo que ordena la disposición inaplicada. Por ello, el requisito previsto en el art. 77-B letra a) LPC se tiene por cumplido.

B. En lo relativo a la segunda exigencia, a la fecha de la inaplicabilidad no existía (ni existe) ninguna decisión que haya sido emitida por esta sala que incida directamente sobre la validez o constitucionalidad del art. 674 CPCM. Con ello se cumple el requisito establecido en el art. 77-A inc. 3º LPC.

C. En relación con el tercer requisito, la autoridad judicial identificó adecuadamente el parámetro (arts. 2, 11, 12 y 119 Cn.) y el objeto de control (art. 674 CPCM) y concluye que existe una vulneración a los derechos de audiencia, defensa y a la vivienda de los no propietarios, porque el lanzamiento no es extensible a personas distintas del ejecutado o de los que con él convivan, pues el adjudicatario debe seguir los procesos que el ordenamiento jurídico ha previsto en contra de los ocupantes, a fin entrar en posesión del inmueble. Por ello, el requisito previsto en el art. 77-C LPC fue satisfecho.

D. Finalmente, acerca del cuarto presupuesto, el art. 674 CPCM tiene una estructura lingüística muy cerrada, de modo que no permite, al menos con facilidad, derivar o concretar una pluralidad de significados de entre los cuales la juez requirente haya debido seleccionar aquel que mejor se adecuara al contenido constitucional que considera violado. Por tanto, debe tenerse tentativamente por satisfecha la exigencia prevista en el art. 77-B letra b LPC.

2. Con base en lo anterior, esta sala considera que la jueza requirente ha expuesto mínimamente en forma adecuada los elementos del control de constitucionalidad indispensables para iniciar el presente proceso. En consecuencia, el proceso de inconstitucionalidad se desarrollará para enjuiciar la constitucionalidad del art. 674 CPCM, por la supuesta transgresión a los derechos de audiencia, defensa y a la vivienda de los no propietarios (arts. 2, 11, 12 y 119 Cn.), a fin de determinar si dicha disposición legal contraviene los derechos fundamentales antes mencionados."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 100-2018, fecha de la resolución: 14/06/2021

INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN

LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES PUEDEN ESTAR DIRIGIDOS A CUALQUIERA DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES

"IV. Inconstitucionalidad por omisión.

1. La Constitución salvadoreña posee una variada tipología de normas constitucionales. De ellas interesa destacar los mandatos constitucionales, que se caracterizan por su estructura relativamente incompleta. Generalmente, la existencia de este tipo de disposiciones constitucionales que tipifican mandatos se traduce en una serie de órdenes al legislador. Tales prescripciones no son meras proposiciones declarativas de buenas intenciones, sino verdaderas imposiciones jurídicas que obligan al órgano emisor a conectarlas con otras de desarrollo infraconstitucional para alcanzar su plenitud aplicativa.

Estos mandatos constitucionales dirigidos al legislador constituyen cierto tipo de normas incompletas porque, en línea de principio, invocan una remisión hacia un cuerpo jurídico diferente para ser completadas, con el fin de que la circunstancia a la que se refiere el mandato pueda cobrar plena eficacia. Los mandatos constitucionales pueden estar dirigidos a cualquiera de los órganos constitucionales. Cuando se dirigen al Órgano Legislativo, ellos reciben el nombre de mandatos al legislador y obligan a emitir determinadas normas generales y abstractas.

No es imperativo ni es una exigencia indefectible que los mandatos aparezcan explícitos en el texto de la Constitución. También pueden ser derivados por la jurisprudencia constitucional en la medida en que la emisión de disposiciones infraconstitucionales resulte imprescindible para dotar de eficacia plena a la norma constitucional que los contiene. De igual forma, tampoco es imprescindible que estos contengan un plazo para su emisión, pues, esta Sala, como órgano encargado del control de constitucionalidad, puede determinar la razonabilidad de la dilación en el comportamiento omisivo de los órganos y entes investidos de potestades normativas [1].

Las actuaciones que los mandatos constitucionales exigen realizar son tan necesarias que si no se llevan a cabo la Constitución podría verse vulnerada. De ahí la importancia de poder enjuiciar si ellas se han llevado a cabo. De negar esta posibilidad, se admitiría que la Asamblea Legislativa viole la Constitución mediante comportamientos omisivos. Y si se dejara la opción de cumplirlas o no, a discreción de los órganos ordinarios o constituidos, se los colocaría en el mismo nivel del constituyente [2]. Entre los criterios determinantes para analizar el cumplimiento del mandato constitucional están: su existencia como mandato explícito o implícito en la Constitución —el asunto de "si existe" el mandato constitucional— y la forma en que debe cumplirse —el "cómo cumplir" el mandato constitucional—. [3]"

LA ACEPTACIÓN DEL INSTITUTO DE LA OMISIÓN VULNERADORA DE LA NORMA CONSTITUCIONAL SE REFLEJA EN OBLIGACIONES DE HACER

"2. Debido a lo antedicho, el ordenamiento jurídico debe tener mecanismos y vías de defensa contra su infracción, sea por acción o por omisión, porque de otra forma se generaría su violación sin consecuencias y se negaría el carácter de norma jurídicamente vinculante de la Constitución [4].Por lo tanto, la aceptación del instituto de la omisión vulneradora de la norma constitucional se refleja en obligaciones de hacer, para cuya efectividad está diseñado el mecanismo procesal de control de las inconstitucionalidades por omisión.

A diferencia de otros países —Portugal, Brasil, Venezuela, Ecuador o Paraguay—, nuestra Ley de Procedimientos Constitucionales no prevé expresamente la inconstitucionalidad por omisión como itrio de los instrumentos que garantizan la eficacia de la constitucionalidad ante la inacción legislativa. Sin embargo, la jurisprudencia emitida por esta sala ha sostenido que tal instrumento de protección es aplicable en nuestro Derecho Procesal Constitucional por derivación directa de las funciones de la jurisdicción constitucional y el carácter normativo de la Constitución. Las razones que han sido argüidas para justificar la inconstitucionalidad por omisión son la fuerza normativa de la Constitución y su rango de supremacía, así como la fuerza normativa de los derechos fundamentales [5]."

---

1 Sentencia de 26 de febrero de 2002, inconstitucionalidad 19-98, e inadmisibilidad de 19 de julio de 2001, inconstitucionalidad 20-2001.

2 Improcedencia 25 de noviembre de 2015, inconstitucionalidad 104-2015.

3 Sentencia de 28 de abril de 2000, inconstitucionalidad 2-95.

4 Sentencia de 26 de enero de 2011, inconstitucionalidad 37-2004.

5 Sentencia de inconstitucionalidad 53-2012, ya citada.

ELEMENTOS TRASCENDENTALES PARA DETERMINAR CUÁNDO SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UNA INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN: LA FALTA DE DESARROLLO Y LA INEFICACIA DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES

"Se puede conceptualizar la omisión inconstitucional como la falta de desarrollo por parte del legislador —o del órgano a quien se dirige el mandato—, en un plazo razonable, de aquellos mandatos constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo, de forma que impida su eficaz aplicación. No se trata de una simple negativa de hacer: significa no hacer aquello a lo que, de forma concreta, se está constitucionalmente obligado. En la definición del tipo de control que nos ocupa, se conjugan dos elementos trascendentales para determinar cuándo se está en presencia de una inconstitucionalidad por omisión: la falta de desarrollo y la ineficacia de las disposiciones constitucionales. La falta de desarrollo se vincula con los preceptos constitucionales que requieren tal proceder de una forma específica. Asimismo, existe una inconstitucionalidad que se deriva de un accionar omisivo por parte del legislador cuando por mandato constitucional tendría que extender el alcance de la ley a determinadas materias y no lo hace, o cuando al omitir ciertos destinatarios produce vulneración de derechos fundamentales, principalmente en términos de igualdad en su ejercicio [6]."

OMISIÓN ABSOLUTA Y OMISIÓN PARCIAL

"Esta modalidad de vulneración constitucional se puede llevar a cabo de dos formas: como omisión absoluta, que consiste en la total ausencia de cualquier normativa que dote de eficacia a las normas constitucionales que lo requieren; y como omisión parcial, en la cual la normativa de desarrollo existe pero es insuficiente. Por tanto, la falta de desarrollo se concibe en un sentido amplio, que abarca no solo la total ausencia de legislación en el punto conflictivo, sino también la presencia de una normativa incompleta o parcial. En ese orden, las omisiones parciales no se restringen al quebrantamiento del principio de igualdad pues también abarcan las regulaciones incompletas de un instituto, capaz de originar la ineficacia del mandato constitucional y el consiguiente fraude a la norma fundamental. Consecuentemente, en las omisiones relativas se distinguen dos especies: las que infringen el principio de igualdad —exclusión arbitraria de beneficio— y las que suponen una deficiente regulación de un aspecto que le daría plenitud, es decir, completaría a la normativa constitucional.

3. De entrada, las diferencias entre estas formas de inconstitucionalidad se traducen en exigencias argumentativas distintas en la demanda. Por ejemplo, en caso de, acción es necesario establecer las razones por las que un acto o norma, que ya es fuente de Derecho, contraviene una norma constitucional. Y, en caso de omisión, se requiere que se establezca la existencia de la norma que contenga una orden concreta, específica e ineludible de producción normativa infraconstitucional de desarrollo o de realización de actos institucionales; la falta de desarrollo; y la ineficacia de las disposiciones constitucionales concernidas [7]. En consecuencia, el examen de constitucionalidad parte de la naturaleza de las alegaciones para determinar si, de acuerdo con esta, existe la incompatibilidad con la Constitución que es argumentada. De hecho, es tal la importancia de estas diferencias que este Tribunal ha sostenido que cuando existe un equívoco del actor en la técnica procesal constitucional para proteger el derecho que alega como violado, la demanda se debe rechazar mediante la figura de la improcedencia [8].

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 82-2016, fecha de la resolución: 20/12/2021

---

6 Sentencia de inconstitucionalidad 37-2004, ya citada.

7 Sentencia de 15 de febrero de 2012, inconstitucionalidad 66-2005, y resolución de 1 de noviembre de 2017, inconstitucionalidad 123-2017.

8 Auto de 28 de agosto de 2015, inconstitucionalidad 78-2015.

INDEPENDENCIA JUDICIAL

ALCANCE

"1. A. La independencia judicial implica la libre decisión de los asuntos sometidos a conocimiento de los tribunales de la República, sin interferencias o injerencias de órganos externos al Judicial, de otros tribunales o de las partes [1]. La libertad a la que se alude debe entenderse como ausencia de subordinación del juez o magistrado a otro poder jurídico o social que no sea la Constitución y la ley, puesto que su finalidad es asegurar la pureza de los criterios técnicos que incidirán en la elaboración jurisdiccional de la norma concreta irrevocable, que resuelve cada caso objeto de enjuiciamiento [2]."

PRINCIPIO DE UNIDAD JURISDICCIONAL, UNO DE LOS ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZARLA

"B. Uno de los elementos que contribuyen a garantizar la independencia judicial es el principio de unidad jurisdiccional. Según este, la potestad jurisdiccional es única e indivisible como derivación de la soberanía popular (art. 86 inc. 1° Cn.), lo que como regla general se manifiesta en la integración unitaria de los funcionarios que la ejercen dentro del Órgano Judicial [3]. Sin embargo, dicho principio admite excepciones que son reconocidas por la Constitución, que separa de dicho órgano a instituciones o entes públicos que tienen funciones jurisdiccionales, es decir, de interpretación y aplicación del derecho para la solución de conflictos sociales, con carácter irrevocable, sin perjuicio del sistema de recursos [4]. Las excepciones a la dimensión orgánica del principio de unidad jurisdiccional —jurisdicción de cuentas (art. 195 inc. 1° atrib. 3° Cn.), jurisdicción electoral (art. 208 Cn.), jurisdicción militar (art. 216 inc. 1° frase 1° Cn.)— indican que este principio es compatible con la especialización, cuando esta responda a condiciones objetivas, legales y no discriminatorias [5].

Lo fundamental del principio, incluso frente a dichas separaciones orgánicas excepcionales, radica en el ejercicio de la potestad jurisdiccional por funcionarios que, por su régimen o estatuto normativo, puedan calificarse: primero, como jueces, o sea decidores sujetos exclusivamente al Derecho aplicable; y, segundo, ordinarios, es decir, cuya competencia y procedimientos de actuación estén determinados previamente por la ley. En otras palabras, las diversificaciones de la potestad jurisdiccional, ubicadas por fuera del Órgano Judicial, son compatibles con el principio de unidad jurisdiccional cuando se garantiza que dicha potestad será ejercida por auténticos jueces. En este sentido, unidad jurisdiccional implica uniformidad del régimen jurídico elemental del juez, es decir, la identificación de unas características esenciales comunes a todos los funcionarios con potestad jurisdiccional o a que los tribunales adopten un modo específico de ser organizados y de funcionar: independencia, imparcialidad, responsabilidad y predeterminación legal y no discriminatoria [6]."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 83-2018, fecha de la resolución: 29/10/2021

---

1 Sentencias de 14 de febrero de 1997, de 20 de julio de 1999 y de 19 de abril de 2005, inconstitucionalidades 15-96, 5-99, 46-2003, respectivamente.

2 Sentencias de 20 de julio de 1999 y de 28 de marzo de 2006, inconstitucionalidades 5-99 y 2-2005, respectivamente

3 Inc. 5-99, ya citada

4 Sentencia de 8 de diciembre de 2006, inconstitucionalidad 19-2006.

5 Sentencia de 10 de junio de 2019, inconstitucionalidad 19-2016

6 Sentencia de 19 de abril de 2005, inconstitucionalidad 46-2003

MAGISTRADOS Y JUECES ESTÁN SOMETIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES

"1. El art. 172 inc. 3º Cn. establece que: "Los Magistrados y Jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes". La independencia judicial se exige a órganos a los que se encomienda como función primordial la garantía del respeto al ordenamiento jurídico, a los derechos fundamentales y a las competencias de los órganos constitucionales[1]. Para ello, implica la libre decisión de los asuntos sometidos a conocimiento de los tribunales de la República, sin interferencias o injerencias de órganos externos al judicial, de otros tribunales o de las partes [2]. Esta "libertad" debe entenderse como ausencia de subordinación del juez o magistrado a otro poder jurídico o social, puesto que su finalidad es asegurar la pureza de los criterios técnicos que incidirán en la elaboración jurisdiccional de la norma que resuelve cada caso objeto de enjuiciamiento [3].

FUNDAMENTO

"La independencia judicial se fundamenta en la necesidad de legitimación del juez, que no puede ser de tipo electoral, sino que depende de su exclusiva sumisión al Derecho y a la verdad de los hechos sobre los que conoce. Esto último exige, entre otros aspectos, de una especial justificación de las decisiones judiciales, las cuales pasan por una serie estructurada de decisiones previas y necesarias: la elección del material normativo susceptible de ser aplicado (verificación, depuración e interpretación); la prueba de los hechos (fijación del material fáctico probado); y la aplicación de las normas a los hechos (de sus consecuencias jurídicas) [4].

2. Existen diversas ideas que son consustanciales a la de independencia judicial. La primera de ellas es la prohibición de avocarse causas pendientes o fenecidas (art. 17 Cn.). Frente al Órgano Judicial, tal prohibición se puede entender en dos sentidos: uno estricto, que significa la no atracción, por un tribunal superior, de un proceso que esté siendo conocido por un tribunal inferior; y uno amplio, que implica la prohibición de revisar las resoluciones judiciales fuera del sistema de recursos. Ella también es aplicable frente a los otros órganos del Estado, ya que la exclusividad del Órgano Judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado excluye o impide la posibilidad de usurpación de las atribuciones judiciales por parte del Órgano Ejecutivo y el Legislativo. Esta exclusividad garantiza la independencia de los órganos jurisdiccionales frente a los otros órganos [5].

La segunda es la prohibición de vinculación partidaria de los funcionarios que ejercen control de constitucionalidad y legalidad [6]. Ello tiene un claro fundamento ético de la función pública, que procura evitar la colisión de intereses entre el control y las actividades políticas del funcionario. En definitiva, la incompatibilidad partidaria es una garantía objetiva de la independencia e imparcialidad de los magistrados y jueces [7]. La Constitución no solo prohíbe la vinculación partidaria formal, sino que también impide que los funcionarios antedichos tengan una vinculación material con algún partido político [8]."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 47-2016, fecha de la resolución: 06/09/2021

---

1 Sentencia de 13 de junio de 2014, inconstitucionalidad 18-2014.
2 Sentencias de 14 de febrero de 1997, de 20 de julio de 1999 y de 19 de abril de 2005, inconstitucionalidad 15-96, 5-99 y 46-2003, respectivamente.
3 Sentencia de 28 de marzo de 2006, inconstitucionalidad 2-2005.
4 Sentencia de 18 de diciembre de 2009, inconstitucionalidad 23-2003.
5 Sentencia de 27 de septiembre de 2005, hábeas corpus 136-2005.
6 Sentencia de 23 de enero de 2013, inconstitucionalidad 49-2011.
7 Sentencia de 14 de octubre de 2013, inconstitucionalidad 77-2013.
8 Sentencia de 25 de noviembre de 2016, inconstitucionalidad 56-2016.

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

DEFINICIÓN DESDE UN PUNTO DE VISTA JURÍDICO-ECONÓMICO

"1. En términos generales, la intermediación financiera es aquella realizada a través de las operaciones jurídicas que conforme al ordenamiento jurídico constituyen tal actividad económica. En consecuencia, no será intermediación financiera la ejecutada en aquellos negocios jurídicos que no sean reconocidos como tales por el marco regulatorio aplicable. Así, solo lo será la realizada por ciertos entes jurídicos previamente definidos por ley [1].

Así, desde un punto de vista jurídico-económico, la intermediación financiera puede ser concebida como "el proceso por medio del cual un agente económico, de manera masiva, habitual y con carácter profesional, capta fondos de los agentes excedentarios de moneda a fin de otorgar flujos de efectivo presentes a los agentes deficitarios para cubrir sus necesidades actuales y futuras, por medio de diferentes instrumentos y operaciones jurídicas a través de las cuales se realiza el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro público; obteniendo un rendimiento basado en la asunción del riesgo en caso de impago y en el resultado diferencial entre el interés pagado por las operaciones pasivas de crédito y el interés cobrado por las operaciones activas de crédito" [2]."

TODA ACTIVIDAD QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE IMPLIQUE INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS O LA CAPTACIÓN DEL AHORRO DEL PÚBLICO DEBE SER REGULADA Y SUPERVISADA POR EL ESTADO

"Ahora bien, esta Sala ha señalado [3] que en el proceso descrito, el Estado tiene un rol fundamental, ya que a partir del ejercicio de sus facultades de autorización, supervisión, vigilancia, fiscalización, inspección y sanción, coadyuva en la tutela de los diversos intereses económicos involucrados. Tal actividad constituye un género de tráfico cuya peculiaridad ha sido reconocida legislativamente —con la adopción de leyes que regulan la intermediación financiera—, y exige ciertas determinaciones del legislador que respondan adecuadamente a su particular importancia en la economía. Por lo tanto, la intermediación financiera es de interés general, porque en ella se advierte la relación entre el ahorro y la inversión, la cual tiene un papel fundamental en el desarrollo económico de los países. Por ello, toda actividad que directa o indirectamente implique intermediación de recursos o la captación del ahorro del público debe ser regulada y supervisada por el Estado. A este le corresponde garantizar el bienestar y el orden económico, pero sin anular o afectar los derechos fundamentales de los sujetos de Derecho que: se dediquen a la intermediación financiera. Y por esta

1 Sentencia de 22 de febrero de 2016, inconstitucionalidad 14-2014.
2 Sentencia de 18 de enero de 2016, inconstitucionalidad 126-2013.
3 Inconstitucionalidades 98-2013 AC., 126-2013 y 14-2014, precitadas.

razón, hay una especial tutela estatal sobre las actividades financiera, bursátil y aseguradora (entre otras) y, cualquier otra que implique captación de ahorró de manos del público [4]."

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA AL SISTEMA FINANCIERO, ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, DEBE ESTAR A CARGO DE UNA INSTITUCIÓN INDEPENDIENTE

"2. De lo anterior se colige que, para el adecuado desarrollo operativo del sistema financiero es indispensable una legislación singular que responda a la importancia que reviste el funcionamiento de las entidades de crédito para el conjunto de la economía, dada su posición central en los mecanismos de pago. En consecuencia, el ordenamiento jurídico debe someter a estas entidades a una regulación y supervisión administrativa mucho más intensas que las que soportan la mayor parte de los restantes sectores económicos, y cuyo designio esencial consiste en asegurar la confianza en ellas, lo que es sin duda un factor imprescindible para la buena marcha de la economía [5]. Entonces, "la autorización previa, supervisión, vigilancia, fiscalización, inspección y sanción de los agentes económicos que deseen participar en el mercado como intermediarios financieros, debe quedar a cargo de una institución independiente, autónoma y técnica, que vele por la estabilidad, transparencia, eficiencia y adecuado desarrollo del sistema financiero, velando por la seguridad y solidez de los integrantes del mismo" [6]."

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO ES LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE BANCOS, LUEGO DE HABER PASADO POR CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MISMA LEY

"3. En lo que respecta a los bancos, la jurisprudencia constitucional ya ha señalado que el art. 20 LB prescribe que la Superintendencia del Sistema Financiero será la encargada de autorizar el funcionamiento de bancos, luego de haber pasado por controles establecidos en la misma ley y haberse inscrito en el Registro de Comercio. Por su parte, el art. 6 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito (LBCSAC) —que derogó la Ley de Cajas de Crédito—, faculta a la Superintendencia del Sistema Financiero para que, luego de recibir toda la información requerida a las entidades financieras mencionadas, conceda la autorización para realizar las actividades reguladas en dicha ley [6]. Por consiguiente, de acuerdo con las leyes citadas, la Superintendencia del Sistema Financiero es la institución facultada por ley para autorizar a los bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito a que presten sus servicios en todo el territorio nacional, autorización que implica el pleno ejercicio de la actividad de intermediación financiera [7].

---

4 Inconstitucionalidades 98-2013 AC., 126-2013 y 14-2014, ya mencionadas.

5 Inconstitucionalidad 95-2013, ya citada.

6 Inconstitucionalidad 126-2013, precitada.

6 Inconstitucionalidades 98-2013 AC., 126-2013 y 14-2014, ya referidas.

7 Sentencia de 6 de julio de 2015, inconstitucionalidad 100-2013.

Asimismo, el art. 3 LSRSF establece que la Superintendencia es responsable de supervisar la actividad individual y consolidada de los integrantes del sistema financiero, y que para tales efectos le compete: autorizar la constitución, funcionamiento, inicio de operaciones, suspensión de operaciones, modificación, revocatoria de autorización, cierre y otros actos de los integrantes del sistema financiero, de conformidad a las disposiciones legales, reglamentarias o normativas técnicas establecidas al respecto. Concretamente, el art. 7 letras b) y g) de la mencionada ley confirma la anterior regulación al prescribir que están sujetos a dicha ley —y por tanto, a supervisión de la Superintendencia— los bancos constituidos en El Salvador, las sucursales y oficinas de bancos extranjeros, los bancos cooperativos, las sociedades de ahorro y crédito y las federaciones reguladas por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito.

En ese orden, los arts. 22 LB y 11 LBCSAC establecen que tales personas jurídicas deben informar al Superintendente del Sistema Financiero, la decisión de apertura de agencias, siendo tal funcionario el único que puede objetar en una resolución —objetivamente motivada— si considera que dicho proyecto tendrá un efecto negativo en la capacidad financiera y administrativa de los agentes económicos solicitantes. Las citadas disposiciones legales definen a la agencia como la oficina separada fiscalmente de la casa matriz u oficina central que forma parte integrante de la misma persona jurídica, que puede realizar las mismas operaciones de ésta, que no tiene capital asignado y cuya contabilidad no está separada de la casa matriz u oficina central."

4. Con base en las disposiciones legales expuestas, este Tribunal ha entendido que la emisión de una licencia para que una entidad financiera pueda funcionar es una atribución que le corresponde a la Superintendencia del Sistema Financiero, no a las municipalidades. Así, para que dicha entidad pública extienda la respectiva autorización, previamente evalúa al agente económico que pretende desarrollar la intermediación financiera, y, luego de que ha confirmado el cumplimiento de los respectivos requisitos, procede a autorizar su funcionamiento. Sucesivamente, la Superintendencia es la facultada para ejercer la supervisión, vigilancia, fiscalización, inspección y sanción de los intermediarios financieros, atribuciones que se encuentran fuera del ámbito competencia de las municipalidades [8].

En ese orden, esta Sala ha reiterado que otorgar una licencia para ejercer intermediación financiera no representa la mera entrega de un documento, sino que es el resultado de un procedimiento previo para evaluar si se cumplen los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, pues la actividad de intermediación financiera se considera un asunto de interés nacional y, por ende, una competencia del Estado central. En consecuencia, la entrega de una licencia para que opere un banco, no es una contraprestación que pueda ofrecer una municipalidad, por no estar autorizada para ello, sino que ello le corresponde a la Superintendencia del Sistema. Financiero [9]."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 215-2016, fecha de la resolución: 18/10/2021

---

8 Inconstitucionalidades 100-2013, 126-2013, 95-2013, 14-2014 y 982013 AC., precitadas.

9 Inconstitucionalidades previamente citadas.

INTERPRETACIÓN JURÍDICA

FUNDAMENTO

"2. Por otra parte, la interpretación jurídica de una disposición legal consiste en la atribución de un significado elegido entre varios posibles, con base en razones o argumentos que justifican esa forma de entender el texto como la alternativa más adecuada para resolver una duda, pregunta o problema interpretativo, que es el que origina la necesidad de interpretación [1]. La idea de atribución de significado implica que el texto carece de un significado normativo propio o determinante. En otras palabras, dicho significado no puede ser descubierto por el intérprete con una simple lectura, sino que este debe construirlo en función del problema a resolver. Entonces, la norma contenida en una disposición es el resultado que se le atribuye después de realizar la actividad interpretativa. La disposición por sí sola no basta para determinar un significado normativo [2].

La disposición no es igual que la norma. La primera se identifica con el texto o conjunto de enunciados que expresan normas. La segunda, por su parte, es la comprensión o forma de entender en términos jurídicos la disposición [3]. Esta diferencia ha sido reconocida por este Tribunal en su jurisprudencia, al haber afirmado que "por disposiciones jurídicas debe entenderse los enunciados o formulaciones lingüísticas expresadas en textos normativos, que es el objetó que ha ser interpretado por los jueces y tribunales; en cambio, las normas jurídicas se traducen en los significados [...] que son atribuidos a tales enunciados mediante la interpretación" [4]. Y puesto que el texto no admite una única interpretación, la disposición legal puede ser objeto de múltiples y variadas interpretaciones, presupuesto necesario para la aplicación de la exigencia de que el ordenamiento jurídico deba ser interpretado de modo coherente con la Constitución."

INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN

"Además del texto, la actividad interpretativa está limitada por el contexto. Los significados posibles de una disposición deben ser coherentes con el sistema jurídico, lo que incluye a la Constitución, de tal manera que deben rechazarse los que provoquen la aparición de un conflicto normativo. De ahí que la interpretación conforme a la Constitución se entienda como un criterio hermenéutico en virtud del cual, de entre los varios significados posibles de una disposición, debe elegirse el que mejor encaje con las normas constitucionales [5], con base en la unidad del orden jurídico y la supremacía constitucional.

En consecuencia, en el proceso de inconstitucionalidad, la interpretación conforme a la Constitución produce como efecto una sentencia formalmente desestimatoria, porque la disposición legal objeto de control no es invalidada —aún pertenece al sistema tras el pronunciamiento—, al admitir por lo menos un significado que se acomoda al precepto constitucional propuesto como parámetro de control. Pero, de modo simultáneo, dicho criterio hermenéutico implica también una sentencia materialmente estimatoria, debido a que "descarta" o "expulsa" del orden jurídico la interpretación que, según el actor, es incompatible con la Constitución [6]."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 91-2016-101-2017-157-2017, fecha de la resolución: 27/10/2021

---

1 Sentencia de 23 de mayo de 2018, inconstitucionalidad 149-2013.

2 Sentencias de 29 de abril de 2011, 14 de octubre de 2013 y 25 de junio de 2014, inconstitucionalidades 11- 2005, 77-2013 AC y 163-2013, respectivamente.

3 Véase la sentencia de 25 de junio de 2014, inconstitucionalidad 163-2013.

4 Consúltese la resolución de 27 de octubre de 2010, amparo 408-2010.

5 Al respecto, véase la sentencia de 8 de diciembre de 2006, inconstitucionalidad 19-2006.

6 Sentencia de inconstitucionalidad 149-2013, ya citada.

INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS

INTERPRETACIÓN CONFORME

"1. Sobre la interpretación sistemática de las disposiciones jurídicas, esta Sala ha sostenido que, desde un enfoque lógico-sistemático, estas deben ser estudiadas en su racionalidad y en sus relaciones con las demás disposiciones, conjuntamente con las cuales configuran un sistema orgánico, sistemáticamente organizado y armónico [1]. La razón es que el sentido de un texto normativo no solo está dado por los términos que lo expresan y su articulación sintáctica, sino por su vínculo con los demás. La interpretación de los enunciados jurídicos debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que los informan. Es así como las disposiciones deben interpretarse a partir del conjunto que conforma un cuerpo normativo. Es decir, es insuficiente que el intérprete del precepto atribuya la existencia de un mandato sin tener en cuenta el contenido íntegro de un texto normativo [2], ya que la ausencia de una interpretación sistemática posibilita llegar a conclusiones erróneas sobre esos mandatos [3].

Por lo antedicho, este Tribunal ha sostenido que los tribunales jurisdiccionales y las demás autoridades públicas deben actuar de conformidad a todo el ordenamiento jurídico y no solo en atención a las normas que regulan una actuación específica, tal como lo establecen la Constitución y el principio de unidad del ordenamiento jurídico. De manera que el operador jurídico debe: (i) identificar las disposiciones legales que incidan relevantemente en la interpretación de otras, y (ii) realizar una interpretación sistemática, integral y armónica de estas a la luz de los contenidos constitucionales [4].

2. Como consecuencia de lo anterior, se puede definir a la interpretación sistemática como aquella que intenta dotar a un enunciado de un significado sugerido desde el mismo sistema o contexto del que forma parte [5]. Este sistema está compuesto por el conjunto de preceptos conectados ya sea por la identidad de la fuente que los contiene, porque derivan de una misma materia, tienen la misma proyección institucional, son utilizadas por el mismo aplicador, o son derivables formalmente de una sola fuente. Ahora bien, esta coherencia o conexidad no se presume ni se debe entender como un dogma del ordenamiento jurídico, sino que opera como una carga argumental para el intérprete que busca la eficacia de la Constitución como unidad. Así, el aspecto central de la interpretación sistemática está en la delimitación del contexto de la disposición interpretada

---

1 Auto de 19 de marzo de 2018, amparo 548-2017.
2 Auto de 17 de enero de 2018, inconstitucionalidad 128-2017.
3 Auto de 1 de marzo de 2017, inconstitucionalidad 205-2016.
4 Sentencia de 18 de enero de 2016, inconstitucionalidad 126-2013.
5 Sentencia de 13 de mayo de 2011, inconstitucionalidad 7-2011.

que se va a considerar relevante para la determinación de su significado, de tal forma que en todos los casos se posibilite el "efecto útil" de las disposiciones constitucionales o legales [6].

Uno de los usos más notorios de la interpretación sistemática en el ámbito constitucional es el de la interpretación conforme. Según los precedentes constitucionales, la interpretación conforme es un criterio hermenéutico en virtud del cual, de entre los varios significados posibles de una disposición, debe seleccionarse el que mejor encaje con las normas constitucionales, con base en los principios de unidad del ordenamiento jurídico y supremacía constitucional [7]. En ese sentido, esta produce como efecto una sentencia formalmente desestimatoria, porque la disposición legal objeto de control no es invalidada, al admitir por lo menos un significado que se acomoda al precepto constitucional propuesto como parámetro de control. Pero, de modo simultáneo, implica también una sentencia materialmente estimatoria debido a que "descarta" o "expulsa" del orden jurídico la interpretación que es incompatible con la Constitución [8]."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 82-2016, fecha de la resolución: 20/12/2021

JUECES Y MAGISTRADOS

COMPETENCIA

"1. Corresponde ahora resolver el problema jurídico planteado: determinar si el art. 24 inc. 1º parte final LOJ viola los arts. 1 inc. 1º y 3 Cn. (seguridad jurídica e igualdad) al impedir que los jueces o tribunales dicten reglas o disposiciones de carácter general sobre la aplicación o interpretación de las leyes mediante sus precedentes (art. 172 inc. 3º Cn.).

2. En primer lugar, es necesario tomar en consideración que uno de los términos clave del art. 24 inc. 1º parte final LOJ es el de "carácter general", pues lo que los jueces o magistrados tendrían prohibido es dictar reglas o disposiciones con esa característica. Según una definición ampliamente aceptada por la teoría del Derecho, una norma general es la que se dirige a todos los sujetos de una clase, esto es, a todos los que se encuentran en una misma situación, en contraposición con las que se dirigen a un sujeto o sujetos determinados –estas últimas llamadas "normas particulares"–. De igual modo, suele reconocerse que las normas generales son, por antonomasia, las que provienen del Parlamento, Congreso o Asamblea Legislativa, según el nombre que se le dé en cada Estado, aunque también se acepta la existencia de otros entes con competencias normativas que pueden crearlas solamente si la Constitución

6 Véase sobre esto último la sentencia de inconstitucionalidad 7-2011 ya citada.
7 Sentencia de 23 de mayo de 2018, inconstitucionalidad 149-2013.
8 Sentencia de 15 de octubre de 2021, inconstitucionalidad 43-2018.

lo permite [1]. De igual manera, cabe la posibilidad excepcional de que hayan normas legislativas no generales [2]."

PRINCIPIO DE CORRECCIÓN FUNCIONAL

"Pues bien, una lectura integral del art. 24 LOJ sugiere que la acepción de "generalidad" ahí asumida es, precisamente, la descrita. Esto se infiere de su inciso final, que establece que la prohibición de jueces y magistrados de crear reglas o disposiciones generales es sin perjuicio de lo prescrito en el art. 183 Cn. o de que los tribunales superiores puedan hacer a los inferiores respectivos, según la graduación de ley, las prevenciones que estimen oportunas para la mejor administración de justicia, entendiéndose que esto último debe producirse en caso de que conozcan de sus resoluciones mediante un recurso, pues de lo contrario ello supondría una avocación de causas pendientes o fenecidas contraria al art. 17 Cn. Así, lo que el art. 24 inc. 1º LOJ pretende prohibir es que los jueces asuman el rol del legislador y busquen sustituirle, sin negar sus competencias revisoras en caso de recursos ni la necesidad de respetar los precedentes.

De hecho, inclusive los precedentes constitucionales se han plegado hacia esta postura. En numerosa jurisprudencia se ha afirmado que el control de constitucionalidad abstracto no puede recaer solo sobre las fuentes expresamente mencionadas en el art. 183 Cn. –leyes, decretos y reglamentos–, pues, se dice, "suele ocurrir que bajo la denominación de instructivo, circular, directiva, lineamiento, o cualquier otro término, se cobijen normas que, efectivamente, regulen situaciones jurídicas de los administrados con carácter de generalidad, abstracción y permanencia; por lo cual, pese a su nombre, posean un carácter reglamentario –en sentido material–. Por tanto, su naturaleza normativa será determinada por las situaciones jurídicas que disciplinen y no por la denominación que se les haya asignado" [3] (itálicas propias). Y si, entonces, lo que justifica el control constitucional es el carácter general y abstracto de una norma, el virtual reconocimiento de que los jueces o magistrados puedan estatuir reglas generales conduciría a un resultado: las decisiones judiciales podrían ser objeto de control en un proceso de inconstitucionalidad –y no del amparo y hábeas corpus o de los recursos judiciales–.

Esta interpretación es coherente con el principio de corrección funcional, según el cual la interpretación de la Constitución (en este supuesto, los arts. 1, 2, 3 y 172 Cn.) no puede contradecir la distribución constitucional de funciones, atribuciones y competencias entre los órganos del Estado [4]. Esto se debe a que asumir lo contrario –que jueces y magistrados pueden crear o dictar normas generales– implicaría desconocer la reserva de ley, las competencias de la Asamblea Legislativa y la separación entre ente legislativo y juzgador (arts. 121 y 131 ord. 5º Cn.). Por ejemplo, si se aceptase la tesis que el actor propone, podría

---

1 Así se ha reconocido, por ejemplo, en la sentencia de 28 de septiembre de 2015, inconstitucionalidad 64-2013.

2 Resolución de 28 de octubre de 2009, inconstitucionalidad 15-2008

3 Resolución de 1 de julio de 2015, inconstitucionalidad 100-2014.

4 Sentencia de 24 de octubre 2014, inconstitucionalidad 33-2012..

llegar a ser posible que una alta corte cree figuras delictivas o circunstancias agravantes [5], causales de despido, supuestos de pérdida de bienes, entre otras cosas igualmente rechazables, sin ninguna disposición que respalde alguna interpretación."

CREACIÓN DE NORMAS GENERALES SOLAMENTE ES COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, Y MUY EXCEPCIONALMENTE, DE LOS OTROS ÓRGANOS A QUIENES LA CONSTITUCIÓN LES CONFIERE POTESTADES NORMATIVAS

"En consecuencia, la creación de normas generales solamente es competencia de la Asamblea Legislativa –y muy excepcionalmente, de los otros órganos a quienes la Constitución les confiere potestades normativas, cuando así lo establezca la norma fundamental, como en los casos de reserva de ley relativa aplicable a la creación de tasas y contribuciones municipales por parte de Concejos Municipales o de los reglamentos que puede emitir el Presidente de la República–. Los jueces y magistrados no tienen dicha competencia ni pueden asumirla, pues de tenerla o reconocérsela mediante un precedente constitucional se invadiría la zona de reserva que le corresponde al legislador [6], lo cual va en contra de la seguridad jurídica."

EXCEPCIONALMENTE EXISTEN NORMAS CONSTITUTIVAS QUE LES PERMITE A LOS JUECES Y MAGISTRADOS ESTATUIR PRECEDENTES CON ALCANCES CUALIFICADOS O CON UNA POSICIÓN JERÁRQUICA DISTINTA A LA USUAL

"3. A. Que esto sea así no es incompatible con la igualdad y seguridad jurídicas ni con lo afirmado acerca del alcance y posición de los precedentes judiciales. Según se dijo, esto último depende de las normas constitutivas del sistema jurídico. Pues bien, del mismo modo en que dicho sistema prohíbe que los jueces y magistrados creen normas o reglas generales, excepcionalmente establece normas constitutivas que les permite estatuir precedentes con alcances cualificados o con una posición jerárquica distinta a la usual. El primer caso de excepción es el de los precedentes constitucionales, que es referido en el inciso 2º del art. 24 LOJ –"[l]o anterior debe entenderse sin perjuicio de lo prescrito en el Art. 183 de la Constitución" [...]–, pues esa ha sido la decisión constituyente que es respetada por el legislador (arts. 138, 149 inc. 2º, 174, 182 atribución 7ª, 183 y 247 Cn.).

---

5 Este límite está representado por el principio de legalidad penal. En la sentencia de 23 de diciembre de 2010, inconstitucionalidad 5-2001 AC, esta Sala sostuvo que "[e]n materia penal, tanto la exigencia objetiva de regularidad estructural del sistema como la certeza del derecho respecto de los ciudadanos, es representada por el principio de legalidad. Su fundamento político-criminal reside no solamente en la salvaguarda de la seguridad jurídica, sino además, en ser una garantía política del ciudadano de no ser sometido a penas o sanciones que no hayan sido aceptadas previamente, evitando así los abusos de poder. Para ello, se exige que la ley establezca en forma precisa las diversas conductas punibles y las sanciones respectivas" (las itálicas son propias).

6 Sobre esto, ver la sentencia de 21 de junio de 2002, inconstitucionalidad 3-99.

El segundo caso excepcional es el de la doctrina legal, que es prevista por distintas leyes del país como motivo de casación: (i) el Código Procesal Civil y Mercantil, que señala que "[h]ay infracción de doctrina legal cuando se hubiera violado la jurisprudencia establecida por el tribunal de casación, surgida de la aplicación e interpretación de las leyes y que esté contenida en tres o más sentencias constantes, uniformes y no interrumpidas por otra doctrina legal" (art. 522 inc. final); (ii) el Código Procesal Penal, que establece que "[s]e entiende por doctrina legal la jurisprudencia establecida por los tribunales con competencia en casación en tres sentencias uniformes y no interrumpidas por otra en contrario, siempre que lo resuelto sea sobre materias idénticas en casos semejantes" (art. 478 nº 6); y (iii) el Código de Trabajo, que determina que "[s]e entiende por doctrina legal la jurisprudencia establecida por los tribunales de casación, en cinco sentencias uniformes y no interrumpidas por otra en contrario, siempre que lo resuelto sea sobre materias idénticas en casos semejantes" (art. 588 nº 1).

Tal como se advierte, en ciertos casos la Asamblea Legislativa ha "renunciado", por decirlo de esa manera, a su competencia para crear normas generales: cuando se trata de precedentes constitucionales, pues sus efectos generales derivan de una decisión constituyente, aunque, cabe decirlo, no pueden conducir a que esta Sala sustituya el rol del legislador; y en casos de doctrina legal. Esas son las dos normas constitutivas básicas acerca del alcance y posición de los precedentes judiciales.

B. Con la interpretación del art. 24 inc. 1º LOJ que se ha apuntado tampoco se renunciaría a los principios de igualdad y seguridad jurídica. Que los jueces y magistrados no puedan crear normas generales no supone en absoluto que sus precedentes –inclusive aquellos que no constituyan doctrina legal de los tribunales casacionales– pierdan el carácter de fuente de Derecho aludido en el considerando VI. Pero, para hacerlo valer, las Cámaras de Segunda Instancia o Salas de la Corte Suprema de Justicia, según sus competencias, únicamente cuentan con la posibilidad de corregir las resoluciones de los tribunales inferiores por medio del sistema de recursos –se insiste en que ello no puede ser de oficio o por otras vías–."

AUTOPRECEDENTES

"En esa misma línea, tampoco supone que las decisiones judiciales no se rijan por la idea del autoprecedente. Cuando un juez o tribunal adopta un criterio, debe atenerse a él en todos los casos que guarden semejanza relevante con el precedente aplicable, a menos que brinde razones para cambiarlo, esto es, cuando exista error interpretativo, cambios de la realidad normada o cambios de la conformación subjetiva del tribunal. O bien, cuando las características del caso a decidir no se asemejen relevantemente con las del anterior, pues entonces no tiene ningún sentido recurrir a él. Esto es garantía de que todos recibirán la misma respuesta bajo las mismas circunstancias, de que no existirán privilegios marcados por algo que no sean los hechos del caso y las normas aplicables y de certeza y previsibilidad de los criterios judiciales, sin colocar al justiciable en situación de duda sobre cuál resolución tendrá su caso por cuestiones puramente situacionales. Por lo dicho en este considerando, esta Sala estima que no existe la inconstitucionalidad alegada por el demandante, por lo que así se deberá declarar en esta sentencia."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 47-2016, fecha de la resolución: 06/09/2021

JURISPRUDENCIA

FUENTE DE DERECHO Y EL VALOR DE LOS PRECEDENTES

"VI. Jurisprudencia como fuente de Derecho y el valor de los precedentes en el sistema de fuentes.

1. A. Las fuentes de Derecho son fundamentales para la existencia del sistema jurídico, pues el consenso con respecto a cuáles entidades pueden considerarse como tales conduce a una práctica concordante de identificación del Derecho. En tal sentido, su función primordial es la de servir como criterios de reconocimiento de los enunciados jurídicos que conforman el sistema. Esta noción sobre la fundamentalidad y funcionalidad de las fuentes sirve para establecer una base de la que partir: aquello que se denomine como "fuente de Derecho" crea y/o produce normas jurídicas obligatorias para sus destinatarios. Hay un asunto detrás de este tema: la seguridad jurídica. Una buena sistematización de ellas y una respuesta suficiente sobre los criterios de diferenciación del Derecho y no-Derecho sirven para alcanzar el estado de certeza que persigue dicha seguridad. Esto, debido a que se reducen los márgenes de decisionismo y resolución libre de los casos "no regulados"."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 47-2016, fecha de la resolución: 06/09/2021

LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 66 INC. 2

"1. Del texto del art. 66 inc. 2º LFE resulta claro que se cumple el supuesto de identidad subjetiva, porque la reiteración en una infracción administrativa muy grave debe ser cometida por el mismo sujeto que ya ha sido sancionado previamente por una contravención de la misma naturaleza. En lo referente a la identidad fáctica, no obstante que la reincidencia conlleva un hecho nuevo en el tiempo, debe considerarse que este parte necesariamente de un vínculo o referencia con un hecho anterior, ya sancionado y cometido por el mismo sujeto infractor, se trata, pues, de una acción que carece de identidad diferenciada con el hecho reincidente. La necesidad de este vínculo fáctico se reconoce del texto del presupuesto cuestionado que prevé la consecuencia jurídica a partir de una infracción administrativa pasada y juzgada. De eso se sigue que en el caso en estudio, sí existe identidad fáctica. Por último, para establecer la identidad de fundamento se debe dilucidar si la sanción a la conducta reiterada o reincidente es homogénea o no en cuanto a su causa con respecto a la sanción impuesta por las infracciones muy graves previamente cometidas. Por ello, el precepto impugnado no incurrirá en la prohibición de doble enjuiciamiento o múltiple persecución –a pesar que la identidad subjetiva y fáctica existan– si las sanciones responden a la protección de bienes jurídicos o intereses públicos distintos. Mientras que, será inconstitucional si los bienes jurídicos o intereses afectados son semejantes o análogos en su fundamento.

En ese contexto, a partir de lo establecido en los considerandos de la Ley de Firma Electrónica y por lo dicho por los intervinientes este Tribunal considera que el castigo por incurrir en infracción muy grave (art. 66 letra c LFE) y la sanción al comportamiento reiterado o reincidente que comprende la disposición impugnada tienen como causa o fundamento, reforzar la seguridad de aquellas personas que realizan transacciones autorizadas mediante las aplicaciones de la tecnología o la suscripción electrónica de las mismas, por el posible uso inadecuado de medios informáticos o técnicos –lo cual también ha sido reconocido por la Asamblea Legislativa–. Esto quiere decir que la gravedad de la sanción regulada en el art. 66 inc. 2º LFE parte de la consideración de un residual efecto acumulativo derivado de una primera sanción aplicada. Por lo cual, se verifica la existencia de identidad en el fundamento entre la sanción que dicha ley regula en el precepto enjuiciado y la sanción que se impone por cometer una infracción muy grave (art. 66 letra c LFE). Esto desvirtúa la tesis de la Asamblea Legislativa, según la cual, el precepto impugnado contiene una pluralidad de acciones que dan lugar a distintas sanciones. Contrario a ello, se ha verificado que la sanción estatuida en el art. 66 inc. 2º LFE no es una sanción independiente, porque tiene como sustrato la sanción impuesta de forma previa por incurrir en una infracción administrativa muy grave.

Al haberse comprobado la existencia de la triple identidad exigida como requisito para la configuración del principio que prohíbe el doble juzgamiento o la doble persecución, se declarará la inconstitucionalidad del art. 66 inc. 2º LFE por su incompatibilidad con el art. 11 inc. 1º Cn."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 50-2018AC, fecha de la resolución: 15/11/2021

LIBERTAD ECONÓMICA

EL ESTADO ES GARANTE DE QUE LAS PERSONAS PUEDAN DEDICARSE A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE MÁS LES PLAZCA, A FIN DE CONSEGUIR LA REALIZACIÓN O SATISFACCIÓN DE UNA NECESIDAD, UN INTERÉS O UNA UTILIDAD SOCIAL

"Desde el punto de vista constitucional, uno de los ámbitos que ha quedado reservado para la regulación mediante ley formal es la libertad. Este derecho (art. 2 Cn.) implica la facultad que tiene toda persona, frente a terceros y especialmente a los poderes públicos, a determinar libremente su conducta siempre que sea lícita, esto es, a optar por una u otra acción, cosa o situación según sus propias ideas, preferencias, intereses o capacidades, sin que medien influencias externas no deseadas [1]. Por tanto, implica la facultad de realizar actividades lícitas (plano positivo) y la prohibición, dirigida al Estado y a los terceros, de efectuar cualquier actuación que impida a su titular llevar a cabo aquello que desea o lo conmine a hacer lo que no desea (plano negativo) [2]. En ese orden, la libertad se concretiza en diferentes formas. Así, los sujetos normativos tienen libertad de religión, expresión, circulación, contratación, testamentifacción y libertad eco-

1 Sentencia de 17 de febrero de 2017, amparo 822-2013.

2 Sentencia de 6 de junio de 2018, am paro 273-2016.

nómica. Sobre esta última proyección de la libertad, este Tribunal advierte que los arts. 2, 8 y 102 Cn. no solo recalcan la existencia de un derecho general de libertad de las personas, sino que reconocen a estas un derecho de libertad en lo propiamente económico, es decir, reconoce la llamada libre iniciativa privada, en donde el Estado es garante de que las personas puedan dedicarse a la actividad económica que más les plazca, a fin de conseguir la realización o satisfacción de una necesidad, un interés o una utilidad social [3].

De conformidad con esta concepción constitucional, la libertad económica se vincula directamente con el proceso económico que vive un país. De ahí que son tres las grandes etapas de manifestación: la primera, referida a la iniciativa de producción de bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades humanas; la segunda, la distribución de esos bienes y servicios puestos al alcance de los consumidores en la cantidad y en el tiempo que son requeridos; y la tercera, el consumo o uso, utilización y aprovechamiento de esos bienes o servicios [4]. La libertad económica manifestada en estas etapas, construye una gran red de personas partícipes en el proceso económico, dentro del cual los productores satisfacen las necesidades económicas de los consumidores o usuarios y estos retribuyen tal satisfacción de necesidades, lográndose así un círculo que se completa con la producción, comercialización y consumo de lo producido [5]. En ese contexto, la libertad económica, en cuanto libertad jurídica, solo puede existir y operar sometida a límites constitucionales y legales, que buscan asegurar su ejercicio armónico y congruente con los derechos de los demás, con el interés y el bienestar de la comunidad, con el medio ambiente, y con los derechos de los trabajadores y de los consumidores y usuarios en general [6].”

REGULACIÓN A DIVERSOS SECTORES DE LA PRODUCCIÓN NO IMPLICA QUE SE OBSTACULICE EL FOMENTO A UN SECTOR

“Por lo anterior, si el art. 102 Cn. señala que el Estado fomentará los diversos sectores de la producción, ello no implica que la regulación de los sectores de la protección, sobre todo en atención a otros intereses igualmente constitucionales, obstaculice el fomento de un sector. Y es que, este Tribunal ha explicado que la igualdad de oportunidades y la distribución razonablemente igualitaria de la libertad permiten inferir que el mercado irrestricto y la libre competencia absolutizada desvirtúan, en su aplicación y funcionamiento, el sentido humanista de los parámetros constitucionales que propugnan valores como la justicia, la igualdad, el bienestar general, y la misma libertad, pues no se tendrá disponibilidad real de acceso para todos, si la libertad económica sin limitaciones engendra marginalidad, desempleo, y condiciones indecorosas de vida para muchos sectores de la sociedad [7].”

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 25-2016, fecha de la resolución: 20/12/2021

---

3 Auto de 2 de julio de 2014, inconstitucionalidad 143-2013.

4 Sentencia de 13 de octubre de 2010, inconstitucionalidad 17-2006.

5 Sentencia de 26 de julio de 1999, inconstitucionalidad 2-92.

6 Sentencia de 21 de septiembre de 2012, inconstitucionalidad 60-2005 AC.

7 Sentencia de 13 de diciembre de 2005, inconstitucionalidad 8-2004.

NE BIS IN ÍDEM O NON BIS IN ÍEM

PROHIBICIÓN DE UN EJERCICIO REITERADO DEL IUS PUNIENDI DEL ESTADO QUE IMPIDE CASTIGAR DOBLEMENTE UNA MISMA ACCIÓN U OMISIÓN

"IV. La prohibición de doble juzgamiento.

Una vez determinado el marco general constitucional que rige y limita el ejercicio del poder sancionatorio por parte de la administración, conviene explicar el contenido del principio constitucional conocido como ne bis in ídem o non bis in íem –o denominado usualmente como la prohibición de la doble imposición de una pena, de un doble juzgamiento o de la múltiple persecución– que, como ya se dijo, forma parte del cuadro de garantías penales que la Constitución establece.

Uno de los principios fundamentales operativos en el ámbito del ius puniendi estatal, y que esta Sala ha erigido como susceptible de protección constitucional y de aplicación directa e inmediata, es el relativo al non bis in ídem [1]; aforismo latino, traducible literalmente como "no dos veces en lo mismo", que se entiende, de manera general, como la prohibición de un ejercicio reiterado del ius puniendi del Estado que impide castigar doblemente una misma acción u omisión.

En el Sistema Internacional de Derechos Humanos, el non bis in ídem se encuentra regulado en los arts. 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ([n]adie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país) y 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos), los cuales señalan la imposibilidad de ser juzgado por los mismos hechos sobre los que exista ya sentencia firme; disposiciones convencionales, que conforme al art. 144 inc. 2º Cn., forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, son obligatorias para todos los poderes públicos.

En El Salvador, el art. 11 Cn. contempla un radio de protección que alcanza la prohibición de efectuar más de un juicio por la misma causa. Bajo tal premisa, nuestra Ley Suprema estableció la prohibición de doble juzgamiento, desde lo que la doctrina procesal llama "criterio amplio", dado que, el parámetro de control se extiende, no solo para prohibir la doble sanción por el mismo hecho, sino hasta proscribir incluso esa posibilidad, prohibiendo previamente el doble juzgamiento, y por ende el doble procesamiento [2].

En consecuencia, el entendimiento de la referida garantía se impone no únicamente en cuanto impedimento de una doble condena sino también de evitar una doble persecución y juzgamiento por lo mismo. Así se ha entendido por esta Sala, al explicar que "... el art. 11 de la Constitución [...] establece que nadie será perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Esto se traduce en la imposibilidad de que una persona sea sometida a dos procesos penales en forma simultánea o en forma sucesiva sobre los mismos hechos, pues eventualmente o en un caso extremo se estaría exponiendo al procesado a una doble condena [3]".

De acuerdo con lo anterior, esta garantía a favor del ciudadano se distingue en: (i) una vertiente sustantiva o material, que impide la imposición de doble condena por un mismo hecho, que tiene como finalidad evitar una reacción punitiva desproporcionada [4] y, (ii) una vertiente procedimental o procesal, que prohíbe la posibilidad de un doble procedimiento sucesivo o simultáneo[5]."

1 Sentencia de 10 de agosto de 2012, hábeas corpus 162-2011.

2 Sentencia de 13 de febrero de 2015, inconstitucionalidad 21-2012.

3 Sentencia de 10 de diciembre de 2003, hábeas corpus 111-2003.

4 Sentencia de 13 de febrero de 2015, inconstitucionalidad 21-2012.

EL TÉRMINO “ENJUICIADO” DEBE ENTENDERSE COMO UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO

“En esa línea, existe una línea jurisprudencia ya consolidada en este Tribunal que efectúa un análisis hermenéutica del art. 11 Cn., la cual ha sostenido que el término “enjuiciado” debe entenderse como un pronunciamiento de fondo, sin que pueda existir un procedimiento posterior sobre los mismos hechos, sujetos y motivos; por lo que, dicha disposición centra su protección en la preferencia de la vertiente formal o procesal que deriva del principio non bis in ídem –lo que en definitiva, es el primer nivel de defensa para el ciudadano–, dejando ulteriormente –sin que por ello sea menos importante– la garantía material, la cual surte efectos, en defecto del desarrollo de un proceso judicial o administrativo [6].”

ANÁLISIS DEL TÉRMINO “CAUSA” CONTENIDO EN EL ART. 11 DE LA CONSTITUCIÓN

“Mientras que el término “causa” contenido en la citada disposición constitucional, se ha dicho que se relaciona con la triple identidad de las categorías jurídicas contenidas en el referido principio: (i) identidad personal, el cual indica que, para que opere la prohibición de doble persecución, debe de tratarse de un mismo sujeto de Derecho, es decir, la persona procesada y juzgada por una acción u omisión debe ser la misma, lo que conlleva una referencia estrictamente personal, y solo puede amparar a la persona natural o jurídica que ya ha sido perseguida; (ii) identidad ficticia, la cual explica que hechos idénticos y correspondientes al mismo periodo son incapaces de dar lugar a dos diferentes procedimientos sancionadores; por lo tanto, tal cuadro fáctico ya no puede ni debe ser objeto de un nuevo enjuiciamiento, independientemente de la calificación jurídica que pretenda subsumirse; (iii) identidad de fundamento, indica que debe tratarse del mismo motivo por el cual se juzga, y con ello se hace referencia al mismo objetivo final del proceso, si concurre la misma causa de infracción administrativa, corresponde declarar la identidad, por cuanto se trata del mismo motivo de juzgamiento[7]; a los cuales deben de agregarse como elementos integradores de esta garantía, (iv) que se trate de un proceso válido; y, (v) que haya recaído resolución de carácter definitivo [8].

En este contexto, el non bis in ídem se refiere tanto a identidad objetiva (que se relaciona con la coincidencia tanto fáctica como jurídica de los hechos y de las pretensiones), como a una identidad subjetiva (que se relaciona tanto con el actor y el demandado o sindicado). Así resulta evidente que los extremos relativos al referido principio en cuanto a los hechos y en cuanto a los sujetos no plantean dificultades hermenéuticas difíciles, ya que el primero se entiende como la plataforma fáctica que permite efectuar el ulterior análisis jurídico de la probable dualidad, y en cuanto a los segundos –particularmente en cuanto al sindicado– la identificación es plena debido a la necesidad de formular una imputación a una persona concreta en materia sancionatoria penal, administrativa o disciplinaria; en otras palabras, de entre estos tres factores, la concurrencia de la identidad subjetiva suele ser obvia, mientras que es la discusión de la identidad de hechos y de fundamento la que resulta más problemática.”

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 50-2018AC, fecha de la resolución: 15/11/2021

---

5 Sentencia de 29 de abril de 2013, inconstitucionalidad 63-2010.

6 Sentencia de 4 de mayo de 1999, amparo 231-98.

7 Sentencia de 2 de diciembre de 2011, hábeas corpus 94-2009.

8 Sentencia de 13 de febrero de 2015, inconstitucionalidad 21-2012.

NORMAS

DIFERENCIA ENTRE NORMAS GENERALES Y ESPECIALES

"En el diseño constitucional de creación normativa, la Asamblea Legislativa tiene la competencia para decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias (art. 131 ord. 5° Cn.). Estos productos normativos pueden tener un alcance territorial de carácter nacional (ej., el presupuesto de ingresos y egresos de la Administración Pública, de conformidad con el art. 131 ord. 8° Cn.) o municipal (como las leyes de impuestos municipales, según los arts. 131 ord. 6°, 133 ord. 4° y 204 ord. 6° Cn.), y a su vez pueden regular una materia de modo general o especial, según el caso [1].

En ese sentido, puede haber leyes aplicables en todo el territorio nacional y otras de alcance local que, junto con las ordenanzas y reglamentos locales emitidos por los concejos municipales (art. 204 ord. 5° Cn.), fijan el ordenamiento jurídico aplicable en la circunscripción territorial municipal [2]. Tales ámbitos deben mantener coherencia debido a las exigencias elementales de seguridad jurídica (art. 2 Cn.).

Ahora bien, la relación entre normas generales y especiales puede presentar problemas de aplicación. Así, una "ley general" regula un ámbito amplio de sujetos, situaciones o estado de cosas, mientras que la "ley especial" regula un sector más reducido y por ello sustrae del ámbito de aplicación de la ley general una situación o estado de cosas particular [3]. Las normas especiales establecen situaciones con un ámbito material más concreto que las normas generales. [4]"

"LEY ESPECIAL"

"El vocablo "ley especial" designa una norma que extrae de otra una institución, situación o supuesto de hecho y lo provee de una regulación distinta. La tendencia de este tipo de ley es la concreción o singularización, de modo que representa una excepción a la norma de alcance general. Si la ley especial no existiera, su supuesto de hecho automáticamente quedaría comprendido en el más amplio de la norma general. O dicho en sentido inverso: si la norma especial existe, lo regulado por ella no quedaría abarcado por la regulación de la norma general. Lo que no está previsto en una norma especial es porque la autoridad emisora ha querido reservarlo a la norma general. Por esta razón es que la norma especial se aparta de la norma general en aquello que regula de modo diferente [5].

La noción de normativa especial es relacional. Una normativa no es intrínsecamente especial, sino solo cuando se la compara con otra, a la que se considera general. Una normativa especial sustrae de una regulación, que a partir de ese momento se considerará "general", la materia regulada o supuesto de hecho. La finalidad es dotarla de una regulación diferente. Esto indica que entre una norma general y una norma especial no se producen antinomias [6]. Si se parte de la premisa de que la norma especial sustrae una institución o una situación de una norma general, entonces debe concluirse que entre ambas habrá una regulación diferente, pero no incompatible o contradictoria.

El criterio de la especialidad debe entenderse como una guía que indica que la norma que debe aplicarse prioritariamente es la que tenga un ámbito de regulación más restringido, esto es, la norma cuyo supuesto de hecho sea más preciso en comparación con el de la otra. La especie prevalece sobre el género [7]."
Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 232-2016, fecha de la resolución: 20/12/2021

---

1 Sentencias de 1 de abril de 2004, inconstitucionalidad 52-2003 AC y de 4 de abril de 2008, inconstitucionalidad 40-2006 AC.
2 Inc. 50-2015, precitada.
3 Sentencias de las inconstitucionalidades 52-2003 AC y 40-2006 AC, precitadas.
4 Sentencia 19 de julio de 1996, inconstitucionalidad 1-92 AC
5 Inconstitucionalidad 50-2015, precitada.
6 Sentencia de 14 de diciembre de 2020, inconstitucionalidad 159-2015 AC.
7 Inconstitucionalidad 159-2015 AC, precitada..

OBJETO DE CONTROL

EN LOS PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEBE EXISTIR UNA BASE RACIONAL O FUENTE OBJETIVA QUE LO COMPRUEBE

"La jurisprudencia constitucional ha explicado que cuando se propone como objeto de control un acto concreto por incumplimiento de algún requisito constitucional de validez, el alegato por lo general tiene un carácter fáctico, de hecho o probatorio, que debe ser establecido con suficiente verosimilitud por el demandante y que, como tal, no puede ser suplido por este tribunal. En específico, cuando se alega la existencia de una situación jurídica que es incompatible con alguno de los requisitos de validez constitucional del acto de aplicación directa de la Constitución, esa situación no puede ser simplemente afirmada, sin ninguna base racional o fuente objetiva, pues, de no ser así, el proceso se iniciaría por simples afirmaciones posiblemente carentes de fundamento, lo que implicaría un riesgo excesivo de realizar en vano la actuación jurisdiccional. Cuando un planteamiento de este tipo sea probable, pero incompleto en su fundamento fáctico, su insuficiencia provocará que la pretensión se rechace al basarse en aseveraciones infundadas[1].

En suma, no basta con que se especule o afirme que algún hecho ha tenido lugar, sino que es necesario que el demandante presente alguna especie de indicio mínimo (prueba) que lleve a este tribunal a entender que los hechos afirmados efectivamente existen y que pueden ser sostenidos en un proceso judicial. Hay que recordar que en los procesos judiciales, cualquiera que sea su naturaleza, hay una actividad probatoria. Y que dicha actividad no es más que una exigencia hacia las partes, en primer lugar, y hacia los jueces mismos, en segundo lugar, pues estos últimos no pueden dar por acreditados hechos que no han sido probados dentro del proceso. Esto aplica en el proceso de inconstitucionalidad."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 10-2021, fecha de la resolución: 10/03/2021

ÓRGANO JUDICIAL

COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA CONOCER, DECIDIR Y EJECUTAR LO DECIDIDO EN CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE ENTRE LAS PERSONAS

"B. En nuestro sistema jurídico, el art. 172 inc. 1º Cn. atribuye al Órgano Judicial la función de "juzgar y ejecutar lo juzgado". De esta disposición deriva el principio de exclusividad de la jurisdicción. En virtud de él, el Órgano Judicial es el único órgano competente para conocer, decidir y ejecutar lo decidido en cualquier controversia que se suscite entre las personas o cuando, por la relevancia o interés general de que ciertas situaciones se declaren o concreten por medio

[1] Resoluciones de 25 de junio de 2014, de 7 de noviembre de 2014, de 13 de mayo de 2016, de 19 de diciembre de 2016 y de 31 de marzo de 2017, inconstitucionalidades 44-2014, 81-2014 y 15-2016, 170-2016 y 174-2016, en ese orden.

de tal órgano, su intervención sea necesaria [1]. Dicho principio implica un monopolio estatal y un monopolio judicial, en virtud de la determinación del órgano del Estado al cual se atribuye la jurisdicción. Por tanto, ningún otro órgano distinto del Judicial puede realizar el Derecho en un caso concreto, juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo juzgado [2]. En consecuencia de lo expuesto, los precedentes judiciales son fuente de Derecho.

2. Ahora corresponde dar cuenta de la posición o alcance que los precedentes ocupan en el sistema de fuentes. Para hacerlo, debe partirse de que una sentencia judicial tiene carácter institucional, ya que implica el ejercicio de una norma constitutiva, pues autoriza a los jueces a producir resultados institucionales. En tal sentido, es el Derecho positivo el que les confiere la competencia de aplicar enunciados jurídicos para casos concretos y de establecer dichos precedentes. De modo que lo que las normas constitutivas pertinentes establezcan en relación con ello es el punto clave para determinar cuál es dicha posición o alcance.

Una norma constitutiva es la que prevé las condiciones exigibles para la producción y existencia de situaciones jurídicas o de resultados institucionales, y son condición necesaria para la producción de las consecuencias jurídicas a que se refieren. Se dividen en puramente constitutivas, que condicionan la producción de un resultado institucional a la ocurrencia de un cierto estado de cosas; y en reglas que confieren poder, que vinculan el surgimiento de un resultado institucional y la creación de un estado de cosas a la realización deliberada de una acción o de un conjunto de acciones encaminadas a ese fin, siempre que dichas acciones estén amparadas por una norma jurídica que faculte a alguien a ejecutarlas [3].

En tal sentido, cuando aquí se afirma que los precedentes tienen la posición jerárquica o alcance que derivaría de las normas constitutivas que los regulan, quiere decirse que es el constituyente o legislador, según el caso, quien prefija esa situación. Así, la "realización deliberada de la acción" de pronunciar una sentencia o resolución produce un "estado de cosas" así establecido o autorizado de antemano por uno u otro en cuanto a los efectos irradiantes de dichos precedentes respecto de los tribunales de inferior jerarquía y respecto de un juez o tribunal hacia sí mismo –reglas de precedente vertical y autoprecedente–.

Lo afirmado en el párrafo anterior no implica que se reduzca a los jueces a simples autómatas sin capacidad de análisis. Por el contrario, al reconocer la exclusividad de la jurisdicción y la independencia judicial (art. 172 Cn.), el constituyente dignifica a la figura del juez y le confiere la competencia para interpretar los textos normativos y aplicar las normas que resulten de dicha interpretación, siempre que esté dentro de los márgenes razonables de lo que sus palabras puedan significar. Como ha sostenido este Tribunal, la interpretación jurídica no es una actividad librada a las preferencias subjetivas de cada intérprete. En ella, el texto sigue siendo el objeto de su actividad y por ello es un límite real que condiciona las alternativas que pueden proponerse como significado de la disposición, sin que eso suponga caer en literalismo o textualismo [4]."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 47-2016, fecha de la resolución: 06/09/2021

---

1 Sentencia de 28 de mayo de 2018, inconstitucionalidad 146-2014.

2 Sentencia de 18 de mayo de 2004, amparo 1032-2002.

3 Sentencia de 19 de agosto de 2020, controversia 8-2020.

4 Sentencia de 25 de junio de 2014, inconstitucionalidad 163-2013.

PARÁMETRO DE CONTROL

SIMPLE INVOCACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS COMO CONTROL DE LAS LEYES, ES INSUFICIENTE SI NO SE JUSTIFICA UNA CONEXIÓN DIRECTA CON LA CONSTITUCIÓN

"C. Por otra parte, uno de los argumentos de la demanda se centra en que el art. 13 letra b LPP violaría el art. 16 CADH. En esencia, el actor ha sugerido como parámetro de control directamente una disposición de un tratado internacional. Lo anterior es relevante, ya que si bien la jurisprudencia constitucional admite la posibilidad de controlar las leyes a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos, la simple invocación de estos es insuficiente para configurar adecuadamente el parámetro de control. Y esto es así porque en el proceso de inconstitucionalidad el parámetro de control solo está conformado por la Constitución, "[...] única determinante del significado y contenido de la materia constitucional en nuestro ordenamiento jurídico". Por tanto, la pretensión en su fundamento jurídico es deficiente, por lo que de entrar al análisis solicitado, el Tribunal se autoatribuiría la facultad de fiscalizar en el proceso de inconstitucionalidad el contenido de un precepto legal a la luz de un tratado internacional, sin que se haya justificado cómo este tiene conexión directa con la Constitución: el actor no ha justificado por qué debe considerarse que la mencionada disposición convencional contiene un mayor campo de cobertura a la establecida en el art. 72 ord. 2º Cn., que haga posible el establecimiento de fructíferas directrices para una interpretación humanista y extensiva del derecho de asociación para constituir partidos políticos. Por tanto, debe sobreseerse en este proceso la supuesta infracción del art. 13 letra b LPP al art. 16 CADH."
Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 4-2016, fecha de la resolución: 25/08/2021

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

CONSIDERACIONES EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

"V. Sobre la pena privativa de libertad en la jurisprudencia constitucional.

1. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que en el ámbito de la lucha contra la criminalidad, el Estado se ve obligado a desarrollar una, serie de medidas encaminadas tanto a su prevención como a su combate y a la rehabilitación del delincuente, lo cual constituye el marco de la política criminal. Esta puede definirse como el conjunto de decisiones sobre cómo las instituciones del Estado responden al problema de la criminalidad (delito, delincuente y víctima) y la estructuración y funcionamiento de las diversas agencias relacionadas con el sistema penal (ministerios, administración penitenciaria, tribunales, ministerio público fiscal y policía) [1].

[1] Sentencia de 14 de febrero de 1997, inconstitucionalidad 15-96 AC.

Asimismo, se ha explicado que una política criminal de corte integral, requiere –al menos– de seis elementos básicos: (i) la prevención del delito; (ii) la persecución del delito; (iii) la rehabilitación del delincuente; (iv) la constitucionalidad y legalidad de las actividades tendentes a desarrollar los primeros tres aspectos; (v) el fortalecimiento institucional, organizacional y coordinación entre las instituciones responsables del diseño y ejecución de la política criminal; y (vi) la coordinación, recíproca alimentación y alta comunicación entre Estado y sociedad.

Desde esta perspectiva, la articulación de forma coordinada de medidas de carácter preventivo, represivo y de reinserción de los penados pueden generar buenos resultados en orden a la;, reducción de los delitos, pero poniendo énfasis inicialmente en la prevención social en sectores poblacionales vulnerables –por ejemplo, jóvenes de escasos recursos, madres solteras, personas desempleados– que pueden verse sugestionados a realizar actividades delictivas (prevención primaria y prevención secundaria). Y de igual manera, la ejecución de la pena privativa de libertad debe procurar, al menos, la realización de un proceso de ejecución que permita, luego de su cesación, que el condenado no vuelva a recaer en el delito (prevención terciaria)."

EL PODER PUNITIVO ESTATAL DEBE RESPETAR UN CONJUNTO DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, A FIN DE CONSERVAR ESA LEGITIMIDAD ANTE LA SOCIEDAD

"2. Sin embargo, los fines de eficacia que suelen regir en las actividades de persecución del delito así como en la ejecución de las diversas sanciones –en particular, las penas privativas de libertad– encuentran un límite infranqueable en el respeto a los límites consustanciales al Estado de Derecho. Al respecto, se ha dicho que la opción por un modelo [de política criminal] respetuoso de los postulados constitucionales es una exigencia constitucional que no se puede soslayar, a pesar del grado de eficacia que pudieran alcanzar otro tipo de medidas ilegítimas [2].

De igual forma, el poder punitivo estatal –por su misma condición de poder jurídico estatal– debe respetar un conjunto de principios constitucionales a fin de conservar esa legitimidad ante la sociedad, a saber: necesidad, legalidad, imputación subjetiva y culpabilidad, con sus correspondientes corolarios: subsidiariedad, intervención mínima, carácter fragmentario del Derecho penal, preeminencia absoluta de la ley, taxatividad en la formulación de las figuras penales, etc."

FINALIDAD DE LA PENA

"3. Lo anterior implica una concepción utilitaria de la pena que tiene como finalidad básica la prevención de los delitos a través de la disuasión colectiva –prevención general– o mediante un modelo de ejecución penitenciaria que permita llevar una vida posterior en libertad sin recaer nuevamente en el delito –prevención especial positiva–. Y más aún, la promulgación de normas penales busca desarrollar una cultura de respeto a la legalidad conforme la función

---

2 Sentencia de 1 de abril de 2004, inconstitucionalidad 52-2003 AC.

ético social que es inherente a su naturaleza jurídica. Es lo que actualmente se denomina prevención general positiva. En este último sentido, las normas de conducta penales muestran lo que está prohibido y lo que se debe hacer. En segundo lugar, la aplicación de la pena, refuerza y mantiene la confianza en la capacidad del orden jurídico de permanecer e imponerse. Por último, el Derecho penal, en la medida en que existe y es aplicado, crea y fortalece en la mayoría de los ciudadanos una permanente actitud legal individual de respeto a las normas sociales cuya obediencia se refuerza mediante las conminaciones penales.

Pero, la consecución de dichas finalidades se asientan en un irrestricto respeto al principio constitucional de humanidad contemplado en el art. 27 inc. 2° Cn. Así, las relaciones humanas con la justicia penal –y en específico, la penitenciaria– deben configurarse sobre la base del respeto a la dignidad de la persona (art. 1 inc. 1° Cn.), esto es, la condición del ser humano como "fin en sí mismo" y no como un "simple medio" al servicio del Estado para incidir en la comunidad [3].

De ahí que, en el modelo de un Estado constitucional y democrático, el principio de humanidad no se conforma solamente con prohibir dentro del ámbito de las consecuencias jurídicas del delito, que la persona sufra ofensas o humillaciones que adquieran la característica de degradantes o inhumanas, sino que, además, expresa una decidida voluntad de rehabilitar a los delincuentes así como brindarles asistencia, dentro y posteriormente fuera de la cárcel, a quienes manifiesten expresamente su deseo de respetar la ley. Así, lo, ha entendido esta Sala al estimar que: "[...] la reintegración social, del condenado impone el ofrecimiento a quien cumple la pena de una serie de servicios que vayan desde la instrucción básica y profesional hasta los servicios sanitarios y psicológicos, pero ello no desde una concepción acorde con la disciplina carcelaria, sino recursos idóneos que contribuyan a solventar situaciones de carencia y privación de oportunidades frecuentemente relacionadas con la historia particular de cada recluso y reclusa. Por todo ello, los programas y servicios que se ofrecen en el ámbito del tratamiento penitenciario, deber ir dirigidos a volver más aptas las condiciones sociales a las que el detenido regresa; y en particular, aquellas que se relacionan con su núcleo familiar del cual volverá a formar parte [4]. Y es que la sanción penal y el tratamiento penitenciario resultan justificados constitucionalmente cuando –además de ser respetuosos de la dignidad del inculpado– busquen la protección de bienes jurídicos por medio de m sistema de cumplimiento de penas que permita a futuro la reintegración social y familiar [5]."

FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE HUMANIDAD Y DE REINSERCIÓN DE LOS PENADOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN

"4. En otras palabras, el principio de humanidad y de reinserción de los penados contemplado en el art. 27 incs. 2° y 3° Cn., tiene el propósito de proscribir la imposición de sanciones inútiles, cuando no claramente perjudiciales, para el condenado; pero también, el de adaptar a las penas privativas de libertad –y de

3 Sentencia de 1 de abril de 2004, inconstitucionalidad 52-2003 AC.

4 Sentencia de 28 de septiembre de 2015, inconstitucionalidad 128-2012.

5 Sentencia de 27 de mayo de 2016, habeas corpus 119-2014 AC.

igual forma a las medidas de Seguridad– a las exigencias actuales que propugnan el penitenciarismo moderno y la criminología. Ello significa ofrecer al penado, los medios y recursos que le procuren una vida futura sin delito, y entre tales se encuentran algunos de carácter asistencial y material –trabajo penitenciario, educación, asistencia psicológica, control médico, etc.–. No obstante, debe aclararse que cuando sea ineludible la ejecución de la pena privativa de libertad por largos, periodos del tiempo, ella debe respetar la dignidad del recluso y evitar, en lo posible, el fenómeno de la desocialización que suele producirse en el medio carcelario."

PENA PRIVATIVA DE LARGA DURACIÓN

"1. Expuesto lo anterior, es pertinente referirse al ámbito a la magnitud máxima de la pena privativa de libertad que en el ordenamiento jurídico-penal interno puede llegar, en la actualidad, a los sesenta años. Inicialmente, cabe aclarar que no estamos en presencia de una pena perpetua en sentido estricto, ya que la característica esencial de este tipo de sanciones es la nula posibilidad de recobrar la libertad, perdurando la estancia en prisión hasta la muerte del condenado. En cambio, el art. 45 n° 1 CP sí establece un límite máximo de la pena de prisión de sesenta años. Por ende, se trata de una pena privativa de larga duración, en la que es posible que el recluso pueda retornar a la sociedad una vez cumplido el término de la condena, haya sido beneficiado con el otorgamiento de la libertad condicional ordinaria, la anticipada o la que se dicta por razones humanitarias. De igual forma, cabe la aplicación de los beneficios comprendidos en las fases de confianza y semi-libertad contemplados en la Ley Penitenciaria una vez que se satisfagan las condiciones señaladas en su texto.

2. Como se estableció en la sentencia pronunciada en este proceso, el legislador no se le veda la posibilidad de que en el marco abstracto de la pena deba atender a criterios preventivo-generales –positivos o negativos– que incidan claramente en la magnitud superior de la consecuencia jurídica. Resulta obvio entonces, que las finalidades de disuasión colectiva a través de la pena sean –de forma ineludible– tomadas en cuenta. Así, si bien no pueden existir penas que vuelvan imposible la ejecución de un tratamiento penitenciario, esta Sala no considera que ello incida en una inconstitucionalidad de las penas de larga duración como acontece con el art. 45 n° 1 CP, ya que la modificación legislativa no cierra la posibilidad de acceder a los permisos de salida, la concesión de la libertad condicional al cumplir las dos terceras partes de la pena (ordinaria) o la mitad (anticipada), o brindar su otorgamiento por razones humanitarias, aún y cuando se acceda a ello en un tramo considerable del cumplimiento de la condena.

En efecto, en lo que concierne a la fijación abstracta de la pena privativa de libertad, existe un ámbito de valoración legislativa que puede tener como referentes fines prevalentes de la pena como la prevención general negativa y positiva, los cuales deben ponderarse con el fin constitucional de la resocialización.

3. Lo anterior, debe entenderse sin perjuicio que el legislador tome a bien introducir, bien dentro de la libertad condicional o a través de una figura autónoma dentro del Código Penal o la Ley Penitenciaria, la posibilidad de revisión de una pena de larga duración al tener un cumplimiento efectivo de al menos una cuarta parte de la misma –por ejemplo: quince años. Otra posibilidad similar es la introducción en la Ley Penitenciaria de modulaciones en el régimen de cumplimiento que posibiliten la reinserción social progresiva del recluso cuando

demuestre de forma fehaciente su deseo de llevar una vida en libertad sin delito, compatibilizando ello con los principios de resocialización y de dignidad humana anteriormente relacionados. Esta imprescindible reforma legislativa, deberá tener en cuenta la edad del condenado como uno de los factores importantes al momento establecer la posibilidad de revisión. Además, tomar en cuenta de forma obligada, los dictámenes criminológicos pertinentes los cuales deben revelar una prognosis positiva de reinserción y una mínima peligrosidad individual.

4. En conclusión, el establecimiento de un máximo de pena de sesenta años de prisión, no es contraria al art. 27 incs. 2° y 3° Cn., ya que la modificación legislativa no cierra la posibilidad de acceder a la libertad condicional y a otros beneficios penitenciarios que se relacionan con las fases del cumplimiento de pena. Esto, sin perjuicio de que el legislador en su ámbito de libertad de configuración y previsión normativa, pueda prever mecanismos de revisión a partir del cumplimiento de un determinado tramo de la condena."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 5-2001, fecha de la resolución: 13/10/2021

POTESTAD SANCIONADORA DEL ESTADO

ÁMBITOS

"V. Límites de las relaciones de supremacía especial.

1. Sobre tales relaciones de supremacía especial, la jurisprudencia constitucional ha sostenido [1] que la potestad sancionadora del Estado se bifurca en dos ámbitos: (i) aquella que tiene como fin preservar los intereses de la colectividad mediante el castigo de las conductas de los ciudadanos que se dirigen a vulnerar ese orden previamente establecido (la protección general o heterotutela); y (ii) otra, que atiende a los fines de auto-protección, en cuanto a que su razón de ser es el mantenimiento del orden y la eficacia de la organización interna de la administración pública (la denominada potestad disciplinaria o auto-tutela). Esta última, a diferencia de la primera, se justifica en un poder de coacción que necesita la administración para proteger su propia organización como titular de las mismas frente a determinadas conductas de sus miembros [2]. Por ende, tal potestad disciplinaria tiene un marcado carácter instrumental basado en el esquema de una organización óptima y eficaz en cuanto al logro de sus fines institucionales [3].

Conforme lo anterior, la relación de supremacía especial es aquella relación jurídico-pública de sometimiento, en la que se encuentran aquellas personas que, como parte integrante de un determinado aparato gubernamental, están bajo la dirección inmediata del poder público, con cierto carácter duradero y a favor de un determinado fin administrativo. En otros términos, estamos en presencia de relaciones jurídico-administrativas caracterizables por una efectiva inser-

1 En la sentencia de 29 de abril de 2013, inconstitucionalidad 18-2008.
2 Sobre el tema se pronunció esta sala en la sentencia de 14 de diciembre de 2015, inconstitucionalidad 171-2013.
3 Sentencia de 27 de Agosto de 2014, inconstitucionalidad 79-2011

ción del administrado en la esfera organizativa de la administración cualesquiera que esta sea (militar, policial, penitenciaria, sanitaria, etc.), a resultas de la cual queda sometido a un régimen jurídico peculiar, que se traduce en un especial tratamiento de la libertad y de los derechos fundamentales, así como de sus instituciones de garantía, de forma adecuada a los fines típicos de cada relación [4].

En tales casos, la disciplina interna de tal marco organizativo es el bien jurídico esencial cuya protección debe asegurarse ante todo; lo que justifica la creación de un régimen dirigido a reprimir aquellas conductas desordenadas que puedan poner en peligro el orden interno, atenten gravemente a la ética pública o no se correspondan con un desempeño normal en los distintos roles ocupacionales, lo cual es un elemento clave en cualquier sistema de recursos humanos."

CARACTERÍSTICAS DOCTRINARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

"2. Ahora bien, este derecho doméstico de la administración pública, se caracteriza doctrinariamente por las siguientes notas distintivas: (i) acentuada situación de dependencia, de la cual emanan determinadas obligaciones; (ii) un estado de libertad limitado; (iii) existencia de una relación personal; (iv) imposibilidad de establecer de antemano la extensión y el contenido de las prestaciones, así como la intensidad de las necesarias intervenciones coactivas en la esfera de los afectados; (v) el hecho de que el individuo tiene que obedecer órdenes, las cuales necesariamente no emanan directamente de la ley; (vi) que tal situación se explique en razón de un determinado fin administrativo; (vii) la alusión del evento de voluntariedad en dicha situación de sometimiento; y (viii) la admisión, expresa o tácita, que la justificación de dicha relación se encuentra en la necesidad de una eficiencia y productividad administrativa [5]. Cada una de estas características se presenta con distinta intensidad de acuerdo con el papel que desempeñe el individuo (ej., no es el mismo el del militar en servicio activo que el del funcionario civil, etc.).

No obstante lo anterior, las relaciones de supremacía especial no implican un ámbito de libre configuración por parte de la administración. Al contrario, la noción misma del principio constitucional de legalidad, implica que ella únicamente podrá conformar este tipo de relaciones cuando exista fundamento en la ley, la cual que debe estar suficientemente determinada y delimitada en cuanto a su contenido, objeto, fin y extensión, de tal manera que dicha intervención pueda ser previsible y calculable para el ciudadano. Esto es así porque el principio de legalidad de la administración debe regir plenamente en las relaciones de supremacía especial como consecuencia de una decisión jurídico-constitucional derivada del Estado de Derecho, aun cuando tal autorización se realice en defecto de una regulación específica mediante una cláusula legal, cuando los fines administrativos perseguidas requieran una necesaria elasticidad en su formulación."

RESTRICCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SÓLO SON LEGÍTIMAS SI SE JUSTIFICAN MEDIANTE UN NECESARIO ANÁLISIS DE PONDERACIÓN

"2. Finalmente, debe señalarse de forma precisa [6] que las restricciones en el ámbito de los derechos fundamentales solo son legítimas constitucionalmente

---

4 Sobre dicho aspecto esta sala se pronunció en la sentencia de 17 de enero de 2020, inconstitucionalidad 28-2015 AC

5 Sentencia de 14 de diciembre de 2015, inconstitucionalidad 171-2013.

6 Como ha sostenido esta sala en la ya citada inconstitucionalidad 18-2008.

si se encuentran justificadas mediante un necesario análisis de ponderación, es decir, si son idóneas, necesarias y proporcionadas para garantizar el correcto ejercicio de la función administrativa y de los intereses sociales a los cuales está llamada a procurar, lo que ocurre en estas relaciones especiales. A ello debe agregarse un aspecto más, la sustanciación de un expediente disciplinario debe cumplir con el estándar mínimo de garantías propias de un proceso constitucionalmente configurado, especialmente las que se concretan en los derechos de audiencia y defensa del presunto infractor."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 176-2016, fecha de la resolución: 01/11/2021

POTESTAD TRIBUTARIA MUNICIPAL

EN MATERIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES, LA POTESTAD NORMATIVA ES SUMAMENTE RESTRINGIDA PARA LOS MUNICIPIOS, SEGÚN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

"1. Uno de esos márgenes de actuación local es la potestad tributaria municipal (art. 204 ord. 1° Cn.), cuyo ejercicio se ve matizado en la medida del tributo que se pretenda implementar. En primer lugar, la jurisprudencia constitucional ha indicado que en materia de impuestos municipales, las comunas tienen una potestad normativa sumamente restringida, pues en tal área opera el principio de reserva de ley —arts. 133 ord. 4° y 204 ord. 5° Cn. —[1]. De manera que, si bien se admite la intervención normativa municipal, esta supone una potestad derivada de la ley respectiva. Por tanto, existirá habilitación normativa para el municipio sólo si la ley correspondiente efectúa una remisión o habilitación expresa, inequívoca, concreta y específica —en relación con aspectos o cuestiones singulares y completamente identificables—, plenamente delimitada —hecha de modo que precise los términos materiales de la cuestión que se remite, de tal forma que su ámbito de actuación quede indubitablemente circunscrito—[2].

Asimismo, en lo que respecta específicamente a las tasas y contribuciones especiales municipales, la situación es diferente, ya que en el esquema constitucional salvadoreño se establece una amplia potestad tributaria para los municipios, pues se trata de una potestad normativa que no se origina en una ley secundaria, sino directamente en la Ley Fundamental [3]. Entonces, los concejos municipales son los designados constitucionalmente para emitir la regulación que configure las tasas y contribuciones especiales municipales. A ellos les corresponde establecer los elementos estructurales de los citados tributos —hecho generador, quantum, base imponible, sujetos pasivos—, y no solo efectuar una regulación de tipo puramente reglamentaria —como ocurre con los impuestos municipales—. Todo ello, a la luz del principio de autonomía municipal [4].

---

1 Sentencia de 22 de mayo de 2013, inconstitucionalidad 25-2009.
2 Sentencia de 30 de julio de 2014, inconstitucionalidad 21-2009.
3 Sentencia de 1 de octubre de 2014, inconstitucionalidad 87-2010.
4 Sentencia de 22 de febrero de 2016, inconstitucionalidad 14-2014.

De acuerdo con lo anterior, esta Sala también ha explicitado que el art. 204 ord. 1° Cn. dispone que la "autonomía del Municipio comprende crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones públicas para la realización de obras determinadas dentro de los límites que una ley general establezca". Con ello, la Constitución fortalece un aspecto esencial de la autonomía municipal: el relativo a los ingresos tributarios [5]. Ahora bien, dicha potestad nace directamente de la. Constitución, pero de conformidad con el propio texto constitucional, también está ligada a lo que una ley marco establezca. Así, tal atribución está contemplada igualmente en el art. 3 n° 1 CM, que también se fundamenta en el art. 204 ord. 1° Cn., el cual, al regular posibilidad jurídica de crear tasas y contribuciones especiales, también determina que el ejercicio de esa potestad está sujeto a la ley. Entonces, la Constitución ha dispuesto que la ley desarrolle las reglas de contenido material o de producción jurídica que sirvan para determinar la validez o invalidez de las normas municipales que crean tributos [6]."

LEY GENERAL TRIBUTARIA MUNICIPAL ESTABLECE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS Y EL MARCO NORMATIVO GENERAL QUE REQUIEREN LOS MUNICIPIOS PARA EJERCITAR Y DESARROLLAR SU POTESTAD TRIBUTARIA

"En esa línea, la ley marco a la que la Constitución y el Código Municipal se refieren es la Ley General Tributaria Municipal, la cual dispone su art. 1 inc. 1°, que "tiene como finalidad establecer los principios básicos y el marco normativo general que requieren los municipios para ejercitar y desarrollar su potestad tributaria, de conformidad con el [art. 204 ords. 10 y 6° Cn.]" De tal forma, "se entiende que el ejercicio de la actividad impositiva de los municipios involucra la titularidad de un poder tributario circunscrito a las competencias atribuidas por mandato constitucional y desarrolladas por el resto del ordenamiento jurídico, el cual les posibilita, en la medida de las circunstancias fácticas y jurídicas, crear ciertas clases de tributos —tasas y contribuciones especiales—, con la finalidad de tener autosuficiencia económica [7]."

LA POTESTAD TRIBUTARIA MUNICIPAL SE EJECUTA POR MEDIO DE LA EMISIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES

"En ese sentido, el ejercicio de la potestad tributaria municipal se ejecuta por medio de la emisión de ordenanzas municipales, las cuales, según los arts. 202 ord. 1° Cn. y32 CM "son normas de aplicación general dentro del municipio sobre asuntos de interés local. Entrarán en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial". Estas deberán cumplir con el contenido establecido en el art. 2 LGTM en cuanto a los elementos configuradores de los tributos. En razón de ello, el art. 7 inc. 2° LGTM, relativo a los organismos competentes para establecer tributos, prescribe que es "competencia de los Concejos Municipales crear, modificar o suprimir tasas y contribuciones especiales, mediante

---

5 Sentencia de 21 de agosto de 2013, Amparo 428-2011.

6 Sentencia de 14 de diciembre de 2015, inconstitucionalidad 99-2013.

7 Sentencia de 13 de abril de 2016, inconstitucionalidad 98-2013.

la emisión de la ordenanza, todo en virtud de la facultad consagrada en [el art. 204 ord. 1° Cn]". Igualmente, el art. 129 LGTM señala que los "Municipios podrán establecer mediante la emisión de las ordenanzas respectivas, tasas por los servicios de naturaleza administrativa o jurídica que presten". Además, tal como determina el art. 130 del mismo cuerpo jurídico, los servicios públicos estarán afectos al pago de tasas.

Por tanto, la autonomía tributaria municipal reconocida respecto de las tasas locales se incardina en el esquema establecido por el legislador, debiendo ejercerse de acuerdo con lo que preceptúe la Ley General Tributaria. Municipal [8]."

MUNICIPIOS DEBEN ABSTENERSE DE ESTABLECER COMO CONTRAPRESTACIÓN DE UNA TASA, ACTIVIDADES QUE ESTÉN EXCLUIDAS, RESERVADAS O PROHIBIDAS EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA

"2. Sin embargo, como se indicó en el apartado V 3 de esta sentencia, una característica esencial de las tasas es la concurrencia de una determinada contraprestación a favor del sujeto pasivo de la obligación tributaria municipal. Así, es posible que dicha contraprestación se realice mediante una actividad material o tangible o por medio de un servicio jurídico o administrativo —la emisión de una licencia, permiso o autorización— en el cual conste que, por el pago de cierta cantidad de dinero, el contribuyente está autorizado pata realizar determinada actividad dentro del municipio. Por ello, dado que la contraprestación implica una acción que el Estado o el municipio realiza, la potestad tributaria municipal requiere que el sujeto activo de las tasas —la comuna—ejecute una acción específica a favor del sujeto pasivo obligado al pago, encontrándose habilitada para realizar dicha acción, como consecuencia de sus competencias previamente establecidas por la ley [9].

Entonces, la determinación y ejecución o realización, de la contraprestación proporcionada por los municipios, implica que el hecho generador de la tasa esté comprendido dentro del ámbito competencial de las comunas. En consecuencia, los municipios deben abstenerse de establecer como contraprestación de una tasa, actividades que estén excluidas, reservadas o prohibidas en el marco de su competencia [10]. Por lo tanto, pese a la autonomía y potestad tributaria municipal en materia de tasas, los municipios tienen vedado el ofrecimiento, otorgamiento y cobro de tasas cuyo hecho generador esté fuera de las competencias municipales [11]. Y es que, no obstante que la normativa general sobre la configuración de tasas municipales esté contemplada en la Ley General Municipal Tributaria y el Código Municipal, "existe la posibilidad de que en relación con determinadas materias y actividades haya otros cuerpos legales que complementen el esquema jurídico que debe ser observado por las municipalidades para ejercer su potestad tributaria, en tanto que, se trate de un tópico que tenga una regulación específica que contemple distintos ámbitos de la cuestión [12]".

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 215-2016, fecha de la resolución: 18/10/2021

---

8 Sentencia de 22 de septiembre de 2014, inconstitucionalidad 79-2010.

9 Sentencia de 31 de julio de 2014, inconstitucionalidad 8-2009.

10 Sentencia de 25 de enero de 2016, inconstitucionalidad 95-2013.

11 Autos de 13 de noviembre de 2015, inconstitucionalidades 30-2015, 31-2015, 59-2015 y 60-2015.

12 Inconstitucionalidad 98-2013 AC., precitada.

PRECEDENTES CONSTITUCIONALES

CARÁCTER VINCULANTE Y SU POSIBILIDAD DE CAMBIO

"V. Carácter vinculante de los precedentes constitucionales y su posibilidad de cambio.

1. En un Estado Constitucional de Derecho, la seguridad jurídica y la igualdad son principios que deben ser respetados por cualquier autoridad pública administrativa, legislativa y judicial. En el caso de las autoridades jurisdiccionales, dichos principios pueden ser optimizados a través de diversos mecanismos, los cuales tienen, entre otras funciones, alcanzar la predictibilidad de las resoluciones judiciales. Esta predictibilidad se concreta a partir del autoprecedente [1], el cual establece que, ante supuestos análogos, la decisión de un Tribunal debe ser igual, es decir, debe recibir una respuesta jurisdiccional similar.

Sin perjuicio de lo anterior, aunque el precedente posibilita la precomprensión jurídica de la que parte toda interpretación, la continuidad de la jurisprudencia puede flexibilizarse o cambiarse bajo determinados supuestos [2]. No obstante, para ello se exige que el apartamiento de los precedentes esté especialmente justificado con un análisis crítico de la antigua jurisprudencia, que también es susceptible de ser reinterpretada [3]. Y es que el respeto a los precedentes no significa la imposibilidad de cambiarlos. Ello cobra sentido si se toma en cuenta que la Constitución no predetermina la solución a todos los conflictos que puedan derivarse en su aplicación o cuando esté llamada a solventarlos. Por ello, las anteriores consideraciones jurisprudenciales deben ser también analizadas desde otra perspectiva: el dinamismo y la interpretación actualizada de la Constitución y del resto ordenamiento jurídico.

Por ello, si bien todo precedente se construye con una pretensión de corrección, nunca puede tener efectos absolutos en el sentido de que sea definitivo y válido para todos los tiempos. No es definitivo, porque la amplia variedad y el continuo cambio de la realidad social ponen constantemente a los juzgadores ante nuevas situaciones; e incluso la renovación de los juzgadores, a su vez representantes de diversas corrientes de pensamiento jurídico, también posibilita la relectura de las disposiciones jurídicas y de los precedentes que las han aplicado a las nuevas realidades. Tampoco puede ser válido para todos los tiempos, pues la interpretación tiene siempre una referencia de actualidad sobre el orden jurídico [4]."

LA SALA ADMITIÓ EL ERROR INTERPRETATIVO COMO UNA CIRCUNSTANCIA QUE PUEDE JUSTIFICAR LA MODIFICACIÓN DE UN PRECEDENTE O ALEJARSE DE ÉL

"2. En las sentencias de 25 de agosto de 2010 y 18 de septiembre de 2013, inconstitucionalidad 1-2010 y hábeas corpus 260-2013R, respectivamente, esta

---

1 Sobreseimiento de 14 de enero de 2000, inconstitucionalidad 10-94.

2 Sentencia de 25 de agosto de 2010, inconstitucionalidad 1-2010.

3 Sentencia de 1 de octubre de 2014, inconstitucionalidad 66-2013.

4 Resoluciones de 23 de julio de 2004 y de 7 de julio de 2005, inconstitucionalidades 20-2004 y 31-2005, por su orden.

Sala admitió el error interpretativo como una circunstancia que puede justificar la modificación de un precedente o alejarse de él. En este caso, el cambio del autoprecedente sugiere un expreso señalamiento de los defectos interpretativos de la decisión que sirve de precedente. Señalar la parcialidad del contexto de la interpretación que se pretende modificar es una condición necesaria para dotar a la nueva decisión de fuerza argumental y para que satisfaga el estándar de justificación que el cambio de jurisprudencia reclama. En estos casos, la delimitación del grado del error pasa por analizar si la decisión previa no ha tomado en consideración la eventual concurrencia de otra disposición que varíe el contexto normativo sobre el cual se basó el pronunciamiento. Naturalmente, esto no debe interpretarse como si la decisión que haya de tomarse en el cambio de precedente sea la única correcta. Cuando menos, debe considerársele admisible dentro de los límites y presupuestos constitucionales."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 99-2015, fecha de la resolución: 15/10/2021

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

ALCANCE

"La jurisprudencia constitucional ha indicado que la presunción de inocencia implica que toda persona sometida a un proceso o procedimiento es inocente y se mantendrá como tal mientras no se determine su culpabilidad por sentencia definitiva condenatoria [1]. En ese orden, tal presunción constituye una garantía de que la persona no será condenada sin contar con pruebas legalmente incorporadas y con un juicio previo, y solo será objeto de restricción a sus derechos fundamentales en el grado mínimo necesario para el caso concreto.

Asimismo, la presunción de inocencia no puede entenderse reducida al estricto campo del juzgamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que debe extenderse a la adopción de cualquier resolución —administrativa o jurisdiccional— que se base en la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de sus derechos, debiendo ponderarse las singularidades que en cada caso concurran [2]. Entonces, para establecer si la presunción de inocencia despliega sus efectos en cualquier disciplina jurídica distinta a las sancionatorias, "lo determinante es fijar con precisión si la norma de conducta contenida en la disposición jurídica que se alega como conculcada tiene previsto un efecto sancionatorio, por tener una finalidad represiva, retributiva o de castigo. Esto es válido con independencia de la nomenclatura (o nomen iuris) que emplee la Administración Pública o el Legislativo para designar una sanción" [3]."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 107-2018, fecha de la resolución: 03/11/2021

---

1 Sentencia de 9 de abril de 2018, inconstitucionalidad 133-2015.

2 Sentencia de 12 de noviembre de 2010, inconstitucionalidad 40-2009.

3 Sentencia de 6 de febrero de 2013, inconstitucionalidad 115-2007

PREVENCIÓN EN EL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

CONSTITUYE LA ADVERTENCIA JUDICIAL QUE SE REALIZA AL ACTOR SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS EN LA DEMANDA

"IV. Prevención en el proceso de inconstitucionalidad.

La prevención es la advertencia judicial que se realiza al actor sobre el incumplimiento de los requisitos mínimos en la demanda. Su finalidad es evitar el dispendio de la actividad jurisdiccional con respecto a una pretensión mal planteada que dificulta el entendimiento de los argumentos en que sustenta su petición. El art. 6 n° 3 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC) establece como requisito de la demanda de inconstitucionalidad la identificación de los "motivos en que se haga descansar la inconstitucionalidad expresada citando los artículos pertinentes de la Constitución". A esto se le conoce en la doctrina como fundamento jurídico y fundamento material de la pretensión. El primero implica el señalamiento preciso de las disposiciones impugnadas y las disposiciones constitucionales propuestas como parámetro de control o, en el caso de alegar una inconstitucionalidad por omisión, la existencia de un mandato constitucional dirigido a un ente con potestades normativas para que establezca las condiciones de promoción y aseguramiento de un derecho fundamental. El segundo está representado por el contenido del objeto y del parámetro de control, y por los argumentos tendentes a justificar la contradicción existente entre ambos[1].

De modo que el pronunciamiento definitivo en el proceso de inconstitucionalidad estará condicionado, principalmente, por la adecuada configuración del contraste normativo propuesto por el solicitante, a quien le corresponde delimitar con precisión la contradicción que, desde su punto de vista, se produce entre los contenidos normativos de la Constitución y la disposición o cuerpo normativo impugnado. En ese sentido, las actuaciones de este tribunal representan una respuesta de las peticiones concretas formuladas por los legitimados para ello, de manera que en el proceso de inconstitucionalidad no es posible configurar de oficio la confrontación normativa entre el objeto y parámetro de control sobre los que debe recaer su decisión (art. 80 LPC). La fijación de los componentes de la pretensión de inconstitucionalidad está a cargo, exclusivamente, del demandante, no de este tribunal, quien —como cualquier otro órgano jurisdiccional— está sujeto al principio de imparcialidad (art. 186 inc. 5° Cn.). Cuando el peticionario ha expuesto argumentos tendentes a poner al descubierto una confrontación normativa, pero omite señalar una disposición constitucional como parámetro de control o fija un precepto constitucional como parámetro de control y no proporciona argumentos que justifiquen su petición de inconstitucionalidad, este tribunal podrá prevenirle sobre el incumplimiento de tal requisito."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 78-2019, fecha de la resolución: 07/04/2021

---

[1] Sobre este punto, véase la resolución de 11 de octubre de 2013, inconstitucionalidad 150-2012.

PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA

ACTÚA COMO PRESUPUESTO Y LÍMITE DE LA TRIBUTACIÓN

"1. Este principio exige que las personas contribuyan al sostenimiento de los gastos del Estado en relación con la aptitud económico-social que tengan para ello [1]. Por tanto, el citado principio limita a los poderes públicos en el ejercicio de su actividad financiera y condiciona y modula el deber de contribuir de las personas [2]. Actúa como presupuesto y límite de la tributación [3]. En términos legislativos, la capacidad económica se puede percibir a partir de índices (patrimonio, renta) o indicios (consumo, tráfico de bienes), es decir, se vincula con el principio de normalidad, según el cual, cuando el legislador configura una situación como hecho imponible, debe atender a un supuesto que normalmente es indicativo de capacidad económica, como exigencia del ordenamiento tributario globalmente considerado, y particularmente de los impuestos [4].

La capacidad económica se proyecta en dos planos [5]. El primero es el vertical, que supone la existencia de un porcentaje máximo de los ingresos de cada contribuyente que puede ser legítimamente afectado por los tributos [6]. Pero, más allá de dicho porcentaje, resguarda el derecho de propiedad y la libertad económica frente a una tributación desmedida. El segundo plano es el horizontal, según el cual, los tributos que afectan a un contribuyente deben configurar un "sistema" regido por el principio de capacidad económica. Así, los casos en que una misma riqueza —con independencia de la configuración legal de los hechos imponibles respectivos—se grava dos o más veces o, no sufra gravamen alguno, se consideran contrarios a la capacidad económica [7].

2. En el plano legislativo, el principio de capacidad económica debe regir la configuración de la capacidad objetiva y la intensidad del gravamen [8]. En este caso, interesa referirse a las exigencias relacionadas con la capacidad objetiva:

Primero, de conformidad con el principio de capacidad económica, únicamente debe gravarse la riqueza disponible, es decir, solo se pueden afectar los rendimientos netos. Pero esto no impide que el legislador utilice técnicas que se ajusten a dicha exigencia —por ejemplo, que solo permita la deducción de los gastos indispensables para obtener los ingresos gravados—[9]. Así, cuando se pretende medir la capacidad económica en función del patrimonio, lo razonable es computar la totalidad del patrimonio neto, no solo algunos bienes del activo ni solo los más valiosos [10]. Segundo, el gravamen debe cuantificarse sobre un pe-

---

1 Sentencia de 9 de julio de 2010, inconstitucionalidad 35-2009.
2 Sentencia de 15 de noviembre de 2013, inconstitucionalidad 18-2012.
3 Sentencia de 26 de mayo de 2017, inconstitucionalidad 50-2015.
4 Sentencia de 17 de abril de 2015, inconstitucionalidad 98-2014.
5 Sentencia de 26 de mayo de 2014, amparo 915-2008.
6 Sentencia de inconstitucionalidad 18-2012, ya citada.
7 Sentencia de 10 de octubre de 2012, inconstitucionalidad 15-2012.
8 Inconstitucionalidades 15-2012 y 18-2012, precitadas.
9 Sentencia de 19 de marzo de 2014, inconstitucionalidad 39-2010.
10 Inc. 15-2012, ya citada.

ríodo impositivo determinado, para evitar, por ejemplo, que la renta obtenida en un período único se vuelva a gravar, o que se desconecten ingresos y pérdidas y se afecte la regla de que solo debe tributarse del patrimonio neto objetivo [11]. Y tercero, el gravamen debe recaer solo en rendimientos efectivos, no ficticios. Por ello, en algunos casos, gravar la capacidad productiva, la riqueza probable o las utilidades puramente nominales, puede ser contrario al principio de capacidad económica. No toda situación económica es apta para ser gravada con tributos, sino solo las que revelan la existencia de recursos útiles que están disponibles a título definitivo [12]."

CONCEPTO GENERAL DE "ACTIVO" Y DE "ACTIVO CIRCULANTE"

"3. El concepto general de "activo" y de "activo circulante" han sido reiteradamente abordados en la jurisprudencia constitucional, en los siguientes términos [13].

A. Se ha sostenido que en los impuestos cuyo hecho generador sea una actividad económica —industrial, comercial o de servicio— realizada por comerciantes individuales o sociales —sujetos pasivos—, hay una tendencia del legislador de prescribir que la base imponible o la forma en la que se cuantifica monetariamente esos tributos es el activo de la empresa [14]. La capacidad económica de estos sujetos para contribuir se calcula mediante el análisis de los balances generales de sus empresas, que muestran su situación financiera en una fecha determinada, por el detalle de sus activos, pasivos y capital contable [15].

El activo está integrado por todos los recursos de que dispone una entidad para la realización de sus fines, que deben representar beneficios económicos esperados y controlados por el comerciante, y que provienen de transacciones o eventos realizados, identificables y cuantificables en unidades monetarias. Los recursos provienen, de fuentes externas (pasivo) y de fuentes internas (capital contable) [16].

En cambio, el pasivo está integrado por los recursos con que cuenta la entidad para para la realización de sus fines, aportados por fuentes externas (acreedores), derivados de transacciones ya realizadas, que hacen nacer una obligación de transferir efectivo, bienes o servicios [17]. Y el capital contable, denominado también "patrimonio" o "activo neto", está constituido por recursos de los que dispone la entidad comercial para su adecuado funcionamiento, que procede de fuentes internas de financiamiento representadas por los aportes del mismo propietario (comerciante individual o social) y otras operaciones económicas que afecten a

11 Sentencia de 29 de septiembre de 2011, inconstitucionalidad 10-2006.
12 Inconstitucionalidad 50,2015, ya citada.
13 Inconstitucionalidad 50-2015, precitada, y en las sentencias de 27 de julio de 2012, amparo 512-2010 y de 22 de octubre de 2010, amparo 185-2008.
14 Sentencia de 19 de diciembre de 2012, amparo 169-2011.
15 Sentencia de 15 de febrero de 2013, amparo 41-2011.
16 Sentencia de 15 de febrero de 2013, amparo 549-2010.
17 Sentencia de 5 de abril de 2013, amparo 592-2010.

dicho capital [18]. De tal forma, los propietarios poseen un derecho sobre los activos netos, que se ejerce mediante reembolso o distribución. En otras, palabras: el capital contable representa la diferencia aritmética entre el activo y el pasivo [19].

En ese orden, para la realización de los fines de una empresa, esta dispone de recursos (activo) que provienen de obligaciones contraídas con sus acreedores (pasivo) y de las aportaciones que realizan los propios empresarios, entre otras operaciones económicas (capital contable) [20]. Esta última categoría es la que refleja la capacidad económica de un comerciante y que, desde la perspectiva constitucional, es apta para ser tomada como la base imponible de un impuesto a la actividad económica. Como es el resultado de la resta en que al activo se le deduce el total de los pasivos, se muestra la capacidad económica, representada por el conjunto de bienes y derechos que pertenecen propiamente al obligado al pago del tributo [21]."

ACTIVO CIRCULANTE O CORRIENTE

"B. Sobre el "activo circulante o corriente", se ha señalado que es una especificidad del activo en general, y comprende el conjunto de bienes y derechos que están en rotación o movimiento constante, de fácil conversión a dinero en efectivo en el ciclo normal de operación de una empresa [22] (por ejemplo, caja, mercancías, obligaciones por cobrar, inversiones temporales, deudores diversos, etc.). En ese sentido, aunque se trate de activos disponibles, se grava el activo de la empresa sin haber deducido el pasivo correspondiente. De modo que "el activo circulante" no es un elemento revelador de una verdadera capacidad económica [23]."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 232-2016, fecha de la resolución: 20/12/2021

PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY

RECONOCIDO EN LA CONSTITUCIÓN COMO UN PRINCIPIO, COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL Y UN MANDATO

"La igualdad es reconocida en el art. 3 inc. 1° Cn. como principio y como derecho fundamental. En el primer sentido, la igualdad es un mandato que supone una sujeción para todos los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones,

18 Sentencia de 1 de julio de 2013, amparo 136-2011.
19 Sentencia de 16 de octubre de 2013, amparo 137-2011
20 Sentencia de 9 de mayo de 2014, amparo 346-2011.
21 Sentencia de 25 de julio de 2014, amparo 566-2012.
22 Sentencia de 21 de enero de 2015, amparo 483-2012.
23 Auto de 16 de agosto de 2017, amparo 697-2016.

como una garantía de la legalidad y un imperativo de la justicia [1]. Así, el principio de igualdad constituye un criterio informador del sistema constitucional y del ordenamiento jurídico y debe, por tanto, ser observado en las actividades de aplicación, creación y ejecución del Derecho. En el segundo sentido, es la facultad que tienen las personas, de exigir de los poderes públicos un trato equivalente al encontrarse en condiciones similares a otras personas [2], pero también a que deliberadamente se les dé un trato diferente en beneficio propio, al encontrarse en situación distinta a los demás individuos [3], bajo criterios justificables con base en la Constitución [4]. En ambas manifestaciones, la igualdad puede constituir un mandato de equiparación o un mandato de diferenciación."

EN LA FORMULACIÓN DE LA LEY IMPLICA QUE EL LEGISLADOR, AL CONFIGURAR LA NORMA, DEBE PROCURAR QUE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES FÁCTICAS Y JURÍDICAS SE BRINDE A TODAS LAS PERSONAS EL MISMO TRATO

"La igualdad se manifiesta en el ámbito de la formulación de la ley y en su aplicación por los operadores jurídicos. En la formulación de la ley implica que el legislador, al configurar la norma, debe procurar que en la medida de las posibilidades fácticas y jurídicas, se brinde a todas las personas el mismo trato, esto es, examinando si ha disciplinado de igual modo las situaciones y relaciones que sean iguales con independencia de los sujetos o intereses personales que regule [5] y, en caso de introducir diferencias, que determine su justificación teniendo en cuenta el contenido de la norma [6]. Por otro lado, la igualdad en la aplicación de la ley exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas, de manera que un órgano jurisdiccional o administrativo no pueda, en casos sustancialmente iguales, modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones o resoluciones, salvo cuando la modificación de sus precedentes posea una fundamentación suficiente y razonada [7]."

INTEGRACIÓN CON EL TEST DE PROPORCIONALIDAD

"1. La jurisprudencia constitucional ha señalado que cuando se alega la infracción a principio de igualdad, el test de igualdad debe integrarse al de proporcionalidad [8]. Ello se justifica porque el test de proporcionalidad racionaliza la decisión de los problemas que involucran principios o normas que tienen la estructura de principios —como las de los derechos fundamentales— y por las

1 Sentencia de 25 de noviembre de 2008, inconstitucionalidad 9-2006.
2 Sentencia de 7 de diciembre de 2010, amparo 174-2005.
3 Sentencia de 3 de junio de 2011, amparo 206-2008 AC.
4 Sentencia de 25 de noviembre de 2008, inconstitucionalidad 9-2006
5 Sentencia de 28 de mayo de 2014, inconstitucionalidad 146-2014 AC.
6 Auto de 30 de enero de 2015, inconstitucionalidad 119-2014.
7 Sentencia de 29 de julio de 2015, inconstitucionalidad 65-2012 AC.
8 Auto de 14 de diciembre de 2018, inconstitucionalidad 35-2018.

semejanzas relevantes que existen entre ambos, lo que implica que un test integrado eliminaría una dualidad que hasta este momento ha sido innecesaria. Entre las semejanzas relevantes que justifican tal integración se pueden mencionar, entre otras, el análisis de la adecuación entre el medio empleado para la consecución de un fin constitucionalmente legítimo —que en el test de proporcionalidad es el juicio de idoneidad y en el de igualdad es la determinación del fin que persigue la medida acusada de desigual—, el cotejo entre alternativas distintas y menos gravosas para la consecución de tal fin —que en el test de proporcionalidad es el juicio de necesidad y en el de igualdad es el análisis del término de comparación— y el hecho que ambos test, tienen como presupuesto que se esté en presencia de una limitación, intervención o injerencia en el derecho respectivo [9]. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de igualdad —al igual que el de proporcionalidad— no opera con autonomía propia, de manera que una medida no puede violarlo directamente. La aplicación de este principio "requiere de un elemento adicional: el derecho fundamental o una situación jurídica afectada como consecuencia del trato diferenciador [10]".

PROCEDENCIA DEL ANÁLISIS DE PROPORCIONALIDAD

"1. En ese sentido, solo se puede analizar la infracción a la proporcionalidad cuando se cuestione la constitucionalidad de una medida que interviene un derecho fundamental o un principio por vulneración a la proporcionalidad. En ese supuesto, este principio opera como un criterio estructural de carácter escalonado que sirve para determinar si una medida de intervención a derechos fundamentales está justificada o no por la Constitución. Posee dos variantes: la prohibición de exceso y la prohibición de protección deficiente [11]."
Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 224-2016AC, fecha de la resolución: 27/10/2021

PRINCIPIO DE IGUALDAD

ASPECTOS QUE DEBEN ARGUMENTARSE PARA PLANTEAR ADECUADAMENTE LA INFRACCIÓN

"IV. Test integrado de igualdad.

1. Esta Sala ha señalado que para plantear adecuadamente la infracción al principio de igualdad, se debe argumentar los siguientes aspectos: si la disposición cuestionada contiene una desigualdad por equiparación o una desigualdad por diferenciación; el criterio de la realidad con arreglo al cual se hace la com-

9 Inconstitucionalidad 35-2018, precitada.

10 Auto de 4 de octubre de 2019, inconstitucionalidad 136-2017.

11 Reconocido por la jurisprudencia constitucional desde el año 2018. Véanse los autos de 10 de diciembre de 2018 y de 14 de diciembre de 2018, inconstitucionalidades 23-2018 y 35-2018, por su orden.

paración, qué permite concluir que existe una diferenciación o equiparación, debiéndose precisar cuáles son sujetos o situaciones que soportan la desigualdad –es decir, el término de comparación–; la imputación de consecuencias jurídicas a los sujetos comparados, en virtud de la igualdad o desigualdad advertida; y, por último, la existencia de una desigualdad carente de justificación o, en otros términos, la irrazonabilidad en la discriminación. Para determinar esto último, la jurisprudencia constitucional exige el desarrollo del test de proporcionalidad."

INTEGRACIÓN CON EL TEST DE PROPORCIONALIDAD

"No basta con dictaminar que la existencia de un trato desigual sea razonable, pues, aun así, pudiera ocurrir que ese trato conlleve una limitación desproporcionada a un derecho fundamental. Por ello, el análisis debe continuar para determinar si los beneficios que reporta la diferenciación normativa o exclusión compensan el sacrificio que esta supone para un derecho fundamental –proporcionalidad en sentido amplio–. Para llegar a esta conclusión –o a la contraria–, es indispensable verificar si el trato desigual cuestionado es idóneo, necesario y proporcionado en sentido estricto –o que no lo es– [1]. Por tanto, no todo trato diferente o equiparado es inconstitucional en sí mismo, pues su incompatibilidad constitucional se determina por la desproporcionalidad de la intervención legislativa [2]. La razón que justifica tal afirmación se centra en que el principio de igualdad no siempre ordena un idéntico trato legal, al margen de elementos diferenciadores de relevancia jurídica. En algunos casos, ellos pueden estar fundados en una justificación objetiva y razonable para ello.

En efecto, la integración de estos dos test se justifica porque el de proporcionalidad racionaliza la decisión de los problemas que involucran principios o normas que tienen la estructura de principios –como las de los derechos fundamentales– y por las semejanzas relevantes que existen entre ambos, lo que implica que un test integrado eliminaría una dualidad que hasta este momento ha sido innecesaria [3]. Entre tales semejanzas relevantes se pueden mencionar, entre otras, el análisis de la adecuación entre el medio empleado para la consecución de un fin constitucionalmente legítimo –que en el test de proporcionalidad es el juicio de idoneidad y en el de igualdad es la determinación del fin que persigue la medida acusada de desigual–, el cotejo entre alternativas distintas y menos gravosas para la consecución de tal fin –que en el test de proporcionalidad es el juicio de necesidad y en el de igualdad es el análisis del término de comparación– y el hecho que ambos test tienen como presupuesto que se esté en presencia de una limitación, intervención o injerencia en el derecho respectivo. La limitación o restricción de un derecho implica la modificación de su objeto o sujetos de forma que se impide o se dificulta el ejercicio de las acciones, propiedades o situaciones habilitadas por el derecho afectado [4]. Si en alguno de ellos se concluye que la medida impugnada se trata de una simple regulación, ello significaría que no existe afectación del contenido protegido y que el desarrollo del test se vuelve innecesario."

---

1 Sentencia del 7 de noviembre de 2011, inconstitucionalidad 57-2011.
2 Auto de 29 de enero de 2018, inconstitucionalidad 158-2017.
3 Auto de 14 de diciembre de 2018, inconstitucionalidad 35-2018.
4 Sentencia de 5 de diciembre de 2012, inconstitucionalidad 13-2012.

PARTE ACTORA DEBE ARGUMENTAR QUE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL MEDIO Y EL FIN ES INVIABLE O INACEPTABLE

"2. Cuando se cuestiona la constitucionalidad de una medida que interviene un derecho fundamental o un principio por vulneración a la proporcionalidad, la parte actora debe indicar con precisión, como primer paso, el fin constitucionalmente legítimo que la medida persigue y argumentar por qué no es adecuada para contribuir a alcanzar o asegurar esa finalidad. En otras palabras, debe argumentarse que la relación de causalidad entre el medio y el fin es inviable o inaceptable. Por otra parte, supone que el peticionario argumente la condición innecesaria de la medida, es decir, que proponga la existencia de por lo menos un medio alterno con igual o mayor grado de idoneidad para alcanzar el objetivo perseguido y que sea más benigno con el derecho fundamental afectado. Finalmente, en caso de superar los juicios de idoneidad y necesidad, el pretensor debe razonar por qué la medida no es proporcional en sentido estricto, esto es, debe señalar por qué el grado de satisfacción del derecho fundamental o principio constitucional cuya realización constituye el fin de la medida legislativa no justifica la intervención negativa en el derecho en cuestión. Esto último conlleva señalar las intensidades en las intervenciones y el peso abstracto que se atribuye a cada derecho o principio en juego y las posibilidades fácticas sobre su afectación o satisfacción [5].

TEST DE PROPORCIONALIDAD TIENE UN CARÁCTER ESCALONADO

"En consecuencia, el test de proporcionalidad tiene un carácter escalonado. Si la medida analizada no supera el examen de idoneidad, el Tribunal debe declarar su inconstitucionalidad sin continuar con el siguiente paso. Lo mismo ocurriría si concluye que un fin es legítimo y que el medio es idóneo para su obtención, pero luego en el segundo escalón –el de necesidad–considerare que existe una medida alternativa con igual idoneidad, pero que limita en menor grado el derecho fundamental o el principio de que se trate. En otras palabras, es un test cuya aplicación se desarrolla en tres etapas sucesivas y cuya prosecución hacia la siguiente depende, por tanto, del agotamiento de la etapa anterior. Según tal regla argumentativa, es incompatible con la aplicación del principio de proporcionalidad alegar en un mismo razonamiento la falta de idoneidad de una medida y, bajo el argumento de la eventualidad, argüir a continuación que ella es también innecesaria, en tanto que concluir la supuesta falta necesidad de una medida supone como condición necesaria la aprobación del test de idoneidad. De igual manera, sería un despropósito sostener que una medida es innecesaria y luego, bajo el mismo argumento de la eventualidad, manifestar que en caso de resultar necesaria esta no superaría el escrutinio de proporcionalidad en sentido estricto. No obstante, el alegato de la eventualidad solo sería admisible cuando el demandante realice, en un razonamiento distinto, un nuevo test de proporcionalidad, en el que se supere el sub principio o escalón que inicialmente se consideraba como no cumplido."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 42-2019, fecha de la resolución: 20/12/2021

---

5 Entre otras, véase la resolución de 7 de abril de 2017, inconstitucionalidad 160-2016.

PRINCIPIO DE REALIDAD ECONÓMICA

EL ENFOQUE ECONÓMICO DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS SURGE EN FUNCIÓN DEL ORIGEN DE LOS ACTOS ENTRE LOS PARTICULARES, QUE TIENEN UN FIN ECONÓMICO EN SÍ MISMOS

"Ahora bien, a los parámetros hermenéuticos aludidos, debe añadirse la interpretación conforme al principio de realidad económica (también llamado, de prevalencia de la realidad). Este tipo de interpretación aparece regulado en el art. 61 CT. El enfoque económico de la interpretación de las normas tributarias surge en función del origen de los actos entre los particulares, que tienen un fin económico en sí mismos. Así, esta modalidad interpretativa pretende que la adscripción del significado de las leyes tributarias se realice tomando en cuenta su finalidad, relevancia económica y el desarrollo de las circunstancias con relación a los fines que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. Por tanto, quien aplica el Derecho Tributario debe analizar tres factores: (i) la finalidad de la ley; (ii) la trascendencia económica de la norma; y, (iii) los hechos ocurridos. Esto tiene el objetivo de que la interpretación realizada atienda al contenido económico de las normas tributarias, ya sea a favor del contribuyente o de la administración tributaria. De tal forma, el intérprete tributario, al calificar los supuestos de hecho y subsumirlos en el presupuesto de hecho general definido por la norma, debe hacerlo a la luz del sentido económico que ello comporta."
Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 4-2018, fecha de la resolución: 13/10/2021

PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY

PRINCIPIO DE JURIDICIDAD

"2. A. El principio de legalidad está previsto en el art. 86 inc. 3° Cn.: "[l]os funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley". Conforme a tal principio, los funcionarios de los órganos estatales y entes públicos tienen una "vinculación positiva", en el sentido de que solo pueden hacer aquello que la ley les permite; a diferencia de lo que sucede con los ciudadanos, para quienes la ley, en virtud del derecho general de libertad (art. 8 Cn.), implica una "vinculación negativa", pues pueden hacer todo lo que no está prohibido [1]. Ahora bien, el vocablo "ley" utilizado en la disposición constitucional aludida no se refiere únicamente a la legalidad ordinaria, sino que se extiende al sistema normativo como unidad, es decir, supone respeto al orden jurídico en su totalidad, lo que comprende a la Constitución. Por ello, la legalidad no es solo sujeción a la ley, sino también a la Ley Fundamental [2]. En virtud de lo anterior, para referirse al principio en cuestión, esta Sala prefiere denominarle "principio de juridicidad" [3]."

---

1 Sentencia de 20 de enero de 2009, inconstitucionalidad 65-2007.
2 Sentencia de 29 de abril de 2013, inconstitucionalidad 56-2010.
3 Sentencia de 31 de julio de 2009, inconstitucionalidad 78-2006.

CORRESPONDERÁ A ESTA SALA DILUCIDAR, CASO POR CASO, CUÁLES MATERIAS ESTÁN SOMETIDAS A RESERVA LEGAL

"En estrecha vinculación con lo anterior, en general, puede hablarse de "zonas de reserva" de los órganos del Estado, que se justifican en la idea del constitucionalismo contemporáneo de que el poder no debe estar concentrado en una sola mano, a partir de la cual aparecen las primeras teorías sobre de separación orgánica de funciones y los "frenos y contrapesos". Estas teorías básicamente establecen la idea rectora de que el ejercicio dividido del poder constituye un mecanismo de control y limitación del mismo, en función del respeto a los derechos de los individuos por parte del Estado [4]. Esto se concretiza por medio del "principio de reserva de ley", que implica que la norma constitucional —explícita o implícita— ordena que ciertos aspectos sean regulados mediante ley formal, es decir, creada por la Asamblea Legislativa [5]. Pero, en nuestro diseño constitucional resulta adecuado hablar de "reservas de ley", porque, por una parte, no existe una disposición constitucional que expresamente prescriba que determinadas materias sean normadas con exclusividad por el legislador; y, por la otra, en la Constitución están implícitas varias materias reservadas al Órgano Legislativo. Por tanto, la reserva de ley se mueve en diferentes ámbitos, formando un conjunto heterogéneo, alcanzando aspectos relacionados con el patrimonio, la libertad, la seguridad y la defensa [6], entre otros.

Es decir, aunque el constituyente no mencione expresamente que un determinado ámbito de la realidad entra en la zona de reserva del Órgano Legislativo, no puede ignorarse que ciertos ámbitos, por su naturaleza e importancia, deben quedar en manos del órgano que mejor garantiza los principios antes referidos [7]. Por tanto, corresponderá a esta Sala dilucidar, caso por caso, cuáles materias están sometidas a reserva legal, para lo cual deberá interpretar el precepto correspondiente en conexión con los valores y principios básicos de la Constitución [8].

B. Ahora bien, debe explicarse la interrelación de las distintas fuentes del Derecho en la regulación de las materias no reservadas a la ley formal. En este ámbito, todos los entes con potestad normativa pueden reglamentar el núcleo básico de dichas materias, sin necesidad —en el caso de los entes distintos del legislador— de habilitación legal [9]. No obstante, deben hacerse las siguientes precisiones. En primer lugar, a menos que la Constitución disponga lo contrario, hay un campo normativo en la autoorganización de los órganos y entes constitucionales que no puede regularse mediante ley formal. Entonces, la regulación que afecta a la organización interna de dichos órganos y entes y las relaciones

4 Sentencia de 6 de septiembre de 2001, inconstitucionalidad 27-99.
5 Inconstitucionalidad 78-2006, precitada.
6 Sentencia de 24 de septiembre de 2003, inconstitucionalidad 1-2003.
7 Inconstitucionalidad 56-2010, ya citada.
8 Auto de 21 de agosto de 2013, inconstitucionalidad 111-2013.
9 Sentencia de 15 de julio de 2015, inconstitucionalidad 84-2011.

de sujeción especial que ella conlleva, está reservada a estos, y solo puede ser limitada por la Constitución. Por ello, en este caso, no estamos en puridad ante materias no reservadas, sino que nos encontramos frente a materias reservadas, pero no al legislador, sino a otros órganos u entes de rango constitucional [10]. En segundo lugar, en el caso de las materias no reservadas a ningún órgano, por ser la expresión de la voluntad popular —art. 125 Cn.— y ocupar una posición de primacía dentro del sistema de fuentes, la ley formal también puede regularlas, lo cual provoca que otras fuentes de Derecho inferiores ya no podrían hacerlo, pues la ley formal solo puede ser modificada por otra disposición del mismo rango, es decir, ley formal. A ello en el Derecho Administrativo se le denomina "congelación de rango" o "auto-reserva de ley" [11]. Y, en tercer lugar, debe señalarse que la regla general de que las materias no reservadas pueden ser reguladas sin necesidad de habilitación legal tiene sus excepciones. Así, por ejemplo, salvo en materia autoorganizativa, el Presidente de la República no puede ejercer potestades normativas sin la existencia de un marco legal previo, como se desprende de lo dispuesto en el art. 168 ord. 14° Cn. [12]"

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 25-2016, fecha de la resolución: 20/12/2021

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA

ALCANCE

"La seguridad jurídica es la capacidad que nos proporciona el Derecho de prever, hasta cierto punto, la conducta humana y las consecuencias de dicha conducta (art. 2 inc. 1º Cn.). En su dimensión valorativa o axiológica (art. 1 inc. 1º Cn.), es la situación que se produce cuando el estado de cosas de previsibilidad es objeto de valoración positiva, en el sentido de que se considera bueno y deseado que se produzca dicho estado de cosas y se acepta que hay razones para procurar obtenerlo y maximizarlo. La seguridad jurídica es esencial para la existencia del Derecho como sistema que pretende la solución de controversias o conflictos sociales mediante actos institucionales de debate y decisión.

Esta categoría normativa se proyecta con mayor intensidad en el ámbito de la actividad estatal y en el ámbito normativo, en el entendido que resultaría inconstitucional la inesperada y arbitraria infracción al marco competencial de los órganos públicos. En cuanto definidora de un estatus de certeza en el individuo, se manifiesta en los más diversos campos y respecto de todos los órganos, lo que resulta una consecuencia lógica y necesaria de su carácter de valor estruc-

10 Inconstitucionalidad 56-2010, ya citada.
11 Inconstitucionalidad 78-2006, precitada.
12 Inconstitucionalidades 78-2006 y 56-2010, ya relacionadas.

turador del ordenamiento, ya que asegura una cierta estabilidad en la actuación estatal, en relación con las legítimas expectativas de los ciudadanos en el mantenimiento y permanencia de lo ya realizado o declarado [1].

Este último aspecto –el mantenimiento y permanencia de lo ya realizado o declarado– es el que justifica que la seguridad jurídica se proyecte como exigencia de respeto a los precedentes. Esto es así porque los precedentes, además de ser la resolución concreta del caso sometido a juicio, pueden analizarse desde una perspectiva objetiva según la cual, prescindiendo de las particularidades propias de cada caso que no inciden en la esencia de la decisión –en principio, la identidad de las partes involucradas, el momento en que se adopte la decisión, el tiempo que demoró el proceso–, es posible derivar líneas que indican que ante ciertos supuestos corresponde cierta decisión."

PRECEDENTES BIEN DEFINIDOS Y SISTEMATIZADOS FAVORECEN LA SEGURIDAD JURÍDICA

"En conclusión, un sistema de precedentes bien definido y sistematizado favorece la seguridad jurídica, debido a que asegura una mayor previsibilidad de los resultados de las actuaciones que cada individuo realiza y permite contar con parámetros de expectativa razonable de las decisiones futuras esperadas por todos los tribunales, sin que la persona esté sujeta a la incerteza que produce la variedad de criterios resolutivos e interpretativos. Por ello, este sistema se erigiría como garantía de regularidad funcional de los órganos decisores, que es una manifestación esencial de esta forma de seguridad. Pero, también la asegura el respeto a la distribución de competencias que realiza la Constitución, en el sentido que ningún órgano pretenda atribuirse las de los demás."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 47-2016, fecha de la resolución: 06/09/2021

PRINCIPIO DEMOCRÁTICO Y DELIBERATIVO EN EL PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN DE LEY

VICIOS FORMALES EN LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA

"En nuestro ordenamiento jurídico la Constitución se concibe como la expresión de la soberanía popular (art. 83 Cn.) y su contenido está integrado esencial y básicamente por el reconocimiento de la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado y los derechos fundamentales derivados de esa condición (art. 1 Cn.). Desde esa perspectiva, la Constitución es la expresión de los cánones ético-jurídicos sobre los cuales la comunidad, a partir del pluralismo, ha logrado encontrar un cierto grado de consenso, hasta el punto de incorpo-

1 Sentencia de 31 de julio de 2009, inconstitucionalidad 78-2006.

rarlos en el documento normativo rector de la organización y funcionamiento del Estado [1]. De esto deriva que en El Salvador rige un concepto normativo de Constitución, como norma jurídica superior que, en consecuencia, es el parámetro de validez del resto de fuentes normativas del ordenamiento, con aptitud para regular, en su forma y contenido, la producción de normas infraconstitucionales y de actos y omisiones de particulares y entidades estatales.

Los límites formales implican que la producción, reforma e interpretación auténtica de una fuente normativa debe hacerse necesariamente por los órganos competentes y de acuerdo con los procedimientos que la Constitución determine, mientras que los materiales aluden a que la Ley Suprema prefigura el contenido de las normas jurídicas. De esta manera, puesto que la Asamblea Legislativa es el órgano competente para emitir leyes formales, su función también es limitada formal y materialmente, lo que adquiere especial relevancia dada su composición plural y su naturaleza representativa por antonomasia. En lo que concierne a los vicios formales en la actividad legislativa, la configuración constitucional del procedimiento de elaboración, reforma e interpretación auténtica de leyes se encuentra regida por los principios democrático y pluralista (art. 85 Cn.), que no solo se refleja en la configuración de la Asamblea Legislativa, sino también en su funcionamiento [2]. El respeto al principio democrático se manifiesta mediante el cumplimiento de las propiedades definitorias de la institución legislativa: el principio de representación, el principio de deliberación, la regla de las mayorías para la adopción de las decisiones y la publicidad de los actos. La inobservancia de los principios fundamentales que informan el trámite en cuestión produce como consecuencia inevitable la existencia de vicios en la formación de la ley, lo que afecta la validez de la decisión que en definitiva se adopte, independientemente de su contenido [3]."

PRINCIPIO DEMOCRÁTICO QUE SE ENCUENTRA EN TODAS LAS FASES DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE LEY

"Este principio democrático se concretiza en todas las fases del proceso de formación de la ley: (i) fase de iniciativa de ley (art. 133 Cn.); (ii) fase legislativa (arts. 131 ord. 5º, 134 y 135 Cn.); (iii) fase ejecutiva, que comprende la sanción y promulgación (arts. 135, 137, 138, 139 y 168 atrib. 8º Cn.); y (iv) fase de publicación, que da a lugar al plazo establecido para la obligatoriedad de la ley (art. 140 Cn.) [4]. En cuanto a la fase legislativa, se ha explicado que "[...] la voluntad parlamentaria únicamente puede formarse por medio del debate y la contradicción; o sea que las soluciones o los compromisos que se adopten deben ser producto de la discusión de las diferentes opciones políticas [5]". En la actividad legislativa

1 Ej., sentencia de 3 de junio de 2005, inconstitucionalidad 53-2003.
2 Ej., sentencia de 30 de noviembre de 2011, inconstitucionalidad 11-2010.
3 Ej., sentencia de 14 de noviembre de 2016, inconstitucionalidad 67-2014
4 Al respecto, véase la sentencia de inconstitucionalidad 67-2014, citada en la nota anterior..

el debate y la libre discusión cumplen un papel esencial, porque permiten a los diferentes grupos con representación política exponer y defender distintas posiciones y opciones sin presiones indebidas, lo que posibilita el parlamentarismo democrático. Como en la fase legislativa quedan comprendidos los trabajos y discusiones de las comisiones pertinentes, su labor no puede ser simplemente omitida."

ROL DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA LEY

"Las comisiones legislativas cumplen un rol destacado en el proceso de formación de la ley –lo cual es predicable para la reforma, derogación e interpretación auténtica–, pues aprueban los dictámenes favorables de los proyectos respectivos que posteriormente son conocidos y discutidos en el pleno de la Asamblea Legislativa (art. 76 inc. 1º del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa). En consecuencia, este Tribunal puede controlar la constitucionalidad de un decreto por vicios de forma cuando dicha autoridad haya aprobado, interpretado auténticamente, reformado o derogado una ley sin que exista por regla general un dictamen favorable de la comisión correspondiente [6].

No obstante, esta exigencia –la de la discusión del proyecto en la comisión respectiva– no opera en forma definitiva, como si se tratare de una condición suficiente y necesaria, o absoluta. En algunos casos, es posible que esté justificado omitir el dictamen favorable para que el proyecto de ley pueda ser considerado por el pleno legislativo. Ello es admisible cuando se imponga la urgencia en aprobarlo por razones comprobadas. En tal supuesto, en tanto que la dispensa de trámite es la excepción al procedimiento legislativo ordinario, la Asamblea Legislativa tiene la carga de argumentar por qué fue necesario e ineludible suprimir esa etapa y debe demostrar que en su pleno existió o se posibilitó una discusión sobre la urgencia de la aprobación del proyecto de ley. En caso contrario, habría un vicio de formación y, por tanto, el decreto legislativo sería inconstitucional [7]."
Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 5-2018, fecha de la resolución: 16/07/2021

PRINCIPIO Y JUICIO DE IGUALDAD

LA IGUALDAD ES RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN Y PUEDE SER CONCEBIDA COMO UN PRINCIPIO Y COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL

"V. Principio y juicio de igualdad.

1. La igualdad es reconocida en el art. 3 Cn., y puede ser concebida como un principio y como un derecho fundamental. Entendida como principio, es un mandato que supone una sujeción para todos los órganos públicos en el ejercicio de sus funciones. También es el derecho que tienen las personas de exigir de

5 Sentencia de 30 de junio de 1999, inconstitucionalidad 8-96.

6 Sobre este punto, véase la resolución de 6 de junio de 2011, inconstitucionalidad 15-2011, y sentencia de inconstitucionalidad 67-2014, ya referida.

7 Sentencia de inconstitucionalidad 67-2014, antedicha.

las autoridades un trato equivalente al encontrarse en condiciones similares a otras, pero también a que deliberadamente se les dé un trato dispar en beneficio propio, al encontrarse en situación distinta a los demás, bajo criterios justificados constitucionalmente. De ello [1] se sigue que la igualdad tiene un contenido relacional, porque precisa de la existencia de normas, relaciones jurídicas y situaciones en las que se haya introducido una diferencia de trato.

Ya sea como principio o derecho, puede constituir un mandato de equiparación o uno de diferenciación. Como exigencia de equiparación, implica dar un trato igual a circunstancias o situaciones no idénticas que, sin embargo, deben considerarse irrelevantes para el disfrute o ejercicio de determinados derechos o para la aplicación de una misma disposición [2]. Para llevar a cabo el juicio de equiparación, se debe establecer el criterio según el cual se van a considerar los datos como irrelevantes para predicar la igualdad entre situaciones o personas distintas. Como exigencia de diferenciación, equivale a no equiparar arbitrariamente aquellas situaciones o personas entre las que se presentan diferencias relevantes. Se trata de establecer un trato diferenciado con respecto a circunstancias o situaciones aparentemente semejantes, pero que requieren una regulación jurídica distinta [3].

2. En la sentencia de 23 de octubre de 2020, inconstitucionalidad 98-2015, este tribunal estableció que el examen o juicio de igualdad debe ser un test integrado. El juicio de igualdad es el análisis escalonado que hace el órgano contralor de constitucionalidad para verificar la violación al principio de igualdad en los términos del art. 3 Cn. [4]

A. El primer paso consiste en determinar si la medida que se enjuicia representa una intervención en el derecho de igualdad, esto es, identificar si se está en presencia de una diferenciación o de una equiparación introducida por una norma. La intervención de un derecho fundamental ocurre cuando el legislador expide una norma que afecta negativamente su contenido garantizado a primera vista a una de sus modalidades de ejercicio, en aras de proteger o tutelar otros derechos o bienes constitucionales. Es decir, se trata de una modificación del objeto o sujetos de forma que se impide o se dificulta el ejercicio de las acciones, propiedades o situaciones habilitadas por el derecho afectado [5]. Si en lugar de tratarse de una intervención a un derecho se trata de una regulación positiva, no habría necesidad de realizar un test de proporcionalidad.

Dado que la igualdad se traduce en una prohibición de discriminación y en un deber de promoción y protección [6], en el primer caso se entenderá que existe una intervención en la igualdad cuando la medida otorgue un trato diferenciado a dos destinatarios del derecho, mientras que en el segundo la intervención se

---

1 Sentencia de 25 de noviembre de 2008, inconstitucionalidad 9-2006.

2 Sentencia de 8 de abril de 2003, inconstitucionalidad 28-2002.

3 Entre otras, sentencia de 29 de julio de 2015, inconstitucionalidad 65-2012.

4 Es escalonado porque se desarrolla en tres etapas sucesivas, cuya prosecución hacia la siguiente depende del agotamiento de la anterior. Resolución de 10 de diciembre de 2018, inconstitucionalidad 23-2018.

5 Sentencia de 5 de diciembre de 2012, inconstitucionalidad 13-2012.

6 Sentencia de 4 de mayo de 2011, inconstitucionalidad 18-2010.

producirá cuando las normas prevean un trato paritario a un grupo de sujetos en los que, por sus circunstancias, uno o más de ellos deban ser favorecidos por el Estado en comparación con los demás.

B. El segundo paso es seleccionar el tipo de escrutinio de igualdad que deberá guiar la aplicación del principio de proporcionalidad. Para determinar el tipo de escrutinio a utilizar, es necesario tomar como referencia la idea de categorías sospechosas de discriminación. Estas son situaciones, criterios o factores que históricamente han sido causas comunes de tratos discriminatorios. El art. 3 Cn. prevé algunas de ellas de manera expresa –nacionalidad, raza, sexo y religión–, pero dicha enumeración no es taxativa [7]. Así, la infracción a la prohibición de discriminación o el incumplimiento de la obligación de promoción o protección puede estar fundamentada o no en tales categorías.

Cuando el trato equiparador o diferenciador se basa en circunstancias ajenas o distintas a las referidas categorías sospechosas, el escrutinio a utilizar es aquel que puede denominarse escrutinio básico. En cambio, cuando el trato equiparador o diferenciador sí se basa en ellas, es posible hacer una distinción de escrutinios excepcionales: el escrutinio intermedio, que es el que debe utilizarse para enjuiciar las acciones afirmativas cuyo propósito es cumplir la obligación de promoción o protección de los derechos de las personas que pertenecen a alguna de esas categorías; y el escrutinio estricto, que es el que debe realizarse para analizar las medidas que establecen un trato diferente en detrimento (discriminación) de los derechos de un grupo de personas de alguna de dichas categorías."

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

"C. El último paso es la aplicación del principio de proporcionalidad. Este principio opera como un criterio estructural de carácter escalonado que sirve para determinar si una medida de intervención a derechos fundamentales está justificada o no por la Constitución. Posee dos variantes: la prohibición de exceso y la prohibición de protección deficiente. La estructura de la primera está compuesta por tres elementos universalmente aceptados: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. En cambio, la estructura de la segunda se compone de los elementos siguientes: idoneidad, suficiencia o medio alternativo más idóneo y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Para los efectos de la presente sentencia, solo interesa analizar el funcionamiento de la prohibición de exceso."

LA IDONEIDAD

"a. La idoneidad exige que toda intervención en los derechos fundamentales deba ser la adecuada para contribuir a la obtención del fin constitucionalmente legítimo que persigue. Aquí hay dos exigencias: la medida que se impugna debe perseguir un fin admisible desde la Constitución y debe ser adecuada para favorecer su obtención. Entonces, la medida es idónea si, y solo si, es la apropiada para alcanzar el fin identificado como tal. Cuando se cuestiona la constitucio-

7 Sentencia de 23 de diciembre de 2016, inconstitucionalidad 156-2012.

nalidad de una medida que interviene un derecho fundamental por violación al subprincipio de idoneidad, lo primero que debe hacer el tribunal es analizar si el fin que persigue y que ha sido propuesto como su fundamento está amparado por la Constitución –así, "no puede pedirse igualdad en la ilegalidad"–. Luego, el análisis ha de demostrar si la medida adoptada es adecuada para contribuir a alcanzar, conseguir o asegurar ese fin. Esto significa que entre el medio y el fin existe (o debe existir) una relación de causalidad, la cual se presenta cuando el precepto impugnado conduce a un estado de cosas en que la realización de su fin se ve aumentada.

En materia de igualdad, el análisis de idoneidad debe seguir ciertas reglas argumentativas, las cuales varían en función del escrutinio que sea utilizado: (i) si se aplica el escrutinio básico, la medida debe servir para alcanzar un fin que la Constitución no prohíba; (ii) si se aplica el escrutinio intermedio, la medida debe procurar conseguir un fin constitucionalmente deseado –promocionar o proteger a alguno de los grupos o individuos de las categorías sospechosas–; y (iii) si se aplica el escrutinio estricto, la medida debe servir para alcanzar un fin constitucionalmente imperioso. Esto indica que la selección del escrutinio incide en el margen de acción que posee el legislador para regular medidas relacionadas con la igualdad, dado que uno de sus márgenes es para la fijación de fines [8]."

LA NECESIDAD

"b. La necesidad, segundo elemento del principio de proporcionalidad, exige que toda medida que interviene un derecho fundamental sea la más benigna con este, entre todas las que revistan por los menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto [9]. Según esto, la "necesidad" presupone la existencia de por lo menos un medio alterno a la medida adoptada por el legislador con igual o mayor idoneidad. La razón es que este examen es una comparación entre medios. En este análisis, es preciso seleccionar aquel o aquellos medios que, según el conocimiento científico, técnico, dogmático, jurisprudencial o general existentes en el momento de expedirse la medida cuestionada habrían podido y podrían ser idóneos de alguna manera, para contribuir a la obtención de la finalidad perseguida por el Legislativo con la medida.

En materia de igualdad, el análisis de la necesidad de la medida equiparadora o diferenciadora debe pasar por el examen de si la medida idónea resulta ser la más benevolente de todas las posibles con las cuales se compara. Dicho de otra manera: el término de comparación propuesto debe ser igualmente idóneo para determinar si la afectación a la igualdad por la equiparación o por la diferenciación es mayor que la situación jurídica del sujeto con que la norma enjuiciada debe ser comparada. Esto significa que el actor corre con la carga de proponer al tribunal una medida alternativa menos perjudicial –término de comparación–, pues es de la esencia de este estrato del principio de proporcionalidad el ser un examen hipotético en el que se analizan posibilidades que no existen, pero que pueden llegar a existir.

---

8 Sentencia de 7 de octubre de 2011, inconstitucionalidad 20-2006.

9 Sentencia de 8 de junio de 2020, inconstitucionalidad 21-2020 AC.

c. La proporcionalidad en sentido estricto o ponderación consiste en un proceso argumentativo para determinar si las ventajas que se obtienen mediante la intervención legislativa en el derecho fundamental logran compensar los sacrificios que esta implica para sus titulares y para la sociedad en general. Como se observa, el objeto normativo de la ponderación no es la norma cuestionada (que fue previamente objeto del análisis de idoneidad y necesidad), sino el fin constitucional, el cual se pondera con el derecho fundamental intervenido. El proceso argumentativo que corresponde realizar al tribunal en una ponderación está representado por dos pasos: (i) la identificación del peso de los objetos normativos a ponderar –fin constitucional y derecho fundamental intervenido– y su posterior comparación –para determinar si la importancia del fin constitucional es mayor que el derecho fundamental, o viceversa–; y (ii) la construcción de una regla de precedencia, para determinar cuál de los objetos normativos debe preferirse."
Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 5-2016, fecha de la resolución: 04/06/2021

PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD VÍA REMISIÓN DE INAPLICABILIDAD

REQUISITOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA TRAMITAR Y DECIDIR UN PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

"Debe analizarse si la inaplicabilidad remitida cumple, según los arts. 77-A, 77-B y 77-C LPC, con los requisitos mínimos necesarios para tramitar y decidir un proceso de inconstitucionalidad, es decir: (i) la relación directa y principal que debe tener la ley, disposición o acto subjetivo, público o privado, con la resolución del caso; (ii) la inexistencia de pronunciamiento de esta Sala sobre la constitucionalidad de la disposición, acto o cuerpo normativo inaplicado; (iii) los elementos del control de constitucionalidad, es decir, el contraste normativo, como indica el art. 6 n° 2 y 3 LPC, y la aportación del contenido y de los argumentos suficientes y necesarios sobre el parámetro y objeto de control, así como de la supuesta inconstitucionalidad apreciada, justificando su decisión de inaplicación; y (iv) el agotamiento de la posibilidad de interpretación conforme.

1. A. En cuanto al primer requisito señalado, se ha sostenido que los jueces al ejercer el control difuso no deben limitarse a plasmar un análisis de constitucionalidad —en el cual planteen la incompatibilidad advertida entre la norma a inaplicar y la Constitución—, sino que también es necesario que efectúen un análisis de relevancia, en virtud del cual se acredite que la resolución a emitir depende de la norma cuestionada [1].

En el presente caso, se tiene que el art. 3 DECSPRS prevé la competencia que le corresponde a la Dirección General de Migración y Extranjería, PNC y jueces de paz, pero los argumentos de la autoridad requirente no se dirigen a cuestionar el reconocimiento de tales facultades. Asimismo, el art. 5 estatuye los supuestos a los que podría aplicarse las medidas de prevención, es decir, por sí

[1] Sentencia de 5 de diciembre de 2006, inconstitucionalidad 21-2006.

mismas no establecen limitaciones a derechos. En lo que concierne a los arts. 4, 6, 7 y 9 DECSPRS, se dirigen a describir en términos genéricos el régimen de actuación de la PNC en el procedimiento contenido en tales disposiciones.

De esto se sigue que las disposiciones citadas en el párrafo anterior no eran determinantes para la decisión del juez, que se traduce en ratificar o no las medidas policiales que habían sido solicitadas por la PNC (art. 10 inc. 2° DECSPRS). En conclusión, los art. 3, 4, 5, 6, 7 y 9 DECSPRS no eran disposiciones relevantes para la resolución que debía adoptarse. Por el contrario, el art. 12 de las disposiciones especiales prevé las medidas que el juez puede aplicar -además de ratificar las medidas preventivas que la PNC aplique- a las personas retomadas salvadoreñas que sean miembros o colaboradores de maras, pandillas o agrupaciones ilícitas. Esto implica que el art. 12 DECSPRS era el precepto relevante para la solución del caso, de modo que en lo que sigue se verificará si tal disposición cumple con el resto de requisitos del control difuso.

B. Sobre el segundo requisito expuesto, se advierte que, a la fecha, este Tribunal no ha emitido pronunciamiento definitivo alguno sobre la constitucionalidad de la disposición inaplicada. Con ello se cumple el requisito del art. 77-A inc. 3° LPC.

C. Con respecto al tercer requisito, tal como se ha dicho de forma consistente en la jurisprudencia, quien promueve el proceso de inconstitucionalidad —independientemente si este se origina por demanda o en el ejercicio del control difuso de constitucionalidad—debe configurar adecuadamente el fundamento jurídico y material de la pretensión. El primero es el señalamiento de las disposiciones legales impugnadas y de las disposiciones constitucionales que permitan establecer el contraste normativo. Por su parte, el fundamento material lo constituye el contenido del objeto y del parámetro de control y los argumentos que evidencian la contradicción entre ambos [2]. En este caso, el juez requirente no indica cuál es la disposición constitucional que establece los principios de culpabilidad y lesividad. Además, no dota de contenido a los derechos a la libre circulación, intimidad y propiedad (art. 2 Cn.), el derecho a una defensa técnica (art. 2 inc. 1° en relación con el art. 12 Cn.), prohibición de trabajo forzado (art. 9 Cn.) y presunción de inocencia (art. 12 Cn.).

Aunado a ello, se limita a realizar afirmaciones sobre la contradicción a los derechos fundamentales y principios constitucionales enunciados, sin exteriorizar los argumentos tendentes a demostrar la contradicción normativa que existe según su punto de vista. Por ello, este Tribunal considera que no se ha cumplido con el tercer requisito que la Ley de Procedimientos Constitucionales y la jurisprudencia exigen para iniciar el proceso de inconstitucionalidad por el ejercicio del control difuso. Por lo expuesto, dado que la resolución de inaplicabilidad no cumple con lo indicado en los arts. 77-B letra a y 77-C LPC, se declarará no ha lugar el inicio de este proceso, para enjuiciar la constitucionalidad de los arts. 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 12 DECSPRS, por la supuesta infracción a los arts. 2, 3, 9, 11 y 12 Cn."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 137-2019, fecha de la resolución: 28/06/2021

---

[2] Resolución de 11 de octubre de 2013, inconstitucionalidad 150-2012.

DIFERENCIA ENTRE EL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD O INAPLICACIÓN

"1. La jurisprudencia de este Tribunal ha reiterado [1] que en el proceso de inconstitucionalidad generalmente se decide sobre una confrontación entre las normas que se proponen como objeto y parámetro de control, para emitir un pronunciamiento de carácter general y obligatorio. En cambio, en el control difuso de constitucionalidad o inaplicación, la decisión judicial solo produce efectos en el caso específico entre las partes respectivas. Pese a tal diferencia, a esta Sala se le atribuyó la Competencia de procurar la unificación de criterios interpretativos de las disposiciones constitucionales utilizadas por los jueces como parámetros de inaplicación, para contribuir a la seguridad jurídica y a la igualdad en la aplicación de la ley.

Sin embargo, debe aclararse que el proceso de inconstitucionalidad iniciado por una decisión de inaplicabilidad no es un recurso o un procedimiento de revisión de esta resolución. El proceso de inconstitucionalidad no interfiere con los efectos de la decisión de inaplicación y los medios impugnativos que procedan contra ella siguen siendo viables si se cumplen los presupuestos legales correspondientes. En otras palabras, el proceso de inconstitucionalidad es independiente de los procesos en los que se origina la decisión de inaplicación y la remisión de esta únicamente representa, el cauce de conexión entre el control difuso y el control concentrado de constitucionalidad de las leyes [2]."

REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE UNA INAPLICABILIDAD PUEDA PROVOCAR EL INICIO DE UN PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

"2. Ahora bien, para que una inaplicabilidad pueda provocar el inicio de un proceso de inconstitucionalidad, es necesario que cumpla con los siguientes requisitos mínimos: (i) la relación directa y principal que debe tener la ley, disposición o acto con la resolución del caso [3]; (ii) la inexistencia de pronunciamiento de esta Sala sobre la constitucionalidad de la disposición, acto o cuerpo normativo inaplicados [4]; (iii) el agotamiento de la posibilidad de interpretar el objeto de control conforme a la Constitución [5]; y (iv) los elementos indispensables dcl control de constitucionalidad, esto es, el parámetro y objeto de control [6] y los motivos de inconstitucionalidad [7].

---

1 Auto de 1 de julio de. 2019, inconstitucionalidad 71-2018.

2 Auto de 24 de junio de 2019, inconstitucionalidad 10-2019.

3 Para una mejor compresión, consúltese el auto de 18 de octubre de 2017, inconstitucionalidad 66-2017

4 Este requisito se fundamenta en la obligatoriedad de las sentencias de este Tribunal (arts. 183 Cn, 10 y 77-F inc. 4° LPC.)

5 Ejemplo, sentencia de 7 de marzo de 2018, inconstitucionalidad 69-2015.

6 Auto de 4 de diciembre de 2015, inconstitucionalidad 132- 2015.

7 Ej. Auto de 30 de marzo de 2016, inconstitucionalidad 110-2015..

VIGENCIA DEL OBJETO DE CONTROL

"2. Finalmente, la tramitación y normal conclusión del proceso de inconstitucionalidad estarán condicionadas por la vigencia del objeto de control. En este sentido, si la disposición o cuerpo normativo impugnado ya ha sido derogado al momento de presentarse la demanda; se agota su vigencia durante el desarrollo del proceso por derogatoria o finalización, de sus efectos; o se expulsa del ordenamiento jurídico mediante el pronunciamiento general y obligatorio de este Tribunal, el objeto de control deja de existir y el proceso carece de finalidad, por lo que deberá terminar de forma anticipada, pues no habría un sustrato material respecto del cual pronunciarse [8]. Sin embargo, cuando el cuerpo jurídico que contiene las disposiciones impugnadas es derogado expresamente o reformado por otro que le reproduce sustancialmente, la pretensión de inconstitucionalidad o requerimiento judicial aún pueden considerarse configurados y, por tanto, el proceso constitucional podría tramitarse hasta su conclusión. En consecuencia, seria procedente conocer el fondo de la pretensión planteada por el ciudadano o, en su caso, del requerimiento judicial, realizando el traslado del control de constitucionalidad por el cambio del objeto de control [9]."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 160-2020, fecha de la resolución: 01/10/2021

EN EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD O INAPLICACIÓN, LA DECISIÓN JUDICIAL SOLO PRODUCE EFECTOS EN EL CASO ESPECÍFICO, ENTRE LAS PARTES RESPECTIVAS

"III. Consideraciones jurisprudenciales sobre la inaplicabilidad.

"1. La jurisprudencia de este Tribunal ha reiterado que en el proceso de inconstitucionalidad generalmente se decide sobre una confrontación entre las normas que se proponen como objeto y parámetro de control, para emitir un pronunciamiento de carácter general y obligatorio. En cambio, en el control difuso de constitucionalidad o inaplicación, la decisión judicial solo produce efectos en el caso específico, entre las partes respectivas. Pese a tal diferencia, a esta Sala se le atribuyó la competencia de procurar la unificación de criterios interpretativos de las disposiciones constitucionales utilizadas por los jueces como parámetros de inaplicación, para contribuir a la seguridad jurídica y a la igualdad en la aplicación de la ley.

Sin embargo, debe aclararse que el proceso de inconstitucionalidad iniciado por una decisión de inaplicabilidad no es un recurso o un procedimiento de revisión de esta resolución. El proceso de inconstitucionalidad no interfiere con los efectos de la decisión de inaplicación y los medios impugnativos que procedan contra ella siguen siendo viables si se cumplen los presupuestos legales

---

8 Auto de 16 de marzo de 2018, inconstitucionalidad 37-2016.

9 Auto de 27 de enero de 2020, inconstitucionalidad 6-2019.

correspondientes. En otras palabras, el proceso de inconstitucionalidad es independiente de los procesos en los que se origina la decisión de inaplicación y la remisión de esta únicamente representa el cauce de conexión entre el control difuso y el control concentrado de constitucionalidad de las leyes

2. Ahora bien, según la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), la inaplicabilidad debe cumplir ciertos requisitos, a fin de tramitar y decidir un proceso de inconstitucionalidad (arts. 77-B, 77-C y 77-F inc. 4º LPC). Tales requisitos son: (i) la relación directa y principal que debe tener la ley, disposición o acto con la resolución del caso; (ii) la inexistencia de pronunciamiento de esta Sala sobre la constitucionalidad de la disposición, acto o cuerpo normativo inaplicado; (iii) el agotamiento de la posibilidad de interpretar el objeto de control conforme a la Constitución; y (iv) los elementos indispensables del control de constitucionalidad, esto es, el parámetro y objeto de control, y los motivos de inconstitucionalidad."
Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad número de referencia: 82-2018, fecha de la resolución: 19/11/2021

PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

SENTENCIA QUE ESTIMA O DESESTIMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA DISPOSICIÓN JURÍDICA PRODUCE EFECTOS GENERALES Y OBLIGATORIOS

"De conformidad con los arts. 183 Cn. y 10 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, la sentencia que estima o desestima la inconstitucionalidad de una disposición jurídica produce efectos generales y obligatorios; es decir, no solo para dos intervinientes en el proceso de inconstitucionalidad, sino también para todos los funcionarios y autoridades estatales y para toda persona natural o jurídica. Dichas sentencias pueden contener mandatos positivos o negativos dirigidos a los órganos constitucionales, cuya forma de cumplimiento depende de la finalidad del pronunciamiento, lo cual impone el deber de adoptar las medidas pertinentes en un plazo razonable, para la eficacia de las resoluciones emitidas, según sea la complejidad de lo requerido. Además, según el art. 172 inc. 1° Cn., esta Sala está facultada para adoptar las providencias necesarias a fin de que se ejecute lo juzgado en los procesos de su conocimiento."
Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 37-2015, fecha de la resolución: 10/12/2021

VICIOS EN LA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA QUE IMPIDEN SU CONFIGURACIÓN

"1. Esta Sala ha reiterado que el control abstracto realizado en el proceso de inconstitucionalidad radica en la confrontación normativa planteada y argumentada en la demanda, siendo los dos extremos de tal cotejo: (i) la disposición constitucional que se propone como parámetro; y (ii) la disposición que se declara inaplicable o se pide invalidar. En consecuencia, si se reforma o deroga la legislación impugnada, generalmente se altera la tramitación del proceso. Así, dado quedas eventuales modificaciones de la normativa sometida al control

constitucional podrían incidir en la resolución del proceso, su tramitación estará condicionada por la existencia del objeto de control. De tal forma, cuando durante la tramitación del proceso de inconstitucionalidad se verifica alguna modificación en la disposición sometida a control, es preciso determinar si el contraste normativo subsiste. Y si dicho contraste se mantiene, es posible examinar una disposición con el mismo o similar contenido material que la disposición originalmente objetada.

2. La jurisprudencia constitucional ha afirmado que el fundamento jurídico de la pretensión de inconstitucionalidad se configura especificando la o las disposiciones impugnadas y la disposición o disposiciones constitucionales propuestas como parámetro de control. El fundamento material o sustrato fáctico está constituido por el contenido normativo de las disposiciones objeto y parámetro de control, y por las argumentaciones para mostrar las confrontaciones internormativas entre ambas. Por ello, existen vicios en la demanda cuando, por ejemplo: (i) el sustrato jurídico es deficiente; y (ii) en el sustrato fáctico no se argumenta una posible contradicción entre la normativa impugnada y las disposiciones constitucionales, o se atribuye a la norma impugnada o al parámetro de control un contenido inadecuado o equivoco, o se propone como parámetro de control una norma infraconstitucional. Si se verifica alguno de dichos vicios, la demanda planteada deberá declararse improcedente."

2. Finalmente, este Tribunal ha explicado que el uso de los vocablos "ley, decreto y reglamento" en los arts. 174 y 183 Cn., como los preceptos que pueden ser impugnados mediante el proceso de inconstitucionalidad, tienen un carácter meramente ejemplificativo y referencial, por lo que son susceptibles de control todos los actos normativos de naturaleza general y abstracta, con independencia de su rango, del sujeto o ente que los haya emitido, de su origen y de su denominación."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 106-2019, fecha de la resolución: 27/10/2021

PROCESOS SANCIONATORIOS AL INTERIOR DE LA FUERZA ARMADA

RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA MILITAR

"1. El art. 216 Cn reconoce de forma expresa la justicia militar como una justicia para la guerra, lo que implica, un régimen diferenciado para la institución castrense, en el cual, ante el cometimiento de delitos y faltas de carácter militar, existirán tanto procedimientos especiales para su aplicación como una jurisdicción exclusiva para su determinación. Esto ha sido desarrollado en los arts. 177 y siguientes del CJM así como en el art. 16. inc. 2° de la Ley Orgánica Judicial. Así, el primero prescribe: "[l]a jurisdicción militar en la República se ejerce únicamente por los tribunales, autoridades y funcionarios que este Código determina". Criterio jurisprudencial plenamente reconocido en diversos fallos de este Tribunal [1], entre los cuales se identifica al Código de Justicia Militar como el cuerpo

1 Emitidos por esta sala, mediante las sentencias de 24 de junio de 2003, 05 de diciembre de 2007 y 8 de febrero de 2013, hábeas corpus 231-2002, 160-2006 y 307-2012, respectivamente.

normativo que comprende un marco general de los actos y omisiones tipificados como delitos y faltas, las diferentes penas y sanciones disciplinarias, los presupuestos jurídicos-procesales indispensables para llevar a cabo los procesos sancionatorios en el interior de la Fuerza Armada, así como las atribuciones de los funcionarios que ejercen la jurisdicción militar, conforme a la regulación que consta en el art. 216 Cn [2]."

DENOMINADOR COMÚN DE LOS ILÍCITOS MILITARES

"En este marco, el denominador común de estos ilícitos militares es la infracción de los deberes inherentes a la disciplina y la obediencia a los superiores. Así, las faltas contempladas en el referido estatuto especial pueden entenderse como una lesión a la disciplina de las fuerzas armadas y la imposición de un castigo por ello. En otras palabras, quien se encuentra sometido a este régimen de supremacía especial debe obrar a impulso de quien lo dirige. De ahí que, la relación de dependencia del inferior respecto del superior, es una consecuencia necesaria de la organización y subordinación jerárquica, todo lo cual comporta el deber de obediencia y la existencia de un poder disciplinario tendiente a asegurar el cumplimiento de ese deber, aún y cuando ello permita aplicar excepcionalmente la privación de libertad como sanción.

1. Sin perjuicio de lo anterior, éste régimen especial no debe implicar una relativización de las garantías tanto sustantivas cómo procesales que garantizan la Constitución. En tal sentido, la jurisprudencia de esta Sala es enfática en explicar que las garantías y derechos reconocidos en la norma primaria –tales como la presunción de inocencia, los derechos de defensa, el ofrecimiento de los medios pertinentes de prueba y otras categorías jurídicas– deben ser aplicables a la actividad sancionadora de la administración [3]. Asimismo se ha afirmado que "... la situación de sujeción especial de un miembro de la Fuerza Armada a la jurisdicción militar no puede implicar la eliminación de sus derechos fundamentales al interior del proceso que se lleve a cabo en dicha sede administrativa, pues tanto ésta como la judicial son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, y por ende, sujetos a la Constitución, en los que debe velarse por la condición de inviolabilidad que poseen los derechos fundamentales [4]".

LA "ESPECIALIDAD" DEL VÍNCULO DEL PERSONAL MILITAR NO ES UNA RAZÓN SUFICIENTE PARA ESTABLECER UN TÉRMINO MAYOR DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD, QUE EL PRECEPTUADO EN EL ART. 14 CN.

"3. Por lo anterior, la disciplina militar se caracteriza por ser una condición instrumental para la finalidad asignada por la Constitución a la Fuerza Armada, pero que no posee un valor constitucional en sí mismas [5]. Esto significa que

---

2 Sentencia de 27 de septiembre de 2005, hábeas corpus 136-2005.

3 Sentencia de 27 de septiembre de 2005, hábeas corpus 136-2005.

4 Al respecto, véase la inconstitucionalidad 28- 2015 AC, ya citada.

5 Con mayor rigor, la sentencia de 27 de julio de 2014, inconstitucionalidad 79-2011

ella únicamente puede justificarse en la medida que sea adecuada, necesaria y proporcionada. Por lo que, si bien nos encontramos ante un ejemplo de las denominadas relaciones de supremacía especial, esta no es una categoría que pueda exceptuar la fuerza normativa de la Constitución. Lo anterior implica que la "especialidad" del vínculo del personal militar no es una razón suficiente para establecer un término mayor de la privación de libertad que el preceptuado en el art. 14 Cn., en tanto que se enmarca dentro del ámbito propio de la administración que ejerce sus potestades auto-organizativas, lo que no es una excusa con el rigor suficiente para inobservar el límite temporal del art. 14 Cn.

4. Tales consideraciones son válidas para la sanción de aislamiento de la población cuartelaría, pues la infracción a la disciplina militar y su relevancia como medio o instrumento para lograr la eficacia de la defensa nacional, no son razones suficientes para justificar la limitación del derecho a la libertad física por un período superior al máximo de cinco días que establece la Constitución, por lo que deberá de declararse en la presente sentencia, haciéndose constar que la disposición objeto de control quedó derogada por la aplicación directa del art. 249 Cn."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 176-2016, fecha de la resolución: 01/11/2021

REINTEGRACIÓN SOCIAL

CONVIVENCIA DEL NIÑO O NIÑA MENOR DE CINCO AÑOS CON SU MADRE RECLUSA

"2. Al aplicar lo anterior al caso concreto, se advierte que este Tribunal ya ha juzgado un caso en que se impugnaba el art. 249 RGLP. En la sentencia de inconstitucionalidad 128-2012[1] se sostuvo que la convivencia del niño o niña menor de cinco años con su madre reclusa es una condición que puede incidir de forma óptima con su posterior reintegración a la sociedad y evita la pérdida del contacto de este con su progenitora, como una situación en la que prevalece su interés superior. De igual manera se resolvió en relación con el art. 70 de la Ley Penitenciaria y art. 156 RGLP, que versan sobre el mismo asunto. Como muy bien se apuntó en dicha sentencia, una lectura dinámica del art. 27 inc. 3° Cn. conduce a afirmar que la reintegración social implica la apertura de un proceso de comunicación e interacción entre la cárcel y la sociedad, en el que quienes estén cumpliendo una pena no puedan ser segregados de forma absoluta de su relación con la familia y con la comunidad, ofreciéndole esta última oportunidades laborales y educativas de forma posterior al cumplimiento de su pena.

Desde tal óptica, la reintegración social impone el ofrecimiento a quien cumple la pena de una serie de servicios que vayan desde la instrucción básica y profesional hasta los servicios sanitarios y psicológicos. Pero, esto no desde una concepción acorde con la disciplina carcelaria, sino como recursos idóneos que contribuyan a solventar situaciones de carencia y privación de oportunidades fre-

[1] Dicha sentencia fue emitida el 28 de septiembre de 2015.

cuentemente relacionadas en la historia particular de cada recluso y reclusa. Por todo ello, los programas y servicios que se ofrecen en el ámbito del tratamiento penitenciario, deben ir dirigidos a volver más aptas las condiciones sociales a las que el detenido regresa; y en particular, aquellas que se relacionan con su núcleo familiar, del cual volverá a formar parte. En el caso de las mujeres reclusas, además de lo anterior es fundamental que las acciones de las autoridades penitenciarias se enfoquen en solventar sus necesidades vitales sobre su periodo de menstruación, embarazo y maternidad."

EFECTO DE TRASCENDENCIA A TERCEROS

"La estancia en prisión incide no solo en la persona que la sufre sino en todo el núcleo familiar, ya que las relaciones entre sus integrantes no se produce en un entorno óptimamente normalizado. A la larga ello produce un proceso de desarraigo que culmina con la ruptura de tales vínculos, y en particular, el relativo entre madres e hijos. Esto se conoce como el efecto de trascendencia a terceros, inherente a la ejecución de la pena de prisión, que debe ser minimizado en lo posible para evitar que fracase la finalidad de reintegración social. De ahí que el art. 249 RGLP demuestra una decisión del legislador de hacer prevalecer la relación madre e hijo y adecuar las condiciones de su estancia a las que corresponden —hasta donde sea posible— a un ambiente semejante al de una vida fuera de la cárcel. Esto implica que no hay intereses contrapuestos, sino complementarios desde la óptica de la salvaguarda del vínculo familiar y donde la madre tiene un rol protagónico en la crianza y cuidado del niño."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 122-2018, fecha de la resolución: 22/11/2021

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMENTO DE SENTENCIA

FACULTADES DE EJECUCIÓN DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

"1. El art. 172 inc. 1° Cn. prevé que corresponde al Órgano Judicial la potestad de "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucionales [...]". En muchos países; las cláusulas constitucionales que tienen una redacción como esta sirven como base para reconocer la atribución para ejecutar todas las resoluciones que pronuncian los tribunales. De igual forma, es un punto común que los tribunales constitucionales poseen la competencia para dar seguimiento y ejecutar las decisiones que toman, como manifestación de su función jurisdiccional y de la obligación de los órganos de Estado de cumplir con ellas. En El Salvador, la postura de este Tribunal ha sido que la competencia de esta Sala para establecer si sus decisiones han sido cumplidas o no por sus destinatarios, es una función inherente a la potestad jurisdiccional que la Constitución le atribuye.

De igual forma, se ha dicho que dentro de las facultades de ejecución que posee esta Sala se encuentra incluso la de invalidar normas o actos posteriores a una sentencia que contradigan su contenido[1]. En tal sentido, la facultad de eje-

[1] Auto de 26 de julio de 2017, inconstitucionalidad 42-2012 AC.

cución supone la atribución para verificar que mediante nuevas normas o actos no se intente crear el mismo estado de cosas y/o normativo que la sentencia suspendió o invalidó. Esto, con el fin de preservar la Constitución y el uso adecuado de las competencias constitucionales o legales que corresponden a todos los órganos creados por ella [2].

Lo dicho significa que es el propio Tribunal quien decide cómo se ejecutará la sentencia; quien es el ente o funcionario obligado a cumplir; en qué plazo deberá hacerlo; los actos que deberá ejecutar para cumplir tal cometido; y hasta qué momento se tendrán por satisfechos los mandatos derivados de ella. De manera que, ningún funcionario o particular puede arrogarse la atribución de dictaminar cuándo se ha cumplido una sentencia pronunciada por esta Sala, ampliar o restringir el sentido y alcance de la ejecución, o señalar los cursos de acción que deben seguirse para el cumplimiento de la sentencia. Asimismo, este Tribunal está habilitado para enjuiciar la constitucionalidad de cualquier disposición, resolución, acto, vía de hecho o inactividad que posea una conexión directa con lo que ha sido juzgado y suponga el incumplimiento de lo resuelto, sin necesidad de iniciar un proceso constitucional posterior, ya bien a petición de parte o de oficio [3]."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 5-2001, fecha de la resolución: 13/10/2021

TASAS MUNICIPALES POR EL USO DEL SUELO Y SUBSUELO

INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY EN MATERIA TRIBUTARIA PORQUE LA DISPOSICIÓN MUNICIPAL CONTIENE UNA CONTRAPRESTACIÓN, LA CUAL SOLO DEBE SOLICITARSE CUANDO EL HECHO GENERADOR SE PRODUCE EN INMUEBLES DE PROPIEDAD PÚBLICA

"VI. Resolución del problema jurídico.

Para resolver el problema jurídico es indispensable recordar que el actor alega que la tasa objeto de impugnación no conlleva una contraprestación para el contribuyente y que no define qué inmuebles se relacionan con la extracción de material pétreo.

1. Con respecto al primer argumento, es indispensable insistir, por una parte, que la creación de tasas municipales se rige el principio de reserva legal relativa, ya que el diseño constitucional establece directamente el ejercicio de la potestad tributaria a favor de las municipalidades, lo cual implica una competencia normativa que no se origina en una ley, sino directamente de la Constitución. Por lo tanto, los concejos municipales son los designados constitucionalmente para emitir la regulación que configure las tasas municipales concretas y, además, con base en el principio de legalidad tributaria, la configuración de los elementos esenciales de un tributo debe constar en el propio texto normativo de manera clara y taxativa. Por tanto, el hecho imponible de cada tributo debe ser derivable

---

2 Auto de 26 de julio de 2017, Inconstitucionalidad 42-2012 AC.

3 Auto de 7 de agosto de 2020, inconstitucionalidad 21-2020.

directamente de la prescripción contenida en la disposición jurídica, según su estructura normativa, que debe aparecer en forma completa, para permitir conocer con certeza cuáles hechos o situaciones que puedan dar origen a potenciales obligaciones tributarias sustanciales. En ese orden, para considerar que un hecho imponible satisface este requisito de completitud, es necesario que contenga los elementos material, personal, temporal y espacial. Para el caso particular, debemos centrarnos en el elemento material, es decir, en la descripción objetiva del hecho concreto que el destinatario tributario realiza o la situación en la que se encuentra o a cuyo respecto se produce.

Esta sala advierte que, a partir de un análisis integral del art. 7 romano 1, apartado B, sección 4, n° 2 ORTSMMP, es razonable afirmar que dicha disposición jurídica se inserta dentro del conjunto "servicios municipales" y, con base en esto, regula la emisión de una licencia. En efecto, la licencia pretende gravar el uso del suelo y del subsuelo para extraer piedra, grava, chispa, arena, "valestre" u otros minerales de aluviones, cauces de ríos o minas. De esta forma, una lectura objetiva del objeto de control permite entender que normativamente se ha dispuesto que el servicio que la municipalidad presta es la mera emisión de una licencia para los fines antes descritos a cambio del pago de la tasa. Esto indica que existe una contraprestación por el pago. Y si esto es así, entonces este punto de la pretensión deberá desestimarse.

2. Ahora bien, en torno a la inconstitucionalidad del objeto de control por la falta de especificación de los lugares en los que se requiere la licencia para la extracción de piedra, grava, chispa, arena, valestre u otros minerales de aluviones, cauces de ríos o minas, esta sala considera que debe desestimarse. Primero, porque el motivo de inconstitucionalidad se fundamenta en un punto de vista personal del actor y no en una real confrontación internormativa directa entre el objeto y el parámetro de control, ya que el precepto objetado no hace referencia a inmuebles de propiedad privada. Y, segundo, porque, si bien la disposición impugnada no especifica si la licencia que pretende gravar el uso del suelo y del subsuelo para la explotación de dichos materiales debe ser otorgada para realizar tal actividad en bienes inmuebles de propiedad pública o privada, tal argumento no determina por sí solo su inconstitucionalidad. En efecto, tal como lo ha determinado la jurisprudencia constitucional, ante la falta de certeza acerca del tipo de propiedades o terrenos en los que debe producirse el hecho generador, debe interpretarse que únicamente es posible requerir licencias municipales cuando aquel se realiza en propiedad pública, ya que los municipios no están habilitados para gravar el uso del suelo y del subsuelo de propiedades privadas [1]."
Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 97-2015, fecha de la resolución: 12/05/2021

---

[1] Al respecto, véanse las sentencias de 12 de octubre 2015 y 20 de febrero de 2019, amparos 317-2013 y 714-2016, por su orden. En concreto, en el primer precedente se ha sostenido que: "[...] debido a que el hecho imponible de las tasas debe consistir en un servicio o actividad que la Administración Pública central o municipal se encuentra facultada para prestar, el poder tributario municipal emanado de los tributos controvertidos es ilegítimo porque grava el uso del suelo o subsuelo en terrenos de propiedad privada. Ello implica que el poder tributario emanado de la disposición impugnada únicamente sería legítimo si gravara el uso del suelo en terrenos de propiedad pública"; mientras que en el segundo precedente se explicó que 1..1 aquellas disposiciones que gravan expresamente el uso del suelo y subsuelo de propiedades privadas exceden las potestades de regulación legalmente conferidas a los municipios, pues estos no tienen la potestad de gravar ese tipo de propiedades, por lo que se encuentran inhabilitados para ofrecer y/o proporcionar una contraprestación de carácter jurídico o administrativo". En similar sentido se han pronunciado las sentencias de 15 de febrero de 2013, 20 de febrero de 2013, 21 de agosto de 2013 y 7 de mayo de 2014, amparos 487-2009, 617-2010, 428-2011 y 688-2010, respectivamente.

TEORÍA DEL ABUSO DEL DERECHO

ASPECTOS QUE DAN SURGIMIENTO A LA NOCIÓN DEL ABUSO DEL DERECHO

"V. Esbozos sobre la teoría del abuso del derecho.

1. Dentro del fenómeno jurídico se distinguen dos aspectos distintos que dan surgimiento a la noción del abuso del derecho: (i) el derecho subjetivo, entendido como el conjunto de facultades para exigir aquello que la ley o la autoridad establecen a favor de un sujeto de derecho; y (ii) el derecho objetivo, entendido como el conjunto de disposiciones para ejercitar dichas facultades y el cumplimiento de los deberes que integran el derecho subjetivo. Lo anterior indica que el derecho y su ejercicio permiten distinguir entre la atribución o facultad que corresponde a su titular y la forma o modo como se hace uso de esa facultad. En ese contexto, el derecho subjetivo se aprecia en dos momentos a saber: (i) en su manifestación estática, es decir, el derecho en potencia, y (ii) en su manifestación dinámica, o sea, cuando el derecho entra en actividad o se ejerce. De acuerdo con lo que antecede, el abuso del derecho se presenta en esta última faceta, es decir, cuando se ejercita la facultad que confiere la ley."

DIFERENCIAS ENTRE EL ABUSO DEL DERECHO, EN RELACIÓN CON LOS ACTOS ILÍCITOS Y EL CONFLICTO DE DERECHOS

"2. El derecho en ejercicio tiene una limitación objetiva, en tanto que no puede exceder los límites que la ley establece. Pero también tiene una limitación subjetiva, en el sentido que debe perseguir una finalidad social o económica compatible con la razón y fundamento que garantiza el Derecho. Por ello, el abuso del derecho se pone de manifiesto ante la inobservancia o irrespeto de los límites antes señalados, cuya existencia permite establecer una diferencia entre el abuso del derecho en relación con los actos ilícitos y el conflicto de derechos. Lo primero implica una violación a la ley, lo que equivale a obrar de forma ilícita, esto es, sin derecho o contra derecho, lo que puede realizarse con dolo, culpa o negligencia como regla general; mientras que para el abuso del derecho, no es esencial –aunque eventualmente pueden estar presentes– la existencia de dichos elementos. El daño que produce el acto ilícito repercute en un tercero; pero el daño que produce el abuso del derecho puede referirse a la misma persona o a la colectividad. En cambio, el conflicto de derechos se genera ante la existencia de dos o más intereses jurídicos protegidos que se encuentran en oposición, situación que no se produce en el abuso del derecho, ya que no existe tal conflicto, debido a que no se debe contraponer un derecho frente a otro para determinar cuál debe prevalecer en el caso en concreto."

CRITERIOS ELABORADOS PARA DETERMINAR QUÉ ACTOS SON CONSTITUTIVOS DE ABUSO DE DERECHO

"3. Ahora bien, hecha la anterior delimitación, es preciso señalar que para determinar qué actos son constitutivos de abuso de derecho se han elaborado tres criterios claramente diferenciados: (i) criterio subjetivo, según el cual existirá

abuso del derecho cuando el sujeto actúe con la intención de perjudicar a otro –dolosamente–, y aun cuando lo haga de forma culposa o sin interés o utilidad; (ii) criterio objetivo, según el cual existe abuso del derecho cuando el titular lo desvía de la finalidad que justifica su existencia, con prescindencia de la reprochabilidad de la conducta abusiva, es decir, aunque el agente haya actuado sin dolo o culpa; y (iii) criterio mixto, que faculta a los jueces para determinar en cada caso concreto la noción de abuso más conveniente atendiendo a los elementos que caracterizan a los dos criterios precedentes. De lo anterior se puede afirmar, que el criterio subjetivo pone el acento en el aspecto psicológico o intencional del sujeto. El criterio objetivo se despoja del carácter intencional y requiere el resultado desviado de la finalidad de la institución, la ley o la moral para considerar una actuación como abuso del derecho. En cambio, la posición ecléctica fusiona los criterios objetivo y subjetivo para determinar el acto abusivo."

CRITERIO OBJETIVO COMO PARÁMETRO QUE DEBE SER UTILIZADO PARA RECONOCER UN ACTO COMO ABUSIVO

"En el ámbito del Derecho Procesal –donde se expresa naturalmente el abuso del derecho–, los criterios expuestos han sido examinados para identificar qué actos desembocan en abuso de Derecho. En la actualidad, la tesis dominante sugiere que el criterio objetivo es el parámetro que debe ser utilizado para reconocer un acto como abusivo. La razón de ello es que un acto es abusivo independientemente de toda intencionalidad dolosa o culpable cuando se desvía del fin que le asigna el ordenamiento al derecho ejercido y causa un daño o cuando es contrario a los principios de lealtad, probidad y buena fe (art. 14 CPCM)."

ALGUNOS EJEMPLOS QUE REPRESENTAN ABUSO DE DERECHO

"Sin ánimo de exhaustividad y de manera ejemplificativa puede sostenerse que representarán abuso de Derecho, entre otros comportamientos: (i) la interposición de una demanda que carece de una pretensión fundada; (ii) la recusación maliciosa y sin fundamento; (iii) entorpecer la marcha normal del proceso con el único fin de dilatarlo; (iv) la reiteración de peticiones resueltas; (v) la difusión de información reservada; (vi) la destrucción u ocultación de prueba o información relevante; (vii) el ofrecimiento de prueba falsa; (viii) la interposición de recursos manifiestamente extemporáneos, contra resoluciones irrecurribles o donde se deje en evidencia que el memorial tiene como único objetivo atacar al juez o magistrado que dictó la resolución recurrida y no a la resolución misma; y (ix) la incomparecencia a las audiencias o diligencias judiciales debidamente notificadas y/o citadas sin que exista justificación comprobable."
Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 7-2016, fecha de la resolución: 01/11/2021

TRABAJADORES AGRÍCOLAS

REGULACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

"2. Tal como se indicó previamente, primero corresponde verificar la existencia del mandato constitucional. Así, como punto de partida, debe señalarse que el art. 45 Cn. especifica que los trabajadores agrícolas y domésticos tienen

derecho a una protección en materia de salarios, jornadas de trabajo, descansos, vacaciones, seguridad social, indemnización por despido y, en general, a las prestaciones sociales, cuya extensión y naturaleza será determinada por la ley de acuerdo con las condiciones y peculiaridades de cada trabajo. En la jurisprudencia constitucional, la interpretación de esta disposición ha dado lugar a que, por ejemplo, esta Sala declarase inconstitucional la omisión de regular en el decreto correspondiente el salario mínimo de las empleadas domésticas [1].

Para lo que interesa a este caso, de acuerdo con el texto del art. 45 Cn., la Constitución establece de forma expresa que las prestaciones sociales en general deben ser desarrolladas por el legislador en favor de los trabajadores agrícolas. Pues bien, dado su carácter de derechos sociales, es necesario remarcar que, según los precedentes constitucionales, el esquema tradicional de los derechos sociales merece una reconstrucción en la que aparezcan como derechos que pueden verse desde una perspectiva garantista y democrático-participativa. Y desde esa primera perspectiva se posibilita la articulación de un discurso crítico, jurídico además de político, capaz de deslegitimar las múltiples formas de poder arbitrario que, en diferentes escalas, bloquean la posibilidad de asegurar a las generaciones presentes y futuras la satisfacción de sus necesidades básicas [2].

Entonces, el reconocimiento de derechos (o de posiciones jurídicas concretas adscritas a ellos) debe aparejarse con el de sus garantías, una de las cuales es la ley. En consecuencia, efectivamente existe un mandato expreso dirigido al legislador sobre la obligación de regular y desarrollar estos derechos para los trabajadores en el ámbito agrícola. En virtud de esto, corresponde verificar si en efecto este mandato ha sido cumplido por la Asamblea Legislativa; o si, por el contrario, ha hecho caso omiso de esta obligación, dejando en indefensión a este sector laboral respecto de los salarios, jornadas laborales, descanso, vacaciones, seguridad social e indemnización por despido injustificado.

3. A. Al examinar el Capítulo IV del Título II del Libro Primero del Código de Trabajo, se observa que en sus arts. 84 y siguientes se regulan las relaciones de los trabajadores agrícolas con sus patronos, así como los derechos y obligaciones de ambos. En ese orden, (i) el art. 89 CT regula la jornada ordinaria de trabajo; (ii) el art. 90 incs. 1° y 5° CT prevé el día de descanso semanal y que los salarios podrán ser pactados por mes, respectivamente; (iii) asimismo, por una parte, los arts. 58 y 59 CT establecen el derecho a la indemnización por despido del trabajador, y por la otra, el art. 196 CT impone la obligación de todo empleador de pagar una prima por cada año de trabajo en concepto de aguinaldo, derechos que abarcan a los trabajadores agrícolas, toda vez que el legislador no hace exclusión alguna sobre esta clase de trabajador; (iv) además, en cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad 53-2005/55-2005 [3], se emitió la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, que protege a los trabajadores que renuncien de su trabajo con el beneficio de que reciban la referida prestación, lo que abarca a los trabajadores agrícolas; (v) en relación con los días de descanso, los arts. 90, 91 y 92 CT regulan lo pertinente para todos los trabajadores, incluidos los agrícolas; (vi) el art. 93 CT se refiere a

1 Sentencia de 28 de febrero de 2020, inconstitucionalidad 143-2015.

2 Sentencia de inconstitucionalidad 8-2015 AC, ya citada.

los días de asueto; (vii) en materia de salarios, el art. 119 CT regula lo concerniente a la retribución en dinero que debe recibir todo trabajador; y finalmente, (viii) el art. 177 CT establece las vacaciones.

Por otro lado, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, en cuanto al trabajo agrícola y pecuario, el art. 85 CT estatuye la posibilidad de contratación verbal, y el art. 88 CT señala que cuando la labor del trabajador agrícola temporal se convierta en permanente, estos gozarán de todos los derechos inherentes a tal calidad, como si se hubiere adquirido desde el comienzo de la relación de trabajo. Asimismo, el art. 89 del mismo código indica lo correspondiente al inicio, duración y terminación de la jornada de trabajo, la cual podrá variar según la índole de las labores, necesidades o urgencias del trabajo, la época del año o cualesquiera otra causa justa, pero que en ningún caso podrá exceder de ocho horas diarias ni la semana laboral de cuarenta y cuatro; y en caso de trabajo extraordinario, deberá ser remunerado con el salario ordinario más el ciento por ciento del mismo. Además, los arts. 90 y 91 CT se refieren al día de descanso semanal, mientras que los arts. 92 y 93 aluden, respectivamente, al pago doble en caso de trabajo en día de descanso y a la remuneración de los días de asueto [4].

En atención a las circunstancias evidenciadas, esta Sala concluye que la demandante realizó una interpretación restringida de la regulación normativa sobre el trabajo agropecuario (capítulo IV del título II del Libro Primero del Código de Trabajo), pues aisladamente consideró que en dicho apartado del código debería de englobarse y desarrollarse cada derecho a que se refiere el art. 45 Cn. En ese sentido, si bien el capítulo relativo al trabajador agropecuario en el Código de Trabajo no desarrolla todos los derechos a los que se refiere la disposición señalada como parámetro de control, tal como lo ha sostenido la Asamblea Legislativa y el Fiscal General de la República, el legislador ha dado contenido a los derechos a que se refiere el art. 45 Cn. en otras disposiciones, de dicho código o en leyes especiales (Capítulos I, III, IV, V, VI y VII del Título III y arts. 56, 57, 58, 59, 89, 90, 91, 92 y 93 CT y la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria)."

EL MANDATO CONSTITUCIONAL CONTENIDO EN EL ART. 45 CN. HA SIDO CUMPLIDO POR EL LEGISLADOR, AL REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES EN EL CÓDIGO DE TRABAJO

"Por lo anterior, se determina que el mandato constitucional contenido en el art. 45 Cn. ha sido cumplido por el legislador al regular las relaciones laborales entre los trabajadores y empleadores en el Código de Trabajo —incluidos los trabajadores agrícolas—, debido a que el articulado referido a los trabajadores agrícolas y el resto de disposiciones mencionadas permiten inferir que los derechos laborales señalados en el parámetro de control han tenido un desarrollo legislativo [5]. Por lo antes mencionado, no se configura la inconstitucionalidad por omisión absoluta alegada, debido a que el legislador ha desarrollado en el ordenamiento jurídico secundario el mandato contenido en el art. 45 Cn. al menos en algún grado de cumplimiento de los que admite tal disposición constitucional. En consecuencia, se deberá declarar que no existe la inconstitucionalidad por omisión absoluta alegada.

---

3 Dicha sentencia fue emitida el 1 de febrero de 2013.

4 Todo lo dicho en este párrafo consta en el auto de 16 de marzo de 2018, inconstitucionalidad 10-2018.

5 Al respecto, véase el auto de 16 de marzo de 2018, inconstitucionalidad 10-2008.

A pesar de lo anterior, es necesario aclarar dos cosas. La primera es que esta resolución no supone de ninguna manera que esta Sala convalide el contenido de la normativa que cumple con el mandato constitucional derivado del art. 45 Cn. Lo único que significa es que el mandato es objeto de alguna especie de regulación, por lo que no es posible afirmar que ha sido totalmente omitido. La segunda es que a pesar de que hay regulación de algunos asuntos relacionados con la seguridad social de los trabajadores agropecuarios —por lo que no hay omisión total—, esto no supone que esta decisión abarque o condicione el resultado de otros procesos constitucionales en donde se ha impugnado alguna normativa vinculada con los derechos laborales de tales trabajadores.

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 82-2016, fecha de la resolución: 20/12/2021

TRABAJO A DOMICILIO

DIMENSIÓN INDIVIDUAL DEL DERECHO AL TRABAJO

"1. En su dimensión individual, el derecho al trabajo (art. 37 Cn.) se concibe como aquel por el cual toda persona puede exteriorizar y aplicar conscientemente sus facultades para la producción de medios materiales y condiciones de vida, es decir, para conseguir la satisfacción de necesidades e intereses[1]. El trabajo también envuelve una dimensión objetiva y encarna un valor ético, por lo que el art. 37 Cn. indica que goza de la protección del Estado y que la actividad laboral no puede ser tratada como artículo de comercio[2]. La importancia de tal derecho radica en reconocer la libertad de las personas para escoger una actividad lícita que les permita satisfacer sus necesidades básicas, sostenerse económicamente a nivel individual y familiar, así como obtener una existencia digna.

El trabajo se desarrolla en el marco de una relación laboral por la que se establece un vínculo jurídico entre un trabajador y un empleador por la prestación de un trabajo o servicio con la característica de subordinación a cambio de un salario determinado. La subordinación implica que el primero debe cumplir con los lineamientos, instrucciones u órdenes del segundo para la consecución de los fines de la empresa o institución."

DERECHOS Y DEBERES DEL TRABAJADOR A DOMICILIO

"2. El art. 41 Cn. prevé que "[e]l trabajador a domicilio tiene derecho a un salario mínimo oficialmente señalado, y al pago de una indemnización por el tiempo que pierda con motivo del retardo del patrono en ordenar o recibir el trabajo o por la suspensión arbitraria o injustificada del mismo. Se reconocerá al trabajador a

1 Entre otras, véanse las sentencias de 14 de diciembre de 1995 y 12 de marzo de 2007, inconstitucionalidades 17-95 y 26-2006, respectivamente.

2 Sentencia de inconstitucionalidad17-95, ya citada.

domicilio una situación jurídica análoga a la de los demás trabajadores, tomando en consideración la peculiaridad de su labor". Por ello, se ha establecido que la labor de los trabajadores a domicilio también es objeto de una relación de trabajo, aunque con un tipo de subordinación especial[3].

El art. 1 del Convenio del Trabajo a Domicilio n° 177 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1996 (aún no ratificado por el Estado salvadoreño), establece que se considera trabajador a domicilio a toda persona que habitualmente realiza sus labores en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador, a cambio de una remuneración y con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio según las especificaciones de este, independientemente de quién proporcione el equipo, los materiales u otros elementos utilizados para ello.

En similares términos, el art. 71 inc. 2° CT determina que los trabajadores a domicilio "son los que elaboran artículos en su hogar u otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de [e]ste y siempre que el patrono suministre las materias primas, en todo o en parte". Así, aunque el trabajador a domicilio no tiene un horario fijo, no ejecuta sus actividades en el local del empleador ni se encuentra sometido a la supervisión permanente y directa de este, está obligado a atender sus instrucciones, entregar su producto u obras en el período convenido y con la calidad debida (art. 74 ords. 2° y 3° CT) y ejecutar su trabajo de manera personal. Esto, a cambio de una remuneración fija previamente pactada (art. 73 letra c CT), que en ningún caso podrá ser inferior a la que reciben el resto de trabajadores que desempeñen igual o similar trabajo en un rubro determinado (arts. 75 y 415 CT). Esta concepción del trabajo a domicilio como una verdadera relación laboral es lo que se reconoce en la parte final del art. 41 Cn., pese a lo peculiar del tipo de subordinación que presenta[4]."

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN RIESGOS LABORALES GARANTIZA EL DERECHO AL ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE TRABAJADORES, MATERIALIZANDO SU DERECHO A LA IGUALDAD, E INCLUSO DE LA DIGNIDAD DE TODO TRABAJADOR

1. Como se dijo en el considerando III 1, el problema jurídico por resolver consiste en determinar si el art. 320 letra a CT viola el art. 3 inc. 1° Cn. en relación con el art. 41 Cn., en tanto que contiene un supuesto trato diferenciado carente de justificación respecto de los trabajadores a domicilio. Dicha diferenciación se traduce en la inexistencia de responsabilidad patronal ante los riesgos profesionales de esta clase de trabajadores. Por ello, la resolución de dicho problema debe ser el resultado de la aplicación del test integrado de igualdad.

2. A. Tal como quedó apuntado con anterioridad, el primer paso del examen de igualdad consiste en determinar si la medida que se enjuicia representa una intervención en el derecho de igualdad, esto es, identificar si se está en presen-

3 Sentencia de 8 de noviembre de 2017, inconstitucionalidad 49-2015.

4 Sentencia de inconstitucionalidad 49-2015, ya citada.

cia de una diferenciación o de una equiparación introducida por una norma. Para esto, ha de partirse de que el precepto cuestionado prevé que "[n]o se aplicará lo dispuesto en este Título: a) [a] los trabajadores a domicilio". El título al que esta disposición hace referencia no es otro que aquel en que está ubicada, es decir, el Título Tercero del Código de Trabajo, que regula los riesgos profesionales[5]. En ese sentido, el contenido regulativo del art. 320 letra a CT es el de excluir a los trabajadores a domicilio del régimen laboral de protección frente a los riesgos profesionales según el Código de Trabajo.

Dado que parte del contenido de dicho régimen es el relativo a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales a que están expuestos los trabajadores a causa, con ocasión, o por motivo del trabajo (art. 316 CT), puede afirmarse que la exclusión de los trabajadores a domicilio antedicha supone una discriminación en el acceso a la protección normativa en materia de riesgos profesionales (la cual es ampliamente desarrollada en dicho título). Esto supone que carecen de una garantía de la que sí gozan los demás trabajadores sujetos a un régimen de trabajo distinto. Si entendemos que las garantías son los instrumentos de protección de los derechos[6], entonces esto supone que están en desventaja en cuanto al reconocimiento de derechos y su tutela.

En ese sentido, la inclusión del art. 41 Cn. como parámetro de control cobra un sentido especial, pues en adición al contenido del art. 3 Cn., tal disposición establece, en lo pertinente, que "se reconocerá al trabajador a domicilio una situación jurídica análoga a la de los demás trabajadores, tomando en consideración la peculiaridad de su labor". De manera que se puede considerar que la medida del art. 320 letra a CT introduce una diferenciación que interviene en la igualdad de los trabadores a domicilio en comparación con los trabajadores sujetos a un régimen laboral distinto, pues los primeros no gozan de las mismas garantías en cuanto a riesgos profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

De hecho, la jurisprudencia comparada ha sostenido que "la ampliación de la cobertura en riesgos laborales garantiza el derecho al acceso de un mayor número de trabajadores, materializando su derecho a la igualdad, e incluso de la dignidad de todo trabajador, a ser cubierto por las continencias que puedan ocasionarse con su labor sin distinción de la forma contractual que origina la vinculación obligatoria. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte ha encontrado que el trato diferente otorgado por el legislador a los contratistas se encuentra plenamente justificado"[7] (itálicas propias)."

---

5 Así se entiende a partir de una interpretación sistemática de dicha disposición. Según la jurisprudencia constitucional, la interpretación sistemática es aquella que intenta dotar a un enunciado de un significado sugerido desde el mismo sistema o contexto del que forma parte. Al respecto, véase la sentencia de 13 de mayo de 201l, inconstitucionalidad 7-2011.

6 Sentencia de inconstitucionalidad 21-2020 AC, ya citada.

7 Corte Constitucional de Colombia, sentencia de 16 de julio de 2014, C-509/14 (magistrado ponente: Mauricio González Cuervo).

CRITERIO LEGISLATIVO PARA REALIZAR LA DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES A DOMICILIO Y EL RESTO TRABAJADORES

"B. El segundo paso es seleccionar el tipo de escrutinio de igualdad que deberá guiar la aplicación del principio de proporcionalidad. A criterio de esta Sala, en este caso se está en presencia de un escenario en que corresponde aplicar el escrutinio básico, porque no interviene en él ninguna de las categorías sospechosas de discriminación. Por supuesto, esto no implica desmerecer o deslegitimar la protección que requieren los trabajadores a domicilio, así como tampoco supone que se desconozca su importancia en la sociedad. Solo significa que no hay razones empíricas o históricas para considerar que este grupo social específico ha sido objeto de discriminación reiterada a lo largo del tiempo de la humanidad.

C. Por último, debe aplicarse el examen de proporcionalidad. Como se sostuvo previamente, el primer escaño de este examen es el de idoneidad. Aquí hay dos exigencias cuando se aplica el escrutinio básico: la medida que se impugna debe perseguir un fin no prohibido por la Constitución y debe ser adecuada para favorecer su obtención. Para determinar el primer punto, se debe partir del informe de la autoridad demandada. Al respecto, la Asamblea Legislativa justificó la constitucionalidad del art. 320 letra a CT en una tesis de naturaleza civil denominada "autonomista", que sostiene que en el trabajo a domicilio la relación de los sujetos (trabajador y patrono) es "diluida" y no existe subordinación. A su parecer, como el trabajador a domicilio desempeña una actividad libre no sometida al poder de mando del patrono, este último no debe responder por los riesgos profesionales.

De dicha opinión se infiere que el criterio legislativo para realizar la diferenciación entre los trabajadores a domicilio y el resto trabajadores es que a los primeros no se les aplique el régimen de los riesgos profesionales, ya que no se encuentran bajo una relación de subordinación con el empleador, dado que desempañan una actividad libre. De entrada, esta es una postura vaga, debido a que el mismo Código de Trabajo determina que en el trabajo a domicilio son indispensables la suscripción de un contrato de trabajo (art. 71 inc. 1° CT), la inscripción del empleador en el registro de la Dirección General de Inspección de Trabajo (art. 72 CT) y otras evidencias de que existe una dependencia del trabajador al empleador. Entonces, aunque el trabajador a domicilio no tenga un horario fijo, no ejecute sus actividades en el local del patrono ni se encuentre sujeto a su supervisión permanente y directa, está obligado a cumplir con sus instrucciones, entregar su producto u obras en el tiempo convenido y con la calidad debida, así como a ejecutar su trabajo de manera personal (a cambio del salario pactado). Esto es lo que constituye la subordinación."

EL ART. 320 LETRA A DEL CÓDIGO DE TRABAJO VIOLA LA CONSTITUCIÓN, POR CONTENER UNA MEDIDA DISCRIMINATORIA DESPROPORCIONADA QUE NO SUPERA EL EXAMEN DE IDONEIDAD DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD

"Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal considera que la Asamblea Legislativa no ha dado razones que justifiquen el trato diferenciado de excluir a los trabajadores a domicilio de la protección frente a los riesgos profesiones. Concretamente, no adujo ningún fin constitucionalmente legítimo (un fin no prohibido por la Constitución), por lo que la medida no cumple con las

exigencias que derivan del escaño de idoneidad del test de proporcionalidad[8]. De hecho, en la exposición de motivos de la Constitución de 1950 se plasmó, en relación con su art. 193 (equivalente al art. 41 Cn.), que " [e]l trabajador a domicilio tiene un trabajo sui generis, y por eso precisamente, no debe ser abandonado, y como el Estado tiene que velar por él no puede hacer distingos de ninguna clase"[9] (sic).

Por lo anterior, se evidencia que el legislador no justificó la medida a la luz de un fin constitucionalmente legítimo perseguido por ella, y partiendo de que todo trabajador tiene derecho a reclamar de su patrono la responsabilidad por el sufrimiento de cualquier riesgo profesional, no resulta aceptable que el precepto legal impugnado trate distinto al trabajador a domicilio en cuanto a esos riesgos. En consecuencia, el art. 320 letra a CT viola el art. 3 inc. 1° Cn. en relación con el art. 41 Cn., por contener una medida discriminatoria desproporcionada que no supera el examen de idoneidad del test de proporcionalidad, y así se deberá declarar en esta sentencia."

declaró que era inconstitucional.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEBERÁ REGULAR O ADAPTAR LAS NORMAS QUE SEAN NECESARIAS PARA QUE HAYA REGLAS Y PRINCIPIOS SOBRE RESPONSABILIDAD PATRONAL, FRENTE A RIESGOS PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES A DOMICILIO

"3. Pese a lo anterior, la declaratoria de inconstitucionalidad pura y simple generaría un desajuste de regularidad constitucional. El art. 41 parte final Cn. establece que "[s]e reconocerá al trabajador a domicilio una situación jurídica análoga a la de los demás trabajadores, tomando en consideración la peculiaridad de su labor". En ese sentido, aunque es inconstitucional la exclusión absoluta de los trabajadores a domicilio de la protección frente a los riesgos profesionales, ello no significa que la equiparación total entre dichos trabajadores y los que están sujetos a un régimen distinto sea admisible desde la Constitución. En especial, porque esto supondría que no se ha "[tomado] en consideración la peculiaridad de su labor", sino que se les trataría con absoluta paridad.

En consecuencia, un pronunciamiento puramente estimatorio crearía una omisión inconstitucional, en virtud de que no habría ninguna norma de adaptación del régimen de protección frente a riesgos profesionales a las singularidades del trabajo a domicilio. Por ejemplo, normas que determinen cuándo hay un accidente de trabajo o enfermedad profesionales, cuáles de estos generan responsabilidad patronal, el grado de respuesta frente a dicha responsabilidad y su cuantificación, entre otros aspectos. Por esta razón, además de expulsar del orden jurídico al art. 320 letra a CT, esta Sala también ordenará a la Asamblea Legislativa que en un plazo máximo de seis meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación de esta sentencia, regule o adapte las normas que sean necesarias para que haya reglas y principios sobre responsabilidad patronal frente a riesgos profesionales de los trabajadores a domicilio, tomando en cuenta la peculiaridad de su labor[10].

---

8 Existen precedentes constitucionales en los que se ha hecho uso del informe de la autoridad demandada para examinar la idoneidad de una medida. En la sentencia de 17 de noviembre de 2017, inconstitucionalidad 105-2014, dicho informe se utilizó para determinar que la disposición que se impugnaba carecía de razonabilidad (que es parte del examen de idoneidad). Partiendo de ello, se

9 Intervención del doctor Mario Héctor Salazar, diputado constituyente. Véase: Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa, Documentos históricos de la Asamblea Constituyente de 1950. Tomo III, p. 485.

10 Para ello, deberá tomar en cuenta su margen de acción estructural. Sobre esto, véase la sentencia de inconstitucionalidad 20-2006, ya citada.

Dadas las anteriores razones, mientras no se haya producido dicha regulación, los jueces y magistrados con competencia en materia laboral deben aplicar las normas sobre riesgos profesionales de manera adaptada a las singularidades del empleo a domicilio. Esto, por supuesto, tomando como base las posibilidades interpretativas de las disposiciones jurídicas pertinentes, pues el texto que se interpreta es parte de los límites a las interpretaciones plausibles de los aplicadores de Derecho. Por último, se aclara que en virtud de que el art. 320 letra a CT es una norma preconstitucional, esta Sala se limitará en su fallo a constatar de un modo general y obligatorio que quedó derogado desde el 20 de diciembre de 1983."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 67-2016, fecha de la resolución: 10/12/2021

TRABAJO DOMÉSTICO

DEFINICIÓN

"VII. Sobre el trabajo doméstico.

Esta Sala ha sostenido que aunque el art. 77 CT proporcione una noción de "trabajador del servicio doméstico", lo cierto es que ni en la Constitución ni en el Código de Trabajo hay una identificación precisa de los elementos definitorios de dicho trabajo [1]. No obstante, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a efecto de llegar a una aproximación, sostiene que el trabajo doméstico es aquél que presta, en relación de dependencia, una persona a otra u otras o a una o más familias, con el objeto de consagrarles su cuidado y su trabajo en el hogar, en tareas vinculadas a este, sin que dichas labores puedan representar para el empleador una ganancia económica directa [2]. Entre sus principales características figuran: (i) la relación laboral es de dependencia, es decir, el trabajador cumple sus tareas bajo la dirección del empleador, a cambio de un salario; (ii) el empleador no obtiene ganancia económica con el trabajo del trabajador; y (iii) las tareas que debe realizar el trabajador son todas aquellas relacionadas con el cuidado del hogar y de sus miembros.

Aunque históricamente se sostuvo que una de las características esenciales del trabajo de servicio doméstico era la permanencia del trabajador, usualmente de sexo femenino, en el hogar del empleador, lo cierto es que hoy en día una afirmación como esa ya no es compatible con la realidad. Los datos empíricos que serán detallados más adelante permiten sostener que esta realidad ha cambiado, y que, en la actualidad, quienes desempeñan esta clase de trabajo no necesariamente conviven con el empleador y/o su familia."

1 Sentencia de 28 de febrero de 2020, inconstitucionalidad 143-2015.

2 Esta es la definición que deriva del art. 1 del Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos.

CARACTERÍSTICAS PROPIAS

"De conformidad con el art. 45 Cn., este tipo de trabajo cuenta con características propias que obligan a diferenciarlo por su naturaleza de las demás prestaciones de servicio de carácter económico o de producción. Y por lo mismo, por no encuadrar dentro de los conceptos empresariales de productividad y producción, no se incluye en la relación contractual del trabajo dependiente que cumplen los empleados y obreros. El carácter esencial del trabajo doméstico reside en la cordialidad y casi intimidad —con independencia de si la persona pernocta o no en la residencia de su empleador— que deriva de la confianza y convivencia que existe con la familia, a diferencia de otros trabajos en que el trabajador se mantiene extraño a la familia del empleador; y al conjunto de diversas relaciones que surgen al trabajar en actividades domésticas, atendiendo a un grupo familiar.

VIII. Resolución del problema jurídico.

1. A. Es posible determinar que el art. 38 ord. 6° parte primera Cn., por su estructura, contiene una norma del tipo regla, al establecer la prohibición de que la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno exceda de 8 horas y la semana laboral de 44 horas. La misma disposición constitucional establece las excepciones a dicha regla, cuando refiere que las horas extraordinarias y el trabajo nocturno serán remunerados con recargo. De lo anterior se concluye que, efectivamente, la regla de la jornada ordinaria de trabajo efectivo de 8 horas y la semana laboral de 44 horas no es absoluta, pues una persona puede laborar más de 8 horas en una misma jornada según la naturaleza del trabajo que realice, con la condición de que el excedente de dicha jornada sea remunerado con recargo. Mediante dicha remuneración extraordinaria se mantiene la relación proporcional: trabajo–salario–descanso.

B. De acuerdo con el problema planteado, el art. 45 Cn. resulta relevante para interpretar el art. 38 ord. 6° Cn. Según la inconstitucionalidad 143-2015 ya citada, para afirmar lo anterior se parte de que la Constitución es un texto armónico y coherente, que, como tal, debe ser interpretado de manera sistemática usando el criterio especifico denominado "unidad de la Constitución". Este criterio propone que la solución a todo problema interpretativo debe partir de la consideración de la Constitución en su conjunto y no de la atención exclusiva y aislada a sus preceptos [3]. Según dicho criterio, las disposiciones constitucionales se hallan en una situación de mutua interacción y dependencia, de modo que solo su conexión global produce la conformación concreta de la comunidad por parte de la Constitución. Sus significados posibles únicamente pueden atribuirse adecuadamente cuando sus preceptos se entienden como unidad. La labor de interpretación, pues, debe estar orientada en mayor medida hacia la coordinación de sus disposiciones [4].

Entendido en sentido amplio, este criterio engloba tres argumentos. El argumento de coherencia, según el cual los enunciados han de interpretarse tomando en cuenta que no pueden expresar normas incompatibles argumento de sede

[3] Resolución de 15 de febrero de 2019, inconstitucionalidad 119-2018.

[4] Sentencia de inconstitucionalidad 77-2013 AC, ya citada.

de la materia, por el cual se atribuye un significado normativo a un precepto con base en el lugar que ocupa el texto del que forma parte. Por último, el argumento sistemático en sentido estricto, que atribuye un significado normativo a un enunciado a atención al contenido de otros preceptos o normas.

C. Al aplicar lo anterior al caso concreto, se advierte que el art. 45 Cn. protege a los trabajadores domésticos en cuanto a la jornada de trabajo [5]. Ahora bien, en la parte segunda del enunciado constitucional se establece que "la extensión y naturaleza de los derechos antes mencionados serán determinadas por la ley de acuerdo con las condiciones y peculiaridades del trabajo". Dicho mandato al legislador se concreta, al menos en lo referente a la jornada de trabajo, en el art. 80 CT. Por lo que la discusión que se presenta no es si existe una regulación de la jornada de trabajo para quienes laboran en el servicio doméstico, sino si la regulación que hizo el legislador en 1972 es acorde a la Constitución actual.

2. El art. 80 CT establece que "[e]l trabajador del servicio doméstico no está sujeto a horario, pero gozará de un descanso mínimo de doce horas diarias, de las cuales diez serán nocturnas y continuas, y las otras dos deberán destinarse para las comidas [...]"(itálicas propias). En este punto es importante tener en cuenta el contexto histórico en el que se formuló la disposición impugnada. Cuando se promulgó el Código de Trabajo (1972), la práctica tradicional en relación con el trabajo doméstico era que quien lo desempeñaba —en la gran mayoría de casos mujeres— viviera con la familia del empleador. Sin embargo, esta realidad ha mutado, pues en la actualidad la mayoría de personas que ejercen esta clase no duermen en casa del patrono [6].

Tal asunto parece indicar que la formulación textual del art. 80 CT estaba dirigida originalmente a quienes ejercían el servicio doméstico habitando en la vivienda del empleador, pues por las particularidades del trabajo era posible requerir el servicio doméstico fuera de la jornada ordinaria diurna, lo que se facilitaba por la presencia del empleado o la empleada en el hogar. Ahora que la modalidad de la prestación de dicho servicio ha variado, sería contrario al principio de igualdad (art. 3 Cn.) que quienes se hospedan en la casa del patrono estén sujetos a horarios extendidos y los que no, estén sujetos a jornadas ordinarias.

En primer lugar, es importante analizar el texto del art. 80 CT, cuando refiere a que el trabajador del servicio doméstico no está sujeto a horario, a la luz de la regla impuesta en el art. 38 ord. 6° Cn. El vocablo "horario" hace referencia al tiempo durante el cual se desarrolla habitual o regularmente una acción o una actividad. Haciendo una interpretación sistemática, es. posible diferenciar entre el uso del término "horario" que hace el art. 80 CT y el uso del término "jornada ordinaria" a que hace referencia el art. 38 ord. 6 Cn.

---

5 Dicha disposición prevé que –[l]os trabajadores agrícolas y domésticos tienen derecho a protección en materia de salarios, jornada de trabajo, descansos, vacaciones, seguridad social, indemnizaciones por despido y, en general, a las, prestaciones sociales. La extensión y naturaleza de los derechos antes mencionados serán determinadas por la ley de acuerdo con las condiciones y peculiaridades del trabajo. Quienes presten servicio de carácter doméstico en empresas industriales, comerciales, entidades sociales y demás equiparables, serán considerados como trabajadores manuales y tendrán los derechos reconocidos a [e]stos–.

6 IDHUCA, Reconociendo el trabajo doméstico en El Salvador, página 73. Disponible para su consulta en: http://www.oit.org/sanjose/WCMS_430190/lang--es/index.htm.

Como se apuntó antes, el servicio doméstico implica funciones particulares que no se dan en otro tipo de trabajos y que están directamente relacionadas con las actividades que se desarrollan en el seno de un núcleo familiar. Debido a que cada familia tiene sus propias costumbres y agendas cotidianas, quien se dedique a realizar las labores domésticas debe ajustarse, en la medida lo posible, a esas necesidades. Por lo que cuando el art. 80 CT dispone que quien trabaje en el servicio doméstico no está sujeto a horario, es dable entender que se refiere a la flexibilidad en la hora de entrada y en la hora de salida, es decir, que dada la naturaleza del trabajo, no está sujeto a un horario fijo de entrada y de salida, como si ocurre en otro tipo de trabajos. Por ejemplo, es posible que en la semana laboral el o la trabajadora doméstica inicie sus labores a las 6 de la mañana, pero debido a las necesidades que surjan en la familia, y previo acuerdo con el trabajador, otros días pueda requerírsele que inicie a diferente hora, lo que conlleva a que el horario de salida también varíe."

LA JORNADA EFECTIVA DIURNA NO PUEDE EXCEDER DE OCHO HORAS, EL TIEMPO QUE REBASE ESE LÍMITE CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEBE REMUNERARSE CON RECARGO

"Ahora bien, lo anterior debe diferenciarse de la jornada ordinaria de trabajo y, particularmente, de la jornada efectiva diurna a que se refiere el art. 38 ord. 6° Cn. Según el art. 163 CT, el tiempo de trabajo efectivo es todo aquel en que el trabajador está a disposición del patrono; lo mismo que el de las pausas indispensables para descansar, comer o satisfacer otras necesidades fisiológicas, dentro de la jornada de trabajo. Esto se refiere a que, independientemente de la hora diurna en que un trabajador inicie sus labores, la jornada continua que realice no puede exceder de 8 horas (equivalente a 44 horas semanales). La jornada diurna comprende de las 6 a las 19 horas de un mismo día (art. 161 inc. 2° CT), por lo que en ese intervalo, quien trabaje en el servicio doméstico puede iniciar sus labores a cualquier hora, siempre y cuando no se le obligue a trabajar más de las 8 horas continuas a que se refiere el art. 38 ord. 6° Cn. sin la respectiva remuneración con recargo (por ej.: de las 6 a las 14 horas, de las 8 a las 16 horas, de las 10 a las 18 horas, etc.).

Entendido así, en caso de que se requiera del servicio doméstico más allá de las 8 horas de la jornada efectiva diurna, los arts. 38 ord. 6° Cn. y 169 CT ordenan que dicho tiempo sea remunerado con recargo. De igual forma, si el servicio se presta en jornada nocturna. En ese sentido, independientemente de que quien labore en el servicio doméstico opte por hospedarse en la casa del empleador o prefiera retirarse a su vivienda luego de sus labores —según lo pactado en el contrato de trabajo realizado con el patrono—, la jornada efectiva diurna no puede exceder de 8 horas. El tiempo que rebase ese límite constitucional y legal debe remunerarse con recargo.

Por consiguiente, cuando el art. 80 CT se refiere a que quien labore en el servicio doméstico gozará de un descanso mínimo de doce horas diarias, de las cuales diez serán nocturnas y continuas, y las otras dos deberán destinarse para las comidas, no debe entenderse, como lo hacen los actores, que las otras 12 ho-

ras restantes deben laborarse de forma continua, sino que debe ser dentro de los términos del régimen general de jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno de 8 horas y la semana laboral de 44 horas, debiendo remunerar con recargo toda hora extra. Dichas normas sobre la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno deben cumplirse por el empleador, quien está sujeto a la función de inspección de la Dirección General de Inspección de Trabajo, que tiene por objeto velar por el cumplimiento de las disposiciones legales de trabajo y las normas básicas de higiene y seguridad ocupacionales, como medio de prevenir los conflictos laborales; y velar por la seguridad en el centro de trabajo (art. 34 de la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social)."

QUIENES TRABAJEN EN EL SERVICIO DOMÉSTICO PUEDEN ACOMODAR SU HORARIO DE TRABAJO A LAS NECESIDADES DEL HOGAR EN QUE PRESTEN EL SERVICIO, SIEMPRE QUE GOCEN DE UN DESCANSO MÍNIMO DE DOCE HORAS DIARIAS

"En consecuencia, el art. 80 CT admite una interpretación conforme con los arts. 38 ord. 6° y 45 Cn. Por ello, debe declararse que no existe la inconstitucionalidad alegada y que el objeto de control no quedó derogado con la entrada en vigencia de las disposiciones constitucionales propuestas como parámetro de control. Finalmente, en vista de que no existe la inconstitucionalidad alegada y en atención a la interpretación conforme, es necesario aclarar que el art. 80 CT debe interpretarse en el sentido de que quienes trabajen en el servicio doméstico pueden acomodar su horario de trabajo a las necesidades del hogar en que presten el servicio, siempre que gocen de un descanso mínimo de doce horas diarias, de las cuales diez serán nocturnas y continuas, y las otras dos deberán destinarse para las comidas. Pero, en todo están sujetos a la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno de 8 horas y la semana laboral de 44 horas, por lo que toda hora extra laborada —incluida la nocturna— deberá remunerarse con recargo según la normativa laboral correspondiente. Esta es una interpretación vinculante para toda autoridad y particulares."
Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 91-2016-101-2017-157-2017, fecha de la resolución: 27/10/2021

TRATADOS INTERNACIONALES

LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL HA DECLARADO QUE TALES INSTRUMENTOS NORMATIVOS NO SON PARÁMETRO DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, PUES NO INTEGRAN MATERIALMENTE LA CONSTITUCIÓN NI FORMAN CON ELLA UN BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

"Si bien los tratados internacionales pertenecen al sistema de fuentes del Derecho salvadoreño y gozan de una posición privilegiada (art. 144 Cn.), la jurisprudencia constitucional ha declarado que tales instrumentos normativos no son parámetro de control de constitucionalidad, pues no integran materialmente la Constitución ni forman con ella un bloque de constitucionalidad [1]. Sin embargo,

dicho criterio ha sido matizado, porque este Tribunal ha sostenido que cuando se alega la violación al art. 144 inc. 2º Cn. por acción refleja es necesario que se ponga de manifiesto una contradicción normativa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y no a toda la gama de instrumentos jurídicos internacionales ajenos al sustrato ideológico que ampliamente comparten los primeros con la Constitución. Esta disposición, en integración con los instrumentos internacionales que estatuyen y desarrollan derechos humanos, dirige su ámbito de vigencia efectiva hacia un mismo sustrato axiológico, la dignidad humana y el catálogo de los derechos fundamentales que desarrollan los valores inherentes a su personalidad. Del art. 144 inc. 2º Cn., conectado con la concepción humanista del Estado (art. 1 y Preámbulo de la Cn.), deriva la regla hermenéutica en favor de la dignidad humana: restringir lo limitativo y expandir lo favorable a ella. Tal disposición constitucional no solo determina la fuerza vinculante y jerarquía normativa de los tratados internacionales de derechos humanos, sino que además permite proponer una apertura normativa hacia ellos [2].

Por tanto, solamente es aplicable a instrumentos internacionales que contengan principios normativos de análoga o mayor cobertura a la establecida en los preceptos que estatuyen derechos fundamentales, y que hagan posible el establecimiento de fructíferas directrices para una interpretación humanista y extensiva de las normas reguladoras de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución."

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 26-2019, fecha de la resolución: 06/09/2021

Relaciones:

Sala de lo Constitucional, inconstitucionalidad, número de referencia: 28-2019, fecha de la resolución: 06/09/2021

---

1 Sentencia de 26 de septiembre de 2000, inconstitucionalidad 24-97/21-98.

2 Sentencias de 1 de abril de 2004 y 6 de junio de 2008, inconstitucionalidad 52-2003 y 31-2004 AC, por su orden; y autos de 14 de diciembre de 2012, 20 de junio de 2014, 11 de enero de 2016, 4 de noviembre 2016 y 25 de junio de 2018, inconstitucionalidades 65-2012, 36-2014, 6-2016, 162-2016 y 38-2018, por su orden.

MATERIA: PÉRDIDA DE DERECHOS DE CIUDADANÍA

INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

DIFERENCIA ENTRE DISPOSICIÓN Y NORMA QUE ESTA SALA EN SU JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL HA INTRODUCIDO

"1. Ejercicio interpretativo de la Constitución.

Es menester señalar que el abanico de interpretaciones que esta Sala tiene, a fin de desglosar el carácter normativo de la Constitución, le permite –en función del ser humano- ir no solo adaptando y desarrollando en el tiempo el carácter reforzado de protección a los derechos fundamentales, sino también, la determinación y reconocimiento de los denominados derechos emergentes, así como las correcciones a través de los cambios jurisprudenciales que necesariamente se dan en el complejo accionar de la interpretación constitucional, cuando se haya incurrido en cualquiera de las causales que permiten un forzoso cambio de precedente.

Y es que esta Sala en la resolución de 16-XII-2012, Inc, 7-2012 señaló "la Constitución y el Derecho Constitucional salvadoreño van consolidándose por medio de la jurisprudencia constitucional. Es por ello que la jurisprudencia de este tribunal es también fuente suficiente de derechos fundamentales que se integra en la Constitución, esto es, en el cuerpo jurídico de máxima jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico. Como se afirmó´ en el auto de 6-X-2011, Inc. 14-2011, la atribución de sentido que realiza esta Sala en su jurisprudencia queda incorporada en el contenido normativo de las disposiciones constitucionales."

Así también, en las sentencias de inconstitucionalidad 11-2005 y 77-2013, resoluciones del 29-IV-2011 y 13-VIII-2013, respectivamente, se estableció que la interpretación jurídica de una disposición legal o constitucional "consiste en la atribución de un significado elegido entre varios posibles, con base en razones o argumentos que justifican esa forma de entender el texto de la disposición como la alternativa más adecuada para resolver una duda, pregunta o problema interpretativo, que es el que origina la necesidad de interpretación". En ese sentido, la idea de atribución de significado implica que el texto carece de un significado normativo propio o determinante, de manera que para encontrar el significado de dicho texto este debe construirse en atención a los casos concretos que lleguen a su conocimiento y de los cuales deba resolver, teniendo en cuenta -como se desarrollará en los apartados posteriores- que la Constitución representa la máxima expresión de voluntad del soberano, y es bajo esta premisa que deben interpretarse sus disposiciones.

Partiendo de lo anterior, vale la pena referirse a la diferencia entre disposición y norma que esta Sala en su jurisprudencia constitucional ha introducido y que tiene especial relevancia al momento de realizar interpretación de disposiciones legales o constitucionales. En ese sentido, se ha establecido en las sentencias de inconstitucionalidad antes citadas que cuando nos referimos a norma, hacemos

referencia al sentido o el significado normativo de una disposición siendo esta el texto o el enunciado lingüístico de las palabras ahí descritas; de manera que obtenemos una norma después de realizar una labor interpretativa, pues la disposición en su literalidad no basta a efectos de determinar un significado normativo. Es por ello que las referencias al sentido claro de una disposición no son verdaderamente válidas, en tanto su claridad se determina después de realizada la interpretación del texto.

Esta Sala al ser el máximo y último intérprete de la Constitución debe, a efectos de dar solución al caso concreto sometido a su conocimiento, auxiliarse de elementos históricos en su contraste con la realidad y momento de que se trate, a fin de lograr la interpretación adecuada al texto constitucional del cual se busca encontrar un significado. Estos elementos históricos son, entre otros, las actas de sesión plenaria de Asamblea Constituyente en los que el soberano expresa no solo la necesidad de incluir cierta disposición en el texto fundamental, sino también la necesidad de que la redacción quede configurada de una u otra manera, así como los supuestos que se pretenden abarcar con la misma. Solo de este modo es posible conocer las circunstancias que se pretendieron abarcar al haber plasmado un texto determinado en la Constitución."

SALA DE LO CONSTITUCIONAL Y SU ROL EN LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

"2. Sala de lo Constitucional y su rol en la interpretación constitucional.

Habiendo señalado el significado y efecto de una disposición y norma, cuya consecuencia es que la atribución de sentido que realiza esta Sala en su jurisprudencia queda incorporada en el contenido normativo de las disposiciones constitucionales, es necesario recalcar que el papel que esta Sala juega en la interpretación de preceptos que estatuyen derechos fundamentales es determinante. Ello porque esta Sala es el máximo intérprete y en consecuencia, el supremo aplicador de la Constitución.

Uno de los problemas o retos de la interpretación constitucional radica precisamente en ciertas características propias de los textos constitucionales, entre las cuales destaca su carácter concentrado y abierto, así como el contenido axiológico que contiene. Además de estos aspectos, interesa también destacar el carácter meramente enunciativo de la Constitución.

La Constitución no tiene como objeto entrar al detalle de cada uno de los aspectos que pretende abarcar, esto porque se espera que su contenido sea fácilmente adaptable a las realidades y sociedades futuras a fin de proporcionar la máxima estabilidad posible. Así la única manera de que el texto de una Constitución se adapte fácilmente a la realidad de protección de los derechos fundamentales, a pesar de su carácter meramente enunciativo, es con la aplicación de la interpretación constitucional y en ese punto ocupa un rol indispensable esta Sala de lo Constitucional como máximo y último intérprete de la Constitución.

Debido a que no es la tarea del Constituyente definir detallada y ampliamente el contenido de la Constitución, se requiere de la labor del tribunal constitucional a efectos que determine la interpretación que debe darse a determinadas disposiciones, y como se ha adelantado en el apartado anterior, para ello se

debe hacer uso de los diferentes métodos de interpretación constitucional, como la interpretación histórica, el cual trae consigo la consulta de los documentos que el artículo 268 de la Constitución define como fidedignos para su interpretación. Una discusión distinta será determinar si ese contexto que ha quedado plasmado en dichos documentos fidedignos sigue siendo aplicable en la actualidad, esto solo se determinará después de la verificación de dichos documentos.

El carácter enunciativo de las disposiciones constitucionales también implica que el intérprete debe procurar dotar de significados que cumplan con el carácter progresivo y no regresivo de los derechos fundamentales que en la Constitución se encuentran contenidos ya sea de manera expresa o implícita. De nuevo, es necesario hacer énfasis en que las disposiciones constitucionales no son un producto acabado en cuanto a estructura y reconocimiento de categorías subjetivas, sino que, el Constituyente establece mínimos que el Estado debe garantizar a través de las garantías normativas, institucionales y jurisdiccionales. Sin embargo, las interpretaciones de la Constitución que se realicen no deben garantizar menos de ese contenido, sobre todo en virtud de su base axiológica.

Ahora bien, en cuanto al rol que la Sala de lo Constitucional tiene en la interpretación de la Constitución, es imperativo traer a colación lo establecido en la sentencia de inconstitucionalidad 77-2013, resolución del 13-VIII-2013, en la que se destacó que la complejidad usual en la interpretación jurídica aumenta cuando el objeto de interpretación es el texto constitucional, es decir, sus disposiciones; esto porque la Constitución está dotada de ciertas características que la diferencian del resto del ordenamiento jurídico, entre las cuales destacan su carácter abierto que permite su adaptabilidad a las diferentes realidades sociales que se generan con el paso del tiempo, así como su carácter concentrado; la sustancial referencia a valores como elemento axiológico en cuya base descansa el resto del contenido constitucional, lo cual puede generar que alguno de los criterios, pautas o directivas indiquen, de modo preliminar o aparente, resultados distintos. De ahí que los tribunales constitucionales se configuran como vigilantes de que el contenido constitucional no quede petrificado a las circunstancias o contexto en el que fue emitido, es precisamente por ese motivo que las disposiciones constitucionales son solo enunciativas, para que el intérprete pueda adaptarlas a los cambios sociales y a las nuevas necesidades del soberano, que es al final de todo, la razón de ser del Estado y de la Constitución misma.

Por lo anterior, si bien la interpretación constitucional puede realizarla cualquier operador, a partir del contenido de los artículos 183 Cn. y 172 inc. 1° frase 2ª Cn., es la Sala de lo Constitucional quien tiene la última palabra con respecto a la interpretación de la Constitución salvadoreña, lo cual es confirmado en las inconstitucionalidades 14-2011 y 202006, resoluciones del 13-X-2011 y 7-X-2011, respectivamente.

En relación con lo anterior, en la sentencia 27-IV-2011, Inc. 16-2011, se estableció que “por su papel de guardián último de la constitucionalidad, la responsabilidad de clarificar la extensión y alcance de las disposiciones constitucionales permanece en la jurisdicción especializada, es decir, en la Sala de lo Constitucional, como intérprete vinculante de última instancia (…) y es que a pesar de su integración orgánica en la CSJ, la Sala de lo Constitucional es el último juez de los conflictos constitucionales”.

Es necesario recordar que desde la sentencia de 23-III-2001, Inc. 8-97, como esta Sala ha señalado, se viene afirmando que los derechos fundamentales son las "... facultades o poderes de actuación reconocidos a la persona humana como consecuencia de exigencias ético-jurídicas derivadas de su dignidad, su libertad y su igualdad inherentes, que han sido positivadas en el texto constitucional...", por lo que forman parte de su núcleo esencial. En efecto, la Constitución no es la mera codificación de la estructura política superior del Estado salvadoreño, pues, si bien define esa estructura, lo hace a partir de un determinado supuesto y con un determinado contenido. Ese supuesto es la soberanía popular o poder constituyente del pueblo -art. 83 Cn- y su contenido está integrado esencialmente por el reconocimiento de la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado y los derechos fundamentales derivados de esa condición (ej., sentencias de 14-II-1997 y 23-X-2013, Incs. 15-96 y 7-2012, respectivamente)."

INTERPRETACIÓN HISTÓRICA COMO FUENTE DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA SOBERANÍA

"3. Interpretación histórica como fuente de protección a los derechos fundamentales y la soberanía.

En cuanto a los antecedentes históricos, en la sentencia 25-VI-2014, Inc.163-2013., esta Sala se refirió a la utilidad de los mismos, estableciendo que estos dependen de que "coincidan en lo relevante con la formulación textual o literal vigente, pues los términos de una regulación pasada no pueden determinar el significado de la disposición actual sobre el mismo asunto, cuando haya ocurrido un cambio sustancial en la redacción normativa de esta última". Es necesario por tanto que la Sala de lo Constitucional adecue ese texto inamovible que se encuentra en la Constitución a la voluntad del soberano, a sus necesidades actuales, a los nuevos estándares por él requeridos.

Y es que, en efecto, lo único cierto de la sociedad es que cambia constantemente y no se puede esperar que las disposiciones constitucionales tengan un significado estático que con el paso del tiempo pueda volverse restrictiva y poco garantista, en ese caso, se generaría poca o nula estabilidad jurídica y política, lo cual es un desmedro a la protección reforzada de los derechos fundamentales"

ROL DE LA SOBERANÍA POPULAR EN EL CARÁCTER DE NORMA SUPREMA QUE SE LE ATRIBUYE A LA CONSTITUCIÓN

"En la sentencia 23-X-2013, Inc. 71-2012, se destacó el rol que juega la soberanía popular en el carácter de norma suprema que se le atribuye a la Constitución, al respecto se dijo que "el punto de partida para el establecimiento de una Constitución se encuentra en el poder de la Comunidad política para disponer sobre sí misma; esto es, en la voluntad conjunta vinculante de la soberanía que reside en el pueblo, expresada directamente por medio del poder constituyente originario, que se objetiva y racionaliza en dicha Ley Fundamental". De ahí que el contenido de la Constitución responde a la voluntad del pueblo, y

de ahí parte su valor normativo y por tanto su obligatoriedad. Por ello se dice que "la Constitución representa el momento inaugural del Estado o el punto a partir del cual se establece la orientación que han de seguir los sujetos encargados de ejercer las atribuciones por ella conferidas".

Así pues, la forma de gobierno, el tipo de Estado, los valores y principios reconocidos, y los derechos fundamentales que la Constitución contiene, definen la forma en la que el Estado actuará a partir del momento en que la Constitución entra en vigencia, de tal suerte que cualquier actuación fuera de la voluntad soberana, se entiende contrario a la Constitución. Nos encontramos en un escenario que se rige bajo una premisa básica: "el poder reside en el pueblo", y algo cierto es que "el pueblo" cambia, que lo único certero es el cambio. Así, atar la voluntad popular a un texto que respondía a necesidades, contexto o circunstancias de hace 20, 30 o 40 años, resulta ya no garantista, sino una excesiva restricción disfrazada de "certeza jurídica" y el actuar de representantes que se resisten al cambio del soberano, que se resisten a escuchar la voluntad del pueblo es sin duda la mayor de las violaciones al respeto de la soberanía.

A propósito de la soberanía, su reconocimiento se encuentra en el art. 83 Cn., y, tal como se estableció en la inconstitucionalidad antes citada, su contenido parte de la base del reconocimiento de la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado -art. 1 Cn- y los derechos fundamentales derivados de dicho reconocimiento. Desde esa perspectiva, estableció la Sala que "la Constitución es la expresión de los cánones ético-jurídicos sobre los cuales la comunidad, a partir del pluralismo, ha logrado encontrar un cierto grado de consenso, hasta el punto de incorporarlos en el documento normativo rector de la organización y funcionamiento del Estado. En la Constitución reside la capacidad para convocar la adhesión de los miembros de la Comunidad, como supuesto básico y elemento esencial del Estado y de su existencia, de modo que ella cumple una función integradora de la unidad política de acción estatal". En ese sentido, cuando ese consenso atraviesa por cambios, los tribunales constitucionales, según las pautas que se han expuesto en el apartado anterior, tiene la potestad de adaptar las disposiciones a las nuevas circunstancias que surjan.

De ahí que la supremacía constitucional se fundamenta en la legitimidad política cualificada de la Constitución, por ser un producto directo del Poder Constituyente y como racionalización del poder soberano del pueblo a fin de controlar a los poderes constituidos, con el fin ulterior de garantizar la libertad de los titulares de dicha soberanía.

Es importante mencionar que en la sentencia 23-X-2020, Inc. 6-2020 AC., se hizo referencia a la interpretación histórico-dinámica y respecto de ella se dijo que la premisa básica de ese tipo de interpretación "es que la disposición constitucional que debe interpretarse forma parte de un proceso de cambio en la regulación sobre una materia o institución. En esos casos la historia sirve para resolver las dudas interpretativas, en cuanto pone de manifiesto una tendencia en la que la disposición actual está inmersa". Es claro como se ha advertido antes que la interpretación histórica no es absoluta a fin de dotar de un significado a las disposiciones constitucionales, sin embargo, es indispensable tener en cuenta la discusión que el Constituyente sostuvo a fin de llegar a los acuerdos que en la Constitución se han plasmado

De ahí que resulta indispensable al momento de realizar una interpretación basada en el contexto histórico en el que una norma fue emitida, determinar la coincidencia de la realidad con lo plasmado en las actas, o si, en caso de existir discrepancias, determinar si estas tienen o no un carácter sustancial en la redacción, esto a fin de determinar si el contexto sigue siendo en el fondo el mismo que cuando fue emitido, si las razones de esa decisión constituyente siguen vigentes o si la norma constitucional es por el contrario aplicable a una realidad distinta a la que se encuentra en el texto de las actas.

Ahora bien, cuando la interpretación se somete a conocimiento de esta Sala o en general, cuando en virtud del principio de aplicación directa de la Constitución se debe interpretar y aplicar una norma constitucional, esta Sala o el aplicador deben tomar en cuenta que la interpretación, cuando involucre derechos fundamentales, no puede ser restrictiva, sino que se debe tener en cuenta que la Constitución como norma fundamental establece mínimos, de ahí que las interpretaciones realizadas deben garantizar su plena eficacia y evitar cualquier tipo de uso restrictivo de la misma. Por otra parte, también se ha establecido en la jurisprudencia de este tribunal que la Constitución contiene mandatos de actuación para los poderes públicos, y que las actuaciones que los mandatos constitucionales exigen realizar son tan necesarias que si no se llevan a cabo la Constitución podría verse vulnerada.

De ahí la importancia de poder enjuiciar si ellas se han llevado a cabo. De negar esta posibilidad, se admitiría que los entes a los que va dirigido el mandato violen la Constitución mediante comportamientos omisivos. Y si se dejara la opción de cumplirlas o no, a discreción de los órganos ordinarios o constituidos, se los colocaría en el mismo nivel del constituyente (resolución de 25-XI-2015, Inc. 104- 2015). Entre los criterios determinantes para analizar el cumplimiento del mandato constitucional están: su existencia como mandato explícito o implícito en la Constitución —el asunto de "si existe" el mandato constitucional— y la forma en que debe cumplirse — el "cómo cumplir" el mandato constitucional— (sentencia de 28IV-2000, Inc. 2-95).

En ese sentido, el artículo 152 ordinal 1° contiene un mandato dirigido a los órganos constituidos a fin de que se promueva el derecho al sufragio activo de los ciudadanos para que estos tengan en las elecciones presidenciales toda la gama de opciones posibles, incluida la contenida en el artículo 152 ordinal 1°., esto busca entonces garantizar la máxima eficacia de su derecho fundamental al sufragio."

Sala de lo Constitucional, pérdida de los derechos de ciudadanía, número de referencia: 1-2021, fecha de la resolución: 03/09/2021

PROCESO DE PÉRDIDA DE LOS DERECHOS DE CIUDADANÍA

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES

"II. Consideraciones sobre la pretensión del demandante.

En relación al proceso de pérdida de los derechos de ciudadanía que fue iniciado por demanda presentada a esta Sala por el ciudadano [...], a fin de que

este tribunal declarase la pérdida de los derechos de ciudadanía de la señora [...], con base en la causal establecida en el art. 75 ordinal 4° Cn., el cual literalmente establece:

"Art. 75.- Pierden los derechos de ciudadano:

4° Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin".

La demanda se admitió en resolución del 19-II-2021, declarando sin lugar la medida cautelar solicitada por el demandante. Así mismo, se le confirió traslado a la señora [...] para que, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación respectiva, contestara la demanda de pérdida de los derechos de ciudadanía presentada en su contra, atendiendo a los parámetros expuestos en la citada resolución, notificando a las partes intervinientes y al Tribunal Supremo Electoral.

El demandante aduce que la ciudadana [...] ha incurrido en la causal de pérdida de los derechos de ciudadanía establecida en el art. 75 ordinal 4° Cn., por el hecho de apoyar y promover de manera pública mediante declaraciones en un medio de comunicación la reelección del actual Presidente de la República. Dicha afirmación es sustentada mediante capturas de pantalla de la edición digital del periódico El Mundo donde aparece la entrevista y las declaraciones de la demandada, donde la misma realiza declaraciones públicas a favor de la reelección presidencial. A juicio de la configuración de este tribunal al momento de la admisión, la demanda cumplía con los requisitos establecidos como producto de una interpretación armónica de la Constitución y los presupuestos procesales aplicables, por lo que fue admitida para determinar si era procedente declarar la pérdida de los derechos de ciudadanía de la señora [...], por haber incurrido en la causal establecida en el art. 75 ordinal 4° Cn.

Sin embargo, es importante mencionar que la conformación de esta Sala ha cambiado respecto de aquella que pronunció la admisión de la demanda antes referida. Este aspecto es relevante porque los magistrados que suscribieron dicha resolución realizaron una interpretación errada como consecuencia de una interpretación también errónea que se desarrolla en la sentencia 24-VI-2014, Inc. 163-2013, respecto del artículo 152 ordinal 1° Cn. del cual se hacen derivar prohibiciones a la reelección presidencial. De ahí el infundado reproche de las actuaciones de la parte demandada en este proceso.

Y es que, este Tribunal debe valorar ciertos asuntos vinculados con la pretensión del actor. En primer lugar, como se ha sostenido en los precedentes constitucionales, cuando las alegaciones en un proceso de inconstitucionalidad tienen carácter fáctico, de hecho o probatorio, esa situación no puede ser simplemente afirmada, sin ninguna base racional o fuente objetiva [1]. Esta consideración también es aplicable al proceso de pérdida de derechos políticos, no solo por la jurisprudencia preexistente, sino también por aplicación analógica

[1] Resolución de 11 de febrero de 2019, inconstitucionalidad 4-2019.

del art. 31 n° 4 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, que prescribe que puede sobreseerse un proceso de amparo cuando no se rinda prueba sobre la existencia del acto reclamado, si aquella fuere necesaria ?la semejanza relevante entre estos procesos es que ambos suponen un control concreto de constitucionalidad-[2]. Por extensión, esta causal de sobreseimiento también puede llegar a ser empleada en el examen liminar de las demandas de pérdida de derechos de ciudadanía.

Si se aplican estas consideraciones al presente caso, puede concluirse que el planteamiento del demandante carece de fundamento objetivo suficiente, ya que este se ha limitado a aseverar cuestiones que implicarían la pérdida de derechos de una ciudadana con base en noticias de prensa y digitales, que se constituyen en fuentes indirectas y de referencia. En consecuencia, al no poderse aceptar la probabilidad de que se haya cometido la conducta afirmada en la demanda, se puede concluir que lo solicitado por el actor encaja en la esfera de lo subjetivo, no de lo objetivo. Dadas esas circunstancias, es procedente sobreseer este proceso por no haberse rendido prueba suficiente sobre los hechos alegados, en tanto que la hipótesis que ha planteado el ciudadano Anaya Barraza carece de respaldo probatorio fiable (art. 31 n° 4 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, así como los precedentes constitucionales citados).”

ADMISIÓN INDEBIDA DE LA DEMANDA

“En tal sentido, se advierte que se ha producido una admisión indebida de la demanda presentada por el ciudadano [...] en el presente proceso de pérdida de derechos de ciudadanía, que se configuraría como una causal de sobreseimiento en el presente proceso.

Además de lo antes indicado, esta Sala advierte que la pretensión planteada por el demandante posee deficiencias que no fueron apreciadas liminarmente por la anterior conformación de este tribunal, pues se basaron en la interpretación errónea de una disposición constitucional por los magistrados que les precedían, generando un círculo vicioso de interpretaciones erróneas que giran sobre un mismo punto: la reelección presidencial, y que conllevan el incumplimiento del requisito estatuido en el art. 6 n° 3 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, lo que también implica que la demanda fue admitida indebidamente, sumándose a la causal de sobreseimiento indicada en los párrafos precedentes.

En realidad, la parte actora incurre en una argumentación restrictiva, que no tiene en cuenta el carácter garantista del texto constitucional, pues proporciona un argumento basado en una interpretación restrictiva de los derechos fundamentales. Dicha argumentación obedece a un error interpretativo en el que incurren las dos conformaciones de Sala que preceden a esta y de la cual deviene la incongruencia argumental propuesta por el demandante al interpretar restrictivamente un texto constitucional, por lo cual se vuelve imperativo realizar

[2] Sobre esta semejanza, ver la resolución de 19 de febrero de 2021, pérdida de derechos de ciudadanía 1-2021. [3] Es decir, tales demandas pueden declararse improcedentes por esa razón.

una adecuada labor hermenéutica de las disposiciones primarias atinentes, a fin de evitar ulteriores desviaciones derivadas de los yerros interpretativos que están orientados de manera diametralmente opuesta a las corrientes progresivas y extensivas de la interpretación de las normas que condicionan o regulan el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo aquellos de índole política." *Sala de lo Constitucional, pérdida de los derechos de ciudadanía, número de referencia: 1-2021, fecha de la resolución: 03/09/2021*

REELECCIÓN PRESIDENCIAL

INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

"4. Reelección presidencial.

En la sentencia 25-VI-2014, Inc. 163-2013, se hizo una interpretación sobre el contenido del artículo 152 ordinal 1°, haciendo referencia a las inelegibilidades contenidas en las disposiciones citadas, estableciendo que las mismas "están dirigidas a la conservación de fines, bienes o intereses constitucionalmente relevantes, tales como la libertad del sufragio activo (que los electores decidan sin presiones o coacciones indebidas), las competencias electorales equitativas (con igualdad de oportunidades o sin ventajas discriminatorias) y la integridad de la función pública (al evitar los conflictos de intereses)".

En esa ocasión interpretó la Sala que el artículo 152 ordinal 1° "comprende tanto a quienes hayan sustituido al Presidente electo como al titular del cargo, de modo que esta disposición forma parte del conjunto de preceptos encaminados a garantizar el principio de alternancia o alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia. Esta finalidad comparten, asimismo, los arts. 75 ordinal 4° (que sanciona a quienes promuevan la reelección presidencial continua); 88 (que afirma que dicho principio "es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político" y que su violación "obliga a la insurrección"); 131 ordinal 16° (que ordena a la Asamblea Legislativa "desconocer" al Presidente de la República que continúe en el cargo a pesar de la terminación de su período); 154 (que fija la duración del período presidencial en 5 años y "ni un día más"); y 248 Cn. (que prohíbe la reforma constitucional en este tema)".

Dijo la Sala en esa ocasión que todas esas disposiciones citadas indican que la Constitución prohíbe la reelección presidencial inmediata, esto sin tratar de encontrar una interpretación conforme con la realidad. Además la Sala plasma el siguiente razonamiento: "al evitar la ocupación reiterada del poder por una misma persona se contribuye a la pureza o regularidad de los procesos electorales, y no solo a favor de la libertad de voto, sino también de condiciones más equitativas entre los competidores. (…) hay que agregar que la limitación temporal del mandato pone de manifiesto el carácter inestable del ejercicio del poder, que finaliza en cierto momento y que debe responder ante los ciudadanos por la forma en que se haya desempeñado".

Sin embargo, esta interpretación deja de lado que el permitir la postulación del Presidente para competir de nuevo por la presidencia, no implica de facto que este llegue a ser electo, implica únicamente que el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que a ese momento ejerce la presidencia, y es el pueblo quien decide si deposita nuevamente la confianza en él o si se decanta por una opción distinta. De nuevo, parece que en esa ocasión la Sala pasa por alto que la disposición mencionada hace referencia no a prohibiciones para ser Presidente, sino a prohibiciones para ser candidato y lo grave de una interpretación que deje este detalle por fuera, radica en que se imposibilita al electorado a reelegir la opción política que más le convenga.

La interpretación que la Sala realiza entonces busca "el sufragio libre de influencias indebidas de un candidato o ventajas ilegítimas para un competidor", pasando por alto que cuando el Presidente de la República en funciones ejerce su cargo en perjuicio del pueblo, lo que se tiene no son precisamente ventajas, sino un escrutinio más profundo sobre su candidatura que sobre el resto de candidatos.

No obstante la anterior interpretación poco garantista, en la misma sentencia la Sala se refirió a otros requisitos para ser candidato a Presidente, es decir, aquellos contenidos en los artículos 152 ordinal 7°, remitiendo al art. 127 ordinal 6° Cn., Al respecto se dijo que a diferencia de lo establecido en el artículo 152 ordinal 1°, estas prohibiciones están dirigidas a promover la integridad en el desempeño de la Presidencia de la República, y que específicamente en lo relativo a los conflictos de intereses, con ello se busca "evitar un entrelazamiento clientelas político-económico que constituiría una forma de corrupción. Específicamente, esta causa de inelegibilidad se orienta a prevenir los conflictos de intereses de quien resulte elegido en el cargo, a raíz de sus vínculos con entidades privadas que puedan verse favorecidas, o que así pueda parecerlo ante la ciudadanía, durante el desempeño de sus funciones públicas. La regulación constitucional y legal de los conflictos de intereses es esencialmente preventiva y se dirige a evitar el peligro que el conflicto origina e incluso a impedir la mera apariencia de un conflicto de intereses, para preservar la confianza ciudadana en la imparcialidad del funcionario". De ahí que, estos requisitos-prohibiciones, tienen sentido y deben ser cumplidas por los candidatos, y en el caso de los candidatos a la presidencia al mismo tiempo se encuentren ejerciendo el cargo, están sujetos al mismo escrutinio."

CAMBIO DEL CRITERIO INTERPRETATIVO ERRÓNEO EN QUE SE FUNDA EL PRECEDENTE

"III. Cambio del criterio interpretativo erróneo en que se funda el precedente.

Si bien los precedentes jurisprudenciales tienen una fuerza vinculante que obliga a los tribunales a someterse a sus propias decisiones pronunciadas en los procesos que ha conocido, porque así lo exige la igualdad y la seguridad jurídica. Sin embargo, en virtud de la función y rol que juegan los tribunales constitucionales en la interpretación y actualización del contenido de la Constitución, no se

puede pretender el congelamiento de la jurisprudencia y es que, tal como se ha destacado en la resolución del 25-II-2019, Inc. 2-2019 emitida por esta Sala, la continuidad de la jurisprudencia puede flexibilizarse o ceder bajo determinados supuestos. Para ello se exige que el apartamiento de los precedentes esté especialmente justificado —argumentado— con un análisis crítico de la antigua jurisprudencia, que también es susceptible de ser reinterpretada.

En relación con lo anterior, en la resolución del 14-II-2018, Amp. 74-2016 se sostuvo que aunque el precedente –y, de manera más precisa, el autoprecedente– posibilita la precomprensión jurídica, de ahí que se afirmó que se admiten como circunstancias válidas para modificar un precedente o alejarse de él –entre otros– los siguientes supuestos: (i) estar en presencia de un pronunciamiento cuyos fundamentos normativos son incompletos o erróneamente interpretados; (ii) el cambio en la conformación subjetiva del Tribunal; y (iii) que los fundamentos fácticos que le motivaron hayan variado sustancialmente al grado de volver incoherente el pronunciamiento originario con la realidad normada.

Entonces, lo que constitucionalmente esta proscrito no es que los tribunales cambien sus precedentes, sino que lo hagan de forma injustificada o infundada, sin atender a los parámetros antes mencionados.

En el presente caso, cabe realizar un cambio de precedente, en primer lugar porque estamos en presencia de un pronunciamiento cuyo fundamento normativo ha sido erróneamente interpretado, tal parece que los miembros que conformaban la Sala de lo Constitucional al momento en el que pronunció la sentencia 25-VI-2014, Inconstitucionalidad 163-2013, realizaron una interpretación que pasó por alto el hecho que la disposición que en ese momento fue objeto de interpretación y que ahora lo es nuevamente, hacía referencia a una prohibición dirigida a candidatos y no al Presidente. De ahí deviene el gran error interpretativo que deja como resultado una interpretación aislada de la voluntad del Constituyente. Y es que si la Constitución hubiese establecido “no podrá ser Presidente de la República (…)”, la interpretación realizada en esa resolución indicaría un adecuado contenido, porque en ese caso la prohibición se hubiese entendido en el sentido que el período inmediato anterior era aquel período previo al período presidencial por el cual se compite. Sin embargo, en este caso el Constituyente ha sido claro al dirigir esa prohibición al candidato, implicando así que el período inmediato anterior al que se refiere es precisamente el período previo al que se es candidato; tal como se ha indicado anteriormente.

Y es que la frase “no podrán ser candidatos a Presidente de la República” no es un error del Constituyente. Cuando es la voluntad del Constituyente establecer prohibiciones directas al Presidente lo hace de forma clara, tal es el caso del artículo 158 de la Constitución. En ese caso la prohibición es clara y directa a la figura presidencial. Pero en el caso del artículo 152 ordinal 1°, la prohibición va dirigida a los candidatos, de manera que permite por una sola vez más, la reelección presidencial.

En similar sentido, la redacción contemplada en la Constitución previa, es decir la Constitución de 1962, tiene una redacción totalmente distinta respecto de la regulación en la Constitución actual. La prohibición establecía literalmente:

"Artículo 65. En defecto del Presidente de la República, por muerte, renuncia, remoción u otra causa, los sustituirá el Vice-Presidente; a falta de éste, uno de los Designados por el orden de su nominación, y si todos éstos faltaren por cualquier causa legal la Asamblea designará la persona que habrá de sustituirlo.

Si la causa que inhabilita al Presidente para el ejercicio del cargo durare más de seis meses, la persona que lo sustituya conforme al inciso anterior, terminará el período presidencial.

Si la inhabilidad del Presidente fuere temporal, el sustituto ejercerá el cargo únicamente mientras dure aquélla.

El ciudadano que haya desempeñado la Presidencia de la República a cualquier título de los mencionados en este artículo no podrá ser Presidente, Vice-Presidente o Designado en el período presidencial inmediato".

Esta era claramente una redacción en la que no era posible establecer una interpretación que diera lugar a que un Presidente se eligiera por una segunda vez consecutiva. Y es que la norma establecía que quien ejerciera la Presidencia no podía serlo nuevamente en el período presidencial inmediato. La palabra "inmediato" hacía referencia al período presidencial siguiente en el que el individuo ejercía dicha función a cualquier título. Esta redacción tenía sentido ya que el Constituyente pretendía limitar y otorgar una protección a la población civil frente a la perpetuidad de los Gobiernos militares de la época, al ser amenazas no solo en El Salvador, sino en otros territorios."

LA CONSTITUCIÓN POSIBILITA QUE SEA EL PUEBLO EN EL EJERCICIO DEL PODER SOBERANO QUIEN DECIDA, SI CONTINÚA POR UN SEGUNDO PERÍODO O EL MISMO SOBERANO LO ELIMINA DE LA CONTIENDA, TODO ELLO MEDIANTE ELECCIONES LIBRES

"De ahí que el giro en la redacción en nuestra Constitución actual, posibilita que sea el pueblo en el ejercicio del poder soberano quien decida, si continúa por un segundo período o el mismo soberano lo elimina de la contienda, todo ello, mediante elecciones libres.

En segundo lugar, la conformación de este tribunal ha cambiado en su totalidad respecto de la conformación que se tenía al momento de realizar la interpretación en comento. De ahí que esta Sala por medio de la presente resolución se aparta del precedente jurisprudencial pronunciado por medio de la resolución del 25-VI-2014, Inc. 163-2013, en virtud del error interpretativo sobre el artículo 152 ordinal 1° de la Constitución. Así, el "período inmediato anterior" se entenderá que hace referencia al período presidencial previo al que se pretende ser candidato a la Presidencia."

PROHIBICIÓN ORIENTADA A LIMITAR LA PERPETUIDAD

"IV. Prohibición orientada a limitar la perpetuidad.

La Constitución de la República establece en el artículo 152 ordinal 1°, una prohibición que determina la forma en la que se configurará la postulación para el

ejercicio de la Presidencia. El texto ha sido en el pasado objeto de conocimiento, análisis e interpretación por la Sala de lo Constitucional, es el caso de la sentencia 25-VI-2014, Inc. 163-2013.

La anterior interpretación debe realizarse a partir que es el pueblo que articula mediante sus representantes la forma en la que será organizado el Estado, así como la administración de los servicios públicos esenciales, cuyo efecto es la materialización de los derechos fundamentales que responden a sus necesidades básicas, a partir de ello es el pueblo quien elige a sus diputados, Presidente y Vicepresidentes de la República, diputados a la Asamblea Legislativa y alcaldes municipales- y les encomienda el ejercicio de tal poder de forma provisional.

Bajo esa premisa y la determinación de procedimientos claros, reglados y determinados por la misma voluntad del pueblo a través de las leyes correspondientes Código Electoral, Ley de Partidos Políticos, entre otras- es claro que deben existir requisitos para el acceso a los cargos mencionados, pero al cumplir dichos requisitos, es finalmente el pueblo quien conserva la potestad de decidir si quiere un programa político nuevo o la continuación del mismo a partir de la satisfacción de los intereses públicos que han quedado satisfechos.

Pero lo indispensable es cumplir el mandato expreso del Constituyente de otorgar la oportunidad de inscribirse como candidato a la persona que ejerce la Presidencia en el período de inscripción, estableciendo ciertas condiciones como no utilizar el cargo para prevalerse del mismo, al dejar dejar establecida la prohibición para el Vicepresidente de inscribirse como candidato y solventar este el permiso o licencia que el Presidente deberá tener seis meses antes del inicio del período presidencial. En consecuencia, el soberano debe conservar esta gama de opciones y no estar sujeto a una interpretación restrictiva y errónea sobre el contenido del derecho al sufragio activo.

La forma en que esta propuesta llega a conciliarse con el contenido del artículo 152 ordinal 1°, es apartarse del criterio establecido en la sentencia 25-VI-2014, Inc. 163-2013 que resuelve el caso de la postulación de un candidato que ya había sido electo previamente. Ahora, la interpretación y la lectura que deberá darse al mandato sobre dicha disposición es que las prohibiciones ahí contenidas están dirigidas a los candidatos que hayan tenido la oportunidad de haber sido Presidentes en el período inmediato anterior. Esto es importante notarlo, que la Constitución NO establece prohibiciones para ser Presidente, sino para ser candidato a Presidente. Parece irrelevante esta advertencia, pero el reparo es sustancial.

Es indispensable manifestar que el constituyente al determinar la prohibición antes referida, fue claro que al referirse a “el período inmediato anterior”, hace referencia a una prohibición en la cual no se ejerza el sufragio activo y exista una imposición a través de mecanismo que alteren el orden legal y procedimientos que el mismo pueblo diseña y exige. Así, sí “X” fue electo Presidente en el quinquenio “A”, puede inscribirse para el quinquenio “B”, mas no para el quinquenio “C”. Esto porque el período inmediato anterior no se refiere al quinquenio “A” sino al quinquenio previo del Presidente “Y”.

Lo anterior, es confirmado por la voluntad de cambio que hizo el constituyente en la Constitución vigente, el carácter personalista de la Constitución, con el cual se exige que la soberanía tenga no un mayor protagonismo frente a otros presupuestos constitucionales, sino que sea el único protagonista.

La prohibición de inscripción a una candidatura a la más alta magistratura se diseña en el entendido de proteger el ejercicio del sufragio activo y la misma fuerza que tiene la soberanía popular y es que el constituyente impone mecanismos como el derecho a la insurrección como garantía frente al desconocimiento de una persona que se proclama el Presidente sin pasar por el orden legal correspondiente y sanciona además a los particulares que lo promuevan eliminándole su derecho a la ciudadanía.

El ordinal 1° del artículo 152 contiene una salvedad: "o dentro de los seis meses anteriores al inicio del período presidencial", de ahí que de conformidad con dicha disposición, ha de requerirse al Presidente que se haya postulado como candidato presidencial para un segundo período, deba solicitar una licencia durante los seis meses previos, a fin de lograr concordancia con el artículo 218 de la Constitución en el que se establece la prohibición de prevalerse del cargo para realizar propaganda electoral. En estos casos deberá sustituirlo el Vicepresidente, a quien, por defecto, el Constituyente sí le prohíbe inscribirse como candidato por la misma función que este desempeña los últimos seis meses que sustituye temporalmente al Presidente de la República.

Claramente, en estos casos se trata de un candidato que debe siempre cumplir los requisitos como el de edad mínima, nacionalidad, así como el resto de requisitos que se establecen el artículo 151 Cn., y los establecidos en los ordinales 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del artículo 127 Cn. No debe existir otra restricción del derecho y jamás el poder político puede arbitrariamente limitarlo. Y es que el Constituyente decidió por esos requisitos y sobre ellos no cabe discusión alguna, pero la interpretación que cabe sobre el contenido del ordinal 1° del artículo 152 es sin duda una interpretación garantista que permite -sobre todo- la posibilidad de que el pueblo elija conforme a su voluntad. El derecho al sufragio, como derecho político, constituye un derecho de primer orden, y por ende, es un derecho fundamental. Así, esta interpretación que forma parte del mismo, constituye una garantía del derecho de elección, pues le permite al ciudadano tener la facultad de escoger, en una mayor amplitud de posibilidades, los gobernantes que estima convenientes.

Por consiguiente, es la garantía de soberanía del pueblo a través de manifestaciones expresas de voluntad que marcan una diferencia entre las elecciones anteriores, la que dispuso que existiera nuevamente una competencia en la cual se incluya al candidato que ostenta la Presidencia de la República cuando inicia la competencia electoral, con el fin de garantizarse el pueblo el ejercicio efectivo de sus derechos.

De hecho, la misma Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 23 establece: "1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades...b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores..."; y que no admite mayores limitaciones, que las siguientes: "2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal." De este último párrafo de la Convención de Derechos Humanos, se desprenden de manera clara, las únicas razones por las cuales pueden establecerse restricciones al ejercicio de los derechos ahí contenidos.

La elección según se desprende de la voluntad popular suscrita en las dos elecciones anteriores (presidenciales y de diputados y alcaldes), garantiza la posibilidad para el ciudadano de elegir libremente a sus gobernantes, por lo que una interpretación contraria al contenido del artículo 152 ordinal 1°, va en detrimento de la soberanía del pueblo, y en deterioro de sus derechos fundamentales, lo que se produjo en este caso fue la imposición de más limitaciones que las ya existentes en los artículos 151 y 127 ordinales 2°, 3°, 4°, 5° y 6°.

Esta interpretación resulta adecuada en tanto las reglas en la alternancia del ejercicio de la presidencia están dirigidas a superar los casos de aquellos funcionarios que ejercieron la presidencia pero que no gozan más de la aprobación del pueblo y que por tanto su postulación resulta contraria a la voluntad popular.

Este Tribunal, conformado por los magistrados que suscribieron la sentencia 25-VI2014, Inc. 163-2013, incurrieron en una interpretación restrictiva del artículo 152 ordinal 1° y además pretendió basar su argumento en que dicha disposición constitucional, "forma parte del conjunto de preceptos encaminados a garantizar el principio de alternancia o alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia", aduciendo que los artículos 75 ordinal 4°; 88; 131 ordinal 16°; 154; y 248 Cn., prohíben a la ciudadanía que tenga entre su gama de opciones la elección de programa político que a ese momento este siendo ejecutada. Esto es un error interpretativo y a continuación se entra al análisis de las disposiciones mencionadas:

Artículo 75 ordinal 4°

"Pierden los derechos de ciudadano:

4º- Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin"."

SERÍA ILEGÍTIMO PROMOVER LA CONTINUIDAD DEL PRESIDENTE O UNA REELECCIÓN MÁS ALLÁ DE LOS DIEZ AÑOS, ES DECIR, MÁS ALLÁ DE DOS PERÍODOS

"En virtud del principio de unidad de la Constitución esta disposición debe interpretarse dentro de los parámetros de permisibilidad que establece el artículo 152 ordinal 1°, en el sentido que la perdida de los derechos de ciudadano procede en aquellos casos que se promueva una reelección o continuación del Presidente de forma ilegítima, cuando dichos supuestos no cuenten con el respaldo de la voluntad popular, y se entenderá que no existe respaldo del soberano en los casos que se promueva la continuación o reelección más allá de

los 10 años permitidos por el artículo 152 ordinal 1° de la Constitución. Pues es el mismo Constituyente el que permite que el Presidente se postule nuevamente para un segundo período, existiendo prohibición únicamente cuando se trate de un Presidente que busque una candidatura cuyo período inmediato anterior a la misma haya ejercido ya la Presidencia, de ahí que, ilegítimo sería promover la continuidad del Presidente o una reelección más allá de los diez años, es decir, más allá de dos períodos.

En similar sentido, cabe destacar que cuando el Constituyente utiliza la palabra "continuación" enmarca el sentido de dicha disposición para los casos en los que exista un uso abusivo y arbitrario del poder, utilizándolo para permanecer en el mismo sin que medie una elección. De ahí que lo que dicha disposición busca proteger es que esa "permanencia" este precedida de elecciones libres e igualitarias, es por ello que el Presidente que pretenda un segundo período debe necesariamente someterse a la contienda electoral al igual que otros candidatos, a fin de que sea el pueblo quien finalmente decida elegirle o decantarse por una opción política distinta.

Artículo 88

"Art. 88.- La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección".

Por su parte, el artículo 88 establece la insurrección como consecuencia de los casos en los que se genere un ejercicio ilegítimo del poder, en el que de facto el Presidente pretenda permanecer en el cargo sin que esta haya sido la voluntad del pueblo. La disposición busca garantizar que sea siempre el pueblo en el ejercicio del poder soberano quien tenga la potestad de decidir. Como bien la disposición menciona, la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia es indispensable, tan indispensable que la forma en la que esto se garantiza es realizando elecciones periódicas, libres e igualitarias.

En violación se incurriría si se pretendiera eliminar la fase electoral, despojando al pueblo de su derecho a decidir quien quiere que le represente y permitiendo al Presidente la permanencia infinita en el cargo, sin que el pueblo pueda tener incidencia en ello. No es posible una interpretación sobre este artículo en la que se obligue al pueblo a renunciar a la posibilidad de elegir nuevamente como Presidente a quien fue electo en una elección anterior, cuando es el mismo artículo 152 ordinal 1° quien permite como máximo que una persona ejerza la presidencia por 10 años y de hecho, el Constituyente de 1983 obliga a que esos 10 años se ejerzan, si el pueblo así lo decide, de forma consecutiva.

Artículo 131 ordinal 16°

"Art. 131.- Corresponde a la Asamblea Legislativa:

Desconocer obligatoriamente al Presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado su período constitucional continúe en el ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la Presidencia, designará un Presidente Provisional"

Sobre la base de lo establecido, resulta lógico que la Asamblea Legislativa deba desconocer al Presidente de la República cuando haya terminado el

período para el que fue electo. Si el Presidente se ha postulado como candidato a la Presidencia de la República, tal como lo regula en el artículo 152 Cn., frente a ello no procede desconocimiento alguno, pues estaría participando en una contienda libre e igualitaria que tiene su base en la misma Constitución. Si en este último caso el Presidente resultare electo por un segundo período, debe atenerse a la duración prevista, es decir, cinco años más.

Por otro lado, si la Constitución misma prevé que el período presidencial es de cinco años, terminado este período y si el Presidente continúa en el cargo de manera ilegítima sin haberse efectuado elección alguna que le haya designado tal cargo por un quinquenio más, entonces sí es procedente efectuar dicho desconocimiento.

Artículo 154

"Art. 154.- El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más".

Con esta disposición el Constituyente asegura que se lleven a cabo elecciones periódicas a fin de que el pueblo tenga siempre la posibilidad de decidir cada cinco años si desea cambiar de ideario político o si desea que el mismo partido político continúe en la Presidencia.

Sin embargo, esto no implica que del artículo 152 ordinal 1° deba deducirse una prohibición de que el Presidente pueda postularse como candidato a la Presidencia para el período siguiente, al contrario, garantiza que de desear continuar ejerciendo el cargo, deba someterse a elecciones para poder ejercer el cargo por cinco años más. De manera que descarta toda posibilidad de que el Presidente se imponga a sí mismo sin elecciones previas."

LA ALTERNABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DEBE PRESERVARSE A FIN DE GARANTIZAR EL SISTEMA DEMOCRÁTICO EN EL QUE SIEMPRE LAS DECISIONES SOBRE LA DIRECCIÓN DEL ESTADO LAS TOME EL PUEBLO, EN EL EJERCICIO DE SU PODER SOBERANO

"Artículo 248

"Art. 248.- La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los Diputados electos.

Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de los Diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial.

La reforma únicamente puede ser propuesta por los Diputados en un número no menor de diez.

No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República".

Sobre este punto, la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia debe preservarse a fin de garantizar el sistema democrático en el que siempre las decisiones sobre la dirección del Estado las tome el pueblo en el ejercicio de su poder soberano.

En la inconstitucionalidad 119-2018, resolución del 15-II-2018, se estableció que uno de los principios esenciales que derivan del art. 83 Cn. es el de soberanía popular y que una de las manifestaciones de dicha soberanía es la establecida en el art. 86 inc. 1° Cn., que prescribe que el poder público emana del pueblo. Esto significa, en palabras de esta Sala en la sentencia 29-VI-2010, Inc. 61-2009, "que el pueblo es el titular del poder soberano, en el sentido de que todas las normas jurídicas y cargos públicos que ejercen poder real emanan directa o indirectamente de la voluntad popular".

De ello surge la distinción entre poder constituyente –que reside en el pueblo– y órganos constituidos – que reciben de él la legitimación necesaria para actuar–. Y es que los órganos constituidos tienen mandatos claros de actuación a los cuales deben regirse, así, los tres órganos fundamentales del Estado y en general cualquier ente estatal debe regirse al contenido de la Constitución en tanto es expresión real y directa de la voluntad del soberano.

En ese sentido, se dijo en la inconstitucionalidad 119-2018, resolución del 15-II-2018, los poderes constituidos "deben actuar de acuerdo con los límites que el pueblo les ha establecido en la Constitución. Si esta Sala declarara la inconstitucionalidad de una norma constitucional estaría sobrepasando dichos límites, porque invalidaría una decisión del constituyente positivada en la Constitución. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio del control sobre reformas constitucionales que ingresen al sistema con violación de las normas constitutivas que regulan este instituto".

En relación con lo anterior, en la sentencia del 24-XI-2017, Inc. 33-2015, se estableció que las actuaciones de los poderes constituidos están sujetos al control ciudadano de las decisiones públicas "porque es una condición necesaria de esta clase de control. Este último elemento encuentra su fundamento normativo en los arts. 83, 85 inc. 1 y 1 inc. 1 Cn., en lo atinente al principio de soberanía popular, democrático y representativo y a la concepción personalista que se expresa en la Constitución". De ahí que para preservar este control, es indispensable que los actos estatales se apeguen al contenido de las disposiciones constitucionales, al ser la decisión Constituyente sobre el manejo del Estado.

En la sentencia 19-I-2015, Inc. 76-2011, se determinó que la soberanía popular implica que la gestión de los asuntos públicos afecta a la generalidad, y en esa medida tiene interés en ella. De ahí que el destino de la sociedad debe ser decidido por todos sus integrantes. Y esta es precisamente la esencia de la Soberanía. La posibilidad de que las normas -resultado de la interpretación de los tribunales constitucionales- que obligan a la comunidad sean trazadas por la sociedad misma. Esa voluntad debe ser respetada, sea cual sea la manera en la que se exprese. Así el máximo y último intérprete de la Constitución debe estar en la disposición de escuchar y atender a esa manifestación del pueblo.

En la medida en la interpretación de la Constitución refleje un fiel cumplimiento de la voluntad del del pueblo, se entenderá que esas actuaciones son legítimas y a partir de ahí su exigibilidad y obligatoriedad. En concordancia con ello, en la 29-V-2014, Inc. 52-2014 se reiteró la importancia de que las decisiones generales que afectan el destino colectivo debe tomarlas el pueblo; todos los cargos que ejercen poder público deben ser de elección popular o derivados de los cargos de elección popular; y las decisiones las toma la mayoría a partir de sus intereses.

En la misma sentencia 19-I-2015, Inc. 76-2011 que ha sido citada previamente, se destacó el carácter democrático y representativo del gobierno, entendido el gobierno en un sentido amplio y no estricto, según establece el art. 85 inc. 1° de la Cn. Y a partir de ello se deduce una obligatoriedad y responsabilidad de los representantes de cumplir compromiso con el pueblo, que es quien los elige y finalmente a quienes se deben y cuya voluntad deben preservar.

De ahí que sus actuaciones son dirigidas a cumplir con las categorías constitucionales de todos y cada uno de los miembros que conforman la sociedad salvadoreña. Por tanto, deben tomar en cuenta la voluntad y los intereses de la totalidad de sus representados. Finalmente, el carácter democrático de la forma de gobierno establecida en la Constitución supone la participación de todos los sectores sociales, culturales, económicos y políticos en la conformación del consenso sobre cualquier tema relacionado a la gestión pública o sobre el que los ciudadanos puedan tener algún interés, bien sea directamente o por medio de sus representantes. Dentro de ese círculo cobran relevancia los derechos fundamentales, en concreto los derechos políticos.

No hay forma de que la interpretación propuesta en este documento vulnere derechos fundamentales -ni de mayorías ni de minorías-, pues se deja siempre en manos del pueblo la potestad de decidir entre una gama de opciones, el Presidente que pretende la reelección es una más de esas opciones.

Finalmente, vale mencionar que una de las razones por las que los Estados regulan la prohibición de reelección, es para sobrellevar aquellos casos en los que el pueblo no desea más del mismo programa político que se le ha ofrecido, cuando se trata de gobiernos que no tutelaron eficientemente derechos fundamentales, que no supieron responder a las necesidades básicas de los individuos, que hicieron un mal manejo de las eventualidades por las cuales cualquier gobierno atraviesa. Esta protección puede resultar válida para algunos Estados, mas no se encuentra establecida de esa manera en el texto de la Constitución, dejándose en manos del soberano la manifestación inequívoca de su voluntad a través del ejercicio del sufragio en elecciones populares, como las que se llevaron a cabo en 2019 y 2021, que representaron cambios históricos en las tendencias ideológicas que ejercieron el poder durante décadas precedentes. V. Conclusión."

LA PÉRDIDA DE DERECHOS DE CIUDADANO PROCEDERÁ CUANDO SE SUSCRIBAN ACTAS, PROCLAMAS O ADHESIONES PARA PROMOVER O APOYAR LA REELECCIÓN PARA UN TERCER PERÍODO O LA CONTINUACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EVADIENDO EL PROCESO ELECTORAL

"En virtud de los argumentos vertidos en la presente resolución y habiéndose constatado la indebida admisión de la demanda declarada en el presente proceso, en virtud del error argumental en que incurre la parte actora al basar su alegato en una interpretación restrictiva de la Constitución resulta procedente declarar el sobreseimiento respectivo. Y es que además de dicho error argumental, se ha generado un error interpretativo originado a partir de la sentencia 25-VI-2014,

Inc. 63-2013, al interpretar que las prohibiciones contenidas en el artículo 152 ordinal 1° están dirigidas al Presidente de la República y no a los candidatos -como dice la disposición expresamente- esto ha generado una confusión y error para determinar cuál es el período inmediato anterior al que la disposición se refiere y de ahí ha derivado el error interpretativo del artículo 75 ordinal 4°.

Y es que derivado de la interpretación realizada en la sentencia 25-VI-2014, Inc. 632013 respecto del artículo 152 ordinal 1°, se ha entendido de manera errada que el artículo 75 ordinal 4° refuerza -bajo la amenaza de pérdida de derechos de ciudadano- una prohibición de que el pueblo pueda elegir por un segundo período al Presidente de la República, cuando la disposición -art. 152 ordinal 1°- va dirigida en el sentido de prohibir que se postule como candidato aquel que en el período anterior a la candidatura pretendida haya sido Presidente. Es entonces con base a este análisis que debió interpretarse el artículo 75 ordinal 4° Cn., de manera que la pérdida de derechos de ciudadano procederá cuando se trate de un caso situado fuera de los márgenes permitidos por el Constituyente en el artículo 152 ordinal 1°, es decir, cuando se suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección para un tercer período -ya que el artículo 152 ordinal 1° permite que el Presidente participe en la contienda electoral por una segunda ocasión y es el pueblo quien decide si este resulta electo- o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin; entendiéndose por continuación los casos en los que el que se pretenda evadir el proceso electoral e imponerse a sí mismo en el cargo de manera permanente.

Es importante aclarar que el contenido de este artículo no va encaminado a limitar la voluntad del soberano, de manera que no procederá la pérdida de derechos en aquellos casos en que el pueblo busque la determinación de reglas distintas para la elección de los cargos públicos.

De manera adicional a lo anterior, se debe tomar en cuenta el contenido del art. 75 ordinal 4° Cn., que prescribe que "[p]ierden los derechos de ciudadano: […] [l]os que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin". Al respecto, es importante destacar que la pérdida de un derecho implica suprimir todas las modalidades de ejercicio de los derechos declarados como perdidos, sin excepción. Es decir, en ella queda sustraída la totalidad de posiciones iusfundamentales que están albergadas en él, de manera que su ejercicio se torna imposible de forma absoluta mientras dure la situación de pérdida [1]. En ese sentido, supone la forma más intensa de restricción de un derecho fundamental —por encima de la limitación o suspensión—. Pero, dicha intensidad incide en la forma en que tal disposición debe ser interpretada, en tanto que fundamenta el significado apuntado en el párrafo previo como el más aceptable de todos los posibles, porque:

---

1 Sentencia de 8 de junio de 2020, inconstitucionalidad 21-2020 AC.

1. Uno de los criterios para la interpretación de las disposiciones que reconocen derechos fundamentales es el de fuerza expansiva u optimizadora, que consiste en que han de ser interpretadas dentro de la amplitud de su contexto, con un criterio que propicie asignarles la mayor fuerza expansiva y eficacia posibles. De modo comparativo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha empleado el criterio "pro homine" o "pro persona". Entre las manifestaciones de este criterio interpretativo —cualquiera que sea el nombre que reciba— se encuentra la de la interpretación restrictiva de los límites a los derechos fundamentales, que en este caso apoyaría el significado atribuido al art. 75 ordinal 4° Cn., pues reduce las posibilidades de aplicación discrecional de la norma que deriva de él en desmedro de la persona humana.

2. Otro de los criterios para interpretar las disposiciones que reconocen derechos fundamentales es el principio de armonización, que cobra relevancia cuando se plantean conflictos entre tales derechos, supuesto en el cual ha de buscarse una respuesta que ofrezca un espacio de efectividad a cada uno de los que sean concernidos en el caso concreto, con el fin de lograr un equilibro entre las posiciones de los contendientes. En este caso, frente al art. 75 ordinal 4° Cn., está el art. 6 Cn. (libre expresión), es decir, el derecho de toda persona a emitir, sin interferencia indebida del Estado o de los particulares, ideas, opiniones y juicios, ya sea de palabra, por escrito o por cualquier otro medio. El punto de encuentro entre estos dos preceptos constitucionales —su armonización— pareciera ser el de permitir que cualquier ciudadano, como parte del cuerpo político que ostenta el poder constituyente, disienta sobre el contenido de la Constitución o exprese su opinión acerca de lo que cree que ella debería contener, siempre que esto no constituya apoyo o promoción a la reelección presidencial en los términos apuntados.

Por lo dicho, aun cuando se hubiere rendido prueba suficiente sobre los hechos alegados por el ciudadano [...], este proceso siempre habría sido sobreseído porque hubo una admisión indebida de la demanda. Esto porque, primero, se parte de una premisa argumentativa deficiente del demandante al adoptar un criterio interpretativo erróneo sentado en precedentes equívocos de la interpretación de que debe realizarse de la Constitución, a la luz de una hermenéutica integradora del texto primario y de los antecedentes históricos en virtud de los cuales se estableció la disposición relativa a las condiciones para optar a la candidatura presidencial; por otra parte, no puede considerarse que hay apoyo o promoción a la reelección presidencial si no existe una manifestación real y expresa del Presidente en torno a reelegirse en el cargo que ostenta o la realización de actos tendentes a este fin."

Sala de lo Constitucional, pérdida de los derechos de ciudadanía, número de referencia: 1-2021, fecha de la resolución: 03/09/2021

ÍNDICE

MATERIA: AMPAROS

Actos de comunicación 1

Principio finalista de los actos de comunicación 1

Constituyen manifestaciones del derecho de audiencia 1

Notificaciones por medio de edicto 2

Autoridad demandada impidió al demandante enterarse de la existencia de las resoluciones que le causaban perjuicio y, con ello, anuló sus posibilidades reales y concretas de defensa 2

Importancia del emplazamiento 3

Regulación del emplazamiento en el Código Procesal Civil y Mercantil ... 3

Las comunicaciones realizadas por los notificadores gozan de una presunción de veracidad cuando se efectúan conforme a las reglas, según la jurisprudencia constitucional..... 4

Vulneración a los derechos de audiencia, defensa y a la propiedad al realizar la notificación de la sentencia por medio de un vigilante, sin establecer un vínculo laboral directo que permita colegir que las notificaciones serán entregadas..... 5

Administración pública..... 7

Conjunto de entidades estatales encargadas de las funciones de ejecución y gestión de la cosa pública, con la finalidad de satisfacer intereses generales o colectivos 7

Poder sancionatorio 8

Aguas de fuentes freáticas ubicadas en inmuebles de propiedad privada..... 9

Estas fuentes no pueden ser objeto de apropiación privada y se entienden fuera del comercio, puesto que siguen siendo un bien del Estado, esencial para la colectividad 9

Explotación 10

Concesión 11

Autorización para la explotación no se encuentra entre las competencias municipales, por lo que no puede estar sujeta al cobro de una tasa municipal 11

Alcaldes municipales 12

Falta de legitimación pasiva cuando la autoridad que desplegó la potestad decisoria, en la concreción del acto impugnado, ha sido el concejo municipal 12

Amparo contra leyes autoaplicativas 13

Instrumento procesal por medio del cual se atacan aquellas disposiciones que vulneran derechos fundamentales y producen efectos jurídicos desde su entrada en vigencia 13

Amparo contra particulares 14

Actos u omisiones controlables mediante un proceso de amparo 14

Requisitos de admisibilidad 15

Jurisprudencia relacionada 15

Requisitos que se deben cumplir para que un acto realizado por un particular sea revisable por medio del proceso de amparo 16

Arbitraje 17

Principio de autonomía de la voluntad, elemento fundamental en el arbitraje 17

Competencia para ejecutar laudos arbitrales 17

Exequátur 18

Requisitos para lograr la ejecución de un laudo arbitral extranjero en el territorio de El Salvador 18

Asistencia consular..... 19

Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos y son fuente de obligaciones para el Estado 19

Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores..... 20

La Convención de Viena sobre relaciones consulares confiere al Estado un margen de acción para procurar a favor de sus nacionales en el exterior 21

Sentido y alcance de las funciones de los representantes consulares... 23

Carga de la prueba 23

Quebrantamiento del principio de igualdad procesal 23

Omisiones de respuesta de las autoridades demandadas 24

Competencia de la Sala de lo Constitucional..... 25

Ámbito constitucional carece de competencia material para evaluar, investigar y deducir responsabilidad penal 25

Cosa juzgada constitucional..... 26

Alcance..... 26

Inexistencia de vulneración, dado que el tribunal constitucional únicamente controló un auto de ejecución de sentencia 27

Derecho a conocer la verdad 27

Definición..... 27

La Constitución también consagra el derecho a la protección en la conservación y defensa de los derechos fundamentales establecidos en favor de toda persona 28

Indispensable la reparación y resarcimiento de los derechos fundamentales cuando existe una transgresión 28

Derecho a la autodeterminación informativa..... 29

Facetas, análisis de la misma y titulares del derecho..... 29

Derecho a la propiedad..... 30

Alcance..... 30

Derecho a la protección familiar..... 30

Acepción..... 30

Reconocimiento constitucional..... 31

Funciones de la familia..... 31

Derecho a la seguridad jurídica..... 32

Alcance..... 32

Tutela es procedente siempre y cuando la transgresión alegada no encuentre asidero en la afectación del contenido de un derecho fundamental más específico..... 32

Derecho a la seguridad material..... 33

Posee dos facetas, colectiva e individual..... 33

Derecho a remuneración económica..... 33

Obligaciones principales que surgen de toda labor, trabajo o servicio remunerado..... 33

Obligación del patrono o empleador de retribuir al trabajador por la prestación de servicios que realice en su beneficio..... 34

Derecho a una resolución congruente..... 34

Alcance..... 34

Formas de vulnerar el derecho a una resolución congruente..... 34

Derecho al agua..... 35

Reconocimiento implícito en las disposiciones constitucionales..... 35

Tutela puede ser requerida por uno o varios individuos, o por una comunidad contra actuaciones atribuidas al Estado o a los particulares .. 35

Criterios mínimos que debe garantizar el Estado para su goce..... 36

Limitaciones económicas no deben representar un óbice para acceder al goce del vital líquido..... 36

Derecho al medio ambiente..... 37

Posee rango constitucional 37

Derecho de audiencia 38

Concepción 38

Exigencia..... 38

Posibilita la protección de los derechos subjetivos de los que es titular la persona..... 38

Derecho de entrar al país o derecho al retorno..... 39

Este derecho cumple una función especial para garantizar la unidad y protección de la familia..... 39

Derecho a permanecer en el territorio..... 40

La libertad de salir del país es un derecho que asiste a toda persona, independientemente de si se trata de un nacional o de un extranjero... 40

Derecho de petición 41

Alcance..... 41

Circunstancias a tener en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo para proporcionar la respuesta..... 41

Vulneración porque la autoridad demandada dejó transcurrir irrazonablemente el tiempo sin responder el requerimiento presentado 42

Faculta a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera a dirigirse a las autoridades para formular una solicitud por escrito, y que esta sea respondida en plazo razonable..... 43

Plazo razonable para dar respuesta a lo solicitado..... 44

Forma de realizar las peticiones 44

Derecho de propiedad..... 45

Facultades y modalidades..... 45

Distribución de energía eléctrica..... 45

Por su estrecha vinculación a un servicio público no se encuentra exenta del control del Estado 45

Competencia de la SIGET para resolver los conflictos que se susciten entre operadores, entre estos y los usuarios finales, y entre los operadores y la unidad de transacciones..... 46

Análisis del derecho de servidumbre 48

Vulneración de los derechos a la propiedad y a la seguridad jurídica, por infracción del principio de legalidad, al ordenar la remoción de estructuras eléctricas ubicadas en bienes inmuebles propiedad de particulares 49

Estabilidad laboral de los empleados públicos..... 52

Reconocimiento del derecho..... 52

No es un derecho absoluto ni debe entenderse como la garantía de una completa inamovilidad, pues este puede ceder ante el interés general del mejoramiento de los servicios por la administración pública..... 52

Estructura eléctrica ubicada en un inmueble privado..... 52

Circunstancias válidas para la modificación de precedentes..... 52

Cambio de criterio jurisprudencial 55

Garante hipotecario..... 56

Actuación desde el punto de vista procesal 56

Autoridad demandada, al restringir en exceso la intervención del garante hipotecario en el proceso, vulneró los derechos de audiencia y de defensa, como manifestaciones del debido proceso 57

Infracción administrativa y la sanción administrativa 59

Naturaleza jurídica de la sanción 59

La facultad de la SIGET se limita a anunciar semestralmente el valor actualizado de las sanciones 60

Cuando se decide sancionar una conducta u omisión determinada se entiende que subyace la idea de privación o limitación a un derecho fundamental..... 61

Interés colectivo 62

Se identifican con los miembros de un grupo determinado 62

Interés difuso 62

Elemento objetivo y elemento subjetivo 62

Características 63

Intereses difusos y colectivos 63

Diferencia 63

Libertad de circulación 64

Alcance..... 64

Contenido 64

Es preciso distinguir el alcance de la libertad de circulación al interior de las fronteras del Estado, del que tiene lugar en el ámbito internacional... 65

Manifestaciones del derecho a la libertad de circulación 65

Limitaciones constitucionales y legales..... 66

Libertad de información..... 67

Conexión con los derechos de libertad de expresión y de autodeterminación informativa 67

Medidas cautelares 68

Adopción es para evitar que se produzca una lesión a los derechos invocados, derivada de los requerimientos administrativos puntuales que se han impugnado 68

Motivación de resoluciones 70

Finalidad de la fundamentación 70

Manifestación del derecho a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional 70

Nulidades 71

Los recursos de revocatoria que sean interpuestos en contra de los autos mediante los cuales se haya resuelto algún incidente de nulidad, serán tramitados por esta Sala 71

Excepcionales condiciones que deben concurrir para que pueda examinarse una nulidad originada en una nulidad previa 73

Inexistencia de nulidades tácitas o implícitas 75

La nulidad debe declararse, pues la indefensión es el mayor vicio que puede ocurrir en un proceso 75

Principio de especificidad o de legalidad en materia de nulidades 76

Principio de convalidación 77

Nulidades subsanables e insubsanables 77

La nulidad insubsanable respecto de la cual no opera el principio de convalidación puede ser alegada en cualquier momento, incluso ser declarada de oficio por el tribunal constitucional 79

Oposición a la ejecución forzosa 80

Al haber sido desestimada la oposición a la ejecución, la demandante contaba con la oportunidad de impugnar esa decisión ante la autoridad judicial competente utilizando el recurso de apelación 80

Inexistencia de vulneración a los derechos de audiencia, defensa y a la propiedad..... 80

Personalidad jurídica 82

Condición de sujeto con derecho para promover un proceso de amparo..... 82

Personas jurídicas de derecho público..... 83

Capacidad jurídica reconocida por el ordenamiento jurídico 83

Para que una persona se encuentre legitimada para actuar en un proceso es necesario que se determine previamente que posee personalidad o capacidad jurídica. 84

Precedente jurisprudencial 84

Principio stare decisis..... 84

Circunstancias válidas para modificar un precedente o alejarse de él ... 85

Técnicas por medio de las cuales se puede verificar un cambio de precedente jurisprudencial 88

Cambio en la conformación subjetiva de un tribunal no es una condición suficiente ni necesaria para que opere un cambio de precedente, ni exime al tribunal de proporcionar las razones jurídicas y fácticas que lo justifiquen 88

Vulneración al derecho a una resolución motivada y a la igualdad, por inobservancia del principio de stare decisis de la sociedad actora, al realizar un cambio jurisprudencial sin explicitar el porqué de ello 89

Prestación económica por renuncia voluntaria 90

Derecho fundamental previsto en la Constitución..... 90

Principio de legalidad 91

Constituye una garantía del ciudadano frente al poder del Estado..... 91

Principio de reserva de ley en materia tributaria 91

Esencia..... 91

Principio de reserva de ley..... 92

La reserva de ley no significa que la Asamblea Legislativa es el único órgano del Estado con competencia para dictar normas..... 92

Ámbitos en los que se mueve la reserva de ley..... 93

Proceso de amparo 93

Presupuestos procesales..... 93

Proceso de formación de ley..... 94

Constitución establece los cánones de producción normativa que regulan la competencia de diversos órganos para crear la ley 94

Protección jurisdiccional..... 94

Finalidad..... 94

Prueba testimonial 95

Negar al peticionario la incorporación de prueba testimonial al procedimiento administrativo sancionador seguido en su contra, vulnera el derecho de defensa..... 95

Tribunal de la Carrera Docente omitió realizar un examen integral del caso, que permitiera invalidar los actos de la Junta de la Carrera Docente que vulneraron al peticionario su derecho de defensa y, reparar con ello la infracción reclama..... 98

Recurso de revocatoria..... 99

Inexistencia de regulación en la Ley de Procedimientos Constitucionales 99

Autos definitivos no son cuestionables por medio del recurso de revocatoria..... 99

La impugnabilidad objetiva regulada en el CPCM no es aplicable a los procesos constitucionales 99

Servicios públicos 100

Definición 100

Supresión de plazas 101

Facultad que poseen las instituciones públicas para modificar su estructura organizativa, pero esta atribución no puede ejercitarse de forma arbitraria ni fraudulenta 101

Sustitución procesal o sucesión procesal 102

Representa una excepción a la regla de la legitimación 102

Tasas municipales a vallas publicitarias 102

Concejo municipal es competente para crear ordenanzas que regulen la publicidad comercial que se realiza dentro de su territorio 102

La capacidad económica no es exigible en las tasas 104

Tasas 104

Definición 104

Contraprestación, es la característica que diferencia las tasas de los restantes tributos 105

Transfuguismo político 106

Fraude al elector 106

Prohibición aplicable al ámbito municipal 106

MATERIA: HÁBEAS CORPUS

Actos de comunicación 108

Garantizan el ejercicio pleno de los derechos de las partes procesales ... 108

Normativa aplicable 108

Presupuesto contenido en el artículo 163 del Código Procesal Penal para notificar por edicto 109

Arresto domiciliario 109

Definición 109

Bartolinas 110

Uso debe de ser momentáneo, ya que no están diseñadas para alojar personas por períodos prolongados 110

Citación 110

Condiciona la eficacia del proceso 110

Cita por edictos debe darse sólo cuando se ignore el lugar donde se encuentra la persona a notificar 111

Finalidad 112

Cómputo de la pena 112

No se encuentra exenta del control del Tribunal Constitucional 112

Cómputo de las jornadas de trabajo de utilidad pública 113

Jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena están obligados a descontar el término de la prisión preventiva en el cómputo de la pena, aún y cuando el tribunal de sentencia no lo haya realizado, y se trate de remplazo de la prisión por jornadas de trabajo de utilidad pública 113

Las jornadas de trabajo de utilidad pública imponen innegablemente limitaciones al ejercicio pleno de la libertad física 115

La interpretación realizada por la autoridad demandada es contraria a la Constitución, por vulnerar el principio de legalidad, respecto a las reglas legales preestablecidas para el cómputo de trabajo de utilidad pública, en remplazo de la pena más gravosa 116

Cosa juzgada 117

Condiciones que deben cumplirse y que habilitan de forma extraordinaria el conocimiento de un caso donde exista cosa juzgada 117

Declaratoria de rebeldía 118

Al no garantizarse las convocatorias del imputado a las audiencias, su ausencia no puede tener como resultado la declaratoria de rebeldía... 118

Derecho a la integridad personal 119

La protección de la salud de los privados de libertad tiene una vinculación directa con el derecho a la integridad 119

Derecho a la protección del vínculo familiar 120

Alcance y manifestaciones 120

Derecho a la resocialización de las personas privadas de libertad 121

Otorgamiento o denegatoria de beneficios penitenciarios es una atribución que le corresponde exclusivamente por ley a los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena 121

Beneficio de libertad condicional 121

Deber estatal de procurar la readaptación social del delincuente se ha vinculado con el carácter personalista del Estado salvadoreño, cuyo fundamento y sentido final es la dignidad humana 122

La readaptación social, reinserción o resocialización de la persona condenada es un derecho fundamental 123

Elemento esencial de la política criminal 123

Derecho a la salud de los privados de libertad 126

Tiene una vinculación directa con el derecho a la integridad, en tanto su desatención puede agravar de manera ilegítima las condiciones de cumplimiento de la detención en que se encuentran 126

Normativa internacional respecto al derecho a la salud de los internos 126

La autoridad judicial llevó a cabo acciones tendientes a garantizar la salud e integridad personal del favorecido 127

Vulneración por parte de las autoridades penitenciarias al impedirle al interno recibir los medicamentos prescritos 130

Comportamiento omisivo de la autoridad judicial generó vulneración en los derechos de salud e integridad personal del favorecido 131

Derecho de defensa 132

Garantía esencial 132

Facultad que tiene la persona procesada de ofrecer prueba de descargo 132

Sala de lo Constitucional no tiene competencia para valorar los elementos de prueba que versan en un proceso penal 133

Desaparición forzada de personas 135

Jurisprudencia relacionada 135

Carácter pluriofensivo; es decir, que se mantiene o permanece hasta que la persona desparecida es localizada 136

Prácticas sistemáticas de violación a derechos humanos 137

Víctimas de desaparición forzada cometida por agentes policiales y militares del Estado salvadoreño 138

Detención administrativa 140

Límite máximo establecido por la Constitución 140

Plazo perentorio señalado en la Constitución impide que, luego de transcurrido, una persona permanezca privada de su libertad sin que haya un pronunciamiento jurisdiccional sobre su situación jurídica 141

Detención por el término de inquirir 143

Plazo perentorio señalado en la Constitución 143

Detención provisional 143

Relacionado con el derecho de libertad y estado de inocencia 143

Parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional para determinar la duración 144

Límites temporales máximos de la detención provisional 144

Se debe motivar las razones de la imposición de la medida que restringe la libertad de una persona 144

Presupuestos procesales necesarios para su adopción 145

Dilaciones indebidas 145

Debe existir un plazo razonable para definir la situación jurídica de un imputado 145

Elementos que deben tenerse en consideración para calificar un retraso en la tramitación de un proceso 146

Autoridad judicial ha incidido negativamente en la protección jurisdiccional del acusado y en el efectivo ejercicio de su derecho de defensa, al retrasarse de manera irrazonable la audiencia 147

Dentro del proceso penal no solo coartan desproporcionalmente el derecho de libertad física, sino que también inciden en el de defensa 148

Doble juzgamiento 149

Procedencia 149

Requisitos que deben concurrir para tener por establecida su existencia 150

Hábeas corpus contra particulares 150

Requiere que la actuación reclamada haya sido emitida dentro de una relación supra-subordinación en sentido material 150

Hábeas corpus correctivo 151

Mecanismo idóneo para proteger a las personas detenidas de actuaciones u omisiones que atenten contra su dignidad, en relación con su integridad personal 151

Hábeas corpus de pronto despacho 152

Mecanismo utilizado a favor de una persona que mantiene una restricción a su libertad personal, ante el retraso de una resolución, informe u otra providencia que se espera le genere beneficios en la esfera de sus derechos 152

Autoridad demandada vulnero el derecho de petición de la condenada, por la falta de respuesta a la solicitud para optar a la fase de confianza... 152

Hábeas corpus restringido 153

Naturaleza y objeto principal 153

Jueces de paz 154

Potestad de celebrar audiencia inicial sin que esté presente el procesado 154

La decisión de resolver con solo la vista del requerimiento debe ser precedida de una serie de actos que dejen de manifiesto que se procuró por todos los medios posibles dar a conocer al inculpado la existencia de una imputación en su contra 154

Libertad condicional anticipada 155

Definición de la libertad condicional anticipada 155

Medidas cautelares 156

Derecho internacional exige que las medidas adoptadas deben ser idóneas, necesarias, estrictamente proporcionales, no sólo lícitas, sino que también razonables 156

Motivación de resoluciones 156

Deber y obligación de las autoridades judiciales 156

Prescripción de la acción penal 157

Habilitación para conocer de la prescripción 157

Código Procesal Penal no exige la comparecencia del rebelde para decretar la prescripción de la persecución penal 158

Código Procesal Penal vigente regulan aspectos referidos al cómputo para el plazo de la prescripción de la acción penal, resultando menos gravosa para el procesado 159

Aplicación retroactiva del Código Procesal Penal vigente, por ser más favorable al imputado 159

Principio de reserva de ley en materia penal 160

Fundamento constitucional 160

Objeto 160

Estrecha relación con el principio de legalidad 161

Derecho a la seguridad jurídica 161

Proceso penal 161

El diseño del proceso penal vigente no regula mecanismos idóneos para el cuestionamiento propiamente de las vulneraciones constitucionales acontecidas durante la emisión de la sentencia en segunda instancia 161

Readaptación social de las personas sometidas al cumplimiento de las penas 162

Readaptación social, reinserción o resocialización es un derecho fundamental establecido en la Constitución y el derecho internacional ... 162

Régimen penitenciario 164

Régimen de internamiento especial 165

Sentencia condenatoria en segunda instancia 166

Potestad resolutoria de las cámaras debe ser interpretado en conformidad con la Constitución, pues dicha instancia no puede controlar de forma amplia y suficiente lo planteado en el proceso penal 166

Ante una sentencia absolutoria en primera instancia, el tribunal de alzada no puede revocarla para dictar de manera directa una condena, pues vulnera el derecho fundamental a un recurso amplio y efectivo del fallo ... 168

Revocar la sentencia absolutoria y condenar en segunda instancia al favorecido a veinte años de prisión, es inconstitucional 169

Se ordena libertad al favorecido para que la jurisdicción penal competente revise la validez de la sentencia condenatoria que se impuso en segunda instancia 170

Sentencia condenatoria 171

Vulneración a los derechos de defensa, libertad personal y acceso a los recursos del favorecido, al omitir la notificación la sentencia condenatoria dictada en su contra 171

Sentencia de hábeas corpus 172

Efecto restitutorio es la puesta en libertad del favorecido o la orden del cese de restricciones a su derecho de libertad personal o integridad personal..... 172

Sentencia definitiva 174

Habilitación legal prescrita en el inciso 3º del art. 8 del Código Procesal Penal..... 174

MATERIA: INCONSTITUCIONALIDADES

Acumulación de procesos 175

Finalidad y aplicación supletoria del trámite establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil por falta de regulación en la Ley de Procedimientos Constitucionales..... 175

Administración pública 175

Potestades 175

Condiciones exigibles y principios para ejercer el poder coercitivo 176

Potestad sancionadora es una de las facetas que el genérico poder punitivo del Estado muestra frente al administrado o sus servidores 177

Candidatos no partidarios 178

Diferencia entre tipos de candidaturas a diputados a la Asamblea Legislativa contradice abiertamente la interpretación conforme que esta Sala realizó 178

Sentido en el que deben interpretarse los artículos reformados 179

Código de Justicia Militar 180

Presunción de constitucionalidad 180

Alcance del control de constitucionalidad sobre normas preconstitucionales 180

Derecho a la vida y la pena de muerte 180

Innecesario inicio del proceso de inconstitucionalidad en aquellos supuestos en que la incompatibilidad entre la norma preconstitucional y la Constitución sean totalmente identificable 181

El art. 54 Inc. 2° del Código de Justicia Militar quedó derogado al entrar en vigencia la Constitución de 1983 182

Concesiones del espectro radioeléctrico 183

Aspectos generales sobre los impuestos y las tasas 183

Gestión del espectro radioeléctrico 185

Facultad del legislador para gravar el uso o explotación del espectro radioeléctrico 186

Inexistencia de vulneración constitucional 188

Consejo Nacional de la Judicatura 188

Rol, composición e independencia 188

La determinación del marco estructural y funcional que corresponde al CNJ no puede hacerse solo a partir de lo prescrito por la Constitución 190

Inconstitucionalidad del artículo 24 de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura 191

Constitución de la República 193

Concepto y fundamento de su supremacía 193

En El Salvador rige un concepto jurídico normativo de Constitución, es decir, la noción de Constitución como norma jurídica superior 194

Manifestaciones de la fuerza normativa 194

Control constitucional 195

Elementos que lo componen y que deben ser debidamente determinados por el actor 195

Cosa juzgada 195

Las resoluciones o sentencias que ponen fin a un proceso constitucional o que resuelven la pretensión no pueden modificarse 195

Derecho a recurrir 196

Consecuencias de la connotación constitucional que adquiere 196

Facultad del legislador para determinar, conforme a diversos criterios de selectividad, la instauración de los diferentes recursos, así como también si serán de única instancia o de doble instancia 196

Garantías que posee 197

Naturaleza 197

Está conformado por cuatro grandes manifestaciones 198

No debe ser analizado únicamente desde la perspectiva constitucional, sino también procesal 199

El planteamiento de los recursos judiciales requiere de configuración legislativa para delimitar sus trazos más concretos 199

Derecho al secreto de las telecomunicaciones 200

Derecho a la intimidad personal y familiar 200

La jurisprudencia constitucional ha precisado que el secreto de las telecomunicaciones es una concreción del derecho fundamental a la intimidad 200

Secreto de las telecomunicaciones no tiene carácter absoluto 201

Presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional para autorizar la limitación al secreto de las telecomunicaciones en el ámbito de la persecución del delito 202

El test de proporcionalidad tiene carácter escalonado..... 205

Destrucción de las grabaciones y transcripciones 206

Prohibición de edición del material..... 207

Reserva de la información..... 207

Destrucción del material ajeno a la investigación 208

Interpretación jurídica de una disposición legal o constitucional..... 209

Fraude a la Constitución 209

El fraude a la Constitución se comete porque se respeta formalmente la competencia para interpretar auténticamente el art. 23 LEIT, pero con dicha “interpretación” se incumple sustancial o materialmente el propósito de la institución denominada “interpretación auténtica”, que es la de aclarar un vocablo o texto dudoso, no el de modificarlo..... 210

Esta Sala determina que existe la posibilidad de interponer recurso de revocatoria contra la resolución del juez que ordena la destrucción de las grabaciones y sus transcripciones..... 213

Derecho al sufragio pasivo..... 216

Límites..... 216

Separación orgánica de funciones 217

Inhabilidades para ser candidato a Presidente de la República 217

Análisis de la figura del permiso sin goce de sueldo..... 217

Derecho al trabajo 219

Concepción 219

Característica del vínculo jurídico entre un trabajador y un patrono por la prestación de un trabajo o servicio 219

Jornada laboral ordinaria 220

Derecho procesal constitucional 221

Finalidad de los procesos constitucionales 221

Derechos fundamentales 221

Regulación normativa y limitación de un derecho fundamental 221

Regulación penal y procesal penal debe procurar una protección en doble sentido 222

Son objeto de regulación y/o limitación 223

Limitaciones deben establecerse mediante una ley formal, atender a un criterio constitucional que autorice limitarlos, respetar la proporcionalidad y no alterar su contenido esencial 223

Derechos sociales 224

Reconocimiento comporta obligaciones positivas y negativas ligadas con su satisfacción 224

Influencia del derecho internacional de los derechos humanos 225

Gozan de la protección reforzada que les confiere la Constitución 226

Discrecionalidad judicial 227

Diferencia con la arbitrariedad 227

Implica la concesión de ciertos márgenes de libertad para la toma de decisiones, tiene su génesis en la indeterminación del derecho o en la delegación de un poder 227

Análisis de la indeterminación del derecho desde el punto de vista estricto y desde el punto de vista amplio 228

Disposiciones del ordenamiento jurídico que reflejan la facultad discrecional concedida a los jueces como delegación de un poder 228

Disposiciones preconstitucionales 231

Se requiere del ejercicio de las competencias atribuidas a esta Sala por el art. 174 Cn., para brindar certeza sobre la derogación de una disposición preconstitucional..... 231

Doble tributación 231

Presupuestos según la jurisprudencia constitucional..... 231

Exclusión arbitraria de beneficio 232

Esta figura se caracteriza por el establecimiento de discriminaciones infundadas entre individuos o grupos..... 232

Fuerza Armada..... 233

Función básica 233

Razones por las que la disciplina militar tiene relevancia en el diseño constitucional 233

Penas disciplinarias..... 234

La administración militar constituye una institución especial dedicada a la prestación de un servicio esencial a la nación 234

Imprescriptibilidad en materia penal 235

Prescripción de la pena y de la acción penal..... 235

Excepción a la aplicabilidad de la prescripción en los delitos de lesa humanidad..... 235

Sobre la corrupción gubernamental, esta regla de imprescriptibilidad puede ser modificada según valoraciones político-criminales en un momento histórico determinado 235

Impuesto sobre la Renta..... 236

Consideraciones jurisprudenciales..... 236

Para su configuración, según la jurisprudencia, no es importante el domicilio del prestador del servicio, ni donde se suministra el servicio, sino dónde se paga o acredita dicho servicio 236

Agente de retención en el servicio de transporte internacional..... 237

Inaplicabilidad de la ley 238

Requisitos para su trámite..... 238

Inconstitucionalidad por omisión 239

Los mandatos constitucionales pueden estar dirigidos a cualquiera de los órganos constitucionales 239

La aceptación del instituto de la omisión vulneradora de la norma constitucional se refleja en obligaciones de hacer 240

Elementos trascendentales para determinar cuándo se está en presencia de una inconstitucionalidad por omisión: la falta de desarrollo y la ineficacia de las disposiciones constitucionales 241

Omisión absoluta y omisión parcial..... 241

Independencia judicial 242

Alcance..... 242

Principio de unidad jurisdiccional, uno de los elementos que contribuyen a garantizarla..... 242

Magistrados y jueces están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes 243

Fundamento 243

Intermediación financiera 244

Definición desde un punto de vista jurídico-económico 244

Toda actividad que directa o indirectamente implique intermediación de recursos o la captación del ahorro del público debe ser regulada y supervisada por el Estado..... 244

Regulación y supervisión administrativa al sistema financiero, establecido por el ordenamiento jurídico, debe estar a cargo de una institución independiente 245

Superintendencia del Sistema Financiero es la institución encargada de autorizar el funcionamiento de bancos, luego de haber pasado por controles establecidos en la misma ley 245

Interpretación jurídica 247

Fundamento 247

Interpretación conforme a la Constitución 247

Interpretación sistemática de las disposiciones jurídicas 248

Interpretación conforme 248

Jueces y magistrados 249

Competencia 249

Principio de corrección funcional 250

Creación de normas generales solamente es competencia de la Asamblea Legislativa, y muy excepcionalmente, de los otros órganos a quienes la Constitución les confiere potestades normativas 251

Excepcionalmente existen normas constitutivas que les permite a los jueces y magistrados estatuir precedentes con alcances cualificados o con una posición jerárquica distinta a la usual 251

Autoprecedentes 252

Jurisprudencia 253

Fuente de derecho y el valor de los precedentes 253

Ley de Firma Electrónica 253

Inconstitucionalidad del art. 66 Inc. 2 253

Libertad económica..... 254

El Estado es garante de que las personas puedan dedicarse a la actividad económica que más les plazca, a fin de conseguir la realización o satisfacción de una necesidad, un interés o una utilidad social..... 254

Regulación a diversos sectores de la producción no implica que se obstaculice el fomento a un sector..... 255

Ne bis in ídem o non bis in íem..... 256

Prohibición de un ejercicio reiterado del *ius puniendi* del Estado que impide castigar doblemente una misma acción u omisión..... 256

El término “enjuiciado” debe entenderse como un pronunciamiento de fondo..... 257

Análisis del término “causa” contenido en el art. 11 de la Constitución... 257

Normas..... 258

Diferencia entre normas generales y especiales..... 258

“Ley especial”..... 258

Objeto de control..... 259

En los proceso de inconstitucionalidad debe existir una base racional o fuente objetiva que lo compruebe..... 259

Órgano Judicial..... 259

Competencia exclusiva para conocer, decidir y ejecutar lo decidido en cualquier controversia que se suscite entre las personas..... 259

Parámetro de control..... 261

Simple invocación de los tratados internacionales de derechos humanos como control de las leyes, es insuficiente si no se justifica una conexión directa con la Constitución..... 261

Pena privativa de libertad 261

Consideraciones en la jurisprudencia constitucional 261

El poder punitivo estatal debe respetar un conjunto de principios constitucionales, a fin de conservar esa legitimidad ante la sociedad 262

Finalidad de la pena 262

Finalidad del principio de humanidad y de reinserción de los penados contenidos en la Constitución 263

Pena privativa de larga duración 264

Potestad sancionadora del Estado 265

Ámbitos 265

Características doctrinarias de la administración pública 266

Restricción a los derechos fundamentales sólo son legítimas si se justifican mediante un necesario análisis de ponderación 266

Potestad tributaria municipal 267

En materia de impuestos municipales, la potestad normativa es sumamente restringida para los municipios, según la jurisprudencia constitucional 267

Ley General Tributaria Municipal establece los principios básicos y el marco normativo general que requieren los municipios para ejercitar y desarrollar su potestad tributaria 268

La potestad tributaria municipal se ejecuta por medio de la emisión de ordenanzas municipales 268

Municipios deben abstenerse de establecer como contraprestación de una tasa, actividades que estén excluidas, reservadas o prohibidas en el marco de su competencia 269

Precedentes constitucionales 270

Carácter vinculante y su posibilidad de cambio 270

La Sala admitió el error interpretativo como una circunstancia que puede justificar la modificación de un precedente o alejarse de él 270

Presunción de inocencia 271

Alcance 271

Prevención en el proceso de inconstitucionalidad 272

Constituye la advertencia judicial que se realiza al actor sobre el incumplimiento de los requisitos mínimos en la demanda 272

Principio de capacidad económica 273

Actúa como presupuesto y límite de la tributación 273

Concepto general de “activo” y de “activo circulante” 274

Activo circulante o corriente 275

Principio de igualdad en la formulación y aplicación de la ley 275

Reconocido en la Constitución como un principio, como un derecho fundamental y un mandato 275

En la formulación de la ley implica que el legislador, al configurar la norma, debe procurar que en la medida de las posibilidades fácticas y jurídicas se brinde a todas las personas el mismo trato 276

Integración con el test de proporcionalidad 276

Procedencia del análisis de proporcionalidad 277

Principio de igualdad 277

Aspectos que deben argumentarse para plantear adecuadamente la infracción 277

Integración con el test de proporcionalidad 278

Parte actora debe argumentar que la relación de causalidad entre el medio y el fin es inviable o inaceptable 279

Test de proporcionalidad tiene un carácter escalonado 279

Principio de realidad económica 280

El enfoque económico de la interpretación de las normas tributarias surge en función del origen de los actos entre los particulares, que tienen un fin económico en sí mismos 280

Principio de reserva de ley 280

Principio de juridicidad 280

Corresponderá a esta Sala dilucidar, caso por caso, cuáles materias están sometidas a reserva legal 281

Principio de seguridad jurídica 282

Alcance 282

Precedentes bien definidos y sistematizados favorecen la seguridad jurídica 283

Principio democrático y deliberativo en el procedimiento de formación de ley 283

Vicios formales en la actividad legislativa 283

Principio democrático que se encuentra en todas las fases del proceso de formación de ley 284

Rol de las comisiones legislativas en el proceso de formación de la ley 285

Principio y juicio de igualdad 285

La igualdad es reconocida en la Constitución y puede ser concebida como un principio y como un derecho fundamental 285

Aplicación del principio de proporcionalidad 287

La idoneidad 287

La necesidad 288

Proceso de inconstitucionalidad vía remisión de inaplicabilidad 289

Requisitos mínimos necesarios para tramitar y decidir un proceso de inconstitucionalidad 289

Diferencia entre el proceso de inconstitucionalidad y el control difuso de constitucionalidad o inaplicación 291

Requisitos mínimos para que una inaplicabilidad pueda provocar el inicio de un proceso de inconstitucionalidad 291

Vigencia del objeto de control 292

En el control difuso de constitucionalidad o inaplicación, la decisión judicial solo produce efectos en el caso específico, entre las partes respectivas 292

Proceso de inconstitucionalidad 293

Sentencia que estima o desestima la inconstitucionalidad de una disposición jurídica produce efectos generales y obligatorios 293

Vicios en la pretensión de la demanda que impiden su configuración 293

Procesos sancionatorios al interior de la Fuerza Armada 294

Reconocimiento constitucional de la justicia militar 294

Denominador común de los ilícitos militares 295

La “especialidad” del vínculo del personal militar no es una razón suficiente para establecer un término mayor de la privación de libertad, que el preceptuado en el art. 14 Cn. 295

Reintegración social 296

Convivencia del niño o niña menor de cinco años con su madre reclusa 296

Efecto de trascendencia a terceros 297

Seguimiento de cumplimento de sentencia 297

Facultades de ejecución de la Sala de lo Constitucional 297

Tasas municipales por el uso del suelo y subsuelo 298

Inexistencia de vulneración al principio de reserva de ley en materia tributaria porque la disposición municipal contiene una contraprestación, la cual solo debe solicitarse cuando el hecho generador se produce en inmuebles de propiedad pública..... 298

Teoría del abuso del derecho 300

Aspectos que dan surgimiento a la noción del abuso del derecho 300

Diferencias entre el abuso del derecho, en relación con los actos ilícitos y el conflicto de derechos 300

Criterios elaborados para determinar qué actos son constitutivos de abuso de derecho..... 300

Criterio objetivo como parámetro que debe ser utilizado para reconocer un acto como abusivo 301

Algunos ejemplos que representan abuso de derecho 301

Trabajadores agrícolas 301

Regulación de prestaciones sociales 301

El mandato constitucional contenido en el art. 45 Cn. ha sido cumplido por el legislador, al regular las relaciones laborales entre los trabajadores y empleadores en el Código de Trabajo..... 303

Trabajo a domicilio 304

Dimensión individual del derecho al trabajo..... 304

Derechos y deberes del trabajador a domicilio 304

Ampliación de la cobertura en riesgos laborales garantiza el derecho al acceso de un mayor número de trabajadores, materializando su derecho a la igualdad e incluso de la dignidad de todo trabajador 305

Criterio legislativo para realizar la diferenciación entre los trabajadores a domicilio y el resto trabajadores..... 307

El art. 320 letra a del Código de Trabajo viola la Constitución, por contener una medida discriminatoria desproporcionada que no supera el examen de idoneidad del test de proporcionalidad 307

La Asamblea Legislativa deberá regular o adaptar las normas que sean necesarias para que haya reglas y principios sobre responsabilidad patronal, frente a riesgos profesionales de los trabajadores a domicilio 308

Trabajo doméstico 309

Definición 309

Características propias 310

La jornada efectiva diurna no puede exceder de ocho horas, el tiempo que rebase ese límite constitucional y legal debe remunerarse con recargo 312

Quienes trabajen en el servicio doméstico pueden acomodar su horario de trabajo a las necesidades del hogar en que presten el servicio, siempre que gocen de un descanso mínimo de doce horas diarias ... 313

Tratados internacionales 313

La jurisprudencia constitucional ha declarado que tales instrumentos normativos no son parámetro de control de constitucionalidad, pues no integran materialmente la Constitución ni forman con ella un bloque de constitucionalidad 313

MATERIA: PÉRDIDA DE DERECHOS DE CIUDADANÍA

Interpretación de la Constitución 315

Diferencia entre disposición y norma que esta sala en su jurisprudencia constitucional ha introducido 315

Sala de lo Constitucional y su rol en la interpretación constitucional ... 316

Interpretación histórica como fuente de protección a los derechos fundamentales y la soberanía 318

Rol de la soberanía popular en el carácter de norma suprema que se le atribuye a la Constitución 318

Proceso de pérdida de los derechos de ciudadanía..... 320

Interpretación errónea de precedentes jurisprudenciales 320

Admisión indebida de la demanda 322

Reelección presidencial..... 323

Interpretación constitucional..... 323

Cambio del criterio interpretativo erróneo en que se funda el precedente 324

La Constitución posibilita que sea el pueblo en el ejercicio del poder soberano quien decida, si continúa por un segundo período o el mismo soberano lo elimina de la contienda, todo ello mediante elecciones libres... 326

Prohibición orientada a limitar la perpetuidad 326

Sería ilegítimo promover la continuidad del presidente o una reelección más allá de los diez años, es decir, más allá de dos períodos.... 329

La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia debe preservarse a fin de garantizar el sistema democratico en el que siempre las decisiones sobre la dirección del Estado las tome el pueblo, en el ejercicio de su poder soberano 331

La pérdida de derechos de ciudadano procederá cuando se suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección para un tercer período o la continuación del Presidente de la República evadiendo el proceso electoral..... 333